NÚMERO 4253 MONTEVIDEO, JUEVES 12 DE SETIEMBRE DE 2019

República Oriental del Uruguay

DIARIO DE SESIONES



CÁMARA DE REPRESENTANTES

39ª SESIÓN (EXTRAORDINARIA)

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES

Dra. CECILIA BOTTINO
(presidenta)

Dra. CECILIA EGUILLUZ
(1era. vicepresidenta)

Dr. LUIS GALLO CANTERA
(2do. vicepresidente)

ÓSCAR GROBA
(3er. vicepresidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORA VIRGINIA ORTIZ Y SEÑOR JUAN SPINOGLIO
Y LOS PROSECRETARIOS SEÑOR FERNANDO RIPOLL Y DOCTOR MARTÍN PÉREZ

Texto de la citación

Montevideo, 11 de setiembre de 2019

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana jueves 12, a la hora 10, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL. (Se modifica el régimen previsional). (Carp. 4039/2019). Rep. 1187

2º.- DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN. (Establecimiento de un marco jurídico). (Carp. 198/2015). (Informado). Rep. 165 y Anexo I

3º.- DETENIDOS DESAPARECIDOS. (Se comete su búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo). (Carp. 4130/2019). Rep. 1209

4º.- LIBERTAD VIGILADA. (Regulación). (Carp. 4126/2019). Rep. 1208

5º.- ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA. (Modificación). (Carp. 3504/2018). (Informado). Rep. 1068 y Anexo I

6º.- EJERCICIO "TANQUE 2019". (Se autoriza el ingreso al territorio nacional de hasta tres Personal Superior y una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina). (Carp. 4141/2019). Rep. 1215

7º.- COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE LECHE MATERNA. (Regulación). (Carp. 2062/2017). (Informado). Rep. 702 y Anexo I

8º.- CÓDIGO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. (Se declara de interés general). (Carp. 3577/2018). Rep. 1100

9º.- LEY ORGÁNICA DE LA JUDICATURA Y DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES. (Modificaciones a la Ley N° 15.750). (Carp. 4088/2019). Rep. 1198

10.- PUEBLO CEBOLLATÍ, DEPARTAMENTO DE ROCHA. (Se declara feriado no laborable el día 28 de octubre de 2019, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación). (Carp. 4123/2019). Rep. 1212

11.- SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. (Se establecen modificaciones a la Ley Nº 19.307). (Carp. 3061/2018). (Informado). Rep. 939 y Anexo I

12.- SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. (Modificación de la Ley Nº 19.307). (Carp. 4156/2019). Rep. 1223

13.- TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS BASINEY Y ANIKTO S. A. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, por un plazo de 180 días, el subsidio por desempleo). (Carp. 4151/2019). Rep. 1220

14.-EMPRESAS LÁCTEAS. (Extensión del período de gracia previsto en el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 19.397). (Carp. 4157/2019). Rep. 1221

15.-CONVENIOS DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON EL PLAN NACIONAL DE SILOS. (Se autoriza al Poder Ejecutivo a modificar sus condiciones). (Carp. 4155/2019). Rep. 1222

16.-AHOGAMIENTO. (Se declara como problema de salud pública). (Carp. 4121/2019). (Informado). Rep. 1211 y Anexo I

17.-DERECHOS DE AUTOR. (Modificación del artículo 29 de la Ley N° 9.739). (Carp. 3742/2019). (Informado). Rep. 1112 y Anexo I

18.-ACUERDO SOBRE LA ORDEN MERCOSUR DE DETENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS. (Aprobación). (Carp. 4153/2019). Rep. 1225

19.-CONVENIO CON LA REPÚBLICA ITALIANA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO. (Aprobación). (Carp. 4146/2019). Rep. 1217

20.-ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. (Aprobación). (Carp. 3849/2019). (Informado). Rep. 1135 y Anexo I

VIRGINIA ORTIZ JUAN SPINOGLIO
S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

Pág.

1.- Asistencias y ausencias 7
2.- Asuntos entrados 8
3.- Inasistencias anteriores 8

CUESTIONES DE ORDEN

20 y 46.- Alteración del orden del día 64, 141
4, 7, 10, 18, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.- Comunicación inmediata de proyectos aprobados 19, 27, 42, 62, 66, 75, 79, 84, 91, 94, 104, 110, 121, 126, 129, 136, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 146, 147
5. 9, 11, 13, 15, 19, 27, 34, 37, 39, 41- Integración de la Cámara. 24, 39, 48, 57, 58, 63, 79, 108, 117, 124, 126
14, 17, 22.- Intermedio 58, 60, 65
5, 9, 11, 13, 15, 19, 27, 34, 37, 39, 41.- Licencias 24, 39, 48, 57, 58, 63, 79, 108, 117, 124, 126
6, 25, 31, 42.- Urgencias 25, 78, 101, 126

ORDEN DEL DÍA

4.- Caja Notarial de Seguridad Social. (Se modifica el régimen previsional)
Antecedentes: Rep. N° 1187, de agosto de 2019. Carp. N° 4039 de 2019. Comisión de Seguridad Social.
— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 9
— Texto del proyecto sancionado 19

7.- Pensiones graciables. (Se reglamenta su otorgamiento)
Antecedentes: Rep. N° 1086, de diciembre de 2018, y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 3552 de 2018. Comisión de Seguridad Social.
— Aprobación. Se comunicará al Senado 25
— Texto del proyecto aprobado 27

8 y 10.- Derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y nutricional de la población. (Establecimiento de un marco jurídico)
Antecedentes: Rep. N° 165, de junio de 2015, y Anexo I, de agosto de 2019. Carp. N° 198 de 2015. Comisión de Población y Desarrollo.
— Aprobación. Se comunicará al Senado 29, 40
— Texto del proyecto aprobado 42

12, 16 y 18.- Detenidos desaparecidos. (Se comete su búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo)
Antecedentes: Rep. N° 1209, de setiembre de 2019. Carp. N° 4130 de 2019. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.
— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 48, 58, 60
— Texto del proyecto sancionado 62

21 y 23.- Derechos de autor. (Modificación del artículo 29 de la Ley N° 9.739)
Antecedentes: Rep. N° 1112, de marzo de 2019, y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 3742 de 2019. Comisión de Educación y Cultura.
— Aprobación. Se comunicará al Senado 64, 65
— Texto del proyecto aprobado 66

24.- Libertad vigilada. (Regulación)
Antecedentes: Rep. N° 1208, de setiembre de 2019. Carp. N° 4126 de 2019. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.
— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 67
— Texto del proyecto sancionado 75

26.- Obelisco - Batalla de Las Piedras. (Se designa al Liceo N °3 de la ciudad de Las Piedras)

Antecedentes: Rep. N° 1210 y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 4131 de 2019. Comisión de Educación y Cultura.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 78
— Texto del proyecto sancionado 79

28.- Estatuto del funcionario del Servicio Exterior de la República. (Modificación)

Antecedentes: Rep. N° 1068, de noviembre de 2018, y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 3504 de 2018. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Aprobación en nueva forma. Se comunicará al Senado 79
— Texto del proyecto aprobado 84

29.- Ejercicio "Tanque 2019". (Se autoriza el ingreso al territorio nacional de hasta tres personal superior y una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina)

Antecedentes: Rep. N° 1215, de setiembre de 2019. Carp. N° 4141 de 2019. Comisión de Defensa Nacional.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 90
— Texto del proyecto sancionado 91

30.- Comercialización de sucedáneos de leche materna. (Regulación)

Antecedentes: Rep. N° 702, de junio de 2017, y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 2062 de 2017. Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

— Aprobación. Se comunicará al Senado 91
— Texto del proyecto aprobado 94

32.- Casinos en cruceros atracados en aguas territoriales uruguayas. (Funcionamiento)

Antecedentes: Rep. N° 1216, de setiembre de 2019. Carp. N° 4142 de 2019. Comisión de Turismo.

— Aprobación en nueva forma. Se comunicará al Senado 101
— Texto del proyecto aprobado 104

33 y 35.- Código de Ética en la Función Pública. (Se declara de interés general)

Antecedentes: Rep. N° 1100, de diciembre de 2018. Carp. N° 3577 de 2018. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 104, 108
— Texto del proyecto sancionado 110

36 y 38.- Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales. (Modificaciones a la Ley Nº 15.750)

Antecedentes: Rep. N° 1198, de setiembre de 2019. Carp. N° 4088 de 2019. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 117, 118
— Texto del proyecto sancionado 121

40.- Pueblo Cebollatí, departamento de Rocha. (Se declara feriado no laborable el día 28 de octubre de 2019, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación)

Antecedentes: Rep. N° 1212, de setiembre de 2019. Carp. N° 4123 de 2019. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunicará al Senado 124
— Texto del proyecto aprobado 126

43.- Construcción denominada "Casapueblo". (Se solicita al Poder Ejecutivo la declaración de Monumento Histórico, Artístico y Cultural a través de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación)

Antecedentes: Rep. N° 1218, de setiembre de 2019. Carp. N° 4145 de 2019. Comisión de Educación y Cultura.

— Aprobación. Se comunicará al Poder Ejecutivo 127
— Texto de la minuta de comunicación aprobada 129

44.- Servicios de comunicación audiovisual. (Se establecen modificaciones a la Ley Nº 19.307)

Antecedentes: Rep. N° 939, de mayo de 2018, y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 3061 de 2018. Comisión de Industria, Energía y Minería.

— Aprobación. Se comunicará al Senado 129
— Texto del proyecto aprobado 136

45.- Servicios de comunicación audiovisual. (Modificación de la Ley Nº 19.307)

Antecedentes: Rep. N° 1223, de setiembre de 2019. Carp. N° 4156 de 2019. Comisión de Industria, Energía y Minería.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 139
— Texto del proyecto sancionado 140

47.- Empresas Lácteas. (Extensión del período de gracia previsto en el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 19.397)

Antecedentes: Rep. N° 1221, de setiembre de 2019. Carp. N° 4157 de 2019. Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 141
— Texto del proyecto sancionado 141

48.- Trabajadores de las empresas Basiney y Anikto S. A. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, por un plazo de ciento ochenta días, el subsidio por desempleo)

Antecedentes: Rep. N° 1220, de setiembre de 2019. Carp. N° 4151 de 2019. Comisión de Legislación del Trabajo.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 141
— Texto del proyecto sancionado 142

49.- Convenios de las organizaciones de productores con el Plan Nacional de Silos. (Se autoriza al Poder Ejecutivo a modificar sus condiciones)

Antecedentes: Rep. N° 1222, de setiembre de 2019. Carp. N° 4155 de 2019. Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 142
— Texto del proyecto sancionado 143

50.- Ahogamiento. (Se declara como problema de salud pública)

Antecedentes: Rep. N° 1211 y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 4121 de 2019. Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

— Aprobación. Se comunicará al Senado 143
— Texto del proyecto aprobado 145

51.- Acuerdo sobre la orden Mercosur de detención y procedimientos de entrega entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados. (Aprobación)

Antecedentes: Rep. N° 1225, de setiembre de 2019. Carp. N° 4153 de 2019. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 145
— Texto del proyecto sancionado 146

52.- Convenio con la República Italiana para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal y su protocolo. (Aprobación)

Antecedentes: Rep. N° 1217, de setiembre de 2019. Carp. N° 4146 de 2019. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 146
— Texto del proyecto sancionado 146

53.- Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea - América Latina y El Caribe. (Aprobación)

Antecedentes: Rep. N° 1135, de mayo de 2019, y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 3849 de 2019. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo 146
— Texto del proyecto sancionado 147

1.- Asistencias y ausencias

Asisten los señores representantes: Pablo D. Abdala (16), Auro Acosta, Felipe Algorta, Jorge Alonso Bourdiel, Herman Alsina, María Dolores Álvarez López, Myrian Álvez, Raúl Amaro Vaz, Carmen Anastasia, Susana Andrade, Sebastián Andújar, Sergio Arbiza, Alfredo Asti, Claudia Azambuya, Ruben Bacigalupe, Marcelo Bacigalupi, Claudia Bacino, Mariana Banquerque (1), Verónica Baranzano, Pablo Barrone, Graciela Bianchi Poli (2), Cecilia Bottino, Fitzgerald Cantero, Felipe Carballo, Andrés Carrasco, Ernesto Carreras, Alba Carvallo Sena, Armando Castaingdebat, Carlos Jesús Castaldi, Sonia Cayetano, Roberto Chiazzaro, Camilo Cejas, Carlos Coitiño, Álvaro Dastugue (6), Claudia de los Santos, Óscar De los Santos (9), Paulino Delsa, Cecilia Eguiluz, Johan Carlos Fernández, Roberto Frachia, Lilián Galán, Luis Gallo Cantera (15), Jorge Gandini, Mario García, Héctor Gabriel Gianoli Travieso, Sebastián González, Rodrigo Goñi Reyes (3), Elena Grauert Hamann, Norma Griego Valiente, Óscar Groba, Silvia Hernández, Ramón Inzaurralde, Tabaré Laca, Nelson Larzábal, Margarita Libschitz, Alejandro López de Haro, Miguel Lorenzoni Herrera, José Carlos Mahía (13), Nicolás José Martinelli, Dianne Martínez, Aníbal Méndez, Constante Mendiondo, Jorge Meroni, Orquídea Minetti, Gerardina Montanari, Fabián Monteghirfo, Carlos Moreira, Julio Naumov, Gerardo Núñez Fallabrino (17), José Luis Núñez, Beatriz Olivera, Óscar Olmos, Néstor Otero, Ope Pasquet, Gustavo Penadés, Gabriela Perdomo Buchaski, Estela Pereyra, Grisel Pereyra, Susana Pereyra, Pablo Pérez González, Paula Pérez Lacués (11), Julio Pérez Huelmo, Luis Pintado, Iván Posada, Jorge Pozzi, Luis Puig (4), Nibia Reisch, Diego Reyes, Silvio Ríos Ferreira, Gloria Rodríguez (8), Lucía Rodríguez Motz, Eduardo Rubio, Sebastián Sabini (12), Alejandro Sánchez (10), Raúl Sander, Enrique Saravia, José Luis Satdjian, Washington Silvera (5), Martín Tierno, Hermes Toledo Antúnez, Washington Umpierre, Javier Umpiérrez (7), Sebastián Valdomir (14), Carlos Varela Nestier, Walter Verri, Stella Viel, Nicolás Viera, Óscar Viera y Alejandro Zavala.

Con licencia: Fernando Amado, Saúl Aristimuño, Elisabeth Arrieta, Mario Ayala Barrios, Gabriela Barreiro, Julio Battistoni, Daniel Caggiani, Germán Cardoso, Richard Charamelo, Gonzalo Civila López, Catalina Correa Almeida, Walter De León, Darcy de los Santos, Bettiana Díaz Rey, Wilson Aparicio Ezquerra, Alfredo Fratti, Pablo González, Claudia Hugo, Benjamín Irazábal, Omar Lafluf Hebeich, Martín Lema, Cristina Lustemberg, Enzo Malán Castro, Graciela Matiauda, Susana Montaner, Manuela Mutti, Amin Niffouri, Juan José Olaizola, Nicolás J. Olivera, Mariela Pelegrín, Adrián Peña, Daniel Peña Fernández, Darío Pérez, Daniel Radío, Valentina Rapela, Carlos Reutor, Conrado Rodríguez, Edgardo Rodríguez Álvez, Carlos Rodríguez Gálvez, Nelson Rodríguez Servetto, Edmundo Roselli, Federico Ruiz, Mercedes Santalla, Tabaré Viera y José Yurramendi.

Faltan con aviso: Gerardo Amarilla, José Andrés Arocena, Guillermo Facello, Gonzalo Novales, Jorge Schusman y Alejo Umpiérrez.

Observaciones:

(1) A la hora 12:15 cesó en sus funciones por reintegro de su titular el Sr. Walter Verri.

(2) A la hora 12:30 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Gerardina Montanari.

(3) A la hora 12:30 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Verónica Baranzano.

(4) A la hora 12:46 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Carlos Coitiño.

(5) A la hora 13:50 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Julio Pérez Huelmo.

(6) A la hora 13:50 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Grisel Pereyra.

(7) A la hora 13:50 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Roberto Frachia.

(8) A la hora 14:50 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Ernesto Carreras.

(9) A la hora 14:50 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Pablo Pérez González.

(10) A la hora 16:35 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Estela Pereyra.

(11) A la hora 17:45 cesó en sus funciones.

(12) A la hora 17:59 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Paula Pérez Lacués.

(13) A la hora 17:59 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Norma Griego Valiente.

(14) A la hora 18:01 cesó en sus funciones por reintegro de su titular.

(15) A la hora 18:12 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Miguel Lorenzoni Herrera.

(16) A la hora 18:31 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Marcelo Bacigalupi.

(17) A la hora 17:40 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Gabriela Perdomo Buchaski.

2.- Asuntos entrados

"Pliego N° 282

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores comunica que, en sesión de 11 de setiembre de 2019:

- sancionó los siguientes proyectos de ley:
  - por el que se aprueba el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, su Reglamento y la Resolución de la Confederación Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, firmado en Singapur, el 27 de marzo de 2006 y a la Reserva contemplada en el artículo 19 Nº 2. C/161/010
  - por el que se aprueba el Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélites enmendado tal como se convino en el Vigésimo Período de Sesiones de la Asamblea de la IMSO, el Anexo (Procedimientos para solucionar las controversias a que hace referencia el artículo 17 del Convenio), el Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélites y su Enmienda. C/355/015
  - por el que se declaran de carácter obligatorio los debates entre candidatos a la Presidencia de la República. C/632/015
  - por el que se designa "Martha Montaner" la Sala Nº 9 del Edificio "General José Artigas" del Poder Legislativo. C/1130/016
  - por el que se establecen normas para el fomento del emprendedurismo. C/2635/017
  - por el que se aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, concluida el 24 de noviembre de 2016, suscrita por la República Oriental del Uruguay en la ciudad de París, República Francesa, el 7 de julio de 2017, así como las Reservas y Notificaciones realizadas por el Estado Uruguayo en el día de la firma. C/3165/018
  - por el que se establecen modificaciones a la Ley Nº 18.159, de 20 de julio de 2007, referida a la defensa de la libre competencia en el comercio. C/3304/018
  - por el que se designa "Walter Santoro" la Sala Nº 10 del Edificio "General José Artigas" del Poder Legislativo. C/3509/018
- resolvió aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley por el que se establece el régimen de fomento y protección del sistema deportivo. C/4080/019

- *Téngase presente*

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre el proyecto de ley por el que se establecen modificaciones al Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República. C/3504/018

La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

- por el que se modifica el artículo 29 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1939, sobre Derechos de Autor. C/3742/019
- por el que se designa "Obelisco-Batalla de Las Piedras" el Liceo Nº 3 de la ciudad de Las Piedras. C/4131/019

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

- por el que se regula la comercialización de sucedáneos de leche materna. C/2062/017
- por el que se declara el ahogamiento un problema de salud pública. C/4121/019

- *Se repartieron con fecha 11 de setiembre*

La Mesa da cuenta que, con fecha 11 de setiembre de 2019 y a solicitud de la Comisión de Educación y Cultura, se extrae del archivo el proyecto de ley por el que se designa "Atahualpa del Cioppo" el Liceo N° 2 del departamento de Canelones, pasando a estudio de la misma. C/2151/013".

3.- Inasistencias anteriores

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Está abierto el acto.

Antes de comenzar la sesión, queremos saludar a los alumnos de la Escuela N° 275, República de

Croacia, de Montevideo, que se encuentran en la barra.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de representantes a la sesión ordinaria realizada el día 11 de setiembre de 2019.

Con aviso: José Andrés Arocena y Alejo Umpiérrez.

Sin aviso: María Pía Viñales.

Inasistencias a las comisiones.

Representantes que no concurrieron a las comisiones citadas:

Miércoles 11 de setiembre

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Tabaré Laca".

4.- Caja Notarial de Seguridad Social. (Se modifica el régimen previsional)

——Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 15)

Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Caja Notarial de Seguridad Social. (Se modifica el régimen previsional)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1187

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señora presidente: me referiré a determinados artículos del Reglamento. Mi condición es de escribana jubilada. Creo que estoy cumpliendo con declararlo porque voy a exponer brevemente sobre el tema, ya que votaré aumentos de aportes a los jubilados de dicha profesión y a las personas en actividad. En realidad, si miro por el bolsillo, la conjunción con el interés personal no se da.

El tema de la seguridad social es un debe del Estado uruguayo con varias generaciones. Todo el mundo sabe que la Caja Notarial si alguien lo ignora, lo reiteramos fue la primera persona pública de derecho privado que existió en el país, creada en la década del cuarenta, con representación de los jubilados, de los escribanos activos y de los funcionarios de ese organismo, que también tienen representación en el Directorio, o sea que es un directorio sumamente plural.

Quiero rendir homenaje al escribano Fernando Miranda, quien fue uno de los hacedores de la ley de creación de la Caja. Desgraciadamente -como todos sabemos-, es uno de nuestros desaparecidos, cuyos restos fueron encontrados.

Se trata de una caja paraestatal, lo que vulgarmente se llamó paraestatal. ¿Qué características especiales tiene la Caja Notarial, además de la integración del directorio de esta forma? Es decir, hay mayoría de activos reitero y representantes de los pasivos, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y de los funcionarios.

Fui presidente de la Caja Notarial durante dos años, cuando estaba en actividad; renuncié al ser electa diputada y jubilarme. Quiere decir que conozco bastante el funcionamiento interno.

La Caja Notarial tiene un enorme patrimonio en bienes inmuebles: en inversiones; en inversiones en forestación; campos en explotación agropecuaria; colocaciones en dinero, sobre todo, en títulos de deuda pública. No voy a decir de cuánto es su patrimonio porque sería inútil, pero realmente es mucho. Ahora, ¿qué pasa? Se trata de un patrimonio generado por nosotros. El Estado nunca nos asistió.

Durante la dictadura, al intervenir la Caja, nos sacaron US$ 7.000.000, cuyo equivalente al día de hoy con respecto al peso sería de unos US$ 70.000.000. Nunca el Estado uruguayo lo reintegró y nosotros no lo exigimos demasiado porque de lo contrario, otra vez tendría que pagar el pueblo uruguayo algo que fue producto del régimen dictatorial.

En consecuencia, la Caja Notarial no tiene rentas generales como el Banco de Previsión Social. Nosotros somos nuestra propia renta general. Debemos ser

eficientes y eficaces para poder mantener un equilibrio en las prestaciones, que se han reducido al 50 %. Quiero aclarar que hemos hecho un esfuerzo muy grande. No nos jubilamos con las jubilaciones que todo el mundo piensa, que sí teníamos en otras épocas. Todavía estamos pagando pensiones de viudas, de viudos, o sea, de sobrevida, de más de $ 100.000. O sea que en otras épocas sí teníamos jubilaciones privilegiadas, pero ahora, no. Inclusive, tenemos jubilaciones más bajas que las que podríamos cobrar si nos jubiláramos por el Estado.

¿Qué está sucediendo? Hubo un proceso de explosión de la matrícula notarial a partir de la década del ochenta, y hay gente que no se jubila, pues las jubilaciones son insuficientes para vivir. Hoy la expectativa de vida es mayor y nos sucede lo mismo que al resto de la seguridad social. Y esa explosión de la matrícula ha tenido consecuencias: hay escribanos con poco trabajo; hemos perdido el sistema de salud; hay escribanos con la cobertura que tiene todo el mundo; ya no contamos con el sistema.

Entonces, ¿por qué consideramos que este proyecto debe ser aprobado? Sabemos que hay un planteamiento de inconstitucionalidad por una posible doble imposición. En definitiva, el nudo gordiano del proyecto de ley, a partir de la aprobación y más allá de algunos ajustes -no se trata de la reforma de la caja, que va a ir junto con la del resto del sistema de la seguridad social-, es evitar el desfinanciamiento. El desfinanciamiento anual es muy grande, de más de $ 600.000.000, lo que hace que debamos recurrir al capital y no al monto de la generación de intereses ni a la renta, que era con lo que pagábamos las jubilaciones y pensiones, además de la atención a las mujeres, en caso de maternidad, lo que, obviamente, cubrimos nosotros, porque -reitero- nos quedamos sin el sistema de salud.

¿Qué significa esto? Para ser concreta, debo decir que los jubilados vamos a tener un descuento, un aporte especial del 2 % para el IASS. Hay quienes consideran que constitucionalmente esto es una doble imposición. Los activos aportan un 3 % más. Algunos escribanos pueden no estar de acuerdo, pero este es un tema pragmático. Hay un cálculo realizado por los contadores de la Caja Notarial; contamos con servicio jurídico y contable. No queremos ser asistidos por el Estado; queremos seguir haciendo sacrificios nosotros, para evitar que el Estado tenga que sostenernos como nunca lo hizo. Y vamos a hacer todo lo posible para que nunca lo haga.

Por lo tanto, hacer estos aportes significó reducir las jubilaciones al 50 %. Ahora hay otras opciones como, por ejemplo, que si uno se jubila a los 65 años de edad, con más años de trabajo, la pasividad puede ser un poco mejor, pero siempre está en el entorno del 50 %.

Hay personas que plantearán la inconstitucionalidad de esta propuesta; no voy a decir que debemos votar inconstitucionalidades, pero lo hacemos todos los días -por ejemplo, la Secretaría de Deporte, que es una secretaría dentro de la Presidencia de la República-, porque uno llega al momento del pragmatismo.

Los escribanos no tenemos una doble imposición porque lo haya impuesto el Estado, o sea que podemos decir que no es el afán recaudador del Estado el que nos hace tomar esta decisión. Es una decisión de los escribanos debidamente representados en la Caja Notarial -también en la asociación-, que es la empresa.

En definitiva, solicitamos que con criterio pragmático nos autoricen a hacer un esfuerzo mayor. Somos muy solidarios a la interna del funcionamiento de la Caja. Reitero que nunca necesitamos aportes, que nunca reclamamos lo que se nos robó durante la dictadura, que peleamos lo del sistema y perdimos.

Lo que venimos a ofrecer a la Cámara, para facilitar las cosas, es la solución. ¿Nos gusta? No, porque a nadie le gusta que le descuenten el 2 % más de las jubilaciones, que ya son muy magras. A modo de ejemplo, yo percibo una mejor jubilación como directora del Liceo Bauzá, como empleada pública, que como escribana, y eso que trabajé medianamente bien, aunque nunca estuve en la rosca.

En estos momentos el promedio de las jubilaciones está en el entorno de $ 25.000 o $ 26.000 mensuales, excepto las de los escribanos de los grandes estudios. Como siempre, la concentración lleva a que los que tengan más trabajo reciban una mejor jubilación. La media es esa; no supera los $ 30.000.

Es cuanto quería decir.

Reitero que esta no es una reforma de la Caja Notarial, sino que se trata de salir del desfinanciamiento.

Por supuesto que cuando se discuta el régimen de la seguridad social vamos a estar dispuestos a participar, pero queremos hacerlo desde una Caja Notarial económicamente fuerte -como lo ha sido y sigue siendo, porque tiene el patrimonio-, que no implique un peso más para el Estado.

Muchas gracias, señora presidente.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra la señora diputada Mariana Banquerque.

SEÑORA BANQUERQUE (Mariana).- Señora presidenta: de acuerdo con los establecido en el artículo 77 y en el literal M) del artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Representantes, debo decir que voy a retirarme de sala y abstenerme de votar este proyecto de ley por ser escribana pública.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señora presidenta: quiero adelantar nuestra tesitura y opinión favorable a la aprobación de este proyecto de ley.

Esta iniciativa vino del Senado; fue analizada por la Comisión de Seguridad Social, en un tratamiento relativamente sumario pero, *a contrario sensu* de lo ocurrido con algunos de los proyectos que la Cámara ha considerado en estos días y tratará en la sesión de hoy, en este caso, el tiempo ha sido suficiente, al menos para recibir a los actores fundamentales, a los protagonistas principales vinculados con este asunto. Me refiero al Directorio de la Caja Notarial, a la Asociación de Jubilados de la Caja Notarial y a la Asociación de Escribanos del Uruguay.

De lo que acaba de expresar la señora diputada Bianchi con mucha claridad y más conocimiento de causa del que puedo tener yo, por razones obvias y hasta por su vinculación funcional, surge claro que la justificación de esta reforma, de esta reestructura de la Caja Notarial tiene que ver con la situación de desequilibrio financiero que presenta.

De acuerdo con las cifras que pudimos recabar en el análisis parlamentario, sabemos que la relación activo-pasivo se ha deteriorado notoriamente. Según se nos dijo, hay un déficit operativo que el año pasado fue de US$ 30.000.000, lo que determina una sostenibilidad muy exigua en el tiempo, concretamente, se habla de no más de quince años de subsistencia financiera en función de los ingresos que provienen de los aportes patronales y personales de los afiliados, de las rentas que se obtienen de las distintas inversiones que la Caja realiza y del fondo de reserva que posee. Estas rentas se utilizan y se proyecta que se sigan utilizando para dar cumplimiento a las distintas prestaciones de seguridad social que la Caja atiende.

En el año 2017, el déficit fue de US$ 8.000.000; en el 2018, de US$ 14.000.000, y se proyecta que el de 2019 sea de US$ 20.000.000.

La propuesta que se nos trajo -elaborada por el Directorio de la Caja Notarial, a mi juicio, de manera muy seria y responsable- parece razonable en cuanto a la redefinición de los aspectos paramétricos, es decir, de todo lo que concierne a la tasa de reemplazo, a la edad de retiro, a los años de servicio exigidos para acceder a la jubilación común. También se establece una escala que combina razonablemente años de servicios con años de edad, a efectos de configurar la causal.

Sin perjuicio de ratificar que votaremos a favor el proyecto y la mayoría de los artículos, mantenemos las discrepancias que expresamos en el Senado con respecto al impuesto que se establece en el artículo 4º a efectos de gravar las jubilaciones de la Caja Notarial.

También nos quedan dudas con relación al artículo 11, que elimina la exoneración de aportes de la Asociación de Escribanos del Uruguay, en función de un planteamiento que recibimos de dicha organización.

Por lo tanto, el proyecto podría tener algunos visos de inconstitucionalidad. La comisión recabó algunos informes; uno de ellos es del doctor Correa Freitas, quien reafirma el criterio de la inconstitucionalidad del impuesto previsto en el artículo 4º, por el argumento de la doble imposición.

En la misma dirección también hay un informe de la División de Estudios Legislativos del Senado que, por otra parte, introduce una perspectiva que quiero plantear: el tiempo, el momento en el que abordamos la aprobación de este proyecto.

En función de lo que establece el artículo 229 de la Constitución, entre otros poderes del Estado, el Poder Legislativo estaría inhibido constitucionalmente de decretar, en los doce meses previos a las elecciones nacionales, aumentos de sueldos y

pasividades. En este caso, estrictamente, no hay aumento de pasividades, y desde esa perspectiva estaría salvada la constitucionalidad, pero existe una interpretación según la cual podría asimilarse al concepto de aumento el de la creación de nuevos beneficios o nuevas prestaciones de seguridad social, que en este caso sí se dan, por ejemplo, con relación a la jubilación por edad avanzada.

En lo personal, me voy a afiliar al primer criterio y a una interpretación más estricta, si se quiere, del artículo 229, y por esta vía la inconstitucionalidad estaría salvada. Lo que parece más difícil…

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Señor diputado: lo amparo en el uso de la palabra.

Puede continuar.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Muchas gracias, presidenta.

Decía que, desde nuestro punto de vista, lo que parece más difícil de votar -por más que se trate de un tema controversial y, de hecho, la Caja Notarial sustentó la juridicidad de la disposición impositiva que aparece en el artículo 4º- es la creación de impuestos a las pasividades notariales en la medida en que, efectivamente, estaríamos ante una doble imposición, porque los jubilados notariales pagan IASS.

En lo que a nosotros respecta, nos afiliamos al criterio de la intangibilidad de las pasividades, de acuerdo con lo que establece el artículo 67 de la Constitución, que obliga al Estado a asistir financieramente a los sistemas y subsistemas de seguridad social a los efectos del mantenimiento del valor de las pasividades.

Por supuesto que este es un tema discutible y que en esta Cámara lo hemos debatido extensamente. Al respecto, la jurisprudencia ha sido contradictoria. En el año 2008 -como todos recordarán-, en ocasión de discutirse la aplicación del IRPF a las pasividades, en primera instancia, la Suprema Corte de Justicia acogió este criterio, pero después la jurisprudencia cambió porque se modificó la integración de la Corte y hasta el día de hoy se sostiene que las pasividades pueden ser objeto de tributo, como de hecho son en la actualidad.

Esto no quiere decir que desde el punto de vista teórico y doctrinario no haya una controversia. Tanto la hay que, inclusive, está pendiente de dilucidación un fallo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El doctor Martín Risso Ferrand, distinguido constitucionalista que se afilia al criterio de la intangibilidad, agotada la instancia de los recursos a escala nacional, ha promovido una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que -reitero- está pendiente de definición. La aplicación de un tributo de estas características podría afectar el principio de igualdad, en la medida en que hay un tratamiento desigual a los jubilados, en este caso, a los notariales, con relación al resto de los pasivos del Uruguay.

Se ha planteado el antecedente de los jubilados bancarios, pero no tiene una equivalencia directa o completa con la situación que estamos analizando. El impuesto que se estableció en el año 2004 para financiar la caja bancaria, ante una situación de desfinanciamiento de similares características a este, se estipuló con carácter temporal. Inclusive, podríamos discutir la legitimidad de que los jubilados bancarios sigan pagando ese impuesto que -como dije- es de carácter transitorio y estaba asociado a la evolución patrimonial de la caja bancaria y a la circunstancia de que se alcanzara el equilibrio económico y financiero, lo que los jubilados bancarios sostienen que ya ha ocurrido.

Por fuera de esto, teniendo en cuenta el principio de la seguridad jurídica y el concepto de los derechos adquiridos, aplicar un nuevo impuesto a los jubilados -que a la hora de acogerse a los beneficios jubilatorios no contaban con esa carga o gravamen que establecerá el Estado a partir de esta decisión- no solo ambienta la polémica, sino que justifica invocar la inconstitucionalidad de esa decisión.

Se me dirá que esto es indispensable a los efectos de alcanzar el objetivo del equilibrio financiero. Es verdad, pero también es cierto que para eso se establecen medidas que tienen que ver con la reestructura de la Caja Notarial en lo que refiere a los aspectos paramétricos. También es verdad que la Caja Notarial -como la asociación de jubilados, pero me interesa destacar especialmente que lo hizo la Caja Notarial, que fue la autora del proyecto- planteó vías alternativas de financiamiento a la aplicación del impuesto lo que, finalmente, fue escogido como solución por el Poder Ejecutivo.

Entre otras cosas, se dispuso -sé que es difícil- que una parte de lo recaudado por el IASS que pagan

los jubilados notariales -como sabemos, toda la recaudación del IASS se destina a financiar el enorme déficit del BPS- se destinara, por un tiempo determinado, que si mal no recuerdo, era un lapso de diez años, a enjugar el déficit de la Caja Notarial y, por lo tanto, a contribuir con su financiamiento.

Por otro lado, se propuso el establecimiento de un timbre o un gravamen a la actividad de los afiliados activos, al trabajo de los escribanos. Los mismos escribanos propusieron esta alternativa a los efectos de asumir el costo del financiamiento y no cargarlo sobre quienes ya están jubilados pero, por alguna razón, en el acierto o en el error, fue desechado por el Poder Ejecutivo que, como todos sabemos, también integra el Directorio de la Caja Notarial. Y no solo lo integra sino que, además, en este caso, fue el que planteó la iniciativa legislativa correspondiente y propuso este proyecto de ley al Parlamento.

Con relación al artículo 11, cabe señalar que es un tema controversial. La Asociación de Escribanos del Uruguay invoca encontrarse amparada en la exoneración de aportes patronales con relación a sus empleados y trabajadores por el artículo 69 de la Constitución de la República. La Caja Notarial sostiene que no es así y que esa exoneración, cuando existió, era de rango legal y no constitucional. Este no deja de ser un tema difícil y controversial. Los informes jurídicos que hemos recogido o que han llegado a la Comisión indican que estaríamos ante una inconstitucionalidad, en la medida en que hay una ley interpretativa que incluye a las organizaciones gremiales, entre otros colectivos y entidades, en la exoneración del artículo 69. Acepto y admito que es un caso dudoso pero, ante la duda, en la eventualidad de que esto configure otra inconstitucionalidad, votaremos en contra el artículo 11.

Por ahora, nada más.

Muchas gracias.

SEÑOR DASTUGUE (Álvaro).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR DASTUGUE (Álvaro).- Señora presidenta: hacemos uso de la palabra con el afán y el deseo de dejar sentado el trabajo de la Comisión de Seguridad Social, en la que tratamos este proyecto, escuchamos todas las voces y recibimos a todas las delegaciones que manifestaron la necesidad y las ganas de hacerse oír al respecto.

También diremos que nos hubiera gustado contar con un poco más de tiempo en la Comisión para dialogar, discutir y analizar más esta iniciativa, aunque estamos terminando la legislatura y sabemos de la urgencia y de los problemas que tiene la Caja Notarial.

Conocemos la situación de la Caja Notarial; sabemos que no escapa a la coyuntura de la seguridad social en su conjunto. Entendemos que el próximo gobierno, del color que sea, del partido que sea, requerirá una mesa de trabajo integrada por todos los partidos políticos para atacar esta problemática. Sinceramente, me hubiera gustado que se tratara la situación de toda la seguridad social, tanto la de la Caja Notarial, como de otras, además de la del Banco de Previsión Social, dado que, en general, todo nuestro país está en la misma.

Sin embargo, considerando la urgencia por el déficit que tiene la Caja Notarial, adelantamos nuestro apoyo al proyecto en general. Tenemos algunas dudas, principalmente, con respecto a los artículos 4º y 11, los que -principalmente el artículo 4º- votaremos negativamente, siendo coherentes con la idea de que la ciudadanía no soporta ningún incremento en la carga tributaria, es decir, en los impuestos.

De manera que, en el afán de no ser reiterativos y compartiendo las palabras de nuestros colegas del Partido Nacional, dejamos sentado nuestro apoyo al proyecto en general. Cuando se entre en la discusión particular, analizaremos artículo por artículo.

Muchas gracias.

SEÑOR MENDIONDO (Constante).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR MENDIONDO (Constante).- Señora presidenta: participé de las reuniones, como los diputados Pablo Abdala y Conrado Rodríguez, la diputada Graciela Matiauda y los diputados Washington Silvera y Álvaro Dastugue, porque este es un tema que interesa.

Cabe señalar que esta iniciativa surge del planteo que un colectivo hizo al Poder Ejecutivo que, en parte, lo hizo suyo, no en lo relativo a aquellos recursos relacionados con pagos de usuarios. En definitiva, es

el planteo de un colectivo que pone el cuerpo a una situación difícil. Entiendo que los tiempos para su aprobación -no voy a repetir una cantidad de cosas que se dijeron acá y que son ciertas- están más marcados por la necesidad de obturar una situación sumamente difícil que por otra cosa.

Este proyecto ya fue considerado en el Senado, donde nuestra bancada lo votó. Y también lo votará íntegramente en esta Cámara.

El planteo ha quedado claro, a través de los asesoramientos, más allá de que se recibió a representantes de la Asociación de Escribanos del Uruguay, de la Asociación de Jubilados de la Caja Notarial, y a la Caja Notarial, que es la autora original del proyecto. En la última reunión se recibió a una delegación de la Caja Notarial, integrada, entre otros, por la escribana Laura Guasch, que con el planteo de antecedentes y sentencias dejó tranquilidad en cuanto a las posibles objeciones desde el punto de vista jurídico. También recibimos al profesor Luis Camacho, quien explicó la sustentabilidad del proyecto que estamos considerando, con una transitoriedad de veinte años, y expresó su conformidad. En definitiva, mientras a la hora de considerar el tema jubilatorio otros colectivos se esconden y tiran el problema para adelante, este le pone el cuerpo para evitar mayores problemas y asume la responsabilidad de financiar y hacer sustentable su sistema de seguridad social.

Por lo tanto, queremos dejar claro nuestro apoyo al artículo 69, que es el más cuestionable.

Con respecto al artículo 11, que refiere al aporte de las exoneraciones patronales, queremos decir que siempre se pagaron aportes patronales; es muy reciente el hecho de que no se paguen y fue a raíz de una sentencia que tenía que ver con el Fonasa. También hubo abundantes sentencias y respaldo jurídico en el sentido de que si hay una ley interpretativa perfectamente puede haber una ley para derogarla.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MENDIONDO (Constante).- Sí, señor diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Puede interrumpir el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Gracias, señora presidenta.

Se ha dicho en sala que hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia que pondrían en duda la constitucionalidad de establecer un tributo que grave a las pasividades en general.

Se ha recurrido al artículo 67 de la Constitución planteando que hay una intangibilidad de la asignación de jubilación y pensión, que no podría ser afectada por ningún tributo.

El literal A) del artículo 67, que refiere al financiamiento, dice: "Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados, […]".

En reiteradas oportunidades la Suprema Corte de Justicia, teniendo determinada integración -incluso en el momento en que estableció la inconstitucionalidad por aplicar el IRPF, que es un impuesto que grava a los ingresos provenientes del capital, del trabajo, activo o pasivo- determinó en una sentencia que no se podía aplicar el IRPF a la totalidad de los pasivos.

Luego hubo sentencias en sentido contrario, que afirmaban que sí se podía aplicar. Sin embargo, para no crear diferencias entre los que podían verse beneficiados con esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia -solamente se aplicaría a los casos que habían cuestionado este tema- se derogó esa parte del IRPF y se creó el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social, que fue avalado por la Suprema Corte de Justicia en muchos fallos.

Desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, no hay duda de que los tributos sobre las pasividades que estén destinados exclusivamente a financiar las prestaciones que la institución de seguridad social -en este caso, la Caja Notarial, aunque puede ser otra institución- brinde a través de asignaciones de jubilaciones y pensiones, pueden ser -como dice el artículo 67 de la Constitución- motivo de gravamen.

Eso era lo que queríamos establecer, dado que trajimos a colación un fallo aislado con respecto al IRPF, que era un impuesto general que gravaba a todos y que no estaba destinado al financiamiento de la seguridad social, aunque -reitero- sentencias posteriores decidieron que podía haber sido constitucional su aplicación. Pero no vale la pena recordar esa situación porque no se está aplicando.

Lo que sí vale la pena recordar es que en esa sentencia siempre se decía que no había intangibilidad en el artículo 67, sino que refería a la forma de ajustes que se establecieron por la reforma constitucional.

Era eso cuanto quería aclarar.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Puede continuar el señor diputado Mendiondo.

SEÑOR MENDIONDO (Constante).- He culminado, señora presidenta.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Gracias, señora presidenta.

Con el mayor de los respetos por el señor diputado preopinante, entre las tesis constitucionales del doctor Correa Freitas y las tesis constitucionales del diputado Asti, me quedo con la interpretación constitucional del doctor Correa Freitas.

Quiero decir al señor diputado Asti que como vocero del oficialismo debería medir sus palabras, porque lo que acaba de decir compromete severamente al Poder Ejecutivo.

En primer lugar, hace una interpretación caprichosa del literal A) del artículo 67, que dice: "Contribuciones obreras y patronales" -todos sabemos de lo que estamos hablando: los aportes patronales y personales- "y demás tributos establecidos por ley. […]". Se le ocurrió al diputado Asti que esos tributos sean aplicados a las pasividades. No es la interpretación que la doctrina constitucional, que yo estoy invocando, suscribe y apuntala.

Cuando invito al diputado Asti -o aconsejo muy humildemente- a que actúe con cautela, es porque no puede invocar el criterio de lo que establece a continuación el literal A) del artículo 67 de la Constitución, que dice: "Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados, […]".

Entonces, ¿qué nos está proponiendo el diputado Asti? Que los impuestos que se aplican a los pasivos se dediquen a financiar las pasividades. Pues entonces deberían volcar a la Caja Notarial lo que recaudan por concepto de IASS que le aplican a los jubilados y pensionistas de dicha Caja, cosa que no hacen. En realidad, le sacan la plata y va a la bolsa o a financiar el Banco de Previsión Social, pero no las jubilaciones de los escribanos; no las jubilaciones de la Caja Notarial.

Si el diputado Asti me dice que el gobierno está dispuesto a resignar esos recursos o -mejor dicho- a interpretar que lo que dice el literal A) es que lo recaudado por el IASS de los jubilados y pensionistas de la Caja Notarial va a dicha Caja, estoy dispuesto a revisar mi tesis y mi interpretación del literal A) con tal de solucionar el problema, porque por esa vía podríamos no tener que establecer nuevos impuestos. Ahora, que se ponga de acuerdo el diputado Asti, porque en aras de sostener las afectaciones de las pasividades por la vía tributaria, lo que está desnudando es la enorme contradicción que el gobierno tiene con relación a todo esto.

Habla del impuesto a la asistencia de la seguridad social. Pero ¿a cuál? ¿A la de aquellos que pagan el tributo o a la que el gobierno caprichosamente resuelva destinar esos recursos?

Parecería que el diputado Asti está en contra de la tesis que ha sostenido el Poder Ejecutivo desde el 2007. Francamente, advierto una contradicción que no tengo más remedio que señalar.

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia no es aislada; fueron varias sentencias que se emitieron en el año 2008, todas coincidentes por una mayoría de ministros. Es verdad que esa jurisprudencia cambió, pero evidentemente tenemos criterios contradictorios en la jurisprudencia. Es verdad que la interpretación actual de la Corte es otra, pero en un momento fue la que yo dije. De manera que tan desencaminada no debería estar. Por lo menos, asumamos que es un tema polémico y controversial.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Gracias, señora presidenta.

Por supuesto que la doctrina del doctor Correa Freitas es muy respetable, pero yo me basaba en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia. Aquí

sabemos que los únicos que pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley no son los juristas en forma aislada, sino aquellos que forman parte del órgano que prevé analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los casos. Desde la cátedra hay posiciones a favor y en contra. Ya hemos hablado en otras oportunidades de las que avalan la posibilidad de generar tributos que tengan como fin el financiamiento de las jubilaciones y pensiones.

Con respecto a los fallos de la Suprema Corte de Justicia a que se hacía referencia, recordemos que hubo varios en muy poco tiempo con la misma integración. Cuando cambió la integración, varias integraciones más mantuvieron esa posición. Inclusive, con respecto al IRPF -no es el caso que estamos analizando-, y cuando se creó el impuesto a la asistencia de la seguridad social. Estamos hablando de la asistencia de la seguridad social toda, porque la seguridad social debe tomarse en su conjunto y no institución por institución, tal como establece la ley. Recordemos que la última ley de modificación de la seguridad social de 1995, que empezó a aplicarse en 1996, refería a la convergencia de todos los sistemas de seguridad social. Hablamos de toda la seguridad social como conjunto, porque la Constitución no detalla institución por institución.

Nos referíamos a que gravar las jubilaciones es posible, como ha entendido la Suprema Corte de Justicia en reiteradas oportunidades, salvo en el caso de una integración, aislada en el tiempo, aunque haya abarcado más de una resolución; cuando cambió la integración de ese Poder del Estado, es decir, con distintas integraciones se ha entendido esto.

Por lo tanto, no hay ninguna contradicción: son tributos afectados al financiamiento de la seguridad social. Esas fueron mis palabras y las reitero.

En el caso de que haya doble imposición, como se dijo, se justifica si ese segundo tributo está destinado a financiar a esa institución de seguridad social en particular.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señora presidenta: el Partido Independiente votará en general negativamente este proyecto de ley. Lo hará fundado en el tema que ha dado lugar a una discusión, en especial para ser coherentes con nosotros mismos y con lo que hemos sostenido a lo largo de las discusiones de diversos proyectos de ley con relación al establecimiento de una doble imposición.

Hace unos meses, la Cámara de Representantes discutió un impuesto para los militares con el destino de financiar el servicio de retiros y pensiones militares, y la mayoría de este Cuerpo entendió que ese impuesto era inconstitucional. Así lo ha sostenido la mayoría de la doctrina. En particular, recuerdo que en esas instancias se consultó al doctor Martín Risso Ferrand, quien fue contundente en cuanto a que cuando se establece una doble imposición se violenta, entre otras cosas, el artículo 8º de la Constitución de la República, en el sentido de la igualdad ante la ley.

¿Por qué determinados colectivos deben tener una doble imposición? No hay ninguna doctrina que avale una tesitura de esa naturaleza, pero ese es el camino que, lamentablemente, se recorrió cuando se hizo la reforma de la caja bancaria -que no acompañamos-, cuando se intenta establecer un impuesto al retiro militar y ahora, cuando se quiere hacer esta modificación de la caja notarial.

Por lo tanto, siendo coherentes con lo que hemos sostenido en esas diversas instancias, votaremos en general en forma negativa, aunque acompañaremos la mayoría de los artículos. Si no hubiera estado esta imposición indebida e inconstitucional, hubiésemos acompañado el proyecto. En todo caso, hubiese sido deseable analizar el tema de la caja notarial en el marco de los cambios que hay que hacer en materia de seguridad social. Está claro que se debe analizar la sostenibilidad de los distintos colectivos. Me parece que este es un aspecto que, a esta altura, debemos abordar, sobre todo cuando se presentan por estos colectivos las dificultades notorias que se generan hoy, particularmente en el ejercicio de la profesión, en lo que tiene que ver con los recursos que genera en forma genuina, en este caso, la caja notarial.

Lo más importante tiene que ver con los aspectos vinculados al financiamiento. El Poder Ejecutivo ha insistido en el financiamiento a través de la imposición a los propios jubilados, en este caso escribanos jubilados. Este camino nos parece francamente inadecuado. Por esta razón vamos a votar en general por la negativa, sin perjuicio de acompañar los demás artículos del proyecto que tienen que ver con asuntos

que me parecen razonables y que han sido planteados en tiempo y forma por las autoridades de la caja notarial.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señora presidenta: no vamos a acompañar este proyecto de seguridad social para la caja notarial, que apunta a modificaciones con las que no estamos de acuerdo, por el contenido que tienen y por la perspectiva que dan.

En la exposición de motivos se plantea que nuestro país cuenta con una institucionalidad diversa en materia de seguridad social, básicamente integrada por el Banco de Previsión Social, los servicios de retiros estatales policial y militar, dependientes de los ministerios del Interior y de Defensa Nacional, y las cajas paraestatales bancaria, profesional y notarial. De modo que la caja notarial está dentro del sistema de seguridad social.

Entendemos las dificultades por las que atraviesa y valoramos la preocupación de quienes integran esta caja de buscar caminos de solución. Se plantea que ha habido alternativas que no prosperaron por decisiones políticas. Pero se ha estado discutiendo un aspecto que a nosotros sí nos importa, que es el concepto de que las jubilaciones no pueden ser objeto de impuestos. Esto lo hemos sostenido en distintos debates y hemos sido coherentes en esa posición, aun al costo de ser objeto de campañas de mentiras y de falsedades.

Se maneja como argumento que el artículo 67 abre la posibilidad de establecer impuestos. Y sí, el artículo 67 dice claramente -ya se lo leyó y vamos a repasarlo-: "Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de: A) Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley". En ningún lado dice que sean impuestos que vayan a gravar las jubilaciones. Este artículo no habilita a gravar con impuestos las jubilaciones. Puede ser un impuesto a las bebidas alcohólicas, un impuesto a las mercaderías en tránsito, como tantas veces propusimos, pero no dice que pueda ser un impuesto a las jubilaciones.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- ¡Apoyado!

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- El artículo dice: "[...] y demás tributos establecidos por ley". Es una aventura decir que se plantea que las jubilaciones pueden ser objeto de imposición.

Después podemos hacer una batalla con las resoluciones de las distintas integraciones de la Suprema Corte de Justicia. Yo no me afilio al fallo que declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. La respeto porque es la Suprema Corte de Justicia, pero no solo no lo comparto sino que lo rechazo. En esto siempre existen dos bibliotecas. Entonces, rechazamos la política de colocar impuestos a las jubilaciones.

Como, en todo caso, hay uno -el IASS- sobre el que esta Suprema Corte de Justicia ha pontificado, cuyo objetivo es sustentar la seguridad social, lo más lógico sería que de allí se tomaran los recursos para resolver esta situación.

Hay otros aspectos del proyecto que nos preocupan tanto o más que este. En el país está planteado el debate sobre la reforma de la seguridad social. Todos los partidos dicen que en el próximo período habrá que reformar la seguridad social porque el déficit es inabarcable. Otras voces plantean una perspectiva distinta. Lo que nadie dice es cómo la piensan reformar. Este es el anticipo; este es el camino que se viene: bajar la tasa de reemplazo y elevar la edad de retiro. En definitiva, se trata de una reforma de la seguridad social que castiga exclusivamente a los trabajadores. Esto es un anticipo y por eso nos parece realmente preocupante.

Es por eso que no vamos a acompañar este proyecto. Creemos que hay otros caminos -que inclusive se han planteado- para poder resolver la situación que vive la caja notarial, pero el camino que viene propuesto por el Poder Ejecutivo para nosotros es peligroso porque adelanta un proceso de reforma que implicará para nuestro pueblo y para los sectores populares un escenario de lucha muy dura en defensa de conquistas históricas de los trabajadores en este país.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señora presidenta: por las vueltas de la vida voy a terminar

defendiendo al Poder Ejecutivo, pero tenemos que ser objetivos.

Esta es una resolución de los escribanos: estamos manejando nuestros dineros, estamos sacrificándonos con nuestras jubilaciones, que ya son muy magras.

Tengo sesenta y cinco años y cuando me recibí de escribana les puedo garantizar que pensé que la jubilación de escribana iba a ser el seguro de vida perfecto para mí pero, la verdad, es muy magra.

Ahora, el Poder Ejecutivo entendió como creyó conveniente y no nos llevó nuestras soluciones. Está bien, tiene sus criterios -los que hemos discutido con el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha sido abierto a las diferentes posibilidades-, pero esta no es una decisión del Poder Ejecutivo. Que tenga la iniciativa, que haya un representante del Poder Ejecutivo en la caja -lo dije más de una vez- es porque eran grandes juristas los que hacían estas leyes, porque las actuales personas públicas de derecho privado no tienen representante de los trabajadores, ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial; resuelven las cosas entre gallos y medianoche.

No quiero tener problemas porque lo que nos importa es que la caja notarial se salve. ¿Por quién? ¿Por aportes del Estado? Sí. Lo que pagamos de IASS, ¿nos gusta? No. Bueno, ¿ahora nos gusta tener que pagar un impuesto más? No; no nos gusta, pero hay que ponerlo en la balanza, y es mucho más importante resolver en forma urgente este desfinanciamiento que pensar a largo plazo.

No voy a permitir -hablo por mí- que se diga que esto es un adelanto de lo que los partidos vamos a hacer con la seguridad social, porque esa es una aseveración que no tiene comprobación en la realidad. Esta es una solución de la caja en este momento de urgencia; no es un adelanto de lo que se va a hacer. Veremos qué se va a hacer, pero no quiero comprometer al Partido Nacional en ese sentido.

Esta es una situación absolutamente distinta a todo lo que han planteado: somos nosotros los que queremos seguir bancando a la caja; somos nosotros los que no queremos ir a buscar plata al Poder Ejecutivo y a Rentas Generales para que Juan Pueblo nos banque. Entonces, no nos pueden poner a todos en la misma bolsa. ¿Nos causa gracia? No, pero tenemos un patrimonio que construimos durante muchas décadas y entendemos que debemos preservarlo, lo significa pagar las prestaciones con las rentas, con los intereses y no tocar el capital.

Es así; no saquen otras conclusiones.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA GRAUERT HAMANN (Elena).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GRAUERT HAMANN (Elena).- Señora presidenta: quería advertir a la Cámara que soy escribana y, por lo tanto, si no se entiende que existe conflicto de intereses, me gustaría participar en la discusión.

Acompaño a mi colega. La caja notarial se ha autodefinido un destino, ha sido proactiva en su defensa. Por lo tanto, entiendo que el Cuerpo tiene que amparar el derecho de los escribanos y salvar un patrimonio riquísimo, que es tener su servicio de seguridad social. Por supuesto es un enorme sacrificio que los escribanos activos y pasivos van a llevar a cabo, pero es importante que exista este tipo de iniciativas y respetar la autodefinición en cuanto al destino del patrimonio de la caja.

Si el Cuerpo entiende que me tengo que retirar, me retiro, pero me parece importante apoyar este proyecto.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta y dos en setenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑOR MENDIONDO (Constante).- Pido la palabra para una cuestión de procedimiento.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR MENDIONDO (Constante).- Señora presidenta: no sé si la Mesa tiene que resolver algo con relación a quienes anunciaron posibles incompatibilidades.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- No.

SEÑOR MENDIONDO (Constante).- Entonces, proponemos que se suprima la lectura y se vote en bloque, teniendo en cuenta los desgloses que se soliciten.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señora presidenta: estamos de acuerdo con la propuesta del señor diputado Mendiondo. Vamos a pedir el desglose de los artículos 4° y 11, que votaremos negativamente, como adelantamos en la discusión general.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Se va a votar el procedimiento propuesto.

(Se vota)

——Setenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión la totalidad del proyecto, con excepción de los artículos 4° y 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar

(Se vota)

——Setenta y siete en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidenta: votamos por la afirmativa estos artículos. Nuestra discrepancia está con el financiamiento, que es, en realidad, la cuestión fundamental de este proyecto. En la medida que lo consideramos inconstitucional, sentimos que no debemos acompañar, fundamentalmente, los artículos 4° y 11.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- En discusión el artículo 4°.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y seis en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a la Caja Notarial de Seguridad Social y a los colectivos amparados por la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 de la presente norma.

Artículo 2º.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 14 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

"Las resoluciones del Directorio serán notificadas personalmente al interesado o persona autorizada por este, en las oficinas de la Caja o en el domicilio constituido o conocido. En los casos de notificación a domicilio, de no encontrarse ninguna de dichas personas, así como cuando estas se negaren a firmar la constancia, se practicará la notificación por cedulón administrativo".

Artículo 3º.- Agrégase como último inciso del artículo 14 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"Las notificaciones de las resoluciones de la Caja podrán practicarse, asimismo, al domicilio electrónico constituido a tales efectos, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que las realizadas conforme a lo previsto en el inciso primero, inclusive los previstos en el artículo 27 del Código Tributario, siempre que proporcionen seguridad en cuanto a la efectiva realización de la diligencia y a su fecha".

Artículo 4º.- Créase una prestación de carácter pecuniario a favor de la Caja (inciso primero del artículo 1º del Código Tributario), a cargo de los jubilados y pensionistas de la misma, que tendrá las tasas que se establecen a continuación y gravará todas las sumas nominales correspondientes a las cédulas jubilatorias y pensionarias que la Caja abone.

Las tasas de dicha contribución serán:

A) el 2 % (dos por ciento) para las jubilaciones, tanto las vigentes como las futuras que se concedan conforme al régimen que se sustituye, y para las pensiones de sobrevivencia

cuya causal se haya configurado con anterioridad a la vigencia de la presente ley;

B) para las jubilaciones y pensiones concedidas conforme al régimen establecido en la presente ley, dicho porcentaje se abatirá en 1/20 (un veinteavo) por cada año transcurrido desde la vigencia de la presente Ley hasta la de la jubilación o pensión, considerándose, para ello, cada año o fracción como años civiles completos, incluido el de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 5º.- Créase una prestación de carácter pecuniario a favor de la Caja (inciso primero del artículo 1º del Código Tributario), a cargo de los afiliados escribanos activos, de:

A) $ 3 (tres pesos uruguayos) por cada hoja de papel notarial que adquieran, suma que se abonará conjuntamente con el precio de dicha hoja;

B) $ 20 (veinte pesos uruguayos) por cada solicitud de soporte notarial electrónico, suma que se abonará conjuntamente con el precio de dicha solicitud electrónica.

Los montos establecidos en el inciso anterior están expresados en valores correspondientes al mes de enero de 2018 y se ajustarán de acuerdo al Índice Medio de Salarios elaborado conforme al artículo 39 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

Artículo 6º.- Sustitúyese la redacción del artículo 24 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por la siguiente:

"ARTÍCULO 24.- El patrimonio de la Caja se integra con:

A) Los bienes, créditos, derechos y acciones que posee actualmente o adquiera en el futuro.

B) Las prestaciones legales de carácter pecuniario en favor de la Caja, a cargo de los afiliados activos y pasivos, y patronos.

C) Las rentas, intereses y beneficios de sus actividades, inversiones y reservas.

D) El producido de sanciones, multas, recargos e intereses que correspondan.

E) Los bienes, recursos y contribuciones que por cualquier título reciba".

Artículo 7º.- Las entradas brutas a que refiere el artículo 25 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001 no comprenderán los recursos establecidos por el artículo 5º de la presente ley.

Artículo 8º.- Agrégase como inciso final del artículo 28 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, en la redacción dada por el artículo 8º de la Ley Nº 18.239, de 27 de diciembre de 2007, el siguiente:

"La referencia al domicilio efectuada en el inciso anterior, comprenderá indistintamente el físico o el electrónico".

Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 30 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

"ARTÍCULO 30.- Las tasas de aportación personal jubilatoria (Montepío) sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, serán las siguientes:

A) en el caso de los afiliados escribanos activos, el 18,5 % (dieciocho y medio por ciento);

B) en el caso de los afiliados empleados activos, el 18 % (dieciocho por ciento)".

Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 31 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

"ARTÍCULO 31.- Cada cuatro años a partir del 1º de enero de 2020, la Caja determinará si en cada uno de esos cuatro años hubo déficit o superávit en el resultado operativo. En caso de que, al menos en tres de esos años, consecutivos o no, se hubiere registrado déficit superior al 4 % (cuatro por ciento) del monto de pasividades del año respectivo, o superávit de cualquier magnitud, se aumentarán o disminuirán en 0,5 (cero coma cinco) puntos porcentuales, respectivamente, las tasas a que refiere el artículo anterior, siempre que al cabo del cuatrienio en cuestión el resultado operativo acumulado en el mismo fuere de igual signo que el correspondiente a aquel período aludido de tres o más años.

El aumento o disminución a que refiere el inciso anterior regirá transcurrido un año a contar de la finalización del cuatrienio de que se trate.

Las tasas resultantes de la aplicación de lo previsto en el inciso primero de este artículo no podrán ser inferiores al 17,5 % (diecisiete y

medio por ciento) en el caso de los afiliados escribanos activos, o al 17 % (diecisiete por ciento) en el caso de los afiliados empleados activos, ni superar el 19,5 % (diecinueve y medio por ciento) en el caso de aquellos o el 19 % (diecinueve por ciento) en el caso de estos.

A los efectos de lo previsto en el presente artículo, entiéndese por resultado operativo de un año, la suma percibida en el mismo por concepto de los recursos previstos en los literales B) y D) del artículo 24, menos los egresos por prestaciones que sirve la Caja salvo las sufragadas con cargo al "Fondo Sistema Notarial de Salud", y los gastos de administración a que refiere el artículo 5, correspondientes a ese año".

Artículo 11.- Agrégase como inciso segundo del artículo 33 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"A tales efectos, no regirá ninguna exoneración de aportes patronales que eventualmente hubiere estado vigente".

Artículo 12.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 40 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

"El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás personas públicas, no abonarán a los escribanos retribución alguna sin la exhibición de un certificado expedido por la Caja que acredite hallarse en situación regular de pagos. Este certificado tendrá vigencia anual. No obstante, la Caja podrá suspender la vigencia del mismo toda vez que el escribano se atrasare en el cumplimiento de sus obligaciones".

Artículo 13.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 44 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

"El patrono está obligado a denunciar a la Caja la afiliación y cese de sus empleados en la forma y plazos que determine el Directorio".

Artículo 14.- Agrégase como inciso segundo del artículo 46 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"Los períodos de licencia sin goce de sueldo no constituyen actividad computable, por lo cual no se considerarán tiempo trabajado ni deberán efectuarse contribuciones patronales y personales por ellos. Los lapsos de suspensión sin goce de sueldo o con retención del mismo y los períodos en que se efectúe retención o deducción por aplicación de sanciones o por cualquier otro concepto, serán computados por su totalidad y corresponderá el pago de las contribuciones por los importes nominales que hubiera debido percibir el afiliado".

Artículo 15.- Para configurar causal de jubilación común, se exigirán los siguientes requisitos mínimos de edad y de servicios, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente:

1) sesenta años de edad y treinta y cinco años de servicios, o
2) sesenta y un años de edad y treinta y cuatro años de servicios, o
3) sesenta y dos años de edad y treinta y tres años de servicios, o
4) sesenta y tres años de edad y treinta y dos años de servicios, o
5) sesenta y cuatro años de edad y treinta y un años de servicios, o
6) sesenta y cinco años de edad y treinta años de servicios.

La causal se configurará aun cuando los mínimos de edad requeridos se alcancen con posterioridad a la fecha del cese en la actividad.

Artículo 16.- Para configurar la causal de jubilación común a los sesenta años de edad (numeral 1) del artículo anterior), se requerirán los siguientes años mínimos de servicios:

1) treinta y un años de servicios a partir del 1° de enero de 2020;
2) treinta y dos años de servicios a partir del 1° de enero de 2024;
3) treinta y tres años de servicios a partir del 1° de enero de 2028;
4) treinta y cuatro años de servicios a partir del 1° de enero de 2032.

A partir del 1° de enero de 2036 se requerirá un mínimo de treinta y cinco años de servicios.

De los años de servicios referidos en los numerales 1) a 4), por lo menos treinta deberán corresponder a actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social.

Artículo 17.- La asignación de jubilación será el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a

continuación, sin perjuicio del régimen de transición establecido en el artículo siguiente:

A) para la jubilación común:

1) el 50 % (cincuenta por ciento) cuando se reúnan sesenta y cinco años de edad y treinta y cinco años de servicios, procediéndose a las siguientes adiciones y deducciones respecto de dicha tasa de reemplazo, según la edad y años de servicios con que se contare;

2) en el caso de los servicios, para quienes contaren con sesenta y cinco o más años de edad, deberá determinarse cuántos años de servicios tenían a esa edad, y para quienes no contaren con sesenta y cinco años de edad, deberá determinarse cuántos años de servicios habrían tenido a esa edad de haber continuado en actividad, y procederse del siguiente modo:

a) por cada año de servicios que exceda de treinta y cinco, se adicionará un 1,2 % (uno coma dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio, con un tope del 6% (seis por ciento);

b) por cada año de servicios inferior a los treinta y cinco, se deducirá un 1 % (uno por ciento) del sueldo básico jubilatorio, con un tope del 5 % (cinco por ciento);

3) en el caso de la edad:

a) a partir de los sesenta y cinco años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro después de haberse configurado la causal y hasta los setenta y cinco años de edad, se adicionará un 3 % (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio; si no se hubiera configurado causal, por cada año de edad que supere los sesenta y cinco, se adicionará un 2 % (dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio hasta llegar a los setenta y cinco años de edad, o hasta la configuración de la causal, si esta fuera anterior;

b) los porcentajes referidos en el literal anterior serán del 2 % (dos por ciento) y del 1 % (uno por ciento) respectivamente, para los períodos en los que no se desarrollaren actividades amparadas por la Caja o acumuladas con las mismas conforme a las normas que así lo autorizan;

c) por cada año menos de los sesenta y cinco años de edad en que se produzca el retiro, se deducirá un 3,2 % (tres con dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio;

B) para la jubilación por incapacidad, el 52 % (cincuenta y dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio;

C) para la jubilación por edad avanzada, el 40 % (cuarenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1 % (uno por ciento) del mismo por cada año que exceda los quince años de servicios, con un máximo del 14 % (catorce por ciento).

En ningún caso, la asignación de jubilación común será inferior al 40 % (cuarenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

Artículo 18.- En los casos de jubilación común y de jubilación por edad avanzada, la tasa de reemplazo a aplicar se calculará de la siguiente manera, a los efectos de determinar la correspondiente asignación de jubilación:

A) se establecerán las respectivas tasas de reemplazo que le hubieren correspondido al afiliado conforme al régimen que se sustituye y al establecido por la presente ley, y se hallará la diferencia entre las mismas;

B) dicho resultado será dividido entre 20 (veinte) y el cociente obtenido será multiplicado por la cantidad de años transcurridos a partir de la vigencia de la presente ley, con un máximo de 20 (veinte), considerándose, para ello, cada año o fracción como años civiles completos, incluido el de entrada en vigencia de la presente ley;

C) el producto obtenido se restará de la tasa de reemplazo que le hubiere correspondido conforme al régimen que se sustituye, y la diferencia resultante será la tasa de reemplazo aplicable al caso;

D) en caso de que la diferencia a que refiere el literal A) fuere de signo negativo, se aplicará la tasa de reemplazo correspondiente al régimen establecido por la presente ley.

Artículo 19.- Agrégase como inciso segundo del literal A) del artículo 66 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"Para la aplicación del tope de la asignación pensionaria de las personas divorciadas previsto en la parte final del inciso anterior de este literal, se considerarán las pensiones de

sobrevivencia del causante que la persona beneficiaria obtuviere en otros organismos de seguridad social, de modo que, consideradas en conjunto, no excedan el referido tope. A tales efectos, de accederse a más de una pensión de sobrevivencia, se procederá al pago a prorrata en función del monto de cada asignación pensionaria previo a la aplicación del tope".

Artículo 20.- Agrégase como inciso segundo del artículo 70 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"Del mismo modo se procederá en caso de desaparecer los supuestos previstos en el artículo siguiente que hubieren dado lugar a la existencia de núcleo familiar".

Artículo 21.- Agrégase como inciso segundo del artículo 67 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"En los casos de sueldo básico de pensión, no podrá superar el 75 % (setenta y cinco por ciento) del primero de los previstos en el inciso anterior".

Artículo 22.- Créase en la Caja Notarial de Seguridad Social el "Fondo de Subsidio por Maternidad", cuyos recursos serán el producido de los ingresos previstos por el artículo 5º de la presente ley.

Artículo 23.- Las afiliadas comprendidas en los literales A), B), C), D) y E) del artículo 43 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, tendrán derecho a un subsidio por maternidad, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

A) que el embarazo se haya producido en períodos de actividad o de inactividad compensada por la Caja;

B) que al inicio del período de subsidio se haya mantenido en tales situaciones;

C) que, al momento indicado en el literal anterior, la beneficiaria se encuentre al día con sus aportes a la Caja, en el caso de las no dependientes.

Artículo 24.- Las beneficiarias deberán cesar en su actividad seis semanas antes de la fecha presunta del parto y no podrán reiniciarla sino hasta ocho semanas después del mismo. No obstante, las beneficiarias autorizadas por la Caja podrán variar los períodos de licencia anteriores, manteniendo el mínimo previsto en el inciso siguiente.

En ningún caso, el período de descanso será inferior a catorce semanas.

Serán de aplicación, asimismo, en lo pertinente, los artículos 3º a 5º de la Ley Nº 19.161, de 1º de noviembre de 2013, salvo lo previsto en el inciso tercero del artículo 5º de la mencionada ley.

Artículo 25.- El monto mensual del subsidio por maternidad será:

A) para las afiliadas comprendidas en el literal A) del artículo 43 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) del promedio mensual actualizado de las asignaciones computables del último año civil completo previo al inicio del período de cobertura;

B) para las afiliadas comprendidas en los literales B), C), D) y E) del artículo 43 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el equivalente al 100 % (cien por ciento) del promedio mensual o diario -según fuere remunerada por mes o por día u hora- de sus asignaciones computables percibidas en los últimos seis meses, más la cuota parte correspondiente al sueldo anual complementario, licencia y salario vacacional a que hubiere lugar por el período de amparo.

La actualización de las asignaciones computables se hará hasta el mes inmediato anterior al comienzo del mencionado período de cobertura, de acuerdo al índice de los precios al consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

En ningún caso el monto nominal del subsidio será inferior a 2 BPC (dos Bases de Prestaciones y Contribuciones) ni superior a 13,5 BPC (trece y media Bases de Prestaciones y Contribuciones), por mes, o la suma que proporcionalmente correspondiere para períodos menores.

El Directorio de la Caja podrá aumentar o disminuir el máximo indicado en el inciso anterior en hasta 2 BPC (dos Bases de Prestaciones y Contribuciones), atendiendo a las posibilidades económicas del Fondo previsto en el artículo 22 de la presente ley.

Artículo 26.- La solicitud del subsidio por maternidad deberá efectuarse no más allá de las seis semanas previas a la fecha presunta de parto. Si se presentare fuera del plazo antes mencionado, el beneficio se devengará desde la fecha de la solicitud o desde la de inicio del descanso, si esta fuere posterior a aquella.

Artículo 27.- Las beneficiarias del subsidio por maternidad no podrán desarrollar actividad

remunerada alguna durante los períodos de amparo a dicho beneficio.

La infracción a la presente disposición implicará la pérdida del derecho al cobro del subsidio a partir de ocurrida dicha inobservancia.

Artículo 28.- El subsidio por maternidad se servirá con cargo al Fondo previsto en el artículo 22 de la presente ley.

Cuando al 31 de diciembre de determinado año civil los recursos de dicho Fondo superaren el monto actualizado del total de subsidios por maternidad servidos en los dos años civiles anteriores, el excedente podrá destinarse al pago de otras prestaciones servidas por la Caja o a la realización de las inversiones previstas en el artículo 28 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, en las condiciones allí dispuestas.

La actualización a que refiere el inciso anterior se hará hasta, inclusive, el año civil en que se produzca el mencionado excedente, de acuerdo al índice de los precios al consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 29.- Los artículos 23 a 28 de la presente Ley inclusive entrarán en vigencia el 1º de julio de 2020 y serán de aplicación únicamente para los casos de alumbramientos producidos a partir de dicha fecha.

Artículo 30.- La Caja Notarial de Seguridad Social retendrá el aporte personal correspondiente a los subsidios por inactividad compensada que sirviere.

Artículo 31.- Inclúyense dentro de las deudas a que refiere el literal a) del numeral 1) del artículo 381 del Código General del Proceso, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 19.090, de 14 de junio de 2013, las correspondientes a las contribuciones previstas por el literal B) del artículo 24 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, con las modificaciones introducidas por el artículo 6º de la presente ley, sin perjuicio de lo previsto por el inciso segundo del artículo 84 de la referida Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001.

Artículo 32.- Los créditos y reclamaciones que los afiliados y pensionistas pudieren tener contra la Caja, de cualquier naturaleza u origen, caducarán de pleno derecho a los cuatro años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles, sin perjuicio de las caducidades específicamente establecidas en la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001 y en la presente ley.

Esta caducidad operará por períodos mensuales y su curso se suspenderá hasta la resolución definitiva, por toda gestión fundada del interesado en vía administrativa o jurisdiccional.

Artículo 33.- Podrán optar por quedar comprendidos en el régimen de causales y asignaciones que se modifica a través de los artículos 15 a 18 de la presente ley, o en el resultante de la aplicación de dichos artículos, los afiliados que, sin ser jubilados, hubiesen configurado causal de jubilación por el régimen legal indicado en primer término antes de la vigencia de esta ley.

Artículo 34.- Las modificaciones al régimen pensionario previstas por la presente Ley regirán para las pensiones cuya causal se configure con posterioridad a su vigencia.

Artículo 35.- La presente Ley entrará en vigencia el 1º de enero de 2020, salvo lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley.

Artículo 36.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a lo previsto por la presente ley".

5.- Licencias. Integración de la Cámara

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución:

Licencia por motivos personales:

De la señora representante Elisabeth Arrieta, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose al suplente siguiente, señor Ramón Inzaurralde.

No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes señor Jesús Bentancor, señor Diego Echeverría, señor Eduardo Costa, señor Nino Báez y señora Eva Aval.

Montevideo, 12 de setiembre de 2019

FITZGERALD CANTERO, SILVIA HERNÁNDEZ, PAULA PÉREZ LACUÉS".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y siete en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda convocado el correspondiente suplente, y se lo invita a pasar a sala.

6.- Urgencias

Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por la señora diputada Susana Pereyra.

(Se lee:)

"Mociono para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley: 'Pensiones graciables. (Se reglamenta su otorgamiento)'. (Carp. 3552/018). (Rep. 1086/018)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta y dos: AFIRMATIVA.

7.- Pensiones graciables. (Se reglamenta su otorgamiento)

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Pensiones graciables. (Se reglamenta su otorgamiento)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1086

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

Anexo I

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Washington Silvera.

SEÑOR SILVERA (Washington).- Señora presidenta: la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara se dirige al Cuerpo con el objetivo de someter a su consideración el presente proyecto de ley, que fue remitido a estudio de esta asesora el día 5 de diciembre de 2018.

Este proyecto pretende ajustar los mecanismos y criterios actuales de otorgamiento de las pensiones graciables previsto en las leyes N° 16.301, de 9 de setiembre de 1992, y N° 17.968, de 29 de mayo de 2006. Esta última creó la comisión permanente en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura para el tratamiento de dichas pensiones. Cabe aclarar que esa comisión no tiene carácter vinculante.

Consideramos importante modificar determinados aspectos de la normativa vigente, tendientes a generar un instrumento más justo e igualitario que beneficie a aquella persona que realmente necesita tal prestación, considerando para ello los méritos y las necesidades económicas del solicitante.

Entre las modificaciones que se propone se destacan, fundamentalmente, las siguientes. El literal C) del artículo 3° establece que se requieren sesenta años de edad al momento de la solicitud, a excepción de personas con discapacidad comprobada. El artículo 4° determina cuándo una persona se encuentra carente de recursos para subvenir a sus necesidades vitales. El artículo 6° establece en forma expresa las condiciones que debe acreditar fehacientemente quien pretenda se le otorgue una pensión graciable. Y el artículo 12 determina las causas por las cuales se extingue una pensión graciable.

Por tanto, se encomienda al plenario la aprobación del presente proyecto de ley, que consideramos esencial a los efectos de generar criterios más igualitarios y justos a la hora de conceder una pensión graciable.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señora presidenta: nosotros vamos a votar en contra de este proyecto de ley. Somos conscientes de la buena intención que lo anima; participamos en varios intercambios al respecto en el ámbito de la Comisión de Seguridad Social. Pero con toda franqueza debo decir que, más allá de que algunas de las disposiciones nos resultan atendibles -o, en principio, satisfactorias-, no nos simpatiza mucho la idea de establecer procedimientos rígidos respecto a una decisión que es, legítimamente, de carácter discrecional y que está establecida en la Constitución de la República, que habilita el otorgamiento de estos beneficios a determinadas personas.

Yo creo que la Ley N° 16.301, de 1992, que está vigente, establece los límites fundamentales para la justificación del otorgamiento de una pensión graciable. Me refiero a que el beneficiario deberá

haber prestado servicios relevantes a la República -palabra más, palabra menos- y encontrarse en situación de penuria o de carencia económica.

Debo decir que soy refractario a votar sistemas de otorgamiento de pensiones graciables que pasen por una comisión de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura -como aquí se consagra- por la sencilla razón de que esa comisión ya existe, y la valoración que nos ha merecido su funcionamiento es negativa. Quiero decir, con mucha honestidad, que ni siquiera conocemos a sus integrantes y, por lo tanto, no nos animan motivos personales.

Desde el punto de vista institucional, lo que ha ocurrido es que esa comisión ha terminado ejerciendo, en los hechos, la potestad discrecional de otorgar o no una pensión graciable, cuando dicha potestad es de los poderes públicos: el Poder Ejecutivo debe realizar la correspondiente solicitud y el Poder Legislativo decidir si se otorga.

Tenemos innúmeros ejemplos en los que tanto esta Cámara como el Senado hicieron llegar solicitudes al Poder Ejecutivo, minutas de comunicación aprobadas por unanimidad, que naufragaron luego de pasar por el tamiz y el análisis de esta comisión que funciona en el Ministerio de Educación y Cultura. Si bien se dice que los pronunciamientos de esta comisión no son vinculantes -en este proyecto de ley también se consagra esa condición-, la realidad es que, en los hechos, esto ha funcionado de manera diferente.

Yo creo -por supuesto, son decisiones opinables que siempre están sujetas al escrutinio de los medios de comunicación, de la opinión pública, y podrán compartirse o no- que el Poder Ejecutivo es el que debe valorar en cada caso concreto si corresponde o no otorgar un beneficio de estas características y luego el Parlamento hará lo mismo.

La verdadera comisión que, a mi juicio, debiera ponderar y analizar con tiempo suficiente los méritos y antecedentes de aquellas personas a las que se propone otorgar una pensión graciable es la Comisión de Seguridad Social; es la comisión especializada del Parlamento. Pero, en los hechos, no ha funcionado así.

Recordarán los señores legisladores que muchas veces hemos aprobado con premura pensiones graciables sin saber bien qué estábamos votando. Además, cuando las votamos en el pleno -todos recordaremos también eso-, no hay discusión siquiera, ni una presentación y una justificación de la Comisión de Seguridad Social o de un miembro informante, por la sencilla razón de que se colocan urnas en los costados de la Mesa para realizar una votación con voto secreto.

Reitero que el proyecto no me gusta por las razones que acabo de expresar, más allá de que algunos de sus contenidos puedan ser compartibles. Por esa razón no comprometo la opinión, el voto ni la tesitura de mis compañeros de bancada; simplemente, emito una opinión personal: no voy a acompañar el proyecto que la Cámara está analizando.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señora presidente: no votaré este proyecto, y digo, con toda franqueza, que no he tenido el tiempo suficiente para estudiarlo, ni siquiera para leerlo. El proyecto tiene quince artículos. Sabemos que hoy tenemos un nutrido orden del día; hemos estado estudiando otros temas, y este aparece, repentinamente -para nosotros-, en el trabajo de la Cámara. En estas condiciones no podemos votar con responsabilidad esta iniciativa.

Es por esa razón que votaremos negativamente.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en setenta y uno: AFIRMATIVA.

SEÑOR SILVERA (Washington).- Pido la palabra para una cuestión de procedimiento.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SILVERA (Washington).- Señora presidenta: propongo que se suprima la lectura del articulado y que se voten en bloque los quince artículos.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Se va a votar si se suprime la lectura del articulado y se votan en bloque los artículos 1º a 15, inclusive.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en setenta y dos: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se suprime la lectura del articulado y se van a votar en bloque los artículos 1º a 15, inclusive.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en setenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR SILVERA (Washington).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en setenta y dos: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"**Artículo 1º.-** Las pensiones graciables a que refieren el numeral 13) del artículo 85 y el articulo 111 de la Constitución de la República serán otorgadas por ley conforme a los requisitos que se determinan en los artículos siguientes.

Artículo 2º.- Las pensiones graciables son recompensas económicas que se otorgan a aquellas personas que han aportado servicios al país en forma significativa y perdurable en las distintas áreas de la actividad científica, artística, deportiva, cultural o social, en beneficio de la sociedad y carezcan de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.

Artículo 3º.- El beneficio de la pensión graciable será acordado únicamente a las personas que reúnan los siguientes requisitos:

A) Los ciudadanos naturales o legales de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país, que carezcan de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.

B) Haber aportado servicios al país en forma significativa y perdurable en las distintas áreas de la actividad científica, artística, deportiva, cultural o social, siempre que no hayan recibido una recompensa económica por parte del Estado por los mismos servicios.

C) Tener sesenta años de edad al momento de la solicitud, salvo que se trate de una persona con discapacidad.

D) Ser cónyuge supérstite o concubino reconocido judicialmente, con sesenta años de edad, o descendiente en primer grado sin límite de edad para el caso de ser una persona con discapacidad, de las personas que se encuentran comprendidas en los literales anteriores.

Artículo 4º.- A los efectos de la presente ley una persona se encuentra en situación de "carencia de recursos para subvenir a sus necesidades vitales" toda vez que sus ingresos personales de cualquier naturaleza no superen el monto de 4 BPC (cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones).

Excepcionalmente se podrá considerar, a los efectos de determinar que no se configura la hipótesis descripta en el inciso que antecede, los ingresos totales del hogar, las condiciones habitacionales y del entorno, composiciones del hogar, características de sus integrantes y situación sanitaria.

Artículo 5º.- Créase una Comisión Permanente en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura la que tendrá como cometido el análisis y tratamiento de las solicitudes de pensiones graciables, a nivel del Poder Ejecutivo.

Dicha Comisión se integrará con un representante del Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Secretaria Nacional del Deporte, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y un representante del Banco de Previsión Social.

La misma deberá integrarse dentro del plazo de noventa días a partir de la promulgación de la presente ley.

Sus miembros durarán en sus funciones cinco años o hasta la designación de sus nuevos integrantes.

La Comisión Permanente tendrá las más amplias facultades para el estudio, seguimiento y envío a consideración del Poder Ejecutivo de las solicitudes respectivas.

Los informes que dispongan favorablemente el envío al Poder Ejecutivo de las solicitudes de pensión graciable que se formulen, deberán ser adoptados por la Comisión por mayoría de sus integrantes.

La Comisión a través del Ministerio de Educación y Cultura reglamentará su forma de funcionamiento y procedimiento para el tratamiento de las solicitudes.

Artículo 6º.- Cuando se promueva por cualquier persona, física o jurídica, el otorgamiento de una pensión graciable, deberá acreditarse fehacientemente el cumplimiento de las condiciones requeridas en los artículos 2º, 3º y 4º de la presente ley, acompañando la siguiente documentación:

A) Enunciación de los méritos reunidos en las distintas áreas de la actividad científica, artística, deportiva, cultural o social, debiendo estar adecuadamente fundada y justificada haciendo posible su evaluación y probanza.

B) Para el caso de los deportistas además del requisito anterior, se deberá acreditar haber representado al país en los Campeonatos Mundiales, Campeonatos Sudamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Parapanamericanos, Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos y obtenido los siguientes logros: en deportes colectivos haber obtenido el título de Campeón, haber llegado al pódium en los Juegos Olímpicos y Medalla de Oro; en los demás casos: en deportes individuales haber llegado al pódium en los Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos y Medalla de Oro en Campeonatos Sudamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos.

C) Documentación de acuerdo a la normativa vigente que permita acreditar el vínculo de parentesco que corresponda de acuerdo al literal D) del artículo 3º de la presente ley.

D) Certificados que correspondan de acuerdo a las leyes vigentes a los efectos de acreditar la discapacidad.

E) Fotocopia fiel del documento de identidad y declaración jurada de ingresos personales, certificada por escribano o contador público.

Artículo 7º.- La documentación antes referida deberá ser presentada ante la Comisión para el tratamiento de las pensiones graciables y esta la derivará:

1) Al Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que realice las comprobaciones e inspecciones que estime necesarias a fin de verificar la situación del peticionante de acuerdo a lo preceptuado en el literal A) del artículo 3° y en el artículo 4° de la presente ley.

2) A los efectos de determinar los aportes en las áreas de la actividad científica, artística, deportiva o cultural, dependiendo del caso se derivará con el fin de escuchar una opinión técnica a la Academia Nacional de Ciencias, Academia Nacional de Letras, Academia Nacional de Medicina, Dirección Nacional de Cultura y Secretaría Nacional del Deporte.

3) A la institución pública que la Comisión entienda competente en la solicitud a estudio debidamente fundamentado.

Artículo 8º.- Una vez recabados los dictámenes referidos en el artículo que antecede, la Comisión para el tratamiento de las pensiones graciables se expedirá por medio de un informe definitivo. Esta deberá tener especial consideración a la hora de expedirse la conducta del solicitante, pues sin incurrir en ningún tipo de discriminación, no se deberá conceder una pensión graciable a quienes hayan incurrido en hechos delictivos o propiciado públicamente el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Artículo 9º.- El informe definitivo de la Comisión para el tratamiento de las pensiones graciables no tendrá el carácter vinculante y será elevado junto con toda la documentación reunida a consideración del Poder Ejecutivo, quien decidirá en definitiva si se promueve o no el otorgamiento de la pensión graciable solicitada.

Artículo 10.- El monto de las pensiones graciables no será inferior a 4 BPC (cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones) y en ningún caso serán superiores al equivalente a 6 BPC (seis Bases de Prestaciones y Contribuciones).

En el caso de que coexista más de un beneficiario para una misma pensión graciable se deberá fijar un monto cuya distribución en cuotas iguales no sea inferior a 3 BPC (tres Bases de Prestaciones y Contribuciones).

Artículo 11.- Las pensiones graciables son compatibles con toda otra asignación que se perciba por concepto de actividad o pasividad siempre y cuando las mismas no superen los límites establecidos en el artículo 4° de la presente ley.

Artículo 12.- El beneficio de la pensión graciable se extinguirá de pleno derecho por las siguientes causas:

A) Muerte del beneficiario.

B) Por haber desaparecido alguno de los requisitos establecidos en los artículos 3º y 4º que motivó el otorgamiento del beneficio, comprobarse dolo en la documentación agregada o haber incurrido en alguna de las

conductas a que se hace referencia en el artículo 8º de la presente ley.

Artículo 13.- La erogación resultante del servicio de las pensiones graciables será de cargo de Rentas Generales.

Artículo 14.- Las disposiciones de la presente ley no afectarán a las pensiones graciables ya acordadas por el Parlamento Nacional a la fecha de su promulgación.

Artículo 15.- Deróganse las siguientes leyes: Ley Nº 16.007, de 29 de noviembre de 1988, Ley Nº 16.301, de 9 de setiembre de 1992, Ley Nº 17.968, de 29 de mayo de 2006 en la redacción dada por los artículos 133 y 134 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006".

8.- Derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y nutricional de la población. (Establecimiento de un marco jurídico)

——Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y nutricional de la población. (Establecimiento de un marco jurídico)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 165

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

Anexo I

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Jorge Meroni.

SEÑOR MERONI (Jorge).- Señora presidenta: con la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el derecho a la alimentación fue reconocido formalmente como un derecho humano.

A partir de entonces, se ha ido incorporando a una serie de instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -ratificado por Uruguay-, instrumento internacional que aborda este derecho humano fundamental del modo más exhaustivo. El artículo 2º obliga a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias, en particular, de carácter legislativo, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos enumerados en el Pacto.

El derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegido contra el hambre fueron reafirmados en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996. En dicha instancia, los jefes de Estado aprobaron una declaración reafirmando el derecho de toda persona a acceder a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Se comprometen a consagrar su voluntad política y su dedicación común y nacional para conseguir la seguridad alimentaria para todos, y a realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre.

Es deber del Estado y de la sociedad en su conjunto -de sus instituciones, organizaciones y de los gobiernos locales- garantizar la seguridad alimentaria de la población y crear los instrumentos y mecanismos necesarios para asegurarla, respetando los principios de diversidad cultural y productiva de las comunidades.

En el 2004, el Consejo de la FAO aprobó por consenso las directrices sobre el derecho a la alimentación, recomendando la aplicación de medidas constitucionales y legislativas, así como marcos institucionales coordinados, para abordar las dimensiones multisectoriales del derecho a la alimentación.

Los objetivos del milenio constituyen a la vez que una hoja de ruta, un instrumento para medir nuestra capacidad de generar y fortalecer institucionalidad efectiva en el combate a la pobreza y la defensa de la soberanía alimentaria y nutricional de nuestros pueblos.

En el marco de una estrategia de desarrollo nacional, se considera fundamental prevenir el hambre, combatir la pobreza, reforzar el rol de la agricultura y el desarrollo rural sostenible, así como promover el desarrollo económico con equidad y crear oportunidades y capacidades de las personas para mejorar su calidad de vida.

No solo se están considerando las situaciones de pobreza, sino los cambios en los hábitos alimenticios de importantes sectores de la población, que están

padeciendo enfermedades crónicas asociadas con el cambio nutricional.

Cabe resaltar que Uruguay alcanzó el mínimo histórico de pobreza en el año 2017; es el 7,9 % de la población el que no logra cubrir sus necesidades básicas, y el 0,1 % se sitúa por debajo del nivel de indigencia, resultado de las medidas implementadas por los tres gobiernos de nuestra fuerza política. De acuerdo con el informe *Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe de 2018*, de FAO, Unicef y OMC, en nuestro país evolucionaron favorablemente las prevalencias en el período comprendido entre 2000-2002 y 2015-2017 en lo que respecta a la subalimentación, pasando de 4,1 a menos de 2,5.

Más allá de los avances, es necesario que el Estado reconozca a todas las personas como titulares del derecho a la alimentación adecuada, y que estas se consideren a sí mismas como poseedoras de ese derecho y sean capaces de actuar en consecuencia.

La credibilidad del Estado es la base de todo contrato social y, por tanto, de todo dispositivo de política. De ahí la importancia del rol que cumplan las instituciones.

Con este proyecto de ley pretendemos reforzar el legado institucional, sumar el país a los esfuerzos de la región y dar un marco jurídico general para dar coherencia a las políticas públicas multisectoriales que atienden el derecho a una alimentación adecuada y a la soberanía alimentaria.

Por lo expuesto, solicitamos al Cuerpo la correspondiente aprobación de este proyecto de ley.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado Nelson Larzábal.

SEÑOR LARZÁBAL (Nelson).- Señora presidenta: quiero felicitar a las señoras legisladoras y a los señores legisladores miembros de la Comisión Especial de Población y Desarrollo por el trabajo realizado y por llegar a tiempo para que este proyecto de ley sea votado en esta legislatura, al menos en la Cámara de Representantes.

Se trata de una norma que, a partir de un texto original propuesto por el Parlatino, ha demandado mucha dedicación de varios señores legisladores; expresamos nuestro recuerdo especial a la ex diputada señora Berta Sanseverino, quien trabajó mucho en esto. El texto se fue adecuando a la realidad de nuestro país, a nuestra cultura y a nuestra normativa en la materia, e incorporando sugerencias de organizaciones sociales, de colectivos y, en especial, del muy buen trabajo realizado por el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe, de la Udelar.

Lo importante de esta iniciativa es que da un marco jurídico de referencia, que permitirá al Estado encuadrar sus políticas y estrategias para garantizar de manera permanente y prioritaria el derecho humano a la alimentación.

Como miembro de la Comisión Especial Derecho a la Alimentación con fines de asesoramiento, de la Asamblea General, que ha participado de diferentes ámbitos de discusión a nivel de América Latina y el Caribe -además, forma parte del Frente Parlamentario contra el Hambre, que se reunió recientemente en Colombia, para planificar las actividades de 2019 y 2020-, vemos con gran preocupación el aumento de las personas que padecen hambre y desnutrición crónica en el mundo y en nuestra América Latina.

Para erradicar el hambre en el mundo de ahora a 2030, según el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de las Naciones Unidas (ODS 2), es necesario disponer de leyes adecuadas que cuenten con presupuesto y fiscalización y que den lugar a marcos jurídicos duraderos y legítimos. Esa es la recomendación de la FAO en sus contribuciones para orientar a los parlamentarios en su trabajo de garantizar que el ODS 2 se haga realidad.

La formalidad normativa da mayor respaldo a las políticas y facilita la continuidad y transparencia en los procesos para que el acceso a estos derechos se convierta en políticas de Estado.

En el contexto de América Latina y el Caribe, donde el hambre y la desnutrición han aumentado en los últimos cuatro años, Uruguay es ejemplo de disminución de la pobreza, la indigencia y la desigualdad. Sabemos que la causa del hambre y la desnutrición no es la falta de alimento en un país, sino que estos no lleguen en la cantidad y calidad adecuadas a toda la población y, en especial, a los sectores vulnerables. La causa del hambre, entonces, es la desigualdad y la injusticia económica, social, medioambiental y cultural que padecen algunos sectores de la población.

Las políticas económicas neoliberales -con el mercado como regulador de la distribución de bienes y servicios- llevadas adelante por los gobiernos de la mayoría de los países con mayor nivel de hambre y desnutrición crónica de América Latina y el Caribe son la causa de la agudización de esta situación. Sabemos que el mercado no solucionará el problema del acceso a la alimentación adecuada. Los Estados deben ocuparse y tener políticas acordes para superar las desigualdades que causan el hambre en cada país y que pueden aparentar ser distintas y tener características diferentes. No alcanza con leyes bonitas; hay que votar y destinar presupuestos adecuados y fiscalizar que se cumplan. Esto, sin duda, será un debe para el próximo gobierno. En este punto es donde el rol de las políticas públicas se hace fundamental, para que realmente los alimentos necesarios estén disponibles, para que puedan ser consumidos por esa población, para que su derecho a la alimentación pueda ser ejercido.

La iniciativa que votaremos en la presente sesión pone a Uruguay en la línea de los países cuya población tendrá garantizado el acceso a la alimentación como derecho humano que es.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señora presidenta: nosotros integramos la Comisión Especial de Población y Desarrollo, y por eso aparece nuestra firma al pie de este proyecto de ley. Allí se expresa que lo acompañamos con salvedades; así dice textualmente el repartido que tenemos sobre nuestras mesas de trabajo.

Quiero ser muy sincero en cuanto a mi visión acerca de esto. Me tocó votar el último tramo del proyecto de ley, cuando ya estaba votado en general, así como la mayor parte de sus artículos. En las oportunidades iniciales intervino el señor diputado Jorge Guekdjian -quien me sustituyó en esta banca- que votó a favor, de la misma forma en que lo hicieron todos los miembros de la Comisión Especial de Población y Desarrollo y todos los partidos políticos que la integramos.

Deseo que se interpreten correctamente mis palabras porque yo no estoy cuestionando ni criticando a nadie: ni al señor miembro informante ni a los demás miembros de la Comisión. Lo que tenga de crítica o de reproche debe entenderse en términos de autocrítica porque yo soy tan responsable de la aprobación de este proyecto como los demás. Sin embargo, francamente, debo decir que el resultado legislativo de la propuesta que elevamos a la Cámara de Representantes es bastante insatisfactorio.

Yo me sumo a los reconocimientos en cuanto al trabajo que algunos colegas -sobre todo en el ámbito internacional- han realizado con relación a este tema del derecho a la alimentación. Por supuesto que adhiero al elogio muy merecido a la siempre recordada ex diputada señora Berta Sanseverino y también destaco la trayectoria en esta materia en el ámbito del Parlatino del actual señor senador José Carlos Cardoso quien, en sus tiempos de diputado y después como senador, actuó intensamente en el plano internacional con relación a estos asuntos.

Me parece bueno decir esto, no solo para reconocer los méritos de estos compañeros, sino para estribar en eso a los efectos de incorporar un argumento que hay que tener en cuenta a la hora de analizar esta iniciativa. Este proyecto nace como una suerte de intención de internalizar normas internacionales -o las llamadas leyes marco que se aprueban en el ámbito del Parlatino-, con el propósito de darles forma y valor de ley interna. Creo que en ese punto empiezan algunas dificultades desde la óptica de la técnica legislativa y de los contenidos legislativos que esta norma incorpora.

Por supuesto que todos estamos de acuerdo en declarar el más amplio e irrestricto derecho a la alimentación para todos los habitantes de la República pero, al hacerlo, debemos decir algunas cosas más. Sin embargo, lo que aquí se dice me parece que es en exceso declamatorio y declarativo. No lo voy a citar todo porque los señores legisladores lo habrán analizado al igual que nosotros, pero figuran afirmaciones como, por ejemplo, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, algo que se desprende de los artículos 7º y 8º, la parte dogmática de nuestra Constitución. Se afirma que el Estado establecerá políticas dirigidas a la erradicación de la malnutrición y a la reducción de enfermedades producidas por carencia o exceso de alimentación. Todo esto está directamente vinculado al derecho a la vida, que es el primer derecho protegido por el artículo 7º. Y todo esto surge,

también -lo decíamos anoche en el debate con relación a la ley de equidad de género, que desencadenó una discusión en sala-, del artículo 72 de nuestra Constitución, que establece muy claramente la incorporación del bloque del derecho internacional de los derechos humanos y que, además, de él se desprenden todos los derechos y las garantías que devienen de la forma republicana de gobierno y de la naturaleza humana.

De manera tal que si se me preguntase qué medidas concretas o qué aspectos resolutivos, prácticos y específicos contiene el proyecto de ley, a pesar de que lo componen veintinueve artículos, me resultaría muy difícil responder cuál es un artículo destacado. Creo que hay algunas dificultades técnicas que van a llevar a la conclusión de que esto es prácticamente inaplicable. Por ejemplo, se establece que el Estado estipulará la creación de una autoridad nacional para el derecho a la alimentación, ¿Quién la va a establecer? ¿Quién la va a estipular, si no lo hace la ley? ¿Será el Poder Ejecutivo? Cuando hablamos de autoridad nacional, ¿a cuál nos referimos? ¿Quién tiene competencia directa? Se dirá que los organismos que por su propia competencia ya preestablecida se vinculan con la salud de la población, alimentación, bienestar, como los ministerios de Desarrollo Social o de Salud Pública. Pero no necesitamos aprobar una ley para que eso se establezca y que todos lo asumamos.

De la misma forma, creo que no se puede establecer en un proyecto de ley que se penalizarán determinadas conductas si correspondiere. Precisamente, eso es lo que la legislación debe definir: si corresponde tipificar un nuevo delito o aumentar las penas de uno preexistente ya consagrado por el Código Penal. Pero no se puede establecer una especie de norma programática en materia penal. Me parece que no está bien.

Se me dirá que esto debí decirlo en la Comisión. Lo dije al final, porque me incorporé al tratamiento de este proyecto de ley en la última etapa de su consideración.

Se establece que el Estado revisará el marco administrativo y legislativo, pero este último se supone que es el que le estamos dando ahora. El artículo 1º establece que estamos aprobando un marco legislativo. El artículo 15 dispone que tendremos que revisarlo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aprobar una norma que dentro de poco tiempo tendremos que modificar. Estamos anunciando desde ya que la iniciativa que aprobaremos en el día de hoy está sujeta a futuras modificaciones y ajustes.

El artículo 12 refiere a las autoridades competentes. Antes se habló de autoridades nacionales. Repito: hay un nivel de indeterminación muy grande, porque las autoridades competentes pueden ser muchas o en el ámbito de su competencia pueden ser todas. Estamos hablando de un aspecto esencial para la vida, porque la alimentación tiene vinculación directa con la salud, la sobrevivencia y la protección de la vida humana.

Se establece que "Las autoridades competentes […] presentarán ante el Poder Legislativo una propuesta de legislación […]", precisamente en el mismo momento en el que estamos legislando.

Creo que deberíamos habernos tomado más tiempo e intentado alcanzar un resultado legislativo más apropiado que este.

Una cosa es el lenguaje internacional y otra las disposiciones que se incluyen en una ley marco del Parlatino. Esas disposiciones implican recomendaciones para los Estados, que no son vinculantes. Por definición, son normas programáticas y después los Estados toman de ellas lo que entienden conveniente; las tienen que internalizar, adaptar al derecho interno. El ejemplo típico es el artículo 28, que establece: "El Estado a través de los órganos con potestad normativa adecuará, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas relativas al derecho a la alimentación previsto en los tratados internacionales ratificados por el país". Esa es una disposición del Parlamento Latinoamericano y está bien en el marco de una decisión de este y de un instrumento jurídico de los que el Parlatino aprueba. A la hora de legislar, de que el Poder Legislativo apruebe una ley interna, no corresponde establecer una disposición de esas características.

Con posterioridad a la aprobación en la Comisión, llegué a constatar que uno de los numerales del artículo 11 en algún sentido se puede interpretar como una limitación de derechos vigentes.

El numeral IV habla de la lactancia y establece: "El Estado promoverá y protegerá la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continuada hasta los veinticuatro meses de

edad". O sea, pone un límite. Hoy en la ley interna no tenemos límite. La ley vigente en esta materia -pude indagar y llegué a esa conclusión; aquí tengo la Ley N° 19.530, aprobada recientemente, que regula las salas de lactancia materna- establece que el período de la lactancia es indeterminado; alcanza con que un médico certifique que la madre está dando de lactar para que la trabajadora tenga derecho a dos medias horas o a una hora todos los días sin límite temporal de clase alguna. Acá nos están re-comendando -estaríamos disponiéndolo en una norma que tendría otros efectos jurídicos porque sería una ley nacional-, en principio, un plazo de veinticuatro meses. Esto podría interpretarse como regresivo. Por supuesto que es absolutamente innecesario antes que regresivo.

Haciendo el *mea culpa* que corresponda y con la dosis de autocrítica necesaria, debo decir que doy las opiniones que el tema me merece, pero como integro un partido político voy a actuar de acuerdo con el comportamiento que adoptó, al igual que todos los partidos, salvo la Unidad Popular, que es el único que no integra la Comisión Especial de Población y Desarrollo. Voy a votar a favor, pero sin muchas ganas y con las objeciones que en términos generales formulé. Hay otros aspectos que podría mencionar de lo que se dispone en este proyecto, pero no quiero mortificar ni aburrir a la Cámara. Simplemente, dejo como ejemplo los aspectos que mencioné.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado Andrés Carrasco.

SEÑOR CARRASCO (Andrés).- Señora presidenta: este es un proyecto de ley en el que se viene trabajando desde hace tiempo en la Comisión y que ingresó a través de una propuesta del Parlatino y de las recomendaciones de la FAO.

En definitiva, recoge determinadas consagraciones de derechos que evidentemente vamos a apoyar.

Es un proyecto que no aborda el tema en profundidad, no soluciona ni cambia la realidad que tenemos hoy. Es necesario tener una alimentación adecuada, suficiente y saludable, por lo que ello significa para la salud de la población, debido a su influencia en las enfermedades posteriores que pueda provocar. Asimismo, la detección temprana de esas enfermedades determina qué tipo de alimentación hay que ingerir.

También se establece qué significa una alimentación suficiente y adecuada para algunos casos. Inclusive, se distingue en función de rangos etarios: lactancia, infancia, adolescencia, madurez, tercera edad, porque en todas difiere la calidad y la cantidad de la alimentación.

Además, se consideran aquellos grupos que tienen mayor vulnerabilidad. También la alimentación debe ser específica en función de algunas enfer-medades, como la celiaquía, la hipertensión o la diabetes.

Es bueno que hoy se esté tratando este tema y se tenga presente que se necesita legislar. ¡Vaya si en el futuro se tendrán que buscar herramientas complementarias para que la ley marco que consagra derechos deje de ser una aspiración y pase a ser una realidad!

Compartimos las palabras vertidas por el diputado Abdala casi en su totalidad. Se ha trabajado mucho en este proyecto, pero no deja de ser meramente declarativo, una aspiración de deseo más que una realidad.

Por lo tanto, creemos necesario que se generen instrumentos complementarios, estrategias para que la aspiración de consagrar los derechos que se establecen en esta iniciativa, a fin de superar el hambre y la malnutrición de los sectores vulnerables y garantizar la alimentación adecuada y saludable se haga realidad.

Ese es el desafío que vamos a tener por delante con un proyecto que contempla una realidad que ya estaba garantizada por la Constitución e implica compromisos que el Estado debe asumir con mayor rigurosidad.

Apoyamos este proyecto de ley y aspiramos a que esas herramientas sean rápidamente puestas en la órbita política para que esto no quede en una expresión de deseo, sino en una realidad futura.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado Gandini.

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señora presidenta: las palabras de mi compañero de bancada, señor

diputado Pablo Abdala, me eximen de mayores comentarios porque comparto totalmente lo dicho.

Solo quiero agregar brevemente que tenemos a consideración un proyecto de ley que, al decir de don Juan Pivel Devoto, consagra el progreso manuscrito y nada más. A veces estamos orgullosos de la legislación que tenemos, pero vemos que no tiene consecuencias en la realidad. Este es un proyecto absolutamente declarativo, de buena voluntad, con el que todos podemos estar de acuerdo porque queremos que la gente nazca igual, sea sana, libre, se desarrolle, crezca, se reproduzca, se alimente y muera bien. Todos los partidos políticos de todas las ideologías, queremos estas cosas pero el proyecto, en lugar de consagrar la voluntad del Parlamento y del Estado, consagra el voluntarismo, que se diferencia de la voluntad porque desea cosas que no se pueden aplicar.

Este proyecto de ley consagra principios, es bien declarativo, dice que se creará un organismo, que habrá otro, que se creará otro de vigilancia, como delegando en alguien lo que tenemos que hacer nosotros. Todo eso lo hace la ley y este proyecto no lo hace. Por lo tanto, tira para adelante algo que alguien tendrá que hacer y nos vamos todos satisfechos porque nos preocupamos por la alimentación de la gente, que mañana va a seguir pasando hambre como hoy.

(Ocupa la Presidencia la señora representante Cecilia Eguiluz)

——Escuché en sala, y por eso me anoté para hacer uso de la palabra, que este es un problema que generan los gobiernos neoliberales, un problema del capitalismo, de este sistema. Estoy tentado de pedir que las palabras vertidas en sala en este debate pasen a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela -que no es un gobierno neoliberal, sino más bien del socialismo del siglo XXI- para que pueda ver lo que pensamos nosotros -o piensan algunos que ocupan estas bancas- acerca de quién es responsable. Millones de venezolanos han tenido que emigrar porque padecen hambre, y quienes les dan de comer son los países neoliberales -según se los califica en el Cuerpo-, del capitalismo. En Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en países de distinto signo político e ideológico, se los recibe y de una u otra manera se les garantiza por lo menos la alimentación que no tuvieron en su país y a algunos el trabajo para que con las remesas que mandan a su país de origen su familia pueda comer.

Me parece que no hay que ideologizar este tema porque el capitalismo no garantiza la alimentación, pero tampoco es el culpable de lo contrario. Es el sistema en que vivimos y nadie ha demostrado que haya uno mejor; por lo menos, todos los demás han fracasado. Es bueno que hagamos autocrítica y tratemos de mejorar. Hay mucho por hacer.

El proyecto no tiene aspectos negativos que hagan que se vote en contra, pero mañana va a ser igual que hoy. Con el proyecto aprobado podremos sentirnos más satisfechos con nuestras conciencias pero, de verdad, quien hoy no tiene alimento no lo tendrá.

Lo único que deseo es que todas las políticas públicas que se llevan adelante con esfuerzo en esta materia lleguen a quienes lo necesitan, porque en estos casos, y en otros, entre la burocracia, los consultores, los técnicos y los intermediarios se queda buena parte de los esfuerzos de la sociedad que se quieren canalizar. Muchas veces no es culpa del sistema, sino responsabilidad de la base de la cultura y la educación. Recuerdo las palabras de una asistente social sobre la muerte de un bebé por inanición, por mala alimentación. La asistente social decía que ese bebé estaba en los programas de atención de la institución a la que representaba, que para su madre había una canasta de alimentos y para él una especial, y que esas canastas llegaban. Nosotros podemos hacer todo eso, pero lo único que no podemos hacer es dar la mamadera a ese niño. No es el Estado ni las políticas públicas. Las razones por las cuales a veces se padecen problemas esenciales en materia de vivienda, salud, educación, empleo y alimentación tienen que ver con factores bastante más estructurales y profundos que no se arreglan con la voluntad de asegurar a la gente esos derechos.

El artículo 45 de la Constitución consagra el derecho a gozar de una vivienda decorosa, y hay decenas de miles de uruguayos que no las tienen. Me constan los esfuerzos que se han hecho. Conozco algunos barrios que han realojado asentamientos realmente más parecidos a un campo de concentración que a un núcleo de viviendas, pero sé que la mayoría de esas viviendas fueron comercializadas rápidamente por algunos miles de pesos y que esas

personas volvieron a vivir donde vivían. Se trata de un problema cultural bastante más profundo, como el de la alimentación. Hay que trabajar a largo plazo en políticas públicas, pero no hay que crear más órganos, burocracia y aparatos que se traguen parte del esfuerzo económico. Es necesario el trabajo político, legislativo, gubernamental y, sobre todo, social para sacar de la marginalidad cultural a muchos sectores de la población que viven en ella y que parecen ampliarse.

Este proyecto está vinculado a un nuevo fenómeno que estamos viviendo: la inmigración. No vamos a cerrar las puertas a ningún extranjero que llegue a nuestro país, pero atrás de ellos vienen necesidades de trabajo, de alimentación, de cobertura de salud, educativa y de vivienda, en competencia -como pasa en otros países, todavía no tan gravemente en Uruguay- con los uruguayos. Estas son cosas que me parece están en la base del debate que no tenemos.

Esta iniciativa nos acerca a uno de los problemas y consagra principios, pero seamos conscientes: lo votamos sin resolver nada al respecto.

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Sí, señor diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Eguiluz).- Puede interrumpir el señor diputado.

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).- Señora presidenta: me parece interesante que si hablamos de las carencias alimentarias que sufre la sociedad venezolana, hagamos mención al bloqueo absolutamente injustificable que está sufriendo Venezuela por Estados Unidos, que agrava la situación alimentaria. Aprovecho la oportunidad para mencionar que estamos ante una situación muy grave, dado que una delegación sin ninguna representatividad pidió a la OEA la activación del TIAR, que siembra una duda muy grande sobre nuestro continente ante la eventualidad de un conflicto bélico, lo que el gobierno uruguayo rechaza totalmente porque está buscando, como siempre, los caminos de la paz y del diálogo para que se pueda solucionar la conflictiva interna que tiene Venezuela.

Muchas gracias, señor diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Eguiluz).- Puede continuar el señor diputado Gandini.

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señora presidenta: nuestro partido ha rechazado, reiteradas veces, el bloqueo económico a Cuba y también el que se realiza a Venezuela.

Del mismo modo, rechazamos la protección de terroristas, delincuentes y narcotraficantes en algunos territorios para que operen en otros, así como el tráfico de drogas, que ¡vaya uno a saber por qué puerto cercano salen!

Asimismo, rechazamos el despliegue de tropas, de modo amenazante y beligerante, en las fronteras, lo que determina tiempos oscuros, lamentable y posiblemente cercanos.

Hay sobrados casos -que podemos recordar- que indican que algunas dictaduras, en tiempos difíciles, buscan un enemigo para unir su territorio y triunfar en algún lado, mientras pierden con sus conciudadanos; recuerdo lo que sucedió durante la dictadura argentina con las Islas Malvinas.

Sin duda, es muy preocupante lo que está pasando en Venezuela. ¡Ojalá encuentre el camino para salir adelante!

Sin embargo, creo que es absolutamente notorio el fracaso de las políticas de un país que vive de la reserva de petróleo más grande del mundo. Ese país no fue capaz de crear una soberanía alimentaria con todos los recursos y la fenomenal cantidad de dinero que tuvo cuando el petróleo costaba US$ 130, el barril; no pudo.

Además, en determinado momento, enviamos quinientas vacas Holando para que crearan su rodeo, pero se las comieron; no pudieron crear un rodeo lechero para tener su propia leche. Tampoco pudieron plantar su propio arroz ni generar respuestas, a pesar de la fenomenal recaudación que tuvieron en algunos años. Por eso, hablo del fracaso del modelo, que no es ejemplo para ningún país -por suerte- desde el punto de vista económico. Nadie usa a Venezuela como paradigma del desarrollo, y ese es el fracaso al que me refería.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Eguiluz).- Saludamos a los alumnos de la Escuela Nº 116 "República

Argentina", del departamento de Florida, quienes se encuentran en la barra.

Tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señora presidenta: con todo respeto por los señores legisladores que han trabajado en este proyecto de ley, debo decir que, a mi juicio, requiere más trabajo aún, por lo que al cabo de mis palabras, propondré que vuelva a la Comisión para que siga siendo analizado y estudiado.

Creo que fue muy claro el señor diputado Abdala cuando hizo referencia a una serie de párrafos y artículos que solo constituyen un elenco de definición de objetivos -que todos compartimos-, y de buenas intenciones -como dijo el diputado Gandini-, que provienen, seguramente, de textos que en forma frecuente se elaboran en el ámbito internacional, en donde abundan la proclamación de objetivos e intenciones, y se deja librado a cada Estado su concreción en normas inmediatamente aplicables.

En este proyecto se repite ese estilo y esa verborragia internacional, ya que algunos artículos, claramente, son textos en elaboración o borradores; sin duda, les falta el acabado final que pueda dar a este proyecto una aplicabilidad inmediata. Creo que esa etapa final del trabajo legislativo está faltando.

Por otra parte, hay una serie de expresiones que son notoriamente imprecisas, porque más allá de que este proyecto contenga los términos "objeto" en el artículo 1º, "objetivo" en el artículo 2º y "finalidad" en el artículo 3º, en definitiva, no sabemos para qué sirve. ¿Alguien cree que después de sancionado el proyecto, cuando tenga fuerza de ley, alguna persona va a ir a un juzgado a reclamar que se haga efectivo el derecho a la alimentación y lo mantengan?

Entonces, ¿cuál es el objetivo concreto de esta iniciativa? ¿Poner en práctica un programa estatal de alimentación? No; eso no lo puede hacer esta ley, porque como bien se dice en alguno de los artículos, el asunto deberá ser materia de una ley de presupuesto.

O sea que seguimos en el plano de las declaraciones, que no solo se expresan de manera general, sino de forma imprecisa, lo que hace indispensable, a mi juicio, que se lleve a cabo un trabajo ulterior.

Por ejemplo, el literal a) del artículo 5º, que refiere a los principios rectores, dice: "Participación: El Estado garantizará ámbitos de participación de las personas, a los efectos de que puedan ejercer el derecho a determinar su propio bienestar y a intervenir con voz en la planificación, formulación, implementación, vigilancia y evaluación de las decisiones que les afectan". Habla del derecho a determinar el propio bienestar. ¿Qué quiere decir eso?

Además, ese artículo hace referencia al derecho a intervenir con voz en la planificación, formulación, implementación y vigilancia de todo eso que tiene que ver con el propio bienestar. En Uruguay, la gente interviene con voz y voto; y dentro de poco vamos a intervenir todo y trataremos de buscar las mejores fórmulas para el bienestar colectivo. Pero esto así, señores, no tiene sentido; directamente, no tiene sentido.

También hay otras disposiciones que generan, por lo menos, la misma perplejidad. Por ejemplo, el artículo 13 dice: "Constituye un acto ilícito de la autoridad pública privar a cualquier persona de alimentos o los medios para adquirirlos". Si una autoridad pública priva a alguna persona de los alimentos, estará cometiendo una villanía, un acto incalificable, que debe ser delito. ¿Alguien conoce alguna situación de este tipo? ¿Alguien conoce a alguna autoridad pública que prive a la gente de alimentos? Yo no conozco nada al respecto. No sé qué realidad tiene en mente este texto ni qué sentido tiene decir que esto es derecho en Uruguay.

Por otra parte, hay otro texto -como comenté hace un momento- que indica claramente que se estaba redactando un borrador, como cualquiera de nosotros ha hecho tantas veces. En ocasiones, estamos redactando un texto y, de repente, escribimos una expresión sinónima detrás de otra porque no sabemos cuál puede quedar mejor, lo que queda pendiente de una ulterior revisión. Por ejemplo, en el artículo 24 se expresa: "El Estado establecerá o estipulará la creación de una autoridad nacional para el derecho a la alimentación que cumpla la función de órgano central de coordinación". ¿Establecerá o estipulará? Hay que decidirse, porque es una cosa o la otra. En realidad, hicieron un borrador; creo que la persona que estaba redactando este artículo pensó: "Escribo el Estado establecerá, o estipulará, y después

veo lo que pongo", y quedó allí. Pero no está bien así, señora presidenta.

Lo mismo sucede con el artículo 27, en el que se hace referencia a la composición de la autoridad nacional para el derecho a la alimentación. Por suerte, podemos alimentarnos antes de que se constituya la autoridad, de lo contrario, estaríamos en un problema. Adviértase que el artículo 27 establece: "(Composición).- La coordinación y toma de decisiones debe reflejar el carácter multisectorial del derecho a la alimentación: Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Salud Pública, de Educación y Cultura, de Desarrollo Social, de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas, de Vivienda y Medio Ambiente, de Industria, Energía y Minería y el Congreso Nacional de Intendentes". Sin embargo, no se dice: "Tal ministerio estará representado" -por ejemplo- "con uno o dos miembros". No; es como un apunte para un trabajo ulterior. Se dice: "La coordinación y toma de decisiones debe reflejar el carácter multisectorial […]", y se hace un listado, un inventario, de reparticiones públicas que, a criterio del autor del proyecto, hay que tener en cuenta cuando se defina la composición de esa autoridad nacional, pero eso no está hecho; le falta.

Entonces, compartiendo las buenas intenciones -como dijo el diputado Gandini- y los buenos propósitos, debemos convenir que este proyecto requiere más trabajo que, seguramente, los integrantes de la Comisión Especial de Población y Desarrollo harán con gusto y celo, como hacen siempre, ya que me parece que no podemos aprobar el proyecto tal como está y convertirlo en ley.

Además, me voy a permitir hacer un apunte final con relación a algunos comentarios que realizaron los señores diputados Gandini y Chiazzaro con respecto a la situación alimentaria en Venezuela. El señor diputado Chiazzaro dijo que la situación obedece al bloqueo o a las medidas tomadas por Estados Unidos.

Señora presidenta: ¿recuerda que hace unos días propuse que se discutiera en sala el informe Bachelet? En esa oportunidad, no contamos con los votos de la mayoría, y creo que el diputado Chiazzaro fue el vocero de esa oposición.

El informe Bachelet -que conservo en mi portafolios y, si quieren, podríamos discutir- hace referencia a esta situación. En el parágrafo 27, dice: "La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017".

(Interrupción de la señora representante Susana Pereyra.- Respuesta del orador)

——Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Eguiluz).- Tiene la palabra el señor diputado Luis Pintado.

SEÑOR PINTADO (Luis).- Señora presidenta: evidentemente, los diputados preopinantes -Abdala, Gandini y Pasquet- han dicho muchas de las cosas a las que me quiero referir.

Hay algo que llama poderosamente la atención: lamentablemente, este Parlamento se ha constituido en un fabricante de leyes que salen como chorizo. Lo único que hacen es complicar la situación, porque crean más burocracia, aunque sea con la intención de proteger a los más necesitados.

No hay duda de que este proyecto de ley cae en eso. En el literal c) del artículo 5º se expresa: "[…] todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho […]". Esto está muy claro en el artículo 7º de nuestra Constitución de la República. ¿Cuál es el efecto de establecerlo en un artículo de este proyecto de ley? Ninguno. ¿Cuál es la finalidad de declarar prioridad nacional la política y estrategia del derecho a la alimentación adecuada? Eso ya existe. Recordemos que tenemos el Mides, que gasta US$ 270.000.000 por año y que debería asegurar el derecho a la alimentación y la satisfacción de otras tantas necesidades básicas a toda la población marginada de este país.

Estar o no por arriba de la línea de pobreza es un mero número que hasta cambia con el valor del dólar en un día o en un mes. O sea que, en teoría, la persona que recibe equis dinero por encima de ese número deja de ser pobre o pasa a serlo; eso es lamentable.

Como bien dijo el señor diputado Gandini, estamos ante un problema de educación. El problema es que los valores de la sociedad uruguaya se han degradado. Por más que aseguremos el acceso a la

alimentación a un bebé, como bien se dijo en sala, no podemos asegurar que ese bebé reciba lo que el Estado le da. Entonces, tal vez tengamos que asegurarnos de que se enseñe a esa madre cómo alimentar a ese bebé. Tal vez tengamos que ver si esa política social de pagar dinero por cada bebé es correcta; tal vez tengamos que ver si debemos frenar eso de pagar por bebé, porque quizás tener bebés indiscriminadamente se ha convertido en un negocio, en un trabajo, en la forma de acceder a un salario.

También debemos considerar el tema del neoliberalismo. No estamos hablando de que las políticas neoliberales o las políticas de tal o cual tipo aseguren esta u otra cosa. Pensemos que durante catorce o quince años tuvimos a un gobierno que, teóricamente, estaba lejos de ser neoliberal; sin embargo, hoy tenemos la marginalidad más alta y gente durmiendo en la calle, con falta de alimentación como nunca en la historia del Uruguay. Por lo tanto, debemos ver a qué nos referimos.

(Murmullos.- Interrupciones)

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Eguiluz).- Señores representantes: la Mesa pide orden a la Cámara.

Señor diputado: le solicito que se ciña al tema que estamos considerando.

Puede continuar.

SEÑOR PINTADO (Luis).- Creo que me estoy ciñendo al tema que estamos tratando.

Cuando en la Comisión estuvo presente la Asociación Celíaca del Uruguay, pidió que de alguna forma se posibilitara a las personas celíacas acceder a determinados alimentos, que son muy caros. En su mayoría, este Parlamento se negó a que se pudiera bajar el costo de los alimentos para celíacos. Eso es parte de esta ley, pese a que hablan de garantizar el derecho a la alimentación correcta de cada habitante de este país. Hacer accesible el costo de los alimentos a las personas celíacas es hacer accesible la nutrición a cada persona que se alimenta en este país o que tiene derecho a la alimentación.

Vuelvo al principio: no por aprobar un proyecto de ley hacemos que las cosas sucedan o lleguen realmente a las personas que las necesitan y que, por ejemplo, deben pagar un alto costo por los alimentos, como sucede con los celíacos.

Reitero: no tenemos que limitarnos a redactar proyectos y más proyectos. Debemos educar a la población acerca de lo que recibe del Estado y quitar burocracia a lo que el Estado brinda. Y cuando vamos a ver un hogar que tiene un piso de baldosas, no debemos quitar el derecho a una pensión o a ciertos beneficios por no tener piso de tierra. Quizás lo que tenemos que revisar es eso: si realmente se vive mejor por tener un piso de baldosas y si eso justifica que se quite una pensión o la ayuda del Mides. Creo que eso es lo que tenemos que revisar y no meternos en estas leyes tan pesadas y burocráticas que alejan al Estado de las personas más necesitadas.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MERONI (Jorge).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Eguiluz).- Tiene la palabra para una aclaración el señor diputado.

SEÑOR MERONI (Jorge).- Señora presidenta: no sé si corresponde pedir la palabra para una aclaración; voy a hablar porque soy el miembro informante del proyecto y tengo derecho a hacerlo.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Eguiluz).- Señor diputado: es para una aclaración porque usted ya hizo uso de la palabra. Ese es el criterio que ha tomado la Mesa.

(Interrupción del señor representante Jorge Meroni)

——Los secretarios me informan que usted tiene razón, señor diputado.

Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Jorge Meroni.

SEÑOR MERONI (Jorge).- Señora presidenta: se dice que las leyes salen como chorizo.

Este proyecto de ley ingresó al Parlamento en junio de 2015, y no lo presentó quien habla. Esta iniciativa que el señor diputado Abdala dijo que va a votar con salvedades no fue presentado por nuestra fuerza política: fue retirado del archivo y era una iniciativa del hoy senador José Carlos Cardoso. Tiene aportes de la FAO y de las asociaciones de diabéticos, de celíacos y de aquellas personas con determinadas enfermedades crónicas.

No se puede hablar por hablar; hay que leer el proyecto de ley. Quien habla sufre una de esas enfermedades.

En un artículo se puso un acápite para que el Estado controle los precios de los alimentos para quienes consumimos un tipo diferente de alimentos que el resto de la población.

Este proyecto de ley viene firmado y aprobado por toda la Comisión, con salvedades de los señores diputados Carrasco y Abdala, que las expresaron, pero se pide que vuelva a ese ámbito para analizar cada artículo. Con todo respeto: si vuelve a la Comisión, habría que asistir a las sesiones; porque si no se concurre, es imposible modificar los artículos.

Se habló de la migración y de los ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas. No voy a discutir la situación de Venezuela. Si hablamos de migración, quizás haya que considerar que podrían venir cinco millones de argentinos y argentinas que hoy están por debajo de la línea de pobreza gracias al gobierno del presidente Macri.

También se dijo que en los asentamientos hay uruguayos y uruguayas que viven en condiciones que no se han solucionado, que algo se ha hecho, pero que no ha alcanzado. ¡Y no; no ha alcanzado! ¡Nunca alcanza! Es imposible que se pueda solucionar el problema de los asentamientos irregulares en un país que fracturó a la sociedad uruguaya. Y hay que decir que la década en la que más crecieron los asentamientos en el Uruguay fue la del noventa.

(Ocupa la Presidencia la señora representante Cecilia Bottino)

——Reitero: este proyecto no es de nuestra fuerza política; nosotros lo tomamos del hoy senador José Carlos Cardoso. Nos pareció bueno, los compañeros nos pidieron que lo votáramos, estuvimos meses analizándolo en la Comisión, y fue aprobado. No compartimos que vuelva a ese ámbito porque, reitero, para que eso resulte hay que concurrir a la Comisión.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señora presidenta: creo que el único que solicitó que el proyecto volviera a comisión fui yo. En ese sentido es que entiendo que mi estimado colega, el señor diputado Meroni, me está aludiendo.

Entonces, debo dejar constancia de que yo no integro la Comisión y mi partido no tiene representación en ella, pero como tenemos la certeza de que no somos indispensables yo tengo perfecta conciencia de que no lo soy, confío plenamente en que se podrán arreglar sin mí y, por ello, he presentado una moción a la Mesa.

SEÑOR MERONI (Jorge).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR MERONI (Jorge).- Señora presidenta: quiero hacer una aclaración al señor diputado Pasquet. Con todo respeto, yo no me refería a él, sino a su partido. Aprecio mucho al señor diputado Verri, pero él mismo me dijo que no le daban los tiempos, y hace mucho que el Partido Colorado no participa de la Comisión.

A eso me refería.

9.- Licencias.

Integración de la Cámara

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Licencia por motivos personales:

Del señor representante Rodrigo Goñi Reyes, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose a la suplente siguiente, señora Verónica Baranzano.

De la señora representante Graciela Bianchi Poli, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose a la suplente siguiente, señora Gerardina Montanari.

No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes señor Pedro Jisdonian y señor José Luis Bringa.

De la señora representante Claudia Hugo, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose a la suplente siguiente, señora Lucía Rodríguez Motz.

Montevideo, 12 de setiembre de 2019

FITZGERALD CANTERO, SILVIA HERNÁNDEZ, PAULA PÉREZ LACUÉS"

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, y se los invita a pasar a sala.

10.- Derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y nutricional de la población. (Establecimiento de un marco jurídico)

Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Carlos Varela Nestier.

SEÑOR VARELA NESTIER (Carlos).- Señora presidenta: podría haber pedido la palabra por la vía de la aclaración, pero quiero hacer una pequeña intervención, porque a veces en sala se sostienen ciertas cosas y, si no se contestan, quedan como que el Cuerpo las refrendó.

Hace instantes escuchamos dos afirmaciones: una respecto a la industria de los bebés, que no voy a contestar, porque se responde sola y otra sobre cómo se calcula la línea de pobreza. Aparentemente, según dijo un diputado, se modifica igual que el cambio: todos los días con el valor del dólar. Sin embargo, basta con consultar la página del Instituto Nacional de Estadística para saber que en Uruguay hay un método de cálculo de la pobreza que, por supuesto, tiene una cifra determinada que se puede modificar y a partir de la cual se establece una línea respecto de la que se puede estar por encima o por debajo, pero no se calcula solo un valor económico. Simplemente, con leer la información de la página se puede ver que se toman en cuenta otros aspectos: el área geográfica donde la persona habita; el sexo del jefe o la jefa de hogar; los grupos de edad; la ascendencia racial; el precio de los alquileres, que es un valor muy importante para esta definición; la inflación anualizada y, por supuesto, la canasta básica anualizada, no de cada día.

Hago esta aclaración porque, de lo contrario, queda como que hay una definición que puede hacerse cada día o cada mes, y eso le quita seriedad a un cálculo que, como todos los que hace el Instituto Nacional de Estadística, es absolutamente confianza y fiable.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor diputado Ope Pasquet.

(Se lee:)

"Mociono para que el proyecto a consideración: 'Derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y nutricional de la población. (Establecimiento de un marco jurídico)', (Carp. 198/015). (Rep. 165/015), vuelva a estudio de la Comisión Especial de Población y Desarrollo".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Veintiuno en setenta y uno: NEGATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y tres en setenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑOR MERONI (Jorge).- ¿Me permite, señora presidenta?

Mociono para que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señora presidenta: estamos de acuerdo con la propuesta del señor diputado Meroni, pero solicitamos el desglose de algunos artículos que no vamos a votar.

Por lo tanto, pedimos el desglose del inciso final del artículo 4º, que establece la obligación de velar por la alimentación en otros países y no solo en

Uruguay, así como de los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 24, 25 y 28.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Se va a votar si se suprime la lectura del articulado y se vota en bloque, con la exclusión del inciso final del artículo 4° y los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 24, 25 y 28.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en setenta y uno: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se suprime la lectura del articulado y se van a votar en bloque todos los artículos del proyecto, con excepción de aquellos cuyo desglose ha sido solicitado.

(Se vota)

——Sesenta y seis en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el inciso final del artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 14, 15 y 16.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 14, 15 y 16.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 24 y 25.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 24 y 25.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 28.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setenta y tres: AFIRMATIVA.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señora presidenta: queremos dejar constancia de que hemos votado negativamente tanto en general como en particular, por las razones que expusimos cuando hicimos uso de la palabra en oportunidad de la discusión general del proyecto.

Muchas gracias.

SEÑOR GROBA (Óscar).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GROBA (Óscar).- Señora presidenta: no hemos querido intervenir en el debate, en el que ha habido de todo. Es bueno que ciertas discusiones queden para jornadas especiales, a pesar de que hoy tenemos una sesión bastante larga.

Felicito a la comisión que trabajó en este tema y, especialmente, a las diputadas María Luisa Conde, Carina Díaz Barreto, Cristina Lustemberg y Lucía Rodríguez Motz, y a los diputados Jorge Meroni, Gonzalo Civila López, Álvaro Dastugue y Óscar De los Santos. Creo que en ese ámbito estuvieron representados casi todos los partidos políticos que han promovido el proyecto de ley que hoy votamos.

Obviamente, respetamos las opiniones de algunos legisladores de la oposición que ya estuvieron en el gobierno, algunos de los cuales no se encuentran en sala ahora, que plantearon orientaciones para este tema, señalaron que este proyecto es burocrático y expresaron algunos aspectos que debían solucionarse. En el Parlamento hay sectores que ya estuvieron en el gobierno y el tema del hambre en el mundo no es de ahora; hay que preguntarse cuál es su origen lo que, seguramente como dije al inicio, da para una discusión superior. Hay una forma de organizar el mundo económica y socialmente muy injusta, que hace que

sea normal que haya pobres, desocupados, indigentes y niños que se mueran de hambre. Este es un dato de la realidad. En el año 1948, se propuso como derecho humano el acceso a la alimentación. Sin embargo, mientras transcurre este debate, hay seis o siete millones de niños menores de quince años que se están muriendo de hambre, según los datos que se analizan.

(En aplicación del artículo 83 el Reglamento, se elimina parte de la versión taquigráfica del señor representante Óscar Groba que contiene alusiones.- Suena el timbre indicador de tiempo)

——Quiere decir que mecanismos como este, que fueron estudiados entre los legisladores y los sectores políticos que participaron en la discusión, han servido. No resuelven el tema del hambre como no se resuelve con este sistema económico social en el mundo, pero sí ayudan a seguir por el camino de búsqueda de soluciones.

Estas son las razones por las cuales votamos con total convencimiento, ya que creemos que, de alguna manera, este proyecto puede ayudar a que se continúe por el camino de la eliminación de la pobreza y la indigencia en el Uruguay.

Gracias, señora presidenta.

(Interrupción del señor representante Ope Pasquet)

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Señor diputado: no se puede hacer alusiones políticas en el fundamento de voto. Por tanto, la Mesa revisará la versión taquigráfica y eliminará lo que no corresponda de acuerdo con el Reglamento.

(Interrupción del señor representante Óscar Groba)

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señora presidenta: yo soy la primera en levantar la mano para asegurar el derecho a la alimentación adecuada y estoy totalmente de acuerdo con declarar prioridad nacional las políticas que apuntan al derecho a la alimentación y a combatir la subalimentación, pero la prioridad es ahora. No tenemos por qué esperar a aprobar una ley.

Es cierto que en el fundamento de voto no se puede mencionar a partidos políticos, pero como acaba de decir fuera de micrófono el señor diputado Groba: "Lo dicho, dicho está", por lo que me gustaría saber si después de quince años de gobierno del Frente Amplio recién ahora nos damos cuenta del tema del hambre. Más allá de que este fue un proyecto de ley del actual senador José Carlos Cardoso, reitero que la prioridad es ahora.

Por otra parte, no es verdad que se toman todas las variables para medir la pobreza; no es así. Realmente, ha aumentado el número de asentamientos. Si los que viven en los asentamientos no son pobres, ¿de qué estamos hablando?

La emergencia es ahora. Nos acordamos tarde.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR MERONI (Jorge).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- (Objeto de la ley).- El objeto de la presente ley es establecer un marco jurídico de referencia, que permita al Estado establecer políticas y estrategias para garantizar de manera permanente y con carácter de prioridad nacional "El Derecho a la Alimentación", la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población, para el disfrute de una vida sana y activa basada en un patrón de alimentación saludable.

Artículo 2º.- (Objetivo de la ley).- Asegurar el ejercicio pleno del derecho humano a una alimentación adecuada, mediante la promoción de:

A) Un sistema alimentario sostenible para la alimentación saludable.

B) La agricultura familiar y pesca artesanal o a pequeña escala.

C) Condiciones que favorezcan el acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.

Artículo 3º.- La finalidad de esta ley es:

A) Declarar como prioridad nacional las políticas que permitan el alcance progresivo del derecho a la alimentación adecuada y saludable.

B) Fortalecer la capacidad institucional del Estado para que pueda garantizar el derecho a la alimentación de la población.

C) Establecer estrategias para superar el hambre y la malnutrición en todas sus formas con la finalidad de garantizar la salud y el bienestar de la población.

Artículo 4º.- (Ámbito de aplicación).- Son titulares del derecho a la alimentación los habitantes del territorio nacional.

Las obligaciones derivadas del derecho a la alimentación son vinculantes para todas las personas jurídicas de Derecho Público.

Las personas físicas y las personas jurídicas regidas por el Derecho Privado, tienen la responsabilidad de evitar que sus acciones y decisiones produzcan un efecto negativo sobre el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, la Seguridad Alimentaria y Nutricional de cualquier persona.

El Estado promoverá la cooperación internacional y proporcionará la asistencia necesaria para asegurar la realización del derecho a la alimentación en otros países, en caso de encontrarse en condiciones de hacerlo.

Artículo 5º.- Principios rectores:

A) Participación: El Estado garantizará ámbitos de participación de las personas, a los efectos de que puedan ejercer el derecho a determinar su propio bienestar y a intervenir con voz en la planificación, formulación, implementación, vigilancia y evaluación de las decisiones que les afectan. Dicha participación podrá ser ejercida de manera directa o a través de organizaciones intermediarias que representan intereses específicos.

B) Rendición de cuentas: El Estado garantizará que las intervenciones estén basadas en información y métodos objetivos, cuenten con mecanismos de monitoreo, registro y evaluación permanentes, fomentando la transparencia en la acción pública, la auditoría social y que tomen en cuenta las necesidades reales de la población.

C) Igualdad: Conforme a los artículos 7º y 8º de la Constitución de la República, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y el ejercicio de sus derechos a una alimentación adecuada y saludable.

D) No discriminación: el Estado respetará, protegerá y garantizará el derecho a una alimentación adecuada sin discriminación alguna y protegerá especialmente a los grupos de personas en situación de mayor vulnerabilidad frente al ejercicio de su derecho a una alimentación adecuada. Cualquier distinción, exclusión o restricción impuesta por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión pública o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición que tenga como consecuencia u objetivo obstaculizar o restringir el ejercicio de cualquier individuo de su derecho a la alimentación, será considerado un acto ilegal y estará sujeto a sanciones conforme lo dispone la ley.

E) Empoderamiento: Las personas deben contar con el conocimiento, las atribuciones, la habilidad, la capacidad y el acceso necesarios para cambiar sus propias vidas, incluida la facultad de exigir al Estado reparaciones en caso de violación de este derecho. El Estado establecerá disposiciones específicas en materia de sensibilización, fortalecimiento de capacidades, educación y capacitación constante y dinámica en el derecho a la alimentación.

Artículo 6º.- (Interpretación de la ley).- La interpretación del contenido de esta ley, así como la actuación de las autoridades será congruente con los instrumentos internacionales aplicables en la materia ratificados por el Estado, la Constitución de la República y las leyes nacionales.

Artículo 7º.- (Aplicación de la interpretación más favorable).- Cuando se presenten diferentes interpretaciones acerca del alcance o existencia del derecho de la alimentación se deberá aplicar la interpretación más favorable.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

Artículo 8º.- A los fines de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones:

I) Seguridad Alimentaria y Nutricional se define como la garantía de que los individuos, las familias y la comunidad en su conjunto, accedan en todo momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, principalmente producidos en el país en condiciones de competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su consumo y utilización biológica les procure óptima nutrición, una vida sana y socialmente productiva, con respeto de la diversidad cultural y preferencias de consumidores.

La seguridad alimentaria tiene cuatro componentes:

A) Disponibilidad: la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes, obtenidos a través de la producción del país o de importaciones (incluyendo la ayuda alimentaria).

B) Accesibilidad: El acceso de toda persona a los recursos adecuados, para adquirir alimentos apropiados y una alimentación saludable. El acceso es posible mediante la producción agrícola para el autoconsumo, por el acceso a ingresos para la compra de alimentos, por las ayudas alimentarias o por alguna combinación de estas.

C) Utilización: La utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas.

D) Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, toda persona debe tener acceso a alimentos adecuados en todo momento, aún en situación de crisis repentina de cualquier índole.

El concepto de estabilidad se refiere tanto al sentido de la disponibilidad como la del acceso económico y físico a la alimentación.

El Estado deberá ejercer control sobre los precios de los productos consumidos por las personas afectadas por enfermedades que requieran de una alimentación diferenciada.

II) La Soberanía Alimentaria: Se entiende como el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a una alimentación sana y nutritiva para toda la población.

III) Malnutrición: Se entiende por tal las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta de energía y/o nutrientes de una persona. La malnutrición abarca la desnutrición (emaciación, retraso del crecimiento e insuficiencia ponderal), los desequilibrios de vitaminas o minerales, el sobrepeso y la obesidad.

IV) Adecuación: Los alimentos son considerados adecuados en términos de diversas variables, entre las que figuran la inocuidad, la calidad nutricional, la cantidad y la aceptación cultural de alimentos.

V) Vulnerabilidad: Características y circunstancias de una comunidad y/o sistema que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Los diversos aspectos de la vulnerabilidad surgen de factores físicos, sociales, económicos y ambientales.

VI) Grupos de atención prioritaria: Incluye lactantes, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, personas que sufren enfermedades crónicas, población que vive en condiciones precarias, grupos en riesgo de marginación social y discriminación y cualquier otro grupo que pueda identificarse periódicamente.

VII) Cantidad mínima de alimentos: Es la destinada a cubrir las necesidades nutricionales mínimas que permita al individuo vivir con dignidad, protegido contra el hambre y la malnutrición. Será establecida por el Ministerio de Salud Pública en base a

la edad, condición de salud, ocupación del individuo y estado de vulnerabilidad.

VIII) Sistema Alimentario: Es la suma de los diversos elementos, actividades y actores (medio ambiente, población, recursos, procesos, instituciones e infraestructuras) que, mediante sus interrelaciones, hacen posible la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos y cuyas decisiones y acciones tienen impacto sobre la nutrición, el estado de salud, el crecimiento socioeconómico, la equidad y la sostenibilidad ambiental.

IX) Sistema Alimentario Sostenible: Se entiende como sistema alimentario sostenible para la alimentación saludable aquel que, desde una visión integral, provee de alimentos nutritivos y accesibles para toda la población y permite conservar la diversidad y productividad a lo largo del tiempo, de manera que no se comprometan las bases sociales, económicas y ambientales para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de las generaciones futuras. Requiere de un uso eficiente y ambientalmente responsable de la tierra y demás recursos naturales, de adecuadas técnicas de producción, almacenamiento, transformación, procesamiento y comercialización de alimentos, una adecuada gestión de las pérdidas y desperdicios de alimentos, así como de un rol responsable de los ciudadanos.

CAPÍTULO III

ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN

Artículo 9º.- (Derecho a la Alimentación).- El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano de las personas, sea en forma individual o colectiva, de tener acceso en todo momento a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos con pertinencia cultural, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho humano comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el suministro de alimentos adecuados.

Artículo 10.- Condiciones para el ejercicio del derecho a la alimentación. Toda persona tiene el derecho a vivir en condiciones que le permitan:

I) Alimentarse por sus propios medios, ya sea produciendo para autoconsumo y/o accediendo a sistemas de distribución, procesamiento y comercialización eficientes.

II) Tener la capacidad financiera para adquirir una cantidad suficiente de alimentos saludables y de calidad para satisfacer sus necesidades nutritivas.

III) Acceder a alimentos adecuados en casos de acontecimientos imprevisibles o de fuerza mayor.

IV) Acceder a alimentos que contribuyan a una dieta adecuada y saludable, para alcanzar un estado de bienestar nutricional en el cual todas las necesidades fisiológicas se encuentren satisfechas.

V) Acceder a servicios de saneamiento y agua potable, como condición necesaria, para el libre ejercicio del derecho a la alimentación.

Artículo 11.- Disposiciones especiales:

I) Los niños y niñas, los adolescentes y los adultos mayores, en su condición de grupos de atención prioritaria, tienen derecho a una alimentación y nutrición adecuadas a su edad y a sus condiciones particulares.

II) El Estado promoverá Programas de Alimentación en los centros de Educación Pública, Inicial, Primaria y Secundaria.

III) Toda mujer tiene derecho a una alimentación y nutrición adecuadas durante el período de embarazo y lactancia. El Estado velará para que pueda ejercer ese derecho.

IV) El Estado promoverá y protegerá la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continuada hasta los veinticuatro meses de edad.

V) El Estado tiene la obligación de eliminar y prevenir todas las formas de discriminación contra la mujer en relación con la garantía del derecho a la alimentación, incluyendo el trato menos favorable hacia las mujeres por motivos de embarazo y maternidad y a promover la igualdad de género.

VI) El Estado atenderá especialmente -con enfoque integral dentro del marco de las políticas nacionales, sectoriales y regionales- las políticas públicas orientadas a garantizar una alimentación adecuada de las niñas, niños y adolescentes.

VII) Toda persona que padece hambre o desnutrición, o se encuentra en situación de riesgo de padecer hambre o desnutrición, tiene el derecho a recibir una cantidad mínima de alimentos necesarios conforme a su edad, sexo, condición de salud y ocupación.

CAPÍTULO IV

SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO

Artículo 12.- Las autoridades competentes adoptarán disposiciones reglamentarias para las medidas especiales o presentarán ante el Poder Legislativo una propuesta de legislación para prevenir y compensar prácticas discriminatorias por perjuicios causados en el ejercicio del derecho a la alimentación de grupos o individuos determinados.

El Estado garantizará el ejercicio del derecho humano a la alimentación, asegurando los cuatro pilares básicos de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: disponibilidad, accesibilidad, estabilidad y utilización de los alimentos.

Artículo 13.- Constituye un acto ilícito de la autoridad pública privar a cualquier persona de alimentos o los medios para adquirirlos.

Artículo 14.- Se penalizará la privación deliberada de alimentos introduciendo las enmiendas correspondientes al Código Penal si correspondiere.

Artículo 15.- El Estado revisará el marco administrativo y legislativo para que sea pertinente con miras a asegurar que las actividades de actores privados dentro de su competencia no infrinjan el derecho a la alimentación de los demás.

Artículo 16.- El presupuesto nacional del Estado asignará los recursos necesarios para implementar el derecho fundamental a la alimentación adecuada y saludable.

Artículo 17.- El Estado en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos, en caso de que dispongan de recursos limitados, tiene la obligación de dar prioridad a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Artículo 18.- El Estado establecerá sistemas de información y cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad, a fin de identificar los grupos y los hogares especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria y las causas de ello, considerando la malnutrición en todas sus formas.

Artículo 19.- Las autoridades públicas competentes deberán mantener y aumentar la producción de alimentos en el país, dentro de sus posibilidades, fortalecer la producción de alimentos saludables y nutritivos, organizar programas de capacitación y educación sobre las ventajas e importancia de diversificar la dieta, y entregar alimentos adecuados a las personas en situación de mayor riesgo.

Artículo 20.- El Estado está obligado a proveer a quienes no pueden acceder a una adecuada alimentación, la cantidad mínima de alimentos para dar plena efectividad al derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre y la malnutrición.

Artículo 21.- (Derecho a la información).- El Estado tiene la obligación de informar a la población de los derechos establecidos en la ley y en normas de aplicación derivadas, apenas hayan entrado en vigencia, así como de otras medidas adoptadas para facilitar y promover la realización del derecho a la alimentación.

I) A tales efectos empleará las formas y métodos más adecuados para difundir la información, incluidas las formas verbales (por ejemplo, a través de radios rurales y comunitarias).

II) Establecerá un procedimiento simple, justo y accesible que permita a las personas recabar la información de relevancia para el ejercicio del derecho a la alimentación.

III) Exigirá a las autoridades públicas pertinentes proporcionar la información solicitada dentro de un plazo breve.

Artículo 22.- El Estado incluirá en los planes de estudios de educación primaria y básica y en los programas de educación de adultos, así como en otros programas de capacitación y educación, material relacionado con la educación alimentaria y nutricional, el derecho a la alimentación y los principios de derechos humanos. A su vez, promoverá las ventajas e importancia de diversificar la dieta y el consumo de producción nacional de alimentos, en especial los provenientes de la agricultura familiar.

Artículo 23.- El Estado establecerá políticas dirigidas a la erradicación de la malnutrición y reducción de enfermedades producidas por carencia o exceso de alimentación en todo el territorio nacional, instaurando y reforzando acciones que garanticen que toda la población acceda a las condiciones necesarias para alcanzar el desarrollo humano.

Se sancionará la privación deliberada de alimentos introduciendo, cuando así sea necesario, las enmiendas correspondientes a la normativa vigente.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Artículo 24.- El Estado establecerá o estipulará la creación de una autoridad nacional para el derecho a la alimentación que cumpla la función de órgano central de coordinación para la implementación del derecho en el ámbito nacional.

Artículo 25.- La autoridad nacional para el derecho a la alimentación, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, tendrá los siguientes objetivos:

A) Promover y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población como medio para alcanzar la plena realización del Derecho Humano a la Alimentación adecuada y saludable.

B) Velar por la aplicación de los principios de derechos humanos establecidos en la ley y en otros instrumentos jurídicos internacionales a los que haya adherido el país.

C) Proponer objetivos, políticas y estrategias para el cabal cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación adecuada y saludable.

D) Tomar las medidas que aseguren la coordinación, colaboración y comunicación interinstitucional del Sistema.

E) Reunir información y datos que permitan cuantificar los esfuerzos que el Estado realiza y que inciden en la seguridad alimentaria y nutricional de los habitantes de la República.

F) Dar seguimiento, monitorear y evaluar sistemáticamente el avance y el estado de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país y adoptar las medidas que se consideren necesarias.

Artículo 26.- Los principales cometidos y poderes jurídicos de la autoridad nacional para el derecho a la alimentación serán:

A) Administrar el Sistema Nacional de Derecho a la Alimentación, Seguridad Alimentaria y Nutricional, asesorar al Poder Ejecutivo y a las demás personas jurídicas de Derecho Público.

B) Coordinar las actividades y actores involucrados en la realización del derecho a la alimentación adecuada en el plano nacional, regional y local.

C) Proponer al Poder Ejecutivo el diseño, y revisión de las políticas públicas en materia del derecho a la alimentación adecuada para garantizar la armonía entre el cumplimiento de los estándares internacionales y las necesidades de la población.

D) Recomendar un orden de prioridades y coordinar la asignación de recursos en conformidad con las mismas.

E) Presentar ante el Ministerio competente o los órganos del Estado correspondientes: proyectos de ley, disposiciones reglamentarias o políticas relativas al derecho a la alimentación adecuada o uno de sus componentes (accesibilidad, disponibilidad y adecuación de los alimentos); así como enmiendas a las leyes, a los reglamentos o a las políticas vigentes.

F) Presentar anualmente informes ante el Parlamento sobre el estado de aplicación de la Ley Marco de Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

G) Presentar informes al Parlamento sobre el estado de aplicación de la Ley Marco y del Derecho a la Alimentación, así como las observaciones finales de los órganos de vigilancia de los tratados internacionales que han evaluado la actividad del país en materia del derecho a la alimentación.

H) Promover procesos de diálogo para canalizar las propuestas e iniciativas provenientes de la sociedad civil.

I) Promover la cooperación técnica con otros países, ofreciendo orientación y apoyo sobre la realización del Derecho a la Alimentación.

Artículo 27.- (Composición).- La coordinación y toma de decisiones debe reflejar el carácter multisectorial del derecho a la alimentación: Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Salud Pública, de Educación y Cultura, de Desarrollo Social, de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,

de Industria, Energía y Minería y el Congreso de Intendentes.

La ley regulará la participación con carácter consultivo de actores no gubernamentales: institutos de investigación y estadísticas, universidades, representantes de la sociedad civil y del sector privado.

Artículo 28.- El Estado a través de los órganos con potestad normativa adecuará, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas relativas al derecho a la alimentación previsto en los tratados internacionales ratificados por el país.

Artículo 29.- El Poder Ejecutivo deberá adoptar mecanismos regulatorios para hacer efectivos los contenidos de la presente ley".

11.- Licencias.

Integración de la Cámara

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Licencia por motivos personales:

Del señor representante Luis Puig, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Coitiño.

No acepta la convocatoria, por esta única vez, la suplente siguiente señora Magdalena Beramendi.

Montevideo, 12 de setiembre de 2019

FITZGERALD CANTERO, SILVIA HERNÁNDEZ, PAULA PÉREZ LACUÉS

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda convocado el suplente correspondiente, y se lo invita a pasar a sala.

12.- Detenidos desaparecidos. (Se comete su búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo)

Corresponde tratar el asunto que figura en el tercer término del orden del día.

En cumplimiento de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 139 del Reglamento, se va a votar si se considera el asunto en cuestión, ya que ingresó a la Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

Se requieren cincuenta votos conformes.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Detenidos desaparecidos. (Se comete su búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1209

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- Señora presidenta: me ha pedido mi bancada que haga de miembro informante de este proyecto de ley.

En primera instancia, quiero decir que a quienes somos de izquierda, demócratas, este es un tema que preocupa y también conmueve, pues muchos de nosotros tenemos familiares y amigos que fueron detenidos y torturados e, inclusive, debieron exiliarse durante los años oscuros de la dictadura cívico-militar de los setenta en este país.

Como miembro de la bancada de gobierno, de la bancada frenteamplista, me corresponde expresar la necesaria autocrítica con respecto a los objetivos trazados y a los resultados obtenidos en la búsqueda

de verdad y justicia, y en cuanto a establecer el paradero de los detenidos desaparecidos.

En este proyecto de ley, se ensaya un nuevo diseño institucional, traspasando competencias del Poder Ejecutivo a la noble Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

La iniciativa incluye un cúmulo de objetivos y potestades que no voy a detallar, que intentan mantener el rumbo de búsqueda de la verdad. Como todos saben, en el mundo, en los países donde ocurrió este tipo de situaciones, donde hubo dictaduras feroces en las que se detuvo, se torturó y desapareció gente, la búsqueda de justicia y verdad no se hicieron necesariamente a la misma velocidad. Basta con mirar lo que pasa en Argentina, donde todavía hay juicios; lo que sucedió en Chile o, incluso, yendo más lejos en cuanto a distancia y tiempo, lo que todavía ocurre en España, luego de tantos años de superada la dictadura franquista.

Es claro que, más allá de las intenciones de los gobiernos o de la voluntad de las personas, los tiempos del sistema judicial no necesariamente acompañan los del esclarecimiento de la verdad. A pesar de que se trata de tareas que confluyen y se complementan, en la mayoría de estos países, el avance de la verdad ha sido mucho más rápido que el de la justicia.

Digo esto porque, por el debate en la Comisión, me consta que algunos legisladores demócratas y republicanos de la oposición tienen objeciones a la iniciativa por las competencias y atribuciones que se darían a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para cumplir con los cometidos establecidos.

Adelanto que se plantearán dudas sobre ese rol y estos cometidos en su vinculación con las tareas judiciales, con el papel de la Justicia y con las potestades que se asignarán pero, sin estas, sería muy difícil hacer las investigaciones necesarias.

Por otra parte, debo decir que en este proyecto de ley no hay intención de entrometernos en los procesos judiciales ni mucho menos de socavar las bases del análisis jurídico y específico del Poder Judicial. Lo que se incluye en esta iniciativa son algunas potestades que permitirán una ágil intervención desde otro ámbito de la República, en este caso, desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, por supuesto, en coordinación con los procesos judiciales y, al mismo tiempo, colaborando con ellos.

A diferencia de las limitaciones que tiene esta Institución en otros temas, ya que no puede intervenir en expedientes que se hayan judicializado, en este caso, se excluye expresamente esa inhibición, por lo que diría que este es el corazón del proceso. ¿Por qué? Porque, más allá de que pueda haber algún caso de detenido desaparecido que no esté en la Justicia, la verdad es que la gran mayoría ya tiene iniciado un proceso judicial. Por lo tanto, no tendría ningún sentido dar esta tarea a la Institución y establecer que no puede intervenir en los casos en que el proceso esté judicializado, ya que sería como plantearle un cometido vacío.

Entonces, aclarando cuáles son la voluntad, el espíritu y la intención del proyecto, además de las limitaciones legales que se le atribuyen, guardamos una importante esperanza de que la Institución cuyas atribuciones, cometidos y rubros presupuestales son reforzados, pueda hacer lo que hasta ahora no hemos podido, en la medida en que nos hubiese gustado: avanzar en el camino de la verdad, esperando que algún día el tiempo también llegue a la justicia.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado Carlos Coitiño.

SEÑOR COITIÑO (Carlos).- Señora presidenta: hemos estudiado a fondo el proyecto que se nos presenta a consideración; lo compartimos y lo vamos a votar, pero esta Cámara no puede obviar el aspecto a que hizo referencia el compañero Zavala en su intervención, al presentar el tema: la reflexión autocrítica de todo el sistema político que nos incluye, en función de lo hecho en forma insuficiente.

Estamos hablando de una tarea que se encomienda a una institución que tiene una integración que nos merece la más absoluta confianza. Por estos motivos, cuando votemos el proyecto, lo haremos absolutamente convencidos de que la tarea quedará en manos de personas con dedicación plena.

Es un reclamo permanente de la sociedad conocer la verdad y llegar a la justicia, fundamentalmente, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un expediente de febrero de 2011, laudó sobre la desaparición de la madre de una

compañera que en estos momentos no está presente en sala, por eso no la menciono, obligando al Estado uruguayo a tener presente las lesiones generadas por las acciones del terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar, que no solo implica la desaparición de personas, sino torturas. La autocrítica nos obliga a determinar cómo participaron los poderes del Estado, es decir, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Seguramente se haga silencio para no reconocer la gravedad de la deuda que tiene el sistema político con toda la sociedad y respecto de los protagonismos de cada momento histórico. Hemos transitado treinta y cinco años de democracia, en los que distintos partidos políticos gobernaron y tuvieron la posibilidad de hacer. Y cuando miremos lo que se hizo, veremos que recién en el último gobierno de un partido que no es el Frente Amplio -me refiero al gobierno del entonces presidente Batlle- surgieron los primeros esfuerzos por investigar la desaparición de personas. Pero no olvidemos que también hubo torturas y secuestro de niños.

Tal vez alguien se enoje porque hablamos de los tres poderes y de cuál fue la responsabilidad del Poder Judicial y de aquel primer Poder Ejecutivo de tránsito al no intervenir. Cuando el Poder Judicial convocó a sus estrados a los eventuales responsables y principales actores de la represión contra el pueblo uruguayo, el ministro de Defensa Nacional de entonces manifestó que no iban a ir a declarar. Esperamos que esto nunca más suceda.

También hay una enorme responsabilidad de los principales actores de la represión, que con cobardía generaron la desaparición de personas y promovieron torturas y secuestros de niños. Los responsables de estos hechos deberían haber tenido la valentía de reconocer sus actos y no mentir en la Comisión para la Paz, instaurada durante el gobierno del presidente Batlle, diciendo que la institución militar no tenía nada que ver y que los desaparecidos estaban esparcidos y escondidos por ahí.

Eso nos preocupa y nos llama a reflexionar, porque estamos encomendando a una institución parte de las responsabilidades del Estado, sobre todo, a partir del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado uruguayo, lo que incluye a todos los poderes. Nos gustaría que esta Cámara, en su momento, en forma autocrítica, se planteara este debate sobre su cuota de responsabilidad.

Entendámonos bien: no eludimos la cuota de responsabilidad de nuestro gobierno frenteamplista, pero debemos tener presente que en este período se ha intentado aplicar distintos instrumentos sin efectos globales. Uno de ellos ha sido la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos, que viene cumpliendo una tarea que comienza a mostrar una luz de esperanza para que, finalmente, la verdad y la justicia puedan instalarse. Pero tengamos presente, sobre todo en este período electoral, en el que se van a definir nuevas posibilidades de conducción, que el fiscal trabaja solo con dos ayudantes. Entonces, si me preguntaran -con esto no le resto confianza a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo-, yo diría que si este fuera el momento apropiado desde el punto de vista constitucional, plantearía reforzar esa Fiscalía con el personal y los recursos que requiere para que, en articulación con el Poder Judicial, nos mostrara que está decidida a cumplir su obligación con toda la ciudadanía de que se conozca la verdad y se haga justicia lo antes posible.

Por estos motivos, y a pesar de todas estas preocupaciones, vamos a votar este proyecto.

Ojalá que algún día la Cámara se haga cargo de su cuota parte de responsabilidad -nadie está exento de ella-, corrija sus errores y utilice todos los recursos constitucionales para que lo que tanto reclama nuestro pueblo todos los 20 de mayo se convierta finalmente en verdad y en justicia.

Muchas gracias.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señora presidenta: vamos a votar convencidos esta iniciativa, que constata el fracaso de los caminos transitados. Treinta y cinco años después, nadie puede decir seriamente que hayamos avanzado.

Coincido en que hay responsabilidades, ¡pero no de todos! Hay responsabilidades porque la resolución de este problema es esencialmente política: de decisión y de voluntad política. Sin embargo, este no

es un tema estrictamente político; es de profundo sentido ético.

Podríamos hablar de todo lo que pasó en la dictadura, pero hay gente que ya no está porque le tocó dejar la vida. Con ellos nuestro compromiso es innegociable e inquebrantable.

Como decía, si no se ha avanzado más en este asunto es porque ha habido responsabilidades políticas a lo largo de estos treinta y cinco años. Hay responsabilidades de generales que encajonaron citaciones, de embajadores que llegaron tarde en Italia, de actas de los tribunales que quedaron encajonadas -sucedió hace poco tiempo-, y de ministros de defensa que, según los familiares, entorpecieron el avance de las investigaciones. También hubo declaraciones claras de complicidad y de ocultamiento.

La teoría de los dos demonios se hizo espacio en muchas cabezas. Pero no hubo dos demonios; hubo uno solo: el fascismo.

De todos modos, creo que es bueno expresar autocrítica: en esto hay responsabilidades de los tres poderes; no hay responsabilidad de todos los partidos ni de todas las organizaciones sociales, porque hay gente que no ha descansado un solo día en la lucha por la verdad y la justicia.

Estamos convencidos de que hasta que no lleguemos a la verdad y hasta que no exista justicia, la democracia en el Uruguay va a seguir renga. Nos debe servir como ejemplo lo que pasa en la región. En sala se habló de Chile, donde está vigente un pacto de impunidad; en Argentina se avanzó; en Brasil se mantuvo siempre el pacto de impunidad, y hoy vemos los resultados: un presidente que reivindica la tortura y la muerte de opositores a la dictadura.

Se dice que quien no asume el pasado tiene riesgo de repetirlo; eso es válido para todo.

El paso que vamos a dar hoy implica el reconocimiento de un fracaso que no obedece a que alguien se equivocó, sino a decisiones políticas que hasta ahora han amparado el mantenimiento de la impunidad.

Coincidimos con el diputado preopinante en que es imperativo fortalecer la Fiscalía. Sin embargo, creemos que el hecho de poner esto en manos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, organismo que respetamos; lo hemos visto actuar con independencia, nos da garantías en la búsqueda de los desaparecidos, con una proyección de tiempo.

Por todos estos motivos, nos parece fundamental el paso que se va a dar hoy. Nosotros vamos a votar convencidos este proyecto de ley. No creemos que esta historia termine cuando se mueran los viejos, porque se mueren los viejos, pero la historia queda y la impunidad nos va a seguir golpeando la cara hasta que podamos llegar a la verdad y hacer justicia.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado Iván Posada.

SEÑOR POSADA (Iván).- Muchas gracias, señora presidenta.

El Partido Independiente va a acompañar este proyecto de ley. Nos parece un paso adecuado; así lo consideramos en la discusión del Senado por el imperativo que supone la búsqueda de los restos de los desaparecidos y la continuación de las investigaciones, a efectos de que se traiga algo de paz a muchos hogares de uruguayos que todavía no conocen la verdad.

No vamos a retrotraernos al pasado de esta larga discusión respecto a la justicia; esos son temas que el país debatió en otra realidad histórica. Como es notorio, nosotros proponíamos una solución absolutamente distinta a la que fue aprobada en el Parlamento en ese entonces y que fue respaldada por la ciudadanía; creíamos que era un error establecer la impunidad de los delitos de lesa humanidad porque no iba a contribuir a encontrar la verdad.

En el pasado reciente, desde el Ministerio de Defensa Nacional se obstaculizó la búsqueda de la verdad; este es un dato de la realidad que se debe asumir. Me refiero especialmente al período en el que fue ministro de Defensa Nacional el señor Eleuterio Fernández Huidobro. Es notorio y público que así ocurrió.

Por otra parte, está el trabajo de una comisión que quedó deslegitimada desde el momento en que los representantes de los detenidos desaparecidos se retiraron de ese ámbito. Desde el punto de vista político, eso puso en cuestión el trabajo que venía desarrollando la comisión, que se hizo con dedicación,

pero que a veces no encontró eco en el Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, vamos a respaldar la solución que se plantea, a excepción de la segunda parte del primer inciso del artículo 2º, que no nos parece adecuada. Creemos que es inadecuado que se den potestades de contratar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En todo caso, esto debería ser discutido en el presupuesto de la Comisión Administrativa, que es en el que se establecen los recursos necesarios para el funcionamiento de esa Institución. Esta es una discusión que debiera darse en ese marco y en función de las necesidades planteadas por la propia Institución y no como una atribución generada en forma atemporal, cuando en realidad no sabemos cuáles serán esos requerimientos.

Nos parece que, en todo caso, la instancia en la que se vote el presupuesto de la Comisión Administrativa, que incluye el de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, es el momento adecuado para discutir la contratación de personal necesaria para dar cumplimiento a esta tarea.

Con esa salvedad, el Partido Independiente acompañará el proyecto en discusión.

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señora presidenta: la solución institucional que se da en este proyecto de ley a la búsqueda de los restos de los desaparecidos se podría discutir, pero es una alternativa para llegar al objetivo. Por lo tanto, uno tiende a estar de acuerdo. El tiempo dirá si con esto se mejoran los instrumentos, las herramientas institucionales adecuados para obtener la información necesaria, realizar las investigaciones pertinentes y, sobre todo, conseguir los resultados que permitan ir esclareciendo los hechos del pasado reciente y, en particular, recuperando la memoria que el país y, fundamentalmente, los familiares, necesitan. Para ello es esencial encontrar los restos de todos los desaparecidos o, al menos, de aquellos que estén en el territorio nacional.

En términos generales, me parece un proyecto correcto, pero tengo algunas dudas con respecto a algunas funciones que pueden colidir con las del Poder Judicial. La norma de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo establece que sus funciones no pueden alcanzar las jurisdiccionales propias del Poder Judicial. Esto está establecido expresamente en la ley por la que se creó la Institución. Desde el punto de vista formal, puede aparecer algún conflicto en esa materia, pero supongo que con la interpretación amplia de la ley y la prudencia de quienes están al frente de la Institución se sabrá respetar y administrar las competencias propias y naturales del Poder Judicial, a fin de trabajar sin invadirlas.

Sí tengo importantes diferencias con el segundo inciso del artículo 2º del proyecto de ley, y lo quiero dejar planteado.

El artículo 2º establece: "La INDDHH podrá delegar en uno o más de sus directores, total o parcialmente, la implementación del cometido asignado por esta ley". Hasta este punto no ofrece ninguna duda. Pero continúa: "La INDDHH dispondrá asimismo las contrataciones de personal necesarias para dar cumplimiento a la tarea encomendada por el artículo 1º de la presente ley. Tales contrataciones no estarán limitadas a personas provenientes de la función pública".

No podemos legislar al margen de la Constitución de la República, en cuyo artículo 229 establece: "El Poder Legislativo," -lo nombra específicamente, porque la Institución depende de este Poder del Estado- "las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias […]". Y esto se ha cumplido. Recordemos la catarata de proyectos de ley que debimos aprobar velozmente antes del 27 de octubre del año pasado porque creaban cargos o autorizaban contrataciones. Recuerdo solo uno, el relativo a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que tuvimos que aprobar rápidamente porque creaba un cargo. Y hubo varios otros.

Recordemos también la cantidad de concursos que muchos organismos se apuraron a concretar para poder nombrar a los nuevos funcionarios antes del 27 de octubre, porque la Constitución impide que se realice después de esa fecha.

En este caso, estaremos aprobando una iniciativa que autoriza a contratar. La Constitución de la República debe ser interpretada en sentido estricto; cuando habla de cargos, habla de todos. La contratación de un funcionario no refiere al cargo presupuestal, sino a revistar en la nómina de funcionarios que se transforman en dependientes de una administración. Entonces, claramente, se está violando la Constitución. En tiempo prohibido estamos en los doce meses anteriores a la elección ordinaria no podemos aprobar esto. Supongo que, luego de la modificación constitucional de 1996, la disposición está referida a la segunda vuelta, pero es claro que optamos por el 27 de octubre. O sea, antes del 27 de octubre del presente año no se puede crear cargos, pero en este caso lo estamos haciendo.

El artículo 97 de la Ley Nº 19.121 establece: "No se podrán celebrar contratos en los doce meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno. […]". Esto refiere a otra cosa: no se pueden realizar contratos en los doce meses anteriores al 28 de febrero de 2020. Y también estamos en ese período de doce meses.

Y continúa el artículo 97: "No obstante, se podrán incorporar en un cargo presupuestado a los provisoriatos que en dicho período hayan superado la evaluación correspondiente". Refiere a quienes ya eran funcionarios, pero tenían otro tipo de contrato; se los incorpora al contrato de provisoriato; tenían un contrato temporal, de derecho público y pasaban a este; eso sí se podía hacer, pero la ley prohíbe contratar.

Se me podrá decir que, a partir de la aprobación de este proyecto de ley, lo que la Institución deberá hacer para contratar será esperar hasta después del 27 de octubre. Es probable, pero de todos modos estaríamos violando el artículo 229 de la Constitución.

Además, la redacción que se da a esta disposición no es correcta. La ley no puede determinar genéricamente la contratación. El artículo 2º de este proyecto establece: "[…] dispondrá asimismo las contrataciones de personal necesarias […]". Las contrataciones tienen que ser determinadas. La ley establece qué tipo de contratos se deben hacer y, además, la fuente de financiamiento.

El artículo 86 de la Constitución de la República establece: "La creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante las leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV.- Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cubiertos". Y dice, además: "Pero la iniciativa para la creación de empleos [...] corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo".

En este caso, el proyecto de ley, sin iniciativa del Poder Ejecutivo me parece, aunque no es lo más importante ni relevante, que crea contratos sin determinar de qué tipo son, a qué función serán dedicados ni qué dotación presupuestal tendrán, cuál será la fuente. Inclusive, procede violentando el artículo 229, porque corresponde al período en que está específicamente prohibido hacerlo.

La verdad es que no me parece necesario que al votar un proyecto de esta importancia y naturaleza incurramos en esta violación de la Constitución. Perfectamente la Cámara podría desglosar esta segunda parte del primer inciso del artículo 2° y dejar vigente lo que dice al principio: "La INDDHH podrá delegar en uno o más de sus directores, total o parcialmente, la implementación del cometido asignado por esta ley". Se podría desglosar el artículo 2º y votarlo en noviembre. Dejamos establecido que si se desglosa el artículo 2º de la ley tal como está, hay voluntad política para ello, pero no se puede votar ahora.

Yo no participé en la discusión de la Comisión, pero entiendo que, tal como está redactado, el proyecto pretende dar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la posibilidad de contratar a personas que se dediquen exclusivamente a la búsqueda en el campo, en el terreno, y eso no lo puede hacer con los funcionarios que tiene, que son especializados en otras tareas y no en esa concreta. Le deja las manos libres. Y está bien: le tenemos que dar esa herramienta. Es el presupuesto del Poder Legislativo el que lo va a hacer, pero el Poder Legislativo no puede votar una norma que es violatoria de la Constitución. Tenemos que acostumbrarnos a que, aunque sea incómoda, hay que respetarla, es nuestra barrera de contención. No podemos pasarle por arriba porque nos incomoda o porque nos genera un problema. Si esto lo

hubiéramos hecho hace unos meses, no tendríamos problema, pero ahora, sí.

Por lo tanto, no voy a votar la segunda parte del primer inciso del artículo 2°, que propongo se desglose y se trate en una iniciativa parlamentaria que sea considerada cuando la Constitución nos habilite, que es luego del 27 de octubre.

Gracias.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Muchas gracias, señora presidenta.

Este tema se trató en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración en forma rauda, en función de que nos enfrentamos a la proximidad del inicio del receso. Nosotros no estuvimos presentes porque a esa misma hora asistimos a la Comisión de Industria, Energía y Minería, a la que comparecía el ministro del ramo, que habíamos convocado por diversos asuntos. Por lo tanto, no tuvimos oportunidad de pronunciarnos en la Comisión.

Quiero adelantar, respaldando y suscribiendo todo lo que ha dicho el señor diputado Gandini que ya ha insinuado cuál será nuestra tesitura a este respecto, que el Partido Nacional va a votar en general este proyecto de ley. Nos vamos a oponer a algunas disposiciones en particular, la que mencionaba el diputado Gandini y alguna que voy a agregar, pero en términos generales vamos a ratificar la conducta política y parlamentaria que el Partido Nacional protagonizó en el Senado cuando se trató este tema.

Por supuesto que estamos de acuerdo con el cometido que establece el artículo 1º. Todos estamos comprometidos con él; todos los integrantes de esta Cámara, los partidos políticos, los noventa y nueve diputados, sin excepción. Estoy absolutamente seguro de eso. La búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas, como dijo muy bien el diputado Rubio, es un imperativo ético. El señor diputado Coitiño habló de la deuda del sistema político. Todos debemos considerarnos codeudores en ese sentido, en función de la relativa escasez de los avances que en esta materia se han producido.

La búsqueda de la verdad, desde el punto de vista del objetivo del Estado, nunca estuvo en cuestión y nunca fue motivo de cortapisa, limitación o preclusión de ninguna especie por ninguna ley.

El artículo 4º de la ley de caducidad establece expresamente la obligación del Poder Ejecutivo de la época, de los que vinieron después y de los que vengan en el futuro en cuanto al esclarecimiento de los hechos. Más allá de la interpretación histórica, nosotros asociamos la ley de caducidad con el sacrificio personal y político de Wilson Ferreira Aldunate, en una coyuntura acerca de la que no vamos a abrir un debate ahora, pero que siempre entendimos y seguimos entendiendo como de debilidad institucionalidad y hasta de crisis institucional, en la etapa de transición de la dictadura a la democracia que se estaba procesando en ese momento, en ese primer gobierno democrático que era absolutamente legítimo, pero que también era una instancia de afirmación institucional.

La ley de caducidad respondió a la circunstancia que se dio en diciembre de 1986, pero, muy lejos de abdicar o renunciar a la búsqueda de la verdad, el artículo 4º reafirma expresamente una definición de Estado que se mantiene vigente y que en algún sentido se entrelaza con el proyecto que estamos analizando en el día de hoy.

Sin perjuicio de eso, algunos de los instrumentos o facultades que se consagran no están debidamente resueltos. Aunque no haya sido la intención, en muchos aspectos hay una invasión de la competencia del Poder Judicial, que puede ser inconveniente. Además, hay una afectación de los principios y de los criterios que establecimos recientemente con relación al nuevo sistema de inteligencia del Estado, uno de cuyos principios cardinales son, precisamente, la confidencialidad y la reserva.

Hace pocos días, en la comisión bicameral encargada del seguimiento y contralor del sistema de inteligencia, recibimos al secretario de ese sistema, general Martínez, quien puso el énfasis en la reserva. Suspendimos la toma de la versión taquigráfica. En estas cuestiones hay valores, aspectos y condiciones que es imperioso respetar y que definen límites que no se deben traspasar ni siquiera cuando los objetivos que eventualmente puedan invocarse como este sean de importancia, de jerarquía y de relevancia suficiente como para que cualquier fin, o ese fin, justifique los medios. Los límites deben observarse porque, de lo contrario, después tendremos que lamentar

ulterioridades; a la hora de legislar es necesario prevenirlas y evitarlas.

El artículo 2º, más allá de las objeciones que planteó el señor diputado Gandini, que comparto, establece en su inciso primero una delegación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, del propio organismo, en alguno de sus integrantes. Yo creo que no es conveniente, porque la competencia del órgano es del órgano y, en este caso, del directorio o del consejo directivo de la Institución en su conjunto, que como tal debe asumir la responsabilidad institucional que la ley le conferirá a partir de la aprobación de esta norma. Puede parecer un tema menor, pero no está bien que a texto expreso se establezca una delegación de estas características porque, además, contraviene los principios de carácter general del derecho administrativo.

El artículo 3º tampoco nos satisface. A texto expreso, la ley de creación de la mencionada Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, precisamente, para preservar la competencia y la jurisdicción del Poder Judicial, consagra que en aquellas causas en las que haya una investigación judicial en marcha la Institución debe abstenerse de intervenir. Es necesario preservar este aspecto, porque lo otro implica sustraer al Poder Judicial competencias en función de cuya naturaleza originaria tiene. Esa disposición, tal como vino del Senado, es por lo menos peligrosa.

El artículo 6º tiene que ver con algo que ya dije y es que se consagra un acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia.

Tampoco nos gustan los artículos 7º y 8º, en cuanto implican la posibilidad de ingresar a cualquier lado sin orden del juez o poder citar a personas y funcionarios estableciendo una consecuencia penal para cuando no concurran, como acontecería en el caso de una citación del Poder Judicial. Estas son prerrogativas y facultades típicas del Poder Judicial que no está bien acordar para un organismo que, después de todo, es un órgano desconcentrado del Poder Legislativo.

La naturaleza jurídica de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo no está demasiado bien definida en la Ley Nº 18.446, que es la de su creación; en esa norma se establece como un instituto del Poder Legislativo. En los hechos, entiendo que funciona como una suerte de órgano desconcentrado, con su autonomía técnica y con los cometidos que la ley determina.

Creo que debemos ser respetuosos del equilibrio y la separación de los poderes y contemplarlos a la hora de legislar. En definitiva, estaríamos dando, con relación a una causa noble con la que, reitero, todos nos sentimos comprometidos, un conjunto de poderes, prácticamente ilimitados, que ni siquiera el Poder Judicial tiene en esos términos, y mucho menos el Poder Legislativo, que es el Poder que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo integra.

Hechas estas salvedades, diré que vamos a votar en forma afirmativa, con mucho gusto, convencidos de que hay cuestiones de carácter ético y razones de carácter histórico. En el caso del Partido Nacional, lo digo invocando a Wilson Ferreira Aldunate, es un mandato histórico que tiene que ver con nuestra interpretación del pasado reciente y nuestra conducta reciente, en el marco de esa historia que, a nuestro juicio, sin ninguna duda, está expresada en el cometido consagrado en el artículo 1º de este proyecto.

Una salvedad final: no sé cuál será el destino de la llamada Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Lo habríamos preguntado en la Comisión, si hubiéramos tenido la oportunidad de dar a este proyecto de ley el tratamiento razonable y normal que corresponde a todos y, especialmente, a los de esta importancia. No sabemos cuál será su destino, en la medida en que las competencias del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia pasan a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y que hay tareas de seguimiento que proseguirá el Poder Ejecutivo, pero que estarán a cargo de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura. No sé si esa Secretaría habrá de suprimirse ni si tendrá algún sentido mantenerla vigente.

En el artículo 12 se establece una tarea de digitalización a cargo de la Presidencia de la República. No sé si ese será el cometido que cumplirá a futuro. Puede parecer un tema menor, pero está relacionado con aspectos presupuestales que, como expresaba el señor diputado Jorge Gandini, en las instancias que corresponden, que es la elaboración y aprobación de la próxima ley de presupuesto,

quedarán pendientes de ser abordadas y resueltas por la próxima administración.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- Señora presidenta: quiero celebrar la oportunidad de decir algunas palabras con respecto a este proyecto de ley. Por la celeridad de su tratamiento y las características de esta jornada, en la que tenemos muchos proyectos a consideración del Cuerpo, no ha sido posible el formato habitual, que es el de contar con un informe leído y distribuido. Pero eso no quita que uno quiera manifestar algunos conceptos.

En primer lugar, anunciamos nuestro acuerdo con el proyecto de ley. Acompañaremos esta iniciativa que proviene del Poder Ejecutivo y que tuvo tratamiento en el Senado hace no muchos días; accedimos a la versión taquigráfica correspondiente.

En segundo término, esta materia todavía es una herida abierta en la sociedad uruguaya. Refiere a los derechos humanos y a una situación heredada de épocas predemocráticas, es decir, antes de 1985, y concentradas, aunque no exclusivamente, en la dictadura militar.

Con seguridad, el proyecto requiera algún ajuste, que se podrá hacer en la próxima legislatura. Es muy probable que la ley presupuestal deba corregir algunas cuestiones y establecer una asignación presupuestal, a efectos de que se pueda realizar la tarea que se encomienda.

Hay un aspecto muy importante que debo señalar. Al encargarse este trabajo, que hacía la Secretaría de Derechos Humanos dependiente de la Presidencia a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que, a su vez, tiene una designación del Parlamento no solo se jerarquiza el abordaje de un tema tan sensible para la sociedad y para la memoria histórica, sino que se dan garantías superiores a las que hoy existen desde el punto de vista institucional. ¿Por qué? Porque, a la larga o a la corta, se trata de una institución cuya designación tiene un tratamiento parlamentario y que, además, requiere acuerdos que, generalmente, incluyen la voluntad de más de un partido. En ese sentido, se da jerarquía institucional a un tema de total relevancia.

Esto, de ningún modo y bajo ningún concepto, sustituye u obstaculiza el trabajo independiente de un Poder del Estado como el Poder Judicial. No sucede con la Secretaría de Derechos Humanos y tampoco acontecerá cuando estas tareas estén a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Por otra parte, esta Institución puede dar una línea distinta a lo que podría ser el vaivén político de los partidos en el gobierno. La composición de la Institución asegura un intercambio y una pluralidad que la aleja de cualquier sentido político-partidario específico, y esa también es una garantía suplementaria.

Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer algunos comentarios que me surgen de determinadas intervenciones que se han hecho en sala.

Primera cuestión: sin duda, la actuación libre y legítima de la Justicia en nuestro país se vio interrumpida por distintas razones que, por supuesto, tienen que ver con la dictadura militar, con lo que representó la sujeción del Poder Judicial y la situación institucional propia de la dictadura cívico-militar.

Segunda cuestión: en este país se votó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado, popularmente llamada ley de impunidad. Como muy bien señalaba el señor diputado Abdala, a partir de lo establecido en su artículo 4º, la ley facultaba a actuar al Poder Ejecutivo. Como militantes políticos, nos enfrentamos a esa ley, como muchos otros uruguayos, juntando firmas casa por casa. Cada uno militó en la elección por el voto verde o el voto amarillo, en el contexto de los años ochenta. Lamentablemente, la ley se consolidó a partir del legítimo pronunciamiento popular a través del voto amarillo. Desde el punto de vista político, quizás haya sido una de mis mayores tristezas. Las elecciones por candidatos de distintos partidos políticos tienen otra naturaleza; en aquella elección estábamos analizando, como sociedad, asuntos de valores muy caros. Pero, bueno, ese fue el laudo de la ciudadanía.

Después, hasta el año 2005, ningún gobierno soltó las manos a la Justicia para que pudiera actuar. ¡Ninguno! El primer intento, con bastante presencia, fue durante el gobierno del doctor Jorge Batlle. Queremos destacar lo que fue la Comisión para la Paz, que

implicó un avance importante desde el punto de vista institucional o, por lo menos, marcó una voluntad distinta a la de los dos gobiernos anteriores. Pero, en verdad, fue recién a partir del año 2005 -esta no es una cuestión fundacional, sino de hechos objetivos- que aquellos torturadores, asesinos o golpistas que caminaban libremente como cualquier ciudadano por las veredas de nuestras ciudades, pasaron a tener el mismo régimen legal que cualquier persona, a ser juzgados por los delitos de los cuales se les acusaba y a ser condenados con las garantías del debido proceso que, obviamente, no tuvieron sus víctimas y no se pudieron aplicar por la ley de caducidad. Insisto: ningún gobierno, hasta el año 2005, dio libertad al Poder Judicial siquiera para que pudiera investigar.

Que hay todavía mucho por hacer y que tenemos una deuda como sistema político en su conjunto, más allá del partido de gobierno, sin duda es cierto. La sociedad en su conjunto la tiene y nosotros, como representantes de la ciudadanía, también; pero eso no quita que, respetando la separación de poderes, respetando las leyes del juego democrático y de las instituciones, podamos decir que en este país, a partir del año 2005, cuando se empezó a aplicar el artículo 4° de la ley de caducidad, luego derogada, se pudieron llevar adelante algunas acciones que comenzaron, no digo que a esclarecer hechos que implicaban la aparición de restos de detenidos desaparecidos, sino a hacer justicia. Insisto en esto porque a veces se atribuye o se focaliza en determinada etapa, pero la verdad de estos hechos es que el Estado uruguayo recién a partir de los últimos años comenzó a avanzar con respecto a la justicia en temas en los que jamás se debería tener cintillo político-partidario ni cosa que se le parezca.

Estamos hablando de cuestiones que hacen a la integridad de las personas y de gente que todavía sigue reclamando justicia, que todavía sigue esperando que el Estado uruguayo llegue a la verdad y a ese valor que acabamos de manifestar.

(Ocupa la Presidencia el señor representante Óscar Groba)

——Por eso, finalizo expresando que este proyecto de ley va en el sentido correcto de llevar adelante una investigación y avances en materia de derechos humanos con respecto al pasado reciente. Esa es la única manera de llegar a la verdad y hacer justicia, así como de reconciliar genuinamente a la sociedad en su conjunto, a través de una reparación de la memoria histórica, sin dejar nada debajo de la alfombra, mirando lo que pasó y diciendo las cosas por su nombre. Además, dando a este país una institucionalidad que no sustituya la libre actuación de los poderes del Estado, sino permitiendo que uno de ellos, a través de una dependencia que ya tiene rango legal, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, pueda tomar acciones con más energía y determinación y, por supuesto, con garantías para la sociedad en su conjunto y, en particular, para este Parlamento, que es el que la designa.

Nada más, señor presidente; muchas gracias.

13.- Licencias.

Integración de la Cámara

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Licencia por motivos personales:

Del señor representante Washington Silvera, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose al suplente siguiente, señor Julio Pérez Huelmo.

No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes señora Ivonne Sosa y señora Pilar De Amores.

Del señor representante Javier Umpiérrez, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose al suplente siguiente, señor Roberto Frachia.

No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes señor Ismael Paradeda Cabrera y señora María de los Ángeles Fadul Varela.

Del señor representante Álvaro Dastugue, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose a la suplente siguiente, señora Grisel Pereyra.

No acepta la convocatoria, por esta única vez, el suplente siguiente señor Ignacio Estrada.

Montevideo, 12 de setiembre de 2019

FITZGERALD CANTERO, SILVIA HERNÁNDEZ, PAULA PÉREZ LACUÉS".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, y se los invita a pasar a sala.

14.- Intermedio

SEÑOR VERRI (Walter).- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR VERRI (Walter).- Señor presidente: solicitamos un intermedio de media hora.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta: AFIRMATIVA.

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 13 y 50)

(Ocupa la Presidencia la señora representante Cecilia Eguiluz)

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Eguiluz).- Continúa la sesión.

(Es la hora 14 y 49)

15.- Licencias.
Integración de la Cámara

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución:

Licencia por motivos personales:

De la señora representante Gloria Rodríguez, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose al suplente siguiente, señor Ernesto Carreras.

No acepta la convocatoria, por esta única vez, el suplente siguiente señor Andrés Abt.

Del señor representante Óscar De los Santos, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose al suplente siguiente, señor Pablo Pérez González.

Montevideo, 12 de setiembre de 2019

FITZGERALD CANTERO, SILVIA HERNÁNDEZ, PAULA PÉREZ LACUÉS".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, y se los invita a pasar a sala.

16.- Detenidos desaparecidos. (Se comete su búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo)

Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Walter Verri.

SEÑOR VERRI (Walter).- Señora presidenta: luego del intermedio, quiero trasmitir la posición tomada por la bancada del Partido Colorado de votar afirmativamente el proyecto de ley, con la salvedad de algunos artículos; durante la discusión explicaremos por qué no los acompañamos.

Votaremos este proyecto porque creo que ninguno de los que estamos en esta sala y, seguramente, ningún uruguayo piense diferente en cuanto a que se sepa la verdad sobre nuestros desaparecidos, a que aparezcan y a que sus familias puedan hacer el duelo que corresponde. Creo que en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Sea cual sea el camino, debemos transitarlo.

En la propuesta se plantea un cambio en cuanto a quién debe llevar adelante ese proceso. Durante veinte años, el Poder Ejecutivo ha sido el encargado de realizar esa tarea. Desde la Comisión para la Paz, con una integración multipartidaria y social, creada por el doctor Jorge Batlle -primer eslabón de esta cadena-, hasta la última comisión, creada por el Poder Ejecutivo del doctor Tabaré Vázquez, ese ha sido el camino.

Hoy, al final de un mandato, sobre la hora y sin tiempo de analizarlo debidamente, estamos considerando

un proyecto que tiene algunas sospechas de inconstitucionalidad, sobre todo en lo que refiere al principio de separación de poderes. Nuestra Constitución es muy clara en cuanto a la separación de sus tres poderes y a quién tiene que investigar en el país.

Algunos artículos del proyecto dan competencias a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que no son claras en materia de constitucionalidad, pero compartimos el espíritu de la iniciativa y esa es la razón por la cual la votaremos.

Como decía, no acompañaremos ciertos artículos. Creemos que a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que es un delegado del Poder Legislativo, se le dan competencias para investigar y citar testigos que ni siquiera tiene el Parlamento. Inclusive, cuando en esta Casa se conforman comisiones investigadoras podemos convocar a quien entendamos pertinente, pero no podemos obligarlo a concurrir y, si no viene, no tenemos forma de sancionarlo. A nuestro juicio, este proyecto se extralimita, ya que establece la aplicación de sanciones a los ciudadanos que no vayan a declarar. Creo que no debemos acompañar estos aspectos de la norma, pero compartimos el espíritu y la racionalidad en cuanto a que debe existir un sustento institucional más sólido y estable.

Pese que tenemos salvedades con el proyecto, lo votaremos afirmativamente en general, y en contra algunos artículos que nos merecen reparos.

SEÑORA GRAUERT HAMANN (Elena).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Eguiluz).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GRAUERT HAMANN (Elena).- Señora presidenta: acompaño la posición del diputado preopinante.

La bancada del Partido Colorado ha decidido apoyar en general el proyecto de ley porque se trata de un tema sumamente sensible que en el transcurso de la historia ha generado muchísima preocupación. Somos los primeros que queremos que esto se aclare, que se encuentre a todos los desaparecidos y se dé respuesta a sus familiares.

Entendemos que hay que apoyar el espíritu del proyecto, si bien no acompañaremos muchos de sus artículos.

Tal como expresó el señor diputado Gandini, creemos que en el artículo 2° se viola la Constitución al disponer la contratación de personal.

Asimismo, consideramos grave lo que se plantea en el artículo 3° porque, claramente, se estaría violando la separación de poderes. El Poder Judicial es independiente, y resulta sumamente importante que la República conserve la separación de poderes y el control entre ellos. La Ley N° 18.446 establece que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo tiene competencia de investigación hasta que el Poder Judicial intervenga. Está muy bien que sea así y que se mantenga de esa manera. Permitir que no se cumpla, implicará una violación a la separación de poderes y, por lo tanto, no lo votaremos.

Tampoco acompañaremos el artículo 7°, porque entendemos que ningún otro órgano más que el Poder Judicial tiene competencia para acceder en forma irrestricta a lugares y establecimientos que se consideren relevantes para una investigación en curso. Si se aclarara que se deberá pedir autorización al Poder Judicial o se estableciera algún tipo de fiscalización por quien tiene las responsabilidades constitucionales para hacerlo, podríamos acompañarlo. Pero de esta forma, tal como está redactado, puede dar lugar a abusos importantes.

Hoy la comisión tiene determinada integración, pero mañana puede cambiar; por eso son las garantías y por eso hay un marco jurídico constitucional que se debe respetar. Quien puede acusar es la fiscalía y el que tiene que sentenciar es el Poder Judicial, no un órgano que es nombrado por fuera de la separación de poderes. Eso tiene que ser muy claro, y es por eso que no lo podemos acompañar.

Lo mismo pasa, quizás en forma expresa y mucho más grave, cuando en el artículo 8° se habla de desacato. No hay desacato ante la negativa de concurrir cuando cita el Parlamento, pero sí lo hay cuando cita una comisión. Se le están dando poderes fuera de lo que constitucionalmente corresponde.

No tenemos inconveniente en que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo tenga competencias para investigar, para denunciar, para atender a las personas que hagan denuncias, para recibir la información y que sea uno de los principales colaboradores de la Justicia, pero es esta la que siempre tiene que actuar, porque esa es

su competencia constitucional. Si no lo respetamos, estaremos borrando uno de los poderes más importantes que tiene la República.

Por ese motivo, el Partido Colorado va a votar en general este proyecto, pero no acompañará esos artículos y alguno más que no he mencionado.

Muchas gracias.

17.- Intermedio

SEÑORA PEREYRA (Susana).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Eguiluz).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- Señora presidenta: solicito un intermedio de quince minutos.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Eguiluz).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 14 y 59)

——Continúa la sesión.

(Es la hora 15 y 14)

18.- Detenidos desaparecidos. (Se comete su búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo)

——Prosigue la consideración del asunto en debate.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta en setenta y dos: AFIRMATIVA.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señora presidenta: he votado negativamente este proyecto de ley. Los compañeros de la bancada del Partido Colorado han resuelto proceder de otro modo, pero actúo en el ámbito de mi libertad. En tal sentido, ratifico los argumentos por los cuales ayer, en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, me opuse a este proyecto de ley.

Por supuesto que la finalidad de buscar y encontrar a los detenidos desaparecidos o sus restos es compartida por todos. El fin no está en discusión; lo que discutimos son los medios. Nos parece que el instrumento que se propone no es adecuado porque se crea una especie de institucionalidad paralela a efectos de cumplir una tarea que, de acuerdo con nuestra Constitución y nuestra legislación, corresponde al ministerio público y al Poder Judicial, con el auxilio de la Policía o de otras manifestaciones de la fuerza pública, cuando corresponda.

En este caso, se comete a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la tarea, no solo de buscar a las personas detenidas y desaparecidas, sino de investigar la verdad sobre los hechos y la ubicación de los restos. Insisto: ello implica crear una institucionalidad paralela a la que funciona para todos los demás casos que en el país requieren investigación, para todos los demás delitos cometidos. Al convocar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para esta tarea se modifica su régimen legal porque, según el artículo 3º del proyecto, no será de aplicación la inhibición prevista por el artículo 6º de la Ley Nº 18.446, que es la que dice que la Institución no puede intervenir donde ya esté actuando el Poder Judicial.

Entiendo perfectamente lo que decía el señor diputado Alejandro Zavala hace unos momentos. Si no existiera esa disposición, sería vana la convocatoria a la Institución, porque en todos los casos actuaría el Poder Judicial. Precisamente por eso es que no considero satisfactorio el argumento, puesto que va a incidir donde están actuando el Poder Judicial y el ministerio público, al cual, además, se incorporó una fiscalía especializada para el tratamiento de los delitos de lesa humanidad.

Me parece que se van a generar contiendas de competencia, situaciones de conflicto, de roces entre la Institución por un lado y el Poder Judicial y el ministerio público por otro, nada de lo cual creo conveniente.

Además, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo -creación de este Parlamento- se le dan facultades que el Parlamento

no tiene, como ya se ha expresado. Cuando la Institución cite a declarar bajo apercibimiento de que el que no concurra incurrirá en desacato -cosa que no sucede ni cuando el que cita es el ministerio público-, las personas que sean investigadas ni siquiera tendrán la facultad de requerir el auxilio de un abogado, porque en materia de garantías no se prevé absolutamente nada.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Por todas estas razones, y haciendo abstracción de otras consideraciones de carácter político a las que se prestaría este debate -desde mi punto de vista, quedaron laudadas por dos pronunciamientos populares en 1989 y 2009-, no habré de extenderme más.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- En discusión particular.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- Pido la palabra para una cuestión de procedimiento.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- Señora presidenta: propongo que se suprima la lectura de todos los artículos y que se voten en bloque, exceptuando las normas que la oposición no acompañe con su voto.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señora presidenta: estoy de acuerdo con la sugerencia del señor diputado Alejandro Zavala, y pediré que se desglosen los artículos 2º, 3º, 6º, 7º y 8º.

SEÑOR VERRI (Walter).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR VERRI (Walter).- Señora presidenta: solicito el desglose del artículo 9º.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Se va a votar el procedimiento propuesto por el señor diputado Alejandro Zavala.

(Se vota)

——Sesenta y seis en setenta y seis: AFIRMATIVA.

En consecuencia, vamos a votar en bloque el proyecto, excepto los artículos 2º, 3º, 6º, 7º, 8º y 9º.

En discusión todos los artículos del proyecto, excepto los artículos 2º, 3º, 6º, 7º, 8º y 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en setenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en setenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en setenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en setenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en setenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta y seis: AFIRMATIVA.

SEÑORA ANDRADE (Susana).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA ANDRADE (Susana).- Señora presidenta: creemos que, con sus virtudes y defectos, este proyecto de ley tiende a garantizar la continuidad de la investigación y la búsqueda de las personas detenidas,

torturadas, asesinadas y desaparecidas por la actuación ilegítima y el terrorismo de Estado ejercido por la dictadura cívico-militar en el Uruguay, junto a sus aliados y secuaces. Estos cómplices hasta hoy encubren el destino de los restos humanos que, al ir apareciendo y también al no aparecer por el silencio criminal de algunos que saben y no hablan, o por los que interponen dilatorias en los juicios, nos cuentan una versión oculta de la historia reciente; historia de crímenes de lesa humanidad que por obra de este gobierno y también de legisladoras y legisladores que hoy votaron este proyecto de ley no quedarán impunes. Seguramente, con ley o sin ley, esa historia siempre estará presente en la denuncia social de los familiares directos y del pueblo uruguayo que sufrió y aún sufre las consecuencias de la barbarie organizada que tuvo su máxima expresión regional en el Plan Cóndor.

Por verdad, memoria y justicia, y, fundamentalmente, por garantías de no repetición, agradeciendo la lucha inclaudicable de las organizaciones de derechos humanos que empujan sin desmayo estos procesos, que logran que seamos una mejor y más sustentable democracia, es que voté afirmativamente y con mucho placer cívico este proyecto de ley.

Es cuanto quería decir, muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en setenta y seis: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"Artículo 1º.- Cométese a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado ocurrida entre el 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985.

La tarea que se comete comprende la investigación de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición y la ubicación de los restos.

Artículo 2º.- La INDDHH podrá delegar en uno o más de sus directores, total o parcialmente, la implementación del cometido asignado por esta ley. La INDDHH dispondrá asimismo las contrataciones de personal necesarias para dar cumplimiento a la tarea encomendada por el Artículo 1º de la presente ley. Tales contrataciones no estarán limitadas a personas provenientes de la función pública.

La INDDHH podrá asimismo hacerse asesorar por expertos nacionales e internacionales con especial versación en las temáticas relativas al cometido estipulado en el Artículo 1º de la presente ley.

Artículo 3º.- A los efectos del cumplimiento del cometido establecido en esta ley, no será de aplicación la inhibición prevista por el Artículo 6 de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008.

Artículo 4º.- Para llevar adelante su tarea, la INDDHH dispondrá de todas las facultades y competencias que le otorga la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, especialmente las previstas en su Artículo 35, con las modificaciones dispuestas por la presente ley.

Artículo 5º.- Habilítase a la INDDHH a suscribir los convenios necesarios, tanto en el ámbito nacional como internacional para dar cumplimiento al mandato del Artículo 1º de la presente ley.

Artículo 6º.- La INDDHH, a través de los miembros designados para la tarea que se comete, tendrá acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos de instituciones públicas o privadas que pudieren ser relevantes para la búsqueda de la verdad de lo sucedido con las víctimas de desapariciones forzadas.

Podrá también requerir copia de tales archivos debiéndosele remitir las mismas en su integridad sin que se puedan oponer criterios de secreto, confidencialidad o reserva de todo o parte de su contenido, conforme lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008.

La información o copias requeridas deberán ser entregadas en los plazos indicados por la INDDHH. La negativa a cumplir con lo requerido por la INDDHH constituirá el delito previsto por el Artículo 173 del Código Penal.

La INDDHH deberá mantener reserva respecto de la información recabada que no fuere relevante para el cumplimiento de su mandato y también respecto a aquella relacionada con las personas de las que ha recibido colaboración.

Artículo 7º.- Para el cumplimiento del cometido conferido por la presente ley podrá exigir el acceso irrestricto a todos los lugares y establecimientos que se consideren relevantes para las investigaciones en curso.

La negativa a cumplir con lo requerido por la INDDHH constituirá el delito previsto por el Artículo 173 del Código Penal.

Artículo 8º.- La INDDHH estará facultada para citar a funcionarios del Estado, así como a particulares para que presten declaración ante los miembros de la INDDHH que lleven adelante el cometido conferido por la presente ley.

La concurrencia será obligatoria siendo pasible de aplicación lo dispuesto en el Artículo 173 del Código Penal en caso de inasistencia injustificada.

La declaración que se formule en esta instancia estará sujeta a lo dispuesto por el Artículo 180 del Código Penal, lo que se hará saber al compareciente.

Artículo 9º.- Sin perjuicio de lo establecido por el literal D) del Artículo 35 de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, se podrá requerir de los órganos competentes del Estado la adopción de las medidas precautorias pertinentes a fin de asegurar la concurrencia de personas ante la INDDHH cuyo testimonio sea relevante para las investigaciones, todo ello conforme el procedimiento y requisitos previstos en los artículos 306 y siguientes del Código General del Proceso o artículos 216, 221 y 222 del Código del Proceso Penal, en lo que fuere aplicable.

Artículo 10.- En la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos se dará continuidad a las tareas arqueológicas que al presente lleva a cabo el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, definiéndose en lo sucesivo conforme el plan estratégico que diseñe la INDDHH para el cumplimiento del cometido asignado. A tales efectos se le confieren amplias facultades para disponer las exhumaciones de carácter administrativo, en predios públicos o privados, que sean necesarias.

Artículo 11.- Los archivos y repositorios documentales existentes en la órbita del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia pasarán en su totalidad a la INDDHH.

Artículo 12.- La Presidencia de la República continuará con las tareas de digitalización de toda la información existente sobre la materia y se la entregará a la INDDHH que oficiará como repositorio.

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo mantendrá los convenios ya suscritos con la Universidad de la República en cuanto a los archivos y testimonios y en su caso los renovará o realizará otros nuevos, a los efectos de contar con un relevamiento exhaustivo. El resultado de dichos trabajos será depositado en la INDDHH.

Artículo 14.- Cométese al Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales el seguimiento del estado de cumplimiento de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, de carácter nacional o internacional, así como de las recomendaciones dictadas por los organismos de supervisión en la materia, así como del estado de situación de causas, juicios y denuncias a nivel nacional, sin perjuicio de los cometidos de la INDDHH y de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

Artículo 15.- La INDDHH mantendrá una comunicación directa con la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, creada por la Ley Nº 19.550, de 25 de octubre de 2017, en función de las necesidades que identifique en el cumplimiento del actual mandato legal que se le confiere.

Artículo 16.- Hasta tanto no se proceda a la sanción del presupuesto de la INDDHH de acuerdo con los artículos 74 y siguientes de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, el Poder Ejecutivo proveerá los recursos financieros que permitan cumplir con el cometido de esta ley, sobre la base de lo asignado a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia".

19.- Licencias.

Integración de la Cámara

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Licencia por motivos personales:

Del señor representante Fernando Amado, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose a la suplente siguiente, señora Dianne Martínez.

El suplente siguiente, señor Fitzgerald Cantero, ha sido convocado por el Cuerpo para ejercer la suplencia de otro representante.

Del señor representante Enzo Malán Castro, por el día 15 de setiembre de 2019, convocándose al suplente siguiente, señor Aníbal Méndez.

Montevideo, 12 de setiembre de 2019

FITZGERALD CANTERO, SILVIA HERNÁNDEZ, PAULA PÉREZ LACUÉS".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

20.- Alteración del orden del día

Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora diputada Susana Pereyra.

(Se lee:)

"Mociono para que el punto que figura en decimoséptimo término del orden del día pase al cuarto lugar".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cuatro en setenta y seis: AFIRMATIVA.

21.- Derechos de autor. (Modificación del artículo 29 de la Ley N° 9.739)

Se pasa a considerar el asunto que figuraba en decimoséptimo lugar del orden del día y pasó a ser cuarto: "Derechos de autor. (Modificación del artículo 29 de la Ley N° 9.739)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1112

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

Anexo I

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Sebastián Sabini.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Señora presidenta: durante este período, en la Comisión de Educación y Cultura discutimos mucho los temas de derechos de autor.

Seguramente, la Cámara recuerde cómo comenzamos, allá por 2011, todo el debate en torno a la problemática del acceso a los materiales de estudio. Por este tema la Comisión recibió a muchísimas delegaciones desde 2015 en adelante, además de las que habíamos convocado en el período anterior. Entre ellas se encontraban las de los creadores, los productores y los directores de audiovisuales.

Una vez que el acuerdo macro en torno a la modificación de la ley de derechos de autor fracasó, lo conversamos en la Comisión y llegamos a un acuerdo relativamente amplio para que se trabajara con los directores y guionistas, que no estaban contemplados en la ley de 2003; por ejemplo, al realizar una película podían percibir sus derechos de creación y de autoría en otros países de la región, pero no en Uruguay.

Desde el momento en que presentamos este proyecto hasta su aprobación en el día de ayer en la Comisión de Educación y Cultura, comparecieron diferentes organizaciones vinculadas con esta temática. Recibimos a la Presidencia del Consejo de Derechos de Autor, al Consejo Directivo de Cambadu, al Centro Cinematográfico del Uruguay y a Creative Commons Uruguay. También recibimos a representantes de la Universidad de la República y de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod), uno de los principales impulsores de este proyecto. Una vez cumplida la ronda de consultas, el proyecto inicial fue modificado.

Esos cambios tienen que ver con dos aspectos fundamentales, uno de los cuales refiere a la categorización. La nueva redacción nuclea a los diferentes creadores audiovisuales, que antes tenían una definición variada director o realizador, autor del argumento, autor de la adaptación, autor del guion y diálogos, y dibujante, en las categorías de director y guionista.

Asimismo, incorpora un párrafo en el que queda claro que estos derechos no corresponden en el caso de que las obras audiovisuales se reproduzcan en un entorno no comercial ni oneroso. Creo que esa es una salvedad importante.

Probablemente no todas las demandas que se plantearon en la Comisión fueron atendidas, pero sí en su gran mayoría y, por lo tanto, el proyecto tiene una formulación final superior.

Quedan pendientes algunos aspectos que son muy importantes. En la ley de derechos de autor no figura el aspecto arancelario, cómo se va a aplicar lo recaudado y cómo se repartirá o en cuánto se establecerán estos aranceles; eso va a quedar fijado en la reglamentación, como ocurre con la mayoría de las leyes de derechos de autor.

Hay que destacar que el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los presentes en la Comisión. Es por eso que planteamos a la Cámara que lo acompañe, para finalmente reconocer tanto a los directores como a los guionistas sus derechos autorales de creación.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- Señora presidenta: quiero dejar constancia de dos cuestiones.

En primer lugar, manifiesto mi acuerdo con el tratamiento y el abordaje del proyecto que ha realizado la Comisión de Educación y Cultura, que brevemente nos ha señalado el señor diputado Sabini.

En segundo término, quiero señalar que este es un tema de mucha complejidad, con aspectos técnicos muy específicos, que requiere un abordaje con determinadas especificidades. Con este proyecto se cubre un aspecto que entendemos complementario de la legislación vigente hasta el día de hoy, que involucra a algunos actores relevantes de la cultura, como los reseñados, que hasta ahora no habían tenido el tratamiento que debían. Las normativas que el Uruguay sigue a nivel local e internacional, su internalización y lo dinámicas que por las nuevas tecnologías son este tipo de cuestiones hacen necesario algún tipo de actualización.

A la vez, aprovecho este fundamento de voto para plantear una reflexión sobre la necesidad de actualizar a la brevedad otros aspectos del tema que se estuvieron considerando en el Senado, referidos a la extensión de los derechos de autor de los intérpretes. Se trata de una cuestión polémica, pero entendemos que debería encararse; ojalá podamos, antes del cierre de esta legislatura -no hablo de hoy ni de mañana, sino de antes del 28 de febrero del año próximo-, avanzar en la materia como lo hicimos en lo que acabamos de señalar. Precisamente por eso, solo quiero establecer el acuerdo y el reconocimiento a este avance y encender una luz de esperanza para personalidades e intérpretes que durante años han aportado a la cultura nacional.

22.- Intermedio

SEÑOR SABINI (Sebastián).- ¿Me permite, señora presidenta?

Solicito un intermedio de cinco minutos.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cinco en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 15 y 35)

——Continúa la sesión.

(Es la hora 15 y 36)

23.- Derechos de autor. (Modificación del artículo 29 de la Ley N° 9.739)

——Prosigue la consideración del asunto en debate.

En discusión particular.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- ¿Me permite, señora presidenta?

Mociono para que se suprima la lectura.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y seis en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo único del proyecto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cuatro en setenta y siete: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"**Artículo único.-** Modifícase el artículo 29 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1939, con la redacción introducida por el artículo 10 de la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 29.- Los colaboradores, en uso del derecho que consagra el artículo 26, pueden publicar, traducir o reproducir la obra, sin más condición que la de respetar la utilidad proporcional correspondiente a los demás.

Cuando se trate de una obra audiovisual se presumen coautores, salvo prueba en contrario: el director o realizador, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor del guión y diálogos, el compositor si lo hubiere y el dibujante en caso de diseños animados.

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor, quien además queda investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, así como autorizado a decidir acerca de su divulgación.

Los autores de las obras musicales o compositores tendrán derecho a recibir una remuneración por la comunicación pública de la obra audiovisual, incluida la exhibición pública de películas cinematográficas, así como el arrendamiento y la venta de los soportes materiales. Se consagra asimismo, en forma independiente, el derecho a una remuneración en iguales términos en favor de los directores y guionistas. Para el ejercicio de este derecho, los directores y guionistas podrán constituir una entidad de gestión colectiva conforme a la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1939, en la redacción dada por la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003, pudiendo delegar la recaudación de dicha remuneración en otra entidad de gestión colectiva de creadores. Tanto la remuneración para los autores de obras musicales o compositores, como para directores y guionistas tendrán carácter irrenunciable e inalienable. Cuando la obra audiovisual sea publicada, comunicada o distribuida al público por el productor en forma no comercial, no onerosa, no corresponderá el pago de dicha remuneración.

Sin perjuicio del derecho de los autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario, defender los derechos morales sobre la obra audiovisual.

Se presume, salvo pacto en contrario, que es productor de la obra audiovisual, la persona física o jurídica que aparezca acreditada como tal en la obra en forma usual.

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de las creaciones a que refiere el inciso sobre programas de ordenador y bases de datos del artículo 5º de la presente ley han cedido al productor en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales sobre las mismas, lo que implica la autorización para decidir sobre su divulgación y para ejercer los derechos morales sobre la misma

Los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el productor realice o autorice la realización de modificaciones o versiones sucesivas de tales creaciones.

Cuando las creaciones a que refiere el inciso sobre programas de ordenador y bases de datos del artículo 5º de la presente ley, hayan sido realizadas en el marco de una relación de trabajo, sea pública o privada, cuyo objeto total o parcial tenga una naturaleza similar a la de dichas creaciones, se presume que el autor ha autorizado al empleador o comitente, en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales así como el ejercicio de los derechos morales, salvo pacto en contrario".

24.- Libertad vigilada. (Regulación)

——Corresponde tratar el asunto que figuraba en cuarto lugar del orden del día y que pasó a ser quinto.

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 139 del Reglamento, se va a votar si se considera el asunto en cuestión, ya que ingresó a la Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

Se requieren cincuenta votos conformes.

Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cuatro en setenta y seis: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Libertad vigilada. (Regulación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1208

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- Señora presidenta: no haré las veces de miembro informante porque el Reglamento no lo establece; solo diré que los tiempos de tratamiento de este proyecto de ley que ponemos a consideración del Cuerpo han sido, como todos sabemos, extremadamente exiguos.

Antes de entrar al fondo del asunto, a la explicación del proyecto de ley, quiero hacer algunas consideraciones previas que hacen a la discusión general o a cuestiones que entendemos de concepto. A veces tenemos que mirar en forma retrospectiva algunas cuestiones y decisiones de gobierno o de Estado.

(Ocupa la Presidencia el señor representante Luis Gallo Cantera)

——Las circunstancias de la vida, la confianza de mis compañeras y compañeros de sector y del Frente Amplio, así como el devenir democrático, hicieron posible que durante un tiempo importante me desempeñara en el Parlamento como legislador. ¿A qué viene esto? No hago este comentario para batirme el parche -que es algo que detesto, pero en lo que algunas personas incurren por considerar que han hecho algo meritorio en su vida-, sino a los efectos de historiar o hacer referencia a lo legislado en esta materia a lo largo de los años.

En la primera legislatura que ocupé una banca en esta Cámara, se logró un acuerdo multipartidario para aprobar una ley que se denominó de Seguridad Ciudadana. Si no recuerdo mal, esa ley se aprobó en 1996, y algunos de los argumentos que se esgrimieron para ello estaban relacionados con dar al Estado, al gobierno de turno, más herramientas, desde el punto de vista jurídico, para incrementar las sanciones punitivas a las conductas delictivas de la sociedad. En ese entonces se entendió que esa iniciativa constituía una herramienta que podía dar soluciones de fondo a esos asuntos.

Posteriormente, pasaron otros gobiernos y administraciones, de distinto signo, que también siguieron esta doctrina, esta concepción que tiende a pensar que el incremento de las penas se puede traducir en mejoras en la seguridad pública.

También es cierto que, desde ese punto de vista, se debe asumir, con humildad, que las concepciones filosóficas y las ideologías que se puede tener a nivel personal -que es algo que se mantiene- se pueden dejar momentáneamente de lado cuando el partido político o la fuerza que se integra debe llegar a determinados acuerdos o definiciones. En este caso, debemos hacerlo para analizar el proyecto de ley referido a libertades vigiladas, que trasciende los propios postulados e incluye visiones multipartidarias. Por lo tanto, podríamos decir que este proyecto contiene la visión alcanzada en un acuerdo multipartidario y cuenta a excepción de algunos artículos con un respaldo muy amplio.

Quise dejar estas constancias, entre otras cosas, por una cuestión de honestidad intelectual y para aclarar lo que uno piensa sobre el fondo de algunos asuntos. Además, como ocurrió con otros proyectos de ley, quiero celebrar que Uruguay tiene un sistema bicameral, que a veces ayuda a que estas decisiones tengan más respaldo, si se tomaron en base a grandes acuerdos. A veces no ocurre así, pero en

ocasiones hay que apuntar a la eficiencia de la producción parlamentaria, lo que también se puede lograr con los tiempos de debate.

Sin duda, los tiempos de debate han sido y son relativos, ya que se debe tener en cuenta la importancia de los proyectos de ley. Sin embargo, el sistema bicameral, desde nuestro punto de vista, es garantista y permite hacer correcciones en algunos casos y, en otros, ratificar rumbos; este es el caso que estamos señalando.

¿De cuánto tiempo dispongo, señor presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Le restan diez minutos, señor diputado.

SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- Entonces, en los diez minutos de que dispongo para exponer sobre este asunto, quiero informar al Cuerpo que estamos hablando de un proyecto de ley que surgió de la labor de la comisión para el seguimiento de la implementación del sistema procesal penal, creada por la Ley Nº 19.653. Dicha comisión tiene varios cometidos, entre ellos, sugerir reformas legislativas al sistema procesal penal, especialmente, a la luz de la Ley Nº 19.293, es decir, del nuevo Código de Proceso Penal.

En el marco de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, la citada comisión detectó una serie de distorsiones que afectaron el funcionamiento racional de la reforma, en particular, del régimen de libertades vigiladas, lo relativo a los pactos que permite realizar la nueva norma y su vinculación con las penas mixtas. Quiere decir que una parte de la condena se cumple en la cárcel y la otra, de manera vigilada.

Estas distorsiones se produjeron porque el instituto de las penas mixtas, previsto con la lógica del viejo Código del Proceso Penal, se aplicaba considerando los pactos que se establecen en el nuevo Código del Proceso Penal. Esto provocó un desajuste, porque la posible aplicación de la libertad vigilada entraba en la negociación de la condena en el marco de un elenco variadísimo de delitos, lo que este proyecto de ley acota.

Asimismo, esta iniciativa también acota la aplicación de la libertad vigilada a delitos que tengan, como máximo, una pena de tres años de penitenciaría. También dispone que no se aplique a reincidentes, reiterantes y habituales, y dispone que procederá solo a solicitud de parte.

Por otro lado, la Fiscalía tendrá la posibilidad de solicitar la revocación del beneficio en caso de que el penado incumpla alguna de las medidas impuestas, que deberá sustanciarse de inmediato por el Tribunal.

También contiene una serie de artículos que fueron remitidos por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, con algunas sustituciones de artículos de normas anteriores.

Esta es una descripción general del proyecto, pero como en esta Cámara su discusión se ceñirá únicamente a lo que se diga en el plenario, lo que acotará las posibilidades de decisión a los elementos que cada uno de nosotros tenga para resolver en la materia, más allá de que sabemos que vinimos con un rumbo y una orientación política, acordada previamente, sobre los asuntos que figuran en el orden del día, tomaremos como referencia alguna de las intervenciones realizadas por uno de los propulsores del proyecto, el senador Charles Carrera. Quiero aclarar que el senador Carrera no es uno de mis referentes en estos asuntos -no lo es él ni ningún otro en particular-, pero sé que ha trabajado en este proyecto, y por ello voy a referirme a lo que manifestó sobre esta iniciativa y quedó registrado en la versión taquigráfica. Leyendo sus palabras se puede tener una noción cabal de este proyecto de ley que contó con el acuerdo de todos los partidos cuando se discutió en general y cuando se aprobó gran parte del articulado. Estamos hablando de cambios que se enmarcan en ajustes propios del sistema procesal penal que el sistema político se comprometió a hacer, en la medida en que fueran detectándose anomalías en el proceso, como señalamos.

La práctica resulta más que adecuada para detectar errores o anomalías, y el senador Carrera dijo en el Senado que el Código del Proceso Penal que hoy rige ha sido aprobado de manera paulatina, tras sucesivas modificaciones y ajustes. Además señaló que, de hecho, las estructuras procesales vigentes no son las previstas originalmente, lo que también generó ciertos desajustes, como algunas de las cuestiones que hemos vivido en los últimos tiempos en nuestro país.

En realidad, en la aplicación práctica del nuevo Código del Proceso Penal se detectaron errores, por lo

que como ya dije se decidió abordar este proyecto de ley.

En el artículo 1º del proyecto se define el régimen aplicable, y dice que las libertades vigiladas se regularán por la presente ley. Básicamente, establece lo siguiente: "Las penas privativas de libertad podrán cumplirse en régimen de 'libertad vigilada' (artículo 292.1 del Código del Proceso Penal) en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la presente ley".

En el artículo 2º se define el régimen de libertad vigilada. El proyecto hace referencia a un programa de actividades orientado a la inserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de una intervención individualizada bajo la aplicación de determinadas condiciones especiales. La Ley Nº 19.446 vigente es más escueta y no menciona la reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral. En este artículo se establece el nuevo carácter e intervención de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), que desde el punto de vista institucional viene abordando este tipo de temas.

En el artículo 3º, que es uno de los medulares de este proyecto, se unifica el régimen de libertades vigiladas y se determina que estas puedan disponerse siempre que la pena privativa de libertad sea de prisión o no supere los tres años de penitenciaría. Este pasa a ser el único régimen vigente a partir de la sanción de la norma y, de esta manera, se reduce la cantidad de delitos a los que se puede aplicar, al dejar afuera aquellos que se consideran más graves.

El artículo 3º establece: "La libertad vigilada podrá disponerse siempre que la pena privativa de libertad impuesta al condenado sea de prisión o no supere los tres años de penitenciaría". En este caso, se establecen tres años. Es un plazo que, como todos, termina siendo arbitrario. Como ya dije, desde nuestro punto de vista, este artículo es central en el proyecto.

Como me queda poco tiempo, voy a concentrarme en dos o tres aspectos.

Por el artículo 5º del proyecto se restringe el régimen de libertad vigilada para una serie de delitos de manera preceptiva, sean tentados o consumados y cualquiera sea la forma de participación del penado. Estamos hablando de rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio doloso y sus agravantes, delitos de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, tráfico y trata de personas y tráfico internacional de armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados. Todos estos delitos quedan listados, tomando en cuenta su gravedad.

En el artículo 6º se establece que la libertad vigilada procede siempre a solicitud de parte o se adapta a la realidad de un proceso acusatorio. En este caso, también se acortan los plazos.

Uno de los aspectos que en la sociedad se veía como problemático en cuanto a la aplicación del Código del Proceso Penal tenía que ver con algunos conceptos que señalamos. ¿Cuáles? Aquellas materias vinculadas con acuerdos que terminaban en la libertad vigilada de algunos penados lo que, después, rápidamente derivaba en situaciones no deseadas. Esto genera rechazo en la opinión pública, porque se aplica un instituto que quienes redactaron el proyecto en esta etapa entienden que, por la vía de los hechos, se aplicaba en exceso y, por lo tanto, generaba dificultades en un asunto que es central en la sociedad uruguaya y que refiere a la seguridad pública.

Para finalizar, insisto en algunos aspectos. El primero es que esta medida está orientada a mejorar las condiciones de aplicación de la justicia y de la seguridad pública.

Como hemos dicho siempre, entendemos que las modificaciones penales no siempre son el instrumento único ni último para mejorar la seguridad de la ciudadanía, sino una herramienta de una concepción mucho más integral de la seguridad que abarca, por supuesto, las acciones del Ministerio del Interior y del Poder Judicial, y también las de otras áreas del Estado que hacen al fondo de un tema muy sentido por la población y entendíamos se debía abordar en el cierre de esta legislatura.

Es todo cuanto pude señalar en el tiempo de que disponía reglamentariamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Votaremos afirmativamente este proyecto de ley en general y también su Capítulo I, relativo a los ajustes a la Ley Nº 19.446,

por las razones que ha expuesto en general el señor diputado Mahía, que compartimos.

Además, la grave situación de la seguridad pública y el impacto que producen sobre la población algunos fallos judiciales de una benignidad desconcertante nos obligan a actuar con una rapidez que está reñida con la forma de trabajo que nos parece conveniente cuando se modifican disposiciones de esta naturaleza.

Hubiéramos querido invitar a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración a los expertos del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, eventualmente, a integrantes del Instituto de Derecho Penal, y recibir todos los asesoramientos pertinentes para trabajar de la mejor manera posible pero, por circunstancias notorias, los tiempos apremian y en esta materia de libertades vigiladas nos parece indispensable el ajuste que propone este proyecto de ley.

No valen las mismas consideraciones para el Capítulo II del proyecto, que refiere a otros ajustes al Código del Proceso Penal. No advertimos en este caso que en el Capítulo II concurran las mismas razones de urgencia. No vemos por qué tendríamos que sancionar esto en este *sprint* legislativo del último día, sin recabar los asesoramientos que nos ilustren acerca de la necesidad y la conveniencia de estas modificaciones.

Nos parece que el Capítulo II es materia para otra etapa del trabajo legislativo, que tantas veces ha sido apresurado y se ha equivocado -asumo la cuota parte de responsabilidad que me corresponde en estas sucesivas modificaciones a la legislación en materia procesal penal, que han hecho de nuestro Código un depósito aluvional de cambios, algunos acertados y otros no, razón por la cual insisto que votaremos negativamente este Capítulo II.

Es cuanto quería expresar, señor presidente.

SEÑOR CANTERO (Fitzgerald).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PASQUET (Ope).- Sí, señor diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Puede interrumpir el señor diputado.

SEÑOR CANTERO (Fitzgerald).- Señor presidente: este proyecto está referenciado con una ley de este período que tiene muy poca vigencia, que fue promulgada el 28 de octubre del año 2016.

Como bien señalaba el señor diputado Pasquet, quizás la realidad lleva a esta suerte de ajustes de última hora para encaminar una situación que se ha salido de su cauce.

Hemos estado siguiendo este tema desde hace un buen tiempo y advertimos que el gobierno, a través del Ministerio del Interior, sostiene, desde hace unos cuantos meses, la necesidad de derogar la ley de libertades vigiladas.

En febrero de este año, en una reunión importante de la que participaron el ministro del Interior; el jefe de Policía de Montevideo, inspector Layera; el fiscal de Corte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, doctora Minvielle, y operadores que tienen que ver con esto, se señalaba la preocupación sobre este particular. Claramente, el Ministerio del Interior alertaba acerca de que había que derogar esa ley porque, de lo contrario, en el correr de este año, se liberaría a unos cuatro mil presos. Esto salió en la prensa nacional como crónica de la reunión a la que hago referencia, que se llevó a cabo el 22 de febrero de este año.

A lo largo de los meses y a medida que se iban sucediendo determinados hechos lamentables en nuestra sociedad, se fueron sumando voces del gobierno en la dirección de derogar la Ley Nº 19.446.

Además, el 11 de junio, el Ministerio del Interior señaló, a través de la prensa nacional, que había que derogar esa ley, con un nuevo argumento, que fue que la OSLA -Oficina de Supervisión de Libertad Asistida- no estaba en condiciones de llevar adelante el control y la vigilancia que esta norma le atribuye. Ese es otro argumento para fundamentar la derogación. Sin embargo, en el artículo 2º de este proyecto se le sigue asignando a dicha Oficina ese seguimiento. Por eso, si bien entendemos que vamos a dar un paso en la dirección correcta al aprobar este proyecto de modificación de la Ley N° 19.446 consideramos que, en definitiva, seguirá quedando renga, porque repito, en opinión del Ministerio del Interior, esta Oficina no está capacitada para llevar adelante ese seguimiento.

En el mes de junio, luego de escuchar por enésima vez al Ministerio del Interior pidiendo que se derogara esta ley, con los muy buenos oficios de nuestro asesor en la materia, doctor Guillermo Maciel, elaboramos un proyecto de ley que fue presentado el

12 de junio, por el que se proponía derogar los artículos 2º a 12 de la Ley N° 19.446, lo que vemos que se ha recogido en el artículo 11 del proyecto que envió el Poder Ejecutivo con fecha 29 de julio de 2019. En el proyecto que nos remitió el Senado esto queda contemplado, y se le da un giro en los artículos 11 y 12, por el cual quedan derogados los artículos a los que hice mención para los delitos que se cometan luego de la aprobación del ajuste normativo que estamos haciendo.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Puede continuar el señor diputado Pasquet.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente…

SEÑORA GRAUERT HAMANN (Elena).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PASQUET (Ope).- Sí, señora diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Puede interrumpir la señora diputada.

SEÑORA GRAUERT HAMANN (Elena).- Señor presidente: quiero hacer una puntualización. Voy a seguir la línea del señor diputado Pasquet, pero me llamó poderosamente la atención el artículo 14, por el que se sustituye el artículo 75 de la Ley Nº 19.293, porque entiendo que termina sancionando al defendido por una actitud eventual de su abogado. El artículo establece: "La ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exija expresamente su participación acarreará su nulidad, salvo cuando constare fehacientemente que su ausencia fue voluntaria y deliberada, para provocar la nulidad". Esa es una actitud del abogado, no de su cliente, y por lo tanto me parece que esto va directamente contra las garantías del defendido al sancionarlo de esta forma.

En consecuencia, tampoco lo voy a votar, pero quería hacer esta puntualización.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Puede continuar el señor diputado Pasquet.

SEÑOR PASQUET (Ope).- He finalizado, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el señor diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: votaremos afirmativamente. Los legisladores del Partido Nacional vamos a acompañar en general y en particular este proyecto de ley, a excepción del artículo 14, que acaba de ser muy pertinentemente referido por la señora diputada Grauert, cuya objeción compartimos.

Con relación a la propuesta general, entendemos que la solución es pertinente. Este proyecto redefine el concepto de la libertad vigilada, introduciendo algunas variantes terminológicas, elimina la diferencia entre libertad vigilada y libertad vigilada intensiva, y establece, al mismo tiempo -es lo más importante de todo-, una nueva demarcación relativa a los límites de su aplicación. Es decir, la libertad vigilada solo podrá disponerse como lo disponen los primeros artículos del Capítulo I, en caso de que la pena sea de prisión o no supere los tres años de penitenciaría, y de que no haya reincidencia, reiteración o habitualidad.

Al mismo tiempo, se excluyen los casos de tentativa para un elenco de delitos que aparecen señalados en el artículo 5º; en esos casos tampoco corresponderá la aplicación de este instituto.

Creo que esta solución es buena. Se nos trasmitió que resultó de un entendimiento en el ámbito de la comisión de seguimiento de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, entre el Ministerio del Interior, el ministerio público y la Suprema Corte de Justicia, o sea, el Poder Judicial.

Con relación a algunas consideraciones que hizo quien fungió como miembro informante, el señor diputado Mahía, debo decir que, en algún sentido, esta es una suerte de reforzamiento de la respuesta penal. En la iniciativa hay una decisión de política criminal y, desde luego, esto se inserta en esa discusión, que es permanente en estos casos, en cuanto al tema de la inflación penal, a en qué medida las normas penales, el incremento de las penas o el endurecimiento de la respuesta penal persuade, disuade o no a quienes cometen delitos. En principio, hago una lectura bastante similar a la que por lo menos insinuó el señor diputado Mahía. Por supuesto que la sola modificación de la ley penal, el solo agravamiento de las penas no provoca efectos mágicos ni ese tipo de consecuencias, pero eso no quiere decir que con relativa frecuencia y cuando corresponda, en función de criterios de carácter objetivo, no revisemos las normas en vigencia y ajustemos el derecho penal en el sentido que corresponda y, sin ninguna duda, este es uno de esos casos.

En este caso, obviamente, pesan consideraciones vinculadas con la inseguridad ciudadana; pesan también circunstancias del tenor de las que describió con acierto el señor diputado Cantero, en cuanto a que la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida no está dando respuestas, en tanto se encuentra desbordada -digámoslo así- por la cantidad de personas que se encuentran en esta situación y, por lo tanto, esa estructura administrativa no es suficiente para cumplir con un adecuado seguimiento de todos y cada uno de los casos. Eso también se invocó, por lo menos públicamente, por las autoridades.

No tuvimos oportunidad de analizar este proyecto con detenimiento y procesarlo adecuadamente en la Comisión porque entró ayer, se votó y hoy lo estamos tratando en el plenario, pero el hecho es que, aparte de eso, parece razonable ir en el sentido que se plantea.

Finalmente, con relación al aspecto que estoy comentando, después haré una breve referencia al artículo 14, la discusión de la dosimetría penal y del agravamiento de las penas es bien interesante. Tanto lo es que he venido a constatar que este tipo de medidas están bastante en línea con una de las propuestas que componen el proyecto de reforma constitucional que se plebiscitará el próximo 27 de octubre, concomitantemente con las elecciones nacionales. Dicho proyecto de reforma -en el acierto o en el error; por supuesto que es un tema discutible y polémico- ha recibido una adhesión ciudadana muy importante, según las firmas que suscribieron la iniciativa popular y las expectativas que hay con relación al comportamiento ciudadano en ocasión de ese plebiscito. Una de sus propuestas tiene que ver con el cumplimiento efectivo de las penas y, más allá de las diferencias -no es esto lo mismo que eso-, la filosofía, la orientación y la definición conceptual están bastante en línea.

Me parece bien interesante señalarlo porque, durante esta legislatura, en distintas circunstancias y con relación a distintos proyectos, hemos advertido algunas contradicciones ideológicas -si se quiere- con relación a que cuando los planteos provienen de otro lado, se invoca el argumento que generalmente, por supuesto, también interpone el Instituto de Derecho Penal, en cuanto a que no hay que crear nuevos delitos, de que no hay que aumentar las penas. Ahora bien, cuando por alguna razón es el Poder Ejecutivo o el Ministerio del Interior el que entiende que hay que limitar la libertad vigilada en los términos que se establecen en este proyecto, esta es la excepción que vale la pena admitir y aceptar, por razones que se supone el Poder Ejecutivo y la actual conducción política del país legitiman y hacen pertinentes.

Con respecto al artículo 14, comparto plenamente -como ya dije- lo expresado por la señora diputada Grauert. Esa norma tiene que ver con un principio muy importante: el de la nulidad por indefensión. El artículo 75 original del Código del Proceso Penal establece como principio general que todas las actuaciones deberán cumplirse con presencia o asistencia letrada y, en caso de que eso no se dé, es decir, si la comparecencia del defensor no se configura, la consecuencia es la nulidad. En esta iniciativa lo que se propone es una perforación de este principio a través de una expresión según la cual se mantendrá y regirá en todos sus términos, "salvo cuando constare fehacientemente que su ausencia fue voluntaria y deliberada, para provocar la nulidad". Yo creo que de esta manera nos enfrentamos a un riesgo inminente e importante en materia de garantías para el indagado, porque hay una cuestión relacionada con la prueba: habrá que probar que efectivamente el propósito fue obtener la consecuencia procesal de la nulidad por la mera ausencia del defensor. Además, creo que, eventualmente, estaremos haciendo al indagado destinatario de las consecuencias de una acción irresponsable de un profesional actuando como defensor; estaremos cargando las consecuencias de esa mala acción sobre el indagado, que es probable ignore cuál es la verdadera intención o el verdadero propósito de su defensor a la hora de ausentarse o no comparecer en la audiencia.

Creo que podría haberse establecido un mecanismo alternativo que determinara que, en caso de ausencia del defensor, se podría proceder inmediatamente a la designación de un defensor de oficio para subsanar esa circunstancia. Como todos sabemos, la presencia del defensor es absolutamente indispensable en un régimen de garantías y en un sistema que debe salvaguardar ese principio como central en todo lo que concierne al sistema procesal penal.

Hechas estas consideraciones, reitero lo que expresé al comienzo: vamos a votar en general este proyecto y apoyaremos casi la totalidad de los

artículos, salvo el 14, cuyo desglose vamos a pedir, ya que no lo acompañaremos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Saludamos la presencia en la barra de los alumnos de 4º y 6º año del Liceo de Villa Constitución.

Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Rubio.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: vemos con preocupación el arribo de este proyecto de ley con estilo exprés, que reafirma un camino para dar respuesta a la situación de violencia social que vive el país, respecto de cuya resolución se ha demostrado incapacidad y se ha fracasado.

En las discusiones que tuvieron lugar en la Torre Ejecutiva, cuando el doctor Vázquez convocó a todos los partidos con representación parlamentaria -oportunidad en la que quedamos en soledad en un debate en el que rechazamos el criterio de la inflación punitiva como manera de resolver la violencia social-, se acordó la presentación de una serie de proyectos de ley que luego se aprobaron, cuyos resultados están a la vista. No avanzamos ni consolidamos una situación de convivencia pacífica porque las condiciones que existen en la sociedad, más allá de las leyes y del aumento de las penas, nos llevan hacia otro lugar. Es sabido que aumentar las penas y la represión no resuelve los temas de violencia cuando estos tienen profundas causas sociales, económicas, culturales y de valores.

Reitero que vemos esta iniciativa con preocupación. Es claro que hay una presión social ante la situación de violencia; obviamente, la hay. Además, no faltan quienes instigan y alimentan la idea de que lo que falta es mano dura; lo vemos todos los días en la televisión y hasta en propaganda electoral fuera de tiempo. Pero ese camino es peligroso; es un camino sin salida.

Cuando se discutió este tema en el Senado, hubo voces contrarias. En particular, el senador Paternain expresó que se sigue "legislando al grito", algo que el Frente Amplio criticó mucho en los noventa. Expresó: "Establecer mecanismos solo por la demanda social no es bueno. Es una típica medida que tendrá dudosos resultados a corto plazo y malos a mediano y largo plazo. Hipoteca la posibilidad de avanzar hacia otra cosa". También dijo sobre este proyecto: "No es una buena iniciativa y va en tono con la lógica punitiva, y va a tener un aumento inflacionario de la población carcelaria".

Compartimos plenamente estas afirmaciones del senador Paternain, quien también sostuvo que "[…] en lugar de avanzar lo que se hace es ir para atrás". Eso es lo que sentimos nosotros cuando notamos que se va a aprobar este proyecto de ley que reafirma esa concepción.

Creo que esta iniciativa es fruto de la impotencia, del fracaso y también de una concepción ideológica que se va conformando, por la que se simplifica el problema de la violencia y también la respuesta ante él.

Tal como decía el legislador preopinante, en este proyecto hay propuestas que están en el espíritu de una reforma que rechazamos; por eso antes repelimos una decisión que tomó este Parlamento por la que se otorgaron funciones policiales al Ejército en 20 kilómetros a lo largo de la frontera. Hoy se aprueba esta iniciativa que también tiene elementos inspirados en el mismo criterio, en la misma lógica y en la misma ideología.

Por tanto, vamos a votar en contra de este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el señor diputado Iván Posada.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: el Partido Independiente va a acompañar este proyecto de ley.

Creemos que este es un avance respecto a una de las reglas del derecho penal en cuanto al cumplimiento de las penas y, especialmente, a la restricción de algunos de los regímenes que se han llevado adelante en una suerte de hipocresía porque, en realidad, muchas veces están motivados en el hecho de que la situación carcelaria no es la más adecuada. Todos sabemos cuál es el funcionamiento de las cárceles en el Uruguay. Entonces, como las respuestas a la situación carcelaria no son las adecuadas, terminamos aprobando regímenes de libertades que suponen el no cumplimiento de las penas o su disminución. Esa es la realidad. Así ha funcionado el Estado uruguayo durante muchos

años: por un lado, con una gran inflación desde el punto de vista penal y, por otro, aplicando regímenes beneficiosos a la hora del cumplimiento de las penas.

Este proyecto de ley trata de corregir una situación generada fruto de los acuerdos entre todos los partidos políticos con excepción de Unidad Popular, para la presentación de una serie de proyectos que se aprobaron en el año 2016. Haciéndonos responsables de aquel acuerdo y de las dificultades que ha habido en el cumplimiento de algunos aspectos, vamos a acompañar este proyecto de ley. Todo lo que dije refiere al Capítulo I.

Ahora voy a referirme al Capítulo II. La realidad asumida por todos los partidos políticos que acompañamos la puesta en marcha del Código del Proceso Penal era que necesariamente se necesitarían ajustes como consecuencia de la experiencia recogida. Se trata de un cambio cultural realmente importante en cuanto al funcionamiento del sistema del proceso penal uruguayo. Seguramente aprobaremos algunas modificaciones más, porque este es un cambio que está en pleno proceso.

Han sido notorias algunas dificultades que se han generado como consecuencia de que las noticias criminales sobre las cuales se basó la estimación del personal de fiscalía necesario para el cumplimiento del Código del Proceso Penal tuvieron una base irreal. La realidad demostró otra cosa. Es necesario tener conciencia de que hay que votar más recursos para el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, aspecto en el que, el Poder Ejecutivo primero y el Parlamento después, están en deuda.

En definitiva, vamos a acompañar el proyecto de ley en general y en particular.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta y tres en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- ¿Me permite, señor presidente?

Solicito que se suprima la lectura y se vote en bloque.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- ¿Me permite, señor presidente?

Solicito que se desglose el artículo 14.

SEÑOR PASQUET (Ope).- ¿Me permite, señor presidente?

Solicito que se desglose el Capítulo II, que incluye los artículos 13 a 20.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Se va a votar si se suprime la lectura del articulado y se vota en bloque, exceptuando los artículos cuyo desglose se solicitó.

(Se vota)

——Setenta y siete en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 1º a 12, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y ocho en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 13 al 20, exceptuando el artículo 14.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 14.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- Señor presidente: quisiera dejar constancia de que hemos acompañado este proyecto de ley porque esa es la posición

mayoritaria de la bancada del Frente Amplio, pero nosotros no la compartimos.

No compartimos las restricciones al instrumento de la libertad vigilada. Creemos que durante mucho tiempo el país recorrió cierto camino para llegar a esta decisión, siempre con la prisión como respuesta.

Las penas alternativas a la prisión deberían ser una apuesta del sistema político, para no hacer siempre lo mismo, es decir, meter a la gente dentro de la cárcel, con la reincidencia que ya sabemos existe.

Señor presidente, al cercenarnos este instrumento, estamos hipotecando las posibilidades de rehabilitación; todos sabemos que es mucho más difícil llevarla a cabo con alguien en prisión que con quien que está fuera de ella.

Parecería que, a veces, solo nos hacemos eco de la visión de la parte de la población que considera que no solo tenemos que tomar decisiones correspondientes al cumplimiento de la pena, sino castigar. En realidad, eso es lo que termina pasando; sabemos que la prisión tiene las mejores condiciones para la gente.

Deberíamos transitar este camino de manera más consciente, más consustanciada, contando con penas alternativas vigiladas. No decimos que la gente quede impune ni suelta; ninguna de las alternativas que se están implementando, ni la libertad vigilada ni la especialmente vigilada tienen rasgos de impunidad, y creo que son las mejores opciones para apuntar a la rehabilitación.

Además, se han excluido algunos delitos -los sexuales o los famosos delitos de cuello blanco- y se han incluido otros como, por ejemplo, los delitos contra la propiedad, como la rapiña, que todos sabemos es la que cometen los pobres. Entonces, cuando legislamos con sesgo de clases, es bueno tener claro que no estamos adoptando soluciones de fondo.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y dos en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"CAPÍTULO I

AJUSTES A LA LEY Nº 19.446, DE 28 DE OCTUBRE DE 2016

Artículo 1º.- Las penas privativas de libertad podrán cumplirse en régimen de "libertad vigilada" en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la presente ley.

Artículo 2º.- La libertad vigilada consiste en someter al penado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales. La vigilancia y orientación permanentes de lo establecido en este artículo estará a cargo de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, dependiente del Ministerio del Interior.

Artículo 3º.- La libertad vigilada podrá disponerse siempre que la pena privativa de libertad impuesta al condenado sea de prisión o no supere los tres años de penitenciaría.

Artículo 4º.- No procede la libertad vigilada en casos de reincidencia, reiteración o habitualidad.

Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo anterior, tampoco podrá sustituirse la pena privativa de libertad por la libertad vigilada cuando se trate de alguno de los delitos que se enunciarán a continuación, sea este tentado o consumado y cualquiera sea la forma de participación del penado:

A) Rapiña (artículo 344 del Código Penal).

B) Rapiña con privación de libertad. Copamiento (artículo 344 bis del Código Penal).

C) Extorsión (artículo 345 del Código Penal).

D) Secuestro (artículo 346 del Código Penal).

E) Homicidio doloso y sus agravantes (artículos 310, 311 y 312 del Código Penal).

F) Delitos previstos en los artículos 30 a 35 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, y sus modificativas, cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en los

artículos 35 Bis y 36 del citado cuerpo normativo.

G) Crímenes y delitos contenidos en la Ley N° 18.026, de 4 de octubre de 2006.

H) Delitos previstos por los artículos 77 a 81 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008.

I) Delito previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 19.247, de 15 de agosto de 2014.

Artículo 6º.- La libertad vigilada procederá en todos los casos a solicitud de parte y será impuesta por el tribunal al dictar la sentencia definitiva de condena. El tribunal fijará el plazo de intervención que será igual al que correspondería cumplir en régimen de privación de libertad.

La Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida presentará en un plazo de veinte días desde que se le notifica la sentencia condenatoria por el tribunal, el plan de intervención correspondiente.

Dicho plan deberá ser individual, comprender la realización de actividades tendientes a la reinserción social y laboral del penado, indicando los objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados.

Artículo 7º.- Al establecer la libertad vigilada el tribunal impondrá al condenado las siguientes condiciones:

A) Residencia en un lugar determinado donde sea posible la supervisión por la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida.

B) Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la referida Oficina.

C) Presentación una vez por semana en la Seccional Policial correspondiente al domicilio fijado conforme a lo dispuesto en el literal A) de este artículo.

Artículo 8º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior y de acuerdo con las circunstancias del caso, el tribunal dispondrá, además, una o más de las siguientes medidas:

A) Si el penado presentara un consumo problemático de drogas o alcohol, se impondrá la obligación de asistir a programas de tratamiento de rehabilitación de dichas sustancias.

B) Prohibición de acudir a determinados lugares.

C) Prohibición de acercamiento a la víctima, a sus familiares u otras personas que determine el tribunal o mantener algún tipo de comunicación con ellas.

D) Obligación de mantenerse en el domicilio o lugar que el tribunal determine.

E) Obligación de cumplir programas formativos laborales, culturales, de educación vial, sexual, de tratamiento de la violencia u otros similares.

F) Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria y comercio bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención.

G) Prohibición de conducir vehículos.

H) Otras de carácter análogo que resulten adecuadas.

Artículo 9º.- El tribunal podrá disponer que la persona penada sometida al régimen de libertad vigilada deba portar un dispositivo de monitoreo electrónico, en los términos establecidos en el artículo 82 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018. No obstante, será preceptiva la medida si se tratare de penado por violencia doméstica, violencia basada en género, violencia intrafamiliar o delitos sexuales.

Si entendiere del caso podrá disponer que la víctima del delito porte dicho dispositivo, para cuya colocación requerirá su consentimiento.

Artículo 10.- En caso de incumplimiento de alguna de las medidas impuestas, la Fiscalía podrá, valorando las circunstancias del caso, solicitar al tribunal la revocación del beneficio, privando de la libertad al condenado por el saldo restante de la pena.

La violación grave del régimen de libertad vigilada deberá dar lugar a su revocación inmediata, sin necesidad de contar con la aquiescencia, vista previa o audiencia de la Fiscalía (artículo 287 del Código del Proceso Penal). Se considerará violación grave, entre otras, la existencia de una formalización posterior (artículo 266.6 in fine del Código del Proceso Penal).

Artículo 11.- Estas normas entrarán en vigencia en forma inmediata y se aplicarán a las causas por delitos cometidos con posterioridad a la misma.

A las causas penales en trámite a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y aquellas causas que se inicien con posterioridad por delitos cometidos con anterioridad a la misma, se aplicará lo dispuesto en los artículos 2 a 12 de la Ley Nº19.446, de 28 de

octubre de 2016 y el artículo 9 de la Ley Nº 17.726, de 26 de diciembre de 2003.

Artículo 12.- Deróganse todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

CAPÍTULO II

AJUSTES AL CÓDIGO DEL PROCESO PENAL

Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 39 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, por el siguiente:

"ARTÍCULO 39. (Incompetencia por razón de lugar o de turno).- La incompetencia por razón de lugar o de turno no causa nulidad y solo puede hacerse valer por las partes en su primera comparecencia.

No habrá prevención ni incompetencia por razón de lugar o turno durante la investigación preliminar".

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 75 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, por el siguiente:

"ARTÍCULO 75. (Efectos de la ausencia del defensor).- La ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exija expresamente su participación, acarreará su nulidad, salvo cuando constare fehacientemente que su ausencia fue voluntaria y deliberada, para provocar la nulidad".

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 88 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, por el siguiente:

"ARTÍCULO 88. (Método para instar).- La instancia se formulará ante el Ministerio Público verbalmente o por escrito. También podrá deducirse por escrito, ante las autoridades con funciones de policía".

Artículo 16.- Sustitúyese el artículo 89 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, por el siguiente:

"ARTÍCULO 89. (Firma de la instancia).- La instancia podrá formularse mediante escrito firmado por su autor. Si no sabe o no puede firmar, el escrito se refrendará con la impresión dígito pulgar izquierda. A continuación se dejará constancia de que la persona conoce el texto del escrito y que ha estampado la impresión digital en su presencia y de conformidad".

Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 90 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, por el siguiente:

"ARTÍCULO 90. (Confirmación de la voluntad de instar).- Al inicio de las actuaciones, el Ministerio Público explicará a quien formuló la instancia el alcance de la misma. Si el declarante confirma su voluntad de instar, se la tendrá por bien formulada.

Si el que insta desiste, se le tendrá por renunciado a su derecho a instar y no podrá volver a hacerlo por los mismos hechos".

Artículo 18.- Sustitúyese el artículo 365 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, por el siguiente:

"ARTÍCULO 365. (Exclusiones).- No se aplicarán al proceso penal las disposiciones del Código General del Proceso sobre medidas provisionales, ejecución provisional de sentencias definitivas recurridas o condenas procesales.

El recurso de apelación contra la admisión o el rechazo de la prisión preventiva, su sustitución o prórroga, contra el rechazo de la formalización de la investigación o del pedido de sobreseimiento instado por la defensa y contra las resoluciones sobre medios de prueba dictadas en audiencia, se interpondrá y sustanciará en la misma audiencia en la que se pronunció la recurrida.

El recurso se admitirá sin efecto suspensivo y la pieza correspondiente se elevará en cuarenta y ocho horas al tribunal de apelaciones. Este convocará a audiencia de segunda instancia -presencial o por sistema de videoconferencia del Poder Judicial- para dentro de diez días desde la recepción de la pieza o resolverá dentro de quince días a partir de la misma.

No será nula la sentencia definitiva por haberse dictado estando pendiente la interlocutoria de segunda instancia que confirme la formalización o el rechazo del sobreseimiento".

Artículo 19.- Deróganse los artículos 140.3 y 362.3 del Código del Proceso Penal aprobado por la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014.

Artículo 20.- Agrégase al artículo 106 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, el siguiente inciso:

"(Del requerimiento de firma).- Aclárase que en los supuestos en los cuales la ley procesal penal requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma electrónica

(Ley Nº18.600, de 5 de noviembre de 2009). Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia".

25.- Urgencias

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por la señora diputada Susana Pereyra.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el siguiente proyecto relativo a: "Obelisco-Batalla de Las Piedras. (Se designa al Liceo N° 3 de la ciudad de Las Piedras). (Carp. 4131/019). (Rep. 1210/019)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

26.- Obelisco-Batalla de Las Piedras. (Se designa al Liceo N° 3 de la ciudad de Las Piedras)

Con la declaración de urgencia alcanzada también se dio cumplimiento a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 139 del Reglamento, ya que se trata de un asunto ingresado a la Cámara dentro de los últimos treinta días del período ordinario.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Obelisco-Batalla de Las Piedras. (Se designa al Liceo N° 3 de la ciudad de Las Piedras)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1210

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

Anexo I

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y siete en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Señor presidente: teniendo en cuenta que será una sesión larga, haré una breve intervención.

El proyecto de ley que acabamos de votar fue propuesto por la comunidad educativa, por su director y los estudiantes. Este liceo, que se encuentra en la ciudad de la cual provenimos algunos de los legisladores, es popularmente conocido como el liceo del Obelisco. La comunidad decidió que se reconociera esta denominación de conocimiento popular y que, de alguna forma, se homenajeara a Juan Manuel Ferrari, escultor del obelisco de nuestra ciudad, que está en el parque Parque Artigas, en conmemoración de la batalla del 18 de mayo de 1811.

Nos parece una excelente iniciativa y por eso la hemos votado.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑORA LIBSCHITZ (Margarita).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA LIBSCHITZ (Margarita).- Señor presidente: me siento orgullosa de nombrar a este liceo "Obelisco-Batalla de Las Piedras", ya que allí cursé el primer ciclo y tengo muy lindos recuerdos de esos años de mi vida. Luego, en el segundo ciclo, tuve que trasladarme al liceo del centro de Las Piedras. En esa época, eran muy pocos los institutos que tenían el segundo ciclo. Entonces, quienes vivíamos en la periferia de la ciudad no teníamos más remedio que caminar unas veinte cuadras para ir al liceo o gastar un montón de dinero en boletos. Por suerte, eso hoy no pasa.

Antes el liceo estaba en un edificio que tenía solo cinco salones.

El diputado José Carlos Mahía, que también es de Las Piedras, fue docente en dicho liceo.

Finalmente, deseo expresar mi alegría por poder nombrar al Liceo N° 3 como "Obelisco-Batalla de Las Piedras", en honor a la ciudad y al barrio donde tuvo lugar la mayor gesta artiguista.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y uno en setenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta y dos: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto de ley sancionado:)

"**Artículo único.-** Desígnase con el nombre "Obelisco - Batalla de las Piedras" el Liceo Nº 3 de Las Piedras, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública".

27.- Licencias. Integración de la Cámara

——Dese cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Licencia por motivos personales:

De la señora representante Stella Viel, por el período comprendido entre los días 1º y 17 de diciembre de 2019, convocándose al suplente siguiente, señor Gustavo Da Rosa.

Del señor representante Alejandro Sánchez, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose a la suplente siguiente, señora Estela Pereyra.

El suplente siguiente, señor Diego Reyes, ha sido convocado por el Cuerpo para ejercer la suplencia de otro representante.

No aceptan la convocatoria, por esta única vez, los suplentes siguientes señor Charles Carrera, señora Lucía Etcheverry, señor Camilo Cejas y señora Laura Prieto.

Montevideo, 12 de setiembre de 2019

FITZGERALD CANTERO, SILVIA HERNÁNDEZ, PAULA PÉREZ LACUÉS".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete en sesenta nueve: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se integrarán a la Cámara en las fechas indicadas.

28.- Estatuto del funcionario del Servicio Exterior de la República. (Modificación)

Se pasa a considerar el asunto que figuraba en quinto término del orden del día y que pasó a ser sexto: "Estatuto del funcionario del Servicio Exterior de la República. (Modificación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1068

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

Anexo I

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Chiazzaro.

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).- Señor presidente: oportunamente, el Poder Ejecutivo remitió al Senado un proyecto de ley con la finalidad de actualizar el cuerpo normativo que constituye el Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República, que se regía por el Decreto Ley N° 14.206, que data del año 1974, vale decir que fue dictado en el período de la dictadura cívico-militar, hace más de cuarenta y cuatro años. Por ende, resulta obvio y pertinente la actualización de este estatuto.

En líneas generales, hay mejoras sustanciales en lo que tiene que ver con los derechos de los funcionarios, que no fueron consagrados expresamente en el decreto ley vigente y, en particular, se establece el compromiso de desarrollar una política de género para prevenir la discriminación y promover el acceso equilibrado a los cargos de mayor jerarquía para todos los funcionarios y todas las funcionarias del Servicio Exterior.

Es necesario destacar que el Decreto-Ley N° 14.206 estableció un tribunal de honor para asesorar al ministro de Relaciones Exteriores en ocasión de mala conducta de los funcionarios diplomáticos, algo que nos hace recordar a una especie de tribunal de conducta de corte militar. Sin embargo, desde la instauración de la democracia, este tribunal no fue utilizado, por lo que resulta pertinente eliminarlo. En consecuencia, nos congratulamos de que así se haya hecho.

El Senado remitió a esta Cámara un proyecto de ley, presentado por la Presidencia de la República, realizando una serie de modificaciones, a efectos de que la futura ley tuviese un lenguaje inclusivo. En aquellos casos en que se refiere a funcionarios o funcionarias del Servicio Exterior, se utiliza la expresión "personal del Servicio Exterior", dado que se entiende que la palabra "personal" es la más adecuada a estos efectos.

Si bien dicha palabra puede cumplir con esta finalidad inclusiva, tiene un contenido genérico y puede referirse no solo a los funcionarios públicos o a las funcionarias públicas, sino a cualquier otro vínculo con el Estado, ya sea por arrendamiento de servicio, relación laboral y otros.

Para que no exista dicha confusión, agregamos un inciso en el artículo 1°, explicando el término "personal", en el entendido de que refiere a los cargos públicos que ingresen a la función pública como funcionarios o funcionarias del Servicio Exterior, y no a otro tipo de relacionamiento con el Estado.

Si bien podría entenderse que en la redacción del artículo 3° existe una contradicción, pues en vez de referirnos a "personal", hacemos alusión a "funcionario/funcionaria", esto se debe a lo que establece el artículo 59 de la Constitución: "La ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario". Por lo tanto, se entendió que, al invocarse dicho artículo, se consideraba jurídicamente más adecuado mantener la redacción de funcionario o funcionaria.

Otra modificación genérica que establecimos fue la sustitución de las referencias a "la presente ley", estableciendo que se trata de un estatuto; no es un cambio sustancial, sino una adecuación de la redacción.

En el artículo 6° del proyecto aprobado por el Senado se elimina el límite de edad de cuarenta años para ingresar al Servicio Exterior por considerarse que sería una norma discriminatoria. Si bien una ley puede establecer condiciones y límites que impliquen discriminar en el entendido de discernir -por ejemplo, establecer requerimientos de poseer determinado título o cierta escolaridad-, estos deben estar justificados en el interés general. Por ende, no se encuentra ninguna razón que pueda fundamentar el límite de edad para el ingreso al Servicio Exterior.

En el artículo 7º, con relación a la publicación del llamado a concurso, se agrega que los dos diarios deben ser de tiraje nacional, a efectos de dar la mayor difusión posible.

A través del artículo 9º, que refiere a la realización de cursos en el Instituto Artigas del Servicio Exterior, se podrá recurrir al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otras dependencias, con reconocida experiencia.

Al artículo 14 se le realizan dos modificaciones.

Una de ellas es en el segundo inciso del literal a) en el que se elimina la expresión "o de la tesis de ascenso". La realización de una tesis no puede ser asimilada a un concurso, pues es una forma de evaluación académica. En todo caso, cuando se realice un concurso por oposición, la tesis podrá formar parte de este, pero no puede incluirse en cualquier concurso.

La otra modificación de este artículo es en literal c), relativo a la provisión de las vacantes y al requisito de antigüedad mínima en los cargos de tercer secretario o tercera secretaria, segundo secretario o segunda secretaria, y primer secretario o primera secretaria.

Tanto en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo como en el aprobado en el Senado se

estableció el requerimiento de cuatro años de antigüedad. En el proyecto que estamos presentando se vuelve al texto original establecido en el literal A) del artículo 39 del Decreto-Ley N° 14.206, es decir, a tres años de antigüedad. Aumentar los años de antigüedad implica generar un cuello de botella y un techo para quienes quieran acceder a un ascenso en los primeros grados de la carrera en el Servicio Exterior, y se entiende que no existe razón ni fundamento para ello.

En correspondencia con esta modificación, también se cambia el artículo 18 del proyecto aprobado por el Senado, que coincide con la redacción del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. Se considera que no corresponde elevar la edad de retiro del personal del Servicio Exterior de setenta a setenta y dos años, pues generaría una excepción -cuyos argumentos no se entienden- con relación a la edad de retiro de los demás funcionarios públicos.

Además, al extender la edad de retiro, se generarían menos vacantes, lo que impediría el ascenso de otros funcionarios u otras funcionarias que pretenden proseguir la carrera en el Servicio Exterior. Esto también perjudicaría la movilidad en la carrera funcional.

A efectos de no generar situaciones que puedan causar inconvenientes en momentos en que un funcionario se retire por cumplir setenta años de edad, se agrega buscó agregar un inciso a través del cual, por excepción y por razones fundadas, el Poder Ejecutivo puede extender la edad de retiro de hasta tres funcionarias o funcionarios con cargo de embajador o ministro del Servicio Exterior.

Esta iniciativa no tuvo consenso y, por esos motivos, no fue incluida en el proyecto de ley.

El artículo 31 fue aprobado en el Senado, pero se entiende que es más adecuada la redacción del proyecto del Poder Ejecutivo relativa a las tres categorías que se definen en el artículo 30. En su primera asignación en el exterior el personal deberá cumplir dos trienios en dos categorías y no tan solo en las categorías A) y B), como establece el proyecto aprobado en el Senado.

Por último, el artículo 43 refiere a la derogación de diferentes normas, entre otras, el artículo 141 de la Ley N° 17.930, de 12 de diciembre del año 2005, que refiere a que ningún personal del Servicio Exterior puede ser acreditado como jefe de misión diplomática permanente por más de quince años en total durante su carrera funcional, y establece al respecto que el Poder Ejecutivo, por resolución fundada y por única vez, puede exceptuar a un máximo de cinco funcionarios el límite de quince años.

Se entiende que esta norma no debe ser derogada ya que tiene por objetivo que los funcionarios o las funcionarias no se perpetúen en los cargos de jefe de misión diplomática y se genere cierta movilidad.

Por lo expuesto, se sugiere a la Cámara aprobar las modificaciones que hemos solicitado. Debo expresar mi satisfacción porque en el seno de la Comisión aprobamos estas modificaciones por unanimidad.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el señor diputado Héctor Gabriel Gianoli Travieso.

SEÑOR GIANOLI TRAVIESO (Héctor Gabriel).- Señor presidente: como bien ha dicho el señor diputado Chiazzaro, el Partido Nacional contribuyó a que este proyecto alcanzara el voto unánime en la Comisión.

De la misma manera que decimos que no nos parece bien que se consideren y aprueben proyectos que no hayan pasado por la comisión respectiva, expresamos que con respecto a esta iniciativa hubo consenso y la amplitud necesarios para que todas las modificaciones fueran de recibo y aceptadas en la Comisión.

El proyecto que nos llegó del Senado presentaba algunos temas e incluía documentación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo con relación a la edad que se imponía de cuarenta años como límite. Obviamente, esta iniciativa elimina dicha discriminación.

Como bien se ha dicho, en el proyecto del Senado también se establecía la edad de retiro en setenta y dos años, y nosotros entendimos que dicho límite debe ser de setenta años de edad, a efectos de ajustarse al régimen general. Es decir, no acompañamos el camino intermedio entre ambas posiciones, y los

señores diputados Chiazzaro, Ríos y Meroni entendieron lo mismo.

Reitero que vamos a acompañar este proyecto y afirmo nuevamente que la bancada del Partido Nacional se congratula por haber llegado a un entendimiento, a un acuerdo, y que desde la Comisión se traiga al plenario un proyecto que fue trabajado y bien elaborado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: habré de votar afirmativamente el proyecto de ley en su totalidad, sin pedir desglose alguno, pero sigo pensando que debería existir un límite de edad para ingresar al Servicio Exterior.

Este tema ya fue discutido en la Cámara en ocasión de algún proyecto de ley de presupuesto o rendición de cuentas, y finalmente, por una clara mayoría, se decidió desestimar todo límite de edad.

Sin embargo, reitero mi punto de vista y digo lo siguiente.

No olvidemos que las plazas vacantes que se llenan con cada concurso del Instituto Artigas del Servicio Exterior son reducidas, son limitadas, son pocas; creo que la última vez hubo doce vacantes.

Esas son oportunidades para que se empiece a formar gente que, en su momento, suponiendo que todo vaya bien, será jefe de misión y representará a la República en el exterior.

A esa gente hay que formarla y, en su instrucción, no solo importa el conocimiento adquirido en las aulas universitarias o de cualquier naturaleza, sino la experiencia o, al menos, pesan lo mismo la experiencia y el conocimiento académico adquirido antes de ingresar a la función. Para eso tiene que haber oportunidades de desarrollar la carrera.

Si puede entrar alguien de cincuenta o sesenta años -probablemente en las pruebas de conocimiento obtenga mejores puntajes que los muchachos que tienen veinticuatro o veinticinco años-, vamos a tener un Servicio Exterior envejecido. Además, esas personas, al poco tiempo de entrar, van a llegar a los setenta años y se jubilarán por cesar en sus cargos.

En consecuencia, creo que esa no es una buena solución. Sí puede haber algún cupo, alguna limitación o lugares reservados sin límite de edad, pero no estoy de acuerdo con que se establezca como criterio general que entre cualquiera. De esta manera, la gente que sabe más -con los años se aprende- va a desplazar a los muchachos recién recibidos, que irán quedando afuera. Cuando queramos acordar, vamos a tener un Servicio Exterior envejecido o gente que será designada en los cargos sin el beneficio de la experiencia adquirida debido a una larga trayectoria anterior.

Por esas razones hubiera preferido establecer un límite de edad. Sin embargo, ese no es motivo para negar mi voto a este proyecto que, en general, me parece muy bueno.

Esto es cuanto quería expresar.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- Señor presidente: no hice uso de la palabra durante la discusión particular, a fin de utilizar los tres minutos del fundamento de voto para dejar algunas constancias.

En primer lugar, quiero decir que apoyo esta norma.

En segundo término, señalo que fue muy saludable el proceso de discusión, que tuvo como punto fundamental el diálogo con el gremio de los funcionarios del servicio. También resultó fundamental el diálogo multipartidario.

Además, se han señalado algunos aspectos referidos a la edad de ingreso a la función pública en la Cancillería. Habríamos preferido que este aspecto hubiera sido materia reglamentaria, tanto en esta como en otras áreas del Estado, para tener políticas específicas de discriminación positiva a los jóvenes. Sin duda, este no es un capítulo aislado, que se da

solo en la Cancillería; sucede en todo el Estado. Tal vez tenga que ver con el reflejo de la pirámide demográfica uruguaya. Sin embargo, este aspecto no obsta a la hora de dar nuestro voto favorable a esta iniciativa.

También quiero aprovechar esta oportunidad para señalar la profesionalidad de los funcionarios del Servicio Exterior uruguayo. Muchas veces, en la retórica pública -en particular, en las campañas electorales-, se hace referencia al servicio diplomático y a sus funcionarios desde un ángulo superficial, asociado solo a actividades banales, formales y protocolares. La verdad es que Uruguay puede sentirse profundamente orgulloso de su Servicio Exterior, de sus funcionarios, de la profesionalidad con la que abordan su trabajo y de su formación académica, que es muy rigurosa y continúa a lo largo de toda su vida, ya que deben concursar durante su carrera. Esto implica un esfuerzo importante desde el punto de vista de la formación y del Servicio.

Además, esta carrera no se remite a las actividades que uno puede ver en contactos bilaterales, sino que se ejerce a través de la representación del país en organismos multilaterales.

Por estos motivos, esta es un área estratégica para un país como Uruguay, sobre todo teniendo en cuenta sus dimensiones demográficas. La inserción internacional que hemos logrado tiene que verse relacionada, fundamentalmente, con las políticas públicas que han desarrollado los gobiernos, y también con el trabajo de quienes han dedicado su vida profesional a llevarlas adelante.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR MERONI (Jorge).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR MERONI (Jorge).- Señor presidente: el proyecto de ley sobre el Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República se trabajó durante varios meses. En la Comisión de Asuntos Internacionales recibimos tanto al gremio como a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y, luego, discutimos en profundidad esta iniciativa. En consecuencia, la votamos con mucho gusto.

Por otra parte, entendemos que en el Estado uruguayo no debe haber límite de edad. Al igual que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, creemos que si limitamos la edad de ingreso a la función pública, estamos violentando un derecho humano consagrado en la Constitución de la República: el derecho de todos y todas al trabajo. Por lo tanto, entendemos que es correcto que no exista límite de edad y que pueda concursar en el Ministerio de Relaciones Exteriores cualquier ciudadana o ciudadano.

En este sentido, estábamos trabajando con algunos legisladores, inclusive de la oposición, en una iniciativa -sabemos que en esta legislatura no podrá implementarse- que establezca que no exista límite de edad para ingresar al Estado.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- En discusión particular.

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).- ¿Me permite, señor presidente?

Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos y se voten en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Se va a votar el procedimiento.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 1º a 44, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y tres en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"CAPÍTULO I

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA

Artículo 1°.- Se entiende por Estatuto del Servicio Exterior el conjunto de normas jurídicas que establecen las obligaciones y los derechos del personal del Servicio Exterior.

A los efectos de la presente ley, el término "personal" se refiere a los cargos públicos que ingresen a la función pública como funcionarios o funcionarias del servicio exterior de acuerdo con las normas que surgen del presente Estatuto.

Integran el Servicio Exterior de la República el conjunto de cargos del escalafón diplomático ocupados por personal de carrera o por personal de particular confianza, en el marco de lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 12) del artículo 168 de la Constitución de la República.

Artículo 2°.- El personal del Servicio Exterior es designado para el cumplimiento de las funciones diplomáticas y consulares que se le encomiende desempeñar, tanto en la República como en el exterior. Está al servicio de la Nación con entera independencia de personas, grupos políticos o partidos. Su lealtad y obediencia se debe únicamente a la Nación y a su Gobierno, conforme a la Constitución y las leyes

Artículo 3°.- El personal del Servicio Exterior está para la función y no la función para el funcionario/funcionaria (artículo 59 de la Constitución de la República), debiendo servir con imparcialidad al interés general. Sin perjuicio de los deberes inherentes a todo el funcionariado público, son deberes especiales del personal del Servicio Exterior la probidad, la reserva, el decoro y la dignidad.

Además de las causales de destitución comunes a todos los funcionarios públicos, el personal de carrera del Servicio Exterior podrá ser también destituido, previa venia de la Cámara de Senadores, por la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del país o de la representación que inviste, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 10) del artículo 168 de la Constitución de la República.

Son derechos del personal de carrera del Servicio Exterior, además de los derivados del presente Estatuto, aquellos otros comunes a la función pública que no se opongan a las normas especiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores implementará el enfoque de género con el objetivo de prevenir e impedir cualquier trato discriminatorio por motivos de género y promover la igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera funcional de todo el personal del Servicio Exterior. A esos efectos se procurará la asignación equitativa de funciones de dirección y de jefaturas de misión entre funcionarios de ambos sexos del personal del Servicio Exterior.

Artículo 4°.- El personal del Servicio Exterior debe guardar absoluta reserva y discreción acerca de los temas vinculados a su tarea y especialmente de las cuestiones clasificadas como reservadas, confidenciales o secretas, que conozca o llegue a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de dicho ejercicio. Dicha obligación subsistirá aun cuando deje de pertenecer al Servicio Exterior.

CAPÍTULO II

INGRESO AL SERVICIO EXTERIOR

Artículo 5°.- El ingreso al Servicio Exterior, con excepción de lo dispuesto en el numeral 12) del artículo 168 de la Constitución de la República, solo podrá efectuarse por concurso de oposición y méritos en el cargo de Tercer Secretario / Tercera Secretaria.

En el ingreso al Servicio Exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores asegurará que no exista ningún tipo de discriminación basada en sexo, edad, discapacidad, origen étnico o de cualquier otro tipo.

Artículo 6°.- Las vacantes que se produzcan en los cargos del último grado del escalafón del Servicio Exterior, Tercer Secretario / Tercera Secretaria, serán provistas en la forma establecida en los artículos siguientes, por ciudadanas o ciudadanos que tengan título de educación universitaria, en carreras con un mínimo de cuatro años de duración, que hayan sido expedidos por universidades legalmente habilitadas en la República.

Igualmente podrán ser provistas por quienes acrediten títulos equivalentes expedidos por universidades notoriamente reconocidas del exterior.

Artículo 7°.- El concurso de oposición y méritos para el ingreso al Servicio Exterior será reglamentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y organizado por el Instituto Artigas del Servicio Exterior, debiendo publicarse su convocatoria en el Diario

Oficial y en otros dos diarios de tiraje nacional, por lo menos sesenta días antes de la fecha de iniciación de las pruebas.

La convocatoria incluirá información sobre el número de vacantes a ser provistas y los requisitos mínimos exigidos en el artículo anterior.

Un tribunal designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores evaluará los méritos y pruebas de quienes concursen, estableciendo un orden de precedencia entre quienes hayan obtenido las mejores calificaciones, hasta completar el número de vacantes fijadas por el Ministerio en la convocatoria.

El Poder Ejecutivo proveerá las vacantes de Tercer Secretario / Tercera Secretaria existentes a la fecha de la correspondiente convocatoria, siguiendo el orden de precedencia establecido por el tribunal del concurso.

CAPÍTULO III

INSTITUTO ARTIGAS DEL SERVICIO EXTERIOR

Artículo 8°.- El Instituto Artigas del Servicio Exterior será el servicio dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores que actuará como academia diplomática, responsable de organizar cursos de formación obligatorios para el personal que ingresa al Servicio Exterior de la República y de especialización y perfeccionamiento, igualmente obligatorios para el resto del personal del Servicio Exterior, con la excepción prevista en el artículo 12 de la presente ley, para ser ascendidos en el escalafón o ser destinados al exterior.

Artículo 9°.- Para la realización de los cursos, el Instituto Artigas del Servicio Exterior podrá recurrir al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores o de funcionarios/funcionarias de otras dependencias del Estado, de reconocida experiencia y capacidad. Asimismo, y a dichos fines, el citado instituto podrá celebrar convenios con instituciones de enseñanza o con técnicos especializados.

Artículo 10.- Para el cumplimiento de sus cometidos, el Instituto Artigas del Servicio Exterior deberá consultar las necesidades del servicio y organizar los cursos, aplicando a tal efecto los métodos más modernos y eficaces de enseñanza, manteniéndolos actualizados en cuanto a su metodología y contenido, procurando niveles de excelencia.

Artículo 11.- Es deber del personal del Servicio Exterior cumplir con el régimen de capacitación y asistencia a los cursos que dicte el Instituto Artigas del Servicio Exterior, para ser promovido o destinado.

Artículo 12.- Lo dispuesto en los artículos 8° y 11 del presente Estatuto se aplica a todo el personal del Servicio Exterior que pueda ser destinado a prestar funciones en el exterior hasta la categoría o rango de Consejero / Consejera inclusive, exceptuándose a quienes cumplan funciones de Directores o Directoras Generales, o sean o hayan sido Jefe o Jefa de Misión con carácter permanente.

CAPÍTULO IV

ASCENSOS

Artículo 13.- Los cargos del Servicio Exterior tendrán, en orden jerárquico decreciente, las siguientes categorías y grados:

7 – Embajador / Embajadora.

6 –Ministro / Ministra.

5 –Ministro Consejero / Ministra Consejera.

4 –Consejero / Consejera.

3 –Primer Secretario / Primera Secretaria.

2 –Segundo Secretario / Segunda Secretaria.

1 –Tercer Secretario / Tercera Secretaria.

Artículo 14.- Las vacantes que se produzcan en el Servicio Exterior, serán provistas dentro del primer trimestre del año siguiente al que se producen, por ascenso de la categoría inferior a la inmediata superior y de acuerdo con el siguiente régimen:

A) Las vacantes de Segundo Secretario / Segunda Secretaria, Primer Secretario / Primera Secretaria, Consejero / Consejera y Ministro Consejero / Ministra Consejera serán provistas de acuerdo con el resultado obtenido por las listas de antigüedad calificada para el ascenso.

Las listas de antigüedad calificada para el ascenso serán la resultante de la antigüedad, de la calificación, de los méritos y del concurso de oposición según la categoría funcional correspondiente, que a tales efectos se realice anualmente entre el personal de cada categoría que cuenten con la antigüedad mínima necesaria para aspirar al ascenso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, al constituir el tribunal del referido concurso, deberá dar participación a los efectos de su

integración al Instituto Artigas del Servicio Exterior y a la Universidad de la República. Asimismo podrá invitar a integrar el tribunal a personas o entidades de reconocida idoneidad y prestigio

B) Las vacantes de Ministro / Ministra y Embajador / Embajadora serán provistas por selección, en aquellos casos en que el Poder Ejecutivo considera conveniente proveerlas con personal de carrera del Servicio Exterior, para lo cual deberán tomarse en consideración las evaluaciones de desempeño funcional que se realizarán en la forma que establezca la reglamentación.

Estas vacantes de Ministro / Ministra y Embajador / Embajadora podrán ser provistas inmediatamente a que se generen.

C) Para la provisión de las vacantes referidas en los literales precedentes, será requisito necesario poseer, en el grado inmediato inferior, la antigüedad mínima que a continuación se establece:

Tercer Secretario / Tercera Secretaria: 3 años.

Segundo Secretario / Segunda Secretaria: 3 años.

Primer Secretario / Primera Secretaria: 3 años.

Consejero / Consejera: 4 años.

Ministro Consejero / Ministra Consejera: 4 años.

Ministro / Ministra: 4 años.

CAPÍTULO V

CATEGORÍAS Y SITUACIONES FUNCIONALES

Artículo 15.- Los cargos de Embajadores / Embajadoras y Ministros / Ministras del Servicio Exterior serán considerados de particular confianza del Poder Ejecutivo con la sola excepción de los actualmente provistos, o que se provean por ascenso, con personal de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los Embajadores / Embajadoras y Ministros / Ministras del Servicio Exterior designados en cargos de particular confianza cesarán de pleno derecho en sus funciones y cargo a los noventa días del término del mandato del gobierno que los haya designado, sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de cesarlos en cualquier momento. En estos casos, no serán de aplicación los límites de edad previstos para el personal del Servicio Exterior.

Artículo 16.- El personal de carrera del Servicio Exterior solo podrá ser acreditado como Jefe o Jefa de Misión permanente, cuando posea cargo presupuestal de Embajador / Embajadora, Ministro / Ministra o Ministro Consejero / Ministra Consejera.

Los Ministros / Ministras y Ministros Consejeros / Ministras Consejeras que sean acreditados en calidad de Embajador / Embajadora, percibirán los haberes y demás compensaciones correspondientes a esta última categoría presupuestal, durante el término de su misión en el exterior.

Quienes siendo Consejeros / Consejeras a la fecha de vigencia de la presente ley se encontraren acreditados en calidad de Jefe o Jefa de Misión en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto Ley N° 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 331 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, habrán de finalizar su quinquenio en funciones en el exterior en los términos y condiciones en que fueron designados.

Artículo 17.- El Poder Ejecutivo podrá, con carácter transitorio y al solo efecto protocolar, cuando las necesidades del servicio lo requieran, asignar al personal del escalafón M - Personal del Servicio Exterior la categoría inmediata superior a la del cargo que posea, sin que implique variación en las remuneraciones.

Artículo 18.- Se establece en 70 años la edad máxima para el desempeño de tareas en el escalafón M - Servicio Exterior por parte del personal de carrera del Servicio Exterior.

Alcanzada la edad señalada, se producirá el cese de pleno derecho en el cargo.

Artículo 19.- El personal de carrera del Servicio Exterior tendrá las siguientes situaciones: actividad, disponibilidad y retiro.

Artículo 20.- La situación de actividad comprende al personal que preste servicios en el exterior o en la Cancillería.

Artículo 21.- La situación de disponibilidad comprende al personal que, en forma transitoria, deje de prestar funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 22.- El Poder Ejecutivo podrá disponer el pase a situación de disponibilidad de:

A) El personal que no asuma los destinos que se le asigne en el exterior o en la Cancillería.

B) El personal que por causa grave deba cumplir sanciones disciplinarias de suspensión, por el tiempo que duren estas.

C) El personal amparado al régimen de licencia especial sin goce de sueldo.

Artículo 23.- En los supuestos referidos en los literales A) y B) del artículo 22 del presente Estatuto, el pase a situación de disponibilidad operará de forma independiente y sin perjuicio de las medidas disciplinarias que en cada caso se adopten.

Artículo 24.- El personal que sea pasado a situación de disponibilidad como consecuencia de lo dispuesto en el literal A) del artículo 22 de del presente Estatuto, cesará en la misma cuando se le asigne nuevo destino en el exterior o en la Cancillería. En estos casos la situación de disponibilidad no podrá exceder los seis meses.

Artículo 25.- El personal que se encuentre en situación de disponibilidad gozará, en virtud de lo dispuesto en el literal A) del artículo 22 del presente Estatuto, de la mitad del sueldo de su cargo presupuestal, sin compensaciones.

Quienes se encuentren en las situaciones enumeradas en los literales B) y C) del artículo 22 del presente Estatuto, no percibirán remuneración alguna.

Artículo 26.- El personal que se encuentre en situación de disponibilidad en virtud de lo dispuesto en los literales A) y B) del artículo 22 del presente Estatuto, no podrá ser ascendido. No se computará el tiempo transcurrido en la misma a efectos de la rotación ni de la antigüedad. No obstante, el período pasado en dicha situación será tenido en cuenta a efectos del retiro.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 27.- Todo el personal de carrera del Servicio Exterior deberá obligatoriamente rotar en el desempeño de funciones, alternando períodos máximos de cinco años en el exterior y mínimos de dos años en la Cancillería respectivamente, siendo facultad de la Administración determinar, dentro de los límites establecidos y de acuerdo con las necesidades del servicio, su extensión, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 31 y siguientes del presente Estatuto.

Durante el período de desempeño funcional en el exterior, el personal del Servicio Exterior solo podrá ser trasladado una vez.

No podrá ser destinado nuevamente a desempeñar funciones en el exterior en un mismo destino, hasta tanto haya cumplido un período de cinco años de servicio en el exterior, en otro diferente.

El Poder Ejecutivo por resolución fundada y atendiendo a las necesidades del servicio, podrá exceptuar de esta última prohibición hasta un máximo simultáneo de tres Jefes o Jefas de Misión y por un período máximo de dos quinquenios.

Artículo 28.- El personal del Servicio Exterior que sea sancionado por la comisión de faltas administrativas graves, quedará asimismo inhibido de cumplir funciones en el exterior o ser ascendido por el tiempo que se determine en cada caso.

El acto administrativo por el cual se establezcan las medidas disciplinarias correspondientes deberá establecer conjuntamente el plazo de inhibición a que refiere el presente artículo.

Artículo 29.- Los Terceros Secretarios / Terceras Secretarias del Servicio Exterior no podrán ser destinados a prestar funciones en el exterior, hasta tanto acrediten una antigüedad mínima de tres años en el Escalafón del Servicio Exterior.

Lo dispuesto en este artículo comenzará a regir para el personal que ingrese a partir del primer concurso de ingreso posterior a la entrada en vigor de la presente ley.

Artículo 30.- Existirán tres categorías de destinos en el exterior, graduadas de A) a C), según las condiciones especiales de vida que presenten, a saber:

Categoría A) destinos que no presentan circunstancias especiales de vida que dificulten la adaptación y el ejercicio de la función.

Categoría B) que presentan alguna circunstancia particular funcional o de adaptación.

Categoría C) destinos que presentan condiciones de vida particularmente difíciles.

Estas categorías se reglamentarán y actualizarán periódicamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores tomando en consideración las circunstancias objetivas de los destinos, como la situación política, social y económica, las condiciones de salubridad, el

grado de seguridad interna o aspectos que por las circunstancias imperantes involucren un cierto riesgo para la integridad física o psíquica del personal del Servicio Exterior y su familia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores asignará las categorías previstas en este artículo a los destinos en el exterior, actualizando periódicamente dicha asignación.

Artículo 31.- En su primera asignación en el exterior, el personal cumplirá un período total en funciones de seis años, a computar en dos trienios consecutivos, en dos de las categorías establecidas en el artículo precedente.

Artículo 32.- El personal que sea destinado a cumplir funciones en destinos clasificados en la Categoría C), excepto los Jefes o Jefas de Misión, lo harán por un período de tres años, transcurrido el cual tendrán derecho a ser trasladados a otro destino, no comprendido en esa categoría, por igual período de tiempo.

En la resolución del Poder Ejecutivo por la que se efectúa la designación a un destino clasificado en la Categoría C), se dispondrá expresamente que el traslado es por el período de tres años.

Artículo 33.- El Poder Ejecutivo podrá, por resolución fundada y respecto a un máximo de quince funcionarios o funcionarias en forma simultánea, prorrogar los plazos de desempeño de funciones en el exterior, hasta por el término de seis meses renovables por una sola vez y hasta por igual período.

En el caso de Jefes o Jefas de Misión Diplomática, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar por un año adicional sucesivamente y hasta un máximo de siete años, su período en funciones en el exterior en un mismo destino.

Las solicitudes de prórroga podrán fundamentarse:

A) Cuando así lo justifiquen estrictas e ineludibles razones de servicio que deberán fundamentarse en forma clara y concisa.

B) Cuando el personal demuestre fehacientemente que el retorno en la fecha de vencimiento del quinquenio perjudica en forma grave e irreparable la educación curricular de los hijos e hijas menores de 18 años que tenga a su cargo.

C) Cuando así se justifique por estrictas razones de salud que deberán fundamentarse en forma clara y concisa, del funcionario o funcionaria o de su núcleo familiar.

En estos casos se adicionará un tiempo idéntico al transcurrido en las prórrogas dispuestas en el período de adscripción mínima a los efectos establecidos en el artículo 27 de la presente ley. Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo evaluará la pertinencia de aplicar esta disposición en los casos comprendidos en el literal A) del presente artículo.

Artículo 34.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo sin atender al cumplimiento de los plazos de rotación y de la limitación de un solo traslado establecidos en el artículo 27 del presente Estatuto, podrá dar destino, trasladar o disponer por única vez la permanencia simultánea en el exterior de hasta un máximo de cinco Jefes o Jefas de Misión.

Por ningún motivo dicho personal podrá permanecer más de diez años consecutivos en funciones en el exterior.

Cuando la excepcionalidad se aplique a la observancia del bienio establecido en el artículo 27 de la presente ley, la posibilidad de utilizar la excepción conferida se recobrará para la Administración a partir de la fecha en que el personal exceptuado complete su período mínimo de adscripción en Cancillería.

Artículo 35.- No podrá prestar servicios simultáneamente en las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares de la República radicadas en un mismo Estado personal del Servicio Exterior con parentesco hasta tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad.

Sin perjuicio de ello, el personal del Servicio Exterior vinculado por matrimonio o por unión concubinaria podrá ejercer simultáneamente funciones en el exterior en un mismo Estado, siempre que el ejercicio de tales funciones no implique una relación jerárquica entre ambas partes.

Cuando una de las partes sea destinada a desempeñar funciones permanentes en el exterior, la otra podrá solicitar licencia especial para acompañar a la primera en el cumplimiento de su misión.

La licencia especial será concedida por el período en el cual quien tiene el destino en el exterior permanezca en tal situación.

Quien se encuentre usufructuando licencia especial, mientras se halle en tal situación, no percibirá ninguna remuneración, no podrá ser ascendido y no se le computará el tiempo a los efectos de la rotación.

Artículo 36.- El personal del Servicio Exterior casado o en unión concubinaria cuyos cónyuges o

concubinos o concubinas fueran extranjeros, sean estos o no ciudadanos legales de la República, podrá tener destino en los países de nacimiento o de la nacionalidad de origen o adquirida de los mismos, con previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 37.- No podrán emplearse en las Misiones Diplomáticas, Delegaciones u Oficinas Consulares de la República radicadas en un Estado, los familiares del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores con destino en el mismo Estado, cuando existiera relación jerárquica entre ambos.

Cuando no existiese dicha relación jerárquica, deberá requerirse la autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 38.- El personal del Servicio Exterior que desempeña funciones en el exterior deberá solicitar y recibir autorización previa y expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay para que sus cónyuges o concubinos o concubinas puedan ejercer profesiones o desempeñar tareas remuneradas en el país de destino.

Artículo 39.- El Poder Ejecutivo, al disponer los destinos y traslados del personal del Servicio Exterior, tendrá en cuenta las aptitudes del personal en atención a las necesidades de la Administración, tendiendo a asegurar la mayor y mejor eficiencia del servicio, tanto desempeñando funciones en el exterior como en la Cancillería y, en la medida de lo posible, considerando la situación de familia del funcionariado. También serán tenidas en cuenta su preparación funcional, aptitudes especiales, condiciones de adaptabilidad, conocimiento de idiomas y rendimiento demostrado en determinadas funciones y lugares.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y RESIDUALES

Artículo 40.- El personal Clase AaA a que refiere el artículo 44 del Decreto-Ley N° 14.206, de 6 de junio de 1974, continuará cumpliendo funciones asimilado al personal de carrera del Servicio Exterior, como en el régimen vigente hasta la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 41.- El personal presupuestado del Ministerio de Relaciones Exteriores, perteneciente a los escalafones Administrativo (C), Técnico (B) y Especializado (D), con un grado mínimo de 8 (ocho) y con una antigüedad igual o mayor a cinco años en el Inciso podrá ser destinado a prestar funciones administrativas y técnicas en las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o Delegaciones Permanentes de la República en el exterior. Este personal no tendrá carácter diplomático ni consular.

En esta situación podrán encontrarse como máximo veinte funcionarios o funcionarias en forma simultánea. El plazo de permanencia en el exterior no excederá de tres años pudiendo ser prorrogable por hasta un año más en los casos en que así lo requieran las necesidades del servicio. Este personal deberá realizar los cursos básicos de formación, aprobar los mismos y será seleccionado por concurso de méritos y antecedentes. No podrá ser destinado nuevamente al exterior hasta después de transcurridos cinco años de su regreso a la República.

El personal así destinado percibirá, por trimestre adelantado y como única remuneración, el importe equivalente al 90 % (noventa por ciento) del sueldo correspondiente al cargo Tercer Secretario / Tercera Secretaria en el mismo destino, más los beneficios sociales que le correspondan, no percibiendo gastos de representación.

Tendrá derecho además de los pasajes correspondientes, a las compensaciones establecidas en el artículo 77 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, en la redacción dada por el artículo 269 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 y a la Ayuda de Vivienda establecida por el Decreto Nº 071/091, de 5 de febrero de 1991 y sus modificativos.

Artículo 42.- El personal presupuestado del escalafón "A" Técnico Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores con más de diez años de antigüedad en el Inciso, ingresado con posterioridad al 31 de diciembre de 1985, no amparado por el artículo 123 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 ni por el artículo 143 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, podrá, por razones de servicio, ser designado a desempeñar funciones propias de su escalafón en las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o Delegaciones Permanentes de la República en el exterior.

En esta situación podrán encontrarse como máximo seis funcionarios o funcionarias en forma simultánea. El plazo de permanencia en el exterior no excederá de dos años, pudiendo ser prorrogable por hasta un año más en los casos en que así lo requieran las necesidades del servicio. Su designación será atendiendo a criterios objetivos de selección, méritos y antecedentes y deberán realizar y aprobar los cursos básicos de formación.

En todos los casos la acreditación en el exterior será como Personal Técnico acorde al literal C) del

artículo 1° de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Dicho personal acreditado en el exterior, a su regreso, no tendrá derecho a salir nuevamente a otro destino salvo que la Administración lo requiera y a esos efectos hará resolución fundada. En dicho caso, solo podrá ser efectiva la nueva acreditación por este régimen, si mediaron por lo menos cinco años de permanencia de dicho personal en la República desde la fecha de su regreso al país.

La retribución del personal designado bajo este régimen será la prevista para el personal administrativo destinado al exterior incrementada en un 20 % (veinte por ciento), más los beneficios sociales que le correspondan, no percibiendo gastos de representación.

Tendrá derecho además de los pasajes correspondientes, a las compensaciones establecidas en el artículo 77 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, en la redacción dada por el artículo 269 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 y a la Ayuda de Vivienda establecida por el Decreto Nº 071/091, de 5 de febrero de 1991 y sus modificativos.

Artículo 43.- Deróganse el Decreto Ley N° 14.206, de 6 de junio de 1974 y sus modificativas, el artículo 331 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, el artículo 256 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, el artículo 168 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, el artículo 145 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, los artículos 162 y 163 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, el artículo 27 de la Ley N° 15.767, de 13 de setiembre de 1985 y los artículos 70 y 72 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986 y todas aquellas disposiciones que se opongan al nuevo Estatuto.

Artículo 44.- A partir de la fecha, integran el Estatuto del Servicio Exterior, las normas contenidas en la presente ley".

29.- Ejercicio "Tanque 2019". (Se autoriza el ingreso al territorio nacional de hasta tres personal superior y una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina)

——Corresponde tratar el asunto que figuraba en sexto término del orden del día y que pasó a ser séptimo.

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 139 del Reglamento, se va a votar si se considera el asunto en cuestión, ya que ingresó a la Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

(Se vota)

——Sesenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se pasa a considerar el asunto relativo a: "Ejercicio 'Tanque 2019'. (Se autoriza el ingreso al territorio nacional de hasta tres personal superior y una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. N 1215

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y tres en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"**Artículo único.-** Autorizar el ingreso al territorio nacional de hasta tres (3) Personal Superior y una (1) aeronave KC-130 de la Fuerza Aérea Argentina, con la finalidad de realizar el Ejercicio "TANQUE 2019", entre el 14 y el 18 de octubre de 2019 (fecha alterna entre el 3 y el 7 de noviembre de 2019)".

30.- Comercialización de sucedáneos de leche materna. (Regulación)

——Se pasa a considerar el asunto que figuraba en séptimo término del orden del día y que pasó a ser octavo: "Comercialización de sucedáneos de leche materna. (Regulación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. N 702

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

Anexo I

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

(Ocupa la Presidencia el señor representante Óscar Groba)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Luis Gallo Cantera.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Gracias, señor presidente.

El objetivo principal de este proyecto de ley es integrar a la legislación nacional los elementos de protección a la práctica de lactancia materia y, de esta manera, lograr una óptima y adecuada alimentación infantil.

La protección y promoción de la lactancia materna es una de las líneas de acción estratégicas del Plan de Acción para la Prevención y Control del Sobrepeso y de la Obesidad en Niños y Adolescentes. Para alcanzarla, este plan refiere que se exige a los países que renueven su compromiso de aplicar plenamente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y todas las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud complementarias y ampliatorias, referentes a dicho Código.

Por lo antedicho, el presente proyecto de ley tiene el cometido de dar cumplimiento a las recomendaciones que la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hacen respecto a la puesta en práctica de los principios y objetivos de todos los artículos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, así como de las subsiguientes resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, si bien hasta la fecha, varias disposiciones del Código se encuentran insertas en el Reglamento Bromatológico Nacional, así como en la Ordenanza N° 62, dictada por el Ministerio de Salud Pública, de fecha 19 de enero de 2017.

El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud en 1981 como la norma mínima para ayudar a proteger y fomentar la lactancia materna a través de la reglamentación de la comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna.

Para la redacción del proyecto de ley que estamos presentando nos basamos en la ley modelo de protección de la lactancia materna. Esta iniciativa fue elaborada con la participación de todos los actores involucrados en esta temática, a saber, representantes de la Red Uruguaya de Apoyo a la Nutrición y Desarrollo Infantil (Ruandi), la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas (Audyn), el Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), la Liga de la Leche Uruguay; el Instituto Uruguayo de Lactancia Materna (Iulam), Unicef y el Ministerio de Salud Pública.

Esta iniciativa se trabajó con todas y todos los actores involucrados en el tema y contó con el aporte de sus experiencias, resultados y estadísticas, con el convencimiento de brindar a las niñas y niños de nuestro país las mejores oportunidades para alcanzar su máximo potencial, crecer y desarrollarse como jóvenes y adultos sanos, socialmente productivos. La lactancia materna es una estrategia fundamental en el cumplimiento de dicho propósito.

Una saludable alimentación a temprana edad redunda en una mejor calidad de vida, desarrollo intelectual y motriz y, con el tiempo, en menores costos de los servicios de salud.

Por lo expresado, recomendamos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley sobre el que trabajamos en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra la señora diputada Nibia Reisch.

SEÑORA REISCH (Nibia).- Señor presidente: nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley.

Recordemos que el objetivo de esta iniciativa es proteger la práctica de la lactancia materna y, de esta manera, lograr una óptima y adecuada alimentación infantil.

En Uruguay, los niños obesos de entre cero y cinco años representan el 10,5 %, mientras que el porcentaje promedio en América Latina es de 7,1 %. Además, en Montevideo, la cantidad de niños en esa situación es superior en 2 puntos porcentuales: mientras en la capital la prevalencia es de 11 %, en el interior del país es de 9 %.

Como licenciada en nutrición, este tema me toca muy de cerca. Sabemos que los niños que tienen un peso por encima del recomendado tendrán muchas más probabilidades de desarrollar patologías cuando sean adultos: cardiopatías; mayor resistencia a la insulina, que se puede traducir en una futura diabetes; problemas de artrosis y mayor predisposición a padecer cáncer de colon, de mama o de endometrio.

Por eso consideramos que con esta iniciativa se da un paso importante. Sin duda, la protección y la promoción de la lactancia materna es una acción para prevenir el sobrepeso y la obesidad en la niñez.

Este proyecto de ley tiene como cometido dar cumplimiento a las recomendaciones que tanto la Organización Mundial de la Salud como Unicef han hecho con respecto a la puesta en práctica de los principios y objetivos de todos los artículos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, así como de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud.

Como bien dijo el diputado Gallo, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna fue aprobado por la OMS en el año 1981 como una norma mínima para proteger y fomentar la lactancia materna a través de la comercialización y distribución de sucedáneos de la lecha materna.

Quiero resaltar que este proyecto fue elaborado con el aporte de la Red Uruguaya de Apoyo a la Nutrición y el Desarrollo Infantil, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el Instituto Uruguayo de Lactancia Materna, la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas, la Unicef y el Ministerio de Salud Pública. Todos ellos aportaron sus experiencias, con resultados y estadísticas, con el convencimiento de brindar a niñas y niños de nuestro país las mejores oportunidades para alcanzar su máximo potencial y que crezcan y se desarrollen como jóvenes y adultos sanos.

Para terminar, quiero destacar el penúltimo párrafo del informe que acompaña este proyecto de ley, que fue propuesto por la señora diputada Viel. Felicito a la señora diputada por haber presentado el proyecto. Sé lo mucho que trabajó para que esta iniciativa saliera adelante. Quiero hacer un reconocimiento a su trabajo, compartiendo el penúltimo párrafo del informe que acompaña este proyecto de ley, que expresa: "Una saludable alimentación a temprana edad redunda en una mejor calidad de vida, desarrollo intelectual y motriz y, con el tiempo, menores costos en los servicios de salud".

Reitero que acompañamos este proyecto porque compartimos totalmente su contenido.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra la señora diputada Stella Viel.

SEÑORA VIEL (Stella).- Gracias, señor presidente.

Antes que nada, agradezco a los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.

No quiero ser reiterativa, pero fue un trabajo gratificante y, en lo particular, de enseñanza.

Por eso, para mí y para todo el equipo que ha trabajado incansablemente en este proyecto, hoy es un día muy especial.

Esta idea surge del diálogo con las diferentes organizaciones sociales en torno a la problemática del

consumo abusivo de productos ultraprocesados y de la necesidad de mejorar nuestra alimentación para combatir algunos problemas que se han incrementado día a día, como la obesidad y otras enfermedades no trasmisibles.

Decidimos comunicarnos con el Ministerio de Salud Pública, con las técnicas y los técnicos que están a cargo de llevar adelante esta temática a efectos de comenzar a trabajar en un área especifica y muy concreta, a la cual le hacía falta el marco jurídico correspondiente y una legislación que regulara la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, como producto ultraprocesado que es y que impacta al inicio de la vida de nuestros niños y nuestras niñas, basándonos en lo establecido en el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Así fue que en el año 2016, con el aporte de todas las técnicas y todos los técnicos que tienen que ver con esta materia, se inició un proceso de trabajo. Se hicieron reuniones quincenales, con el asesoramiento técnico y jurídico de cada área, hasta que en agosto de 2017 hicimos el lanzamiento y la presentación del proyecto de ley que hoy está a consideración del Cuerpo.

Quiero remarcar cuál es el espíritu objetivo de este proyecto de ley. El objetivo es proteger la lactancia materna en forma exclusiva en los primeros meses de vida de niñas y niños, porque la leche de la mamá es el mejor alimento y el más sano para nuestros hijos; es el alimento que genera las mayores defensas y que colabora en el combate de las enfermedades no trasmisibles, como la obesidad y la diabetes, entre otras.

No estamos en contra de las fórmulas alimentarias; creemos que son necesarias, pero deben ser recetadas con responsabilidad para aquellos que la necesiten. Por eso proponemos la regularización, a través de la ley, de los productos que están a la venta o recomendados.

Quiero citar palabras vertidas por una de las profesionales en nutrición del colectivo que trabajó en la Comisión de Salud Pública. Concretamente, la profesional expresó: "Es fundamental que la mamá entienda que su leche es lo mejor; muchas veces se les dice que el niño queda con hambre porque su leche no es la adecuada o porque no es suficiente. No es verdad; cada mamá produce lo que necesita para su hijo. Ella es la que tiene que estar realmente convencida y, por eso, no podemos distraer su atención con publicidad, carteles o promociones".

Esto es exactamente lo que queremos regular: su comercialización.

En este relato recuerdo a quien hiciera tanto por la lactancia materna: la compañera Berta, que por aquellos días proponía lo que hoy es ley: la sala de lactancia materna en lugares públicos, privados y de estudio.

Si bien este proyecto de ley no genera recursos económicos, sí genera mayor calidad de vida y más humanización en todos sus actores. Su puesta en práctica, sin duda, se convertirá en un ahorro importante para el sistema de salud todo.

Quiero decir a las organizaciones sociales que estoy feliz de haber cumplido con mi palabra y de haber dado todo para que este proyecto saliera adelante.

Invito a los integrantes del Cuerpo a pensar en las generaciones venideras. Un futuro mejor es posible, partiendo de una mejor calidad de vida.

Gracias a todos y a todas que, con su conocimiento, aportes, alegría, participación y armonía hicieron posible seguir aportando a un mundo mejor.

Muchísimas gracias.

SEÑOR GROBA (Óscar).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- Pido la palabra para una cuestión de procedimiento.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- Señor presidente: solicito que se suprima la lectura de todos los artículos y que se voten en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar si se suprime la lectura del articulado y se votan en bloque los artículos 1º a 39, inclusive.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Señor presidente: solicito el desglose del artículo 3º y del primer inciso del artículo 4º, puesto que tienen pequeños errores de redacción.

El artículo 3º establece: "Designa como autoridad competente para la aplicación de la presente ley y su reglamento, al Ministerio de Salud Pública", cuando debería decir: "Desígnase como autoridad competente para la aplicación de la presente ley y su reglamento, al Ministerio de Salud Pública".

El inciso primero del artículo 4º expresa: "Para efectos de la presente ley se entenderá por:". Sin embargo, debería decir: "A los efectos de la presente ley se entenderá por:".

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se suprime la lectura del articulado y se van a votar en bloque los artículos 1º a 39, inclusive, con las modificaciones propuestas por el señor diputado.

(Se vota)

——Sesenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- El objeto de la presente ley es proteger, promover y apoyar la lactancia materna y las mejores prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños, para proporcionarles una nutrición segura, adecuada y suficiente; así como regular la comercialización y distribución de todo alimento y o bebida que sea utilizado en lactantes y niños pequeños.

CAPÍTULO II

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2°.- La presente ley se aplica en todo el territorio nacional, a todos los fabricantes y distribuidores de los productos designados, nacionales e importados, así como a personas físicas y jurídicas y relacionados con la lactancia materna y la alimentación óptima de los lactantes y niños pequeños, y a su protección, promoción y apoyo.

Artículo 3°.- Desígnase como autoridad competente para la aplicación de la presente ley y su reglamento, al Ministerio de Salud Pública.

CAPÍTULO III

DEFINICIONES

Artículo 4°.- A los efectos de la aplicación de la presente ley se entenderá por:

A) Sucedáneos de la leche materna: Todo alimento comercializado o de otro modo presentado como sustituto, parcial o total, de la leche materna, sea apropiado o no para ese fin.

B) Alimento complementario: Es el que se inicia cuando la leche materna no es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales del lactante.

C) Autoridad competente: Instituciones designadas como responsables de la aplicación de la presente ley y del monitoreo y vigilancia del cumplimiento de la misma.

D) Donación: Ofrecimiento o suministro gratuito de un producto en cantidad superior a la caracterizada como muestra.

E) Envase: Cualquier forma de embalaje y presentación de un producto designado, destinado a su comercialización, incluidas cada una de las unidades que contenga los productos designados, los que pueden ser en polvo o líquido, empacada en tarros o latas, cajas o bolsas, sobres, botellas o cápsulas listas para el consumo, packs u otras.

F) Etiqueta: Todo sello, marca, rótulo u otra indicación descriptiva o gráfica, elaborada por cualquier medio, fijada en el envase o colocada dentro del mismo o dentro del producto designado.

G) Fabricante, distribuidor y promotor: Cualquier persona física o jurídica que directa o

indirectamente se dedique a la producción o comercialización de un producto designado, incluyendo toda persona que se dedique a proporcionar servicios de información o de relaciones públicas para un producto designado.

H) Preparado de Inicio: Producto en forma líquida o en polvo y en cualquier forma de envase destinado a la alimentación de lactantes hasta los seis meses de edad.

I) Preparado de seguimiento o de continuación: Todo producto lácteo o similar, indicado o de otro modo presentado como adecuado para la alimentación de lactantes mayores de seis meses y hasta treinta y seis meses de edad.

J) Aditivo de leche materna: preparado de nutrientes, en presentación líquida o en polvo y en cualquier forma de envase, presentada o indicada para adicionar a la leche materna.

K) Lactancia materna exclusiva: Cuando el niño-niña recibe solamente leche materna, directamente del pecho u ordeñada, o leche humana de otra fuente sin ningún otro alimento o bebida, ni siquiera agua, con excepción de sales de rehidratación oral, gotas o jarabes conteniendo vitaminas, suplementos minerales o medicamentos.

L) Lactante y niño pequeño: Niño de cero a treinta y seis meses de edad cumplidos.

M) Leche denominada de seguimiento: Leche de origen animal, entera o modificada, o producto similar de origen vegetal, comercializada como apta para la alimentación hasta treinta y seis meses.

N) Logotipo: Designa el emblema, el diseño o los caracteres por los que se identifica un producto, una marca o una empresa.

O) Material informativo o educativo: Todo material escrito, audiovisual o virtual relacionado con la lactancia materna y la alimentación de lactantes y niños pequeños, mujeres embarazadas y en período de lactancia, destinado al público en general.

P) Material técnico-científico: Todo material dirigido al personal de salud y otros profesionales afines, elaborado con información científicamente válida y relacionado con los productos designados. Explícitamente excluye toda forma de promoción y publicidad.

Q) Marca: Todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición que tales signos sean apropiados para distinguir y diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra.

R) Muestras: Una unidad o pequeñas cantidades de un producto que se facilitan gratuitamente.

S) Patrocinar: Dar cualquier tipo de apoyo o incentivo, financiero, logístico o material a profesionales, servicios, entidades o establecimientos públicos o privados.

T) Personal de salud: Toda persona profesional, técnica o de apoyo, incluidos los agentes voluntarios no remunerados, relacionada con la salud en el área pública o privada.

U) Producto Designado:

1) Preparado para lactantes estándar, incluida cualquier preparación que se use como única o parcial fuente de nutrición para alimentar lactantes desde el nacimiento.

2) Preparados para lactantes especiales; libres de lactosa, preparados para niños con trastornos poco frecuentes y cualquier otra similar que se produzca en el futuro.

3) Otros productos lácteos, alimentos o bebidas cuando se comercializan o se indica que pueden emplearse, con o sin modificación, para sustituir parcial o totalmente a la leche materna.

4) Preparados de seguimiento, de continuación, o crecimiento, incluidos los preparados recomendados para menores de treinta y seis meses.

5) Aditivos de la leche materna.

6) Cualquier alimento complementario u otro alimento o bebida comercializado, suministrado, presentado o comúnmente usado para alimentar a lactantes y niños pequeños, incluyendo los agregados nutricionales, alimentos terapéuticos listos para usarse.

7) Biberones, tetinas, chupetes, intermediarias, aireadores, y todo utensilio o material comercializado relacionado con la preparación, suministro de alimentos e higiene.

8) Alimentos y bebidas dirigidos especialmente para mujeres embarazadas o en período de lactancia.

V) Comercialización: Cualquier forma de preservar o vender un producto designado, incluyendo las actividades de promoción, importación, distribución, publicidad, mercadeo, patrocinio, servicios de información y relaciones públicas para un producto designado.

W) Promoción: Actividad que tiene como fin el dar a conocer o hacer sentir la necesidad de un producto designado, o de estimular, directa o indirectamente, a una persona a comprar o utilizar un producto designado.

X) Publicidad: Cualquier actividad de presentación o demostración, por cualquier medio, con el fin de promover o inducir, directa o indirectamente, la compra o el uso de un producto designado o un servicio.

Y) Punto de venta: Lugar, físico o virtual, de expendio al público de productos designados.

Z) Suministro subvencionado: Práctica por la que una cantidad de un producto designado se entrega a los prestadores de salud, a un precio unitario menor al precio de venta.

CAPÍTULO IV

COMERCIALIZACIÓN

Artículo 5°.- Todo producto designado podrá ser comercializado, solo si:

A) Cuenta con registro sanitario y cumple con la normativa de etiquetado establecida en el artículo 9º del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna aprobado por la OMS y UNICEF.

B) Está debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, de conformidad con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento.

C) Está vigente para el consumo, con fecha de vencimiento visible.

D) Cumple rigurosamente con las normas establecidas por la presente ley y su reglamento.

CAPÍTULO V

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Artículo 6°.- Queda prohibida a cualquier persona física o jurídica la promoción, publicidad y patrocinio de los productos designados por cualquier medio.

Artículo 7°.- Las prácticas promocionales y publicitarias prohibidas incluyen, pero no se limitan a las siguientes:

A) Tácticas de venta tales como presentaciones especiales, descuentos promocionales, bonificaciones, rebajas, ventas especiales, premios u obsequios, ventas vinculadas, asociaciones con otras marcas o con otros productos y logotipos similares, contacto directo o indirecto de representantes de fabricantes o distribuidores de productos designados con las madres, padres, familias y el público o cualquier otra práctica que establezca la autoridad competente.

B) Entrega de muestras a cualquier persona, entidad o institución.

C) Suministros gratuitos o de bajo costo de productos designados a cualquier persona, entidad o institución.

D) Donación o subvención de un producto designado a cualquier persona, entidad o institución, salvo los casos previstos que la Reglamentación a la presente ley establezca.

Artículo 8°.- Queda prohibido a toda persona física o jurídica que comercialice productos designados, directa o indirectamente:

A) Donar o distribuir a cualquier persona o entidad, cualquier material o equipo que contenga palabras, imágenes, marca, eslogan, logotipo que identifiquen a un producto designado, una línea de productos o un fabricante, o que pueda promover el uso de un producto designado.

B) Donar o distribuir a cualquier persona o institución, objetos tales como lapiceras, calendarios, afiches, calcomanías, folletos, libretas de notas, tarjetas de crecimiento, juguetes u otros que contengan palabras, imágenes, marca, logotipos o eslogan que identifiquen a un producto designado, una línea de productos o un fabricante, o que pueda promover el uso de un producto designado.

C) Donar suministros gratuitos de productos designados a cualquier persona o entidad o venderlos a los servicios de salud a menos del precio al por mayor publicado.

D) Ofrecer o donar cualquier servicio, obsequio, contribución o beneficio al personal de salud e instituciones, incluido becas, subvenciones a la investigación, financiamiento de participación en reuniones, seminarios, conferencias o cursos de formación continuada y otros.

E) Patrocinar o desarrollar eventos, concursos o campañas destinados a mujeres gestantes y sus parejas o madres en lactancia, padres de lactantes y niños pequeños o miembros de sus familias, o patrocinar o desarrollar eventos, concursos o campañas relativas a la fecundidad, al embarazo, al parto y postparto, o a la alimentación de lactantes y niños pequeños.

F) Incentivar con bonificaciones o comisiones o formas similares el volumen de ventas de productos designados.

G) Iniciar o establecer, directa o indirectamente, a título profesional o comercial, contacto con mujeres embarazadas, madres y padres de lactantes, niños pequeños y sus familias.

Artículo 9°.- No se permitirá en ningún medio de comunicación o red social ni en material impreso, visual o auditivo, incluyendo los sistemas virtuales, el uso de imágenes de biberones, chupetes, tetinas, intermediarias, aireadores o similares, a fin de evitar cualquier mensaje subliminal o implícito que pueda desestimular la lactancia materna.

Artículo 10.- Toda persona física o jurídica que comercialice productos designados no podrá patrocinar o financiar becas para estudios que tengan relación con temas de lactancia materna y/o alimentación de lactantes, formación continuada o la participación de personal de salud en conferencias, seminarios, cursos o congresos.

Artículo 11.- Se permitirá a los fabricantes y distribuidores donar productos designados, únicamente con la aprobación del Ministerio de Salud Pública. En estos casos, las donaciones, deben estar libres de marca y logotipo, y solamente incluir el valor nutricional, instrucciones de uso y fecha de vencimiento.

CAPÍTULO VI

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Artículo 12.- Los materiales informativos y educativos que tratan de alimentación de lactantes y niños pequeños, no podrán ser producidos, patrocinados o financiados por los fabricantes y los distribuidores de cualquier producto designado sin previa fiscalización del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 13.- Los materiales informativos y educativos, sea cual fuera su presentación, relativos a la alimentación de lactantes y niños pequeños, deberán ser escritos en idioma español e incluir clara y visiblemente cada uno de los siguientes aspectos:

A) Los beneficios y superioridad de la lactancia materna para el niño, la madre, la sociedad y el ambiente.

B) Los riesgos de la alimentación artificial o con preparados infantiles, ya que estas no son inocuas.

C) Los riesgos del uso del biberón y chupete o de la introducción precoz de alimentos complementarios que afecta la lactancia materna.

D) El valor insustituible de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de edad y en forma continuada hasta los dos años de edad o más.

E) Que la alimentación complementaria, adecuada, inocua y nutritiva puede fácilmente ser preparada en el hogar, con alimentos propios del país y la estación.

Artículo 14.- Cuando los materiales mencionados en el artículo 12, tratan el tema de alimentación de lactantes y niños pequeños con alguno de los productos designados, deberán incluir, además, los puntos siguientes:

A) Instrucciones para la preparación y el uso correcto del producto, incluida la limpieza y esterilización de los utensilios.

B) Instrucciones para alimentar a los lactantes y niños pequeños con utensilios como biberón adecuado, vaso, taza y cuchara.

C) Los riesgos que presenta para la salud la alimentación con biberón en relación a la manipulación, almacenamiento y preparación incorrecta del producto.

Artículo 15.- Los materiales informativos y educativos, sea cual fuera su presentación, relativos a la alimentación de lactantes y niños pequeños, no deberán:

A) Dar la impresión de suscitar la creencia de que un producto designado es equivalente,

comparable o superior a la leche materna o a la lactancia materna.

B) Contener el nombre, marca o logotipo de cualquier producto designado o de un fabricante o distribuidor.

C) Contener imágenes o textos que fomenten o idealicen el uso del biberón, tetinas y chupetes o desestimulen la lactancia materna.

D) Contener ilustraciones, fotos o imágenes de lactantes o niños pequeños, juguetes o formas humanizadas de animales, vegetales u objetos.

E) Contener afirmaciones sobre propiedades nutricionales o beneficios para la salud del producto o que asemejan el producto a la leche materna.

CAPÍTULO VII

SISTEMAS DE ATENCIÓN DE SALUD Y PERSONAL DE SALUD

Artículo 16.- Los prestadores de salud y su personal, deberán adoptar las medidas necesarias para difundir y aplicar a cabalidad la presente ley, así como promover, proteger y apoyar la práctica de la alimentación óptima de los lactantes, incluyendo aspectos de nutrición y salud materna.

Artículo 17.- Los prestadores de salud y su personal, deberán promover e implementar estrategias de calidad y humanización para la atención de las mujeres gestantes y en período de lactancia; y que promuevan, protejan y apoyen la lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación del lactante.

Artículo 18.- Los prestadores de salud y su personal, deberán crear las condiciones adecuadas que permitan el involucramiento de los padres, parejas y familiares en el apoyo a la lactancia materna de las madres, y apoyar efectivamente las prácticas de lactancia materna óptima de su propio personal.

Artículo 19.- No se permitirá dentro de los prestadores de salud la presencia de representantes de servicios profesionales, técnicos o voluntarios facilitados o financiados por los fabricantes o distribuidores de los productos designados.

Artículo 20.- Los materiales informativos provenientes de los fabricantes o distribuidores o de otra fuente, sobre los productos designados, para los profesionales de salud, solo podrán ser técnico-científicos y entregados previa solicitud y aprobación de la autoridad competente, de acuerdo a lo que se estipule en el reglamento.

Artículo 21.- El personal de salud no podrá recibir ningún tipo de incentivos, regalos, donaciones o patrocinios provenientes de cualquier persona física o jurídica que fabrique o comercialice productos designados, ni de los distribuidores y puntos de venta.

CAPÍTULO VIII

ETIQUETADO

Artículo 22. (Etiquetado de productos designados).- Todo envase de un producto designado deberá tener una etiqueta que no pueda despegarse del mismo sin destruirse. La etiqueta de cada producto designado deberá ser diseñada de tal manera que ni en imagen ni en texto desaliente la lactancia materna. Asimismo, deberá proporcionar la información necesaria para el uso correcto del producto y deberá cumplir con la norma reglamentaria de etiquetado vigente.

Dicha etiqueta:

A) Deberá estar escrita en idioma español;

B) Deberá contener el nombre y la dirección del fabricante o importador y, cuando proceda, el nombre del distribuidor.

Artículo 23.- Las etiquetas de productos designados no podrán:

A) Contener fotografía, diseño u otra presentación gráfica, salvo los gráficos para ilustrar el método de preparación del producto; contener ilustraciones, fotos.

B) Imágenes de lactantes o niños pequeños, juguetes o formas humanizadas de animales, vegetales u objetos; llevar logos o imágenes que representen a madres, padres, profesionales, niños o cualquier otra persona, utilizando o promoviendo el uso del producto o biberón; establecer de manera directa o indirecta semejanza del biberón o tetina, con el seno de la madre o con la fisiología de la producción de la leche materna.

C) Contener frases que puedan poner en duda la capacidad de la madre para amamantar.

D) Promover otro producto.

E) Promover el uso de biberón, chupetes, tetina y pezoneras.

F) Contener recomendación de profesionales o asociaciones de profesionales.

G) Contener declaraciones o afirmaciones sobre propiedades nutricionales o beneficios para la salud.

Artículo 24.- Las etiquetas de productos alimentarios comprendidos en el ámbito de la presente ley, deberán, además de los requisitos de los artículos 24 y 25 declarar lo siguiente:

A) Los ingredientes utilizados.

B) La composición y análisis del producto, incluyendo la fuente específica de origen de las proteínas, tipo de grasas y su procedencia, destacando las grasas saturadas, ácidos grasos tipo trans, azúcares totales, azúcares simples y sal, así como declarar si algún ingrediente es transgénico.

C) Las condiciones requeridas para su almacenamiento.

D) El número de serie y la fecha límite para el consumo del producto teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de almacenamiento.

Artículo 25. (Etiqueta de preparado infantil).- Toda etiqueta de preparado infantil deberá llevar:

A) Una inscripción al frente del producto, clara, legible, impresa en letras de altura no menor a la mitad de las de la marca del producto, de color negro sobre fondo claro, a 1 cm. por debajo del mismo, que diga "Aviso importante: La leche materna es el mejor alimento para el lactante".

B) Incluir la expresión: "Advertencia: Producto que necesita prescripción médica. No exento de efectos adversos".

C) La indicación de que el producto solo debe utilizarse bajo prescripción de un profesional de salud autorizado por el Ministerio de Salud Pública.

D) Instrucciones para la preparación correcta del producto, en taza o vaso, en palabras e ilustraciones de fácil comprensión.

E) Una advertencia sobre los riesgos para la salud de una preparación incorrecta del producto.

F) Debe consignarse en los preparados en polvo que no son estériles. En dicha etiqueta no se podrá:

1) Utilizar términos como "maternizada", "humanizada" o análogos.

2) Hacer ninguna comparación del producto o de algún componente, tanto en el texto como en la marca del producto, con la leche materna, ni utilizar expresiones que puedan poner en duda la capacidad de la madre para amamantar.

3) Contener declaraciones o afirmaciones sobre propiedades nutricionales o beneficios para la salud del preparado.

Artículo 26. (Etiquetas de preparado infantil de seguimiento y leches denominadas de crecimiento).- Además de los requisitos establecidos para las etiquetas de preparado infantil, las etiquetas de preparado de seguimiento y de leches denominadas de crecimiento:

A) No podrán tener diseño o expresión que permita asociar el producto con un preparado infantil.

B) Deberán indicar la edad para la cual está prescripto el uso del producto.

Artículo 27. (Etiqueta de alimentos complementarios).- Las etiquetas de alimentos complementarios deberán explicar en forma clara los siguientes puntos:

A) La edad desde la que está recomendado el uso del producto, que en ningún caso podrá ser menor de seis meses cumplidos.

B) Los riesgos para la salud de introducir alimentos complementarios antes de la edad de seis meses cumplidos.

C) La indicación que la alimentación complementaria, adecuada, inocua y nutritiva puede fácilmente ser preparada en el hogar conforme a las buenas prácticas y con alimentos propios de la región, preferentemente, libres de transgénicos.

Las etiquetas de alimentos complementarios no deberán:

A) Utilizar la expresión "después de los seis meses". Debe quedar claro que es a partir del sexto mes cumplido.

B) Contener declaraciones o afirmaciones sobre propiedades nutricionales o beneficios del producto para la salud.

Artículo 28 (Etiquetas de otras leches, modificadas o no).- Las etiquetas de estos productos, que no reúnen todas las exigencias nutricionales de un preparado infantil, deberán llevar una advertencia de que el producto no debe ser utilizado para la alimentación de un lactante menor de doce meses de edad.

Las etiquetas de leches condensadas azucaradas deberán contener una advertencia clara y visible de que no se deben usar para alimentar a los lactantes.

Artículo 29.- Etiquetas de biberones, tetinas, chupetes, extractores de leche materna y pezoneras.

Las etiquetas de biberones, tetinas, chupetes, extractores de leche materna y pezoneras, y todo utensilio o material comercializado relacionado con la preparación, extracción, suministro de alimentos e higiene de biberones deberán incluir:

A) Una afirmación que la leche materna es superior e insustituible para la alimentación del lactante.

B) Una advertencia sobre los riesgos para la salud cuando se usa biberón, especialmente si este no está correctamente esterilizado.

C) Una advertencia sobre las consecuencias negativas del uso del biberón.

D) Los materiales utilizados en su fabricación.

E) Instrucciones para su limpieza y esterilización.

F) Una declaración de que está libre de Bisfenol A (BPA) y otros contaminantes.

CAPÍTULO IX

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY

Artículo 30.- Se establece que el Ministerio de Salud Pública, será la autoridad competente a nivel nacional, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Artículo 31.- Para la aplicación de la presente ley, la autoridad competente tendrá los siguientes poderes y funciones:

A) Agregar nuevos productos a la lista de productos designados, cuando surja la necesidad, a efectos de asegurar que la ley esté actualizada y acorde con las nuevas orientaciones de nutrición y con las estrategias y técnicas de comercialización.

B) Solicitar a otros organismos públicos y privados, cualquier tipo de información y realizar cualquier gestión de verificación para asegurar el cumplimiento de la presente ley y su respectivo reglamento.

C) Exigir el registro de todo producto designado de conformidad con la normativa interna vigente.

D) Garantizar el control de calidad de los productos designados, según los estándares de inocuidad.

E) Modificar las acciones que permitan la aplicación de la presente ley, de acuerdo a las nuevas tendencias de comercialización que surjan.

F) Asumir o delegar en otro la vigilancia continua a nivel nacional y el monitoreo periódico de la aplicación de la presente ley.

G) Asegurar que esta vigilancia y monitoreo se desarrollen sin vinculación directa o indirecta con fabricantes o distribuidores de algún producto designado ni en alguna condición que genere o pueda generar conflicto de interés.

H) Crear mecanismos que faciliten la denuncia ciudadana y dar seguimiento a denuncias presentadas y acción efectiva de Oficio, como ente regulador.

I) Dar seguimiento a las sanciones y acciones correspondientes de acuerdo a las infracciones tipificadas y establecidas en la ley.

J) Definir mecanismos claros y precisos para asegurar que el etiquetado de los productos designados cumpla con lo establecido en la presente ley y para que ningún material informativo o educativo, que contenga información para madres, embarazadas y lactantes, sus familias o público en general, desaliente a la lactancia materna.

K) Aprobar las donaciones de productos designados, en virtud del artículo 12 de la presente ley.

CAPÍTULO X

PROCEDIMIENTO Y SANCIONES

Artículo 32.- El Ministerio de Salud Pública recibirá e investigará cualquier denuncia de violación a la presente ley y su reglamento.

Artículo 33. (Violación a la ley).- Cualquier persona física o jurídica que en cualquier forma viole los preceptos contenidos en la presente ley, será susceptible de las sanciones siguientes:

A) Amonestación o advertencia escrita que realizará el funcionario debidamente autorizado por la autoridad competente, dejando constancia que deberá regularizar su situación en diez días hábiles.

B) De no haber dado cumplimiento con la observación anterior, se establece una multa de 100 UR (cien unidades reajustables) a partir de la detección del incumplimiento; como la publicación de la Resolución respectiva, en dos diarios de mayor circulación durante una semana.

C) Comiso o decomiso de productos sin registro sanitario o que incumpla con las disposiciones de la presente ley.

D) Clausura temporal del establecimiento que podrá ser total o parcial, con la respectiva suspensión de la habilitación sanitaria.

E) Cancelación del registro para fines comerciales de productos objeto de control de esta ley.

F) Clausura definitiva del establecimiento.

Artículo 34. (Reincidencia).- En caso de reincidencia a cualquier infracción objeto de esta ley, será sancionado con un incremento del 100 % (cien por ciento) de la primera multa impuesta.

Artículo 35.- Además de las sanciones previstas en los artículos 35 y 36, cualquier violación de la presente ley y su reglamento, será sancionada de acuerdo con las disposiciones especiales previstas en otras leyes o reglamentos que existan.

Asimismo, el personal de salud que haya cometido una infracción a las disposiciones de la presente ley, será sancionado de conformidad con las disposiciones disciplinarias que por estatuto se encuentre alcanzado.

Artículo 36.- Además de las sanciones establecidas por los artículos 34 y 35, la autoridad competente puede inmovilizar en el mercado o retirar del mismo, según el caso, los productos que incumplan con la presente ley y su reglamento. Si los productos se consideran un peligro inminente para la salud, dichos productos serán retirados del mercado, para su inmediata destrucción e incineración, sin obligación de compensación y a costa del infractor.

Artículo 37.- Las autoridades administrativas, judiciales, políticas del país, prestarán el auxilio que requiera la autoridad competente y/o el Ministerio de Salud para exigir el cumplimiento de la presente ley, en función de las atribuciones y facultades que acuerden sus respectivas leyes.

CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 38.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento veinte días contados a partir de la promulgación.

Artículo 39.- Quedan derogadas las disposiciones y toda ley que contravenga la aplicación de la presente ley".

31.- Urgencias

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por la señora diputada Susana Pereyra y por el señor diputado Iván Posada.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el siguiente asunto: 'Casinos en cruceros atracados en aguas territoriales uruguayas. (Funcionamiento)'. (Carp. 4142/019). (Rep. 1216/019)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y tres en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

32.- Casinos en cruceros atracados en aguas territoriales uruguayas. (Funcionamiento)

Con la declaración de urgencia también se dio cumplimiento a lo dispuesto por el inciso segundo inciso del artículo 139 del Reglamento, ya que se trata de un asunto ingresado a la Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Casinos en Cruceros Atracados en Aguas Territoriales Uruguayas. (Funcionamiento)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1216

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

El proyecto consta de un artículo único, que tiene un sustitutivo que se está distribuyendo.

SEÑOR CARRASCO (Andrés).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CARRASCO (Andrés).- Señor presidente: este proyecto llegó esta semana a la Cámara y fue destinado a la Comisión de Turismo. En esta asesora, a pesar de que se pretendía aprobarlo en el día, llegamos al acuerdo de considerarlo en las sesiones siguientes, invitando a algunas delegaciones que entendíamos importante se expidieran en el tema y que no lo habían hecho en la Comisión del Senado que lo trató. De hecho, habíamos invitado a la Cámara de Turismo del Uruguay, a los sindicatos de trabajadores de casinos, tanto del Estado como municipales y privados.

La versión original del proyecto de ley extiende la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, que permite la explotación directa de los casinos, a aquellos que funcionan a bordo de los cruceros oceánicos. Esto nos lleva a la ley que otorga concesiones a los casinos privados, a través de una licitación. Hay una serie de artículos que dicen cuál es el procedimiento y las características que deben tener esos casinos.

Sin duda, este no era el objetivo. Lo que se pretendía era que aquellos cruceros que llegan al Río de la Plata o al Océano Atlántico, tanto a Montevideo como a Punta del Este, mantuvieran en algún momento los casinos abiertos. Hoy no los pueden tener abiertos; una vez que entran en aguas territoriales uruguayas, las salas de casino de los barcos se deben cerrar. Esta iniciativa cambia ese funcionamiento.

(Ocupa la Presidencia el señor representante Luis Gallo Cantera)

——Según el Ministerio de Turismo, quieren tener una herramienta de negociación para prolongar la estadía de los cruceros en las costas uruguayas y permitir que los pasajeros que desciendan pasen más tiempo en tierra.

En una nota que envía el Ministerio de Economía y Finanzas a la Comisión del Senado hay un sinceramiento porque dice que se lograría una mayor permanencia de los cruceros que, a su vez, redundaría en un potencial mayor flujo de turistas. Todo es hipotético, porque no hay garantía de que, por prolongar la estadía del crucero, efectivamente descienda un mayor número de pasajeros o estén más tiempo en tierra. Por el contrario, que el casino del barco esté abierto puede resultar un atractivo para que se queden a bordo, a pesar de que no es el objetivo de los cruceros cuando tocan distintos puertos. El objetivo es que los pasajeros desciendan a tierra aunque sea por un breve lapso.

El Ministerio de Economía y Finanzas, en la misma nota, reconoce que estos casinos son monopolio del Estado y que esta sería una excepción a la regla.

En esa misma Comisión, el ingeniero Alberto Díaz, presidente de la Administración Nacional de Puertos, indica algo que no es del todo correcto, porque dice que esta norma nos pondría en situación de igualdad con Chile. La legislación de ese país prevé que los cruceros puedan tener los casinos abiertos cuando estén en aguas territoriales, pero no cuando estén amarrados o en puerto. Hay una diferencia sustancial entre una cosa y otra.

¿Por qué pretendíamos que se discutiera en la Comisión de Turismo? ¿Por qué habíamos logrado ese acuerdo del que hablaba? Porque hay ciertas garantías que no tenemos. ¿Cuál es el fin que se busca? ¿No habilita esto la existencia de un casino flotante frente a las costas de Punta del Este? El Conrad -actualmente Enjoy- deja al Estado uruguayo el pago de un canon y puestos de trabajo con mano de obra uruguaya, al contrario de lo que sucedería en un casino flotante, que no dejaría ningún beneficio económico directo ni trabajo para los uruguayos. Sí se lograría un beneficio económico directo a partir de la mayor permanencia en tierra de los pasajeros que descienden.

Estos son los aspectos que queríamos consultar y analizar.

El proyecto habla de pasajeros -el sustitutivo mejora en algo la redacción-, pero ¿cómo se determina quién es un pasajero? Si alguien sube al buque y paga una entrada, ¿se transforma en pasajero? Entendemos que puede llegar a serlo.

Hay ejemplos en el mundo. De Miami salen cruceros con este sistema: salen de puerto -los casinos no pueden funcionar mientras están amarrados-, se quedan por algunas horas en aguas territoriales de Estados Unidos y regresan.

Creemos que el proyecto merecía ser tratado en la Comisión de la forma habitual. No entendemos la urgencia -estuvo en el Senado desde el 2017 hasta ahora-, aunque sí creemos que en esta temporada se vivirá una situación complicada con el turismo, puesto que seguramente se agudice lo que ya sucedió la temporada pasada. El señor subsecretario de Turismo indica que el turismo de cruceros deja al país US$ 10.000.000 anuales. Esto es lo que nos deja, dicho por él.

Está bien que se busquen mecanismos para mejorar y paliar lo que va a ser la temporada. Nosotros propusimos al Ministerio algo que tomó: extender los beneficios fiscales a turistas extranjeros -vencían a fines de octubre- hasta después de la temporada. Por suerte fue conteste. También propusimos que esos mismos beneficios se extendieran al turismo local. Todavía estamos esperando.

Sí, será una temporada complicada, y cuando el turismo sufre, la cadena siempre se corta por el eslabón más débil, que es el trabajador. Las temporadas, en lugar de extenderse hasta fines de febrero, muchas veces llegan solo hasta el 20 o 22 de enero. Ahí se corta a la mucama del edificio, al mozo del restaurante y se van perdiendo puestos de trabajo.

En virtud de determinados acuerdos que se realizaron en el día de hoy, vamos a presentar un artículo sustitutivo que creemos mejora la redacción.

También esperamos que se logre el fin que nos preocupa, que se esté monitoreando la situación y que la facultad que vaya a tener el Poder Ejecutivo de autorizar este funcionamiento sirva como herramienta de negociación que beneficie al sector del turismo.

Por ejemplo, hoy muchos de los pasajeros que bajan en Punta del Este y cruzan la calle para llegar al Conrad podrían dejar de hacerlo para quedarse en el buque.

Es lo que teníamos para decir, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra la señora diputada Susana Pereyra.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- Señor presidente: como dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, hay un sustitutivo al artículo único del proyecto de ley que viene redactado por el Poder Ejecutivo. Creemos que con la nueva redacción se permitirá al Ministerio de Turismo negociar con las distintas empresas de turismo que traen gente a través de los cruceros, y que estos puedan permanecer más tiempo en aguas territoriales, que baje más gente, que consuma más, que utilicen los restoranes, los comercios, y demás.

Analizamos estos aspectos no solamente desde el punto de vista turístico. Muchas veces, cuando permanecen tantos días, el crucero hace compras que relacionadas con su funcionamiento, para el consumo a bordo, tanto en Montevideo como en Punta del Este.

En estos cruceros viajan tres mil o cuatro mil pasajeros -si bajara la mitad, nos quedaríamos conformes-, pero también debemos tener en cuenta la tripulación, que anda en el entorno de las setecientas, ochocientas o novecientas personas. No deberíamos desatender a estas personas porque significaría un incremento para el turismo a través del movimiento de los distintos negocios.

Nuestro gobierno y el Ministerio de Turismo han dado sobradas pruebas de seriedad en cuanto a cómo se tratan los temas del turismo. La señora ministra y su equipo han trabajado intensamente en procura de que seamos una plaza turística como la que efectivamente somos.

Hoy estamos complicados con el tema turismo por la realidad de Argentina. Algunos deberían hacerse la autocrítica porque lo que por estos lares parecía ser la renovación resultó siendo un caos para el pueblo argentino, ya que se ha generado un gran aumento en la cantidad de pobres en ese país; la gente, en las últimas elecciones, las PASO, definió que esa renovación tan bienvenida por algunos ha sido lapidaria para el pueblo.

Entonces, para contrarrestar esa realidad es que el Ministerio está haciendo denodados esfuerzos en todos los ámbitos -la iniciativa que estamos analizando hoy acerca de los cruceros es uno de estos- y nosotros estamos dispuestos, en consulta con el señor subsecretario y mejorando la redacción, a acompañar el sustitutivo.

Planteamos esto con mucha confianza, con la seriedad de siempre y tranquilos de que no es una irresponsabilidad nuestra ni del Ministerio tratar de que a nivel de las empresas de cruceros se pueda generar una mayor permanencia en los puertos y más turismo. Es de las cosas que uno va haciendo para negociar. En esta área nada es seguro, se va

negociando y tenemos que ir facilitando las cosas, porque con criticar nada más, no resolvemos nada.

A esos efectos, la bancada del Frente Amplio va a votar afirmativamente el artículo sustitutivo, dado que mejora la redacción y da herramientas al Ministerio de Turismo para negociar con las empresas que tienen a cargo los cruceros.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Antes de continuar, queremos saludar a los alumnos de 6° año del Liceo "Dr. Medulio Pérez Fontana", de Nueva Palmira, departamento de Colonia.

Tiene la palabra el señor diputado Jorge Pozzi.

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: no voy a entrar al fondo del asunto porque estoy de acuerdo. Simplemente, sugiero a quienes presentaron el artículo sustitutivo que vamos a considerar que, donde dice: "[…] a los cruceros oceánicos atracados en aguas territoriales uruguayas […]" se agregue: "o fondeados", luego de la palabra "atracados".

Esta breve disquisición técnica tiene que ver refiere a que, en el puerto de Montevideo, los cruceros oceánicos están atracados, pero en el de Punta del Este están fondeados. No pasa nada mientras no surja un problema; pero si ocurre, no va a faltar un abogado que diga que, en realidad, determinada facultad no puede atribuírsele a los cruceros de Punta del Este porque no están técnicamente atracados.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único el proyecto.

(Se lee)

——En discusión el artículo único del proyecto.

Hay un sustitutivo presentado por la señora diputada Susana Pereyra y por el señor diputado Iván Posada.

(Texto del artículo sustitutivo:)

"Artículo único.- Facúltase al Poder Ejecutivo a autorizar el funcionamiento de casinos a bordo, exclusivamente destinados a sus pasajeros, en horario restringido, a los cruceros oceánicos atracados o fondeados en aguas territoriales uruguayas, que lleguen a puertos nacionales".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único del proyecto, tal como vino del Senado.

(Se vota)

——Cero en sesenta y seis: NEGATIVA. Unanimidad.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo sustitutivo.

(Se vota)

——Sesenta y seis en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"**Artículo único.-** Facúltase al Poder Ejecutivo a autorizar el funcionamiento de casinos a bordo, exclusivamente destinados a sus pasajeros, en horario restringido, a los cruceros oceánicos atracados o fondeados en aguas territoriales uruguayas, que lleguen a puertos nacionales".

33.- Código de Ética en la Función Pública. (Se declara de interés general)

——Se pasa a considerar el asunto que figuraba en octavo término del orden del día y que pasó a ser noveno: "Código de Ética en la Función Pública. (Se declara de interés general)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1100

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR ALSINA (Herman).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ALSINA (Herman).- Señor presidente: informaré sobre un proyecto proveniente del Senado, en el que se estuvo trabajando en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, donde se recibió información de especialistas en el tema. Se trata del Código de Ética en la Función Pública.

Con este proyecto se busca legislar en torno a un tema de debate y preocupación en nuestra sociedad: la ética y la transparencia en la función pública. La ética pública y el combate a la corrupción están directamente asociados con las posibilidades de desarrollo de un Estado, ya que los países que lograron reducir los índices de corrupción han podido generar mejor ambiente para las inversiones y los emprendimientos.

Consideramos que en una democracia el sistema político es el que debe presentarse como principal garante de la ética, entre otras cosas, para preservar el prestigio de las instituciones democráticas.

Este proyecto propone establecer un código de ética en la función pública con alcance general, buscando que las prácticas de actuación de la administración estatal se adecuen a un marco de transparencia y profesionalización. Busca hegemonizar en una norma las reglas relativas al buen ejercicio de la función pública por todos los funcionarios.

El artículo 2° del proyecto define qué se entiende por funcionario público. Dice: "A los efectos de la presente ley se entiende por funcionario público, a toda persona que, cualquiera sea la forma jurídica de vinculación con la entidad respectiva, desempeñe función pública, a título oneroso o gratuito, permanente o temporaria, en cualquier persona de derecho público estatal y no estatal".

El artículo 3° refiere al ámbito orgánico de la aplicación y establece:

> "La presente ley es aplicable a los funcionarios públicos que se desempeñen en: A) Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. B) Tribunal de Cuentas. C) Corte Electoral. D) Tribunal de lo Contencioso Administrativo. E) Gobiernos Departamentales. F) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. G) En general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así como las personas de derecho público no estatal".

Asimismo, debemos destacar que con la aprobación de este proyecto de ley Uruguay estará cumpliendo con las obligaciones asumidas a nivel internacional, tanto en la Convención Interamericana contra la Corrupción, como en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Este proyecto innova en algunos aspectos fundamentales. En primer término, en cuanto a su alcance, ya que abarca todo el Estado y, en segundo lugar, porque efectúa una precisión ampliatoria del concepto de corrupción en el sector público.

En el texto de la norma es importante establecer cuáles son los principios generales de la actuación que vamos a exigir a nuestros funcionarios.

En el artículo 7° del proyecto se establece: "Los funcionarios públicos observarán los principios de respeto, imparcialidad, objetividad y buena fe, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder […]".

También se determina que se debe actuar de buena fe y con lealtad, dentro de la legalidad y los límites de la obediencia, con respeto, imparcialidad, transparencia, eficacia, eficiencia, etcétera.

Todas estas normas son muy importantes, porque a partir de esta iniciativa la Jutep contará con un marco para valorar la conducta de nuestros funcionarios. A mi juicio, esto es muy importante.

Este proyecto de ley, que consta de tres Títulos -I, "Buenas prácticas de actuación en la función pública"; II, "Normas de aplicación", y III, "Normas de conducta de los representantes del Estado en entidades y emprendimientos privados"-, se orienta a cumplir íntegramente los mandatos contenidos en los instrumentos internacionales a los que adhiere nuestro Estado, y será una potente herramienta para un real combate a cualquier tipo de corrupción en nuestro país.

Si el proyecto es aprobado, deberemos celebrar la posibilidad de contar con esta nueva y potente ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el señor diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: voy a adelantar la tesitura de nuestro partido con relación a este proyecto.

Vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley, pero queremos formular algunas salvedades vinculadas con la muy mala manera en la que estamos resolviendo cuestiones importantes, entre otras, esta.

Si bien hace algún tiempo desde el Senado llegó este proyecto a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, aún no estaba pronto para ser elevado al plenario; debimos darle un tratamiento más intenso y extenso. A mi juicio, era necesaria una reunión de trabajo con la Jutep -con la junta económico financiera, conocida como Junta Anticorrupción- porque nos manejamos con un texto que nos hizo llegar al Parlamento que contenía una serie de precisiones y consideraciones respecto a este proyecto de ley, que es muy denso, porque está muy cargado de definiciones y contiene importante cantidad de disposiciones.

No obstante, vamos a votar este proyecto porque, por supuesto, estamos a favor de la ética, como estamos a favor del bien y en contra del mal.

Por otra parte, el proyecto innova poco, y cuando innova, no lo hace demasiado bien. Digo que innova poco porque se le da rango legal a una norma ya existente. Me refiero al Decreto N° 30, de 2003, del gobierno del expresidente Batlle, que reglamentó la llamada Ley Cristal, que establece exhaustivamente todas las normas de probidad, honestidad, etcétera, vinculadas con las buenas prácticas de los funcionarios públicos, y en la que se definen las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.

Los senadores se propusieron -por lo que sabemos, particularmente, el senador Carrera, que fue quien presentó la iniciativa original- darle mayor jerarquía al decreto y convertirlo en ley. Desde el punto de vista de la aplicación práctica y de los efectos, no cambia mucho, porque en la medida en que este proyecto refiere a una norma de mayor jerarquía, que es la Ley N° 17.060, la eficacia jurídica es igual con una u otra. Alcanza con remitirse a los pronunciamientos de la Jutep en distintos casos de apartamiento de las normas de ética pública, en los últimos tiempos, para advertir que se ha apoyado y ha fundamentado sus fallos en las disposiciones que contiene el decreto del año 2003.

La Jutep nos hizo una serie de comentarios que debimos haber analizado y recogido en los distintos aspectos que contiene el proyecto. En algún caso, este órgano asesor -servicio descentralizado desde 2015, cuando nosotros votamos modificar su naturaleza jurídica- dice que hay definiciones que debieron resolverse de manera diferente, empezando por el artículo 1°, con una definición que viene del Senado y establece: "Declárase de interés general la adecuación de prácticas de actuación en la función pública, […]". La Jutep entiende que hubiera sido menester y más adecuado haber incluido el artículo 1° del decreto, como definición de carácter general, porque es más atinada. Eso ya no habrá de ocurrir y, por lo tanto, se pierde una oportunidad bastante más conveniente en cuanto a la calidad legislativa.

Otro tanto ocurre con el artículo 12, en el que se introduce el concepto de corrupción. La Jutep celebra esa circunstancia, porque entiende que está bien que legalmente se defina la corrupción tal como se hace en el inciso primero, y también nos dijo que hubiera sido conveniente que en el inciso segundo la definición fuera algo diferente y se incluyera el ofrecimiento u otorgamiento al funcionario público que se produjera directa o indirectamente.

Tal vez sean detalles o aspectos de cierto purismo formal o meramente vinculados con la mejor redacción, pero creo que de eso se trata a la hora de legislar. Creo que esos aspectos son los que, en este caso, deberíamos haber analizado con bastante más detenimiento.

Hay un tema de carácter general que no tiene que ver con la redacción del proyecto, pero sí con un reclamo -que, a esta altura, ya es histórico- de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado y es el de las potestades del organismo. La Jutep nos dice que está muy bien o que, en todo caso, es un camino plausible o atendible legislar en esta materia, darle rango legal al decreto del año 2003 e introducir algunos de los ajustes normativos que en esta iniciativa se proponen. Pero, una vez más, se pierde la oportunidad de dar herramientas, de dar instrumentos a lo que la Jutep llama -refiriéndose a sí misma- el órgano de aplicación para hacer cumplir lo que aquí se establece.

Hoy tenemos un organismo que es el que tiene competencia en esta materia, el servicio descentralizado llamado Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, que no tiene los poderes jurídicos necesarios y suficientes a efectos de intervenir de manera más eficaz para prevenir y conjurar situaciones de apartamiento de las normas en el ejercicio de la función pública. Tampoco tiene los recursos presupuestales.

Quiero recordar la discusión que a este respecto tuvimos en ocasión del tratamiento de la rendición de cuentas del año 2017, que fue la última instancia de ajuste presupuestal, en la que el Parlamento estuvo realmente omiso por cuanto ni siquiera acordamos la aprobación de normas que hubieran implicado una mejora para la gestión de la Jutep a partir de disposiciones que no tenían costo presupuestal. Recuerdo una habilitación para realizar trabajos de asesoramiento o de consultoría a distintas reparticiones públicas; eventualmente, el arrendamiento de determinados activos para obtener determinada rentabilidad, y ni qué hablar de la contratación mínima de algunos asesores, abogados y de otras especialidades que allí se proyectó. Sin embargo, ni la Cámara ni el Senado acordamos en esa oportunidad dichas creaciones.

Evidentemente, creo que le asiste razón a la Jutep cuando se queja y reclama que no vale mucho elaborar proyectos de ley muy preciosistas o que por lo menos pretenden serlo -no creo que lo logren cabalmente; este me parece que no lo logra- porque después, en la aplicación práctica de la norma, en la ejecución y en el control efectivo, a la hora del ejercicio de la función por los distintos servidores públicos el organismo que tiene competencia formal a ese respecto no cuenta con las facultades ni con los recursos suficientes y necesarios para hacerlo.

Los artículos 30 y 31 consagran algo que la Jutep celebra en cuanto a todo lo que concierne a conflictos de interés que muchas veces pueden darse, y que se dan, entre funcionarios públicos por su actividad pública y su actividad privada en la misma rama, en el mismo rubro o existiendo una vinculación entre una y la otra, y que es establecer un período ventana. Esta es una innovación; la destaco simplemente como algo positivo que mejora la normativa vigente, es decir, lo que está establecido en el decreto. Ese período ventana implica que esta prohibición regirá también durante un año adicional, es decir, con posterioridad al cese del funcionario público en el ejercicio de su cargo. Tras cartón, la Jutep nos dice que eso está muy bien, pero que las dificultades que enfrenta no son para el ejercicio adicional del año o la incompatibilidad adicional de ese año ventana -llamémosle así-, sino para todo el tiempo del ejercicio de la función. La Jutep dice que no tiene la posibilidad de intervenir en términos de detectar e investigar conflictos de interés, mucho menos de prevenirlos y menos todavía de aplicar sanciones relacionadas, precisamente, con la violación de esas normas y de aspectos referidos al marco legal vigente.

Menciono estos aspectos simplemente a modo de ejemplo, para ilustrar mi visión y mi estado de ánimo con respecto a esta propuesta, que vamos a votar, pero con sentimientos encontrados. Por un lado, nos parece bien avanzar en cuanto a aprobar legislación vinculada a la ética en el ejercicio de la función. Esto se planteó en un momento en el que el tema de la ética en la función pública estuvo en el centro de la discusión. Creo que es bueno hacer un poco de autocrítica: entre nosotros se disparó una suerte de competencia por cuanto muchos legisladores de distintos partidos nos prestamos a ver quién presentaba proyectos más ambiciosos, más rigurosos, más severos para prevenir los desvíos de los funcionarios públicos. Eso fue generando una expectativa en la población y, al mismo tiempo, un compromiso del sistema político, que en algún momento era menester responder. Nosotros mismos habíamos generado, desde el sistema político, particularmente en el curso del año pasado, esa expectativa ciudadana. Apareció el delito de enriquecimiento ilícito, a iniciativa del senador Bordaberry, que el Senado aprobó, y todos los partidos manifestamos nuestra disposición de votar a favor. El miércoles pasado, en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, la oposición manifestó su interés en aprobarlo, pero no contamos con los votos. El Frente Amplio nos trasmitió que no estaba en condiciones de hacerlo, por razones muy legítimas y que respeto mucho, referidas a aspectos vinculados con la tipificación del delito y el tipo penal aprobado por el Senado.

También hay que analizar el tema desde esta mirada, desde el ángulo de nuestra forma de actuar ante un problema muy delicado como este, que nos para frente a la ciudadanía de una forma con la que debemos ser muy cuidadosos. La ciudadanía está esperando señales claras, y en aras de darlas, no

podemos aprobar cualquier cosa. Este proyecto toma como base un buen decreto, aprobado por el expresidente Batlle en el año 2003. Sin embargo, si la idea era darle mayor contundencia jurídica en cuanto al rango legal que en este proyecto se establece, se pierde una muy buena oportunidad de haberlo hecho mejor, y no porque se me ocurra a mí: lo digo a partir de un informe muy categórico, contundente y completo que la Comisión recibió de la Junta de Transparencia y Ética Pública que, reitero, contiene una serie de señalamientos y de propuestas de mejoras que, por la premura con la que estamos legislando -por no hablar de este cierto caos legislativo que se ha generado en las postrimerías de esta legislatura-, no habrán de concretarse a los efectos de lograr un mejor resultado legislativo.

Muchas gracias.

34.- Licencias.

Integración de la Cámara

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Licencia por motivos personales:

Del señor representante José Carlos Mahía, por los días 12 y 13 de setiembre de 2019, convocándose a la suplente siguiente, señora Norma Griego Valiente.

No acepta la convocatoria, por esta única vez, la suplente siguiente señora Gabriela Garrido.

Del señor representante Álvaro Dastugue, por el día 15 de setiembre de 2019, convocándose a la suplente siguiente, señora Grisel Pereyra.

No acepta la convocatoria, por esta única vez, el suplente siguiente señor Ignacio Estrada.

Del señor representante Sebastián Sabini, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose a la suplente siguiente, señora Paula Pérez Lacués.

Montevideo, 12 de setiembre de 2019

ORQUÍDEA MINETTI, FITZGERALD CANTERO, SILVIA HERNÁNDEZ".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

35.- Código de Ética en la Función Pública. (Se declara de interés general)

Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: habré de formular tan solo algunas breves consideraciones.

En primer lugar, debo decir que me parece francamente inapropiado el título del proyecto de ley, es decir, "Código de ética en la función pública". Ya en el liceo nos enseñaban la diferencia entre los distintos órdenes normativos: el jurídico, el moral, el religioso, etcétera. Una cosa es el derecho y otra cosa es la moral o la ética. El orden jurídico se caracteriza, entre otras razones, porque se aplica coactivamente y los incumplimientos se sancionan. La ética, en cambio, tiene su ámbito en el fuero íntimo del individuo; son mandatos que recibe de la conciencia.

Desde el momento en que estamos incorporando una serie de normas y les damos fuerza de ley, salimos de ese plano interior e íntimo de la conciencia y pasamos al plano jurídico, como corresponde, para regir de esa manera la actuación de los funcionarios públicos. La motivación de esto puede ser ética, pero una vez que estamos positivando esos preceptos ya dejamos de tener un código de ética y tenemos un código de normas de actuación en la función pública.

En segundo término, hago mías algunas consideraciones que formulaba hace un momento el señor diputado Pablo Abdala. Hubo un aporte muy importante, muy significativo, de la Jutep, que se pronunció acerca de este proyecto de ley con un muy fundado dictamen que hizo llegar a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de esta Cámara. Destaco la labor de la Jutep porque a veces sucede que consultamos a distintos organismos y responden a los requerimientos de la Comisión, pero lo hacen sintéticamente, consignando

apenas una opinión general. La Jutep trabajó de otra manera, concienzudamente. Trabajó a fondo y formuló una serie de propuestas para mejorar o en algún caso corregir y siempre enriquecer el texto. Desgraciadamente, no hemos tenido tiempo para incorporar las propuestas de la Jutep al texto que vamos a votar hoy. Ello tiene que relacionarse con el ritmo de vértigo que ha cobrado la labor legislativa en las postrimerías del período. Quizá durante mucho tiempo nos dedicamos a poner nombres a escuelas y liceos y a hacer homenajes y faltó tiempo para esto, que es lo realmente importante. Lo cierto es que no hubo oportunidad de hacer ese trabajo fino y minucioso que hubiese sido necesario para incorporar a este texto todas las propuestas de la Jutep.

En tercer lugar, haciendo referencia al pronunciamiento de la Jutep, me parece importante considerar lo que dice ese organismo, en el sentido de que no se necesita incluir todas estas disposiciones en una norma para que sean obligatorias, porque todo esto viene del Decreto Nº 30 de 2003; ya tenía fuerza jurídica perfecta desde entonces. Los funcionarios debían ajustarse a esas normas que ahora adquieren rango de ley desde la existencia de aquel decreto que se dictaba, además, en cumplimiento de la Ley Nº 17.060, a la que también se hizo referencia. Entonces, estamos dando rango legal a normas jurídicas que ya eran obligatorias desde que constaban con absoluta generalidad en el Decreto Nº 30 de 2003.

Con estos breves comentarios, señor presidente, anuncio que habremos de votar afirmativamente este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Zavala.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- Señor presidente: como integrante de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, no queremos que quede la idea de que este es un mal proyecto. Esta iniciativa ya cuenta con la sanción del Senado, y es un proyecto que el informe de la Jutep valora como un avance. Digo esto porque se han detallado las objeciones acerca del alcance del proyecto -podría tenerlas-, pero creemos que viene a organizar y a perfeccionar normas anteriores y a expandir los alcances de la normativa vigente.

Además del informe de la Jutep, en la Comisión consideramos el informe del señor fiscal, muy favorable al proyecto; lo digo porque eso fue omitido en el debate. Se trata de un profuso informe, también muy bien fundamentado, muy favorable a esta norma. Reitero: a pesar de que la Jutep proponía algunos cambios y algunos agregados, su opinión general es que este proyecto supone un avance.

Quería decir esto para que no quedara la idea de que este proyecto era neutro, un saludo a la bandera o, inclusive, que podría llegar a ser un retroceso, y no lo es. Es un avance, y cuenta con el respaldo de la bancada oficialista.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

SEÑOR ALSINA (Herman).- Pido la palabra para una cuestión de procedimiento.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ALSINA (Herman).- Señor presidente: propongo que se suprima la lectura de los artículos y que se voten en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Se va a votar el procedimiento propuesto.

(Se vota)

——Setenta en setenta y uno: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se suprime la lectura del articulado y se van a votar en bloque los artículos 1º a 46, inclusive.

(Se vota)

——Setenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR ALSINA (Herman).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta en setenta y dos: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"TÍTULO I

BUENAS PRÁCTICAS DE ACTUACIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 1º.- Declárase de interés general la adecuación de prácticas de actuación en la función pública, para el fortalecimiento de la transparencia en la Administración Pública.

La presente ley, sin perjuicio de todas las demás normas que surjan del ordenamiento jurídico, tiene por objeto regular las conductas de los funcionarios públicos definidos en los artículos 2º y 3º de la presente norma, en un marco de profesionalización, transparencia, eficacia y eficiencia, de prácticas honestas y responsables de actuación.

CAPÍTULO I

ALCANCE E INTERPRETACIÓN

Artículo 2º.- A los efectos de la presente ley se entiende por funcionario público, a toda persona que, cualquiera sea la forma jurídica de vinculación con la entidad respectiva, desempeñe función pública, a título oneroso o gratuito, permanente o temporaria, en cualquier persona de derecho público estatal y no estatal.

Artículo 3º. (Ámbito orgánico de aplicación).- La presente ley es aplicable a los funcionarios públicos que se desempeñen en:

A) Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

B) Tribunal de Cuentas.

C) Corte Electoral.

D) Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

E) Gobiernos Departamentales.

F) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

G) En general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así como las personas de derecho público no estatal.

Artículo 4º. (Relación con las normas especiales).- Estas normas se aplican a todos los funcionarios públicos alcanzados por los artículos 2º y 3º de esta ley sin perjuicio de aquellas normas dirigidas a determinado funcionario o grupo de funcionarios públicos que prescriban exigencias especiales o mayores que las estipuladas en esta ley.

Estas además constituirán criterios interpretativos del actuar debido de las entidades y sujetos comprendidos, en las materias de su competencia.

El dictado de Reglamentos, Instructivos u órdenes de servicio relativos a las normas de conducta en cada organismo, corresponde al órgano jerarca en el ámbito de su competencia.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 5º. (Principios y valores organizacionales).- El ejercicio de la función pública estará regido por un conjunto de principios fundamentales y valores organizacionales, partiendo de la base de que los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política, y que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario, debiendo servir con imparcialidad al interés general.

Artículo 6º. (Interés Público).- El funcionario público debe actuar en todo momento en consideración del interés público, conforme con las normas dictadas por los órganos competentes, de acuerdo con las reglas expresadas en la Constitución de la República (artículo 82).

El interés público se expresa, entre otras manifestaciones, en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos.

La satisfacción de necesidades colectivas debe ser compatible con la protección de los derechos individuales, los inherentes a la personalidad humana o los que se deriven de la forma republicana de gobierno.

Artículo 7º. (Principios rectores).- Los funcionarios públicos observarán los principios de respeto, imparcialidad, objetividad y buena fe, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos.

Artículo 8º. (Deberes y obligaciones de los funcionarios).- Los funcionarios públicos deben actuar con arreglo a los siguientes deberes y obligaciones:

A) Respetar y cumplir la Constitución de la República, las leyes y disposiciones reglamentarias.

B) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia y cortesía.

C) Dar cumplimiento a las determinaciones de sus superiores jerárquicos. Si el funcionario entendiere que lo que se le ordena es contrario al derecho o a las normas de ética, podrá pedir a su jerarca que se le reitere la orden por escrito.

D) Desarrollar las iniciativas que sean útiles para el mejoramiento del servicio.

E) Cumplir con la jornada laboral establecida, dedicando la totalidad del tiempo de la misma al desempeño de sus funciones, sin perjuicio del descanso intermedio establecido en el inciso primero del artículo 6º de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013.

F) Atender debidamente las actividades de formación, capacitación y efectuar las prácticas y las tareas que tales actividades conlleven, las que se procurará se realicen en el horario de trabajo.

G) Mantener reserva sobre asuntos e informaciones conocidos en razón de su función, aun después de haber cesado en la relación funcional, en todos aquellos casos que corresponda por ley.

H) Vigilar y salvaguardar los intereses, valores, bienes, equipos y materiales del Estado principalmente los que pertenezcan a su área de trabajo o estén bajo su responsabilidad.

I) Actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas dando trato y servicio por igual a quien la norma señale, sin discriminaciones político-partidarias, de género, religioso, étnico o de otro tipo, absteniéndose de intervenir en aquellos casos que puedan dar origen a interpretaciones de falta de imparcialidad.

J) Responder por el ejercicio de la autoridad que les haya sido otorgada y por la ejecución de las órdenes que imparta.

K) Declarar por escrito su domicilio real y comunicar en la misma forma todos los cambios posteriores del mismo, teniéndose al declarado como domicilio real a todos los efectos.

L) Denunciar ante el respectivo superior jerárquico y si la situación lo amerita ante cualquier superior, los hechos con apariencia ilícita y/o delictiva de los que tuvieren conocimiento en el ejercicio de su función.

Artículo 9º. (Prohibiciones e incompatibilidades).- Sin perjuicio de las prohibiciones e incompatibilidades específicas establecidas por otras leyes, los funcionarios públicos están sujetos a las siguientes prohibiciones e incompatibilidades:

A) Realizar en los lugares y horas de trabajo, toda actividad ajena a la función, salvo las correspondientes a la libertad sindical en las condiciones establecidas en la normativa vigente, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo político partidario.

B) Constituir agrupaciones con fines proselitistas, utilizando el nombre de la repartición, o invocando el vínculo que la función determina. Esta disposición no será aplicable a las agrupaciones sindicales que invoquen para su organización la repartición pública a la que pertenecen los afiliados.

C) Tramitar asuntos como gestores, agentes o corredores, y, en general, tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente a los cometidos del cargo o función de la repartición en la que revista.

D) Intervenir en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en la atención, tramitación o resolución de asuntos que impliquen un conflicto de intereses.

E) Recomendar a los interesados, profesionales universitarios, corredores o gestores, para realizar servicios en la repartición pública a la que pertenecen.

F) Solicitar o recibir cualquier obsequio, gratificación, comisión, recompensa, honorario o ventaja de terceros, para sí o para otros, por los actos específicos de su función.

G) Disponer o utilizar información previamente establecida como confidencial y reservada con fines distintos a los de su función administrativa.

H) Utilizar, sin previa autorización, documentos, informes y otros datos, salvo que el ordenamiento jurídico permita su uso sin limitaciones.

I) Actuar bajo dependencia directa dentro de la misma repartición u oficina de aquellos funcionarios que se vinculen por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad, matrimonio o unión concubinaria.

Los traslados necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso anterior, no podrán causar lesión de derecho alguno, ni afectar su remuneración.

Artículo 10. (Responsabilidades en su aplicación).- Serán responsables de controlar la aplicación de estas normas, los jerarcas respectivos de cada unidad o dependencia de los organismos públicos.

Dichos jerarcas deberán responder en un plazo de treinta días siguientes a toda consulta formulada por un funcionario público de su dependencia relacionada con la aplicación de las presentes normas de conducta.

Artículo 11. (Exoneración de responsabilidad administrativa).- Quedará exento de responsabilidad administrativa, el funcionario que de buena fe ajuste su conducta a las instrucciones particulares que disponga su jerarca, de oficio o por consulta escrita formulada por el funcionario interesado, conforme con lo establecido en el artículo 10 de la presente ley, que contenga todas las circunstancias relevantes de la cuestión planteada. No obstante, dicha exoneración de responsabilidad administrativa no será aplicable en los casos de configuración de un ilícito penal.

Artículo 12. (Concepto de corrupción).- Se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener directa o indirectamente un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal.

Se considera parte integrante del concepto de corrupción la oferta que realice una persona física o jurídica a un funcionario público, de un beneficio de cualquier especie, para sí o para un tercero, a los efectos de que cumpla con las tareas propias de su función u omita cumplirlas. Quien incurra en esta conducta quedará suspendido en la posibilidad de contratar con una persona pública estatal y no estatal y de actuar como representante, gestor o administrador de un proveedor de las mismas por un término de dos años, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que corresponda y lo que determine la reglamentación en materia de contratación con el Estado.

Artículo 13. (Probidad).- El funcionario público debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro.

También debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta en la función pública.

Artículo 14. (Conductas contrarias a la probidad).- Son conductas contrarias a la probidad en la función pública:

A) Negar información o documentación que haya sido solicitada de conformidad con la ley.

B) Valerse del cargo para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio de cualquier tipo, directo o indirecto para sí o para un tercero.

C) Apropiarse, tomar en préstamo o hacerse bajo cualquier otra forma, de dinero o bienes de la institución, salvo que la ley expresamente lo autorice.

D) Intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya participado privadamente como técnico. Los funcionarios deberán poner en conocimiento de su superior jerárquico su implicancia en dichos asuntos y los antecedentes correspondientes para que este adopte la resolución que corresponda.

E) Usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de la función.

Artículo 15. (Buena fe y lealtad).- El funcionario público siempre debe actuar de buena fe y con lealtad en el desempeño de sus funciones.

Artículo 16. (Legalidad y obediencia).- El funcionario público debe conocer y cumplir la Constitución de la República, las leyes, los decretos y las resoluciones que regulan su actividad funcional así como cumplir las órdenes que le impartan sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia, dentro de los límites de la obediencia debida.

Su ignorancia no sirve de excusa.

Artículo 17. (Respeto).- El funcionario público debe respetar a los demás funcionarios y a las personas con quienes debe tratar en su desempeño funcional y evitar toda clase de desconsideración.

Artículo 18. (Imparcialidad).- El funcionario público debe ejercer sus atribuciones con imparcialidad, lo que significa conferir igualdad de tratamiento en igualdad de situaciones a los demás agentes de la Administración y a todas las personas a que refiera o se dirija su actividad pública.

Dicha imparcialidad comprende el deber de evitar cualquier tratamiento preferencial, discriminación o abuso del poder o de la autoridad hacia cualquier persona o grupo de personas con quienes su actividad pública se relacione.

Los funcionarios deberán excusarse de intervenir o podrán ser recusados cuando medie cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad, estando a lo que resuelva su jerarca.

Artículo 19. (Implicancias).- El funcionario público debe distinguir y separar radicalmente los intereses personales del interés público.

En tal virtud, debe adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir o evitar todo conflicto o conjunción de esos intereses en el desempeño de sus funciones.

Si considerare dudosa la existencia de conflicto entre el interés público y su interés personal, el funcionario deberá informar de ello al superior para que este adopte la resolución que corresponda. Por razones de decoro o delicadeza el funcionario podrá solicitar a su superior que le excuse del caso, ateniéndose a lo que este resuelva.

Los funcionarios que integren un órgano colegiado podrán plantear la excusación o deberán informar de la implicancia al Cuerpo del que forman parte, a cuya resolución se estará.

Artículo 20. (Transparencia y publicidad).- El funcionario público debe actuar con transparencia en el cumplimiento de su función.

Los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública pueden ser divulgados libremente, salvo que por su naturaleza deban permanecer reservados o secretos o hayan sido declarados tales por ley o resolución fundada, en todo caso bajo la responsabilidad a que hubiere lugar por derecho.

Queda comprendido en lo dispuesto precedentemente el deber de garantizar, a los particulares interesados que lo solicitaren, el acceso a la información que resulte del empleo y aplicación de medios informáticos y telemáticos para el desarrollo de las actividades de las administraciones públicas y el ejercicio de sus competencias.

Artículo 21. (Eficacia y eficiencia).- Los funcionarios públicos utilizarán medios idóneos para el logro del fin de interés público a su cargo, procurando alcanzar la máxima eficiencia en su actuación.

Artículo 22. (Eficiencia en la contratación).- Los funcionarios públicos tienen la obligación de respetar estrictamente los procedimientos de contratación aplicables en cada caso y de ajustar su actuación en la materia a los siguientes principios generales:

A) Flexibilidad.

B) Delegación.

C) Ausencia de ritualismo.

D) Materialidad frente al formalismo.

E) Veracidad salvo prueba en contrario.

F) Igualdad de los oferentes, concurrencia en todos los procedimientos competitivos para el llamado y la selección de ofertas y amplia publicidad de las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios.

Artículo 23. (Motivación de la decisión).- El funcionario debe motivar los actos administrativos que dicte, explicitando las razones de hecho y de derecho que lo fundamenten. No son admisibles fórmulas generales de fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y concreta de los hechos del caso específico en resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada.

Tratándose de actos discrecionales se requerirá la identificación clara de los motivos en que se funda la opción, en consideración al interés público.

Artículo 24. (Idoneidad y capacitación).- La observación de una conducta idónea exige que el funcionario mantenga aptitud para el adecuado desempeño de las tareas públicas a su cargo.

Será su obligación capacitarse para actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración y, en particular, deberán asistir a los cursos de actualización referentes a la moral administrativa, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de intereses en la función pública según lo determinan las normas que rigen el servicio o lo dispongan las autoridades competentes.

Artículo 25. (Buena administración financiera).- Todos los funcionarios públicos con funciones vinculadas a la gestión del patrimonio del Estado o de las personas públicas no estatales deberán ajustarse a las normas de administración financiera aplicables, a los objetivos y metas previstos, al principio de buena administración, en lo relativo al manejo de los dineros o valores públicos y a la custodia o administración de bienes de organismos públicos. Sus transgresiones constituyen faltas administrativas aun cuando no ocasionen perjuicios económicos.

Artículo 26. (Rotación de funcionarios en tareas financieras).- Los funcionarios públicos que cumplen funciones en las reparticiones encargadas de la adquisición de bienes y servicios deberán rotar periódicamente.

Dicha rotación deberá hacerse efectiva cada treinta meses continuos en el desempeño de esa función, pudiendo el jerarca prorrogar el cometido, en casos excepcionales fundados en la necesidad del servicio o en la falta de recursos humanos en el organismo, siempre que el resultado de la evaluación de desempeño en el período no arroje observaciones a la gestión.

CAPÍTULO III

PROHIBICIONES

Artículo 27. (Prohibición de contratar).- Queda prohibido a los funcionarios públicos contratar con el organismo a que pertenecen y mantener vínculos por razones de dirección o dependencia con firmas, empresas o entidades que presenten ofertas para contratar con dicho organismo.

No obstante, en este último caso, quedan exceptuados de la prohibición los funcionarios que no tengan intervención alguna en la dependencia pública en que actúan en el proceso de la contratación, siempre que informen por escrito y sin reticencias al respecto a su superior. Si al momento de ingresar a la función pública estuviere configurada o en condiciones de configurarse dicha situación, el funcionario deberá informar por escrito y sin reticencias al respecto.

Esta prohibición se extiende a las contrataciones realizadas a solicitud de la Administración a que el funcionario pertenece por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros.

Los funcionarios públicos y los organismos a los que pertenecen tienen prohibido celebrar o solicitar a terceros la celebración de contratos de servicios o de obra que tengan por objeto la realización por los mismos funcionarios de las tareas correspondientes a su relación funcional o tareas similares o a cumplirse dentro de su jornada de trabajo en el organismo respectivo.

Artículo 28. (Prohibición de intervenir por razones de parentesco).- Los funcionarios públicos con competencia para gastar, tienen prohibido intervenir cuando estén ligados por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad, por matrimonio o unión concubinaria, con la parte que contrata con el organismo a que pertenecen.

Artículo 29. (Prohibición de intervención por terceros).- Los funcionarios públicos no podrán intervenir directa o indirectamente como gestores, técnicos, profesionales o intermediarios de cualquier tipo en asuntos de terceros o de otros funcionarios ante los organismos públicos a los que pertenecen o desempeñen funciones, salvo autorización expresa otorgada por la jerarquía del organismo, según lo habilite la reglamentación respectiva. En el caso de la Administración Central, la pertenencia se entenderá dentro del Inciso correspondiente.

Artículo 30. (Prohibición de relaciones con actividad controlada).- Queda prohibido a los funcionarios públicos con cometidos de dirección superior, inspectivos o de asesoramiento ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren sujetas al control de las oficinas de que aquellos dependan. Les está prohibido asimismo percibir de dichas personas retribuciones, comisiones u honorarios de clase alguna.

La prohibición establecida en el inciso anterior se extiende a todas las contrataciones de servicios o de obra, realizadas a solicitud de la Administración controlante, por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros.

Esta prohibición se mantendrá durante un año, luego de que el funcionario respectivo haya cesado en sus funciones.

Artículo 31. (Prohibición de relaciones con actividad vinculada).- Queda prohibido a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado.

La prohibición establecida en este artículo se extiende a todas las contrataciones de servicios o de obra realizadas a solicitud de una Administración

comprendida en esta ley, por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros.

Esta prohibición se mantendrá durante un año, luego de que el funcionario respectivo haya cesado en sus funciones.

Artículo 32. (Declaración jurada de implicancias).- Todos los funcionarios que, a la fecha de vigencia de esta ley, se encuentren en las situaciones previstas por los artículos anteriores deberán presentar, en un plazo máximo de sesenta días siguientes a dicha vigencia, una declaración jurada donde establezcan que clase de vinculación o actividades de las previstas en dichos artículos mantienen, individualizando las personas o empresas y el tipo de relacionamiento o intereses con ellas, estándose a lo que resuelva el jerarca correspondiente.

Dicha declaración jurada deberá ser presentada, en forma abierta, ante el jerarca del servicio donde el funcionario se desempeña.

Toda nueva situación de las previstas por los artículos anteriores deberá ser declarada en la misma forma establecida en el inciso anterior dentro de los sesenta días de configurada y quedará sujeta a lo que resuelva el jerarca respectivo.

Artículo 33. (Implicancias dudosas o supervinientes).- Si al momento de ingresar a la función pública o durante su desempeño, resultare dudosa o estuviere cuestionada la configuración de alguna de las situaciones previstas en los artículos 27 a 32 de esta ley, el funcionario deberá informarlo de inmediato y en forma pormenorizada por escrito a su superior jerárquico, quien deberá resolver fundadamente al respecto y, en su caso, sobre la permanencia del funcionario en la oficina.

Artículo 34. (Prohibición de recibir regalos y otros beneficios).- Los funcionarios públicos tienen prohibido solicitar o aceptar dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas, directa o indirectamente, para sí o para terceros, a fin de ejecutar, acelerar, retardar u omitir un acto de su empleo o contrario a sus deberes o por un acto ya cumplido.

Artículo 35. (Prohibición de uso indebido de fondos).- Los funcionarios públicos tienen prohibido manejar los fondos públicos en forma distinta a la legalmente autorizada, siendo responsable de su pago cuando comprometa cualquier erogación sin estar autorizado para ello.

El funcionario está obligado a rendir cuenta documentada y comprobable de la versión, utilización o gestión de los fondos recibidos. Asimismo deberá rendir cuenta cuando utilice tarjetas de crédito corporativas de entidades públicas, en las condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 36. (Prohibición de revistar en la misma oficina por razones de parentesco).- Queda prohibida la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge o concubina.

Si ingresare a la oficina un funcionario que mantenga los vínculos mencionados en el inciso anterior, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de funcionario alguno.

Artículo 37. (Prohibición de uso indebido de bienes públicos).- Los funcionarios públicos deberán utilizar los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al organismo público en que revistan o asignados a su uso o consumo exclusivamente para el funcionamiento de los servicios a su cargo.

Está prohibido el uso de locomoción, combustible, repuestos y servicios de reparaciones de cargo de toda fuente de fondos públicos, por parte de cualquier funcionario público, fuera de lo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus tareas. En ningún caso el ejercicio de una función pública podrá implicar la libre disponibilidad de un vehículo perteneciente a cualquier organismo o afectado a su uso, fuera de los requerimientos del servicio en sentido estricto, salvo las excepciones legales y reglamentarias.

Los vehículos pertenecientes al organismo público o asignados a su uso deberán ser guiados por personal con licencia habilitante y no podrán ser aplicados para usos de índole particular, salvo los casos excepcionales debidamente justificados por la autoridad competente.

TÍTULO II

NORMAS DE APLICACIÓN

Artículo 38. (Faltas administrativas).- El incumplimiento de los deberes explicitados en esta ley y la violación de las prohibiciones contenidas en ella constituirán faltas administrativas.

Como tales, serán objeto de sanción proporcionada a su gravedad, previa sustanciación del procedimiento disciplinario respectivo, en el que se asegurará la garantía de defensa. Ello, sin perjuicio de la

responsabilidad civil o penal prevista por la Constitución de la República y por las leyes.

Artículo 39. (Potestad disciplinaria y jurisdicción penal).- El sometimiento a la justicia penal de un funcionario público no obsta al necesario ejercicio de la competencia del organismo respectivo, independientemente de la judicial, para instruir los procedimientos internos y adoptar las decisiones que correspondan en virtud de las faltas disciplinarias que se comprobaren en la vía administrativa con arreglo a derecho.

Artículo 40. (Denuncia de irregularidades o de prácticas corruptas).- Todo funcionario público está obligado a denunciar irregularidades o prácticas corruptas de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, de las que se cometieren en su repartición o cuyos efectos ella experimentare particularmente.

Asimismo, deberá recibir y dar trámite a las denuncias que se le formularen al respecto. En uno y otro caso, las pondrá en conocimiento de sus superiores jerárquicos.

Si se tratare de irregularidades que pudieren causar perjuicios económicos, el funcionario público está obligado a comunicarlo por escrito a su superior jerárquico y al Tribunal de Cuentas de la República.

Artículo 41. (Denuncia de delitos).- El jerarca a quien competa resolver sobre las investigaciones internas de las que resultare la posible configuración de un delito tiene el deber de disponer la inmediata denuncia ante el Ministerio Público y Fiscal.

Artículo 42. (Régimen de protección de testigos y denunciantes).- Los funcionarios públicos que denunciaren delitos de Corrupción contra la Administración Pública, quedarán incluidos en el programa de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación.

Las personas públicas referidas en esta ley, deberán disponer la creación de ámbitos competentes para la recepción reservada de denuncias o noticias de actos de corrupción que ocurran en las respectivas dependencias, las que luego de ser diligenciadas y, de existir mérito suficiente, serán derivadas a las autoridades competentes.

En el curso del diligenciamiento de las actuaciones respectivas, se dará debida protección administrativa y laboral a los funcionarios denunciantes sin perjuicio de su responsabilidad en el caso de denuncias falsas o infundadas. Dicha protección implicará, entre otros aspectos, la reserva de su identificación si correspondiere y la preservación de su estabilidad laboral, no pudiéndose permitir que se le apliquen medidas administrativas que le causen perjuicio si no están debidamente fundadas.

Artículo 43. (Consultas).- En el ejercicio de la potestad disciplinaria, los organismos cuyos funcionarios se encuentran alcanzados por esta ley podrán recabar la opinión de la Junta de Transparencia y Ética Pública, en cuyo caso, para apartarse del dictamen que esta emita, deberá procederse en forma fundada.

Los jerarcas de dependencias públicas, previo al dictado de las pertinentes decisiones administrativas, podrán dirigir directamente a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) los pedidos de asesoramiento y aclaraciones relativos a la aplicación de la presente ley que estimen necesarios, adjuntando informe de la asesoría jurídica de su respectivo ámbito orgánico.

Dentro de los treinta días de recibido el asesoramiento o la opinión solicitada a la JUTEP, los jerarcas de las dependencias públicas deben informar a esta sobre la resolución adoptada en cada caso.

TÍTULO III

NORMAS DE CONDUCTA DE LOS REPRESENTANTES DEL ESTADO EN ENTIDADES Y EMPRENDIMIENTOS PRIVADOS.

Artículo 44. (Alcance).- Los representantes de toda persona pública estatal y no estatal en la dirección de una sociedad, asociación, consorcio o entidad de cualquier naturaleza regulada por el derecho privado, que esté integrada total o parcialmente por estas, así como las personas físicas y jurídicas designadas como fiduciarios, en un fideicomiso en el que una persona pública estatal o no estatal sea fideicomitente o beneficiario, tendrán las mismas obligaciones, deberes y responsabilidades civiles, administrativas y penales que los funcionarios públicos.

Artículo 45. (Monitoreo).- Los jerarcas de las personas públicas estatales y no estatales serán responsables de monitorear el cumplimiento de los deberes indicados en el artículo 44 de la presente ley por parte de las personas que hubiesen designado en tales calidades, debiendo adoptar las medidas que estimen pertinentes ante conductas que se desvíen de dichas obligaciones.

Artículo 46. (Contralor de las Personas Públicas No Estatales).- El Poder Ejecutivo deberá incluir en cada instancia Presupuestal y de Rendición de Cuentas, en la información que eleva al Poder Legislativo, los estados patrimoniales de las personas públicas no estatales, independientemente del origen de la asignación o recurso, con dictamen de auditoría externa".

36.- Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales. (Modificaciones a la Ley Nº 15.750)

——Corresponde tratar el asunto que figuraba en noveno término del orden del día y que pasó a ser décimo. En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 139 del Reglamento, se va a votar si se considera el asunto en cuestión, ya que ingresó a la Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

Se requieren cincuenta votos conformes.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en setenta y dos: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales. (Modificaciones a la Ley Nº 15.750)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1198

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Gallo Cantera).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- Señor presidente: a los efectos de oficiar de miembro informante, puesto que el proyecto no tiene informe, debo decir que esta iniciativa viene con media sanción del Senado. Se trata de un proyecto que establece el mecanismo del concurso para el ingreso a la carrera judicial y especifica las formas de ascenso, procurando determinar criterios comunes en el cuerpo legislativo.

Debo decir que me consta que algunos miembros de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la oposición tienen matices con respecto a esto. De todas maneras, más allá de que se podría haber hecho de otra forma, este proyecto da garantías para el ingreso y ascenso en la carrera judicial, y establece las etapas y cómo se regula dentro de la gestión del Poder Judicial.

(Ocupa la Presidencia el señor representante Óscar Groba)

——También quiero decir que este proyecto cuenta con el beneplácito de la Asociación de Magistrados del Uruguay, que estarán sujetos a estos procedimientos para el ingreso y el ascenso. El país ha ido avanzando en los mecanismos de ingreso a la función pública y de ascenso. Es verdad que no es unánime, no funciona en todo el Estado; en todos lados no se ingresa ni se asciende por concurso.

Sabemos que los mecanismos de concurso también son imperfectos; no hay un mecanismo perfecto, completamente justo. Se cometen injusticias, pero entendemos que de los mecanismos existentes este es el que brinda mayores garantías, tiene como consecuencia los menores niveles de injusticia y además acota la discrecionalidad de los que ejercen el poder en las instituciones públicas. Estas limitaciones son garantistas y republicanas, y como miembro informante de la bancada del Frente Amplio queremos celebrarlas.

Muchas gracias.

37.- Licencias.

Integración de la Cámara

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Licencia por motivos personales:

Del señor representante Daniel Caggiani, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose al suplente siguiente, señor Camilo Cejas.

Del señor representante Luis Gallo Cantera, por los días 12 y 13 de setiembre de 2019, convocándose al suplente siguiente, señor Miguel Lorenzoni Herrera.

No acepta la convocatoria, por esta única vez, la suplente siguiente señora Lorena Pombo.

Montevideo, 12 de setiembre de 2019

ORQUÍDEA MINETTI, FITZGERALD CANTERO, SILVIA HERNÁNDEZ".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, y se los invita a pasar a sala.

38.- Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales. (Modificaciones a la Ley N° 15.750)

Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: ante todo, manifiesto que, como la Cámara sabe, estoy casado con una jueza, integrante del Poder Judicial, y lo declaro a los efectos reglamentarios.

Votaremos por la negativa este proyecto porque entendemos que no ha tenido el tratamiento, el estudio necesario para abordar cuestiones de tanta importancia como las que se quiere regular con este texto.

Estamos hablando del ingreso, traslado y ascenso de los jueces, materia en la cual el antecedente es la Ley N° 15.750, de 1985. A la salida de la dictadura, en el primer año del gobierno democrático, era absolutamente indispensable regular esta materia, y así se hizo. Desde entonces no ha habido reformas de fondo en este campo, lo cual dice con toda claridad y elocuencia que no estamos ante ninguna situación de urgencia. No tenemos por qué incluir este proyecto en esta maratón legislativa con un orden del día de veinte puntos y otros proyectos que han venido a sumarse.

El tratamiento urgente que se le da -pese a que su naturaleza no es de urgencia- ha impedido trabajar debidamente a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, y considerarlo como otros proyectos mucho menos relevantes. Habría que llamar a los procesalistas, a la Suprema Corte de Justicia, a la Asociación de Magistrados del Uruguay y a los constitucionalistas, porque no sé hasta dónde, cuando estamos regulando las potestades de la Suprema Corte de Justicia para designar a los jueces, trasladarlos, etcétera, nos estamos metiendo en los marcos establecidos por las normas constitucionales que se refieren a esta materia. No afirmo una posición ni la otra porque no he tenido el tiempo de estudiar esto a fondo, y la Comisión tampoco lo tuvo.

No se hagan la falsa idea los señores representantes de que su Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, su asesora en esta materia, les presenta este texto después de haberlo estudiado exhaustivamente. No les podemos decir que tenemos un sistema para trasladar, ascender y designar a los jueces que ha sido estudiado a cabalidad y con responsabilidad, y por eso les decimos: "Voten esto, que está bien". No. Este proyecto pasó por la Comisión raudamente y sin consideración, sin que citáramos a nadie para informar, y así lo traemos. Claro, viene del Senado, pero en un Parlamento bicameral ese argumento no tendría que ser suficiente.

Me permito la digresión: me parece que algunos piensan que como en el mundo hay parlamentos unicamerales muy eficientes y eficaces, nosotros podemos emularlos y hacer de cuenta que la segunda Cámara -en este caso, nosotros- está pintada, y basta con que el proyecto haya sido estudiado en la primera para que podamos proceder de esta manera. No es así. Los parlamentos de una sola Cámara funcionan con un procedimiento legislativo diferente. Los proyectos tienen dos lecturas espaciadas por un tiempo determinado para que haya oportunidad de revisar, corregir, modificar, asesorar, todo eso que en esta oportunidad no hemos hecho.

Me parece que es un caso claro en el que el apresuramiento y la urgencia injustificados conspiran contra lo que hubiera sido el debido tratamiento de un proyecto de tanta importancia por la materia que regula.

Por esas razones, habremos de votar negativamente este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra el señor diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: en el mismo sentido, creo que avanzar en la aprobación de este proyecto de ley representa una enorme imprudencia.

La Ley N° 15.750, Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales, se aprobó en

1985, a la salida de la dictadura, cuando el país recobraba la democracia y el Poder Judicial, su independencia. Durante todos estos años, el Poder Judicial ha asentado su prestigio, su independencia y su fortaleza institucional, entre otras cosas, en los términos establecidos por esa norma que, a nuestro juicio, es fundamental y de un enorme valor histórico. Por supuesto que esto no significa que sea intocable, que no se pueda revisar ni modificar o que no puedan plantearse ajustes a lo que establece, pero no hay que hacerlo en las postrimerías, cuando estamos a pocas horas de la culminación del período legislativo de 2019 y de la legislatura completa, a pocos días de las elecciones nacionales y a pocos meses de la asunción de un nuevo gobierno.

Además, creo que se parte de un supuesto erróneo. Se postula el concurso para la designación y el ascenso de los jueces, partiendo del supuesto de que en las designaciones y en las decisiones del Poder Judicial referidas a la promoción de los magistrados no hay transparencia u objetividad. No es así. Independientemente del concurso de oposición y méritos en sentido formal, está claro que la Suprema Corte de Justicia, tanto en el plano de los ingresos como en el de los ascensos, a nuestro juicio, ha actuado con enorme ponderación y cautela. Se ha dado a sí misma determinados patrones de comportamiento y de funcionamiento que redundaron en lo que hoy tenemos: un Poder Judicial que, más allá de sus imperfecciones, puedo decir con absoluta convicción que es orgullo de los uruguayos, en cuanto da garantías de la vigencia plena de la república y de la institucionalidad democrática.

En cuanto a los ingresos al Poder Judicial, si bien son como establece muy clara y nítidamente el artículo 239 de la Constitución -determinados por mayoría absoluta de la Suprema Corte de Justicia-, la Corte ha establecido el criterio de que esas designaciones y esos ingresos solo pueden recaer en abogados que hayan egresado del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, a partir de un curso de formación de una extensión mínima de dos años. Entonces, se ha autoimpuesto un acotamiento a la discrecionalidad que indica, claramente -no solo hace presumir, sino que demuestra-, que la Corte actúa con absoluta ponderación.

Otro tanto ocurre con los ascensos, que tampoco son a dedo ni por el capricho de quienes ejercen la conducción del órgano rector del Poder Judicial. Hay una comisión que asesora a la Corte en esta materia -integrada, obviamente, por la propia Corte, el Colegio de Abogados del Uruguay y la Asociación de Magistrados del Uruguay-, que elabora una lista en función de méritos y evaluaciones que no realiza la Corte, sino los superiores de los jueces; ellos conforman esa lista de magistrados con vocación al ascenso. Me parece que esto también es indicativo de la prudencia y la transparencia con la que, sin ninguna duda, la Suprema Corte de Justicia ha actuado en esta materia.

Los concursos implican pruebas teóricas que entiendo tienen valor, pero a la hora de los ascensos no alcanza con una prueba teórica que se hace en el marco de una instancia de concurso específica; hay que ponderar otros elementos relacionados con la trayectoria, con el desempeño de esos magistrados en sus destinos anteriores. Creo que todo eso está garantizado por los hechos, por las normas de funcionamiento interno y por las acordadas por la Suprema Corte de Justicia, que nos dan garantías a todos.

¿Eso es perfectible? ¿Se puede mejorar? ¿Es razonable darle, como decíamos antes, rango legal o resolverlo en forma legislativa? Puede ser, pero debemos hacerlo con la propia Suprema Corte de Justicia, porque aunque el Parlamento tiene potestades para eso, este es un típico asunto vinculado con la administración de justicia. En ese sentido, el artículo 240 de la Constitución establece que la Suprema Corte de Justicia puede concurrir a las comisiones parlamentarias a asesorar a los legisladores, y particularmente establece la posibilidad de asesoramiento de un Poder al otro en casos de estas características y esta naturaleza, es decir, en aspectos que hacen a la administración del Poder Judicial.

Entonces, este es un típico asunto vinculado con esa materia, pero ni siquiera pudimos recibir a la Asociación de Magistrados del Uruguay, que nos dice está a favor; no pudimos recibir a nadie. Esto entró ayer a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y salió como una especie de pronto despacho, para que lo analizáramos hoy en esta sesión, con esta celeridad.

Me afilio plenamente a la presunción de inconstitucionalidad de la que hablaba el señor diputado Pasquet. Es más: he leído por allí

manifestaciones de alguno de los ministros de la Corte. Voy a citar manifestaciones del doctor Turell porque son públicas. Sin caer en prejuzgamientos, pero en la perspectiva que mencionaba antes, sobre un aspecto que tiene que ver directamente con la administración del Poder Judicial, el doctor Turell, en su legítimo derecho de advertirlo, señaló que puede llegar a incurrirse en una inconstitucionalidad en la medida en que el artículo 239 de la Constitución es muy enfático y claro. En el numeral 5° del artículo 239, entre las competencias de la Suprema Corte de Justicia, se establece nombrar a los jueces letrados de todos los grados y denominaciones, necesitándose en cada caso la mayoría absoluta del total de componentes de la Suprema Corte. De manera que cualquier otro aspecto que pueda representar un recorte, retaceo, limitación o afectación de esa potestad por vía legal puede colidir con lo que la Constitución establece -y, sin ninguna, duda, violar- con relación a un aspecto medular en la vida de la República, como el funcionamiento del Poder Judicial.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- Señor presidente: no voy a entrar en la discusión sobre los aspectos constitucionales porque soy biólogo y no abogado, y además porque me parece que no le corresponde a la Cámara, más allá de los fundamentos y opiniones de los diputados. Temo que se interprete que estamos eliminando cualquier otra medida de evaluación para el ingreso y el ascenso de los funcionarios, y no es así. Los aspectos que el señor diputado Abdala decía que hoy se toman en cuenta se van a seguir considerando.

Voy a leer, para que conste en la versión taquigráfica, lo que se propone en el artículo 8°, que es un sustituto del artículo 97 de la Ley N° 15.750. Dice así: "Los ascensos se efectuarán, en principio, al grado inmediato superior, teniendo en cuenta la calificación de su desempeño, los antecedentes funcionales, la participación en al menos dos cursos por año de capacitación permanente brindados por el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, el resultado de la prueba del concurso de ascenso" -aquí figura el concurso- "y la antigüedad en la categoría, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 de la presente ley". ¿Qué quiero decir con esto? El concurso es una parte, no va a ser lo único que se tome en cuenta, y no se alteran las mayorías necesarias que mencionaba el señor diputado Abdala para la designación; serán de tres o de cuatro, en función de lo que corresponda.

Digo esto porque temo que quede la idea de que estamos sustituyendo todos los mecanismos de selección anteriores por el concurso, y no es así. El concurso se agrega a los mecanismos de selección que se están utilizando que tienen, obviamente, un criterio objetivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra el señor diputado Iván Posada.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: dejo constancia de que vamos a votar este proyecto de ley aprobado por unanimidad en el Senado, con voto de todos los partidos políticos. Responde a un estudio, a un trabajo que se hizo en una comisión del Senado. Concuerdo con que en el ámbito de la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración no tuvo tiempo de analizar este tema y se expidió con premura, pero igualmente, desde el punto de vista conceptual, creemos que las normas que se modifican y en el sentido en que se hacen las modificaciones va a garantizar la carrera en el Poder Judicial.

En la instancia en la que se recibió a la Asociación de Magistrados del Uruguay, o sea, a la asociación de los jueces, se establecieron algunos comentarios favorables acerca de las normas que el Senado terminó votando, en general, por unanimidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setenta y tres: AFIRMATIVA

En discusión particular.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- ¿Me permite, señor presidente?

Propongo que se suprima la lectura de todos los artículos y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar si se suprime la lectura del articulado y se votan en bloque los artículos 1º a 12, inclusive.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se suprime la lectura del articulado y se van a votar en bloque los artículos 1º a 12, inclusive.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: he votado negativamente por las consideraciones que formulé en ocasión de la discusión general. Si mi partido político votó afirmativamente en el Senado, tal vez perdimos la oportunidad de que alguien me convenciera para que yo votara a favor en la Cámara. Lo que pasa es que ni siquiera tuvimos instancias para conversar sobre la eventual pertinencia de este proyecto de ley.

Difícilmente me hubieran convencido, y si eso implicara haber quedado en una posición distinta a la de los senadores de mi partido, será un dato absolutamente objetivo y anecdótico.

A mi entender, el proyecto es muy malo. Recién se explicaba que el concurso va a ser un aspecto más. A mí me interesaría saber cómo va a funcionar, porque creo que va a ser fuente de impugnaciones, de reclamos y de recursos de todo tipo, color y especie. Porque fíjese usted, señor presidente, que aquí se dice que se va a tomar en cuenta el desempeño, los antecedentes y el resultado del concurso. Entonces, se va a hacer un concurso al que se podrá presentar cualquier magistrado con vocación para el ascenso, pero el que lo gane no tendrá certeza de que le den el cargo al que ascendió. Entonces, creo que inmediatamente le hará un juicio al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia.

Desde mi punto de vista, lo que se establece en este proyecto es un verdadero disparate. Por lo tanto, si en el Senado lo votaron todos los partidos, será un disparate votado por todos los partidos. De todas formas, yo voté en contra porque me parece que esto está muy mal.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setena y cuatro: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 78 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 78.- Las decisiones atinentes a la carrera judicial se adoptarán con criterios objetivos, atendiendo especialmente la integridad, capacidad y experiencia.

El proceso de selección será transparente, tenderá a garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.

El ingreso a la carrera judicial se hará siempre por los cargos de menor jerarquía, siempre con arreglo a los artículos 235, 242 y 245 de la Constitución de la República".

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 79 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 79.- Sin perjuicio de los requisitos especiales que se establecen respecto a cada Tribunal, para ingresar a la Judicatura se requiere:

1) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con dos años de ejercicio.

2) Ser abogado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 247 de la Constitución de la República.

3) No estar formalizado en proceso penal, o haber sido condenado criminalmente por

delito alguno, o destituido de cualquier cargo público.

4) Tener un nivel de escolaridad en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales adecuado a las exigencias del servicio a juicio de la Suprema Corte de Justicia. En la solicitud de ingreso podrán señalarse otros méritos.

5) Haber aprobado los procesos de formación inicial que disponga la Suprema Corte de Justicia en consulta con el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay del Poder Judicial, designándose en primer lugar a los egresados mejor evaluados, y a falta de estos, a los cursantes mejor calificados entre los más avanzados.

La admisión para realizar los procesos de formación inicial, se hará por concurso de oposición y méritos, que se habilitará mediante llamado público y abierto, al que podrán presentarse quienes reúnan los requisitos previstos en esta Ley y su reglamentación en lo pertinente".

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 83 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 83.- Para ser Juez de Paz Departamental del Interior y Juez de Paz de las demás categorías, deben cumplirse todos los requisitos referidos en el artículo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 247 de la Constitución de la República".

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 86 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 86.- Los Jueces tendrán derecho a la licencia que gozarán en principio durante los períodos de receso de los Tribunales, que serán dos: uno del veinticinco de diciembre de cada año al treinta y uno de enero subsiguiente, y del primero al quince de julio, sin perjuicio de las licencias especiales dispuestas por otras normas o las que la Suprema Corte de Justicia, a su petición estimare oportuno concederles por motivos fundados, siempre que con ello no se afectare el funcionamiento del servicio.

La Suprema Corte de Justicia designará los magistrados y funcionarios que actuarán durante los períodos de receso".

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 94 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 94.- Los Jueces se abstendrán:

1º) De expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por Ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la Ley procesal lo admite.

2º) De dar oído a cualquier alegación que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles en forma distinta de la establecida en las leyes.

3º) De divulgar información sobre deliberaciones y actuaciones reservadas.

4º) De todo comportamiento, acción o expresión que afecte la confianza en su imparcialidad".

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 95 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 95.- Los miembros de la Judicatura con derecho a ascenso (artículo 98 de la presente ley) y que se postulen al efecto, serán calificados anual o bianualmente, atendiendo a su desempeño funcional y de acuerdo a lo previsto por la presente ley.

El período de calificación comprenderá doce meses de desempeño y se extenderá desde el 1º de octubre al 30 de setiembre del año siguiente.

El proceso calificatorio se iniciará el 1º de octubre y quedará terminado, a más tardar, el 31 de diciembre de cada año.

La lista para ascender no será alfabética sino conforme a la prelación resultante de dicho proceso".

Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 96 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 96.- La Suprema Corte de Justicia establecerá el orden de los ascensos, mediante la prelación del artículo anterior y el siguiente, más la reglamentación a su cargo".

Artículo 8º.- Sustitúyese el artículo 97 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 97.- Los ascensos se efectuarán, en principio, al grado inmediato superior,

teniendo en cuenta la calificación de su desempeño, los antecedentes funcionales, la participación en al menos dos cursos por año de capacitación permanente brindados por el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, el resultado de la prueba del concurso de ascenso y la antigüedad en la categoría, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 de la presente ley.

La calificación será determinada por los órganos procesales superiores, de acuerdo al siguiente criterio:

A) Los Ministros de los Tribunales de Apelaciones, calificarán a los Jueces Letrados de primera instancia de igual especialización que la sala informante.

B) Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo respecto de los Jueces de Paz Departamentales de la Capital.

C) Los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior respecto de los Jueces de Paz Departamentales y Jueces de Paz de sus límites jurisdiccionales, cualquiera fuera su categoría.

Los antecedentes serán apreciados por la Suprema Corte de Justicia, examinando la actuación y el comportamiento del juez en el desempeño de sus funciones, teniendo en cuenta a esos efectos, especialmente, las anotaciones favorables o desfavorables (numerales 3º) a 6º) del artículo 114 de la presente ley) que surjan del respectivo legajo personal.

La capacitación deberá ser apreciada mediante los criterios generales que establecerá y reglamentará la Suprema Corte de Justicia. El acceso a los cursos de capacitación deberá ser ecuánime para todos los magistrados, estableciendo los mecanismos para que todos puedan postularse a los mismos.

La prueba del concurso de ascenso se realizará anualmente, preferentemente para cada materia, pudiendo participar todos los magistrados con derecho al ascenso (artículo 98 de la presente ley). Su contenido y evaluación quedarán a cargo de un tribunal que la Suprema Corte de Justicia integrará alternativamente con dos o más representantes que esta designe y dos o más representantes designados por la Asociación de Magistrados del Uruguay".

Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 98 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 98.- La carrera judicial comprende los siguientes grados correspondientes a cada una de las siguientes calidades:

1º) Juez de Paz.

2º) Miembro del Tribunal de Faltas.

3º) Juez de Paz Departamental del Interior.

4º) Juez de Paz Departamental de la Capital.

5º) Juez Letrado de Primera Instancia del Interior.

6º) Juez Letrado de la Capital, Juez Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo y Juez Letrado suplente.

7º) Ministro del Tribunal de Apelaciones.

Todos los integrantes de la carrera judicial realizarán cursos de capacitación continua según las modalidades y el número de horas que la Suprema Corte de Justicia reglamente".

Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 99 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 99.- Los Jueces Letrados con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones todo el tiempo de su buen comportamiento hasta el límite establecido en el artículo 250 de la Constitución de la República. No obstante, por razones de buen servicio, la Suprema Corte de Justicia podrá trasladarlos en cualquier tiempo de cargo o de lugar, o de ambas cosas, con tal que ese traslado se resuelva después de oído el Fiscal de Corte y con sujeción a los siguientes requisitos:

1) Al voto conforme de tres de los miembros de la Suprema Corte de Justicia en favor del traslado si el nuevo cargo no implica disminución de grado o de remuneración, con respecto al anterior.

2) Al voto conforme de cuatro de sus miembros en favor del traslado, si el nuevo cargo implica disminución de grado o de remuneración, con respecto al anterior.

En caso de traslado o ascenso el Estado sufragará los gastos que se ocasionaren.

En todos los casos, el traslado deberá estar fundado y antes de dictarse el acto administrativo que lo dispone, se le otorgará al magistrado una vista previa de 5 días hábiles, para que manifieste su consentimiento o exprese las razones de su negativa.

Salvo motivo fundado, ningún juez será trasladado de materia sin su consentimiento. No obstante, cuando ese o cualquier traslado sea previsible con antelación suficiente porque responde a un plan general del Poder Judicial, o a una reforma legislativa, ningún juez denegará injustificadamente su consentimiento".

Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 111 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 111.- Tratándose de responsabilidad civil de los jueces por actos propios de su función, se aplicará el régimen establecido por la Constitución de la República.

Conforme al numeral 20) del artículo 85 de la Constitución de la República, declárase, con carácter interpretativo de los artículos 23, 24 y 25 de la Constitución de la República, que la acción tendiente a la indemnización de los daños y perjuicios causados por dichos actos, solo podrá dirigirse directamente contra la Administración de Justicia. Si los daños y perjuicios provienen de dolo o culpa grave, el Estado podrá repetir contra los magistrados para el reembolso respectivo".

Artículo 12.- Agrégase a la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 113 BIS. (Pedido de informe y Derecho de defensa de los Jueces).- Siempre que no configure afectación de la independencia jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia podrá requerir a un juez, que informe con plazo no menor a tres días, en relación a una denuncia recibida en su contra, o a presunta inobservancia que pudiere llegar a justificar el inicio de un proceso disciplinario. Para hacer uso del Derecho de defensa, el juez podrá evacuar el informe con asistencia letrada.

Todo magistrado sometido a proceso disciplinario (investigación o sumario), tiene derecho a defensa técnica, a que se presuma su inocencia, a controlar toda actividad instructoria, y a la reserva de las actuaciones hasta que culmine el procedimiento, cesando la misma solo en caso de finalizar con sanción".

39.- Licencias.
Integración de la Cámara

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución:

Licencia por motivos personales:

Del señor representante Pablo D. Abdala, por los días 12 y 13 de setiembre de 2019, convocándose al suplente siguiente, señor Marcelo Bacigalupi.

No acepta la convocatoria, por esta única vez, el suplente siguiente señor Jorge Guekdjian.

Montevideo, 12 de setiembre de 2019

ORQUÍDEA MINETTI, FITZGERALD CANTERO, SILVIA HERNÁNDEZ".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta en setenta y tres: AFIRMATIVA.

Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada.

40.- Pueblo Cebollatí, departamento de Rocha. (Se declara feriado no laborable el día 28 de octubre de 2019, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación)

Corresponde tratar el asunto que figuraba en décimo punto del orden del día y, que pasó a ser undécimo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 139 del Reglamento, se va a votar si se considera el asunto en cuestión, ya que ingresó a la Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

Se requieren cincuenta votos conformes.

(Se vota)

——Sesenta y tres en setenta y tres: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Pueblo

Cebollatí, departamento de Rocha. (Se declara feriado no laborable el día 28 de octubre de 2019, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1212

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

La Mesa quiere informar que se presentaron dos artículos sustitutivos, que se están repartiendo en este momento.

SEÑOR ALSINA (Herman).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ALSINA (Herman).- Señor presidente: las características más salientes de Cebollatí son su pujanza y la fortaleza de su población.

El enclave geográfico en el que nació y se desarrolló durante cien años este centro poblado mostró, como siempre, un sinnúmero de contrastes. Sin duda, una tierra con inmejorables condiciones para el desarrollo de la agricultura permitió que el norte rochense sea uno de los lugares de mayor rendimiento para la explotación arrocera.

La misma tierra que fue descubierta -con inmejorables condiciones- para ciclos de ganadería es la que acercó a las personas que desarrollaron una cultura local muy alejada de todo. El río Cebollatí, la Laguna Merín y el Estero de Pelotas convierten a este centro poblado en una isla, que durante su existencia naturalizó situaciones dramáticas, como quedar totalmente aislado durante muchos días.

El contraste de la riqueza de la tierra y el sacrificio de su población es solo uno. El pueblo que supo forjar oficios como el de taipero, popularizado en la canción de Zitarrosa, también mostró el contraste de expresiones laborales, cuyos actores muchas veces hasta no hace mucho tiempo eran vistos solo como músculo para aumentar ganancias, ya que estaban lejos de ser considerados sujetos de derecho.

El río que le dio el nombre al pueblo es el mudo testigo de su historia; varias veces golpeó a su gente, pero otras entregó generosamente sus recursos para permitir que muchos pudieran hacer la diaria, ya que todo, o casi todo, permite generar posibilidades.

En este último tiempo se han reconocido los reclamos de su gente y se ha considerado que hay cosas que pueden cambiar. Por ejemplo, la disminución de los rancheríos de paja ha sido posible gracias a varias intervenciones en materia habitacional. Asimismo, el tramo final de la Ruta Nacional Nº 15 cerca de la llegada al pueblo ahora puede hacerse de forma segura y cómoda gracias a la bituminización realizada. Además, la apertura del Centro de Atención Ciudadana permitió que varios trámites se puedan hacer en la zona y se obtuvieran algunos servicios, lo que se demandaba desde hacía muchos años.

También hay una participación ciudadana sobresaliente en el centro cultural de la ciudad, y en estos días se comenzarán a realizar reformas en la plaza del pueblo, en consonancia con el centenario.

Estas son algunas de las respuestas que en los últimos años se han dado al pueblo del departamento de Rocha más alejado de la capital y más próximo al de los hermanos olimareños.

Señor presidente, nobleza obliga, esta iniciativa tuvo como partícipe al diputado Alejo Umpiérrez, y considerando todos los avances que se han logrado cuando se cumple el centenario de esta localidad, apoyamos esta iniciativa en todos sus términos.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Intendencia y Junta Departamental de Rocha, a la Junta Local de Cebollatí y a los medios de prensa del departamento.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar el trámite solicitado por el señor diputado Alsina.

(Se vota)

——Sesenta y seis en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Como se ha acordado, se suprime la lectura y se van a votar en bloque los dos artículos de este proyecto, tal como vienen de Comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cero en sesenta y siete: NEGATIVA. Unanimidad.

Hay un sustitutivo al artículo 1º, presentado por los señores diputados Ope Pasquet, José Carlos Mahía, Alejandro Zavala, Herman Alsina, Jorge Alonso Bourdiel, Carlos Jesús Castaldi y Javier Umpiérrez.

(Texto del artículo sustitutivo:)

"Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable para pueblo Cebollatí, departamento de Rocha, el día 4 de octubre de 2019, con motivo de conmemorarse los cien años de su fundación".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Hay un sustitutivo al artículo 2º, que fue presentado por los señores diputados Ope Pasquet, José Carlos Mahía, Alejandro Zavala, Herman Alsina, Jorge Alonso Bourdiel, Carlos Jesús Castaldi y Javier Umpiérrez.

(Texto del artículo sustitutivo:)

"Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga en la fecha indicada en el artículo 1º a los trabajadores de las actividades públicas y privadas, nacidos o radicados en el referido pueblo".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y seis en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable para pueblo Cebollatí, departamento de Rocha, el día 4 de octubre de 2019, con motivo de conmemorarse los cien años de su fundación.

Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga en la fecha indicada en el artículo 1º a los trabajadores de las actividades pública y privada, nacidos o radicados en el referido pueblo".

41.- Licencias.
Integración de la Cámara

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución:

Licencia por motivos personales:

Del señor representante Gerardo Núñez Fallabrino, por el día 12 de setiembre de 2019, convocándose a la suplente siguiente, señora Gabriela Perdomo Buchaski.

Montevideo, 12 de setiembre de 2019

ORQUÍDEA MINETTI, FITZGERALD CANTERO, SILVIA HERNÁNDEZ".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

Queda convocado el suplente correspondiente, y se le invita a pasar a sala.

42.- Urgencias

Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por la señora diputada Susana Pereyra y por los señores diputados Iván Posada y Andrés Carrasco.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la minuta de comunicación por la cual se solicita al Poder Ejecutivo que exhorte a la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultura de la Nación a promover la Declaración de Monumento Histórico, Artístico y Cultural de la Nación a la construcción

denominada 'Casapueblo', obra del célebre artista nacional Carlos Páez Vilaró, identificada con el Padrón Nº 3380 de Punta Ballena, departamento de Maldonado. (Carp. 4145/019). (Rep. 1218/019)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA.

43.- Construcción denominada "Casapueblo". (Se solicita al Poder Ejecutivo la declaración de Monumento Histórico, Artístico y Cultural a través de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación)

Con la declaración de urgencia también se dio cumplimiento con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 139 del Reglamento, ya que se trata de un asunto ingresado a la Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar la minuta de comunicación al Poder Ejecutivo relativa a: "Construcción denominada 'Casapueblo'. (Se solicita al Poder Ejecutivo la declaración de Monumento Histórico, Artístico y Cultural a través de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1218

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase la minuta de comunicación.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR CARRASCO (Andrés).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CARRASCO (Andrés).- Señor presidente: proponemos esta minuta de comunicación en el entendido de que Casapueblo representa un valor histórico y artístico del Uruguay. Es un ícono de nuestro país.

Fue construida por Carlos Páez Vilaró con sus propias manos. Se realizó alrededor de una casa de madera que se definía como la pionera.

Se trata de una construcción que no tiene planos ni líneas rectas, y que muestra parte de la cultura desarrollada por el artista. Tiene el estilo que se utiliza en la costa mediterránea de Santorini y, como él mismo la definía, es como un nido de hornero.

Tiene trece pisos con terrazas, pero muestra una muy importante conjunción, armonía y respeto por la naturaleza. Diría que es un lugar obligado para todo turista que está en la zona, punto de detención de las excursiones y parada de miles y miles de personas, año a año.

La construcción alberga un museo y un taller; además, funciona como un hotel, una galería de arte y una cafetería.

Hay cuatro salas de exposiciones y cada una tiene el nombre de diferentes artistas o personajes referidos a la cultura mundial. Asimismo, también recibe la visita de diferentes artistas, así como de personajes de reconocida trayectoria en la cultura a nivel mundial.

Una de las cosas que caracteriza a Casapueblo es la ceremonia de la puesta de sol, que se oculta a altas horas de la tarde, y estaba acompañada de un poema que, en su momento, recitaba Carlos Páez Vilaró.

Casapueblo da un valor sustancial a Punta Ballena, a Punta del Este y, por eso, es merecedora de esta distinción, razón por la cual solicitamos a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación que la declare Monumento Histórico, Artístico y Cultural.

Pensamos que de esta manera se reconoce lo que representa la construcción para la zona y también la obra del propio artista.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: debo decir que, en un primer momento, la iniciativa del señor diputado Carrasco generó en mí una reacción simpática, favorable, porque he visitado Casapueblo como lo han hecho otros cientos de miles de turistas. Realmente, me he quedado impresionado, hasta maravillado por lo que es, representa y significa, y creo que soy uno de los tantos que lo considera parte integrante del patrimonio cultural de la nación. Hasta ahí, estamos de acuerdo.

Ahora bien: declarar monumento histórico a un edificio determinado como, por ejemplo, este, apareja consecuencias legales a las que, precisamente, se remite la minuta de comunicación que se nos propone, porque se solicita que el bien quede afectado por las servidumbres enumeradas en el artículo 8º de la Ley Nº 14.040, de 20 de octubre del año de 1971, que es la que refiere a la declaración de monumento histórico, etcétera.

Yo no sé en qué medida esta afectación, por estas servidumbres, puede lesionar lo que es el funcionamiento actual y el modo en que se financia y mantiene Casapueblo.

Sabemos que uno de los problemas que tiene el Estado con los monumentos históricos es que les impone sus servidumbres, pero luego está en dificultades para ayudar a su mantenimiento. Entonces, los propietarios de esos edificios se encuentran con que no pueden modificar nada y el Estado no los ayuda, en la medida necesaria, para mantenerlos en condiciones. Por lo tanto, paradójicamente, esto puede entorpecer el funcionamiento de Casapueblo; si los propietarios no lo pueden tocar, no lo pueden modificar, ven restringidas sus facultades de administración y de gestión del inmueble y el Estado se encuentra en dificultades para darles el auxilio necesario -sabemos que nunca, en ninguna época histórica, es fácil que el Estado se haga cargo de estos gastos-, de repente, puede ocurrir que el resultado que obtengamos no sea el que queremos.

A mí me parece que, antes de dar un paso en este sentido, sería conveniente escuchar a los actuales propietarios de Casapueblo, que no sé quiénes son -no sé si esto es una sucesión, una sociedad anónima o qué-, citar al representante del Ministerio de Educación y Cultura, y después de escuchar esas opiniones, entonces, sí proceder como corresponda.

Si el proponente, señor diputado Carrasco, nos puede dar otros elementos de juicio, quizás me convenza y acompañe la resolución que, repito, me resulta muy simpática, pero tenemos que prever las posibles consecuencias.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra el señor diputado Pablo Pérez González.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ (Pablo).- Señor presidente: entiendo las preocupaciones del señor diputado preopinante, pero creo que esta iniciativa tiene una significación muy importante en cuanto a los objetivos del departamento de Maldonado para una industria fundamental como el turismo.

Uno de los grandes dramas de Maldonado es la estacionalidad y el hecho de que dependemos muchísimo del sol y de la playa. Durante decenas de años hemos estado buscando diversificar los distintos atractivos y generar otros, pero ha sido complejo cumplir con ese objetivo.

En este caso concreto, este lugar se ha convertido en lo que es hoy por obra de su autor, el propio Carlos Páez Vilaró, quien la construyó y la convirtió -porque es un artista-, en un lugar de atracción turística que excede los límites del Uruguay, porque vienen de todas partes del mundo a visitarla. Entonces, bien vale la pena el esfuerzo de debatir y ver en qué medida debemos cambiar la actitud -creo que es un tema cultural- con respecto a los monumentos históricos.

Lo que dijo el señor diputado preopinante es cierto; muchas veces, es difícil conseguir recursos para el mantenimiento de lugares que tienen un valor histórico muy importante. Y en un Uruguay donde en estos últimos años el turismo se da en todo su territorio, porque todos sus rincones son centros de atracción turística, bienvenida sea la iniciativa, en la medida en que va a obligar a que nos replanteemos si lo que tenemos que invertir en el mantenimiento de los sitios históricos es un gasto o una inversión, porque se va a traducir en nuevos puestos de trabajo, en lugares atractivos donde los uruguayos puedan conseguir trabajo. Digo esto a los efectos de recoger la preocupación, pero al mismo tiempo tratando de que esta iniciativa por lo menos ponga el tema en discusión, no solo entre los distintos sectores que se tienen que interesar por el tema, como la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, sino a nivel de las autoridades nacionales, a fin de que puedan aportar al respecto.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la minuta de comunicación.

(Se vota)

——Sesenta y siete en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

SEÑORA GRAUERT HAMANN (Elena).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GRAUERT HAMANN (Elena).- Señor presidente: si bien comparto en parte lo que opina el señor diputado Pasquet, entiendo que es un monumento importante y que hay que recordar que en Maldonado se han destruido algunos íconos de la ciudad. Por ello, me parece relevante que la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación tenga en cuenta la declaración de patrimonio histórico de Casapueblo, que es un ícono destacado para todo el país y el turismo de Maldonado y del Uruguay.

Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA (Carlos).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR MOREIRA (Carlos).- Señor presidente: estoy de acuerdo con las palabras pronunciadas por los señores diputados Andrés Carrasco y Pablo Pérez; los acompaño en eso.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Queda aprobado el proyecto de minuta de comunicación y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR POSADA (Iván).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y seis en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto de minuta de comunicación aprobada:)

"La Cámara de Representantes se dirige al Poder Ejecutivo para que exhorte a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación a realizar una propuesta de declaración de Monumento Histórico, Artístico y Cultural, de acuerdo a la Ley Nº 14.040, del 20 de octubre de 1971, en relación a la construcción denominada "Casapueblo", ubicada en el padrón Nº 3380 de Punta Ballena en el departamento de Maldonado. Dicha construcción es obra del célebre y prestigioso artista nacional Carlos Páez Vilaró. Se solicita que el bien quede afectado por las servidumbres enumeradas en el artículo 8º de la referida ley".

44.- Servicios de comunicación audiovisual. (Se establecen modificaciones a la Ley Nº 19.307)

——Se pasa a considerar el asunto figuraba en undécimo término y que pasó a ser duodécimo: "Servicios de comunicación audiovisual. (Se establecen modificaciones a la Ley Nº 19.307)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 939

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

Anexo I

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑORA GRAUERT HAMANN (Elena).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GRAUERT HAMANN (Elena).- Señor presidente: me quiero excusar y me voy a retirar de sala, en virtud de que soy asesora de la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay y participé en la elaboración de este proyecto.

(Se retira de sala la señora representante Elena Grauert Hamann)

SEÑOR DELSA (Paulino).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR DELSA (Paulino).- Señor presidente: amparándome en el artículo 77 y en el literal M) del artículo 104 del Reglamento de esta Cámara, me voy a retirar de sala cuando se traten los puntos que figuran en undécimo y duodécimo término en el orden del día, que tratan sobre los servicios de telecomunicación audiovisual.

(Se retira de sala el señor representante Paulino Delsa)

SEÑORA PEREYRA (Susana).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- Señor presidente: mociono para que durante la discusión de la Cámara se considere el informe del señor diputado Carlos Varela Nestier.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en setenta: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor diputado Carlos Varela Nestier.

SEÑOR VARELA NESTIER (Carlos).- Señor presidente: quiero hacer una aclaración para que la Cámara entienda lo que acaba de pasar.

La votación en la Comisión de Industria, Energía y Minería resultó en empate; hay dos informes en minoría y había que trabajar en uno de ellos. Cualquiera de los dos podría haber sido utilizado como base para este debate.

También quiero señalar que, en este caso específico, la Comisión tuvo el tiempo suficiente para trabajar en este proyecto: no lo traemos a las apuradas, sino que lo tratamos durante muchas sesiones, con aportes de las partes interesadas.

Asimismo, quiero decir que esta iniciativa refiere a una ley que votamos los últimos días de diciembre de 2014, que fue muy debatida en su momento y solo fue acompañada por el Frente Amplio -la mal llamada "ley de medios", porque es la Ley de Medios. Regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual-, ya que las posiciones se han mantenido firmes hasta este momento; o sea, no han variado acerca de la conveniencia de esta norma. Es más: en los últimos tiempos, hemos escuchado opiniones en cuanto a la posibilidad de que se modifique la composición de las Cámaras luego de las elecciones de octubre y que podría haber iniciativas en el sentido de derogarla.

Pero no es este el objetivo de mi intervención; no intento generar un debate que ya está transcurriendo y que seguirá desarrollándose en el tiempo, sino concentrarme en los tres artículos que incluye el proyecto de ley que hoy traemos a sala. Debemos explicar también su contexto, el porqué de esta propuesta.

Una vez que se aprobó la Ley N° 19.307, a partir de la promulgación del Poder Ejecutivo, se sucedieron ante la Suprema Corte de Justicia varios pedidos de inconstitucionalidad. Si mal no recuerdo, fueron casi dos centenas. La enorme mayoría fueron desechados, estableciéndose la constitucionalidad de las normas que incluye la Ley N° 19.307. Sin embargo, hubo algunas declaraciones de inconstitucionalidad, lo que generó una situación particular, porque ciertos aspectos de la ley quedaron vigentes para algunos y no para otros, lo que es una incoherencia y genera contradicciones en la lógica interna del proyecto de ley. Por eso es imprescindible introducir algunas correcciones.

Este proyecto apunta a modificar tres artículos en particular; simplemente, los voy a mencionar porque en las bancas de las señoras legisladoras y los señores legisladores están los informes y, a la luz del tiempo que llevamos trabajando, me parece que lo mejor es abreviar lo máximo posible las exposiciones, a los efectos de facilitar la tarea que aún nos resta el día de hoy.

El primer artículo al que me voy a referir, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, es el artículo 56 de la Ley Nº 19.307. En realidad, este artículo establecía que era de interés general -así lo expresaba el proyecto que fue votado en su momento- uno de los aspectos a mi juicio fundamentales, una de las razones de esa ley, por la que se impedía la conformación de monopolios u oligopolios.

Como usted sabe, señor presidente, entre otros aspectos, la libertad de expresión debe contemplar la diversidad, es decir, la posibilidad de que las distintas voces se escuchen y se expresen. El Uruguay y el mundo han tenido experiencias negativas cuando esa posibilidad se ha concentrado en pocas manos. Este proyecto de ley, en toda su generalidad, apunta, precisamente, a eliminar esas posibilidades.

Esto se establecía como interés general, pero la Suprema Corte de Justicia consideró que no había razones para que estos fundamentos se consideraran en esos términos.

El artículo 56 -con una redacción que, con total sinceridad, quiero señalar que no nos parece la más

perfecta- apunta a resolver una dificultad y reinstala y justifica el porqué de ir contra los monopolios, los oligopolios y la concentración. Se trata de impedir que quede en las mismas manos la posibilidad de emitir, por ejemplo, señales de televisión, radio y trasmisión de datos; más adelante me referiré específicamente a esto. Eso se impedía a través de la norma jurídica que en su momento se votó y que ahora estamos reafirmando mediante este proyecto.

Como decía, hablar de la trasmisión de datos era importante porque, si uno analiza todo el debate -que nos llevó meses en el año 2014- y las distintas posiciones que se expresaron públicamente, puede comprobar que lo que estaba subyacente era este tema. Me refiero a quién podía o no hacer trasmisión de datos, en tanto todos sabemos que la evolución de los medios de comunicación a partir de la incorporación de nuevas tecnologías hace que vayan perdiendo vigencia los más tradicionales y cobrando más fuerza las nuevas formas de comunicación que pasan, entre otras cosas, por lo que acabo de señalar. Por eso este era un elemento fundamental, y ahora reinstalamos el tema del interés general a través de este artículo.

Por otro lado, quiero referirme al artículo 117; voy a explicar a qué apunta. La norma original, es decir, la votada en diciembre de 2014 -copiando legislaciones iguales de gran parte del mundo, ya que países avanzados y democráticos la tienen-, incluía lo que se llama *must carry*, es decir, la obligatoriedad de los medios de comunicación, en este caso, montevideanos -los cuatro canales de televisión, entre los que, obviamente, incluyo a Canal 5-, de brindar sus señales al resto de los cableoperadores en cada una de las zonas en que actúen.

(Ocupa la Presidencia la señora representante Cecilia Bottino)

——Insisto en que esta no era una incorporación novedosa de la ley que votamos en su momento, sino que se basaba en legislación comparada de muchos lugares del mundo y apuntaba en el sentido de la democratización, a fin de que las señales de los canales fundamentales de nuestro país pudieran ser percibidas sin costo a través de los cableoperadores del interior, en todo el Uruguay.

Esto fue observado por la Suprema Corte de Justicia, que señaló que era una forma de ir contra el derecho de propiedad de los medios de comunicación con su propia programación, ya que debían cederla en forma gratuita. Tenemos opinión sobre cada una de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, pero las acatamos, como corresponde, porque no hay otra forma de actuar en un sistema democrático. Pero esta resolución de la Corte generó una contradicción que esta medida apunta a resolver. ¿Cuál fue esa contradicción? Se trata de una situación absolutamente injusta que, en particular, los cableoperadores del interior están sufriendo. Se estableció que no se podían ceder en forma gratuita las señales de los grandes canales a los cableoperadores, pero se los obligó a trasmitirlas. Como imaginarán, eso generó una situación de desigualdad que llevó a que los canales establecieran el precio que se les ocurriera así pasó para dar las señales que los otros tenían la obligación de trasmitir. Esta fue una situación totalmente ilógica y no solo confusa, sino inconveniente, ya que este artículo fijaba un precio, con el que, obviamente, los grandes medios de comunicación no están de acuerdo, aunque la gente de los canales de cable, sí.

De manera que se trata de resolver esta situación, estableciendo un precio o una tarifa de común acuerdo para que se puedan retrasmitir las señales de los canales de Montevideo en las localidades que corresponda.

También me quiero referir al artículo 139. Cuando votamos la ley, señalamos que quizás había aspectos que la reglamentación debería corregir. Uno de ellos era la publicidad porque, evidentemente, existe una objetiva desigualdad entre la capacidad económica de los grandes medios que están ubicados en la capital y aquellos que se encuentran en los demás departamentos. Si establecíamos absolutamente las mismas normas para todos, generábamos una situación de desigualdad que la vida demostró que era tal.

Por lo tanto, la modificación que proponemos al artículo 139 pretende resolver dicha situación.

La publicidad en los medios del interior tiene características distintas a las de Montevideo, ya que casi no hay publicidad de las grandes marcas, como los bancos, los refrescos, las tarjetas de crédito o las marcas globales. Recuerdo que en aquel momento se nos señalaba que el peso de las encuestas de opinión y los *rankings* que se establecían desestimulaban a las

grandes marcas a publicitar en algunos medios del interior; lo que sigo pensando que es un grave error de apreciación, pero así se manejan comercialmente.

Por lo tanto, la publicidad de los medios del interior está basada, fundamentalmente, en comercios de la zona: almacenes, carnicerías y distintos proyectos económicos o comerciales que se desarrollan en cada departamento. En general, estas publicidades describen ofertas y suelen ser más largas que las de los medios de Montevideo. Si se limitara esa publicidad -igual que en la capital-, muchos programas que hoy se emiten y se basan en ella pasarían a ser inviables. Sabemos que en el interior la publicidad, en algunos casos, es parte integral del programa o el espectador la considera información. Me refiero, por ejemplo, a los remates ganaderos, a los espacios con información fúnebre, etcétera, por lo que no se pueden aplicar las mismas reglas publicitarias que en Montevideo. Por lo tanto, proponemos modificar la ley, aplicando un factor de corrección que tiene en cuenta la descentralización y el contenido local de la publicidad.

La ley que votamos en el año 2014 es perfectible; ya lo señalamos en aquel momento. La práctica que señala si una ley está bien o mal es su propia vida; eso se puede comprobar cuando realmente comienza a vivir en la sociedad y a tener efectos positivos o negativos. Las dudas que pudieron existir en aquel momento referían, principalmente, a si la ley sería capaz de alcanzar a todos los medios de comunicación que ya existían, y es obvio que la vida demostró que no. En aquel entonces, no tuvimos capacidad de legislar, por ejemplo, en cuanto a las redes, y no porque no quisiéramos, sino porque, inclusive, buscando legislación comparada en el mundo, no encontramos elementos que nos permitieran avanzar en ese sentido. Sabíamos que esa era una falta. La otra duda era si las normas, una vez aplicadas en la realidad, necesitarían ajustes. El artículo que recién se mencionaba es un ejemplo en ese sentido.

Hay otro aspecto que en aquel momento se señaló con mucho énfasis: se dijo que esta ley violaba la libertad de expresión. Diría que eso fue parte central de la discusión, independientemente de que sigo considerando que ello ocultaba la verdadera razón: los aspectos comerciales. Aún se sostienen esos fundamentos.

Cuando, con legitimidad de quien lo expresa, se dice que se está dispuesto a derogarla, se sigue fundamentando que esta ley viola la libertad de expresión.

Advierta qué contradicción, señora presidenta: vuelvo a hablar de la prueba de la vida, de la realidad. Actualmente, Uruguay ocupa el segundo lugar en América Latina -el primero lo tiene Costa Rica- en materia de libertad de expresión; además, está en uno de los primeros lugares a nivel mundial. Hace poco tiempo, las uruguayas y los uruguayos tuvimos el orgullo y el honor de que nuestro país fuera calificado entre los diecinueve Estados con democracia plena. Hoy, en el mundo, solo hay diecinueve países con democracia plena; nombro algunos: Uruguay, Canadá, Australia, Sudáfrica, España, Francia, Italia e Inglaterra. Muchos de ellos lo muestran con orgullo en sus publicidades nacionales. Reitero: Uruguay es uno de esos diecinueve países.

¿Alguien puede imaginar que se considere que en un país existe democracia plena si no tiene total libertad de expresión? No. Por lo tanto, ese debate sobre si esta ley atenta contra la libertad de expresión, desde mi punto de vista, ha quedado saldado.

De todas maneras, entiendo que en la próxima legislatura todos deberemos afrontar el desafío de analizar esta ley vigente, actualizarla y, fundamentalmente, avanzar en un campo en el que no pudimos hacerlo antes: el de las nuevas tecnologías, que son las que van a marcar la capacidad de los medios de comunicación de trasmitir opiniones e ideas en el futuro inmediato.

Por todo lo expuesto, sugerimos a la Cámara que vote este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado Walter Verri.

SEÑOR VERRI (Walter).- Señora presidenta: no compartimos casi nada de lo que ha dicho el señor diputado Varela, mucho menos acerca de las modificaciones a este proyecto de ley, por las razones que él mismo ha puesto sobre la mesa en esta sesión. No voy a extenderme porque las jornadas de ayer y de hoy han sido muy largas.

Ya dimos la discusión acerca de la ley de medios. Las modificaciones que hoy tenemos a consideración

son consecuencia de declaraciones de inconstitucionalidad. No son las únicas modificaciones: por ahí viene otra carpeta que también modifica la ley de medios, y si hacemos memoria recordaremos que ya hubo otras de menor cuantía.

Cuando uno regula, cercena libertades. Para nosotros -y para la Suprema Corte de Justicia en algunos aspectos- esa ley restringe libertades, y lo vamos a seguir sosteniendo.

No me parece que sea el momento de dar este debate, terminando el período legislativo, a pocos días de una elección, cuando dos de los tres partidos que pueden llegar al gobierno han dicho que la van a derogar o modificar profundamente para dejarla con muy pocos artículos. Hoy se trata de levantar dos inconstitucionalidades fuertes, grandes -en definitiva, tampoco se las levanta-, que si se vuelven a impugnar van a ser declaradas nuevamente inconstitucionales. Creo que deberíamos respetar el proceso electoral uruguayo y esperar que haya un nuevo gobierno. Si el Frente Amplio, por esas cosas de la elección de los uruguayos, vuelve a ser gobierno, entonces sí, que ese gobierno modifique esta ley. Este no es el momento.

Por supuesto que estamos segundos en materia de libertad de expresión en América y dentro de los primeros en el mundo, pero no nos creamos que esto se construyó ahora. Es así desde que comenzamos a ser República, y yo diría que antes: con Artigas en Purificación y con Rivera en 1830 comenzamos a defender la libertad de expresión.

La ley que votamos en el año 2014, créaseme que va en la dirección incorrecta, en la dirección contraria. No se fomenta la libertad de expresión regulando y cercenando a los medios.

Les voy a dar un ejemplo antes de entrar en las razones.

Esta ley habla del interés general. ¿Quién determina cuál es de interés general? El Poder Ejecutivo. Esa no es la concepción que tienen las cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. No debe ser el mismo Poder el que determine las dos cosas.

Analicemos lo que está ocurriendo: hoy estamos abrumados de campañas de bien público. ¿Quién determina que esas campañas son de bien público? ¿Saben lo que pensamos miles de uruguayos? Que son publicidad abusiva del gobierno. No es cuestión de bien público hablar de lo bueno y de lo mucho que hacen. No importa si lo hacen bien o lo hacen mal, porque lo que logran es promocionar al gobierno. En años electorales, eso es publicidad abusiva del gobierno de turno. Hoy lo están usando ellos, imaginemos que mañana lo use otro gobierno. Yo no sé si van a sentir que estas leyes dan tanta libertad. Créaseme que esto es un exceso de regulación del Estado; son los medios del Estado al servicio de un partido. Es lo que sentimos cuando escuchamos las campañas de bien público. Eso fue habilitado por esta ley que hoy vamos a modificar aunque, seguramente, nada tenga que ver con los artículos que se van a corregir.

El diputado Varela ha introducido la discusión de la ley de medios, que votamos en contra. Seguimos en contra de esta y no vamos a votar estos artículos porque sería apoyar algo que no acompañamos en su momento; además, hay razones jurídicas de peso.

El artículo 56, que es el primero cuya inconstitucionalidad se pretende levantar por esta ley, establecía que las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual no podrán prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de trasmisión de datos, o sea que lo prohíbe. ¿Qué significa esto? Que evitamos que los privados puedan hacer las tres cosas, pero sí se lo permitimos a Antel. ¿Qué consagramos con esta ley? Un monopolio público. Yo no estoy en contra de las empresas públicas; creo que Antel es una gran empresa que debemos sostener, pero debe competir para ser más eficiente en el servicio que brinda a los uruguayos. La telefonía celular es un ejemplo de ello: hoy, si no nos gusta Antel, tenemos la posibilidad de cambiarnos a otra empresa. ¿Qué ocurre? La mayoría de los uruguayos, optamos por Antel. Y así debería ocurrir con la trasmisión de datos y demás.

¡Claro que la televisión por abonados podría trasmitir datos, si tienen todas las ciudades cableadas, igual que Antel! ¡Claro que podrían brindar servicios de telefonía fija! ¿Por qué no dejamos que Antel compita con la telefonía fija? ¿Por qué tenemos tanto temor por una empresa tan eficiente como Antel? Eso es lo que restringía esta ley y por eso el artículo 56 fue declarado inconstitucional. Digamos las cosas como son. Podrán votar a favor o en contra, pero eso

es lo que se establecía: la prohibición de que los que brindan servicios de comunicación audiovisual puedan prestar otros servicios. ¿Quién los puede prestar? Antel. ¿Qué establece hoy la Ursec? Que el 99 % de trasmisión de datos de este país está en manos de Antel. No sé si será mejor o peor que otras, pero deberíamos tener otras posibilidades.

Yo estoy muy conforme con mi línea y con mi celular de Ancel, pero tal vez con la trasmisión de datos no lo esté tanto. Donde vivo, prácticamente no tengo cobertura, y al igual que yo, miles de uruguayos. Actualmente, las rutas nacionales no tienen tanta cobertura como antes. Quizás muchos de ustedes hoy estén recorriendo el país en función de la campaña electoral; yo lo hago todas las semanas por la Ruta Nacional N° 3 durante 400 kilómetros, ida y de vuelta; y ahora los recorreré nuevamente. Y hay muchas zonas de esa ruta en las que no tengo cobertura. No sé si a las demás compañías les pasa esto. Entonces, dejemos que las empresas compitan. Lo mejor que podemos tener son las empresas públicas compitiendo.

El Banco de Seguros -a mi lado hay un exdirector- entró en competencia con los seguros privados. ¿Se fundió? ¡No! Hoy es un ejemplo.

La Suprema Corte de Justicia afirma que esto es inconstitucional porque lesiona los principios de igualdad y de libertad de los artículos 7º y 8º de la Constitución, pero no se evidencia cuál habría sido la justificación para dar a esta materia un tratamiento tan riguroso, apartándose de las reglas generales consagradas en el mismo capítulo de la ley, con miras a evitar la concentración empresarial.

Es claro, ¿no? También lo dice porque se infringe el artículo 36 de la Constitución.

¿Sabe, señora presidenta, cómo se levanta esta declaración de inconstitucionalidad? Diciendo que la prohibición es de interés público. Es lo mismo que dicen para hacer las campañas de bien público. Lo mismo que dice el artículo es lo que los habilita a realizar las campañas de bien público.

¿Quién determina que es de interés general? ¡El Poder Ejecutivo!

No sé si los afectados impugnarán este artículo, pero si lo hacen, seguramente en el Parlamento tendremos que volver a discutir una declaración de inconstitucionalidad. Esa es la realidad.

Por otra parte, como decía el señor diputado Varela, el artículo 2º de este proyecto modifica el artículo 117 de la Ley N° 19.307. La Suprema Corte de Justicia sostuvo que establecer el deber de los servicios para televisión de abonados no satelitales de incluir en su paquete básico las señales de los servicios de radiodifusión de televisión abierta cuya área de cobertura sea similar al área de prestación del servicio en forma gratuita, es inconstitucional. Concretamente, afirmó que se vulneran los derechos constitucionales de propiedad y de explotación en exclusiva de obras protegidas por la legislación sobre derechos de autor. Precisamente, se acaba de aprobar un proyecto de ley tratando de proteger aún más los derechos de autor.

¿Qué significa todo esto? Que estábamos obligando a transportar en forma gratuita las señales de los canales del área de influencia del cableoperador; digámoslo así para que se entienda. En Montevideo se tenía que transportar gratis las señales de los cuatro canales de aire, pero la Suprema Corte de Justicia entendió que había una afectación al derecho de propiedad y al derecho de propiedad intelectual. Y es correcto.

¿Quién determina el valor de lo que yo produzco? ¡Yo! Usted me podrá comprar o no, pero es mi producción. Si mi programa es visto por miles y miles de uruguayos, yo le fijo un precio. Es como el fútbol: si genero la imagen la vendo al precio que me parece que los uruguayos la quieren consumir. Sin embargo, se trata de regular lo que no se puede regular.

Trabajamos este artículo para ver si encontrábamos una solución. No estamos en contra solo por estar en contra. Reitero que trabajamos pero no pudimos encontrar una solución. Es más, este artículo fue modificado en el proyecto original. ¿Cómo se saldó la inconstitucionalidad? Estableciendo un precio. ¿Quién lo fijó? El Poder Ejecutivo. No sé si los canales privados piensan que ese precio es bueno o malo. Solo se les fijó un precio -nada más-, y con eso se salva la gratuidad que establecía la ley.

El problema es que ahora agregamos a ese mismo precio -que no era el que se cobraba por los canales de aire- los servicios satelitales regionales y dejamos afuera los servicios satelitales nacionales.

Es decir que entre los servicios satelitales que no estaban incluidos en el proyecto original establecemos una disparidad, porque a los servicios satelitales regionales les van a cobrar el precio que establece la ley, pero el servicio satelital nacional tendrá que negociar el precio que cada uno de los canales privados quiera, en una libertad de mercado razonable.

Esto es lo que establece la nueva modificación de este artículo. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo porque se afecta severamente la propiedad privada y también la propiedad intelectual, que debería preocuparnos tanto como la primera.

Se trata de normas constitucionales que están protegidas, por tanto, no vamos a levantar nuestras manos para aprobar estos artículos.

Las otras dos disposiciones del proyecto son de menor importancia, más bien son más de trámite.

Es correcto lo manifestado por el señor diputado Varela en cuanto a que se hacen diferencias con relación a la publicidad en los medios del interior teniendo en cuenta la realidad de los cableoperadores, que es muy distinta a la que se vive en Montevideo. Todo eso es cierto. Pero ¿saben por qué tenemos que hacer todo esto? Porque lo regulamos excesivamente y después nos dimos cuenta de que se nos fue la mano.

Esto es lo que quiere decir el mensaje que se envía para modificar estos artículos.

Por estas razones, por lo extenso de nuestro informe y por la rigurosidad técnica con la que lo hemos elaborado -obviamente, asesorados-, no vamos a votar ninguno de los artículos que modifican la ley de servicios de comunicación audiovisual. Tampoco los vamos a votar porque las razones de inconstitucionalidad no se levantan, aunque en los dos primeros artículos se diga que sí.

Por ahora nada más, presidenta.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado Iván Posada.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señora presidenta: el Partido Independiente va a votar negativamente este proyecto de ley.

Creemos que la llamada ley de medios debe ser derogada, y así lo manifestamos oportunamente en el ámbito de la Asamblea General a través del senador Pablo Mieres, cuando se pretendía designar la integración de los servicios de comunicación audiovisuales.

Reitero: vamos a votar negativamente este proyecto, que intenta dar una respuesta a las inconstitucionalidades señaladas por la Suprema Corte de Justicia. Partimos de la base de que el primer artículo de la ley de medios es inconstitucional, ya que establece una diferencia en los tratos en función de los distintos medios. Por ejemplo, toda la comunicación que se realiza a través de internet no está regulada -obviamente, no se puede hacer-, pero sí se regula el resto.

Tal como señaló el señor diputado Walter Verri, integrante de la Comisión, algunos de estos artículos incurren en nuevas inconstitucionalidades.

Entonces, ateniéndonos a nuestro fundamento de voto cuando se consideró la llamada ley de medios, reiteramos una vez más que vamos a votar negativamente este proyecto.

Gracias.

SEÑOR VARELA NESTIER (Carlos).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría.

SEÑOR VARELA NESTIER (Carlos).- Señora presidenta: tal vez algo que dije se malinterpretó.

En ningún momento dije que la libertad de expresión comenzó el 1º de marzo de 2005. No me afilio a la tesis de que ahí empezó la historia y de que lo anterior no existía.

Efectivamente, la libertad de expresión, que es un valor de nuestra democracia, es una construcción de años. No creo que Rivera la haya tenido muy en cuenta, pero es un tema que en su momento discutiremos con mi amigo.

El caso es que en los últimos quince años en este país no se clausuró ninguna radio, no se clausuraron diarios, no fueron periodistas presos -lo quiero aclarar, por las dudas-, no se prohibieron ediciones, no hubo censura previa, ni se retiraron publicaciones de los quioscos. ¡A eso me refiero! Tal vez eso se tomó en cuenta para que hoy Uruguay ocupe un lugar

privilegiado en el mundo en cuanto a la libertad de prensa.

Yo lo señalaba porque, desde mi modesto punto de vista -se ve que para otros no es así-, esto saldó una de las discusiones que existía cuando se votó la ley: esta norma afectaba la libertad de expresión, iba en contra de la libertad editorial y perjudicaría los medios de comunicación. En estos años, no vi que ninguno se perjudicara en ese aspecto por la aplicación de esta norma.

Por otra parte, no voy a discutir sobre inconstitucionalidades porque no soy un experto en la materia y porque en este país, por suerte, existe un sistema jurídico que permite que quien se sienta perjudicado por una norma pueda recurrir a la Suprema Corte de Justicia. Si alguien se siente perjudicado, recurrirá, y nosotros acataremos -como corresponde- lo que se decida.

Sí señalo enfáticamente que es un error considerar que regular imita la libertad. Vivimos en medio de regulaciones; no vivimos en medio de la selva, sin ningún tipo de condiciones. Nuestra vida está regulada en todos los aspectos; no podemos hacer lo que se nos ocurre en el tránsito ni en ningún orden de la vida. La regulación no es prohibición; es limitación. En los organismos internacionales que vigilan la libertad de expresión, la regulación está aceptada y no es considerada ninguna prohibición, en la medida en que se haga en forma razonable, como en este caso.

Como dije al principio de mi intervención, no intento generar un debate por este asunto. Simplemente, creí imprescindible dejar alguna constancia en virtud de lo que se había señalado.

Muchas gracias.

SEÑOR VERRI (Walter).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR VERRI (Walter).- Señora presidenta: yo tampoco quiero entrar en un debate. Solo aclaro a mi amigo, el diputado Varela, que en el año 1838 el presidente Fructuoso Rivera -era su segundo mandato- dictó un decreto que establecía: "La absoluta libertad de opinar y publicar opiniones debe ser un derecho tan sagrado como la libertad y la seguridad de las personas. Pero este derecho inestimable vendría a ser ilusorio, si los que han de ejercerlo conservan el menor recelo de que la autoridad pueda reprimirlo".

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑOR VARELA NESTIER (Carlos).- ¿Me permite, señora presidenta?

Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos y se voten en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se suprime la lectura del articulado y se van a votar en bloque los artículos 1º a 4º, inclusive.

(Se vota)

——Cincuenta en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR VARELA NESTIER (Carlos).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"**Artículo 1°.-** Sustitúyese el artículo 56 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, por el siguiente:

"ARTÍCULO 56. (Incompatibilidades para la prestación de servicios de comunicación audiovisual).- Es de interés general garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual, entendiendo por tal, aquel que se expresa, entre otras manifestaciones, en la satisfacción de necesidades colectivas de

manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio, en la idónea administración de los recursos públicos y en la efectividad de los demás derechos reconocidos explícita o implícitamente por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por la República.

En materia de servicios de comunicación audiovisual, dicho interés general es tutelado por el Estado mediante limitaciones a la titularidad de dichos servicios, que evitan la concentración excesiva de poder en manos privadas de los mismos, previniendo la formación de oligopolios y monopolios privados, así como también mediante la implementación de mecanismos efectivos que impidan la propiedad cruzada de los servicios de comunicación audiovisual, asegurando la pluralidad de ideas y fortaleciendo la libertad de expresión.

A efectos de lograr un sistema equilibrado entre las empresas que conforman los diferentes eslabones de la cadena productiva del sector y de forma de evitar la concentración del poder de dirigir y/o sesgar el acceso a la información, promover la formación ciudadana y garantizar la libre expresión de ideas, las personas físicas o jurídicas privadas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas físicas o jurídicas integrantes de las personas jurídicas involucradas.

Lo establecido en el inciso precedente es sin perjuicio de los acuerdos de comercialización que se puedan celebrar, ofrecidos en igualdad de condiciones a todos los interesados.

Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, total o parcial, simultáneamente, de una licencia para prestar servicios de televisión para abonados satelital de alcance nacional y de autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta, así como tampoco de otras licencias para prestar servicios de televisión para abonados".

Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 117 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, por el siguiente:

"ARTÍCULO 117. (Deber de transportar).- Los servicios de televisión para abonados deberán incluir, dentro de su paquete básico, las señales de Televisión Nacional Uruguay (TNU).

Todos los servicios de televisión para abonados, con excepción de los satelitales de cobertura nacional, también deberán incluir dentro de su paquete básico, las señales de los servicios de radiodifusión de televisión abierta, comerciales, públicas o comunitarias, cuya área de cobertura sea similar a su área de prestación de servicio, en los formatos que su tecnología lo permita, de acuerdo con la Reglamentación correspondiente.

Todos los servicios de televisión para abonados también deberán incluir, dentro de su paquete básico, hasta tres señales nacionales de televisión. Estas señales se seleccionarán cada cinco años mediante concurso público y transparente, que incluirá una audiencia pública de presentación de las propuestas, del que podrán participar señales nacionales, que no tengan vinculación con otros servicios de televisión abierta y que tengan al menos un 80 % (ochenta por ciento) de contenidos de producción nacional.

El concurso para seleccionar las señales comerciales valorará las propuestas en base a los siguientes criterios:

A) Que contribuyan al desarrollo de la producción uruguaya de contenidos audiovisuales, su difusión y promoción a nivel nacional e internacional.

B) Que tiendan al fortalecimiento de la producción cultural local a través de espacios destinados a estimular y difundir programas producidos en distintos puntos del país, ya sea de producción propia o independiente.

C) Que incluyan la participación de productores independientes y empresas nacionales de la industria audiovisual en la cadena de producción y difusión.

D) Que ofrezcan la mayor cantidad de empleos directos y de calidad.

E) Que aporten una mayor diversidad a la oferta de señales de televisión.

F) Los antecedentes en materia audiovisual de los responsables del proyecto.

El precio máximo a pagar por todo concepto, por parte de los titulares de servicio de televisión para abonados, por cada señal que deban transportar será:

A) Titulares de servicios de televisión para abonados con cantidad de hogares en el área de servicio autorizada entre 0 y 3.000: 1.000 UI (mil unidades indexadas) por mes.

B) Titulares de servicios de televisión para abonados con cantidad de hogares en el área de servicio autorizada mayor de 3.000 y menor o igual a 6.000: 2.000 UI (dos mil unidades indexadas) por mes.

C) Titulares de servicios de televisión para abonados con cantidad de hogares en el área de servicio autorizada mayor a 6.000: 3.000 UI (tres mil unidades indexadas) por mes.

El titular de la señal de radiodifusión de televisión abierta deberá, a su cargo, entregar la misma en las instalaciones del proveedor de servicios de televisión para abonados correspondiente.

La cantidad de hogares se determinará conforme a los datos del último censo de población del Instituto Nacional de Estadística.

Todas las señales que se transporten en aplicación del presente artículo deberán ser presentadas en lugares adecuados de la grilla, de acuerdo a la reglamentación correspondiente".

Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 139 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, por el siguiente:

"ARTÍCULO 139. (Tiempo y espacio destinado a publicidad).- Los servicios de comunicación audiovisual podrán emitir un máximo de quince minutos de mensajes publicitarios por cada hora de transmisión, por cada señal, cuando se trate de servicios de radiodifusión de televisión y quince minutos cuando se trate de servicios de radiodifusión de radio.

En ningún caso los tiempos mencionados 'ut supra' serán acumulables.

En el cálculo del tiempo máximo previsto, se deberá incluir el tiempo de un mensaje publicitario emitido en la modalidad de publicidad no tradicional, cuando la duración del mensaje supere los quince segundos.

No se computarán dentro del tiempo publicitario expresado:

A) La autopromoción ni los comunicados oficiales o campañas de bien público.

B) La publicidad que se emita utilizando el sistema de sobreimpresión sin sonido sobre imagen emitida.

C) La publicidad estática en la transmisión de eventos públicos ni el emplazamiento de productos.

Los mensajes publicitarios sobreimpresos en la televisión (textos inscriptos sobre figuras) no deben ocupar más de un dieciseisavo de la pantalla ni exceder de las ocho menciones de diez segundos cada una, por hora, no acumulables. La medición de los quince minutos de espacio y tiempo destinado para publicidad de los servicios de comunicación audiovisual, referidos en el inciso primero se realizará de acuerdo a los criterios expuestos a continuación, siguiendo el objetivo de promoción del desarrollo local de los medios de radiodifusión:

A) Para operadores de servicios de radiodifusión del departamento de Montevideo, los minutos de publicidad se computarán en el 100 % (cien por ciento) de duración.

B) Para operadores de servicios de radiodifusión de las capitales del interior del país, los minutos totales de publicidad se computarán de la siguiente manera:

1) 90 % (noventa por ciento) de los minutos dedicados a la publicidad no local.

2) 70 % (setenta por ciento) de los minutos dedicados a publicidad local.

3) 50 % (cincuenta por ciento) de los minutos dedicados a la publicidad de información ampliatoria.

C) Para operadores de radiodifusión del resto de las localidades del interior del país, los minutos de publicidad se computarán de la siguiente manera:

1) 80 % (ochenta por ciento) de los minutos dedicados a la publicidad no local.

2) 60 % (sesenta por ciento) de los minutos dedicados a publicidad local.

3) 50 % (cincuenta por ciento) de los minutos dedicados a la publicidad de información ampliatoria.

A los efectos de este artículo se entiende por publicidad local toda publicidad que esté referida a la promoción de productos, eventos o lugares con influencia en la localidad donde el medio de radiodifusión tenga autorización de emisión y por publicidad de información ampliatoria a toda publicidad que siendo local, transmite además información ampliatoria sobre el tema del programa en el que está inserto, por tener estrecha vinculación con la temática del mismo".

Artículo 4°.- Sustitúyese el artículo 187 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, por el siguiente:

"ARTÍCULO 187. (Costo de licencia).- Todos los titulares de servicios de comunicación audiovisual para abonados satelitales o que utilicen medios físicos para su distribución, deberán abonar anualmente el costo de renovación de su licencia. Este se calculará en base a 2,10 UI (dos con diez unidades indexadas) por abonado por mes.

Cuando se trate de abonados prepago, para los meses incompletos, el cálculo del costo de licencia podrá realizarse por día, teniendo en cuenta los días del mes en que el servicio haya estado activo (contratados), en base a 0,10 UI (diez centésimos de unidad indexada) por abonado por día.

Lo recaudado por este concepto se destinará al "Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual" establecido por el artículo 62 de la presente ley".

45.- Servicios de comunicación audiovisual. (Modificación de la Ley Nº 19.307)

——Corresponde tratar el asunto que figuraba en duodécimo término del orden del día y que pasó a ser decimotercero.

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 139 del Reglamento, se va a votar si se considera el asunto en cuestión, ya que ingresó a la Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setenta: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Servicios de comunicación audiovisual. (Modificación de la Ley Nº 19.307)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1223

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señora presidenta: al igual que el asunto anterior, esta iniciativa tiene que ver con los servicios de comunicación audiovisual.

En este caso, la modificación introducida por el Senado determina que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) quede a cargo de las competencias del Consejo de Comunicación Audiovisual que, como todos sabemos, no fue integrado.

Consecuentes con nuestro fundamento de voto en el asunto anterior y debido a que esta iniciativa refiere a un artículo de la ley de medios, vamos a votarla negativamente.

Por otra parte, solicito que se desglose el inciso final del artículo único.

SEÑOR VERRI (Walter).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR VERRI (Walter).- Señora presidenta: en el mismo sentido que el diputado Posada, vamos a votar negativamente esta iniciativa; las argumentaciones ya las dimos cuando analizamos el proyecto anterior.

Básicamente, este proyecto corrige algunas inexactitudes que contiene la disposición.

El artículo 198 de la Ley N° 19.307 establece: "[…] hasta tanto se creen los cargos integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual […]". Ahora, se señala: "hasta tanto se constituya el Consejo de Comunicación Audiovisual".

Además, se determina que hasta que se constituya dicho Consejo sus competencias pasan a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). Recordemos que hasta ahora están en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Como dijimos, nosotros no vamos a acompañar este proyecto por las razones que ya hemos dado: estamos en contra de la ley de medios.

SEÑOR VARELA NESTIER (Carlos).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR VARELA NESTIER (Carlos).- Señora presidenta: queremos dejar constancia de que nosotros vamos a votar afirmativamente este proyecto.

Lamentamos que en su momento no se haya encontrado la forma de lograr las mayorías necesarias para conformar el Consejo de Comunicación Audiovisual. Se hizo un gran esfuerzo en este sentido, trabajó una comisión -que entrevistó a todos los postulantes- y llegamos a algunas conclusiones, pero las decisiones que legítimamente cada fuerza política toma impidieron que se concretara lo que para mí es uno de los aspectos fundamentales de la ley: la existencia del Consejo de Comunicación Audiovisual.

Por otra parte, la ley establecía que mientras el Consejo no se conformara, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo asumiría sus responsabilidades.

Como señalaba el diputado Verri, este artículo viene a corregir algunas inexactitudes del artículo original.

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único, desglosando el último inciso.

(Se vota)

——Cincuenta en setenta: AFIRMATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el último inciso del artículo.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en setenta: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR VARELA NESTIER (Carlos).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Cecilia Bottino).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"**Artículo único.-** Sustitúyese el artículo 198 de la Ley Nº 19.307, de 29 de diciembre de 2014, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 198. (Régimen Transitorio del Consejo de Comunicación Audiovisual).- A partir de la vigencia de la presente ley, y hasta tanto se constituya el Consejo de Comunicación Audiovisual, las competencias del órgano desconcentrado estarán a cargo de los órganos que actualmente las ostentan, con excepción de las que se crean por la presente ley, las que serán ejercidas por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones".

Este artículo entrará en vigencia a partir del 1º de diciembre de 2019".

46.- Alteración del orden del día

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor diputado Jorge Gandini.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el punto que figuraba en el decimocuarto lugar del orden del día y que pasó a ser decimoquinto, se considere como decimocuarto".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA.

(Ocupa la Presidencia el señor representante Óscar Groba)

47.- Empresas Lácteas. (Extensión del período de gracia previsto en el inciso primero del artículo 1º de la Ley N 19.397)

——Corresponde tratar el asunto que pasó al decimocuarto lugar del orden del día.

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 139 del Reglamento, se va a votar si se considera el asunto en cuestión, ya que ingresó a la Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

Se requieren cincuenta votos conformes.

(Se vota)

——Sesenta y siete en setenta: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Empresas Lácteas. (Extensión del período de gracia previsto en el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 19.397)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1221

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"**Artículo único.-** Extiéndese el período de gracia previsto en el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 19.397, de 27 de mayo de 2016, hasta un máximo de cuatro años a contar de la fecha de otorgamiento del crédito o préstamo original".

48.- Trabajadores de las empresas Basiney y Anikto S. A. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, por un plazo de ciento ochenta días, el subsidio por desempleo)

——Corresponde tratar el asunto que figuraba en decimotercer lugar del orden del día y que pasó a ser decimoquinto.

En cumplimiento del inciso segundo del artículo 139 del Reglamento, se va a votar si se considera el asunto en cuestión, ya que ingresó a la

Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

Se requieren cincuenta votos conformes.

(Se vota)

——Setenta y uno en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Trabajadores de las empresas Basiney y Anikto S. A. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, por un plazo de ciento ochenta días, el subsidio por desempleo)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1220

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta y uno en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- Señor presidente: solicito que se suprima la lectura de los artículos y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y dos en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se suprime la lectura del articulado y se van a votar en bloque los artículos 1º y 2º.

(Se vota)

——Sesenta y seis en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto .sancionado:)

"**Artículo 1º.-** Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, por un plazo de hasta 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de las empresas Basiney S. A. y Anikto S. A., en los términos y condiciones que establezcan la o las consiguientes resoluciones de extensión.

Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorgue en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 6º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180 de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley Nº 18.399 de 24 de octubre de 2008).

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio, en todos los casos".

49.- Convenios de las organizaciones de productores con el Plan Nacional de Silos. (Se autoriza al Poder Ejecutivo a modificar sus condiciones)

——Corresponde tratar el asunto que figuraba en decimoquinto término del orden del día y que pasó a ser decimosexto.

En cumplimiento del inciso segundo del artículo 139 del Reglamento, se va a votar si se considera el asunto en cuestión, ya que ingresó a la Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

Se requieren cincuenta votos conformes.

(Se vota)

——Setenta y dos en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Convenios de las organizaciones de productores con el Plan

Nacional de Silos. (Se autoriza al Poder Ejecutivo a modificar sus condiciones)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1222

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cuatro en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y tres en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y tres en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"**Artículo único.-** Autorízase al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a modificar las condiciones del endeudamiento en la medida que se vayan efectivizando los pagos correspondientes, modificar los convenios de capitalización suscritos y ampliar los plazos estipulados, a los efectos de regularizar el adeudo que mantienen las organizaciones de productores con el Plan Nacional de Silos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 277 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y sus modificativas.

Esta autorización comprende a los tenedores legítimos con título habilitante, o a las personas jurídicas integradas por los mismos tenedores que continúen con la explotación de silos, plantas de almacenaje, graneros y ex graneros oficiales, elevadores zonales, depósitos y equipos, así como los inmuebles en que se asientan los mismos de propiedad del Estado".

50.- Ahogamiento. (Se declara como problema de salud pública)

——Corresponde tratar el asunto que figuraba en decimosexto término del orden del día y que pasó a ser decimoséptimo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 139 del Reglamento, se va a votar si se considera el asunto en cuestión, ya que ingresó a la Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

Se requieren cincuenta votos conformes.

(Se vota)

——Setenta y tres en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Ahogamiento. (Se declara como problema de salud pública)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1211

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

Anexo I

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora diputada Nibia Reisch.

SEÑORA REISCH (Nibia).- Los ahogamientos, cualquiera sea el ámbito y las circunstancias de ocurrencia, constituyen un problema de salud grave que los Estados deben atender a fin de procurar su prevención.

Los datos oficiales arrojan que estos constituyen la primera causa de muerte por lesiones no intencionales en edades de uno a cuatro años, y de diez a catorce años, siendo la segunda causa entre niños de entre cinco y nueve años.

La gravedad de la situación ha quedado acreditada por el trabajo realizado por la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática (MISA), que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, a través de la formulación de diversas medidas de prevención y educación relacionadas con los eventos adversos ocurridos en la materia.

Los datos arrojan que la mayoría de los ahogamientos se presentan en playas, ríos y arroyos y, en menor medida, en piscinas; los principales departamentos en los que ocurren son Montevideo, Canelones, Colonia y Maldonado.

El presente proyecto ubica el problema en su magnitud.

Su artículo 1º declara al ahogamiento como un problema de salud pública. Luego, lo define como "el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión y/o inmersión en un líquido, con resultados que se clasifican en: muerte, morbilidad (ahogamiento, cualquiera sea su grado) y no morbilidad (rescate)".

Asimismo, el proyecto define la seguridad acuática como "el conjunto de todas aquellas acciones destinadas a prevenir el ahogamiento cualquiera sea el escenario, las condiciones, la época, el grado o la edad de la persona, en el que el riesgo se produzca".

Luego se encomienda al organismo rector de la salud la elaboración de un plan nacional de seguridad acuática adecuado a la realidad nacional, que aborde de modo integral el grave problema de salud que representan los ahogamientos en nuestro país.

Para la elaboración del referido plan, el Ministerio de Salud Pública considerará el ahogamiento como un problema de salud pública, al asegurar el uso de metodologías apropiadas a cada etapa de desarrollo y maduración individual, y contemplará todos los escenarios posibles.

Para su formulación, el Ministerio de Salud Pública convocará a la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática y a las demás organizaciones especializadas en la materia.

El plan promoverá programas de educación y capacitación en acciones de seguridad acuática, poniendo énfasis en los centros de enseñanza y en el personal de rescate y de salud, y contendrá medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria basadas en la mejor evidencia científica disponible, contemplando siempre la realidad nacional.

Finalmente, considerando el grave problema de salud que los ahogamientos representan y que la temática ya ha sido trabajada por la autoridad sanitaria y la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, dispone un plazo que se estima por demás razonable para que la ley sea reglamentada por el Poder Ejecutivo: ciento veinte días a partir de su promulgación.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta en setenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1°.

SEÑORA REISCH (Nibia).- ¿Me permite, señor presidente?

Mociono para que se suprima la lectura y se voten en bloque todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar si se suprime la lectura del articulado y se votan en bloque los artículos 1º a 6º, inclusive.

(Se vota)

——Setenta en setenta y uno: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se suprime la lectura del articulado y se van a votar en bloque los artículos 1º a 6º, inclusive.

(Se vota)

——Setenta en setenta y uno: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑORA REISCH (Nibia).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en setenta: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1°.- Declárase el ahogamiento un problema de salud pública.

Artículo 2°.- Entiéndese por ahogamiento, cualquiera sea su grado, el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión y/o inmersión en un líquido, con resultados que se clasifican en: muerte, morbilidad (ahogamiento, cualquiera sea su grado) y no morbilidad (rescate).

Artículo 3°.- Entiéndese, a los efectos de esta ley, la seguridad acuática como el conjunto de todas aquellas acciones destinadas a prevenir el ahogamiento cualquiera sea el escenario, las condiciones, la época, el grado o la edad de la persona, en el que el riesgo se produzca.

Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Salud Pública (MSP) la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Acuática adecuado a la realidad nacional. El mismo tiene por fin procurar el abordaje integral del grave problema de salud que representan los ahogamientos en nuestro país.

Artículo 5°.- Para la elaboración del Plan al que refiere el artículo anterior el Ministerio de Salud Pública (MSP) convocará a la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática (MISA), y a las demás organizaciones especializadas en la materia.

El Plan Nacional de Seguridad Acuática deberá considerar el ahogamiento como un problema de salud pública, asegurando el uso de metodologías apropiadas a cada etapa de desarrollo y maduración individual y contemplar todos los escenarios posibles.

El Plan promoverá programas de educación y capacitación en acciones de seguridad acuática, con énfasis en los centros de enseñanza y en el personal de rescate y de salud.

El Plan contendrá las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria basadas en la mejor evidencia científica disponible, contemplando siempre la realidad nacional.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento veinte días, contados desde su promulgación".

51.- Acuerdo sobre la orden Mercosur de detención y procedimientos de entrega entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados. (Aprobación)

——Corresponde tratar el asunto que figura en decimoctavo lugar del orden del día.

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 139 del Reglamento, se va a votar si se considera este asunto del orden del día, ya que ingresó a la Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

Se necesitan cincuenta votos conformes.

(Se vota)

——Setenta en setenta y dos: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Acuerdo sobre la orden Mercosur de detención y procedimientos de entrega entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1225

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta y dos en setenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y dos en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"Artículo único.- Apruébase el Acuerdo sobre la Orden MERCOSUR de Detención y Procedimientos de Entrega entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de Foz de Iguazú, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2010".

52.- Convenio con la República Italiana para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal y su protocolo. (Aprobación)

——Corresponde tratar el asunto que figura en decimonoveno lugar del orden del día.

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 139 del Reglamento, se va a votar si se considera el asunto en cuestión, ya que ingresó a la Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

Se necesitan cincuenta votos conformes.

(Se vota)

——Setenta y seis en setenta y siete: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Convenio con la República Italiana para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal y su protocolo. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1217

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cinco en setenta y siete: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y seis en setenta y siete: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"Artículo único.- Apruébanse el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana para Eliminar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscritos en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1° de marzo de 2019".

53.- Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea América Latina y El Caribe. (Aprobación)

——Corresponde tratar el asunto que figura en el vigésimo lugar del orden del día.

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 139 del Reglamento, se va a votar si se considera el asunto en cuestión, ya que ingresó a la Cámara en los últimos treinta días del período ordinario.

Se necesitan cincuenta votos conformes.

(Se vota)

——Setenta y cinco en setenta y siete: AFIRMATIVA

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea América Latina y El Caribe. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1135

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

Anexo I

(Ver Anexo de Diario de Sesiones)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta y cinco en setenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cuatro en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Groba).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y dos en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"**Artículo único.-** Apruébase el Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el Caribe, aprobado en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores UE-CELAC celebrada entre los días 25 y 26 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana".

——Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Es la hora 20 y 1)

Dra. CECILIA BOTTINO

PRESIDENTA

Sr. Juan Spinoglio

Secretario relator

Dra. Virginia Ortiz

Secretaria redactora

Sra. Mariel Arias

Supervisora general del Cuerpo Técnico de Taquigrafía

Dep. Legal N° 322.569/01
Impreso en la División Ediciones
de la Cámara de Representantes

ANEXO
39ª SESIÓN

DOCUMENTOS

S U M A R I O

1.- Caja Notarial de Seguridad Social. (Se modifica el régimen previsional)

Antecedentes: Rep. N° 1187, de agosto de 2019. Carp. N° 4039 de 2019. Comisión de Seguridad Social.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

2.- Pensiones graciables. (Se reglamenta su otorgamiento)

Antecedentes: Rep. N° 1086, de diciembre de 2018, y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 3552 de 2018. Comisión de Seguridad Social.

— Aprobación. Se comunicará al Senado.

3.- Derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y nutricional de la población. (Establecimiento de un marco jurídico)

Antecedentes: Rep. N° 165, de junio de 2015, y Anexo I, de agosto de 2019. Carp. N° 198 de 2015. Comisión de Población y Desarrollo.

— Aprobación. Se comunicará al Senado.

4.- Detenidos desaparecidos. (Se comete su búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo)

Antecedentes: Rep. N° 1209, de setiembre de 2019. Carp. N° 4130 de 2019. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

5.- Derechos de autor. (Modificación del artículo 29 de la Ley N° 9.739)

Antecedentes: Rep. N° 1112, de marzo de 2019, y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 3742 de 2019. Comisión de Educación y Cultura.

— Aprobación. Se comunicará al Senado.

6.- Libertad vigilada. (Regulación)

Antecedentes: Rep. N° 1208, de setiembre de 2019. Carp. N° 4126 de 2019. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo

7.- Obelisco - Batalla de Las Piedras. (Se designa al Liceo N °3 de la ciudad de Las Piedras)

Antecedentes: Rep. N° 1210 y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 4131 de 2019. Comisión de Educación y Cultura.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

8.- Estatuto del funcionario del Servicio Exterior de la República. (Modificación)

Antecedentes: Rep. N° 1068, de noviembre de 2018, y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 3504 de 2018. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Aprobación en nueva forma. Se comunicará al Senado.

9.- Ejercicio "Tanque 2019". (Se autoriza el ingreso al territorio nacional de hasta tres personal superior y una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina)

Antecedentes: Rep. N° 1215, de setiembre de 2019. Carp. N° 4141 de 2019. Comisión de Defensa Nacional.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

10.- Comercialización de sucedáneos de leche materna. (Regulación)

Antecedentes: Rep. N° 702, de junio de 2017, y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 2062 de 2017. Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

— Aprobación. Se comunicará al Senado.

11.- Casinos en cruceros atracados en aguas territoriales uruguayas. (Funcionamiento)

Antecedentes: Rep. N° 1216, de setiembre de 2019. Carp. N° 4142 de 2019. Comisión de Turismo.

— Aprobación en nueva forma. Se comunicará al Senado.

12.- Código de Ética en la Función Pública. (Se declara de interés general)

Antecedentes: Rep. N° 1100, de diciembre de 2018. Carp. N° 3577 de 2018. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13.- Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales. (Modificaciones a la Ley Nº 15.750)

Antecedentes: Rep. N° 1198, de setiembre de 2019. Carp. N° 4088 de 2019. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14.- Pueblo Cebollatí, departamento de Rocha. (Se declara feriado no laborable el día 28 de octubre de 2019, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación)

Antecedentes: Rep. N° 1212, de setiembre de 2019. Carp. N° 4123 de 2019. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunicará al Senado.

15.- Construcción denominada "Casapueblo". (Se solicita al Poder Ejecutivo la declaración de Monumento Histórico, Artístico y Cultural a través de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación)

Antecedentes: Rep. N° 1218, de setiembre de 2019. Carp. N° 4145 de 2019. Comisión de Educación y Cultura.

— Aprobación. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16.- Servicios de comunicación audiovisual. (Se establecen modificaciones a la Ley Nº 19.307)

Antecedentes: Rep. N° 939, de mayo de 2018, y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 3061 de 2018. Comisión de Industria, Energía y Minería.

— Aprobación. Se comunicará al Senado.

17.- Servicios de comunicación audiovisual. (Modificación de la Ley Nº 19.307)

Antecedentes: Rep. N° 1223, de setiembre de 2019. Carp. N° 4156 de 2019. Comisión de Industria, Energía y Minería.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18.- Empresas Lácteas. (Extensión del período de gracia previsto en el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 19.397)

Antecedentes: Rep. N° 1221, de setiembre de 2019. Carp. N° 4157 de 2019. Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19.- Trabajadores de las empresas Basiney y Anikto S. A. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, por un plazo de ciento ochenta días, el subsidio por desempleo)

Antecedentes: Rep. N° 1220, de setiembre de 2019. Carp. N° 4151 de 2019. Comisión de Legislación del Trabajo.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20.- Convenios de las organizaciones de productores con el Plan Nacional de Silos. (Se autoriza al Poder Ejecutivo a modificar sus condiciones)

Antecedentes: Rep. N° 1222, de setiembre de 2019. Carp. N° 4155 de 2019. Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21.- Ahogamiento. (Se declara como problema de salud pública)

Antecedentes: Rep. N° 1211 y Anexo I, de setiembre de 2019. Carp. N° 4121 de 2019. Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

— Aprobación. Se comunicará al Senado.

22.- Acuerdo sobre la orden Mercosur de detención y procedimientos de entrega entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados. (Aprobación)

Antecedentes: Rep. N° 1225, de setiembre de 2019. Carp. N° 4153 de 2019. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

23.- Convenio con la República Italiana para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal y su protocolo. (Aprobación)

Antecedentes: Rep. N° 1217, de setiembre de 2019. Carp. N° 4146 de 2019. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

24.- Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea - América Latina y El Caribe. (Aprobación)

Antecedentes: Rep. N° 1135, de mayo de 2019. Carp. N° 3849 de 2019. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

REPARTIDO Nº 1187
AGOSTO DE 2019

CARPETA Nº 4039 DE 2019

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Se modifica el régimen previsional

PODER EJECUTIVO

Montevideo, 22 de octubre de 2018

Señora Presidente
de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo que usted preside, a fin de remitir para su consideración, el proyecto de ley que se acompaña, por el que se introducen modificaciones al régimen previsional administrado por la Caja Notarial de Seguridad Social.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro país cuenta con una institucionalidad diversa en materia de seguridad social, integrada básicamente por el Banco de Previsión Social, ente autónomo creado por la Constitución de la República que ampara a la mayor parte de los afiliados, activos y pasivos, los Servicios de Retiros estatales Policial y Militar, dependientes respectivamente del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional y las Cajas paraestatales Bancaria, Profesional y Notarial.

El estatuto previsional del Servicio de Retiros y Pensiones Policiales fue reformado mediante la Ley N° 18.405, de 24 de octubre de 2008; respecto del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, el Poder Ejecutivo ha remitido a la Asamblea General, el 26 de mayo de 2017, un proyecto de ley por el que se adecuan los parámetros de retiro y forma de cálculo de las prestaciones a las particularidades de la profesión militar y a las posibilidades del país.

Por su parte, a nivel de las entidades paraestatales de previsión social hace casi una década se realizó la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, mediante la Ley N° 18.396, de 24 de octubre de 2008, y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, a pesar de haber reformado su carta orgánica en el año 2004 (Ley N° 17.738, de 7 de enero de 2004), se encuentra actualmente en un proceso avanzado de análisis y definición de los lineamientos de una reforma a su estatuto previsional.

La Caja Notarial de Seguridad Social ha realizado en ese sentido un destacable proceso de estudio, análisis, discusión y síntesis con la más amplia participación gremial que honra las más caras tradiciones del notariado.

Es sabido que las raíces de la Caja Notarial se remontan al Estatuto del Colegio de Escribanos del Uruguay de 1875 que proponía: "Establecer el montepío de los escribanos al laudable y previsor objeto de reunir un capital con el consenso de todos los colegiados para atender el socorro de ellos cuando queden inutilizados físicamente, o cuando la vejez les avance en el curso de la vida y les prive dedicarse a su profesión y, también para atender a la viuda pobre, cuyo compañero no le ha dejado suficientes medios de subsistencia". (CASARES, Luis, "125 años después de la primera experiencia de seguridad social. Un modelo de autogestión solidaria", en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Tomo 86, Número Extraordinario, Año 2000, pág. 27).

Ese largo proceso reconoce un punto fundamental con la creación de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, a través de la Ley N° 10.062, de 15 de octubre de 1941. Más cercano en el tiempo, la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, inaugura el proceso de reformas posteriores a la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, en cumplimiento de lo previsto por su artículo 1°.

Ahora bien, como ocurre con todos los sistemas previsionales, resulta necesario evaluar su desempeño y analizar su viabilidad en el mediano y largo plazo, en función de la evolución de sus ingresos y egresos, así como también de las transformaciones que experimenta la composición de la población amparada y los riesgos sociales asociados.

Precisamente, en ese marco, con el ingreso de las autoridades correspondientes al período 2013 - 2017, durante el primer año de mandato del anterior Directorio, se realiza un informe sobre el desempeño del Sistema IVS de los últimos 30 años (1983 - 2013) y sus perspectivas para los próximos 30 años (2013 - 2042).

A partir de esas evaluaciones se advirtieron dificultades en el mediano y largo plazo y se resuelve la contratación de una asesoría para realizar el diagnóstico actuarial del sistema y el estudio de eventuales ajustes para asegurar su equilibrio futuro.

Entre los años 2014 y 2016 se analizan y proyectan un conjunto de modificaciones en los parámetros básicos del sistema que aseguren la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, con un conjunto de medidas que comprendían, entre otras: edad norma) de 65 años, hacia la que se trasladan la tasa mínima del sistema actual (50%) con 35 años de servicios; un esquema de bonificaciones y penalizaciones por anticipo o postergación del retiro; el aumento en las tasas de contribución y mecanismos de movilidad de dicha tasa y la creación de una contribución de los pasivos.

A partir de 2016 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comienza a monitorear y participar más activamente en la última fase del proceso de elaboración y formulación de la propuesta de reforma, al que se incorpora, posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas.

Con la asunción de las autoridades de la Caja Notarial correspondientes al período 2017 - 2021, comienza la difusión con las instituciones gremiales de los afiliados (Asociación de Escribanos del Uruguay, Asociación de Jubilados de la Caja Notarial). Asimismo, se desarrollan encuentros de presentación de las bases de la reforma con los afiliados de Montevideo y de diversas localidades del Interior.

Para su aprobación, en el ámbito de la Caja Notarial, durante los años 2017 y 2018, el Directorio realiza sesiones extraordinarias con la participación de los primeros suplentes de cada miembro y la Comisión Previsional analizando cada una de las posibles modificaciones y el texto que se elevaría al Poder Ejecutivo como anteproyecto de ley. Finalmente, se realizaron las actualizaciones de los estudios actuariales tomando como base las cifras del año 2017 y en el mes de julio de 2018 el Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social aprueba el texto del articulado.

El Poder Ejecutivo valora la madurez del colectivo notarial por haber abordado con seriedad y prudencia la problemática de la Caja, así como por haber encarado con firmeza y voluntad la necesidad de realizar la propuesta que a continuación se explica. El articulado del proyecto de ley que se envía sigue, en los aspectos que aborda, el orden en que aparecen regulados en la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001. Ello implica, como podrá apreciarse, que haya artículos que sustituyen o modifican normas de la Ley N° 17.437 en forma expresa, alternados con otros en que se consagran soluciones

nuevas o modificativas, pero no a través de la sustitución expresa de un texto.

Este último es el caso, por ejemplo, de las modificaciones relativas a causal de jubilación común, asignaciones jubilatorias y régimen de transición de tasas de reemplazo (artículos 15 a 18), para lo cual la técnica de sustitución de artículos de la Ley Nº 17.437 podría resultar confusa e, incluso, imposible, por ejemplo, en el artículo 18, donde se establece un procedimiento de comparación entre el régimen instaurado por "la presente ley" (este proyecto que se está proponiendo) y el previsto en la Ley N° 17.437.

Modificaciones al régimen de causales y asignaciones de pasividad

Causal de jubilación común

A través de los artículos 15 y 16 del proyecto se introducen modificaciones en los requisitos de configuración de la causal de jubilación común, manteniéndose incambiados los relativos a la jubilación por incapacidad y por edad avanzada. En el régimen actualmente vigente para la Caja, a los efectos de configurar causal de jubilación común, se exige contar con 60 años de edad y un mínimo de 35 años de servicios, o de 30 años de servicios si estos fueron prestados en actividades amparadas por la Caja Notarial.

El artículo 15 del proyecto prevé distintas combinaciones entre edad y servicios para configurar la causal común, todas las cuales suponen reunir, entre ambos parámetros, el coeficiente 95: desde 60 de edad y 35 de servicios, hasta 65 años de edad y 30 de servicios.

A su vez, el artículo 16 dispone un régimen de transición para la exigencia de un mínimo de 35 años cuando la causal se configure con 60 años de edad. Vale reiterar que, en el régimen vigente, existe la posibilidad de configurar esa causal a los 60 años con menos de 35 años de servicios -concretamente, con un mínimo de 30-, cuando éstos correspondieran a actividades incluidas en el régimen de la Caja. Por esta última razón, precisamente, en el inciso final del artículo se dispone que, en caso de reunirse menos de 35 años de servicios, por lo menos 30 de esos años deben corresponder a actividades amparadas por la misma.

Asignaciones de jubilación

En el artículo 17 del proyecto se prevé el régimen de cálculo de las distintas asignaciones de jubilación, según la causal correspondiente.

Para ello, como es usual, se aplican distintos porcentajes sobre el sueldo básico jubilatorio (SBJ) respectivo, parámetro éste (el SBJ) que no sufre modificaciones. Tratándose de la asignación de jubilación común (literal A del artículo), se fija una tasa de reemplazo del 50% para el caso de que se reúnan 65 años de edad y 35 años de servicios, y se procede a aplicar adiciones y/o deducciones respecto de ese porcentaje, en la medida que se cuente con más o menos años de edad y/o con más o menos años de servicios.

Así, en el caso de los servicios, se dispone que, para quienes cuenten con 65 o más años de edad, habrá de determinarse cuántos años de servicios tenían a los 65 de edad, y para quienes no tengan esa edad, se determinará cuántos años de servicios habrían

tenido a los 65 si hubieran continuado en actividad. Efectuada esa determinación, se adicionará a aquella tasa de reemplazo del 50% un 1,2% del SBJ por cada año de servicios que exceda de 35, con un tope del 6%, o se deducirá de la misma un 1% del SBJ por cada año menos de los 35 de servicios, con un tope del 5%.

Por su parte, para el caso de la edad se dispone que:

a) A partir de los 65 años, por cada año de edad que se difiera el retiro después de haberse configurado la causal y hasta los 75 años, se adicionará a aquella tasa de reemplazo del 50% un 3% del SBJ, o un 2% si no se hubiera configurado causal, hasta llegar a los 75 años de edad o hasta la configuración de la causal, si esto ocurriere antes;

b) Los referidos porcentajes de 3% y 2% se abatirán al 2% y al 1% respectivamente, para los períodos en que la persona no hubiere desarrollado actividades amparadas por la Caja o acumuladas con las mismas conforme a las normas que así lo autorizan;

c) Por cada año menos de los 65 años de edad en que se produzca el retiro, se deducirá un 3,2% del SBJ.

El artículo prevé, asimismo, que ninguna asignación de jubilación común será inferior al 40% del SBJ.

Por su parte, las asignaciones de jubilación por incapacidad y por edad avanzada se fijan, respectivamente, en el 52% del SBJ, y en el 40% del SBJ más el 1% por cada año que exceda de los 15 años de servicios, con un máximo del 14%. Tal adecuación de las tasas de reemplazo responde a la necesidad de que guarden la debida consistencia con las establecidas para la causal común.

Finalmente, el artículo 18 establece un régimen de transición para un período máximo de 20 años, entre las asignaciones de jubilación común y por edad avanzada correspondientes a la normativa que se sustituye y las resultantes de las nuevas disposiciones en la materia.

Otros ajustes en materia pensionaria

Los artículos 19 a 21 incorporan incisos a tres artículos de la Ley N° 17.437, con el objeto de consagrar, a texto expreso, determinadas soluciones que aseguren la debida racionalidad y congruencia entre los distintos componentes del régimen jubilatorio y pensionario.

Así, el artículo 19 prevé que, para determinar el tope de pensión de sobrevivencia de la persona divorciada -máximo éste constituido por la pensión alimenticia que recibía en vida del causante-, se tengan en cuenta las prestaciones de esa naturaleza que la persona obtuviere en otros organismos de seguridad social, de modo que, consideradas en conjunto, no superen aquel tope.

Por su parte, el artículo 20 prevé que la desaparición de los supuestos que dieron lugar a la existencia de núcleo familiar -por ejemplo, el cumplimiento de 21 años en el caso de los hijos solteros o la recuperación de la capacidad en el caso de los mayores de 21 años absolutamente incapacitados para todo trabajo-, implicará la reliquidación de la asignación de pensión, por ejemplo, de viuda con núcleo familiar a viuda sin núcleo familiar.

Por último, el artículo 21 establece el sueldo básico máximo de pensión, fijándolo en el 75% -el mayor porcentaje de asignación pensionaria previsto por la ley- del sueldo básico máximo previsto en el inciso primero del artículo 67 de la Ley N° 17.437.

Ingresos de la Caja

La necesidad de asegurar la viabilidad económico financiera de la Caja y los debidos equilibrios que han de observarse en la reforma que se propone en este Proyecto, requieren establecer determinados ingresos adicionales a favor de la Caja así como el incremento de otros ya existentes.

En tal sentido, a través del artículo 4° se crea una prestación pecuniaria a favor de la Caja, a cargo de los jubilados y pensionistas de la misma, con diferentes alícuotas según la pasividad corresponda al régimen que se sustituye o al establecido en el proyecto. Así, para las primeras se establece una tasa del 2% sobre las sumas nominales correspondientes a las cédulas jubilatorias y pensionarias, y para las pasividades del nuevo régimen se prevén tasas progresivamente menores, considerando la cantidad de años transcurridos desde la vigencia de la nueva ley hasta la de la jubilación o pensión. Consecuentemente, para las pasividades acordadas conforme al nuevo régimen, la tasa será decreciente según el año de vigencia de cada pasividad, hasta extinguirse para las devengadas a partir del vigésimo año de la entrada en vigencia de la ley. Como se advierte, este dispositivo guarda consonancia con la transición prevista por el artículo 18 del proyecto para las tasas de reemplazo, y reconoce antecedentes, por ejemplo, en la reforma del régimen previsional de la Caja Bancaria consagrado en la Ley N° 18.396, de 24 de octubre de 2008.

Por su parte, el artículo 5° del proyecto prevé una contribución a cargo de los afiliados escribanos activos, a abonarse conjuntamente con el precio de cada hoja de papel notarial o de cada solicitud de soporte notarial electrónico, destinada prioritariamente a sufragar el subsidio por maternidad que se verá más adelante.

El artículo 9°, por su parte, incrementa las tasas de aporte personal jubilatorio de los afiliados activos, hoy establecidas en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 17.437, elevándolas a 18,5% en el caso de los escribanos y a 18% en el de los empleados. La norma sustituye el artículo 30 de la Ley N° 17.437, incluyendo ambas tasas en el mismo, de modo de introducir la solución que se dirá seguidamente como sustitución del artículo 31 de dicha ley.

El artículo 10 sustituye el referido artículo 31, para incorporar un mecanismo automático de incremento o disminución periódicos de las tasas de aportación personal jubilatoria, según exista déficit o superávit operativo bajo ciertas condiciones. Los incrementos o disminuciones pueden producirse a intervalos no menores a los cuatro años, y en magnitudes que no superan los 0,5% puntos porcentuales, fijándose, asimismo, mínimos y máximos a que pueden llegar tales alícuotas.

En materia de aportes patronales, se consagra que no regirá ninguna exoneración de aportes patronales que eventualmente hubiera estado vigente para alguno de los empleadores comprendidos en el régimen de la Caja (artículo 11).

Cabe puntualizar, por último, que el artículo 6° modifica la redacción del artículo 24 de la Ley N° 17.437, referente al patrimonio de la Caja, contemplando los nuevos recursos

previstos en el proyecto así como la supresión de la referencia a la ya derogada contribución al "Fondo Sistema Notarial de Salud".

Subsidio por maternidad

El artículo 23 crea el subsidio de maternidad para las afiliadas amparadas por la Caja Notarial, tomando como referencia el régimen general, adaptado a las particularidades de la actividad.

Asimismo, transfiere al ámbito de la Caja el servicio del subsidio a las afiliadas comprendidas en los literales B), C), D) y E) del artículo 43 de la Ley N° 17.437, conservando las características fundamentales del régimen previsto por la Ley N° 19.161, de 1° de noviembre de 2013.

En tal sentido, el artículo 22 crea dicho fondo, cuyos recursos serán producidos por la prestación de carácter pecuniario establecida por el artículo 5°, esto es, aquella que los afiliados escribanos activos abonan conjuntamente con el precio de cada hoja de papel notarial que adquieren o de cada solicitud de soporte notarial electrónico. Finalmente, el artículo 28 condene un dispositivo según el cual, cuando los recursos de dicho fondo superen el monto actualizado de los subsidios servidos en los dos años anteriores, el excedente podrá destinarse al pago de otras prestaciones a cargo de la Caja o a la realización de las inversiones previstas en la Ley N° 17.437. En suma, el subsidio se sufraga con recursos que la ley destina exclusivamente para ello, los cuales, si superan cierto nivel, pueden ser destinados, sólo en la medida de dicho excedente, a otros servicios o inversiones.

Otras disposiciones

A través del artículo 2º del proyecto se modifica el inciso primero del artículo 14 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre, asimilando su redacción a la de los incisos segundo y tercero del artículo 51 del Código Tributario (CT), de modo de dar cabida a la notificación a persona autorizada por el interesado y también a la notificación por cedulón administrativo en situaciones como las previstas por dicho artículo del CT. Asimismo, el artículo 3° del proyecto incorpora un inciso final al artículo 14 de la Ley Nº 17.437, habilitando la notificación al domicilio electrónico constituido a tales efectos, en los términos que prevé el artículo 696 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. En la misma línea se inscribe el agregado contenido en el artículo 8° del proyecto. El artículo 7° refiere a los gastos de administración del sistema de invalidez, vejez y sobrevivencia, fijados en el 7% de las entradas brutas anuales (artículo 25 de la Ley N° 17.437), y prevé un acotamiento de los mismos, en tanto dispone que tales entradas brutas no comprenderán los recursos establecidos en el artículo 5° del proyecto, esto es, la contribución de los escribanos activos pagadera con la adquisición de papel o soporte notarial. La exclusión de este rubro se entiende pertinente en tanto tiene como destino prioritario la cobertura de una contingencia -la maternidad- que no integra los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia.

El artículo 12 da nueva redacción al inciso primero del artículo 40 de la Ley N° 17.437, incorporando la facultad de suspender la vigencia del certificado previsto en

dicho artículo, cuando el escribano se atrasare en el cumplimiento de sus obligaciones, solución análoga a la prevista para el Banco de Previsión Social por el inciso segundo del artículo 665 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

El artículo 13, por su parte, sustituye el inciso segundo del artículo 44 de la Ley Nº 17.437, atribuyendo al Directorio la determinación del plazo en que el patrono debe denunciar ante la Caja la afiliación y cese de sus empleados, en lugar de la fijación de un plazo fijo y prolongado como el que hoy está consagrado en dicha norma.

El artículo 14, mediante la agregación de un nuevo inciso al artículo 46 de la Ley N° 17.437, regula el tratamiento de las licencias sin goce de sueldo a los efectos del cómputo y la aportación, a través de una solución ponderada que reproduce la establecida por el inciso segundo del artículo 68 de la Ley orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (N° 18.396, de 24 de octubre de 2008).

El artículo 30, por su parte, dispone que la Caja retendrá el aporte personal correspondiente a los subsidios por inactividad compensada que sirve. Se trata de una solución imperante en los restantes subsistemas de seguridad social y absolutamente necesaria y razonable, habida cuenta de que tales subsidios constituyen materia gravada y asignación computable (artículos 29 y 83 de la Ley N° 17.437).

El artículo 31 confiere a las contribuciones personales y patronales establecidas por la ley a favor de la Caja, el mismo tratamiento que, en materia de embargabilidad de remuneraciones, pensiones, jubilaciones y retiros, dispensa el literal a) del numeral 1) del artículo 381 del Código General del Proceso a los aportes personales y patronales al Banco de Previsión Social. Ello, sin perjuicio de dejar a salvo lo previsto en el inciso segundo del artículo 84 de la Ley N° 17.437, en cuanto a la posibilidad de destinarse asignaciones jubilatorias o pensionarias a la cancelación de contribuciones a favor de la Caja, a los efectos de poder acceder a las prestaciones de pasividad que ésta sirve.

El artículo 32 también confiere a los créditos y reclamaciones que afiliados y pensionistas pudieren tener contra la Caja, el mismo tratamiento que la ley le da a tales créditos en el ámbito del Banco de Previsión Social, esto es, la caducidad cuatrienal (artículo 39 de la Ley N° 11.925, de 27 de marzo de 1953 y artículo 22 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991), sin perjuicio de mantenerse la especial disposición al momento del devengo de pasividades para quienes realicen la solicitud transcurridos 180 días desde la configuración de la causal, solución imperante tanto para el BPS (artículo 78 del llamado Acto Institucional Nº 9 de 23 de octubre de 1979), como para la Caja Notarial (artículo 73 de la Ley N° 17.437). Se trata de una solución vigente también para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (artículo 129 de la Ley N° 17.738, de 7 de enero de 2004).

Opciones y vigencia

Como es usual y procedente toda vez que se consagran modificaciones en materia de causales y asignaciones de pasividad, el artículo 33 prevé la posibilidad de optar por el régimen que se modifica a través de los artículos 15 a 18, o por el resultante de la aplicación de dichos artículos, para quienes, sin ser jubilados, hubiesen configurado causal por aquel régimen antes de la vigencia de la nueva ley.

Finalmente, se prevé que la ley entre en vigencia a partir del 1° de enero de 2019 y que las modificaciones al régimen pensionario operen para las pensiones cuya causal se configure con posterioridad a dicha vigencia.

En suma, el Poder Ejecutivo considera que la sanción del proyecto de ley que se remite a la Asamblea General, contribuye a la buena marcha de la Caja Notarial de Segundad Social y afianza su sostenibilidad mediante una equilibrada distribución de los esfuerzos que deberán realizar las diferentes generaciones que conforman el colectivo amparado.

Saluda a ese Cuerpo con la más alta estima y consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
EDUARDO BONOMI
RODOLFO NIN NOVOA
DANILO ASTORI
JORGE MENÉNDEZ
MARÍA JULIA MUÑOZ
VÍCTOR ROSSI
CAROLINA COSSE
ERNESTO MURRO
JORGE BASSO
ENZO BENECH
LILIAM KECHICHIAN
ENEIDA DE LEÓN
MARINA ARISMENDI

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a la Caja Notarial de Seguridad Social y a los colectivos amparados por la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33.

Artículo 2°.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 14 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

"Las resoluciones del Directorio serán notificadas personalmente al interesado o persona autorizada por éste, en las oficinas de la Caja o en el domicilio constituido o conocido. En los casos de notificación a domicilio, de no encontrarse ninguna de dichas personas, así como cuando éstas se negaren a firmar la constancia, se practicará la notificación por cedulón administrativo".

Artículo 3°.- Agrégase como penúltimo inciso del artículo 14 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, con las modificaciones introducidas por el artículo 6° de la Ley N° 18.239, de 27 de diciembre de 2007, el siguiente:

"Las notificaciones de las resoluciones de la Caja podrán practicarse, asimismo, al domicilio electrónico constituido a tales efectos, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que las realizadas conforme a lo previsto en el inciso anterior, inclusive los previstos en el artículo 27 del Código Tributario, siempre que proporcionen seguridad en cuanto a la efectiva realización de la diligencia y a su fecha".

Artículo 4º.- Créase una prestación de carácter pecuniario a favor de la Caja (inciso primero del artículo 1° del Código Tributario), a cargo de los jubilados y pensionistas de la misma, que tendrá las tasas que se establecen a continuación y gravará todas las sumas nominales correspondientes a las cédulas jubilatorias y pensionarias que la Caja abone.

Las tasas de dicha contribución serán:

A) El 2% (dos por ciento) para las jubilaciones, tanto las vigentes como las futuras que se concedan conforme al régimen que se sustituye, y para las pensiones de sobrevivencia cuya causal se haya configurado con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

B) Para las jubilaciones y pensiones concedidas conforme al régimen establecido en la presente ley, dicho porcentaje se abatirá en 1/20 (un veinteavo) por cada año transcurrido desde la vigencia de la presente ley hasta la de la jubilación o pensión, considerándose, para ello, cada año o fracción como años civiles completos, incluido el de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 5°.- Créase una prestación de carácter pecuniario a favor de la Caja (inciso primero del artículo 1º del Código Tributario), a cargo de los afiliados escribanos activos, de:

a) $ 3 (tres pesos uruguayos) por cada hoja de papel notarial que adquieran, suma que se abonará conjuntamente con el precio de dicha hoja;

b) $ 20 (veinte pesos uruguayos) por cada solicitud de soporte notarial electrónico, suma que se abonará conjuntamente con el precio de dicha solicitud electrónica.

Los montos establecidos en el inciso anterior están expresados en valores correspondientes al mes de enero de 2018 y se ajustarán de acuerdo al Índice Medio de Salarios elaborado conforme al artículo 39 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

Artículo 6°.- Sustitúyese la redacción del artículo 24 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por la siguiente:

"El patrimonio de la Caja se integra con:

A) Los bienes, créditos, derechos y acciones que posee actualmente o adquiera en el futuro.

B) Las prestaciones legales de carácter pecuniario en favor de la Caja, a cargo de los afiliados activos y pasivos, y patronos.

C) Las rentas, intereses y beneficios de sus actividades, inversiones y reservas.

D) El producido de sanciones, multas, recargos e intereses que correspondan.

E) Los bienes, recursos y contribuciones que por cualquier título reciba".

Artículo 7º.- Las entradas brutas a que refiere el artículo 25 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001 no comprenderán los recursos establecidos por el artículo 5° de la presente ley.

Artículo 8º.- Agrégase como inciso final del artículo 28 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, en la redacción dada por el artículo 8° de la Ley Nº 18.239, de 27 de diciembre de 2007, el siguiente:

"La referencia al domicilio efectuada en el inciso anterior, comprenderá indistintamente el físico o el electrónico".

Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 30 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

"Las tasas de aportación personal jubilatoria (montepío) sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, serán las siguientes:

A) En el caso de los afiliados escribanos activos, el 18,5% (dieciocho y medio por ciento).

B) En el caso de los afiliados empleados activos, el 18% (dieciocho por ciento)".

Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 31 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

"ARTÍCULO 31.- Cada cuatro años a partir del 1° de enero de 2019, la Caja determinará si en cada uno de esos cuatro años hubo déficit o superávit en el resultado operativo. En caso de que, al menos en tres de esos años, consecutivos o no, se hubiere registrado déficit superior al 4% (cuatro por ciento) del monto de pasividades del año respectivo, o superávit de cualquier magnitud, se aumentarán o disminuirán en 0,5 (cero coma cinco) puntos porcentuales, respectivamente, las tasas a que refiere el artículo anterior, siempre que al cabo del cuatrienio en

cuestión el resultado operativo acumulado en el mismo fuere de igual signo que el correspondiente a aquel período aludido de tres o más años.

El aumento o disminución a que refiere el inciso anterior regirá transcurrido un año a contar de la finalización del cuatrienio de que se trate.

Las tasas resultantes de la aplicación de lo previsto en el inciso primero de este artículo no podrán ser inferiores al 17,5% (diecisiete y medio por ciento) en el caso de los afiliados escribanos activos, o al 17% (diecisiete por ciento) en el caso de los afiliados empleados activos, ni superar el 19,5% (diecinueve y medio por ciento) en el caso de aquéllos o el 19% (diecinueve por ciento) en el caso de estos.

A los efectos de lo previsto en el presente artículo, entiéndese por resultado operativo de un año, la suma percibida en el mismo por concepto de los recursos previstos en los literales B) y D) del artículo 24, menos los egresos por prestaciones que sirve la Caja salvo las sufragadas con cargo al "Fondo Sistema Notarial de Salud", y los gastos de administración a que refiere el artículo 25, correspondientes a ese año".

Artículo 11.- Agrégase como inciso segundo del artículo 33 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"A tales efectos, no regirá ninguna exoneración de aportes patronales que eventualmente hubiere estado vigente".

Artículo 12.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 40 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

"El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás personas públicas, no abonarán a los escribanos retribución alguna sin la exhibición de un certificado expedido por la Caja que acredite hallarse en situación regular de pagos. Este certificado tendrá vigencia anual. No obstante, la Caja podrá suspender la vigencia del mismo toda vez que el escribano se atrasare en el cumplimiento de sus obligaciones".

Artículo 13.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 44 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

"El patrono está obligado a denunciar a la Caja la afiliación y cese de sus empleados en la forma y plazos que determine el Directorio".

Artículo 14.- Agrégase como inciso segundo del artículo 46 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"Los períodos de licencia sin goce de sueldo no constituyen actividad computable, por lo cual no se considerarán tiempo trabajado ni deberán efectuarse contribuciones patronales y personales por ellos. Los lapsos de suspensión sin goce de sueldo o con retención del mismo y los períodos en que se efectúe retención o deducción por aplicación de sanciones o por cualquier otro concepto, serán computados por su totalidad y corresponderá el pago de las contribuciones por los importes nominales que hubiera debido percibir el afiliado".

Artículo 15.- Para configurar causal de jubilación común, se exigirán los siguientes requisitos mínimos de edad y de servicios, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente:

1) Sesenta años de edad y treinta y cinco años de servicios, o

2) sesenta y un años de edad y treinta y cuatro años de servicios, o

3) sesenta y dos años de edad y treinta y tres años de servicios, o

4) sesenta y tres años de edad y treinta y dos años de servicios, o

5) sesenta y cuatro años de edad y treinta y un años de servicios, o

6) sesenta y cinco años de edad y treinta años de servicios.

La causal se configurará aun cuando los mínimos de edad requeridos se alcancen con posterioridad a la fecha del cese en la actividad.

Artículo 16.- Para configurar la causal de jubilación común a los sesenta años de edad (numeral 1 del artículo anterior), se requerirán los siguientes años mínimos de servicios:

1) Treinta y un años de servicios a partir del 1° de enero de 2019;

2) treinta y dos años de servicios a partir del 1° de enero de 2023;

3) treinta y tres años de servicios a partir del 1° de enero de 2027;

4) treinta y cuatro años de servicios a partir del 1° de enero de 2031.

A partir del 1° de enero de 2035 se requerirá un mínimo de treinta y cinco años de servicios.

De los años de servicios referidos en los numerales 1 a 4, por lo menos treinta deberán corresponder a actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social.

Artículo 17.- La asignación de jubilación será el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación, sin perjuicio del régimen de transición establecido en el artículo siguiente:

A) Para la jubilación común:

1) El 50% (cincuenta por ciento) cuando se reúnan sesenta y cinco años de edad y treinta y cinco años de servicios, procediéndose a las siguientes adiciones y/o deducciones respecto de dicha tasa de reemplazo, según la edad y años de servicios con que se contare;

2) En el caso de los servicios, para quienes contaren con sesenta y cinco o más años de edad, deberá determinarse cuántos años de servicios tenían a esa edad, y para quienes no contaren con sesenta y cinco años de edad, deberá determinarse cuántos años de servicios habrían tenido a esa edad de haber continuado en actividad, y procederse del siguiente modo:

a) Por cada año de servicios que exceda de treinta y cinco, se adicionará un 1,2% (uno coma dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio, con un tope del 6% (seis por ciento).

b) Por cada año de servicios inferior a los treinta y cinco, se deducirá un 1% (uno por ciento) del sueldo básico jubilatorio, con un tope del 5% (cinco por ciento).

3) En el caso de la edad:

a) A partir de los sesenta y cinco años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro después de haberse configurado la causal y hasta los setenta y cinco años de edad, se adicionará un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio; si no se hubiera configurado causal, por cada año de edad que supere los sesenta y cinco, se adicionará un 2% (dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio hasta llegar a los setenta y cinco años de edad, o hasta la configuración de la causal, si ésta fuera anterior.

b) Los porcentajes referidos en el literal anterior serán del 2% (dos por ciento) y del 1% (uno por ciento) respectivamente, para los períodos en los que no se desarrollare actividades amparadas por la Caja o acumuladas con las mismas conforme a las normas que así lo autorizan.

c) Por cada año menos de los sesenta y cinco años de edad en que se produzca el retiro, se deducirá un 3,2% (tres coma dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

B) Para la jubilación por incapacidad, el 52% (cincuenta y dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

C) Para la jubilación por edad avanzada, el 40% (cuarenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo por cada año que exceda los quince años de servicios, con un máximo del 14% (catorce por ciento).

En ningún caso, la asignación de jubilación común será inferior al 40% (cuarenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

Artículo 18.- En los casos de jubilación común y de jubilación por edad avanzada, la tasa de reemplazo a aplicar se calculará de la siguiente manera, a los efectos de determinar la correspondiente asignación de jubilación:

A) Se establecerán las respectivas tasas de reemplazo que le hubieren correspondido al afiliado conforme al régimen que se sustituye y al establecido por la presente ley, y se hallará la diferencia entre las mismas.

B) Dicho resultado será dividido entre 20 (veinte) y el cociente obtenido será multiplicado por la cantidad de años transcurridos a partir de la vigencia de la presente ley, con un máximo de 20 (veinte), considerándose, para ello, cada año o fracción como años civiles completos, incluido el de entrada en vigencia de la presente ley.

C) El producto obtenido se restará de la tasa de reemplazo que le hubiere correspondido conforme al régimen que se sustituye, y la diferencia resultante será la tasa de reemplazo aplicable al caso.

D) En caso de que la diferencia a que refiere el literal A) fuere de signo negativo, se aplicará la tasa de reemplazo correspondiente al régimen establecido por la presente ley.

Artículo 19.- Agrégase como inciso segundo del literal A) del artículo 66 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"Para la aplicación del tope de la asignación pensionaria de las personas divorciadas previsto en la parte final del inciso anterior de este literal, se

considerarán las pensiones de sobrevivencia del causante que la persona beneficiaria obtuviere en otros organismos de seguridad social, de modo que, consideradas en conjunto, no excedan el referido tope. A tales efectos, de accederse a más de una pensión de sobrevivencia, se procederá al pago a prorrata en función del monto de cada asignación pensionaria previo a la aplicación del tope".

Artículo 20.- Agrégase como inciso segundo del artículo 70 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"Del mismo modo se procederá en caso de desaparecer los supuestos previstos en el artículo siguiente que hubieren dado lugar a la existencia de núcleo familiar".

Artículo 21.- Agrégase como inciso segundo del artículo 67 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"En los casos de sueldo básico de pensión, no podrá superar el 75% (setenta y cinco por ciento) del primero de los previstos en el inciso anterior".

Artículo 22.- Créase en la Caja Notarial de Seguridad Social el "Fondo de Subsidio por Maternidad", cuyos recursos serán el producido de los ingresos previstos por el artículo 5º.

Artículo 23.- Las afiliadas comprendidas en los literales A), B), C), D) y E) del artículo 43 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, tendrán derecho a un subsidio por maternidad, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

A) Que el embarazo se haya producido en períodos de actividad o de inactividad compensada por la Caja.

B) Que al inicio del período de subsidio se haya mantenido en tales situaciones.

C) Que al momento indicado en el literal anterior, la beneficiaria se encuentre al día con sus aportes a la Caja, en el caso de las no dependientes.

Artículo 24.- Las beneficiarias deberán cesar en su actividad seis semanas antes de la fecha presunta del parto y no podrán reiniciarlo sino hasta ocho semanas después del mismo. No obstante, las beneficiarias autorizadas por la Caja podrán variar los períodos de licencia anteriores, manteniendo el mínimo previsto en el inciso siguiente.

En ningún caso, el período de descanso será inferior a catorce semanas.

Serán de aplicación, asimismo, en lo pertinente, los artículos 3° a 5° de la Ley N° 19.161, de 1° de noviembre de 2013, salvo lo previsto en el inciso tercero del artículo 5° de la mencionada ley.

Artículo 25.- El monto mensual del subsidio por maternidad será:

A) Para las afiliadas comprendidas en el literal A) del artículo 43 de la Ley N° 17.473, de 20 de diciembre de 2001, el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del promedio mensual actualizado de las asignaciones computables del último año civil completo previo al inicio del período de cobertura.

B) Para las afiliadas comprendidas en los literales B), C), D) y E) del artículo 43 de la Ley N° 17.473, de 20 de diciembre de 2001, el equivalente al 100% (cien por ciento) del promedio mensual o diario -según fuere remunerada por mes o por día u hora- de sus asignaciones computables percibidas en los últimos seis

meses, más la cuota parte correspondiente al sueldo anual complementario, licencia y salario vacacional a que hubiere lugar por el periodo de amparo.

La actualización de las asignaciones computables se hará hasta el mes inmediato anterior al comienzo del mencionado período de cobertura, de acuerdo al Índice de los Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

En ningún caso el monto nominal del subsidio será inferior a 2 BPC (dos Bases de Prestaciones y Contribuciones) ni superior a 13,5 BPC (trece y media Bases de Prestaciones y Contribuciones), por mes, o la suma que proporcionalmente correspondiere para períodos menores.

El Directorio de la Caja podrá aumentar o disminuir el máximo indicado en el inciso anterior en hasta 2 BPC, atendiendo a las posibilidades económicas del Fondo previsto en el artículo 22.

Artículo 26.- La solicitud del subsidio por maternidad deberá efectuarse no más allá de las seis semanas previas a la fecha presunta de parto. Si se presentare fuera del plazo antes mencionado, el beneficio se devengará desde la fecha de la solicitud o desde la de inicio del descanso, si ésta fuere posterior a aquélla.

Artículo 27.- Las beneficiadas del subsidio por maternidad no podrán desarrollar actividad remunerada alguna durante los períodos de amparo a dicho beneficio.

La infracción a la presente disposición implicará la pérdida del derecho al cobro del subsidio a partir de ocurrida dicha inobservancia.

Artículo 28.- El subsidio por maternidad se servirá con cargo al Fondo previsto en el artículo 22.

Cuando al 31 de diciembre de determinado año civil los recursos de dicho fondo superaren el monto actualizado del total de subsidios por maternidad servidos en los dos años civiles anteriores, el excedente podrá destinarse al pago de otras prestaciones servidas por la Caja o a la realización de las inversiones previstas en el artículo 28 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, en las condiciones allí dispuestas. La actualización a que refiere el inciso anterior se hará hasta, inclusive, el año civil en que se produzca el mencionado excedente, de acuerdo al Índice de los Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 29.- Los artículos 23 a 28 inclusive entrarán en vigencia el 1° de julio de 2019 y serán de aplicación únicamente para los casos de alumbramientos producidos a partir de dicha fecha.

Artículo 30.- La Caja Notarial de Seguridad Social retendrá el aporte personal correspondiente a los subsidios por inactividad compensada que sirviere.

Artículo 31.- Inclúyense dentro de las deudas a que refiere el literal a) del numeral 1) del artículo 381 del Código General del Proceso, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley N° 19.090, de 14 de junio de 2013, las correspondientes a las contribuciones previstas por el literal B) del artículo 24 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, con las modificaciones introducidas por el artículo 6° de la presente ley, sin perjuicio de lo previsto por el inciso segundo del artículo 84 de la referida Ley Nº 17.437.

Artículo 32.- Los créditos y reclamaciones que los afiliados y pensionistas pudieren tener contra la Caja, de cualquier naturaleza u origen, caducarán de pleno derecho a los cuatro años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles, sin perjuicio de las

caducidades específicamente establecidas en la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001 y en la presente ley.

Esta caducidad operará por períodos mensuales y su curso se suspenderá hasta la resolución definitiva, por toda gestión fundada del interesado en vía administrativa o jurisdiccional.

Artículo 33.- Podrán optar por quedar comprendidos en el régimen de causales y asignaciones que se modifica a través de los artículos 15 a 18 de la presente ley, o en el resultante de la aplicación de dichos artículos, los afiliados que, sin ser jubilados, hubiesen configurado causal de jubilación por el régimen legal indicado en primer término antes de la vigencia de esta ley.

Artículo 34.- Las modificaciones al régimen pensionario previstas por la presente ley regirán para las pensiones cuya causal se configure con posterioridad a su vigencia.

Artículo 35.- La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero de 2019, salvo lo dispuesto en el artículo 29.

Artículo 36.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a lo previsto por la presente ley.

Montevideo, 22 de octubre de 2018

EDUARDO BONOMI
RODOLFO NIN NOVOA
DANILO ASTORI
JORGE MENÉNDEZ
MARÍA JULIA MUÑOZ
VÍCTOR ROSSI
CAROLINA COSSE
ERNESTO MURRO
JORGE BASSO
ENZO BENECH
LILIAM KECHICHIAN
ENEIDA DE LEÓN
MARINA ARISMENDI

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a la Caja Notarial de Seguridad Social y a los colectivos amparados por la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 de la presente norma.

Artículo 2º.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 14 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

"Las resoluciones del Directorio serán notificadas personalmente al interesado o persona autorizada por este, en las oficinas de la Caja o en el domicilio constituido o conocido. En los casos de notificación a domicilio, de no encontrarse ninguna de dichas personas, así como cuando estas se negaren a firmar la constancia, se practicará la notificación por cedulón administrativo".

Artículo 3º.- Agrégase como último inciso del artículo 14 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"Las notificaciones de las resoluciones de la Caja podrán practicarse, asimismo, al domicilio electrónico constituido a tales efectos, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que las realizadas conforme a lo previsto en el inciso primero, inclusive los previstos en el artículo 27 del Código Tributario, siempre que proporcionen seguridad en cuanto a la efectiva realización de la diligencia y a su fecha".

Artículo 4º.- Créase una prestación de carácter pecuniario a favor de la Caja (inciso primero del artículo 1º del Código Tributario), a cargo de los jubilados y pensionistas de la misma, que tendrá las tasas que se establecen a continuación y gravará todas las sumas nominales correspondientes a las cédulas jubilatorias y pensionarias que la Caja abone.

Las tasas de dicha contribución serán:

A) el 2% (dos por ciento) para las jubilaciones, tanto las vigentes como las futuras que se concedan conforme al régimen que se sustituye, y para las pensiones de sobrevivencia cuya causal se haya configurado con anterioridad a la vigencia de la presente ley;

B) para las jubilaciones y pensiones concedidas conforme al régimen establecido en la presente ley, dicho porcentaje se abatirá en 1/20 (un veinteavo) por cada año transcurrido desde la vigencia de la presente ley hasta la de la jubilación o pensión, considerándose, para ello, cada año o

fracción como años civiles completos, incluido el de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 5º.- Créase una prestación de carácter pecuniario a favor de la Caja (inciso primero del artículo 1º del Código Tributario), a cargo de los afiliados escribanos activos, de:

A) $ 3 (tres pesos uruguayos) por cada hoja de papel notarial que adquieran, suma que se abonará conjuntamente con el precio de dicha hoja;

B) $ 20 (veinte pesos uruguayos) por cada solicitud de soporte notarial electrónico, suma que se abonará conjuntamente con el precio de dicha solicitud electrónica.

Los montos establecidos en el inciso anterior están expresados en valores correspondientes al mes de enero de 2018 y se ajustarán de acuerdo al Índice Medio de Salarios elaborado conforme al artículo 39 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

Artículo 6º.- Sustitúyese la redacción del artículo 24 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por la siguiente:

"ARTÍCULO 24.- El patrimonio de la Caja se integra con:

A) Los bienes, créditos, derechos y acciones que posee actualmente o adquiera en el futuro.

B) Las prestaciones legales de carácter pecuniario en favor de la Caja, a cargo de los afiliados activos y pasivos, y patronos.

C) Las rentas, intereses y beneficios de sus actividades, inversiones y reservas.

D) El producido de sanciones, multas, recargos e intereses que correspondan.

E) Los bienes, recursos y contribuciones que por cualquier título reciba".

Artículo 7º.- Las entradas brutas a que refiere el artículo 25 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001 no comprenderán los recursos establecidos por el artículo 5º de la presente ley.

Artículo 8º.- Agrégase como inciso final del artículo 28 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, en la redacción dada por el artículo 8º de la Ley Nº 18.239, de 27 de diciembre de 2007, el siguiente:

"La referencia al domicilio efectuada en el inciso anterior, comprenderá indistintamente el físico o el electrónico".

Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 30 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

"ARTÍCULO 30.- Las tasas de aportación personal jubilatoria (Montepío) sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, serán las siguientes:

A) en el caso de los afiliados escribanos activos, el 18,5% (dieciocho y medio por ciento);

B) en el caso de los afiliados empleados activos, el 18% (dieciocho por ciento)".

Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 31 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

"ARTÍCULO 31.- Cada cuatro años a partir del 1º de enero de 2020, la Caja determinará si en cada uno de esos cuatro años hubo déficit o superávit en el resultado operativo. En caso de que, al menos en tres de esos años, consecutivos o no, se hubiere registrado déficit superior al 4% (cuatro por ciento) del monto de pasividades del año respectivo, o superávit de cualquier magnitud, se aumentarán o disminuirán en 0,5 (cero coma cinco) puntos porcentuales, respectivamente, las tasas a que refiere el artículo anterior, siempre que al cabo del cuatrienio en cuestión el resultado operativo acumulado en el mismo fuere de igual signo que el correspondiente a aquel período aludido de tres o más años.

El aumento o disminución a que refiere el inciso anterior regirá transcurrido un año a contar de la finalización del cuatrienio de que se trate.

Las tasas resultantes de la aplicación de lo previsto en el inciso primero de este artículo no podrán ser inferiores al 17,5% (diecisiete y medio por ciento) en el caso de los afiliados escribanos activos, o al 17% (diecisiete por ciento) en el caso de los afiliados empleados activos, ni superar el 19,5% (diecinueve y medio por ciento) en el caso de aquellos o el 19% (diecinueve por ciento) en el caso de estos.

A los efectos de lo previsto en el presente artículo, entiéndese por resultado operativo de un año, la suma percibida en el mismo por concepto de los recursos previstos en los literales B) y D) del artículo 24, menos los egresos por prestaciones que sirve la Caja salvo las sufragadas con cargo al "Fondo Sistema Notarial de Salud", y los gastos de administración a que refiere el artículo 25, correspondientes a ese año".

Artículo 11.- Agrégase como inciso segundo del artículo 33 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"A tales efectos, no regirá ninguna exoneración de aportes patronales que eventualmente hubiere estado vigente".

Artículo 12.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 40 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

> "El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás personas públicas, no abonarán a los escribanos retribución alguna sin la exhibición de un certificado expedido por la Caja que acredite hallarse en situación regular de pagos. Este certificado tendrá vigencia anual. No obstante, la Caja podrá suspender la vigencia del mismo toda vez que el escribano se atrasare en el cumplimiento de sus obligaciones".

Artículo 13.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 44 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, por el siguiente:

> "El patrono está obligado a denunciar a la Caja la afiliación y cese de sus empleados en la forma y plazos que determine el Directorio".

Artículo 14.- Agrégase como inciso segundo del artículo 46 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

> "Los períodos de licencia sin goce de sueldo no constituyen actividad computable, por lo cual no se considerarán tiempo trabajado ni deberán efectuarse contribuciones patronales y personales por ellos. Los lapsos de suspensión sin goce de sueldo o con retención del mismo y los períodos en que se efectúe retención o deducción por aplicación de sanciones o por cualquier otro concepto, serán computados por su totalidad y corresponderá el pago de las contribuciones por los importes nominales que hubiera debido percibir el afiliado".

Artículo 15.- Para configurar causal de jubilación común, se exigirán los siguientes requisitos mínimos de edad y de servicios, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente:

1) sesenta años de edad y treinta y cinco años de servicios, o

2) sesenta y un años de edad y treinta y cuatro años de servicios, o

3) sesenta y dos años de edad y treinta y tres años de servicios, o

4) sesenta y tres años de edad y treinta y dos años de servicios, o

5) sesenta y cuatro años de edad y treinta y un años de servicios, o

6) sesenta y cinco años de edad y treinta años de servicios.

La causal se configurará aun cuando los mínimos de edad requeridos se alcancen con posterioridad a la fecha del cese en la actividad.

Artículo 16.- Para configurar la causal de jubilación común a los sesenta años de edad (numeral 1) del artículo anterior), se requerirán los siguientes años mínimos de servicios:

1) treinta y un años de servicios a partir del 1° de enero de 2020;

2) treinta y dos años de servicios a partir del 1° de enero de 2024;

3) treinta y tres años de servicios a partir del 1° de enero de 2028;

4) treinta y cuatro años de servicios a partir del 1° de enero de 2032.

A partir del 1° de enero de 2036 se requerirá un mínimo de treinta y cinco años de servicios.

De los años de servicios referidos en los numerales 1) a 4), por lo menos treinta deberán corresponder a actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social.

Artículo 17.- La asignación de jubilación será el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación, sin perjuicio del régimen de transición establecido en el artículo siguiente:

A) para la jubilación común:

1) el 50% (cincuenta por ciento) cuando se reúnan sesenta y cinco años de edad y treinta y cinco años de servicios, procediéndose a las siguientes adiciones y deducciones respecto de dicha tasa de reemplazo, según la edad y años de servicios con que se contare;

2) en el caso de los servicios, para quienes contaren con sesenta y cinco o más años de edad, deberá determinarse cuántos años de servicios tenían a esa edad, y para quienes no contaren con sesenta y cinco años de edad, deberá determinarse cuántos años de servicios habrían tenido a esa edad de haber continuado en actividad, y procederse del siguiente modo:

   a. por cada año de servicios que exceda de treinta y cinco, se adicionará un 1,2% (uno coma dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio, con un tope del 6% (seis por ciento);

   b. por cada año de servicios inferior a los treinta y cinco, se deducirá un 1% (uno por ciento) del sueldo básico jubilatorio, con un tope del 5% (cinco por ciento);

3) en el caso de la edad:

   a. a partir de los sesenta y cinco años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro después de haberse configurado la causal y hasta los setenta y cinco años de edad, se adicionará un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio; si no se hubiera configurado causal, por cada año de edad que supere los sesenta y cinco, se adicionará un 2% (dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio hasta llegar a los setenta y cinco años de edad, o hasta la configuración de la causal, si esta fuera anterior;

b. los porcentajes referidos en el literal anterior serán del 2% (dos por ciento) y del 1% (uno por ciento) respectivamente, para los períodos en los que no se desarrollaren actividades amparadas por la Caja o acumuladas con las mismas conforme a las normas que así lo autorizan;

c. por cada año menos de los sesenta y cinco años de edad en que se produzca el retiro, se deducirá un 3,2% (tres con dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio;

B) para la jubilación por incapacidad, el 52% (cincuenta y dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio;

C) para la jubilación por edad avanzada, el 40% (cuarenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo por cada año que exceda los quince años de servicios, con un máximo del 14% (catorce por ciento).

En ningún caso, la asignación de jubilación común será inferior al 40% (cuarenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

Artículo 18.- En los casos de jubilación común y de jubilación por edad avanzada, la tasa de reemplazo a aplicar se calculará de la siguiente manera, a los efectos de determinar la correspondiente asignación de jubilación:

A) se establecerán las respectivas tasas de reemplazo que le hubieren correspondido al afiliado conforme al régimen que se sustituye y al establecido por la presente ley, y se hallará la diferencia entre las mismas;

B) dicho resultado será dividido entre 20 (veinte) y el cociente obtenido será multiplicado por la cantidad de años transcurridos a partir de la vigencia de la presente ley, con un máximo de 20 (veinte), considerándose, para ello, cada año o fracción como años civiles completos, incluido el de entrada en vigencia de la presente ley;

C) el producto obtenido se restará de la tasa de reemplazo que le hubiere correspondido conforme al régimen que se sustituye, y la diferencia resultante será la tasa de reemplazo aplicable al caso;

D) en caso de que la diferencia a que refiere el literal A) fuere de signo negativo, se aplicará la tasa de reemplazo correspondiente al régimen establecido por la presente ley.

Artículo 19.- Agrégase como inciso segundo del literal A) del artículo 66 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"Para la aplicación del tope de la asignación pensionaria de las personas divorciadas previsto en la parte final del inciso anterior de este literal, se considerarán las pensiones de sobrevivencia del causante que la persona beneficiaria obtuviere en otros organismos de seguridad social, de modo que, consideradas en conjunto, no excedan el referido tope. A tales efectos, de accederse a más de una pensión de sobrevivencia, se procederá al pago a prorrata en función del monto de cada asignación pensionaria previo a la aplicación del tope".

Artículo 20.- Agrégase como inciso segundo del artículo 70 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"Del mismo modo se procederá en caso de desaparecer los supuestos previstos en el artículo siguiente que hubieren dado lugar a la existencia de núcleo familiar".

Artículo 21.- Agrégase como inciso segundo del artículo 67 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el siguiente:

"En los casos de sueldo básico de pensión, no podrá superar el 75% (setenta y cinco por ciento) del primero de los previstos en el inciso anterior".

Artículo 22.- Créase en la Caja Notarial de Seguridad Social el "Fondo de Subsidio por Maternidad", cuyos recursos serán el producido de los ingresos previstos por el artículo 5º de la presente ley.

Artículo 23.- Las afiliadas comprendidas en los literales A), B), C), D) y E) del artículo 43 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, tendrán derecho a un subsidio por maternidad, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

A) que el embarazo se haya producido en períodos de actividad o de inactividad compensada por la Caja;

B) que al inicio del período de subsidio se haya mantenido en tales situaciones;

C) que, al momento indicado en el literal anterior, la beneficiaria se encuentre al día con sus aportes a la Caja, en el caso de las no dependientes.

Artículo 24.- Las beneficiarias deberán cesar en su actividad seis semanas antes de la fecha presunta del parto y no podrán reiniciarla sino hasta ocho semanas después del mismo. No obstante, las beneficiarias autorizadas por la Caja podrán variar los períodos de licencia anteriores, manteniendo el mínimo previsto en el inciso siguiente.

En ningún caso, el período de descanso será inferior a catorce semanas.

Serán de aplicación, asimismo, en lo pertinente, los artículos 3º a 5º de la Ley Nº 19.161, de 1º de noviembre de 2013, salvo lo previsto en el inciso tercero del artículo 5º de la mencionada ley.

Artículo 25.- El monto mensual del subsidio por maternidad será:

A) para las afiliadas comprendidas en el literal A) del artículo 43 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del promedio mensual actualizado de las asignaciones computables del último año civil completo previo al inicio del período de cobertura;

B) para las afiliadas comprendidas en los literales B), C), D) y E) del artículo 43 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, el equivalente al 100% (cien por ciento) del promedio mensual o diario -según fuere remunerada por mes o por día u hora- de sus asignaciones computables percibidas en los últimos seis meses, más la cuota parte correspondiente al sueldo anual complementario, licencia y salario vacacional a que hubiere lugar por el período de amparo.

La actualización de las asignaciones computables se hará hasta el mes inmediato anterior al comienzo del mencionado período de cobertura, de acuerdo al índice de los precios al consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

En ningún caso el monto nominal del subsidio será inferior a 2 BPC (dos Bases de Prestaciones y Contribuciones) ni superior a 13,5 BPC (trece y media Bases de Prestaciones y Contribuciones), por mes, o la suma que proporcionalmente correspondiere para períodos menores.

El Directorio de la Caja podrá aumentar o disminuir el máximo indicado en el inciso anterior en hasta 2 BPC (dos Bases de Prestaciones y Contribuciones), atendiendo a las posibilidades económicas del Fondo previsto en el artículo 22 de la presente ley.

Artículo 26.- La solicitud del subsidio por maternidad deberá efectuarse no más allá de las seis semanas previas a la fecha presunta de parto. Si se presentare fuera del plazo antes mencionado, el beneficio se devengará desde la fecha de la solicitud o desde la de inicio del descanso, si esta fuere posterior a aquella.

Artículo 27.- Las beneficiarias del subsidio por maternidad no podrán desarrollar actividad remunerada alguna durante los períodos de amparo a dicho beneficio.

La infracción a la presente disposición implicará la pérdida del derecho al cobro del subsidio a partir de ocurrida dicha inobservancia.

Artículo 28.- El subsidio por maternidad se servirá con cargo al Fondo previsto en el artículo 22 de la presente ley.

Cuando al 31 de diciembre de determinado año civil los recursos de dicho Fondo superaren el monto actualizado del total de subsidios por maternidad servidos en los dos años civiles anteriores, el excedente podrá destinarse al pago de otras prestaciones servidas por la Caja o a la realización de las inversiones previstas en el artículo 28 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, en las condiciones allí dispuestas.

La actualización a que refiere el inciso anterior se hará hasta, inclusive, el año civil en que se produzca el mencionado excedente, de acuerdo al índice de los precios al consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 29.- Los artículos 23 a 28 de la presente ley inclusive entrarán en vigencia el 1º de julio de 2020 y serán de aplicación únicamente para los casos de alumbramientos producidos a partir de dicha fecha.

Artículo 30.- La Caja Notarial de Seguridad Social retendrá el aporte personal correspondiente a los subsidios por inactividad compensada que sirviere.

Artículo 31.- Inclúyense dentro de las deudas a que refiere el literal a) del numeral 1) del artículo 381 del Código General del Proceso, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 19.090, de 14 de junio de 2013, las correspondientes a las contribuciones previstas por el literal B) del artículo 24 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, con las modificaciones introducidas por el artículo 6º de la presente ley, sin perjuicio de lo previsto por el inciso segundo del artículo 84 de la referida Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001.

Artículo 32.- Los créditos y reclamaciones que los afiliados y pensionistas pudieren tener contra la Caja, de cualquier naturaleza u origen, caducarán de pleno derecho a los cuatro años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles, sin perjuicio de las caducidades específicamente establecidas en la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001 y en la presente ley.

Esta caducidad operará por períodos mensuales y su curso se suspenderá hasta la resolución definitiva, por toda gestión fundada del interesado en vía administrativa o jurisdiccional.

Artículo 33.- Podrán optar por quedar comprendidos en el régimen de causales y asignaciones que se modifica a través de los artículos 15 a 18 de la presente ley, o en el resultante de la aplicación de dichos artículos, los afiliados que, sin ser jubilados, hubiesen configurado causal de jubilación por el régimen legal indicado en primer término antes de la vigencia de esta ley.

Artículo 34.- Las modificaciones al régimen pensionario previstas por la presente ley regirán para las pensiones cuya causal se configure con posterioridad a su vigencia.

Artículo 35.- La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero de 2020, salvo lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley.

Artículo 36.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a lo previsto por la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 7 de agosto de 2019.

LUCÍA TOPOLANSKY
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

=

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

REPARTIDO Nº 1086
DICIEMBRE DE 2018

CARPETA Nº 3552 DE 2018

PENSIONES GRACIABLES

Se reglamenta su otorgamiento

- 1 -

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Las pensiones graciables a que refiere el artículo 85 numeral 13 y articulo 111 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay serán otorgadas por ley conforme a los requisitos que se determinan en los artículos siguientes.

Artículo 2º.- Las pensiones graciables son recompensas económicas que se otorgan a aquellas personas que han aportado servicios al país en las distintas áreas de la actividad científica, artística, deportiva, cultural o social, en beneficio de la sociedad y carezcan de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.

Artículo 3º.- El beneficio de la pensión graciable será acordado únicamente a las personas que reúnan los siguientes requisitos:

A) Los ciudadanos naturales o legales de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país, que carezcan de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.

B) Haber aportado servicios al país en forma significativa y perdurable en las distintas áreas de la actividad científica, artística, deportiva, cultural o social, siempre que no hayan recibido una recompensa económica por parte del Estado por los mismos servicios.

C) Tener sesenta años de edad al momento de la solicitud, salvo que se trate de una persona con discapacidad.

D) Ser cónyuge supérstite o concubino reconocido judicialmente, con sesenta años de edad, descendiente en primer grado sin límite de edad para el caso de ser una persona con discapacidad, de las personas que se encuentran comprendidas en los literales anteriores.

Artículo 4º.- A los efectos de la presente ley una persona se encuentra en situación de “carencia de recursos para subvenir a sus necesidades vitales” toda vez que sus ingresos personales de cualquier naturaleza no superen el monto de cuatro (4) Bases de Prestaciones y Contribuciones.

Excepcionalmente se podrá considerar a los efectos de determinar que no se configura la hipótesis descripta en el inciso que antecede los ingresos totales del hogar, las condiciones habitacionales y del entorno, composiciones del hogar, características de sus integrantes y situación sanitaria.

Artículo 5º.- Créase una Comisión Permanente en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura la que tendrá como cometido el análisis y tratamiento de las solicitudes de Pensiones Graciables, a nivel del Poder Ejecutivo.

Dicha comisión se integrará con un representante del Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Secretaria Nacional de Deportes, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y un representante del Banco de Previsión Social.

La misma deberá integrarse dentro del plazo de 90 (noventa) días a partir de la promulgación de la presente ley.

Sus miembros durarán en sus funciones cinco años o hasta la designación de sus nuevos integrantes.

La Comisión Permanente tendrá las más amplias facultades para el estudio, seguimiento y envío a consideración del Poder Ejecutivo de las solicitudes respectivas.

Los informes que dispongan favorablemente el envío al Poder Ejecutivo de las solicitudes de pensión graciable que se formulen, deberán ser adoptados por la Comisión por mayoría de sus integrantes.

La Comisión a través del Ministerio de Educación y Cultura reglamentará su forma de funcionamiento y procedimiento para el tratamiento de las solicitudes.

Artículo 6º.- Cuando se promueva por cualquier persona, física o jurídica, el otorgamiento de una pensión graciable, deberá acreditarse fehacientemente el cumplimiento de las condiciones requeridas en los artículos 2º, 3º y 4º de la presente ley, acompañando la siguiente documentación.

A) Enunciación de los méritos reunidos en las distintas áreas de la actividad científica, artística, deportiva, cultural o social, debiendo estar adecuadamente fundada y justificada haciendo posible su evaluación y probanza.

B) Para el caso de los deportistas además del requisito anterior, se deberá acreditar haber representado al país en los Campeonatos Mundiales, Campeonatos Sudamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Parapanamericanos, Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos y obtenido los siguientes logros en: deportes colectivos haber obtenido el título de Campeón, haber llegado al podium en los Juegos Olímpicos y Medalla de Oro en los demás casos en: deportes individuales haber llegado al podium en los Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos y Medalla de Oro en Campeonatos Sudamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos.

C) Documentación de acuerdo a la normativa vigente que permita acreditar el vínculo de parentesco que corresponda de acuerdo al literal D) del artículo 3º de la presente ley.

D) Certificados que correspondan de acuerdo a las leyes vigentes a los efectos de acreditar la discapacidad.

E) Fotocopia fiel del documento de identidad y declaración jurada de ingresos personales, certificada por escribano o contador público.

Artículo 7º.- La documentación antes referida deberá ser presentada ante la Comisión para el tratamiento de las pensiones graciables y esta la derivará a:

1) Al Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que realice las comprobaciones e inspecciones que estime necesarias a fin de verificar la situación del peticionante de acuerdo a lo preceptuado en el literal A) del artículo 3° y artículo 4° de la presente ley.

2) A los efectos de determinar los aportes en las áreas de la actividad científica, artística, deportiva o cultural, dependiendo del caso se derivará con el fin de escuchar una opinión técnica a la Academia Nacional de Ciencias, Academia Nacional de Letras, Academia Nacional de Medicina, Dirección Nacional de Cultura y Secretaría Nacional de Deportes.

3) La institución pública que la Comisión entienda competente en la solicitud a estudio debidamente fundamentado.

Artículo 8º.- Una vez recabados los dictámenes referidos en el artículo que antecede la Comisión para el tratamiento de las pensiones graciables se expedirá por medio de un informe definitivo, esta deberá tener especial consideración a la hora de expedirse la conducta del solicitante, pues sin incurrir en ningún tipo de discriminación, no se deberá conceder una pensión graciable a quienes hayan incurrido en hechos delictivos o propiciado públicamente el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Artículo 9º.- El informe definitivo de la Comisión para el tratamiento de las pensiones graciables no tendrá el carácter vinculante y será elevado junto con toda la documentación reunida a consideración del Poder Ejecutivo quien decidirá en definitiva si se promueve o no el otorgamiento de la pensión graciable solicitada.

Artículo 10.- El monto de las pensiones graciables no será inferior a 4 (cuatro) Bases de Prestaciones y Contribuciones y en ningún caso serán superiores al equivalente a seis (6) Bases de Prestaciones y Contribuciones.

En el caso de que coexista más de un beneficiario para una misma pensión graciable se deberá fijar un monto cuya distribución en cuotas iguales no sea inferior a 3 (tres) Bases de Prestaciones y Contribuciones.

Artículo 11.- Las pensiones graciables son compatibles con toda otra asignación que se perciba por concepto de actividad o pasividad siempre y cuando las mismas no superen los límites establecidos en el artículo 4° de la presente ley.

Artículo 12.- El beneficio de la pensión graciable se extinguirá de pleno derecho por las siguientes causas:

A) Muerte del beneficiario.

B) Por haber desaparecido alguno de los requisitos establecidos en los artículos 3º y 4º que motivó el otorgamiento del beneficio, comprobarse dolo en la documentación agregada o haber incurrido en alguna de las conductas a que se hace referencia en el artículo 8º de la presente ley.

Artículo 13.- La erogación resultante del servicio de las pensiones graciables será de cargo de Rentas Generales.

Artículo 14.- Las disposiciones de la presente ley no afectarán a las pensiones graciables ya acordadas por el parlamento nacional a la fecha de su promulgación.

Artículo 15.- Deróganse las siguientes leyes, Ley Nº 16.007, de 29 de noviembre de 1988, Ley Nº 16.301, de 9 de setiembre de 1992, Ley Nº 17.968, de 29 de mayo de 2006 en la redacción dada por los artículos 133 y 134 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006.

Montevideo, 5 de diciembre de 2018

MARGARITA LIBSCHITZ
REPRESENTANTE POR CANELONES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley pretende ajustar los mecanismos y criterios actuales de otorgamiento de las pensiones graciables previstos en la Ley Nº 16.301 y Nº 17.968.

Consideramos importante modificar determinados aspectos de la normativa vigente, tendiente a generar un instrumento más justo e igualitario, que beneficie concretamente a aquella persona que realmente necesite de tal prestación, considerando para ello los méritos y las necesidades económicas del solicitante.

Dentro de las modificaciones que se proponen se destacan fundamentalmente el artículo 4º, el que determina cuando una persona se encuentra en carencia de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.

El artículo 6º especifica determinadas condiciones que debe acreditar fehacientemente quien pretenda el otorgamiento de la referida pensión.

Otro artículo que consideramos de gran trascendencia es el 10, el mismo determina el monto de las pensiones graciables, siendo de 6 (seis) Bases de Prestaciones y Contribuciones.

Por último debemos mencionar el artículo 12, dicha norma establece que el beneficio de la pensión graciable se extingue de pleno derecho por determinadas causas: la muerte del beneficiario, por haber desaparecido alguno de los requisitos por los cuales le fue otorgada la prestación, por comprobarse dolo en la documentación agregada o por incurrir en alguna de las conductas a que se hace referencia en el artículo 8º.

En definitiva, se encomienda la aprobación del presente proyecto de ley, el que consideramos esencial a los efectos de generar criterios más igualitarios y justos a la hora de conceder una pensión graciable.

Montevideo, 5 de diciembre de 2018

MARGARITA LIBSCHITZ
REPRESENTANTE POR CANELONES

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO I AL
REPARTIDO Nº 1086
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 3552 DE 2018

PENSIONES GRACIABLES

Se reglamenta su otorgamiento

I n f o r m e

COMISIÓN DE
SEGURIDAD SOCIAL

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes tiene el honor de dirigirse a este alto Cuerpo con el objeto de someter a su consideración el presente proyecto de ley el cual fue remitido a estudio de esta Asesora el día 5 de diciembre de 2018.

Este proyecto de ley pretende ajustar los mecanismos y criterios actuales de otorgamiento de las pensiones graciables previstos en las Leyes Nos. 16.301 de 9 de setiembre de 1992 y 17.968 de 29 de mayo de 2006.

Consideramos importante modificar determinados aspectos de la normativa vigente, tendiente a generar un instrumento más justo e igualitario que beneficie concretamente a aquella persona que realmente necesite de tal prestación, considerando para ello los méritos y las necesidades económicas del solicitante.

Dentro de las modificaciones que se proponen se destacan fundamentalmente:

A) el literal c) del artículo 3° el cual requiere tener sesenta años de edad al momento de la solicitud, a excepción de tratarse de una persona con discapacidad comprobada.

B) Artículo 4°, el que determina cuando una persona se encuentra en carencia de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.

C) Artículo 6°, que establece en forma expresa las condiciones que debe acreditar fehacientemente quien pretenda el otorgamiento de una pensión graciable.

D) Artículo 12, en donde se establecen las causas por las cuales se extingue una pensión graciable.

Por tanto, se encomienda al plenario la aprobación del presente proyecto de ley que se informa, el que consideramos esencial a los efectos de generar criterios más igualitarios y justos a la hora de conceder una pensión graciable.

Sala de la Comisión, 3 de setiembre de 2019

WASHINGTON SILVERA
MIEMBRO INFORMANTE
GRACIELA MATIAUDA ESPINO

A P É N D I C E

Disposiciones referidas

Artículo referente

Artículo 85 numeral 13 y artículo 111 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay

SECCIÓN V - DEL PODER LEGISLATIVO
CAPÍTULO I

Artículo 85

13) Crear o suprimir empleos públicos, determinando sus dotaciones o retiros, y aprobar, reprobar o disminuir los presupuestos que presente el Poder Ejecutivo; acordar pensiones y recompensas pecuniarias o de otra clase y decretar honores públicos a los grandes servicios.

Artículo referente: 1°

SECCIÓN VI - DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
CAPÍTULO II

Artículo 111

Las pensiones graciables serán resueltas mediante el voto secreto y requerirán la conformidad de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.

Los reglamentos de cada Cámara podrán establecer el voto secreto para los casos de venias y designaciones.

Artículo referente: 1°

Ley Nº 16.007, de 29 de noviembre de 1988

Artículo 1°

Las Pensiones Graciables otorgadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 numeral 13 de la Constitución de la República en ningún caso serán inferiores al equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo referente: 15

Ley Nº 16.301, de 9 de setiembre de 1992

Artículo 1°

Las pensiones graciables a que refiere el artículo 85, numeral 13, de la Constitución de la República, constituyen un beneficio personal de carácter económico que sólo se acordará en las condiciones previstas en el artículo siguiente, a quiénes carecieren de recursos propios suficientes.

Artículo referente: 15

Ley Nº 17.968, de 29 de mayo de 2006

Artículo 1°

Créase una Comisión Permanente en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura para el tratamiento de las pensiones graciables a nivel del Poder Ejecutivo.

Dicha Comisión se integrará con un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que la presidirá, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un representante del Ministerio de Turismo y Deporte y un representante del Banco de Previsión Social.

La misma deberá integrarse dentro del plazo de 90 días de promulgada la presente ley.

Artículo referente: 15

=

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

REPARTIDO Nº 165
JUNIO DE 2015

CARPETA Nº 198 DE 2015

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN

Establecimiento de un marco jurídico

- 1 -

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. (Objeto de la ley).- El objeto de la presente ley es establecer un marco jurídico de referencia, que permita a cada Estado establecer políticas y estrategias para garantizar de manera permanente y con carácter de prioridad nacional "El Derecho a la Alimentación", la seguridad alimentaria y nutricional de la población, para el disfrute de una vida sana y activa.

Artículo 2°. (Objetivo de la ley).- Asegurar el ejercicio pleno del derecho humano a una alimentación adecuada.

Artículo 3°.- La finalidad de esta ley es:

a.- Declarar como prioridad nacional la política y estrategia del derecho a la alimentación adecuada.

b.- Fortalecer la capacidad institucional pública para que el Estado pueda garantizar el derecho a la alimentación de la población.

c.- Establecer estrategias para superar la desnutrición, el hambre, y la malnutrición con la finalidad de garantizar la salud de la población.

Artículo 4°. (Ámbito de aplicación).- Las obligaciones derivadas del derecho a la alimentación son vinculantes para todos los poderes del Estado y las demás autoridades públicas o gubernamentales, a cualquier nivel (nacional, regional o local).

Los titulares del derecho a la alimentación son personas naturales.

El Estado promoverá la cooperación internacional y proporcionará la asistencia necesaria para asegurar la realización del derecho a la alimentación en otros países, en caso de encontrarse en condiciones de hacerlo.

Artículo 5°.- Principios rectores:

a) Participación: El Estado garantizará ámbitos de participación de las personas, a los efectos de que puedan ejercer el derecho a determinar su propio bienestar y a intervenir con voz en la planificación, formulación, implementación, vigilancia y evaluación de las decisiones que les afectan.

   Dicha participación podrá ser ejercida de manera directa o a través de organizaciones intermediarias que representan intereses específicos.

b) Rendición de cuentas: El Estado garantizará que las intervenciones estén basadas en información y métodos objetivos, cuenten con mecanismos de monitoreo y evaluación permanentes, fomentando la transparencia en la acción pública, la auditoría social y que tomen en cuenta las necesidades reales de la población.

c) Igualdad: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y

diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio de sus derechos a una alimentación adecuada.

d) No discriminación: el Estado respetará, protegerá y garantizará el derecho a una alimentación adecuada sin discriminación alguna y protegerá especialmente a los grupos de personas en situación de mayor vulnerabilidad frente al ejercicio de su derecho a una alimentación adecuada.

Cualquier distinción, exclusión o restricción impuesta por motivo de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición que tenga como consecuencia u objetivo obstaculizar o restringir el ejercicio de cualquier individuo de su derecho a la alimentación, será considerado un acto ilegal y estará sujeto a sanciones conforme lo dispone la ley.

e) Empoderamiento: Las personas deben contar con el conocimiento, las atribuciones, la habilidad, la capacidad y el acceso necesarios para cambiar sus propias vidas, incluida la facultad de exigir al Estado reparaciones en caso de violación de este derecho. El Estado establecerá disposiciones específicas en materia de sensibilización, fortalecimiento de capacidades y educación en el derecho a la alimentación.

Artículo 6°. (Interpretación de la ley).- La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación de las autoridades será congruente con los instrumentos internacionales aplicables en la materia ratificados por el Estado, la Constitución y las leyes nacionales.

Artículo 7°. (Aplicación de la interpretación más favorable).- Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

Artículo 8°.- A los fines de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones:

I- Seguridad Alimentaria y Nutricional se define como la garantía de que los individuos, las familias y la comunidad en su conjunto, accedan en todo momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, principalmente producidos en el país en condiciones de competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su consumo y utilización biológica les procure óptima nutrición, una vida sana y socialmente productiva, con respeto de la diversidad cultural y preferencias de los consumidores.

La seguridad alimentaria tiene cuatro componentes:

a) Disponibilidad: La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes, obtenidos a través de la producción de un país o de importaciones (incluyendo la ayuda alimentaria).

b) Accesibilidad: El acceso de toda persona a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene derecho), para adquirir alimentos apropiados y una

alimentación nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una persona puede tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en que vive.

c) Utilización: La utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas.

d) Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas de cualquier índole, ni de acontecimientos cíclicos. De esta manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto al sentido de la disponibilidad como a la del acceso a la alimentación.

II.- La Soberanía Alimentaria se entiende como el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a una alimentación sana y nutritiva para toda la población.

III.- Adecuación: Los alimentos son considerados adecuados en términos de diversas variables, entre las que figuran la inocuidad, la calidad nutricional, la cantidad y la aceptación cultural del alimento.

IV.- Vulnerabilidad: conjunto de factores que determinan la propensión a sufrir una inadecuada nutrición o a que el suministro de alimentos se interrumpa al producirse una falla en el sistema de provisión.

V.- Grupos de atención prioritaria: incluye bebés, niños, escolares, mujeres embarazadas y lactantes, adulto mayor, desplazados internos, personas con discapacidad, personas que sufren enfermedades crónicas, población que vive en condiciones precarias, grupos en riesgo de marginación social y discriminación y cualquier otro grupo que pueda identificarse periódicamente.

VI.- Cantidad mínima de alimentos es la destinada a cubrir las necesidades alimentarias mínimas que permita al individuo vivir con dignidad, protegido contra el hambre y la desnutrición. Debe establecerse en base a la edad, condición de salud, ocupación del individuo y estado de vulnerabilidad.

CAPÍTULO III

ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN

Artículo 9°. (Derecho a la Alimentación).- El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano de las personas, sea en forma individual o colectiva, de tener acceso en todo momento a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos con pertinencia cultural, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho humano comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el suministro de alimentos adecuados.

Artículo 10. (Condiciones para el ejercicio del derecho a la alimentación).- Toda persona tiene el derecho a vivir en condiciones que le permitan:

I. Alimentarse por sus propios medios de lo que le proporciona la tierra u otros recursos naturales y/o acceder a sistemas de distribución, procesamiento y comercialización eficientes.

II. Tener la capacidad financiera no sólo para adquirir una cantidad suficiente de alimentos de calidad, sino también para poder satisfacer sus necesidades básicas para la alimentación.

III. Garantizar el acceso a alimentos adecuados en casos de acontecimientos imprevisibles o de fuerza mayor.

IV. Acceder a alimentos que contribuyan a una dieta adecuada, agua limpia, para alcanzar un estado de bienestar nutricional en el cual todas las necesidades fisiológicas se encuentran satisfechas.

Artículo 11.- Disposiciones especiales:

I. Los niños y niñas tienen derecho a una alimentación y nutrición adecuadas a su edad de modo que le permitan crecer y desarrollarse.

II. El Estado implementará Programas de Alimentación Escolar y Liceal adecuada.

III. Toda mujer tiene derecho a una alimentación y nutrición adecuadas durante el período de embarazo y lactancia. El Estado velará para que pueda ejercer ese derecho.

IV. El Estado desarrollará programas para enseñar, promover e incentivar la lactancia materna.

V. El Estado asegurará medidas para que las trabajadoras puedan amamantar a los hijos durante los primeros meses de vida.

VI. El Estado tiene la obligación de eliminar y prevenir todas las formas de discriminación contra la mujer en relación con la garantía del derecho a la alimentación, incluyendo el trato menos favorable hacia las mujeres por motivos de embarazo y maternidad y a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

VII. El Estado atenderá especialmente -con enfoque integral dentro del marco de las políticas nacionales, sectoriales y regionales- las políticas públicas orientadas a garantizar una alimentación adecuada a la población infantil y adolescente.

VII. Toda persona que padece hambre o desnutrición, o se encuentra en situación de riesgo de padecer hambre o desnutrición, tiene el derecho a recibir una cantidad mínima de alimentos necesarios conforme a su edad, sexo, condición de salud y ocupación.

Artículo 12.- Las autoridades competentes adoptarán disposiciones reglamentarias para las medidas especiales o presentarán ante el Poder Legislativo una propuesta de legislación para prevenir y compensar prácticas discriminatorias por perjuicios causados en el ejercicio del derecho a la alimentación de grupos o individuos determinados.

CAPÍTULO IV
SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO

Artículo 13.- Constituye un acto ilícito de la autoridad pública privar a cualquier persona de alimentos o los medios para adquirirlos.

Artículo 14.- El Estado garantizará que no se aplicarán las leyes y las normas que puedan tener como consecuencia impedir o vulnerar el ejercicio del derecho humano a la alimentación.

Artículo 15.- Se penalizará la privación deliberada de alimentos introduciendo las enmiendas correspondientes al Código Penal si correspondiere.

Artículo 16.- El Estado revisará el marco administrativo y legislativo para que sea pertinente con miras a asegurar que las actividades de actores privados dentro de su competencia no infrinjan el derecho a la alimentación de los demás.

Artículo 17.- El presupuesto nacional del Estado asignará los recursos necesarios para implementar el derecho fundamental a la alimentación.

Artículo 18.- El Estado, en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos, en caso de que disponga de recursos limitados, tiene la obligación de dar prioridad a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Artículo 19.- El Estado establecerá sistemas de información y cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad (SICIAV), a fin de identificar los grupos y los hogares especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria y las causas de ello, así como también sobre la malnutrición.

Artículo 20.- Las autoridades públicas competentes deberán mantener y aumentar la producción de alimentos en el país, dentro de sus posibilidades, fortalecer la producción de alimentos saludables y nutritivos, organizar programas de capacitación y educación sobre las ventajas e importancia de diversificar la dieta, y entregar alimentos adecuados a las personas en situación de mayor riesgo.

Artículo 21.- El Estado está obligado a proveer a quienes no pueden acceder a una adecuada alimentación, la cantidad mínima de alimentos para dar plena efectividad al derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre y la malnutrición.

Artículo 22.- Derecho a la información El Estado tiene la obligación de informar a la población de los derechos establecidos en la ley y en normas de aplicación derivadas, apenas hayan entrado en vigencia, así como de otras medidas adoptadas para facilitar y promover la realización del derecho a la alimentación.

I. A tales efectos empleará las formas y métodos más adecuados para difundir la información, incluidas las formas verbales (por ejemplo, a través de radios rurales y comunitarias)

II. Establecerá un procedimiento simple, justo y accesible que permita a las personas recabar la información de relevancia para el ejercicio del derecho a la alimentación.

III. Exigirá a las autoridades públicas pertinentes proporcionar la información solicitada dentro de un plazo breve.

Artículo 23.- El Estado incluirá en el plan de estudios de educación primaria y básica

y en los programas de educación de adultos, material relacionado con la educación alimentaria y nutricional, el derecho a la alimentación y los principios de derechos humanos.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES SOBRE LA AUTORIDAD NACIONAL PARA EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Artículo 24.- El Estado establecerá o estipulará la creación de una autoridad nacional para el derecho a la alimentación que cumpla la función de órgano central de coordinación para la implementación del derecho en el ámbito nacional.

Artículo 25.- La autoridad nacional para el derecho a la alimentación, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones:

a) Aplicará los principios de derechos humanos establecidos en la ley y en otros instrumentos jurídicos internacionales a los que haya adherido el país.

b) Trabajará estrechamente con los niveles descentralizados de la administración pública y con organizaciones representantes de la sociedad civil y tomará en consideración sus opiniones.

Artículo 26. (Atribuciones y funciones).- Las principales funciones y responsabilidades son:

a) Asesorar al gobierno y coordinar las diversas actividades y actores involucrados en las diversas etapas de la realización del derecho a la alimentación en el plano nacional, regional y local.

b) Formular, adoptar y revisar las políticas nacionales en materia del derecho a la alimentación para garantizar que aborden adecuadamente las cambiantes necesidades de la población.

c) Determinar los indicadores adecuados para medir el progreso en la aplicación de la ley marco y el ejercicio del derecho a la alimentación. Los indicadores establecidos deben ser específicos, comprobables y limitados en el tiempo.

d) Reunir la información en materia de la realización del derecho a la alimentación y asegurar de que sea compartida y difundida entre todos los actores pertinentes, en el formato correcto y contenido adecuados para una diversidad de usuarios.

e) Presentar sugerencias que permitan armonizar las políticas sectoriales pertinentes para el ejercicio del derecho a la alimentación y recomendaciones para los cambios requeridos en base a los datos obtenidos en el proceso de vigilancia técnica y de los derechos humanos.

f) Establecer las prioridades y coordinar la asignación de recursos en conformidad con dichas prioridades.

g) Presentar ante el ministerio competente o los órganos del Estado correspondientes propuestas para la introducción de enmiendas a las leyes, los reglamentos o las políticas vigentes, o para formular nuevas leyes,

disposiciones reglamentarias o políticas relativas al derecho a la alimentación o uno de sus componentes (accesibilidad, disponibilidad y adecuación de los alimentos).

h) Presentar informes al parlamento sobre el estado de aplicación de la ley marco y del derecho a la alimentación, así como las observaciones finales de los órganos de vigilancia de los tratados internacionales que han evaluado la actividad del país en materia del derecho a la alimentación.

i) Promover la cooperación técnica con otros países, ofreciendo orientación y apoyo sobre la realización del Derecho a la Alimentación.

Artículo 27. (Composición).- La coordinación y toma de decisiones debe reflejar el carácter multisectorial del derecho a la alimentación: Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Salud Pública, de Educación y Cultura, de Desarrollo Social, de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas, de Vivienda y Medio Ambiente, de Industria, Energía y Minería y el Congreso Nacional de Intendentes.

Los representantes gubernamentales deberán ser funcionarios del más alto nivel de gobierno con el objeto de asegurar que el derecho a la alimentación reciba la prioridad adecuada.

La ley regulará la participación con carácter consultivo de actores no gubernamentales: institutos de investigación y estadísticas, universidades, representantes de la sociedad civil y del sector privado.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES SOBRE EL SISTEMA DE VIGILANCIA (MONITOREO Y EVALUACIÓN)

Artículo 28.- Se creará un sistema de vigilancia integrado que -tomando en consideración el tipo de instituciones existentes, sus atribuciones y capacidades- obligue a las autoridades y entidades pertinentes en todos los niveles a:

a) Recopilar datos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional empleando metodologías y procesos de vigilancia que se ajusten a los principios de derechos humanos establecidos por ley.

b) Desagregar los datos recopilados por edad, sexo, situación y grupo.

c) Evaluar el progreso alcanzado en la realización del derecho a la alimentación en el país.

d) Establecer o identificar mecanismos de alerta temprana.

Artículo 29.- El sistema de vigilancia estará dirigido por un órgano especializado autónomo de Derechos Humanos.

Artículo 30.- El Estado garantizará que la institución que asumirá la vigilancia cuente con los recursos humanos y financieros necesarios y la credibilidad suficiente para vigilar y promover efectivamente el derecho a la alimentación de manera autónoma.

- 8 -

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Artículo 31.- El Estado velará para asegurar que las instituciones pertinentes posibiliten la participación plena y transparente del sector privado y de la sociedad civil, y en particular de representantes de los grupos más afectados.

Artículo 32.- Las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema podrán ser tomadas en cuenta en el momento de elaborar las políticas o programas que podrían tener alguna injerencia en el ejercicio del derecho a la alimentación o algunos de sus componentes.

Artículo 33.- Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente el Estado deberá establecer:

a) Garantías de que se realizarán consultas para examinar áreas específicas de aplicación de la ley marco.

b) La realización de audiencias públicas periódicas en las que el Estado estará obligado a informar sobre los avances alcanzados en la aplicación de la ley y en la realización progresiva del derecho a la alimentación en el país.

Artículo 34. (Criterios de selección y representación).- Para garantizar una representación efectiva de los representantes de la sociedad civil, el proceso de selección debe ser participativo, no discriminatorio y transparente.

Artículo 35.- Para asegurar una representación justa se tendrá en cuenta:

a) La capacidad del grupo de representar a las comunidades pertinentes.

b) El tamaño del grupo que representan.

c) Las características geográficas (urbana, rural, etc).

d) Las capacidades técnicas de la organización en el ámbito del derecho a la alimentación.

e) La capacidad organizacional del grupo.

f) El equilibrio en términos de género.

g) El equilibrio en la representación de las comunidades pertinentes y los intereses dentro de la sociedad (agricultores, pescadores, comunidades locales, etc).

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES EN MATERIA DE RECURSOS

Artículo 36. (Recursos administrativos).- Las decisiones o medidas administrativas que supongan una infracción de las disposiciones de la ley o su legislación derivada, como la omisión del cumplimiento de una obligación relativa a dichas disposiciones podrán ser impugnadas ante una autoridad administrativa superior.

Artículo 37.- La autoridad superior competente debe contar con las atribuciones

necesarias para imponer todas las medidas que estime necesarias para reparar dicha violación.

Artículo 38.- La legislación o las normas de ejecución establecerán procedimientos administrativos eficaces y las reparaciones correspondientes. Los recursos exclusivamente administrativos deberán ser complementados con el derecho a una revisión judicial ante el tribunal competente.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Artículo 39.- El Estado a través de los órganos con potestad normativa adecuará, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas relativas al derecho a la alimentación previsto en los tratados internacionales ratificados por el país.

Artículo 40.- El gobierno deberá adoptar los mecanismos jurídicos regulatorios necesarios para hacer efectiva la ley marco dentro de un plazo razonable.

Montevideo, 1° de junio de 2015

JOSÉ CARLOS CARDOSO
REPRESENTANTE POR ROCHA

- 10 -

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el derecho a la alimentación fue reconocido formalmente como un derecho humano; conforme lo establece su artículo 25: "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, al igual que a su familia, la salud y el bienestar, en especial a la alimentación.

A partir de entonces, el derecho a la alimentación -o ciertos aspectos de este derecho- se ha ido incorporando a una serie de instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes de derechos humanos. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el instrumento internacional que aborda este derecho humano fundamental del modo más exhaustivo, el cual fue ratificado por Uruguay.

El Derecho a la Alimentación es jurídicamente vinculante para los 160 Estados Partes de dicho Pacto. El artículo 2º obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas necesarias, y en particular medidas legislativas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos enumerados en el Pacto. En última instancia, a cada uno de los Estados Partes del PIDESC le corresponderá determinar la categoría jurídica que otorgará a estas disposiciones, en este caso el derecho a la alimentación, en el contexto del ordenamiento legal del país.

El derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegido contra el hambre fueron reafirmados en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 que también instó a encontrar mejores formas de aplicación de los derechos en materia de alimentación y exhortó a todos los Estados a ratificar el Pacto. Fue en esa instancia que los Jefes de Estado aprobaron una declaración reafirmando el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Además, se comprometieron "a consagrar su voluntad política y su dedicación común y nacional a conseguir la seguridad alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre...".

En la "Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después" se tomó la decisión de crear un Grupo de Trabajo Intergubernamental con el fin de elaborar un conjunto de directrices voluntarias para apoyar los esfuerzos encaminados a alcanzar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

Asimismo, es deber del Estado y de la sociedad en su conjunto, de sus instituciones, organizaciones y de los gobiernos locales, garantizar la seguridad alimentaria de la población y crear los instrumentos y mecanismos necesarios para asegurarla, respetando los principios de diversidad cultural y productiva de las comunidades.

En función de ello en el 2004, el Consejo de la FAO aprobó por consenso las directrices sobre el derecho a la alimentación. Estas directrices recomiendan la aplicación de medidas constitucionales y legislativas, así como marcos institucionales coordinados, para abordar las dimensiones multisectoriales del derecho a la alimentación.

Por otra parte, los objetivos del milenio constituyen a la vez que una hoja de ruta, un instrumento para medir nuestra capacidad de generar y/o fortalecer institucionalidad

efectiva en el combate de la pobreza y en el alcance de la soberanía alimentaria y nutricional de nuestros pueblos.

Pero además, desde 2006, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha prestado apoyo a los países que desean adoptar un enfoque para la seguridad alimentaria basado en los derechos humanos.

En el marco de una estrategia de desarrollo nacional, se considera fundamental prevenir el hambre, combatir la pobreza, reforzar el rol de la agricultura y el desarrollo rural sostenible, así como promover el desarrollo económico con equidad, y la creación de oportunidades y capacidades de las personas para mejorar su calidad de vida.

Habida cuenta de que las causas de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población son complejas y guardan relación directa con la pobreza, al igual que con el desempleo, el ingreso de los hogares, la educación, la salud y la nutrición, y con las pérdidas que experimenta la agricultura provocadas por factores climáticos adversos; pero también -como en el caso de Uruguay- con la transición de los hábitos alimenticios- especialmente entre la población del medio urbano- es necesario adoptar políticas integrales de carácter multisectorial e interdisciplinario.

Previamente es necesaria la adopción de un marco jurídico que establezca los principios y las directrices que han de orientar la articulación de esas políticas. Por tanto, las iniciativas legislativas constituyen parte fundamental de dicho enfoque y es con este objetivo que diversos países han introducido enmiendas en sus constituciones o han aprobado nuevas leyes marco para dar efectividad al derecho a la alimentación. Sin embargo, aún existe una base limitada de conocimientos y experiencia en este ámbito.

El Parlamento Latinoamericano, en su calidad de institución democrática de carácter permanente, representativo de todas las tendencias políticas existentes en los cuerpos legislativos de América Latina y el Caribe, ha contribuido a avanzar en la realización del derecho a la alimentación, respaldando e impulsando la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre (IALCSH) de la FAO. Es en ese marco que ha tenido activa participación en la integración del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre (FPH), con el objetivo de instalar en todos los ámbitos sociales la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria para promover leyes que construyan, con equidad de género y participación social, Sistemas Nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la alimentación, así como para promover un financiamiento suficiente para concretar las estrategias de la política alimentaria nacional. Uruguay estuvo presente desde el inicio y tuvo una participación activa en la instalación del FHP no sólo a nivel de la región, sino también apoyando la conformación de los capítulos nacionales de dicho frente. También tuvo un rol protagónico en la elaboración de la Ley Marco: Derecho a la Alimentación, Soberanía y Seguridad Alimentaria, aprobada por la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) en el año 2012.

Respecto a las disposiciones pertinentes de los tratados internacionales en materia del derecho a la alimentación, ciertamente, la mayoría de las obligaciones que establece este derecho no tienen efecto inmediato. O sea, no pueden aplicarse sin contar con la legislación correspondiente para ello. Ante la necesidad de contar con un marco legal que permita construir una política de Estado en materia de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que a su vez articule los esfuerzos de las instituciones y organizaciones del sector público y privado, potencie su efectividad y propicie la canalización de recursos e inversiones hacia la consolidación de una estructura productiva agroalimentaria nacional

sostenible y competitiva, que también facilite la mejora de las condiciones de vida de la población en general; la adopción de una Ley Marco sobre el Derecho a la Alimentación contribuye a la realización efectiva de este derecho. Al influjo de estas circunstancias, numerosos países de América Latina están sufriendo importantes cambios y reformas en los marcos jurídicos relacionados con el derecho a la alimentación. Estos cambios están siendo impulsados por diferentes actores y demuestran la prioridad que se le está dando en la región a la realización de este derecho en el contexto político.

América Latina está a la vanguardia mundial en cuanto al reconocimiento y a la incorporación del Derecho a la Alimentación en los marcos jurídicos y constitucionales nacionales. No hay ninguna otra zona (Norte América, Europa, Asia, África u Oceanía) donde haya tanta "efervescencia" en materia de reforma legal, institucional y de reivindicación de la sociedad civil, incluyendo los tímidos avances en la justiciabilidad. Esta dinámica, muy ligada también a la reivindicación de la soberanía alimentaria en la cual el derecho a la alimentación se integra perfectamente, viene alimentada por una sociedad civil demandante, unos gobiernos y poderes legislativos receptivos y una cooperación internacional colaboradora.

El papel de la ley en la aplicación del derecho a la alimentación.

Como región nos hemos comprometido a derrotar el hambre y la desnutrición, y aunque hemos avanzado en ese objetivo, aún nos queda mucho por hacer. Cada vez que ponemos sobre la mesa el dato de la indigencia, ahí estamos identificando a quienes no acceden a la alimentación. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta capacidad de producir alimentos, sin embargo 1 de cada 6 seres humanos no come diariamente y la mitad de los que no comen son niños. En América Latina tenemos 49 millones de personas padeciendo hambre.

Entonces, este no es un tema de la agricultura, ni de la ciencia, ni de la economía; es un tema de la política y es aquí donde los parlamentos tenemos responsabilidades de aportar instrumentos de protección alimentaria a la población.

Desde la realización del I Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, realizado en Sao Paulo, Brasil, en marzo de 2010, se afirmó la importancia de que la seguridad alimentaria y nutricional figurara en la agenda política de la región. En ese sentido los parlamentarios estamos llamados a tener un rol protagónico en la elaboración de mandatos jurídicos que favorezcan la realización del derecho a la alimentación a través del fortalecimiento y desarrollo de marcos normativos y acuerdos sociales amplios y robustos políticamente.

La afirmación de que es inaceptable que el hambre siga extendiéndose por el mundo y que las personas tienen el derecho a no padecer hambre y desnutrición ha sido acogida y reafirmada en muchos instrumentos internacionales y por parte de diversos organismos intergubernamentales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA).

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el mundo centró sus esfuerzos en erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria mundial; sin embargo, estas iniciativas no fueron abordadas en el marco de los principios de los derechos humanos.

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 y su seguimiento han impulsado

profundos cambios en esta situación. La labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y la FAO han permitido precisar el contenido del derecho a la alimentación. La aplicación más efectiva del derecho ha sido posible en gran medida gracias a las directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional ("Directrices sobre el Derecho a la Alimentación").

Uruguay se inscribe en este contexto internacional, y en estos espacios institucionales, el proyecto de ley que proponemos permite sumarnos a los esfuerzos por abatir el hambre, la inseguridad alimentaria y la mal nutrición. Efectivamente, una ley marco permite dotar de coherencia a las políticas e instituciones públicas orientadas a asegurar el efectivo ejercicio del derecho a la alimentación.

Hoy en día, esforzarse por garantizar que toda persona tenga acceso regular a una alimentación adecuada es considerado no sólo un imperativo moral y una inversión que reporta enormes beneficios económicos, sino también como la realización misma de un derecho humano básico. Frente a todos estos instrumentos, sentimos el desafío de trabajar en la formulación de acciones concretas.

El derecho a la alimentación es una obligación jurídicamente vinculante para los 160 Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y que entró en vigor en 1976.

Al igual que ocurre con todo derecho humano, el principal desafío inherente al derecho a la alimentación es determinar la forma más efectiva de aplicarlo, es decir, de qué manera puede darse efectividad concreta en el plano nacional y cómo proceder para obligar a las autoridades públicas a rendir cuentas de su actuación o del incumplimiento de sus deberes.

Asimismo, la naturaleza transversal y compleja del derecho a la alimentación y su interrelación con otros derechos humanos requiere medidas legislativas, aún cuando el PIDESC y otros tratados de derechos humanos pertinentes puedan ser aplicados de manera directa en el ordenamiento jurídico interno. Esto se debe al hecho de que la incorporación del derecho a la alimentación en el sistema jurídico interno a través de medidas legislativas puede ofrecer un alto grado de protección para este derecho humano.

Por lo tanto, cualquier persona que considere que se ha cometido alguna violación de su derecho a la alimentación -en términos de su componente de accesibilidad, disponibilidad, estabilidad o adecuación- podrá acogerse a dicha disposición jurídica y presentar un recurso o exigir la debida reparación ante las autoridades administrativas o judiciales correspondientes.

Según refiere la Ley Marco "Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria" aprobada en el 2012 por el Parlatino, "En el plano interno, la estrategia jurídica que se considere adecuada para aplicar el derecho a la alimentación dependerá de la coyuntura del país y el conjunto de políticas, instituciones y marcos jurídicos específicos existentes. En algunos países, las actuales disposiciones constitucionales, junto con la legislación sectorial vigente, podrían ser suficientes para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación de toda persona dentro de su jurisdicción. En otros países, en tanto, podría ser necesario elaborar una ley marco especial para el derecho a la alimentación antes de incorporarlo a las leyes pertinentes en materia de este derecho.

En países en los cuales los tratados de derechos humanos adquieren fuerza de ley automáticamente, el derecho a la alimentación podrá aplicarse directamente en el plano nacional y será de carácter obligatorio para las autoridades del Estado y los tribunales nacionales".

No obstante, defender un caso tomando exclusivamente como fundamento el texto del PIDESC ante tribunales que ignoran o tienen poco conocimiento de las leyes internacionales de derechos humanos puede tener resultados muy inciertos.

Si bien es indispensable adoptar alguna medida legislativa para aplicar el derecho a la alimentación (y todos los derechos humanos) en el plano nacional, los recursos jurídicos por sí solos no bastan para lograr su plena realización.

El ejercicio pleno de un derecho económico y social -aún teniendo el reconocimiento de la constitución o de una ley- no será posible sin un seguimiento eficaz de las políticas y programas aplicados. Por lo tanto, también podría ser necesario utilizar otros medios que engloban una amplia gama de medidas sociales, económicas y políticas.

¿Por qué una ley marco para el derecho a la alimentación?

Varios países de la región han comenzado a elaborar leyes en los últimos años con miras a garantizar o promover la plena efectividad del derecho a la alimentación; entre ellos figuran Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, y Venezuela. Otros países también han emprendido iniciativas en materia de la realización del derecho a la alimentación, pero en cambio no han impulsado – hasta el momento – iniciativas legislativas específicas con estos fines.

Las disposiciones constitucionales se expresan en términos bastante amplios mientras que una ley marco para el derecho a la alimentación puede profundizar en aspectos más específicos de este derecho y hacerlo efectivo en términos prácticos.

El término "ley marco" se refiere a un mecanismo legislativo empleado para abordar cuestiones multisectoriales; la legislación marco establece los principios y obligaciones generales y delega en las normas de ejecución y en las autoridades competentes la función de definir las medidas específicas que se adoptarán para dar plena efectividad a dichas obligaciones, generalmente dentro de un determinado período de tiempo.

Una ley marco para el derecho a la alimentación puede ofrecer una definición precisa del alcance y contenido de este derecho humano y establecer las obligaciones de las autoridades del Estado y del sector privado, así como los mecanismos institucionales necesarios y proporcionar las bases jurídicas para la legislación subsidiaria y otras medidas necesarias que deberán adoptar las autoridades competentes.

Con el presente Proyecto de Ley Marco, pretendemos establecer una ruta de "Agenda de Desarrollo Post-2015". Este marco servirá de norma de referencia para que se adopten medidas útiles que permitan articular los organismos públicos con competencia en la protección del derecho a la alimentación, con el sector privado y la sociedad civil de manera más precisa, proporcionando no sólo un marco normativo para imponer su cumplimiento, sino también para elaborar y/ o perfeccionar leyes específicas dirigidas a proteger el acceso al derecho a la alimentación de ciertos grupos de la población.

Por lo tanto, el lugar que ocupe la ley marco dentro del ordenamiento jurídico interno es esencial para su eventual interpretación y cumplimiento debido a su interrelación con las demás leyes sectoriales que afectan al ejercicio de este derecho.

La salud entendida en sentido más amplio, incluida la prevención de las enfermedades crónicas, contribuye a la reducción de la pobreza y por lo tanto al Objetivo 1 (Erradicar la pobreza extrema y el hambre). En los países más pobres del mundo, aunque siguen predominando las enfermedades infecciosas y la malnutrición, están aumentando los factores conocidos de riesgo de enfermedades crónicas. Estos factores de riesgo tienen consecuencias mucho más graves cuando los lactantes y los niños pequeños sufren retrasos del crecimiento y carencias de micronutrientes durante los que deberían ser periodos de crecimiento rápido.

La nutrición es un tema preocupante en América Latina y el Caribe, que se expresa en dos tipos fundamentales de problemas asociados a la alimentación: desnutrición crónica y obesidad.

De modo que cuando referimos al Derecho a la Alimentación, no sólo se están considerando las situaciones de pobreza, sino también los cambios en los hábitos alimenticios de importantes sectores de la población- sobre todo en el medio urbano- que están padeciendo enfermedades crónicas asociadas a esa transición nutricional.

En nuestro país, las enfermedades nutricionales, tanto por déficit como por exceso tienen alta prevalencia en la población. En ambos casos inducen morbilidad y mortalidad. La desnutrición energético-proteica (DEP) ha tenido un importante incremento en los comienzos de la década en curso, como resultado de la grave crisis socio-económica que el país padeció. Aunque dicha población, que se encontraba en situación de alto riesgo de desnutrición, ha venido siendo apoyada con políticas públicas, se hace necesario evaluar el grado de mejoramiento de su estado nutricional y del control de la DEP. Los grupos de mayor riesgo son los niños menores de dos años y las embarazadas.

Al mismo tiempo, la obesidad y las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición (cardiovasculares, osteoporosis, diabetes, algunos tipos de cáncer, etc.) son de elevada frecuencia en nuestra población. La obesidad se presenta en todos los grupos de edad, sexo y nivel socioeconómico, aunque su frecuencia aumenta conforme aumenta la edad. Más de la mitad de las personas adultas y uno de cada cuatro niños y niñas sufren obesidad o sobrepeso en Uruguay. Un estudio del MSP sobre riesgos cardiovasculares en Uruguay, afirma que un 44% de la población adulta tiene hipertensión, 21% colesterol alto y 55% realiza poca actividad física.

Estos dos problemas coexisten en la misma comunidad, en la misma familia (madres obesas con niños desnutridos) y aún en el mismo individuo (niños obesos con retraso del crecimiento), lo cual debe tenerse presente al plantear acciones sanitarias de prevención.

Los datos disponibles indican que el país presenta aún niveles elevados de desnutrición crónica, bajo peso al nacer, carencia de ciertos nutrientes específicos o micronutrientes como el hierro o el zinc, la desnutrición temprana, la falta de lactancia materna, la introducción inadecuada de la alimentación sólida y otros elementos del entorno que tienen un papel muy importante en el desarrollo de la desnutrición crónica. En Uruguay, a pesar de haberse logrado disminuir la pobreza, los datos disponibles indican que el país aún tiene niveles elevados de desnutrición crónica entre la población infantil. El 24% de niños menores de seis años viven en familias por debajo de la línea de la pobreza (INE, 2012), entre los niños menores de 24 meses existe un 31,5% de prevalencia global de anemia y retraso en la talla. Asimismo, considerando el impacto que

en el desarrollo del ser humano tiene la nutrición y la salud de las madres durante el embarazo, según el Sistema de Información Perinatal (SIP), el 15% de las mujeres al inicio de la gestación presenta peso bajo y el 34% tiene algún grado de sobrepeso u obesidad.

Uruguay se hizo cargo tempranamente de crear instrumentos tendientes a la protección del derecho a la alimentación. La Constitución de la República marca claramente en su artículo 7º la obligación del Estado respecto a los derechos de sus habitantes cuando establece que "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general".

Con el paso del tiempo, y según las coyunturas se fueron aprobando una serie de normas y se fueron creando una serie de instituciones que constituyen un "basamento" y un antecedente muy importante para perfeccionar y profundizar las políticas públicas orientadas a garantizar la efectiva aplicación del derecho a la alimentación, la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional .

Finalmente dos consideraciones, en primer lugar no sólo es importante que el Estado reconozca a todas las personas como titulares del derecho a la alimentación adecuada, sino también que las personas se consideren a sí mismas como poseedora de ese derecho y sean capaces de actuar en consecuencia.

En segundo término, reafirmar que la credibilidad del Estado y la confianza que en él depositan los ciudadanos es la base de todo contrato social y por lo tanto de todo dispositivo de política, de ahí la importancia del rol que cumplen las "instituciones".

Con este proyecto de ley, pretendemos reforzar el legado institucional, sumar al país a los esfuerzos de la región y dar un marco jurídico general para dar coherencia a las políticas públicas multisectoriales que atienden el derecho a una alimentación adecuada y la soberanía alimentaria.

PREÁMBULO

CONSIDERANDO

Que el derecho a la alimentación es un derecho humano universal, el cual significa que todas las personas tienen; por un lado derecho a estar libres de hambre y por otro, tener acceso físico o económico en todo momento a una alimentación adecuada en cantidad y calidad.

Que en la **Declaración de Salvador de Bahía** de 2008 se explicitó el respaldo de la totalidad de los 33 países de la región a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, promoviendo "acciones para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, por medio de políticas públicas que impulsen el desarrollo rural, la producción sustentable de alimentos, su inocuidad, su distribución y comercialización".

Que en diciembre de 2008 entró en vigor el **Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)** que ya está siendo ratificado por diversos Estados de América Latina y el Caribe.

Que en la Constitución del **Frente Parlamentario contra el Hambre**, llevada a cabo en Ciudad de Panamá el 3 y 4 de Septiembre de 2009, se estableció el compromiso de

establecer un Grupo de Trabajo para garantizar continuidad en el trabajo parlamentario contra el hambre.

Que, de igual forma, se reconoció en la **Asamblea Plenaria del FIPA** del 15 de septiembre de 2009 que es necesario para avanzar una política de desarrollo y seguridad alimentaria que sea al mismo tiempo sostenible y equitativa para todos.

Que, durante la reunión de parlamentarios previa a la **Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria** de 2009, en Roma, se determinó que "nosotros, los miembros de los parlamentos, jugamos un rol clave en encontrar soluciones al problema del hambre (…) y hay muchas cosas que como parlamentarios podemos hacer, como adoptar marcos legales y leyes para proteger el derecho a la alimentación".

Que en la **Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria** de 2009 los países firmantes afirmaron "el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos suficientes, sanos y nutritivos, en consonancia con la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional" y que la realización de este derecho dependerá, en gran medida, del trabajo legislativo que lo institucionalice.

Que en la XXV **Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano** del 3 de diciembre de 2009 se emitió la Declaración Latinoamericana de Derechos Humanos, conocida como la Declaración de Panamá, que estableció que el "derecho al agua es un derecho humano fundamental, inherente a la vida y a la dignidad humanas" y que "todos los latinoamericanos tienen derecho a una alimentación que asegure un sano desarrollo físico y mental" (artículo 7 y 11).

Que en la **Cumbre de la Unidad constituida por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo** en Cancún, México, se acordó "Fortalecer los procesos de integración en el ámbito alimentario y conjugaremos esfuerzos en apoyo a la **Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025".**

Que en Uruguay cerca de 73 % de los pobres son menores de 17 años.

Que el país produce alimentos suficientes para alimentar a toda su población y que por tanto el hambre y la desnutrición no se deben a una falta de disponibilidad sino a una inequidad en el acceso a ellos.

Que Uruguay presenta problemas de malnutrición por déficit (retraso de crecimiento, anemia y bajo peso) que se concentran en la población infantil y que condiciona el capital humano del país; por otro lado, tenemos una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad y de enfermedades crónicas (enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, osteoporosis, entre otras), vinculadas con un estilo de vida sedentario e inadecuadas prácticas alimentarias.

Que Uruguay tiene que mejorar de forma urgente la nutrición de la mujer embarazada y de nuestros niños, considerando que son períodos que constituyen ventanas de oportunidades para mejorar la salud de la población.

CONSCIENTES

Que la erradicación del hambre y la desnutrición es una meta urgente que demanda el esfuerzo y compromiso de todos los actores de la sociedad.

Que la decidida participación de las mujeres en la lucha contra el hambre y la búsqueda de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, hace necesario impulsar mecanismos para que en los encuentros del Frente Parlamentario contra el Hambre exista una mayor participación de mujeres, con el objetivo de alcanzar la equidad de género.

Que Uruguay tiene un enorme desafío en proponer acciones integrales al respecto, mejorando la calidad de los alimentos diseñados por la industria, mejorando la calidad e inocuidad de la alimentación en general, protegiendo a nuestros niños y adolescentes de publicidad engañosa, proponiendo mejores prácticas alimentarias en entornos educativos, facilitando y favoreciendo espacios públicos para la actividad física, informando y comunicando a la población conocimiento en materia alimentaria y nutricional, entre otras múltiples acciones.

Que es necesario promover el derecho a la alimentación adecuada, como un derecho de todo ciudadano más allá de su nivel socioeconómico. El concepto de derecho a la alimentación adecuada es más amplio que el derecho a alimentarse, y para ello los Gobiernos tienen la responsabilidad de trabajar para mejorar la nutrición de su gente.

RECONOCIENDO

Que este proyecto contribuye a la estrategia regional de impulsar la sensibilización de los distintos congresos nacionales respecto a la importancia de que se busque la plena incorporación del derecho a la alimentación a las legislaciones vigentes, a fin de establecerlo de forma definitiva entre los marcos institucionales.

Que el Estado tiene tres obligaciones: i) respetar el derecho a la alimentación; ii) proteger este derecho y iii) hacerlo efectivo. La obligación de hacer efectivo el derecho a la alimentación engloba otras dos obligaciones secundarias: la obligación de facilitar y la obligación de proveer y que por tanto es necesario contar con un marco jurídico general en materia de seguridad alimentaria que recoja y considere los criterios, principios y parámetros reconocidos en el ámbito internacional y en el marco jurídico regional

Se somete a consideración de la Cámara de Representantes el presente proyecto de ley.

Montevideo, 1° de junio de 2015

JOSÉ CARLOS CARDOSO
REPRESENTANTE POR ROCHA

=

COMISIÓN ESPECIAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO

ANEXO I AL
REPARTIDO Nº 165
AGOSTO DE 2019

CARPETA Nº 198 DE 2015

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN

Establecimiento de un marco jurídico

I n f o r m e

- 1 -

COMISIÓN ESPECIAL DE
POBLACIÓN Y DESARROLLO

I N F O R M E

Señoras y señores Representantes:

Vuestra Comisión Especial de Población y Desarrollo ha considerado el proyecto de ley "DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN". Establecimiento de un marco jurídico (C/198/2015 – Rep. Nº 165).

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el derecho a la alimentación fue reconocido como un derecho humano.

A partir de entonces se han incorporado una serie de instrumentos internacionales, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), instrumento internacional que aborda este derecho fundamental del modo más exhaustivo, el cual fue ratificado por Uruguay. El artículo 2º de éste obliga a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias y en particular medidas legislativas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos enumerados en el Pacto.

El derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegido contra el hambre fueron reafirmados en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996. En dicha instancia los Jefes de Estado aprobaron una declaración reafirmando el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Se comprometen “a consagrar su voluntad política y su dedicación común y nacional; a conseguir la seguridad alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre”.

Es deber del Estado y de la sociedad en su conjunto, de sus instituciones, organizaciones y de los Gobiernos Locales, garantizar la seguridad alimentaria de la población y crear los instrumentos y mecanismos necesarios para asegurarla, respetando los principios de diversidad cultural y productiva de las comunidades.

En el año 2004, el Consejo de la FAO aprobó por consenso las directrices sobre el derecho a la alimentación, recomendando la aplicación de medidas constitucionales y legislativas, así como marcos institucionales coordinados, para abordar las dimensiones multisectoriales del derecho a la alimentación.

Los objetivos del Milenio constituyen una hoja de ruta como instrumento para medir capacidad de generar y/o fortalecer institucionalidad efectiva en el combate de la pobreza y soberanía alimentaria y nutricional de nuestros pueblos.

En el marco de una estrategia de desarrollo nacional, se considera fundamental prevenir el hambre, combatir la pobreza, reforzar el rol de la agricultura y el desarrollo rural sostenible, así como promover el desarrollo económico con equidad y la creación de oportunidades y capacidades de las personas para mejorar su calidad de vida.

Uruguay estuvo presente desde el inicio y tuvo una participación activa en la instalación del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre (FPH) no sólo a nivel de la región sino también apoyando la conformación de los capítulos nacionales de dicho frente. También tuvo un rol protagónico en la elaboración de la Ley Marco aprobada por la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano en el año 2012. La mayoría de las obligaciones que establece este derecho no tienen efecto inmediato; es decir que no pueden aplicarse sin contar con la legislación correspondiente para ello. Ante la necesidad de contar con un marco legal que permita construir una política de Estado en materia de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional; que a su vez articule los esfuerzos de las instituciones y organizaciones del sector público y privado; potencie su efectividad y propicie la canalización de recursos e inversiones hacia la consolidación de una estructura productiva agroalimentaria nacional, sostenible y competitiva, que también facilite la mejora de las condiciones de vida de la población en general; la adopción de una Ley Marco sobre el Derecho a la Alimentación contribuye a la realización efectiva de este Derecho. Por ello numerosos países de América Latina están modificando; reformando los marcos jurídicos relacionados con el derecho a la alimentación, lo cual hace que se esté a la vanguardia mundial en cuanto al reconocimiento y a la incorporación del Derecho a la Alimentación en los marcos jurídicos y constitucionales nacionales.

Como región nos hemos comprometido a derrotar el hambre y la desnutrición y hemos avanzado en ese objetivo, aún nos queda mucho por hacer. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta capacidad de producir alimentos, sin embargo uno de cada seis seres humanos no come diariamente y la mitad de los que no comen son niños. Tenemos cuarenta y nueve millones de personas padeciendo hambre en América Latina.

Es una cuestión política, donde los parlamentarios tenemos responsabilidades de aportar instrumentos de protección alimentaria a la población. Estamos llamados a tener un rol protagónico en la elaboración de mandatos jurídicos que favorezcan la realización del derecho a la alimentación a través del fortalecimiento y desarrollo de marcos normativos y acuerdos sociales amplios y robustos políticamente.

Nuestro país se inscribe en el contexto internacional y en estos espacios institucionales, el proyecto de ley que proponemos permite sumarnos a los esfuerzos por abatir el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

No sólo es un imperativo moral y una inversión que reporta enormes beneficios económicos, sino también como la realización misma de un derecho humano básico.

El principal desafío inherente al derecho a la alimentación es determinar la forma más efectiva de aplicarlo. La naturaleza transversal y compleja del derecho a la alimentación y su interrelación con otros derechos humanos requiere medidas legislativas.

Una ley marco para el derecho a la alimentación puede profundizar en aspectos más específicos de este derecho y hacerlo efectivo en términos prácticos.

La legislación marco establece los principios y obligaciones generales y delega en las normas de ejecución y en las autoridades competentes la función de definir las medidas específicas que se adoptarán para dar plena efectividad a dichas obligaciones, generalmente dentro de un determinado período de tiempo.

La ley marco ofrece una definición precisa del alcance y contenido de este derecho humano; establece las obligaciones de las autoridades del Estado y del sector privado; así como, los mecanismos institucionales necesarios para proporciona las bases jurídicas de la legislación subsidiaria y otras medidas necesarias que deberán adoptar las autoridades competentes.

Con el presente proyecto de ley marco pretendemos establecer una ruta de “Agenda de Desarrollo Post-2015”. Servirá de norma de referencia para que se adopten medidas útiles que permitan articular los organismos públicos con competencia en la protección del derecho a la alimentación, con el sector privado y la sociedad civil, para elaborar y /o perfeccionar leyes específicas dirigidas a proteger el acceso al derecho de ciertos grupos de la población, considerando los planteos de diferentes organizaciones sociales en cuanto al ejercicio de este derecho y de colectivos con enfermedades que requieren una dieta diferenciada (ejemplo: celíacos, diabéticos, entre otros).

No sólo se están considerando las situaciones de pobreza, sino también los cambios en los hábitos alimenticios de importantes sectores de la población, las cuales están padeciendo enfermedades crónicas asociadas al cambio nutricional. Cabe resaltar que Uruguay alcanzó el mínimo histórico de pobreza en el año 2017, siendo el 7,9% de la población la que no logra alcanzar a cubrir sus necesidades básicas y el 0,1% por debajo del nivel de indigencia; resultado de las medidas implementadas por los tres Gobiernos del Frente Amplio. De acuerdo al informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2018” de FAO, UNICEF y OMS, nuestro país evolucionó favorablemente las prevalencias en el período comprendido 2000- 2002 al 2015-2017 en lo que respecta a la subalimentación, pasando de un 4,1 a menos de 2,5.

Más allá de los avances es necesario que el Estado reconozca a todas las personas como titulares del derecho a la alimentación adecuada, sino también que las personas se consideren a sí mismas como poseedoras de ese derecho y sean capaces de actuar en consecuencia.

La credibilidad del Estado es la base de todo contrato social y por tanto de todo dispositivo de política, de ahí la importancia del rol que cumplen las “instituciones”.

Con este proyecto de ley pretendemos reforzar el legado institucional, sumar al país a los esfuerzos de la región y dar un marco jurídico general para proporcionar coherencia a las políticas públicas multisectoriales que atienden el derecho a una alimentación adecuada y a la soberanía alimentaria.

Por lo antes expuesto, esta Asesora recomienda al Plenario la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 15 de agosto de 2019

JORGE MERONI
MIEMBRO INFORMANTE
PABLO D. ABDALA
ANDRÉS CARRASCO BRIOZZO
GONZALO CIVILA
MARÍA LUISA CONDE
ÁLVARO DASTUGUE
OSCAR DE LOS SANTOS

CARINA DÍAZ BARRETO
CRISTINA LÚSTEMBERG
LUCÍA RODRÍGUEZ
ABRAHAM RÉBORI
ALEJANDRO ZAVALA

_____

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. (Objeto de la ley).- El objeto de la presente ley es establecer un marco jurídico de referencia, que permita al Estado establecer políticas y estrategias para garantizar de manera permanente y con carácter de prioridad nacional "El Derecho a la Alimentación", la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población, para el disfrute de una vida sana y activa basada en un patrón de alimentación saludable.

Artículo 2°. (Objetivo de la ley).- Asegurar el ejercicio pleno del derecho humano a una alimentación adecuada, mediante la promoción de:

a) Un sistema alimentario sostenible para la alimentación saludable.

b) La agricultura familiar y pesca artesanal o a pequeña escala.

c) Condiciones que favorezcan el acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.

Artículo 3°.- La finalidad de esta ley es:

a) Declarar como prioridad nacional las políticas que permitan el alcance progresivo del derecho a la alimentación adecuada y saludable.

b) Fortalecer la capacidad institucional del Estado para que pueda garantizar el derecho a la alimentación de la población.

c) Establecer estrategias para superar el hambre y la malnutrición en todas sus formas con la finalidad de garantizar la salud y el bienestar de la población.

Artículo 4°. (Ámbito de aplicación).- Son titulares del derecho a la alimentación los habitantes del territorio nacional.

Las obligaciones derivadas del derecho a la alimentación son vinculantes para todas las personas jurídicas de Derecho Público.

Las personas físicas y las personas jurídicas regidas por el Derecho Privado, tienen la responsabilidad de evitar que sus acciones y decisiones produzcan un efecto negativo sobre el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, la Seguridad Alimentaria y Nutricional de cualquier persona.

El Estado promoverá la cooperación internacional y proporcionará la asistencia necesaria para asegurar la realización del derecho a la alimentación en otros países, en caso de encontrarse en condiciones de hacerlo.

Artículo 5°.- Principios rectores:

a) Participación: El Estado garantizará ámbitos de participación de las personas, a los efectos de que puedan ejercer el derecho a determinar su propio bienestar y a intervenir con voz en la planificación, formulación, implementación, vigilancia y evaluación de las decisiones que les afectan. Dicha participación podrá ser ejercida de manera directa o a través de organizaciones intermediarias que representan intereses específicos.

b) Rendición de cuentas: El Estado garantizará que las intervenciones estén basadas en información y métodos objetivos, cuenten con mecanismos de monitoreo, registro y evaluación permanentes, fomentando la transparencia en la acción pública, la auditoría social y que tomen en cuenta las necesidades reales de la población.

c) Igualdad: Conforme a los artículos 7º y 8º de la Constitución de la República, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y el ejercicio de sus derechos a una alimentación adecuada y saludable.

d) No discriminación: el Estado respetará, protegerá y garantizará el derecho a una alimentación adecuada sin discriminación alguna y protegerá especialmente a los grupos de personas en situación de mayor vulnerabilidad frente al ejercicio de su derecho a una alimentación adecuada. Cualquier distinción, exclusión o restricción impuesta por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión pública o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición que tenga como consecuencia u objetivo obstaculizar o restringir el ejercicio de cualquier individuo de su derecho a la alimentación, será considerado un acto ilegal y estará sujeto a sanciones conforme lo dispone la ley.

e) Empoderamiento: Las personas deben contar con el conocimiento, las atribuciones, la habillidad, la capacidad y el acceso necesarios para cambiar sus propias vidas, incluida la facultad de exigir al Estado reparaciones en caso de violación de este derecho. El Estado establecerá disposiciones específicas en materia de sensibilización, fortalecimiento de capacidades, educación y capacitación constante y dinámica en el derecho a la alimentación.

Artículo 6°. (Interpretación de la ley).- La interpretación del contenido de esta ley, así como la actuación de las autoridades será congruente con los instrumentos internacionales aplicables en la materia ratificados por el Estado, la Constitución de la República y las leyes nacionales.

Artículo 7°. (Aplicación de la interpretación más favorable).- Cuando se presenten diferentes interpretaciones acerca del alcance o existencia del derecho de la alimentación se deberá aplicar la interpretación más favorable.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

Artículo 8°.- A los fines de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones:

I.- Seguridad Alimentaria y Nutricional se define como la garantía de que los individuos, las familias y la comunidad en su conjunto, accedan en todo momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, principalmente producidos en el país en condiciones de competitividad, sostenibilidad y

equidad, para que su consumo y utilización biológica les procure óptima nutrición, una vida sana y socialmente productiva, con respeto de la diversidad cultural y preferencias de consumidores.

La seguridad alimentaria tiene cuatro componentes:

a) Disponibilidad: la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes, obtenidos a través de la producción del país o de importaciones (incluyendo la ayuda alimentaria).

b) Accesibilidad: El acceso de toda persona a los recursos adecuados, para adquirir alimentos apropiados y una alimentación saludable. El acceso es posible mediante la producción agrícola para el autoconsumo, por el acceso a ingresos para la compra de alimentos, por las ayudas alimentarias o por alguna combinación de éstas.

c) Utilización: La utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas.

d) Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, toda persona debe tener acceso a alimentos adecuados en todo momento aún en situación de crisis repentina de cualquier índole.

El concepto de estabilidad se refiere tanto al sentido de la disponibilidad como la del acceso económico y físico a la alimentación.

El Estado deberá ejercer control sobre los precios de los productos consumidos por las personas afectadas por enfermedades que requieran de una alimentación diferenciada.

II.- La Soberanía Alimentaria: Se entiende como el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a una alimentación sana y nutritiva para toda la población.

III.- Malnutrición: Se entiende por tal las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta de energía y/o nutrientes de una persona. La malnutrición abarca la desnutrición (emaciación, retraso del crecimiento e insuficiencia ponderal), los desequilibrios de vitaminas o minerales, el sobrepeso y la obesidad.

IV.- Adecuación: Los alimentos son considerados adecuados en términos de diversas variables, entre las que figuran la inocuidad, la calidad nutricional, la cantidad y la aceptación cultural de alimentos.

V.- Vulnerabilidad: Características y circunstancias de una comunidad y/o sistema que lo hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Los diversos aspectos de la vulnerabilidad surgen de factores físicos, sociales, económicos y ambientales.

VI.- Grupos de atención prioritaria: Incluye lactantes, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, personas que sufren enfermedades crónicas, población que vive en condiciones precarias, grupos en riesgo de marginación social y discriminación y cualquier otro grupo que pueda identificarse periódicamente.

VII.- Cantidad mínima de alimentos: Es la destinada a cubrir las necesidades nutricionales mínimas que permita al individuo vivir con dignidad, protegido contra el hambre y la malnutrición. Será establecida por el Ministerio de Salud Pública en base a la edad, condición de salud, ocupación del individuo y estado de vulnerabilidad.

VIII.- Sistema Alimentario: Es la suma de los diversos elementos, actividades y actores (medio ambiente, población, recursos, procesos, instituciones e infraestructuras) que, mediante sus interrelaciones, hacen posible la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos y cuyas decisiones y acciones tienen impacto sobre la nutrición, el estado de salud, el crecimiento socioeconómico, equidad y sostenibilidad ambiental.

IX.- Sistema Alimentario Sostenible: Se entiende como sistema alimentario sostenible para la alimentación saludable aquel que, desde una visión integral, provee de alimentos nutritivos y accesibles para toda la población y permite conservar la diversidad y productividad a lo largo del tiempo, de manera que no se comprometan las bases sociales, económicas y ambientales para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de las generaciones futuras. Requiere de un uso eficiente y ambientalmente responsable de la tierra y demás recursos naturales, de adecuadas técnicas de producción, almacenamiento, transformación, procesamiento y comercialización de alimentos, una adecuada gestión de las pérdidas y desperdicios de alimentos, así como de un rol responsable de los ciudadanos.

CAPÍTULO III

ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN

Artículo 9°. (Derecho a la Alimentación).- El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano de las personas, sea en forma individual o colectiva, de tener acceso a todo momento a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos con pertinencia cultural, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho humano comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el suministro de alimentos adecuados.

Artículo 10.- Condiciones para el ejercicio del derecho a la alimentación. Toda persona tiene el derecho a vivir en condiciones que le permitan:

I.- Alimentarse por sus propios medios, ya sea produciendo para autoconsumo, y/o accediendo a sistemas de distribución, procesamiento y comercialización eficientes.

II.- Tener la capacidad financiera para adquirir una cantidad suficiente de alimentos saludables y de calidad para satisfacer sus necesidades nutritivas.

III.- Acceder a alimentos adecuados en casos de acontecimientos imprevisibles o de fuerza mayor.

IV.- Acceder a alimentos que contribuyan a una dieta adecuada y saludable, para alcanzar un estado de bienestar nutricional en el cual todas las necesidades fisiológicas se encuentren satisfechas.

V.- Acceder a servicios de saneamiento y agua potable, como condición necesaria, para el libre ejercicio del derecho a la alimentación.

Artículo 11.- Disposiciones especiales.

I.- Los niños y niñas, los adolescentes y adultos mayores, en su condición de grupos de atención prioritaria, tienen derecho a una alimentación y nutrición adecuadas a su edad y a sus condiciones particulares.

II.- El Estado promoverá Programas de Alimentación en los centros de Educación Pública, Inicial, Primaria y Secundaria.

III.- Toda mujer tiene derecho a una alimentación y nutrición adecuadas durante el período de embarazo y lactancia. El Estado velará para que pueda ejercer ese derecho.

IV.- El Estado promoverá y protegerá la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continuada hasta los veinticuatro meses de edad.

V.- El Estado tiene la obligación de eliminar y prevenir todas las formas de discriminación contra la mujer en relación con la garantía del derecho a la alimentación, incluyendo el trato menos favorable hacia las mujeres por motivos de embarazo y maternidad y a promover la igualdad de género.

VI.- El Estado atenderá especialmente -con enfoque integral dentro del marco de las políticas nacionales, sectoriales y regionales- las políticas públicas orientadas a garantizar una alimentación adecuada de las niñas, niños y adolescentes.

VII.- Toda persona que padece hambre o desnutrición, o se encuentra en situación de riesgo de padecer hambre o desnutrición, tiene el derecho a recibir una cantidad mínima de alimentos necesarios conforme a su edad, sexo, condición de salud y ocupación.

CAPÍTULO IV

SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO

Artículo 12.- Las autoridades competentes adoptarán disposiciones reglamentarias para las medidas especiales o presentarán ante el Poder Legislativo una propuesta de legislación para prevenir y compensar prácticas discriminatorias por perjuicios causados en el ejercicio del derecho a la alimentación de grupos o individuos determinados.

El Estado garantizará el ejercicio del derecho humano a la alimentación, asegurando los cuatro pilares básicos de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: disponibilidad, accesibilidad, estabilidad y utilización de los alimentos.

Artículo 13.- Constituye un acto ilícito de la autoridad pública privar a cualquier persona de alimentos o los medios para adquirirlos.

Artículo 14.- Se penalizará la privación deliberada de alimentos introduciendo las enmiendas correspondientes al Código Penal si correspondiere.

Artículo 15.- El Estado revisará el marco administrativo y legislativo para que sea pertinente con miras a asegurar que las actividades de actores privados dentro de su competencia no infrinjan el derecho a la alimentación de los demás.

Artículo 16.- El presupuesto nacional del Estado asignará los recursos necesarios para implementar el derecho fundamental a la alimentación adecuada y saludable.

Artículo 17.- El Estado en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos, en caso de que dispongan de recursos limitados, tiene la obligación de dar prioridad a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Artículo 18.- El Estado establecerá sistemas de información y cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad, a fin de identificar los grupos y los hogares especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria y las causas de ello, considerando la malnutrición en todas sus formas.

Artículo 19.- Las autoridades públicas competentes deberán mantener y aumentar la producción de alimentos en el país, dentro de sus posibilidades, fortalecer la producción de alimentos saludables y nutritivos, organizar programas de capacitación y educación sobre las ventajas e importancia de diversificar la dieta, y entregar alimentos adecuados a las personas en situación de mayor riesgo.

Artículo 20.- El Estado está obligado a proveer a quienes no pueden acceder a una adecuada alimentación, la cantidad mínima de alimentos para dar plena efectividad al derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre y la malnutrición.

Artículo 21. (Derecho a la información).- El Estado tiene la obligación de informar a la población de los derechos establecidos en la ley y en normas de aplicación derivadas, apenas hayan entrado en vigencia, así como de otras medidas adoptadas para facilitar y promover la realización del derecho a la alimentación.

I.- A tales efectos empleará las formas y métodos más adecuados para difundir la información, incluidas las formas verbales (por ejemplo, a través de radios rurales y comunitarias).

II.- Establecerá un procedimiento simple, justo y accesible que permita a las personas recabar la información de relevancia para el ejercicio del derecho a la alimentación.

III.- Exigirá a las autoridades públicas pertinentes proporcionar la información solicitada dentro de un plazo breve.

Artículo 22.- El Estado incluirá en los planes de estudios de educación primaria y básica y en los programas de educación de adultos, así como en otros programas de capacitación y educación, material relacionado con la educación alimentaria y nutricional, el derecho a la alimentación y los principios de derechos humanos. A su vez, promoverá las ventajas e importancia de diversificar la dieta y el consumo de producción nacional de alimentos, en especial los provenientes de la agricultura familiar.

Artículo 23.- El Estado establecerá políticas dirigidas a la erradicación de la malnutrición y reducción de enfermedades producidas por carencia o exceso de alimentación en todo el territorio nacional, instaurando y reforzando acciones que

garanticen que toda la población acceda a las condiciones necesarias para alcanzar el desarrollo humano.

Se sancionará la privación deliberada de alimentos introduciendo, cuando así sea necesario, las enmiendas correspondientes a la normativa vigente.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Artículo 24.- El Estado establecerá o estipulará la creación de una autoridad nacional para el derecho a la alimentación que cumpla la función de órgano central de coordinación para la implementación del derecho en el ámbito nacional.

Artículo 25.- La autoridad Nacional para el Derecho a la Alimentación, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, tendrá los siguientes objetivos:

A) Promover y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población como medio para alcanzar la plena realización del Derecho Humano a la Alimentación adecuada y saludable.

B) Velar por la aplicación de los principios de derechos humanos establecidos en la ley y en otros instrumentos jurídicos internacionales a los que haya adheridos el país.

C) Proponer objetivos, políticas y estrategias para el cabal cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación adecuada y saludable.

D) Tomar las medidas que aseguren la coordinación, colaboración y comunicación interinstitucional del Sistema.

E) Reunir información y datos que permitan cuantificar los esfuerzos que el Estado realiza y que inciden en la seguridad alimentaria y nutricional de los habitantes de la República.

F) Dar seguimiento, monitorear y evaluar sistemáticamente el avance y el estado de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país y adoptar las medidas que se consideren necesarias.

Artículo 26.- Los principales cometidos y poderes jurídicos de la autoridad nacional para el derecho a la alimentación serán:

A) Administrar el Sistema Nacional de Derecho a la Alimentación, Seguridad Alimentaria y Nutricional, asesorar al Poder Ejecutivo y las demás personas jurídicas de Derecho Público.

B) Coordinar las actividades y actores involucrados en la realización del derecho a la alimentación adecuada en el plano nacional, regional y local.

C) Proponer al Poder Ejecutivo el diseño, y revisión de las políticas públicas en materia del derecho a la alimentación adecuada para garantizar la armonía entre el cumplimiento de los estándares internacionales y las necesidades de la población.

D) Recomendar un orden de prioridades y coordinar la asignación de recursos en conformidad con las mismas.

E) Presentar ante el Ministerio competente o los órganos del Estado correspondiente, proyecto de ley; disposiciones reglamentarias o políticas relativas al derecho a la alimentación adecuada o uno de sus componentes (accesibilidad, disponibilidad y adecuación de los alimentos); así como enmiendas a las leyes, los reglamentos o las políticas vigentes.

F) Presentar anualmente informes ante el Parlamento sobre el estado de aplicación de la Ley Marco de Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

G) Presentar informes al Parlamento sobre el estado de aplicación de la Ley Marco y del Derecho a la Alimentación, así como las observaciones finales de los órganos de vigilancia de los tratados internacionales que han evaluado la actividad del país en materia del derecho a la alimentación.

H) Promover procesos de diálogo para canalizar las propuestas e iniciativas provenientes de la sociedad civil.

I) Promover la cooperación técnica con otros países, ofreciendo orientación y apoyo sobre la realización del Derecho a la Alimentación.

Artículo 27. (Composición).- La coordinación y toma de decisiones debe reflejar el carácter multisectorial del derecho a la alimentación: Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Salud Pública, de Educación y Cultura, de Desarrollo Social, de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas, de Vivienda y Medio Ambiente, de Industria, Energía y Minería y el Congreso Nacional de Intendentes.

La ley regulará la participación con carácter consultivo de actores no gubernamentales: institutos de investigación y estadísticas, universidades, representantes de la sociedad civil y del sector privado.

Artículo 28.- El Estado a través de los órganos con potestad normativa adecuará, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas relativas al derecho a la alimentación previsto en los tratados internacionales ratificados por el país.

Artículo 29.- El Poder Ejecutivo deberá adoptar mecanismos regulatorios para hacer efectivos los contenidos de la presente ley.

Sala de la Comisión, 15 de agosto de 2019

JORGE MERONI
MIEMBRO INFORMANTE
GONZALO CIVILA
MARÍA LUISA CONDE
ÁLVARO DASTUGUE
OSCAR DE LOS SANTOS
CARINA DÍAZ BARRETO
CRISTINA LÚSTEMBERG
LUCÍA RODRÍGUEZ

- 13 -

ABRAHAM RÉBORI
ALEJANDRO ZAVALA
PABLO D. ABDALA, con salvedades que expondrá en Sala.
ANDRÉS CARRASCO BRIOZZO, con salvedades que expondrá en Sala.

=

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

REPARTIDO Nº 1209
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 4130 DE 2019

DETENIDOS DESAPARECIDOS

Se comete su búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

———

PODER EJECUTIVO

Montevideo, 12 de agosto de 2019

Señora Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir a su consideración, el proyecto de ley por el cual se comete a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) la búsqueda de detenidos desaparecidos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley tiene por objetivo medular asignar la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas, tanto en el período de actuación ilegítima del Estado como durante el terrorismo de Estado en nuestro país, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

En mayo del 2015, el Poder Ejecutivo creó por Decreto N° 131/015 de 19 de mayo de 2015, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia en la órbita de la Presidencia de la República, a los efectos de esclarecer los crímenes de lesa humanidad acaecidos en el país en los períodos establecidos en la Ley N° 18.596, de 18 de setiembre de 2009.

Proponía así un amplio y ambicioso objetivo que, entre otros, comprendía la investigación conducente a determinar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el referido período histórico del país, el relevamiento y digitalización de acervos documentales relevantes en la materia, así como la logística para apoyar las acciones que el Poder Judicial lleva adelante.

Tal experiencia ha permitido, entre otros aspectos, evaluar cuáles serían los requerimientos institucionales que posibilitarían avanzar sustantivamente en la búsqueda de la verdad de lo sucedido con los detenidos desaparecidos.

Por tanto, acercándose el cumplimiento del período de gobierno, el Poder Ejecutivo entiende necesario dar un paso en el desarrollo y consolidación institucional en la materia, que permita cumplir cabalmente con la responsabilidad estatal pendiente que conlleva dar una respuesta satisfactoria a las familias de los detenidos desaparecidos, dentro y fuera de fronteras.

Según el informe presentado oportunamente por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, el número de personas que se encuentran en esa condición, asciende a 196, sin perjuicio que a la fecha existe un número de casos denunciados en los que no se puede descartar fehacientemente esa calidad restan muchas respuestas por dar.

La experiencia acumulada hasta la fecha, que transcurre por diferentes ejercicios que -por múltiples razones- resultaron insuficientes o inadecuados para alcanzar la investigación de la verdad sobre las circunstancias de desaparición y la ubicación de los restos, indica que debe asumirse la necesidad de conferir tal mandato a un espacio con solidez y permanencia institucional que, por su autonomía e independencia dentro de la estructura estatal, garantice el avance objetivo en la búsqueda de la verdad de lo acaecido con el destino de los detenidos desaparecidos.

En efecto, del recorrido cumplido hasta el momento surge la necesidad de asumir que la labor de esclarecimiento y búsqueda de las personas detenidas desaparecidas, requiere estar ubicada en la órbita de un órgano estatal que actúe con el mayor respaldo institucional y político, mediante un mandato legal expreso que le otorgue poderes jurídicos especiales y con presupuesto adecuado, capacidades técnicas específicas y disposición de personal que le permita, a la mayor brevedad posible, avanzar en su realización.

El proyecto de ley que se pone a consideración del Poder Legislativo innova en la solución institucional y propone designar para este trascendente cometido a una institución autónoma del Poder Ejecutivo. Se recoge así, como ya se indicara, la experiencia acumulada hasta ahora en materia de búsqueda en la órbita del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y sus antecesores, brindándole a la INDDHH, al mismo tiempo que la responsabilidad de llevar adelante este fin, el marco legal adecuado con poderes jurídicos explícitos y los recursos apropiados para cumplir tal tarea.

En ese sentido, el artículo primero encomienda a la INDDHH el cometido de la búsqueda de detenidos desaparecidos, incluyendo el esclarecimiento de las circunstancias de lo acaecido.

El artículo segundo dispone que es la propia INDDHH quien puede organizar el cumplimiento del trabajo, de acuerdo a sus decisiones orgánicas.

En los artículos tercero a noveno, se establecen los poderes más amplios para garantizar el eficaz y autónomo cumplimiento de su cometido, dentro de los parámetros de actuación que impone el Estado de Derecho y las garantías constitucionales.

En los artículos décimo a décimo tercero, se establecen las condiciones para la continuidad de las tareas que actualmente se llevan a cabo en la órbita del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, incluidos los convenios suscriptos con la Universidad de la República.

En el artículo décimo cuarto se comete al Ministerio de Educación y Cultura, través de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales el seguimiento del estado de sentencias y causas en la materia, tanto de carácter nacional como internacional.

En el artículo décimo quinto, se establece el poder de colaboración con la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

Por último, en el artículo décimo sexto se establece la continuidad de recursos y presupuesto ya asignados por la Presidencia de la República.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con la mayor estima y consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
EDUARDO BONOMI
ARIEL BERGAMINO
DANILO ASTORI
JOSÉ BAYARDI
MARÍA JULIA MUÑOZ
VÍCTOR ROSSI
GUILLERMO MONSECCHI
ERNESTO MURRO
JORGE BASSO

ENZO BENECH
LILIAM KECHICHIAN
ENEIDA DE LEÓN
MARINA ARISMENDI

_____

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Cométese a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado ocurrida entre el 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985.

La tarea que se comete comprende la investigación de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición y la ubicación de los restos.

Artículo 2º.- La INDDHH podrá delegar en uno o más de sus directores, total o parcialmente, la implementación del cometido asignado por esta ley.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo dispondrá asimismo las contrataciones de personal necesarias para dar cumplimiento a la tarea encomendada por el artículo 1º de la presente ley. Tales contrataciones no estarán limitadas a personas provenientes de la función pública.

La INDDHH podrá asimismo hacerse asesorar por expertos nacionales e internacionales con especial versación en las temáticas relativas al cometido estipulado en el artículo 1º de la presente ley.

Artículo 3º.- A los efectos del cumplimiento del cometido establecido en esta ley, no será de aplicación la inhibición prevista por el artículo 6º de la Ley N° 18.446, de 24 de diciembre de 2008.

Artículo 4º.- Para llevar adelante su tarea, la INDDHH dispondrá de todas las facultades y competencias que le otorga la Ley Nº 18.446, especialmente las previstas en su artículo 35, con las modificaciones dispuestas por la presente.

Artículo 5º.- Habilítase a la INDDHH a suscribir los convenios necesarios, tanto en el ámbito nacional como internacional para dar cumplimiento al mandato del artículo 1º de la presente.

Artículo 6º.- La INDDHH, a través de los miembros designados para la tarea que se comete, tendrá acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos de instituciones públicas o privadas que pudieren ser relevantes para la búsqueda de la verdad de lo sucedido con las víctimas de desapariciones forzadas.

Podrá también requerir copia de tales archivos debiéndosele remitir las mismas en su integridad sin que se puedan oponer criterios de secreto, confidencialidad o reserva de todo o parte de su contenido, conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008.

La información o copias requeridas deberán ser entregadas en los plazos indicados por la INDDHH. La negativa a cumplir con lo requerido por la INDDHH constituirá el delito previsto por el artículo 173 del Código Penal.

La INDDHH deberá mantener reserva respecto de la información recabada que no fuere relevante para el cumplimiento de su mandato y también respecto a aquella relacionada con las personas de las que ha recibido colaboración.

Artículo 7º.- Para el cumplimiento del cometido conferido por la presente Ley podrá exigir el acceso irrestricto a todos los lugares y establecimientos que se consideren relevantes para las investigaciones en curso.

La negativa a cumplir con lo requerido por la INDDHH constituirá el delito previsto por artículo 173 del Código Penal.

Artículo 8º.- La INDDHH estará facultada para citar a funcionarios del Estado, así como a particulares para que presten declaración ante los miembros de la INDDHH que lleven adelante el cometido conferido por la presente ley.

La concurrencia será obligatoria siendo pasible de aplicación lo dispuesto en el artículo 173 del Código Penal en caso de inasistencia injustificada.

La declaración que se formule en esta instancia estará sujeta a lo dispuesto por el artículo 180 del Código Penal, lo que se hará saber al compareciente.

Artículo 9º.- Sin perjuicio de lo establecido por el literal D) del artículo 35 de la Ley N° 18.446, se podrá requerir de los órganos competentes del Estado la adopción de las medidas precautorias pertinentes a fin de asegurar la concurrencia de personas ante la INDDHH cuyo testimonio sea relevante para las investigaciones, todo ello conforme el procedimiento y requisitos previstos en los artículos 306 y siguientes del Código General del Proceso o artículos 216, 221 y 222 del Código del Proceso Penal, en lo que fuere aplicable.

Artículo 10.- En la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos se dará continuidad a las tareas arqueológicas que al presente lleva a cabo el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, definiéndose en lo sucesivo conforme el plan estratégico que diseñe la INDDHH para el cumplimiento del cometido asignado. A tales efectos se le confieren amplias facultades para disponer las exhumaciones de carácter administrativo, en predios públicos o privados, que sean necesarias.

Artículo 11.- Los archivos y repositorios documentales existentes en la órbita del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia pasarán en su totalidad a la INDDHH.

Artículo 12.- La Presidencia de la República continuará con las tareas de digitalización de toda la información existente sobre la materia y se la entregará a la INDDHH que oficiará como repositorio.

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo mantendrá los convenios ya suscritos con la Universidad de la República en cuanto a los archivos y testimonios y en su caso los renovará o realizará otros nuevos, a los efectos de contar con un relevamiento exhaustivo. El resultado de dichos trabajos será depositado en la INDDHH.

Artículo 14.- Cométese al Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Regístrales el seguimiento del estado de cumplimiento de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, de carácter nacional o internacional, así como de las recomendaciones dictadas por los organismos de supervisión en la materia, así como del estado de situación de causas, juicios y denuncias a nivel nacional, sin perjuicio de los cometidos de la INDDHH y de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

Artículo 15.- La INDDHH mantendrá una comunicación directa con la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, creada por la Ley Nº 19.550, de 25 de octubre de 2017, en función de las necesidades que identifique en el cumplimiento del actual mandato legal que se le confiere.

Artículo 16.- Hasta tanto no se proceda a la sanción del presupuesto de la INDDHH de acuerdo con los artículos 74 y siguientes de la Ley Nº 18.446, el Poder Ejecutivo mantendrá los recursos financieros que permitan cumplir con el cometido de esta ley, sobre la base de lo provisto a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.

Montevideo, 12 de agosto de 2019

EDUARDO BONOMI
ARIEL BERGAMINO
DANILO ASTORI
JOSÉ BAYARDI
MARÍA JULIA MUÑOZ
VÍCTOR ROSSI
GUILLERMO MONSECCHI
ERNESTO MURRO
JORGE BASSO
ENZO BENECH
LILIAM KECHICHIAN
ENEIDA DE LEÓN
MARINA ARISMENDI

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Cométese a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado ocurrida entre el 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985.

La tarea que se comete comprende la investigación de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición y la ubicación de los restos.

Artículo 2º.- La INDDHH podrá delegar en uno o más de sus directores, total o parcialmente, la implementación del cometido asignado por esta ley. La INDDHH dispondrá asimismo las contrataciones de personal necesarias para dar cumplimiento a la tarea encomendada por el artículo 1º de la presente ley. Tales contrataciones no estarán limitadas a personas provenientes de la función pública.

La INDDHH podrá asimismo hacerse asesorar por expertos nacionales e internacionales con especial versación en las temáticas relativas al cometido estipulado en el artículo 1º de la presente ley.

Artículo 3º.- A los efectos del cumplimiento del cometido establecido en esta ley, no será de aplicación la inhibición prevista por el artículo 6º de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008.

Artículo 4º.- Para llevar adelante su tarea, la INDDHH dispondrá de todas las facultades y competencias que le otorga la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, especialmente las previstas en su artículo 35, con las modificaciones dispuestas por la presente ley.

Artículo 5º.- Habilítase a la INDDHH a suscribir los convenios necesarios, tanto en el ámbito nacional como internacional para dar cumplimiento al mandato del artículo 1º de la presente ley.

Artículo 6º.- La INDDHH, a través de los miembros designados para la tarea que se comete, tendrá acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos de instituciones públicas o privadas que pudieren ser relevantes para la búsqueda de la verdad de lo sucedido con las víctimas de desapariciones forzadas.

Podrá también requerir copia de tales archivos debiéndosele remitir las mismas en su integridad sin que se puedan oponer criterios de secreto, confidencialidad o reserva de todo o parte de su contenido, conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008.

La información o copias requeridas deberán ser entregadas en los plazos indicados por la INDDHH. La negativa a cumplir con lo requerido por la INDDHH constituirá el delito previsto por el artículo 173 del Código Penal.

La INDDHH deberá mantener reserva respecto de la información recabada que no fuere relevante para el cumplimiento de su mandato y también respecto a aquella relacionada con las personas de las que ha recibido colaboración.

Artículo 7º.- Para el cumplimiento del cometido conferido por la presente ley podrá exigir el acceso irrestricto a todos los lugares y establecimientos que se consideren relevantes para las investigaciones en curso.

La negativa a cumplir con lo requerido por la INDDHH constituirá el delito previsto por el artículo 173 del Código Penal.

Artículo 8º.- La INDDHH estará facultada para citar a funcionarios del Estado, así como a particulares para que presten declaración ante los miembros de la INDDHH que lleven adelante el cometido conferido por la presente ley.

La concurrencia será obligatoria siendo pasible de aplicación lo dispuesto en el artículo 173 del Código Penal en caso de inasistencia injustificada.

La declaración que se formule en esta instancia estará sujeta a lo dispuesto por el artículo 180 del Código Penal, lo que se hará saber al compareciente.

Artículo 9º.- Sin perjuicio de lo establecido por el literal D) del artículo 35 de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, se podrá requerir de los órganos competentes del Estado la adopción de las medidas precautorias pertinentes a fin de asegurar la concurrencia de personas ante la INDDHH cuyo testimonio sea relevante para las investigaciones, todo ello conforme el procedimiento y requisitos previstos en los artículos 306 y siguientes del Código General del Proceso o artículos 216, 221 y 222 del Código del Proceso Penal, en lo que fuere aplicable.

Artículo 10.- En la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos se dará continuidad a las tareas arqueológicas que al presente lleva a cabo el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, definiéndose en lo sucesivo conforme el plan estratégico que diseñe la INDDHH para el cumplimiento del cometido asignado. A tales efectos se le confieren amplias facultades para disponer las exhumaciones de carácter administrativo, en predios públicos o privados, que sean necesarias.

Artículo 11.- Los archivos y repositorios documentales existentes en la órbita del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia pasarán en su totalidad a la INDDHH.

Artículo 12.- La Presidencia de la República continuará con las tareas de digitalización de toda la información existente sobre la materia y se la entregará a la INDDHH que oficiará como repositorio.

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo mantendrá los convenios ya suscritos con la Universidad de la República en cuanto a los archivos y testimonios y en su caso los renovará o realizará otros nuevos, a los efectos de contar con un relevamiento exhaustivo. El resultado de dichos trabajos será depositado en la INDDHH.

Artículo 14.- Cométese al Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales el seguimiento del estado de cumplimiento de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, de carácter nacional o internacional, así como de las recomendaciones dictadas por los organismos de supervisión en la materia, así como del estado de situación de causas, juicios y

denuncias a nivel nacional, sin perjuicio de los cometidos de la INDDHH y de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

Artículo 15.- La INDDHH mantendrá una comunicación directa con la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, creada por la Ley Nº 19.550, de 25 de octubre de 2017, en función de las necesidades que identifique en el cumplimiento del actual mandato legal que se le confiere.

Artículo 16.- Hasta tanto no se proceda a la sanción del presupuesto de la INDDHH de acuerdo con los artículos 74 y siguientes de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, el Poder Ejecutivo proveerá los recursos financieros que permitan cumplir con el cometido de esta ley, sobre la base de lo asignado a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 4 de setiembre de 2019.

LUCÍA TOPOLANSKY
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

=

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CARPETA Nº 3742 DE 2019

REPARTIDO Nº 1112
MARZO DE 2019

DERECHOS DE AUTOR

Modificación del artículo 29 de la Ley Nº 9.739

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Modifícase el artículo 29 de la Ley N° 9.739, de 17 de diciembre de 1939, con la redacción introducida por el artículo 10 de la Ley N° 17.616, de 10 de enero de 2003, el que quedará redactado de la siguiente forma (cuyo texto será el siguiente):

"ARTÍCULO 29.- Los colaboradores, en uso del derecho que consagra el artículo 26, pueden publicar, traducir o reproducir la obra, sin más condición que la de respetar la utilidad proporcional correspondiente a los demás.

Cuando se trate de una obra audiovisual se presumen coautores, salvo prueba en contrario: el director o realizador, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor del guión y diálogos, el compositor si lo hubiere, y el dibujante en caso de diseños animados.

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor, quien además queda investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, así como autorizado a decidir acerca de su divulgación.

Queda a salvo el derecho de los autores de las obras musicales o compositores, el director o realizador, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor del guión y diálogos y el dibujante en caso de diseños animados, a recibir una remuneración de carácter inalienable e irrenunciable sobre la comunicación pública de la obra audiovisual, incluida la exhibición pública de películas cinematográficas, así como el arrendamiento y la venta de los soportes materiales. Los obligados al pago de este derecho serán los usuarios de las obras, la administración del mismo se podrá realizar a través de sociedades de gestión colectiva, y los aranceles a fijar deberán ser justos y equitativos de acuerdo a los criterios que fije la reglamentación.

Sin perjuicio del derecho de los autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario, defender los derechos morales sobre la obra audiovisual.

Se presume, salvo pacto en contrario, que es productor de la obra audiovisual, la persona física o jurídica que aparezca acreditada como tal en la obra en forma usual.

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de las creaciones a que refiere el inciso sobre programas de ordenador y bases de datos del artículo 5° de la presente ley han cedido al productor en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales sobre las mismas, lo que implica la autorización para decidir sobre su divulgación y para ejercer los derechos morales sobre la misma.

Los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el productor realice o autorice la realización de modificaciones o versiones sucesivas de tales creaciones.

Cuando las creaciones a que refiere el inciso sobre programas de ordenador y bases de datos del artículo 5° de la presente ley, hayan sido realizadas en el marco de una relación de trabajo, sea pública o privada, cuyo objeto total o parcial tenga una naturaleza similar a la de dichas creaciones, se presume que el autor ha autorizado al empleador o comitente, en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales así como el ejercicio de los derechos morales, salvo pacto en contrario".

Montevideo, 27 de febrero de 2019

SEBASTIÁN SABINI
REPRESENTANTE POR CANELONES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El inciso cuarto del artículo 29 de la ley establece un derecho de remuneración a favor de algunos de los coautores de las obras audiovisuales definidos en el inciso segundo del referido artículo.

El hecho de que el texto actual no alcance entre sus beneficiarios a la totalidad designados como, coautores de la obra audiovisual en el inciso, comprendiendo solamente a los autores de las obras musicales o compositores", ha llevado a que se reclame su inclusión por considerar que existen las mismas razones para que los no comprendidos puedan ser beneficiarios del derecho.

Es así que ASOPROD (Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay) viene impulsando desde por lo menos el año 2011 la modificación de esa norma para incluir a todos -los coautores. Ya que cabe señalar que en el derecho comparado el director es el principal beneficiario del derecho de remuneración en las legislaciones de otros países.

Son numerosos los países de orientación jurídica continental que consagran ese derecho. Entre los países del continente que lo hacen cabe mencionar a Colombia (Ley N° 1835/2017 "Ley Pepe Sánchez"), Chile (Ley N° 20.959/2016, "Ley Ricardo Larrain"), y Argentina, en la que el derecho es producto de un acuerdo entre los sectores interesados que posee el aval del gobierno.

Se considera que el derecho de remuneración es la vía para lograr que los autores de las obras audiovisuales obtengan una compensación por su trabajo creativo proporcional al éxito comercial de la obra y a los ingresos que generan por su explotación las empresas productoras.

Dicho extremo resulta difícil determinar al momento en que los autores ceden por contrato sus derechos al productor a fin de hacer posible que pueda ser objeto de negociación comercial.

Cuando se negocia dicho contrato, en gran parte de los casos, y en especial cuando no se encuentran agremiados y pueden negociar en forma colectiva como ocurre en E.U.A., los autores se encuentran en una situación de desventaja ante el importante poder negociador de las empresas productoras.

La CISAC viene impulsando la adopción de un derecho de remuneración similar al que se pone a consideración, y en su accionar en ese sentido ha encargado a la reconocida especialista Raquel Xalabarder un trabajo en el que se estudian sus antecedentes, características y la formulación de una propuesta de norma que lo consagre (Se puede acceder a él en: https://es.cisac.org/Universidad-CISAC/Biblioteca/Estudios-y-guias/Estudio-de-remuneracion-audiovisual). Dicha propuesta coincide en muchos aspectos con la norma que se busca modificar con el presente proyecto, a la vez considera otros que por su importancia se considera necesario incorporar en el proyecto.

Ello supone cambios a la propuesta original que impulsa ASOPROD, que se remite a incluir en la lista de beneficiarios del derecho de remuneración a los directores y a los demás coautores de la obra audiovisual no incluidos en la actualidad entre sus beneficiarios.

La necesidad de que la norma legal regule alguna de las características más importantes de ese derecho de remuneración, se ve como necesaria a fin de evitar que la

falta de regulación impida su aplicación práctica como sucede con frecuencia con otras normas.

El proyecto abreva así de las diversas fuentes. Recoge los ejemplos del derecho comparado, en especial de las mencionadas leyes de Colombia y Chile así como de la experiencia Argentina y en especial sigue los aspectos más importantes del análisis y propuestas contenidas en el mencionado trabajo de Xalabarder. Ello no quita la atención puesta en las características propias de nuestro medio, en especial al estadio inicial de desarrollo de una industria audiovisual nacional que a pesar de ello viene demostrando su gran potencial y calidad.

A continuación alguna de las principales características que definen al derecho de remuneración que el proyecto tiene por objetivo reformar y regular a fin de volverlo efectivo.

Se propone una remuneración cuyos beneficiarios serán, como se ha dicho, todos los coautores de la obra audiovisual. Se trata de un derecho que la mencionada autora Xalabarder nomina como "residual", en el sentido anotado anteriormente de que consiste en una contrapartida complementaria por la transferencia de los derechos de explotación de la obra a los productores y se suma al precio pactado por tal cesión. Es decir que se trata de un derecho que surge luego de que los autores de audiovisuales cedan su derecho al productor y que complementa la remuneración prevista en el contrato de cesión. Su razón de ser es remunerar a los autores por la totalidad de los usos de la obra, así como los ingresos obtenidos por su explotación, que no han sido previstos a la fecha de la firma del contrato. Por lo tanto no se descarta que el contrato de cesión tome en consideración la existencia del derecho de remuneración establecido en la ley.

Se incorporan dos características fundamentales para asegurar la efectividad del derecho. Este deberá ser inalienable a fin de que los autores no puedan verse obligados a transferirlo a los productores junto con demás derechos cediendo ante el poder negociador con que en general cuentan las grandes productoras. A la vez y por las mismas razones se propone que el derecho de remuneración sea irrenunciable, opción que si se deja abierta supondría en gran cantidad de casos transformarlo en letra muerta. Ello implica un cambio importante en la norma actual ya que la misma culmina con la expresión "salvo pacto en contrario"; la que por lo expuesto abre la puerta para que ese derecho no se ejerza en la práctica, en la medida queda abierta la posibilidad de cederlo a los productores.

En cuanto a su administración se habilita en forma expresa la posibilidad de que su gestión se realice a través de sociedades de gestión colectiva al igual de lo que ocurre en el caso del derecho de remuneración a favor de los artistas intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas del artículo 39 literal D) inciso final (en la redacción del artículo 11 de la Ley N° 17.616, de 10 de enero de 2003). Ese antecedente así como la consideración del incipiente desarrollo de nuestra industria audiovisual, la falta de experiencia en la materia, y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, que podrían abrir posibilidades a otros modelos de gestión, entre otras circunstancias; han llevado a optar por apartarse de imponer la gestión colectiva en forma obligatoria a diferencia de la propuesta de la referida autora.

No se establece una forma de reparto de lo recaudado entre los coautores; definición que se deja en manos de los acuerdos que se definan en virtud de las distintas circunstancias de cada caso. Si ellos no se alcanzan, las diferencias se deberán resolver acudiendo a las vías previstas en la normativa vigente.

En cuanto a las tarifas a cobrar, se entendió oportuno completar, aunque sea mínimamente, las disposiciones que contiene nuestra normativa al respecto que se limita a establecer que los aranceles que fijan las sociedades de gestión colectiva deben ser "justos y equitativos" (artículo 58 de la ley en la redacción dada por el Ley N° 17.616 ya referida). Atendiendo a la falta de experiencia legislativa en la materia y las incertidumbres sobre la futura aplicación práctica del derecho que se da también a este respecto; se optó por dejar a la reglamentación la tarea de definir los criterios generales para la fijación de aranceles en base a los dos principios que la ley marca.

Los obligados al pago serán los usuarios finales tal como acontece en el caso de los intérpretes y productores de fonogramas previsto en el citado artículo 39 de nuestra ley, así como en casi la unanimidad del derecho comparado y en el trabajo mencionado. Cabe aclarar que por usuarios no se entiende a los consumidores finales, sino a quiénes en el desarrollo de una actividad comercial obtienen licencias de los titulares del derecho para distintos usos de las obras (salas de cine, radiodifusoras de TV, plataformas de Internet, etc.).

La norma proyectada comprende a todos los audiovisuales. Al respecto las definiciones más aceptadas sobre el concepto de obra audiovisual son comprensivas de todo tipo de ellas, incluyendo a las obras cinematográficas y a las demás "expresadas por medios similares a la cinematografía" (Convenio de Berna artículo 2(1)).

En cuanto a los actos de explotación a los que el derecho de remuneración se aplica, la redacción actual incluye en primer lugar a la comunicación pública de la obra audiovisual. La que de acuerdo a la definición aportada por el artículo 2º de la Ley N° 17.616 comprende con amplitud los tipos de actos comprendidos incluyendo los definidos como de "puesta a disposición" del público que comprende los usos en línea ("on-line") en especial por Internet. La norma especifica que se encuentran incluidos también entre los actos de comunicación "la exhibición pública de películas cinematográficas". En segundo lugar incluye los actos de distribución y arrendamiento comercial soportes materiales. (Se ha entendido que ese alcance del derecho y sus delimitaciones responde a que los beneficiarios actuales son los "autores de las obras musicales o compositores", por lo que al incluir a la totalidad de los coautores el derecho de remuneración se aplica a todos los actos de explotación de la obra a los actos de reproducción. Es decir que comprende además de los mencionados los derechos de reproducción, y la totalidad de los derechos de distribución).

Finalmente, a los efectos de una mayor claridad y de evitar confusiones, la norma propuesta consiste en una nueva redacción para la totalidad del artículo 29 aunque las modificaciones se circunscriben al derecho de remuneración contenido en su inciso. Es por ello que a los efectos de una mejor comprensión destaca además en mayor tamaño de letra el texto modificado.

Montevideo, 27 de febrero de 2019

SEBASTIÁN SABINI
REPRESENTANTE POR CANELONES

=

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CARPETA Nº 3742 DE 2019

ANEXO I AL REPARTIDO Nº 1112 SETIEMBRE DE 2019

DERECHOS DE AUTOR

Modificación del artículo 29 de la Ley Nº 9.739

I n f o r m e

COMISIÓN DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

I N F O R M E

Señores Representantes:

La Comisión de Educación y Cultura recomienda al Plenario aprobar el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 29 de la Ley Nº 9.739 sobre derechos de autor. El mismo busca resolver un problema vinculado a la remuneración de los derechos de coautoría de las obras audiovisuales.

En el transcurso del debate parlamentario hemos recibido a la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, que han promovido esta modificación desde el año 2011. A la Presidenta del Consejo de Derecho de Autor, doctora Silvia Pérez. Al Núcleo de Recursos Educativos y Accesibles y Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de la República (REA) (PROEVA). A la Cámara Uruguaya de Televisión por Abonados. Al Consejo Directivo de CAMBADU. A Creative Commons Uruguay y al Centro Cinematográfico del Uruguay.

La norma que se proyecta comprende a todas las creaciones audiovisuales, que según se expresa en el Convenio de Berna en su artículo 2, son comprensivas de todo tipo de ellas, incluyendo las cinematográficas y las expresadas por otros medios similares a la cinematografía.

El texto que ponemos en consideración tiene algunas modificaciones a la luz de las delegaciones que hemos recibido en el período transcurrido entre la presentación del proyecto original y su aprobación. Podemos decir, en términos generales, que la mayoría de ellas acuerdan con el mismo aunque no todas las solicitudes fueron recogidas. El proyecto tuvo mejoras y es parte de la construcción de nuestro sistema parlamentario y por lo tanto de nuestra democracia.

La nueva redacción nuclea a los diferentes creadores audiovisuales, que antes tenían una definición variada -director o realizador, autor del argumento, autor de la adaptación, el autor del guión y diálogos, y dibujante-, en las categorías de director y guionista a la vera de la realidad de nuestro país.

Asimismo asegura su derecho de constituir una entidad de gestión colectiva o delegar dicha actividad en alguna de las ya existentes. Por último, se establece que cuando la obra audiovisual sea publicada o distribuida al público por el productor en forma no comercial onerosa, como puede ocurrir en el ámbito educativo, no corresponde la remuneración.

Dos aspectos fundamentales quedarán sujetos a la reglamentación, en primer lugar el criterio de reparto de lo recaudado y en segundo el volumen de los aranceles que se consideren, debiendo resolverse por las vías previstas en la normativa vigente, aunque se establece que esta última será justa y equitativa.

Vale destacar que el mismo fue aprobado por unanimidad de los partidos presentes al momento de votar.

Sala de la Comisión, 11 de setiembre de 2019.

SEBASTIÁN SABINI
MIEMBRO INFORMANTE
GRACIELA BIANCHI
ALBA CARVALLO SENA
ANÍBAL MÉNDEZ

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Modifícase el artículo 29 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1939, con la redacción introducida por el artículo 10 de la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 29.- Los colaboradores, en uso del derecho que consagra el artículo 26, pueden publicar, traducir o reproducir la obra, sin más condición que la de respetar la utilidad proporcional correspondiente a los demás.

Cuando se trate de una obra audiovisual se presumen coautores, salvo prueba en contrario: el director o realizador, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor del guión y diálogos, el compositor si lo hubiere, y el dibujante en caso de diseños animados.

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor, quien además queda investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, así como autorizado a decidir acerca de su divulgación.

Los autores de las obras musicales o compositores tendrán derecho a recibir una remuneración por la comunicación pública de la obra audiovisual, incluida la exhibición pública de películas cinematográficas, así como el arrendamiento y la venta de los soportes materiales. Se consagra asimismo, en forma independiente, el derecho a una remuneración en iguales términos en favor de los directores y guionistas. Para el ejercicio de este derecho, los directores y guionistas podrán constituir una entidad de gestión colectiva conforme a la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1939, en la redacción dada por la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003, pudiendo delegar la recaudación de dicha remuneración en otra entidad de gestión colectiva de creadores. Tanto la remuneración para los autores de obras musicales o compositores, como para directores y guionistas tendrán carácter irrenunciable e inalienable. Cuando la obra audiovisual sea publicada, comunicada o distribuida al público por el productor en forma no comercial, no onerosa, no corresponderá el pago de dicha remuneración.

Sin perjuicio del derecho de los autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario, defender los derechos morales sobre la obra audiovisual.

Se presume, salvo pacto en contrario, que es productor de la obra audiovisual, la persona física o jurídica que aparezca acreditada como tal en la obra en forma usual.

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de las creaciones a que refiere el inciso sobre programas de ordenador y bases de datos del artículo 5° de la presente ley han cedido al productor en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales sobre las mismas, lo que implica la autorización para decidir sobre su divulgación y para ejercer los derechos morales sobre la misma.

Los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el productor realice o autorice la realización de modificaciones o versiones sucesivas de tales creaciones.

Cuando las creaciones a que refiere el inciso sobre programas de ordenador y bases de datos del artículo 5° de la presente ley, hayan sido realizadas en el marco de una relación de trabajo, sea pública o privada, cuyo objeto total o parcial

tenga una naturaleza similar a la de dichas creaciones, se presume que el autor ha autorizado al empleador o comitente, en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales así como el ejercicio de los derechos morales, salvo pacto en contrario".

Sala de la Comisión, 11 de setiembre de 2019

SEBASTIÁN SABINI
MIEMBRO INFORMANTE
GRACIELA BIANCHI
ALBA CARVALLO SENA
ANÍBAL MÉNDEZ

A P É N D I C E

Disposición referida

LEY Nº 9.739, DE 17 DE DICIEMBRE DE 1939

CAPITULO IV

Colaboración

Artículo 29.- Los colaboradores, en uso del derecho que consagra el artículo 26, pueden publicar, traducir o reproducir la obra, sin más condición que la de respetar la utilidad proporcional correspondiente a los demás.

Cuando se trate de una obra audiovisual se presumen coautores, salvo prueba en contrario: el director o realizador, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor del guión y diálogos, el compositor si lo hubiere, y el dibujante en caso de diseños animados.

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor, quien además queda investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, así como autorizado a decidir acerca de su divulgación.

Queda a salvo el derecho de los autores de las obras musicales o compositores a recibir una remuneración sobre la comunicación pública de la obra audiovisual, incluida la exhibición pública de películas cinematográficas, así como el arrendamiento y la venta de los soportes materiales, salvo pacto en contrario.

Sin perjuicio del derecho de los autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario, defender los derechos morales sobre la obra audiovisual.

Se presume, salvo pacto en contrario, que es productor de la obra audiovisual, la persona física o jurídica que aparezca acreditada como tal en la obra en forma usual.

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de las creaciones a que refiere el inciso sobre programas de ordenador y bases de datos del artículo 5º de la presente ley han cedido al productor en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales sobre las mismas, lo que implica la autorización para decidir sobre su divulgación y para ejercer los derechos morales sobre la misma. Los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el productor realice o autorice la realización de modificaciones o versiones sucesivas de tales creaciones.

Cuando las creaciones a que refiere el inciso sobre programas de ordenador y bases de datos del artículo 5º de la presente ley, hayan sido realizadas en el marco de una relación de trabajo, sea pública o privada, cuyo objeto total o parcial tenga una naturaleza similar a la de dichas creaciones, se presume que el autor ha autorizado al empleador o

comitente, en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales así como el ejercicio de los derechos morales, salvo pacto en contrario.

=

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

REPARTIDO Nº 1208
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 4126 DE 2019

LIBERTAD VIGILADA

Regulación

PODER EJECUTIVO

Montevideo, 29 de julio de 2019

Señora Presidenta de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese alto Cuerpo a fin de remitir para su consideración, el proyecto de ley sobre libertad vigilada que tiene por finalidad regular en qué casos y bajo qué condiciones procede dicho Instituto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Luego del tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (Ley N° 19.293, de fecha 19 de diciembre de 2014 y sus modificativas), se han detectado por parte de los operadores del sistema actuando en el marco de la "Comisión para el seguimiento de la implementación del Sistema Procesal Penal", una serie de distorsiones que afectan el funcionamiento racional de la reforma.

El artículo 18 de la Ley N° 19.653, de fecha 17 de agosto de 2018 dispuso: "Créase una Comisión para el seguimiento de la implementación del Sistema Procesal Penal, de carácter permanente y consultivo, que tendrá como cometido procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal, a través de proposiciones técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación, así como la acción mancomunada de las instituciones en ella representadas.

La Comisión estará integrada por el Ministro del Interior, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia que esta designe y el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.

Corresponderá especialmente a esta Comisión:

1) Realizar, por sí o a través de las instituciones integrantes de la misma, los estudios técnicos y formular las propuestas que faciliten y optimicen la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal.

2) Hacer el seguimiento y evaluación del proceso de implementación de la reforma procesal.

3) Elevar a la Asamblea General un informe semestral, a través del cual se informará el proceso de implementación y se sugerirán posibles reformas legislativas relativas al sistema procesal penal".

La citada Comisión ha consensuado y elaborado en el marco de sus competencias, el presente proyecto a fin de optimizar el sistema en lo relativo a las "libertades vigiladas" establecidas en la Ley N° 19.446, de fecha 28 de octubre de 2016.

Esto, en tanto respecto a la utilización de las mismas se ha venido dando en el marco de los pactos que permite el nuevo Código del Proceso Penal, pasándose a aplicar así las llamadas "penas mixtas" (parte con cumplimiento efectivo, parte con libertad vigilada), desajuste producido justamente por la aplicación de un régimen previsto para el sistema procesal anterior.

Sobre el presente proyecto, cabe destacar que bloquea la utilización de las libertades vigiladas y las llamadas “penas mixtas” como herramientas de negociación para un elenco de delitos graves a partir de los cuales se detectó una aplicación inconveniente.

Asimismo, reduce a tres años de penitenciaría la pena máxima impuesta al condenado en relación a la cual se puede conceder el beneficio, manteniéndose la prohibición para reincidentes, reiterantes y habituales.

Por otra parte, en los supuestos en que resulte aplicable, dispone que la libertad vigilada procederá en todos los casos a solicitud de parte y será impuesta por el tribunal al dictar la sentencia definitiva de condena. El tribunal fijará el plazo de intervención que será igual al que correspondería cumplir en régimen de privación de libertad, así como las demás condiciones y medidas previstas en los artículos 7° y 8° del proyecto.

Asimismo, prevé que la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida (OSLA) presentará en un plazo de veinte días desde que se le notifica la sentencia condenatoria por el tribunal, el plan de intervención correspondiente.

Correlativamente se agrega que, cuando el tribunal disponga o deba disponer que la persona penada sometida al régimen de libertad vigilada deba portar un dispositivo de monitoreo electrónico, la medida se adoptará en los términos establecidos en el artículo 82 de la Ley N° 19.670, de fecha 15 de octubre de 2018.

Cabe subrayar que el proyecto consigna que en caso de incumplimiento de alguna de las medidas impuestas, la Fiscalía podrá, valorando las circunstancias del caso, solicitar al tribunal la revocación del beneficio, privando de la libertad al condenado por el saldo restante de la pena. La revocación deberá ser dispuesta de inmediato por el tribunal, sin necesidad de contar con la aquiescencia, vista previa o audiencia de la Fiscalía, en supuestos de incumplimiento grave, como ser la existencia de una formalización posterior.

Finalmente, se prevé que la norma entrará en vigencia en forma inmediata a su promulgación y que se aplicará a todas las causas en que se investiguen delitos cometidos con posterioridad a su vigencia.

Las causas penales en trámite a la fecha de entrada en vigencia del proyecto y las que se inicien para el esclarecimiento de delitos cometidos con anterioridad, continuarán rigiéndose por los artículos 2° a 12 de la Ley N° 19.446 citada y 9° de la Ley N° 17.726, de fecha 26 de diciembre de 2003, disposiciones que se derogan conforme lo establecido en el artículo 11 del proyecto.

TABARÉ VÁZQUEZ
EDUARDO BONOMI
RODOLFO NIN NOVOA
DANILO ASTORI
JOSÉ BAYARDI
MARÍA JULIA MUÑOZ
VÍCTOR ROSSI
GUILLERMO MONSECCHI
ERNESTO MURRO
JORGE BASSO

ENZO BENECH
LILIAM KECHICHIAN
ENEIDA DE LEÓN
MARINA ARISMENDI

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Las penas privativas de libertad podrán cumplirse en régimen de "libertad vigilada" (artículo 292.1 del Código del Proceso Penal) en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la presente ley.

Artículo 2°.- La libertad vigilada consiste en someter al penado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales. La vigilancia y orientación permanentes de lo establecido en este artículo estará a cargo de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, dependiente del Ministerio del Interior.

Artículo 3°.- La libertad vigilada podrá disponerse siempre que la pena privativa de libertad impuesta al condenado sea de prisión o no supere los tres años de penitenciaría.

Artículo 4°.- No procede la libertad vigilada en casos de reincidencia, reiteración o habitualidad.

Artículo 5°.- Sin perjuicio de lo anterior, tampoco podrá sustituirse la pena privativa de libertad por la libertad vigilada cuando se trate de alguno de los delitos que se enunciarán a continuación, sea éste tentado o consumado y cualquiera sea la forma de participación del penado:

A) Rapiña (artículo 344 del Código Penal).

B) Rapiña con privación de libertad. Copamiento (artículo 344 bis del Código Penal).

C) Extorsión (artículo 345 del Código Penal).

D) Secuestro (artículo 346 del Código Penal).

E) Homicidio doloso y sus agravantes (artículos 310, 311 y 312 del Código Penal).

F) Delitos previstos en los artículos 30 a 35 del Decreto-Ley N° 14.294, de fecha 3 de octubre de 1974 (y sus modificativas) cuando se de alguna de las circunstancias previstas en los artículos 35 bis y 36 del citado Cuerpo normativo.

G) Crímenes y delitos contenidos en la Ley N° 18.026, de fecha 4 de octubre de 2006.

H) Delitos previstos por los artículos 77 a 91 de la Ley N° 18.250, de fecha 6 de enero de 2008.

I) Delito previsto en el artículo 8° de la Ley N° 19.247, de fecha 15 de agosto de 2014.

Artículo 6°.- La libertad vigilada procederá en todos los casos a solicitud de parte y será impuesta por el tribunal al dictar la sentencia definitiva de condena. El tribunal fijará el plazo de intervención que será igual al que correspondería cumplir en régimen de privación de libertad.

La Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida presentará en un plazo de veinte días desde que se le notifica la sentencia condenatoria por el tribunal, el plan de intervención correspondiente.

Dicho plan deberá ser individual, comprender la realización de actividades tendientes a la reinserción social y laboral del penado, indicando los objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados.

Artículo 7°.- Al establecer la libertad vigilada el tribunal impondrá al condenado las siguientes condiciones:

A) Residencia en un lugar determinado donde sea posible la supervisión por la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida.

B) Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la referida Oficina.

C) Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria y comercio bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención.

D) Presentación una vez por semana en la Seccional Policial correspondiente al domicilio fijado conforme a lo dispuesto en el literal A) de este artículo.

Artículo 8°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior y de acuerdo a las circunstancias del caso, el tribunal dispondrá además, una o más de las siguientes medidas:

A) Si el penado presentara un consumo problemático de drogas o alcohol, se impondrá la obligación de asistir a programas de tratamiento de rehabilitación de dichas sustancias.

B) Prohibición de acudir a determinados lugares.

C) Prohibición de acercamiento a la víctima, a sus familiares u otras personas que determine el tribunal o mantener algún tipo de comunicación con ellas.

D) Obligación de mantenerse en el domicilio o lugar que el tribunal determine por espacio de hasta ocho horas diarias continuas.

E) Obligación de cumplir programas formativos laborales, culturales, de educación vial, sexual, de tratamiento de la violencia u otros similares.

Artículo 9°.- El tribunal podrá disponer que la persona penada sometida al régimen de libertad vigilada deba portar un dispositivo de monitoreo electrónico, en los términos establecidos en el artículo 82 de la Ley N° 19.670, de fecha 15 de octubre de 2018. No obstante, será preceptiva la medida si se tratare de penado por violencia doméstica, violencia basada en género, violencia intrafamiliar o delitos sexuales.

Si entendiere del caso podrá disponer que la víctima del delito porte dicho dispositivo, para cuya colocación requerirá su consentimiento.

Artículo 10.- En caso de incumplimiento de alguna de las medidas impuestas, la Fiscalía podrá, valorando las circunstancias del caso, solicitar al tribunal la revocación del beneficio, privando de la libertad al condenado por el saldo restante de la pena.

La violación grave del régimen de libertad vigilada deberá dar lugar a su revocación inmediata, sin necesidad de contar, con la aquiescencia, vista previa o audiencia de la Fiscalía (artículo 287 del Código del Proceso Penal). Se considerará violación grave la existencia de una formalización posterior (artículo 266.6 in fine del Código del Proceso Penal).

Artículo 11.- Deróganse los artículos 2° a 12 de la Ley N° 19.446, de fecha 28 de octubre de 2016 y el artículo 9° de la Ley N° 17.726, de fecha 26 de diciembre de 2003.

Artículo 12.- Estas normas entrarán en vigencia en forma inmediata a su promulgación, y se aplicarán a todas las causas en que se investiguen delitos cometidos con posterioridad a su vigencia.

Las causas penales en trámite a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y las que se inicien para el esclarecimiento de delitos cometidos con anterioridad, continuarán rigiéndose por las disposiciones a que refiere el artículo anterior.

Montevideo, 29 de julio de 2019

EDUARDO BONOMI
RODOLFO NIN NOVOA
DANILO ASTORI
JOSÉ BAYARDI
MARÍA JULIA MUÑOZ
VÍCTOR ROSSI
GUILLERMO MONSECCHI
ERNESTO MURRO
JORGE BASSO
ENZO BENECH
LILIAM KECHICHIAN
ENEIDA DE LEÓN
MARINA ARISMENDI

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

AJUSTES A LA LEY Nº 19.446, DE 28 DE OCTUBRE DE 2016

Artículo 1º.- Las penas privativas de libertad podrán cumplirse en régimen de "libertad vigilada" en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la presente ley.

Artículo 2º.- La libertad vigilada consiste en someter al penado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales. La vigilancia y orientación permanentes de lo establecido en este artículo estará a cargo de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, dependiente del Ministerio del Interior.

Artículo 3º.- La libertad vigilada podrá disponerse siempre que la pena privativa de libertad impuesta al condenado sea de prisión o no supere los tres años de penitenciaría.

Artículo 4º.- No procede la libertad vigilada en casos de reincidencia, reiteración o habitualidad.

Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo anterior, tampoco podrá sustituirse la pena privativa de libertad por la libertad vigilada cuando se trate de alguno de los delitos que se enunciarán a continuación, sea este tentado o consumado y cualquiera sea la forma de participación del penado:

A) Rapiña (artículo 344 del Código Penal).

B) Rapiña con privación de libertad. Copamiento (artículo 344 bis del Código Penal).

C) Extorsión (artículo 345 del Código Penal).

D) Secuestro (artículo 346 del Código Penal).

E) Homicidio doloso y sus agravantes (artículos 310, 311 y 312 del Código Penal).

F) Delitos previstos en los artículos 30 a 35 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, y sus modificativas, cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en los artículos 35 Bis y 36 del citado cuerpo normativo.

G) Crímenes y delitos contenidos en la Ley N° 18.026, de 4 de octubre de 2006.

H) Delitos previstos por los artículos 77 a 81 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008.

I) Delito previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 19.247, de 15 de agosto de 2014.

Artículo 6º.- La libertad vigilada procederá en todos los casos a solicitud de parte y será impuesta por el tribunal al dictar la sentencia definitiva de condena. El tribunal fijará el plazo de intervención que será igual al que correspondería cumplir en régimen de privación de libertad.

La Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida presentará en un plazo de veinte días desde que se le notifica la sentencia condenatoria por el tribunal, el plan de intervención correspondiente.

Dicho plan deberá ser individual, comprender la realización de actividades tendientes a la reinserción social y laboral del penado, indicando los objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados.

Artículo 7º.- Al establecer la libertad vigilada el tribunal impondrá al condenado las siguientes condiciones:

A) Residencia en un lugar determinado donde sea posible la supervisión por la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida.

B) Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la referida Oficina.

C) Presentación una vez por semana en la Seccional Policial correspondiente al domicilio fijado conforme a lo dispuesto en el literal A) de este artículo.

Artículo 8º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior y de acuerdo con las circunstancias del caso, el tribunal dispondrá, además, una o más de las siguientes medidas:

A) Si el penado presentara un consumo problemático de drogas o alcohol, se impondrá la obligación de asistir a programas de tratamiento de rehabilitación de dichas sustancias.

B) Prohibición de acudir a determinados lugares.

C) Prohibición de acercamiento a la víctima, a sus familiares u otras personas que determine el tribunal o mantener algún tipo de comunicación con ellas.

D) Obligación de mantenerse en el domicilio o lugar que el tribunal determine.

E) Obligación de cumplir programas formativos laborales, culturales, de educación vial, sexual, de tratamiento de la violencia u otros similares.

F) Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria y comercio bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención.

G) Prohibición de conducir vehículos.

H) Otras de carácter análogo que resulten adecuadas.

Artículo 9º.- El tribunal podrá disponer que la persona penada sometida al régimen de libertad vigilada deba portar un dispositivo de monitoreo electrónico, en los términos establecidos en el artículo 82 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018. No obstante, será preceptiva la medida si se tratare de penado por violencia doméstica, violencia basada en género, violencia intrafamiliar o delitos sexuales.

Si entendiere del caso podrá disponer que la víctima del delito porte dicho dispositivo, para cuya colocación requerirá su consentimiento.

Artículo 10.- En caso de incumplimiento de alguna de las medidas impuestas, la Fiscalía podrá, valorando las circunstancias del caso, solicitar al tribunal la revocación del beneficio, privando de la libertad al condenado por el saldo restante de la pena.

La violación grave del régimen de libertad vigilada deberá dar lugar a su revocación inmediata, sin necesidad de contar con la aquiescencia, vista previa o audiencia de la Fiscalía (artículo 287 del Código del Proceso Penal). Se considerará violación grave, entre otras, la existencia de una formalización posterior (artículo 266.6 in fine del Código del Proceso Penal).

Artículo 11.- Estas normas entrarán en vigencia en forma inmediata y se aplicarán a las causas por delitos cometidos con posterioridad a la misma.

A las causas penales en trámite a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y aquellas causas que se inicien con posterioridad por delitos cometidos con anterioridad a la misma, se aplicará lo dispuesto en los artículos 2 a 12 de la Ley Nº 19.446, de 28 de octubre de 2016 y el artículo 9 de la Ley Nº 17.726, de 26 de diciembre de 2003.

Artículo 12.- Deróganse todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

CAPÍTULO II
AJUSTES AL CÓDIGO DEL PROCESO PENAL

Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 39 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, por el siguiente:

> “ARTÍCULO 39. (Incompetencia por razón de lugar o de turno).- La incompetencia por razón de lugar o de turno no causa nulidad y solo puede hacerse valer por las partes en su primera comparecencia.
>
> No habrá prevención ni incompetencia por razón de lugar o turno durante la investigación preliminar”.

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 75 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, por el siguiente:

"ARTÍCULO 75. (Efectos de la ausencia del defensor).- La ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exija expresamente su participación, acarreará su nulidad, salvo cuando constare fehacientemente que su ausencia fue voluntaria y deliberada, para provocar la nulidad".

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 88 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, por el siguiente:

"ARTÍCULO 88. (Método para instar).- La instancia se formulará ante el Ministerio Público verbalmente o por escrito. También podrá deducirse por escrito, ante las autoridades con funciones de policía".

Artículo 16.- Sustitúyese el artículo 89 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, por el siguiente:

"ARTÍCULO 89. (Firma de la instancia).- La instancia podrá formularse mediante escrito firmado por su autor. Si no sabe o no puede firmar, el escrito se refrendará con la impresión dígito pulgar izquierda. A continuación se dejará constancia de que la persona conoce el texto del escrito y que ha estampado la impresión digital en su presencia y de conformidad".

Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 90 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, por el siguiente:

"ARTÍCULO 90. (Confirmación de la voluntad de instar).- Al inicio de las actuaciones, el Ministerio Público explicará a quien formuló la instancia el alcance de la misma. Si el declarante confirma su voluntad de instar, se la tendrá por bien formulada.

Si el que insta desiste, se le tendrá por renunciado a su derecho a instar y no podrá volver a hacerlo por los mismos hechos".

Artículo 18.- Sustitúyese el artículo 365 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal, por el siguiente:

"ARTÍCULO 365. (Exclusiones).- No se aplicarán al proceso penal las disposiciones del Código General del Proceso sobre medidas provisionales, ejecución provisional de sentencias definitivas recurridas o condenas procesales.

El recurso de apelación contra la admisión o el rechazo de la prisión preventiva, su sustitución o prórroga, contra el rechazo de la formalización de la investigación o del pedido de sobreseimiento instado por la defensa y contra las resoluciones sobre medios de prueba dictadas en audiencia, se interpondrá y sustanciará en la misma audiencia en la que se pronunció la recurrida.

El recurso se admitirá sin efecto suspensivo y la pieza correspondiente se elevará en cuarenta y ocho horas al tribunal de apelaciones. Este convocará a

audiencia de segunda instancia -presencial o por sistema de videoconferencia del Poder Judicial- para dentro de diez días desde la recepción de la pieza o resolverá dentro de quince días a partir de la misma.

No será nula la sentencia definitiva por haberse dictado estando pendiente la interlocutoria de segunda instancia que confirme la formalización o el rechazo del sobreseimiento".

Artículo 19.- Deróganse los artículos 140.3 y 362.3 del Código del Proceso Penal aprobado por Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014.

Artículo 20.- Agrégase al artículo 106 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, el siguiente inciso:

"(Del requerimiento de firma).- Aclárase que en los supuestos en los cuales la ley procesal penal requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma electrónica (Ley Nº 18.600, de 5 de noviembre de 2009). Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia".

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 3 de setiembre de 2019.

LUCÍA TOPOLANSKY
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

=

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CARPETA Nº 4131 DE 2019

REPARTIDO Nº 1210
SETIEMBRE DE 2019

OBELISCO – BATALLA DE LAS PIEDRAS

Se designa al Liceo Nº 3 de la ciudad de Las Piedras

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 5 de agosto de 2019

Señora Presidenta de la Asamblea General
Lucía Topolansky:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el cual se designa al Liceo Nº 3, de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones con el nombre "Obelisco - Batalla de las Piedras".

El Monumento llamado Obelisco ubicado en la ciudad de Las Piedras, del departamento de Canelones fue inaugurado el 25 de mayo de 1911 en conmemoración del Centenario de la Batalla de Las Piedras. La obra fue realizada por el escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari y conmemora una de las victorias más importantes del Ejército de nuestro Prócer General José Gervasio Artigas ante las tropas españolas, ocurrida el 18 de mayo de 1811 "Batalla de Las Piedras". El Obelisco se encuentra situado en el Parque Artigas, lugar donde habría ocurrido el emblemático enfrentamiento. La citada obra se orienta hacia el oeste sobre una planta rectangular de granito rosa con una plataforma rodeada de una baranda de hierro. Hacia el centro de la obra se levanta el Obelisco y en su base hay un altar de granito gris y en la parte superior la Victoria.

El escultor Juan Manuel Ferrari nació en la ciudad de Montevideo en 1874 y falleció en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina el 31 de octubre de 1916. Comenzó sus estudios en dichas ciudades con su padre, el escultor italiano Juan Ferrari, con quien inició sus primeros aprendizajes.

En 1890 obtuvo una beca del Gobierno uruguayo para estudiar en Europa, radicándose en la ciudad de Roma donde se perfeccionó estudiando con el Escultor Ettore Ferrari y con Ercole Rosa en el Real Instituto de Bellas Artes de aquella ciudad. Regresó a nuestro país en 1986 y estableció su propio taller. Pasó luego a vivir en Buenos Aires, donde instaló un taller en un lugar apartado de la ciudad. Entre sus obras más destacadas deben citarse el Obelisco de Las Piedras, el Monumento a Juan Antonio Lavalleja inaugurado en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, Monumento al Paso de los Andes del General San Martín, ubicado en la Provincia de Mendoza, Monumento al Ejército Libertador del General San Martín, realizado por encargo del Gobierno de la Provincia de Mendoza, República Argentina. También realizó numerosos monumentos funerarios, bustos y retratos como por ejemplo "Diógenes Hecquet".

La propuesta efectuada por el Equipo de la Dirección del Liceo, Cuerpo Docente y Comunidad Educativa, cuenta con los informes favorables de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

Por los fundamentos expuestos, se solicita a ese Cuerpo la atención del adjunto proyecto de ley, cuya aprobación se encarece.

Sin otro particular, saludo a la señora Presidenta y por su intermedio al resto de los integrantes de ese alto Cuerpo, con la mayor consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
MARÍA JULIA MUÑOZ

_____

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase con el nombre "Obelisco - Batalla de las Piedras" al Liceo Nº 3 de Las Piedras, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública.

Montevideo, 5 de agosto de 2019

MARÍA JULIA MUÑOZ

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase con el nombre "Obelisco - Batalla de las Piedras" el Liceo Nº 3 de Las Piedras, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 4 de setiembre de 2019.

LUCÍA TOPOLANSKY
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

=

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CARPETA Nº 4131 DE 2019

ANEXO I AL REPARTIDO Nº 1210 SETIEMBRE DE 2019

OBELISCO – BATALLA DE LAS PIEDRAS

Se designa al Liceo Nº 3 de la ciudad de Las Piedras

I n f o r m e

COMISIÓN DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

I N F O R M E

Señores Representantes:

La Comisión de Educación y Cultura recomienda al Plenario aprobar el proyecto de ley por el que se designa al Liceo Nº 3, de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones con el nombre "Obelisco - Batalla de las Piedras".

El Monumento llamado Obelisco ubicado en la ciudad de Las Piedras, del departamento de Canelones fue inaugurado el 25 de mayo de 1911 en conmemoración del Centenario de la Batalla de Las Piedras. La obra fue realizada por el escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari y conmemora una de las victorias más importantes del Ejército de nuestro Prócer General José Gervasio Artigas ante las tropas españolas, ocurrida el 18 de mayo de 1811 "Batalla de Las Piedras". El Obelisco se encuentra situado en el Parque Artigas, lugar donde habría ocurrido el emblemático enfrentamiento. La citada obra se orienta hacia el oeste sobre una planta rectangular de granito rosa con una plataforma rodeada de una baranda de hierro. Hacia el centro de la obra se levanta el Obelisco y en su base hay un altar de granito gris y en la parte superior la Victoria.

El escultor Juan Manuel Ferrari nació en la ciudad de Montevideo en 1874 y falleció en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina el 31 de octubre de 1916. Comenzó sus estudios en dichas ciudades con su padre, el escultor italiano Juan Ferrari, con quien inició sus primeros aprendizajes.

En 1890 obtuvo una beca del Gobierno uruguayo para estudiar en Europa, radicándose en la ciudad de Roma donde se perfeccionó estudiando con el Escultor Ettore Ferrari y con Ercole Rosa en el Real Instituto de Bellas Artes de aquella ciudad. Regresó a nuestro país en 1896 y estableció su propio taller. Pasó luego a vivir en Buenos Aires, donde instaló un taller en un lugar apartado de la ciudad. Entre sus obras más destacadas deben citarse el Obelisco de Las Piedras, el Monumento a Juan Antonio Lavalleja inaugurado en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, Monumento al Paso de los Andes del General San Martín, ubicado en la Provincia de Mendoza, Monumento al Ejército Libertador del General San Martín, realizado por encargo del Gobierno de la Provincia de Mendoza, República Argentina. También realizó numerosos monumentos funerarios, bustos y retratos como por ejemplo "Diógenes Hecquet".

La propuesta efectuada por el Equipo de la Dirección del Liceo, Cuerpo Docente y Comunidad Educativa, cuenta con los informes favorables de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

Por los fundamentos expuestos, solicitamos al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 11 de setiembre de 2019.

SEBASTIÁN SABINI
MIEMBRO INFORMANTE
GRACIELA BIANCHI
ALBA CARVALLO SENA
ANÍBAL MÉNDEZ

=

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

REPARTIDO Nº 1068
NOVIEMBRE DE 2018

CARPETA Nº 3504 DE 2018

ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA

M o d i f i c a c i ó n

- 1 -

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 11 de junio de 2018

Señora Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se actualiza la ley que regula el Estatuto del funcionario del Servicio Exterior de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se remite el presente proyecto de ley con la finalidad de actualizar el cuerpo normativo que constituye el denominado Estatuto del Servicio Exterior de la República, que conforme a lo que establece el artículo 59 literal A) de la Constitución de la República, los diplomáticos, así como los militares y los funcionarios policiales estarán exceptuados del Estatuto del Funcionario Público y en efecto deberán contar con un régimen que regule su particular actividad.

Es menester señalar que el Estatuto vigente, esto es, el Decreto- Ley N° 14.206, data del año 1974 y fue dictado en el período de la Dictadura Cívico-Militar, hace 44 años. Tanto la coyuntura política como las condiciones de índole funcional han cambiado sustantivamente, así como también el mundo y su efecto en las relaciones exteriores de nuestro país; todas estas son razones por las cuales resulta imperioso actualizar el referido cuerpo normativo. Por otra parte, muchas de las regulaciones existentes en el Estatuto han quedado obsoletas.

Es así que el Poder Ejecutivo ha dispuesto la revisión y actualización de la mencionada norma, por lo que a continuación se detallan las principales modificaciones.

El proyecto cuenta con cuarenta y cinco artículos, divididos en siete capítulos.

CAPÍTULO I

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA

En el artículo 1° se indica que el Estatuto se encuentra comprendido por el conjunto de normas que establecen los derechos, deberes y obligaciones del personal diplomático como tal. A su vez, se especifica que integran el Servicio Exterior de la República los funcionarios de carrera y los de particular confianza, en el marco de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 168 numeral 12 de la Constitución de la República.

El artículo 2° especifica que las funciones a cumplir por los funcionarios del Servicio Exterior son las funciones diplomáticas y consulares asignadas por el Poder Ejecutivo, tanto en la República como en el exterior.

El artículo 3° establece que son deberes especiales de los funcionarios del Servicio Exterior el de probidad, reserva, decoro y dignidad. Éstos, en carácter adicional a los que son inherentes a todos los funcionarios de la administración pública. Por su parte, se exponen las causales de destitución que también en carácter adicional al común del funcionariado público, son aplicables a los funcionarios del Servicio Exterior. Estas reflejan las que figuran en el artículo 168 numeral 10 de la Constitución de Ja República, en los casos que se cometan actos que afecten su buen nombre o el prestigio del país o de la representación que invisten. Debe tenerse presente que los funcionarios del Servicio Exterior cuando se encuentran cumpliendo funciones fuera del Uruguay desempeñan un rol de representación y por lo tanto son la cara visible del país. Esta circunstancia explica las referidas causales adicionales.

Cabe señalar que se agregan disposiciones en este mismo artículo por las cuales se especifican los derechos de los funcionarios, los que no eran consagrados expresamente en el Decreto-Ley vigente y, en particular, se establece el compromiso de desarrollar una política de genero para prevenir la discriminación y promover el acceso equilibrado a los cargos de mayor jerarquía para todos los funcionarios y funcionarías del Servicio Exterior.

Resulta necesario destacar que el actual artículo 5° del Decreto-Ley N° 14.206 estableció un Tribunal de Honor para asesorar al Ministro de Relaciones Exteriores en ocasión de mala conducta de los funcionarios diplomáticos. Cabe señalar que dicho Tribunal no ha sido utilizado y proviene de una época en donde su creación y existencia tenía una suerte de equiparación con la carrera militar. Si bien ambas carreras cuentan con un estatuto distinto al del funcionario público general, tal como lo establece la Constitución de la República, a su vez cuentan con grandes diferencias por lo que las comparaciones generaron la adopción de institutos que no fueron de aplicación práctica a la función. De hecho, lo controlado por el Tribunal de Honor es lo preceptuado en el artículo tercero del presente proyecto, explicitado precedentemente. Por todo lo expuesto, se propone su eliminación, no figurando en el nuevo proyecto de ley. En tal sentido, se eliminan las referencias y circunstancias de aplicación de dicho tribunal en todos los demás artículos en los que se encontraba citado en la norma vigente.

CAPÍTULO II

INGRESO AL SERVICIO EXTERIOR

En el artículo 5° del proyecto de ley, se dispone que el ingreso al Servicio Exterior se haga a través del concurso de oposición y méritos para el careo de Tercer Secretario/a y según lo dispuesto en el inciso 12 del artículo 168 de la Constitución de la República. Es de destacar que cuando se adoptó el Decreto-Ley N° 14.206 no había concursos para ingresar al Servicio Exterior ni para ascender de cargo. La norma proyectada recoge la normativa aplicada desde el año 1975 y consagrada por ley en 1985 a través de la cual se impone el sistema de concurso para ingresar al Servicio Exterior. Esto fue complementado a partir del año 1996, con el establecimiento del sistema de concurso para ascender dentro del escalafón diplomático. Es decir, actualmente se ingresa al Servicio Exterior por concurso de oposición y méritos y también se asciende por el mismo mecanismo. Esto ha mejorado sustancialmente la formación del funcionariado diplomático, fortaleciendo el profesionalismo en la carrera diplomática.

El artículo 6° refiere a la provisión de las vacantes que se generen anualmente en el Servicio Exterior. Considerando que esta es una carrera con grados que implican ascenso, se señala que ingresarán por el grado más bajo, esto es, el grado 01,

correspondiente al cargo presupuestal de Tercer Secretario, los ciudadanos que no hayan cumplido cuarenta años de edad y que cuenten con título de educación universitaria en carreras con un mínimo de cuatro años de duración, expedidos por universidades nacionales o extranjeras notoriamente reconocidas.

CAPÍTULO III

INSTITUTO ARTIGAS DEL SERVICIO EXTERIOR

En el artículo 8° se mantiene al Instituto Artigas como la academia diplomática del Uruguay, donde se desarrollan los cursos de especialización y perfeccionamiento para los funcionarios del Servicio Exterior. El artículo 12 establece que los cursos serán de aplicación a los funcionarios de rango hasta Consejero inclusive, quedando exceptuados los que cumplan funciones de Directores Generales del Ministerio de Relaciones Exteriores, o que hayan sido Jefes de Misión. Dicho extremo resulta lógico considerando que se trata de funcionarios de rango alto., con años de experiencia en la función y cuya dedicación plena es a la alta función encomendada. Incluso, estos funcionarios son en reiteradas ocasiones, los que imparten clases a los funcionarios de menor rango.

CAPÍTULO IV

ASCENSOS

El artículo 13 dispone los cargos que ostentarán los funcionarios diplomáticos, que recoge la práctica internacional que ya se venía aplicando en la norma vigente. El artículo 14 especifica cómo se producen los ascensos de grado y los años requeridos a tal efecto. Por su parte en el literal B del artículo 14 se establece que las vacantes de Ministro y Embajador serán provistas por selección, en aquéllos casos que el Poder Ejecutivo estime conveniente proveer las mismas con funcionarios de carrera, las que podrán ser provistas inmediatamente a que se generen; para ello se deberá obrar de conformidad con lo estipulado en el párrafo segundo del artículo 168 numeral doce de la Constitución de la República. No obstante, se establecen nuevos requisitos para estos ascensos al establecer un mínimo de cuatro años en el cargo para el ascenso de Ministro Consejero a Ministro y de Ministro a Embajador, así como también se incorpora la obligatoriedad para el Ministerio de llevar a cabo anualmente una evaluación funcional de los Embajadores, Ministros y Ministros Consejeros.

CAPÍTULO V

CATEGORÍAS Y SITUACIONES FUNCIONALES

El segundo párrafo del artículo 15 estipula que los Ministros y Embajadores designados en cargos de particular confianza, cesarán en sus funciones a los noventa días del término del mandato del Gobierno que los haya designado. Esta norma respeta la posibilidad de un nuevo Gobierno de enviar los Embajadores y Ministros de su particular confianza a los puestos que estime pertinentes. En la norma actual, si bien los puestos de particular confianza pueden cesar cuando el Poder Ejecutivo así lo determine, automáticamente cesaban al término de la misión encomendada, lo que puede exceder ampliamente el período del siguiente gobierno al que fueron nombrados.

El artículo 16 indica las categorías que pueden acceder a una jefatura de misión en el exterior. Históricamente se manejó en el Servicio Exterior uruguayo que los funcionarios a partir de la categoría presupuestal de Ministro Consejero podían acceder a una jefatura de misión en el exterior. Luego en los últimos doce años se abrió la posibilidad a que también los Consejeros pudieran acceder a una jefatura de misión en el exterior, pero sujeto al cumplimiento de algunos requisitos a tal efecto. Esto amplió sustantivamente la cantidad de funcionarios que podían acceder a dicho cargo, que es el más alto que un funcionario diplomático puede ostentar en el exterior. En el texto actual esta posibilidad se elimina - volviéndose a la norma original - teniendo en cuenta que la situación que motivó este cambio ha desaparecido dado que actualmente existe un número adecuado de profesionales en los cargos de Embajador, Ministro y Ministro Consejero, que permiten cubrir adecuadamente todos los destinos de Jefes de Misión Diplomática.

En el artículo 18 se estipula el límite de edad de los funcionarios diplomáticos en setenta y dos años. Resulta importante resaltar que en el momento en que se aprobó el Decreto-Ley N° 14.206 (año 1974), la expectativa de vida de los ciudadanos uruguayos era de 69 años, actualmente la misma ha subido a 78 años; pero principalmente se tuvo en consideración la importante inversión que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores en formar a sus funcionarios de planta, durante muchos años a través del Instituto Artigas y al final de su carrera cuando han adquirido una enorme experiencia y formación funcional, pueden en tal sentido, brindarle una mayor contribución al país. Es claro que dicho límite no es preceptivo, sino que naturalmente los que deseen iniciar los trámites jubilatorios antes lo podrán hacer sin ningún inconveniente. Paralelamente se elimina la posibilidad de otorgar excepciones por edad.

El artículo 22 indica las circunstancias en las que los funcionarios se encuentran en situación de disponibilidad. Aquí se elimina la referencia al Tribunal de Honor, se acotan las situaciones a las que se aplica la disponibilidad y se incorpora la causa grave que implica el cumplimiento de sanciones disciplinarias de suspensión. Se fija el plazo máximo para la aplicación de la disponibilidad en seis meses, eliminándose la posibilidad de que la misma sea causa de pérdida del cargo. También se elimina la causal de enfermedad o accidente no producto de actos de servicio que implique dejar de prestar funciones durante tres meses consecutivos, ya que tampoco fue usada en estos casos utilizándose el régimen general de los funcionarios públicos.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Por el artículo 27 se amplía de dos a tres funcionarios de categoría Jefe de Misión, la excepción de la regla general que se establece para todos los funcionarios del Servicio Exterior, consistente en que no pueden ser destinados nuevamente a prestar funciones en un mismo destino, hasta tanto no hayan cumplido un período de cinco años en otro diferente. Esta medida tiende a promover la rotación geográfica funcional, pero dadas determinadas razones de servicio, se exceptúa a tres funcionarios de dicha norma. Cabe señalar que dicha excepción existe actualmente y lo que se modifica es que se aumenta en un funcionario. Debe tenerse presente que el Uruguay cuenta con un Servicio Exterior cuya dotación funcional no se ha incrementado significativamente desde comienzos de los años 1970, razón por la cual amerita la existencia de excepciones a las reglas generales, que permitan disponer de los funcionarios dependiendo de las necesidades que dicte la política exterior de la República.

El artículo 29 aumenta en un año la permanencia en Cancillería de los Secretarios de Tercera antes de tomar su primer destino al exterior. Se ha observado que el período actual de dos años, en ocasiones no resulta suficiente para formar al funcionario en las diversas áreas requeridas para la función diplomática y consular. Asimismo, es importante señalar que esos funcionarios suelen cumplir la función de segundo funcionario diplomático de la respectiva misión al exterior, considerando que las embajadas promedio del Uruguay son de un Jefe de Misión y un funcionario, que además suele desempeñarse como cónsul de distrito o jefe de sección consular de la respectiva embajada. Dicha circunstancia implica que a menudo deban quedar como Encargados de Negocios *a.i.*, es decir, al frente de la Embajada, lo que redunda en una gran responsabilidad para un funcionario que probablemente no cuente con la experiencia y los conocimientos necesarios.

En el artículo 30 se establece una de las mayores reformas de este Estatuto consagrándose la existencia de tres categorías de destinos en el exterior (A, B, y C) según los grados de dificultad de adaptación o condiciones de vida, según variables tales como seguridad, diferencias culturales, barreras idiomáticas, condiciones sanitarias, entre otras.

Estas tres categorías se basan en los criterios de Naciones Unidas, previéndose una revisión sobre bases regulares de los destinos que se incluyen en cada categoría.

A partir de este nuevo régimen de categorización, los funcionarios en su primera asignación en el exterior deberán cumplir un destino de seis años dividido en dos períodos de tres años, respectivamente en dos de las categorías establecidas en el artículo 30. Esto permitirá lograr que ya en su primera asignación en el exterior, los funcionarios adquieran una experiencia profesional más amplia en diferentes países con distintas exigencias.

En el artículo 32 se establece que los funcionarios que no siendo Jefes de Misión, fueron destinados a cumplir funciones en lugares con condiciones de vida particularmente difíciles puedan, al cabo de un lapso de tres años en el lugar de destino, ser trasladados por un período suplementario de tres años más a un destino de las otras categorías mencionadas. Este traslado no es preceptivo y no menoscaba el derecho del funcionario a permanecer durante todo su período funcional en el exterior en el mismo destino. El criterio de condición de vida especial y, en particular, su mecanismo de traslado fue introducido por el artículo 335 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010 y ha probado ser de gran utilidad y justicia en lo que concierne a la asignación de destinos en el exterior.

Se amplía asimismo a seis años la duración de la asignación, fijándose en tres años en el destino C, tal como es actualmente y tres años en el destino de las otras categorías.

En el artículo 33 se mantiene la posibilidad de prorrogar por seis meses (y luego por seis meses más, hasta un máximo de un año) a los funcionarios en el desempeño de sus funciones en el exterior, en las dos acepciones o variables preexistentes, esto es, por razones de servicio o por el perjuicio que ocasionaría el retorno a la República en la fecha del vencimiento del quinquenio, en la educación curricular de sus hijos menores de 18 años.

En el caso de Jefes de Misión se prevé la posibilidad de que puedan ser prorrogados por un año adicional en un mismo destino y hasta un límite máximo de siete años, dado

que pueden haber razones especiales para estas jefaturas; pero se evita tener que recurrir a la norma que permite la extensión en funciones por hasta diez años, lo que quedará reservado para los casos de cambios de destino u otras situaciones excepcionales.

Se incorpora en los casos de los funcionarios prorrogados, la adición del tiempo de prórroga a los dos años de adscripción mínima en Cancillería. Con esta adición se pretende que haya un correlato entre el tiempo en el exterior y el tiempo en Cancillería, ya que el tiempo extendido en el exterior será asimismo extendido a la permanencia del funcionario en la República a su retorno.

El artículo 35 refiere a la prestación de servicios en misiones diplomáticas por parte de funcionarios con relación de parentesco y unidos en matrimonio. La modificación propuesta es en relación a la licencia que se otorga a los funcionarios unidos en matrimonio o en unión concubinaria cuando uno de ellos es destinado a cumplir funciones en el exterior.

El artículo 36 flexibiliza la prohibición para que los funcionarios diplomáticos cumplan funciones en los destinos de nacimiento o nacionalidad de sus cónyuges o concubinos, previéndose que podrán ser acreditados en los países de nacimiento o de la nacionalidad de origen o adquirida de éstos últimos, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Resulta natural que los funcionarios diplomáticos contraigan matrimonio o establezcan uniones concubinarias con ciudadanos extranjeros, considerando que por razones de trabajo, su vida transcurre mayormente en el exterior de la República.

Por el artículo 38 se habilita a los cónyuges o concubinos de funcionarios que desempeñan funciones en el exterior - previa autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores - a ejercer profesiones o desempeñar tareas remuneradas en el país en el que los funcionarios se encuentren destinados.

Se entiende que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental y que en tal sentido debe estar reflejado y consagrado en un estatuto funcional. Adicionalmente a lo expuesto, es uno de los reclamos permanentes que sostiene la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay.

CAPÍTULO VII

El presente capítulo, sin que su acápite lo señale expresamente, contiene disposiciones transitorias y residuales que consisten en mantener derechos adquiridos y precaver situaciones jurídicas de otros escalafones que se encuentran recogidas en el Estatuto actual.

Por el artículo 40 se mantiene la situación de los funcionarios del Escalafón AaA, que en la actualidad son solo tres, ya que la gran mayoría han pasado a retiro y cuando esos funcionarios se jubilen el escalafón AaA quedará suprimido. Es importante destacar que cuando se dictó el Decreto-Ley N° 14.206 se procedió a equiparar a los funcionarios del referido escalafón al escalafón diplomático (en los rangos de Ministro y Embajador cuando eran enviados a cumplir funciones en el exterior), en el entendido de que los integrantes del escalafón AaA eran profesionales universitarios, ergo, con una preparación mayor que el funcionario diplomático promedio de la época. Desde el año 2005, para ingresar al Servicio Exterior de la República es requisito indispensable contar con un título de formación terciaria y en la actualidad más del ochenta por ciento del escalafón

diplomático poseen títulos universitarios, contando muchos de ellos con posgrados y maestrías, razón por la cual dicho argumento perdió consistencia.

A través del artículo 43 se especifica que a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, se considerarán derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan al nuevo Estatuto, al tiempo que se efectúan las derogaciones (ajustes y adecuaciones normativas) de las sucesivas normas que han ido enmendando y complementando el original Decreto-Ley N° 14.206, incluida la derogación del propio Decreto Ley N° 14.206.

En atención a lo expuesto y reiterando la importancia que reviste para el Ministerio de Relaciones Exteriores y para sus funcionarios diplomáticos la aprobación del presente proyecto de Estatuto del Servicio Exterior, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar a la señora Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
RODOLFO NIN NOVOA

_____

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA

Artículo 1°.- Se entiende por Estatuto del Servicio Exterior el conjunto de normas jurídicas que establecen las obligaciones y los derechos, de los funcionarios diplomáticos en cuanto tales.

Integran el Servicio Exterior de la República el conjunto de cargos del escalafón diplomático ocupados por funcionarios de carrera y por funcionarios de particular confianza en el marco de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 168 numeral 12 de la Constitución de la República.

Artículo 2°.- Los funcionarios del Servicio Exterior son designados para el cumplimiento de las funciones diplomáticas y/o consulares que se les encomiende desempeñar, tanto en la República como en el exterior. Están al servicio de la Nación con entera independencia de personas, grupos políticos o partidos. Su lealtad y obediencia se deben únicamente a la Nación y a su Gobierno conforme a la Constitución y las leyes.

Artículo 3°.- El funcionario del Servicio Exterior está para la función y no la función para el funcionario, debiendo servir con imparcialidad al interés general. Sin perjuicio de los deberes inherentes a todos los funcionarios públicos, son deberes especiales de los funcionarios del Servicio Exterior el deber de probidad, reserva, decoro y dignidad.

Además de las causales de destitución comunes a todos los funcionarios públicos, los funcionarios de carrera del Servicio Exterior podrán ser también destituidos, previa venia del Senado, por la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del país o de la representación que invisten (Art. 168 num. 10 de la Constitución de la República).

Son derechos del funcionario de carrera del servicio exterior, además de los derivados del presente estatuto, aquellos otros comunes a la función pública que no se opongan a las normas especiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores implementará el enfoque de género con el objetivo de prevenir e impedir cualquier trato discriminatorio por motivos de género y promover la igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera funcional de todos los funcionarios y funcionarlas del Servicio Exterior. A esos efectos se procurará la asignación equitativa de funciones de Dirección y de Jefaturas de Misión entre funcionarios de ambos sexos.

Artículo 4°.- Los funcionarios del Servicio Exterior deben guardar absoluta reserva y discreción acerca de los temas vinculados a sus tareas y especialmente de las cuestiones clasificadas como reservadas, confidenciales o secretas, que conozcan o lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de dicho ejercicio. Dicha obligación subsistirá aun cuando dejen de pertenecer al Servicio Exterior.

CAPÍTULO II

INGRESO AL SERVICIO EXTERIOR

Artículo 5°.- El ingreso al Servicio Exterior, con excepción de lo dispuesto en el inciso 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, sólo podrá efectuarse por concurso de oposición y méritos en el cargo de Tercer Secretario/a.

En el ingreso al Servicio Exterior el Ministerio de Relaciones Exteriores asegurará que no exista ningún tipo de discriminación basada en sexo, discapacidad, origen étnico o de cualquier otro tipo, sin perjuicio de los requerimientos necesarios para el ejercicio de la función.

Artículo 6°.- Las vacantes que se produzcan en los cargos del último grado del escalafón del Servicio Exterior, Tercer Secretario/a, serán provistas en la forma establecida en los artículos siguientes, por ciudadanas y ciudadanos que no hayan cumplido cuarenta años de edad y tengan título de educación universitaria, en carreras con un mínimo de cuatro años de duración, que hayan sido expedidos por universidades legalmente habilitadas en la República.

Igualmente podrán ser provistas por ciudadanos que acrediten títulos equivalentes expedidos por universidades notoriamente reconocidas del exterior.

Artículo 7°.- El Concurso de oposición y méritos para ingreso al Servicio Exterior, será reglamentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y organizado por el Instituto Artigas del Servicio Exterior, debiendo publicarse su convocatoria en el Diario Oficial y en otros dos diarios, por lo menos sesenta días antes de la fecha de iniciación de las pruebas.

La convocatoria incluirá información sobre el número de vacantes a ser provistas y los requisitos mínimos exigidos en el artículo anterior.

Un Tribunal designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores evaluará los méritos y pruebas de los concursantes, estableciendo un orden de precedencia entre los concursantes que hayan obtenido las mejores calificaciones, hasta completar el número de vacantes fijadas por el Ministerio en la convocatoria.

El Poder Ejecutivo proveerá las vacantes de Tercer Secretaria/o existentes a la fecha de la correspondiente convocatoria, siguiendo el orden de precedencia establecido por el Tribunal del concurso.

CAPÍTULO III

INSTITUTO ARTIGAS DEL SERVICIO EXTERIOR

Artículo 8°.- El Instituto Artigas del Servicio Exterior será el servicio dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores que actuará como Academia Diplomática, responsable de organizar cursos de formación obligatorios para los funcionarios que ingresan al Servicio Exterior de la República y de especialización y perfeccionamiento, igualmente obligatorios para los demás funcionarios del Servicio Exterior, con la excepción prevista en el artículo 12 del presente, para ser ascendidos en el escalafón o ser destinados al exterior.

Artículo 9°.- Para la realización de los cursos, el Instituto Artigas del Servicio Exterior podrá recurrir a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores o de otras dependencias del Estado, de reconocida experiencia y capacidad. Asimismo, y a dichos

fines, el citado Instituto podrá celebrar convenios con Instituciones de Enseñanza o con técnicos especializados.

Artículo 10.- Para el cumplimiento de sus cometidos, el Instituto Artigas del Servicio Exterior deberá consultar las necesidades del servicio y organizar los cursos aplicando a tal efecto los métodos más modernos y eficaces de enseñanza, manteniéndoles actualizados en cuanto a su metodología y contenido, procurando niveles de excelencia.

Artículo 11.- Es deber de los funcionarios del Servicio Exterior cumplir con el régimen de capacitación y asistencia a los cursos que dicte el Instituto Artigas del Servicio Exterior.

Artículo 12.- Lo dispuesto en los artículos 8° y 11 se aplica a todos los funcionarios del Servicio Exterior que puedan ser destinados a prestar funciones en el exterior hasta la categoría o rango de Consejero/Consejera inclusive, exceptuándose aquellos que cumplan funciones de Directores/as Generales, o sean o hayan sido Jefe de Misión con carácter permanente.

CAPÍTULO IV

ASCENSOS

Artículo 13.- Los cargos del Servicio Exterior, en orden jerárquico decreciente, serán:

Embajador / Embajadora

Ministro / Ministra

Ministro Consejero / Ministra Consejera

Consejero / Consejera

Primer Secretario/ Primer Secretaria

Segundo Secretario/Segunda Secretaria

Tercer Secretario / Tercer Secretaria

Artículo 14.- Las vacantes que se produzcan en el Servicio Exterior, serán provistas dentro del primer trimestre del año siguiente al que se producen, por ascenso de la categoría inferior a la inmediata superior y de acuerdo con el siguiente régimen:

A) Las vacantes de Segundo/a Secretario/a, Primer/a Secretario/a, Consejero/a y Ministro/a Consejero serán provistas acorde con el resultado obtenido por las listas de antigüedad calificada para el ascenso.

   Las listas de antigüedad calificada para el ascenso, serán la resultante de la antigüedad, de la calificación, de los méritos y del concurso de oposición o de la tesis de ascenso, según la categoría funcional correspondiente, que a tales efectos se realice anualmente entre los funcionarios de cada categoría que cuenten con la antigüedad mínima necesaria para aspirar al ascenso.

   El Ministerio de Relaciones Exteriores al constituir el Tribunal del referido concurso deberá dar participación a los efectos de su integración al Instituto Artigas del Servicio Exterior y a la Universidad de la República. Asimismo podrá invitar a integrar el Tribunal a personas o entidades de reconocida idoneidad y prestigio.

B) Las vacantes de Ministro/a y Embajador/a serán provistas por selección, en aquellos casos en que el Poder Ejecutivo considera conveniente proveer las mismas con funcionarios de carrera del Servicio Exterior, para lo cual deberán

tomarse en consideración las evaluaciones de desempeño funcional, que se realizarán en la forma que establezca la reglamentación.

Estas vacantes de Ministro/a y Embajador/a podrán ser provistas inmediatamente a que se generen.

C) Para la provisión de las vacantes referidas en los literales precedentes, será requisito necesario poseer, en el grado inmediato inferior, la antigüedad mínima que a continuación se establece:

Tercer Secretario/a: 4 años

Segundo/a Secretario/a: 4 años

Primer/a Secretario/a: 4 años

Consejero/a: 4 años

Ministro/a Consejero/a: 4 años

Ministro/a: 4 años

CAPÍTULO V

CATEGORÍAS Y SITUACIONES FUNCIONALES

Artículo 15.- Los cargos de Embajadores/as y Ministros/as del Servicio Exterior serán considerados de particular confianza del Poder Ejecutivo con la sola excepción de los actualmente provistos, o que se provean por ascenso, con funcionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los Embajadores/as y Ministros/as del Servicio Exterior designados en cargos de particular confianza cesarán de pleno derecho en sus funciones y cargo a los 90 días del término del mandato del gobierno que los haya designado, sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de cesarlos en cualquier momento. En estos casos, no serán de aplicación los límites de edad previstos para los funcionarios del Servicio Exterior.

Artículo 16.- Los funcionarios de carrera del Servicio Exterior sólo podrán ser acreditados como Jefes/as de Misión permanente, cuando posean cargo presupuestal de Embajador/a, Ministro/a o Ministro/a Consejero/a.

Los Ministros/as y Ministros/as Consejeros/as que sean acreditados en calidad de Embajador/a, percibirán los haberes y demás compensaciones correspondientes a esta última categoría presupuestal, durante el término de su misión en el exterior.

Aquellas/os Consejeras/os que a la fecha de vigencia de la presente ley se encontraren acreditados en calidad de Jefe de Misión en virtud de lo dispuesto en el Artículo 331 de la Ley N° 18.719, habrán de finalizar su quinquenio en funciones en el exterior en los términos y condiciones en que fueron designados.

Artículo 17.- El Poder Ejecutivo podrá, con carácter transitorio y al solo efecto protocolar, cuando las necesidades del servicio lo requieran, asignar a los funcionarios del escalafón M - Personal del Servicio Exterior, la categoría inmediata superior a la del cargo que posean, sin que implique variación en las remuneraciones.

Artículo 18.- Se establece en 72 años la edad máxima para el desempeño de tareas en el escalafón M - Servicio Exterior por parte de los funcionarios de carrera del Servicio Exterior.

Alcanzada la edad señalada, se producirá el cese de pleno derecho en el cargo.

Artículo 19.- Los funcionarios de carrera del Servicio Exterior tendrán las siguientes situaciones:

Actividad, Disponibilidad, Retiro.

Artículo 20.- La situación de Actividad comprende a los funcionarios que presten servicios en el exterior o en la Cancillería.

Artículo 21.- La situación de Disponibilidad comprende a los funcionarios que, en forma transitoria, dejen de prestar funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 22.- El Poder Ejecutivo podrá disponer el pase a situación de Disponibilidad de:

a) Los funcionarios que no asuman los destinos que se le asignen en el exterior o en la Cancillería.

b) Los funcionarios que por causa grave deban cumplir sanciones disciplinarias de suspensión, por el tiempo que duren éstas.

c) Los funcionarios amparados a régimen de licencia especial sin goce de sueldo.

Artículo 23.- En los supuestos referidos en los literales a) y b) del artículo anterior, el pase a situación de Disponibilidad operará de forma independiente y sin perjuicio de las medidas disciplinarias que en cada caso se adopten.

Artículo 24.- Los funcionarios que sean pasados a situación de Disponibilidad como consecuencia de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 22 cesarán en la misma cuando se les asigne nuevo destino en el exterior o en la Cancillería. En estos casos la situación de Disponibilidad no podrá exceder los seis meses.

Artículo 25.- Los funcionarios que se encuentren en situación de Disponibilidad gozarán de las siguientes asignaciones:

- En el caso del literal a) del artículo 22, la mitad del sueldo de su cargo presupuestal, sin compensaciones.

- En el caso de los literales b) y c) del artículo 22, no percibirán remuneración alguna.

Artículo 26.- Los funcionarios que se encuentren en situación de Disponibilidad en virtud de lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 22, no podrán ser ascendidos. No se computará el tiempo transcurrido en la misma a efectos de la rotación ni de la antigüedad. No obstante, el período pasado en dicha situación será tenido en cuenta a efectos del Retiro.

CAPÍTULO VI

Artículo 27.- Todos los funcionarios de carrera del Servicio Exterior deberán obligatoriamente rotar en el desempeño de funciones, alternando períodos máximos de cinco años en el exterior y mínimos de dos años en la Cancillería respectivamente, siendo facultad de la Administración, determinar dentro de los límites establecidos y de acuerdo

con las necesidades del servicio su extensión, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 31 y siguientes.

Durante el período de desempeño funcional en el exterior, los funcionarios del Servicio Exterior sólo podrán ser trasladados una vez.

No podrán ser destinados nuevamente a desempeñar funciones en el exterior en un mismo destino, hasta tanto hayan cumplido un período de cinco años de servicio en el exterior en otro diferente.

El Poder Ejecutivo por resolución fundada y atendiendo a las necesidades del servicio, podrá exceptuar de esta última prohibición hasta un máximo simultáneo de tres Jefes/as de Misión y por un período máximo de dos quinquenios.

Artículo 28.- El funcionario del Servicio Exterior que sea sancionado por la comisión de faltas administrativas graves, quedará asimismo inhibido de cumplir funciones en el exterior o ser ascendido por el tiempo que se determine en cada caso.

El acto administrativo por el cual se establezcan las medidas disciplinarias correspondientes, deberá establecer conjuntamente el plazo de inhibición a que refiere el presente artículo.

Artículo 29.- Los Terceros Secretarios/as del Servicio Exterior no podrán ser destinados a prestar funciones en el exterior, hasta tanto acrediten una antigüedad mínima de tres años en el Escalafón del Servicio Exterior. Esta disposición comenzará a regir para los funcionarios que ingresen a partir del primer concurso de ingreso posterior a la entrada en vigor del presente Estatuto.

Artículo 30.- Existirán tres categorías de destinos en el exterior, graduadas de A) a C), donde la categoría A) corresponde a aquéllos que no presentan circunstancias especiales de vida que dificulten la adaptación y el ejercicio de la función; la categoría B) incorporará los destinos que presentan alguna circunstancia particular funcional o de adaptación; y la categoría C), aquéllos que presentan condiciones de vida particularmente difíciles.

Estas categorías se reglamentarán y actualizarán periódicamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores tomando en consideración las circunstancias objetivas de los mismos, a vía de ejemplo, la situación política, social y económica, las condiciones de salubridad, el grado de seguridad interna o aspectos que por las circunstancias imperantes involucren un cierto riesgo para la integridad física o psíquica del funcionario y su familia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores asignará los puestos en el exterior a una de estas categorías, actualizando periódicamente su distribución entre las mismas.

Artículo 31.- En su primera asignación en el exterior, los funcionarios cumplirán un período total en funciones de seis años, a computar en dos trienios consecutivos, en dos de las categorías establecidas en el artículo precedente.

Artículo 32.- Con excepción de los Jefes/as de Misión, el funcionario que sea destinado a cumplir funciones en destinos categoría C, lo hará por un período de tres años, transcurrido el cual tendrán derecho a ser trasladados a otro destino no comprendido en tal categoría, por igual período de tiempo.

En la resolución del Poder Ejecutivo por la que se efectúe la designación a un destino declarado dentro de la categoría "C", se dispondrá expresamente el referido traslado al cumplimiento del citado período de tres años.

Artículo 33.- El Poder Ejecutivo podrá, por resolución fundada y respecto a un máximo de quince funcionarios en forma simultánea, prorrogar los plazos de desempeño de funciones en el exterior, hasta por el término de seis meses, renovables por una sola vez y hasta por igual período.

En el caso de los Jefas/es de Misión Diplomática, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar por un año adicional sucesivamente y hasta un máximo de siete años, su período en funciones en el exterior en un mismo destino.

Las solicitudes de prórroga podrán fundamentarse:

a.- Cuando así lo justifiquen estrictas e ineludibles razones de servicio que deberán fundamentarse en forma clara y concisa.

b.- Cuando el funcionario demuestre fehacientemente que el retorno en la fecha de vencimiento del quinquenio perjudica en forma grave e irreparable la educación curricular de los hijos/as menores de 18 años que tenga a su cargo.

En estos casos se adicionará un tiempo idéntico al transcurrido en las prórrogas dispuestas en el período de adscripción mínima a los efectos establecidos en el artículo 27 de la presente ley. Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo evaluará la pertinencia de aplicar esta disposición en los casos comprendidos en el literal a) del presente artículo.

Artículo 34.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo sin atender al cumplimiento de los plazos de rotación y de la limitación de un solo traslado establecidos en el artículo 27, podrá dar destino, trasladar o disponer por única vez la permanencia simultánea en el exterior de hasta un máximo de cinco Jefes/as de Misión.

Por ningún motivo dichos funcionarios podrán permanecer más de diez años consecutivos en funciones en el exterior.

Cuando la excepcionalidad se aplique a la observancia del bienio establecido en el Artículo 27, la posibilidad de utilizar la excepción conferida se recobrará para la Administración a partir de la fecha en que el funcionario exceptuado hubiera completado su periodo mínimo de adscripción en Cancillería.

Artículo 35.- No podrán prestar servicios simultáneamente en las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares de la República radicadas en un mismo Estado los funcionarios del Servicio Exterior con parentesco hasta tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad.

Sin perjuicio de ello, los funcionarios del Servicio Exterior vinculados por matrimonio o por unión concubinaria, podrán ejercer simultáneamente funciones en el exterior en un mismo Estado, siempre que el ejercicio de tales funciones no implique una relación jerárquica entre ambos.

Cuando uno de los cónyuges o concubinos sea destinado a desempeñar funciones permanentes en el exterior, el otro podrá solicitar licencia especial para acompañar al primero en el cumplimiento de su misión.

La licencia especial será concedida por el período que el cónyuge o concubino destinado al exterior, permanezca en tal situación.

El cónyuge o concubino que se encuentre usufructuando licencia especial, mientras se halle en tal situación, no percibirá ninguna remuneración, no podrá ser ascendido y no se le computará el tiempo a los efectos de la rotación.

Artículo 36.- Los funcionarios del Servicio Exterior casados o en unión concubinaria, cuyos cónyuges o concubinos fueran extranjeros, sean éstos o no ciudadanos legales de la República, podrán tener destino en los países de nacimiento o de la nacionalidad, de origen o adquirida de los mismos, con previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 37.- No podrán ser empleados en las Misiones Diplomáticas, Delegaciones u Oficinas Consulares de la República radicadas en un Estado, los familiares de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores con destino en el mismo Estado.

Artículo 38.- Los funcionarios del Servicio Exterior que desempeñan funciones en el exterior deberán solicitar y recibir autorización previa y expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, para que sus cónyuges o concubinos puedan ejercer profesiones o desempeñar tareas remuneradas en el país de destino.

Artículo 39.- El Poder Ejecutivo, al disponer los destinos y traslados de los funcionarios del Servicio Exterior, tendrá en cuenta las aptitudes del funcionario en atención a las necesidades de la Administración tendiente a asegurar la mayor y mejor eficiencia del servicio, tanto desempeñando funciones en el exterior como en la Cancillería.

CAPÍTULO VII

Artículo 40.- Los funcionarios Clase AaA a que refiere el artículo 123 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, continuarán cumpliendo funciones asimilados a los funcionarios de carrera del Servicio Exterior, como en el régimen vigente hasta la fecha.

Artículo 41.- Los funcionarios presupuestados del Ministerio de Relaciones Exteriores, pertenecientes a los escalafones Administrativo (C), Técnico (B) y Especializado (D), con un grado mínimo de 8 (ocho) y con una antigüedad igual o mayor a cinco años en el Inciso, podrán, ser destinados a prestar funciones administrativas y técnicas en las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o Delegaciones Permanentes de la República en el exterior. Estos funcionarios no tendrán carácter diplomático ni consular.

En esta situación podrán encontrarse como máximo 20 (veinte) funcionarios en forma simultánea. El plazo de permanencia en el exterior no excederá de tres años pudiendo ser prorrogable por hasta un año más en los casos en que así lo requieran las necesidades del servicio. Estos funcionarios deberán realizar los cursos básicos de formación, aprobar los mismos y serán seleccionados por concurso de méritos y antecedentes. No podrán ser destinados nuevamente al exterior hasta después de transcurridos 5 (cinco) años de su regreso a la República.

Los funcionarios así destinados percibirán, por trimestre adelantado y como única remuneración, el importe equivalente al 90% (noventa por ciento) del sueldo correspondiente a un Secretario de Tercera en el mismo destino, más los beneficios sociales que le correspondan, no percibiendo gastos de representación.

Tendrán derecho además de los pasajes correspondientes, a las compensaciones establecidas en el artículo 77 de la Ley N° 12.802, de 30 de noviembre de 1960 en la redacción dada por el artículo 269 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015 y a la Ayuda de Vivienda establecida por el Decreto N° 071/091, de 5 de febrero de 1991 y sus modificativos.

Artículo 42.- Los funcionarios presupuestados del escalafón "A" Técnico Profesional, del Ministerio de Relaciones Exteriores, con más de diez años de antigüedad en el Inciso, ingresados con posterioridad al 31 de diciembre de 1985, no amparados por el artículo 123 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987 ni por el artículo 143 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, podrán por razones de servicio, ser designados a desempeñar funciones propias de su escalafón en las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o Delegaciones Permanentes de la República en el exterior.

En esta situación podrán encontrarse como máximo 6 (seis) funcionarios en forma simultánea. El plazo de permanencia en el exterior no excederá de dos años pudiendo ser prorrogable por hasta un año más en los casos en que así lo requieran las necesidades del servicio. Su designación será atendiendo a criterios objetivos de selección, méritos y antecedentes y deberán realizar y aprobar los cursos básicos de formación.

En todos los casos la acreditación en el exterior será como Personal Técnico acorde al literal c) del artículo 1° de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Dichos funcionarios acreditados en el exterior, a su regreso, no tendrán derecho a salir nuevamente a otro destino salvo que la Administración lo requiera y a esos efectos hará resolución fundada. En dicho caso, solo podrá ser efectiva la nueva acreditación por este régimen, si mediaron por lo menos cinco años de permanencia de dicho funcionario en la República desde la fecha de su regreso al país.

La retribución del funcionario designado bajo este régimen será la prevista para los funcionarios administrativos destinados al exterior incrementada en un 20% (veinte por ciento), más los beneficios sociales que le correspondan, no percibiendo gastos de representación.

Tendrán derecho además de los pasajes correspondientes, a las compensaciones establecidas en el artículo 77 de la Ley N° 12.802, de 30 de noviembre de 1960 en la redacción dada por el artículo 269 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015 y a la Ayuda de Vivienda establecida por el Decreto 071/091 de 5 de febrero de 1991 y sus modificativos.

Artículo 43.- Deróganse el Decreto Ley N° 14.206, de 6 de junio de 1974 y sus modificativas, el artículo 292 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, el artículo 331 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, el artículo 256 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015, el artículo 168 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, el artículo 141, el artículo 145 y el artículo 147 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, el artículo 162 y el artículo 163 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, el artículo 230 y el artículo 231 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, el artículo 27 de la Ley N° 15.767, de 13 de setiembre de 1985, el artículo único de la Ley N° 14.990, de 22 de febrero de 1980, y el artículo 70 de la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986 y todas aquellas disposiciones que se opongan al nuevo Estatuto.

Artículo 44.- A partir de la fecha, integran el Estatuto del Servicio Exterior, las normas contenidas en la presente ley.

Montevideo, 11 de junio de 2018

RODOLFO NIN NOVOA

_____

- 17 -

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA

Artículo 1°.- Se entiende por Estatuto del Servicio Exterior el conjunto de normas jurídicas que establecen las obligaciones y los derechos del personal del Servicio Exterior.

Integran el Servicio Exterior de la República el conjunto de cargos del escalafón diplomático ocupados por personal de carrera o por personal de particular confianza, en el marco de lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República.

Artículo 2°.- El personal del Servicio Exterior es designado para el cumplimiento de las funciones diplomáticas y consulares que se le encomiende desempeñar, tanto en la República como en el exterior. Está al servicio de la Nación con entera independencia de personas, grupos políticos o partidos. Su lealtad y obediencia se debe únicamente a la Nación y a su Gobierno, conforme a la Constitución y las leyes.

Artículo 3°.- El personal del Servicio Exterior está para la función y no la función para el funcionariado, debiendo servir con imparcialidad al interés general. Sin perjuicio de los deberes inherentes a todo el funcionariado público, son deberes especiales del personal del Servicio Exterior la probidad, la reserva, el decoro y la dignidad.

Además de las causales de destitución comunes a todo el funcionariado público, el personal de carrera del Servicio Exterior podrá ser también destituido, previa venia del Senado, por la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del país o de la representación que inviste, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 168 de la Constitución de la República.

Son derechos del personal de carrera del Servicio Exterior, además de los derivados del presente estatuto, aquellos otros comunes a la función pública que no se opongan a las normas especiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores implementará el enfoque de género con el objetivo de prevenir e impedir cualquier trato discriminatorio por motivos de género y promover la igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera funcional de todo el personal del Servicio Exterior. A esos efectos se procurará la asignación equitativa de funciones de dirección y de jefaturas de misión entre funcionarios de ambos sexos.

Artículo 4°.- El personal del Servicio Exterior debe guardar absoluta reserva y discreción acerca de los temas vinculados a su tarea y especialmente de las cuestiones clasificadas como reservadas, confidenciales o secretas, que conozca o llegue a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de dicho ejercicio. Dicha obligación subsistirá aun cuando deje de pertenecer al Servicio Exterior.

CAPÍTULO II

INGRESO AL SERVICIO EXTERIOR

Artículo 5°.- El ingreso al Servicio Exterior, con excepción de lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, solo podrá efectuarse por concurso de oposición y méritos en el cargo de Tercer Secretario/Tercera Secretaria.

En el ingreso al Servicio Exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores asegurará que no exista ningún tipo de discriminación basada en sexo, discapacidad, origen étnico o de cualquier otro tipo.

Artículo 6°.- Las vacantes que se produzcan en los cargos del último grado del escalafón del Servicio Exterior, Tercer Secretario/Tercera Secretaria, serán provistas en la forma establecida en los artículos siguientes, por ciudadanas y ciudadanos que no hayan cumplido cuarenta años de edad y tengan título de educación universitaria, en carreras con un mínimo de cuatro años de duración, que hayan sido expedidos por universidades legalmente habilitadas en la República.

Igualmente podrán ser provistas por quienes acrediten títulos equivalentes expedidos por universidades notoriamente reconocidas del exterior.

Artículo 7°.- El concurso de oposición y méritos para el ingreso al Servicio Exterior será reglamentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y organizado por el Instituto Artigas del Servicio Exterior, debiendo publicarse su convocatoria en el Diario Oficial y en otros dos diarios, por lo menos sesenta días antes de la fecha de iniciación de las pruebas.

La convocatoria incluirá información sobre el número de vacantes a ser provistas y los requisitos mínimos exigidos en el artículo anterior.

Un tribunal designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores evaluará los méritos y pruebas de quienes concursen, estableciendo un orden de precedencia entre quienes hayan obtenido las mejores calificaciones, hasta completar el número de vacantes fijadas por el Ministerio en la convocatoria.

El Poder Ejecutivo proveerá las vacantes de Tercer Secretario/Tercera Secretaria existentes a la fecha de la correspondiente convocatoria, siguiendo el orden de precedencia establecido por el tribunal del concurso.

CAPÍTULO III

INSTITUTO ARTIGAS DEL SERVICIO EXTERIOR

Artículo 8°.- El Instituto Artigas del Servicio Exterior será el servicio dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores que actuará como academia diplomática, responsable de organizar cursos de formación obligatorios para el personal que ingresa al Servicio Exterior de la República y de especialización y perfeccionamiento, igualmente obligatorios para el resto del personal del Servicio Exterior, con la excepción prevista en el artículo 12 de la presente ley, para ser ascendidos en el escalafón o ser destinados al exterior.

Artículo 9°.- Para la realización de los cursos, el Instituto Artigas del Servicio Exterior podrá recurrir a personal del Ministerio de Relaciones Exteriores o de otras dependencias

del Estado, de reconocida experiencia y capacidad. Asimismo, y a dichos fines, el citado instituto podrá celebrar convenios con instituciones de enseñanza o con técnicos especializados.

Artículo 10.- Para el cumplimiento de sus cometidos, el Instituto Artigas del Servicio Exterior deberá consultar las necesidades del servicio y organizar los cursos, aplicando a tal efecto los métodos más modernos y eficaces de enseñanza, manteniéndolos actualizados en cuanto a su metodología y contenido, procurando niveles de excelencia.

Artículo 11.- Es deber del personal del Servicio Exterior cumplir con el régimen de capacitación y asistencia a los cursos que dicte el Instituto Artigas del Servicio Exterior.

Artículo 12.- Lo dispuesto en los artículos 8° y 11 de la presente ley se aplica a todo el personal del Servicio Exterior que pueda ser destinado a prestar funciones en el exterior hasta la categoría o rango de Consejero/Consejera inclusive, exceptuándose a quienes cumplan funciones de Directores o Directoras Generales, o sean o hayan sido Jefe o Jefa de Misión con carácter permanente.

CAPÍTULO IV

ASCENSOS

Artículo 13.- Los cargos del Servicio Exterior tendrán, en orden jerárquico decreciente, las siguientes categorías y grados:

7– Embajador/Embajadora

6– Ministro/Ministra

5– Ministro Consejero/Ministra Consejera

4– Consejero/Consejera

3– Primer Secretario/Primera Secretaria

2– Segundo Secretario/Segunda Secretaria

1 – Tercer Secretario/Tercera Secretaria

Artículo 14.- Las vacantes que se produzcan en el Servicio Exterior, serán provistas dentro del primer trimestre del año siguiente al que se producen, por ascenso de la categoría inferior a la inmediata superior y de acuerdo con el siguiente régimen:

a) Las vacantes de Segundo Secretario/Segunda Secretaria, Primer Secretario/Primera Secretaria, Consejero/Consejera y Ministro Consejero/Ministra Consejera serán provistas de acuerdo con el resultado obtenido por las listas de antigüedad calificada para el ascenso.

Las listas de antigüedad calificada para el ascenso serán la resultante de la antigüedad, de la calificación, de los méritos y del concurso de oposición o de la tesis de ascenso, según la categoría funcional correspondiente, que a tales

efectos se realice anualmente entre el personal de cada categoría que cuente con la antigüedad mínima necesaria para aspirar al ascenso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, al constituir el tribunal del referido concurso, deberá dar participación a los efectos de su integración al Instituto Artigas del Servicio Exterior y a la Universidad de la República. Asimismo podrá invitar a integrar el tribunal a personas o entidades de reconocida idoneidad y prestigio.

b) Las vacantes de Ministro/Ministra y Embajador/Embajadora serán provistas por selección, en aquellos casos en que el Poder Ejecutivo considera conveniente proveerlas con personal de carrera del Servicio Exterior, para lo cual deberán tomarse en consideración las evaluaciones de desempeño funcional que se realizarán en la forma que establezca la reglamentación. Estas vacantes de Ministro/Ministra y Embajador/Embajadora podrán ser provistas inmediatamente a que se generen.

c) Para la provisión de las vacantes referidas en los literales precedentes, será requisito necesario poseer, en el grado inmediato inferior, la antigüedad mínima que a continuación se establece:

Tercer Secretario/Tercera Secretaria: 4 años

Segundo Secretario/Segunda Secretaria: 4 años

Primer Secretario/Primera Secretaria: 4 años

Consejero/Consejera: 4 años

Ministro Consejero/Ministra Consejera: 4 años

Ministro/Ministra: 4 años

CAPÍTULO V

CATEGORÍAS Y SITUACIONES FUNCIONALES

Artículo 15.- Los cargos de Embajadores/Embajadoras y Ministros/Ministras del Servicio Exterior serán considerados de particular confianza del Poder Ejecutivo con la sola excepción de los actualmente provistos, o que se provean por ascenso, con personal de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los Embajadores/Embajadoras y Ministros/Ministras del Servicio Exterior designados en cargos de particular confianza cesarán de pleno derecho en sus funciones y cargo a los noventa días del término del mandato del gobierno que los haya designado, sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de cesarlos en cualquier momento. En estos casos, no serán de aplicación los límites de edad previstos para el personal del Servicio Exterior.

Artículo 16.- El personal de carrera del Servicio Exterior solo podrá ser acreditado como Jefe o Jefa de Misión permanente, cuando posea cargo presupuestal de Embajador/Embajadora, Ministro/Ministra o Ministro Consejero/Ministra Consejera.

Los Ministros/Ministras y Ministros Consejeros/Ministras Consejeras que sean acreditados en calidad de Embajador/Embajadora, percibirán los haberes y demás compensaciones correspondientes a esta última categoría presupuestal, durante el término de su misión en el exterior.

Quienes siendo Consejeros/Consejeras, a la fecha de vigencia de la presente ley, se encontraren acreditados en calidad de Jefe o Jefa de Misión en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto Ley N° 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 331 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, habrán de finalizar su quinquenio en funciones en el exterior en los términos y condiciones en que fueron designados.

Artículo 17.- El Poder Ejecutivo podrá, con carácter transitorio y al solo efecto protocolar, cuando las necesidades del servicio lo requieran, asignar al personal del escalafón M - Personal del Servicio Exterior la categoría inmediata superior a la del cargo que posea, sin que implique variación en las remuneraciones.

Artículo 18.- Se establece en 72 años la edad máxima para el desempeño de tareas en el escalafón M - Servicio Exterior por parte del personal de carrera del Servicio Exterior.

Alcanzada la edad señalada, se producirá el cese de pleno derecho en el cargo.

Artículo 19.- El personal de carrera del Servicio Exterior tendrá las siguientes situaciones: actividad, disponibilidad y retiro.

Artículo 20.- La situación de actividad comprende al personal que preste servicios en el exterior o en la Cancillería.

Artículo 21.- La situación de disponibilidad comprende al personal que, en forma transitoria, deje de prestar funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 22.- El Poder Ejecutivo podrá disponer el pase a situación de disponibilidad de:

a) El personal que no asuma los destinos que se le asigne en el exterior o en la Cancillería.

b) El personal que por causa grave deba cumplir sanciones disciplinarias de suspensión, por el tiempo que duren estas.

c) El personal amparado al régimen de licencia especial sin goce de sueldo.

Artículo 23.- En los supuestos referidos en los literales a) y b) del artículo 22 de la presente ley, el pase a situación de disponibilidad operará de forma independiente y sin perjuicio de las medidas disciplinarias que en cada caso se adopten.

Artículo 24.- El personal que sea pasado a situación de disponibilidad como consecuencia de lo dispuesto en el literal a) del artículo 22 de la presente ley, cesará en la misma cuando se le asigne nuevo destino en el exterior o en la Cancillería. En estos casos la situación de disponibilidad no podrá exceder los seis meses.

Artículo 25.- El personal que se encuentre en situación de disponibilidad gozará, en virtud de lo dispuesto en el literal a) del artículo 22 de la presente ley, de la mitad del sueldo de su cargo presupuestal, sin compensaciones.

Quienes se encuentren en las situaciones enumeradas en los literales b) y c) del artículo 22 de la presente ley, no percibirán remuneración alguna.

Artículo 26.- El personal que se encuentre en situación de disponibilidad en virtud de lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 22 de la presente ley, no podrá ser ascendido. No se computará el tiempo transcurrido en la misma a efectos de la rotación ni de la antigüedad. No obstante, el período pasado en dicha situación será tenido en cuenta a efectos del retiro.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 27.- Todo el personal de carrera del Servicio Exterior deberá obligatoriamente rotar en el desempeño de funciones, alternando períodos máximos de cinco años en el exterior y mínimos de dos años en la Cancillería respectivamente, siendo facultad de la Administración determinar, dentro de los límites establecidos y de acuerdo con las necesidades del servicio, su extensión, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 31 y siguientes de la presente ley.

Durante el período de desempeño funcional en el exterior, el personal del Servicio Exterior solo podrá ser trasladado una vez.

No podrá ser destinado nuevamente a desempeñar funciones en el exterior en un mismo destino, hasta tanto haya cumplido un período de cinco años de servicio en el exterior, en otro diferente.

El Poder Ejecutivo por resolución fundada y atendiendo a las necesidades del servicio, podrá exceptuar de esta última prohibición hasta un máximo simultáneo de tres Jefes o Jefas de Misión y por un período máximo de dos quinquenios.

Artículo 28.- El personal del Servicio Exterior que sea sancionado por la comisión de faltas administrativas graves, quedará asimismo inhibido de cumplir funciones en el exterior o ser ascendido por el tiempo que se determine en cada caso.

El acto administrativo por el cual se establezcan las medidas disciplinarias correspondientes deberá establecer conjuntamente el plazo de inhibición a que refiere el presente artículo.

Artículo 29.- Los Terceros Secretarios/Terceras Secretarias del Servicio Exterior no podrán ser destinados a prestar funciones en el exterior, hasta tanto acrediten una antigüedad mínima de tres años en el Escalafón del Servicio Exterior.

Lo dispuesto en este artículo comenzará a regir para el personal que ingrese a partir del primer concurso de ingreso posterior a la entrada en vigor de la presente ley.

Artículo 30.- Existirán tres categorías de destinos en el exterior, graduadas de A) a C), según las condiciones especiales de vida que presenten, a saber:

Categoría A) destinos que no presentan circunstancias especiales de vida que dificulten la adaptación y el ejercicio de la función.

Categoría B) que presentan alguna circunstancia particular funcional o de adaptación.

Categoría C) destinos que presentan condiciones de vida particularmente difíciles.

Estas categorías se reglamentarán y actualizarán periódicamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores tomando en consideración las circunstancias objetivas de los destinos, como la situación política, social y económica, las condiciones de salubridad, el grado de seguridad interna o aspectos que por las circunstancias imperantes involucren un cierto riesgo para la integridad física o psíquica del personal del Servicio Exterior y su familia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores asignará las categorías previstas en este artículo a los destinos en el exterior, actualizando periódicamente dicha asignación.

Artículo 31.- En su primera asignación en el exterior, el personal cumplirá un período total en funciones de seis años, a computar en dos trienios consecutivos, en destinos de las categorías A) y B).

Artículo 32.- El personal que sea destinado a cumplir funciones en destinos clasificados en la Categoría C), excepto los Jefes o Jefas de Misión, lo harán por un período de tres años, transcurrido el cual tendrán derecho a ser trasladados a otro destino, no comprendido en esa categoría, por igual período de tiempo.

En la resolución del Poder Ejecutivo por la que se efectúa la designación a un destino clasificado en la Categoría C), se dispondrá expresamente que el traslado es por el período de tres años.

Artículo 33.- El Poder Ejecutivo podrá, por resolución fundada y respecto a un máximo de quince funcionarios o funcionarias en forma simultánea, prorrogar los plazos de desempeño de funciones en el exterior, hasta por el término de seis meses renovables por una sola vez y hasta por igual período.

En el caso de Jefes o Jefas de Misión Diplomática, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar por un año adicional sucesivamente y hasta un máximo de siete años, su período en funciones en el exterior en un mismo destino.

Las solicitudes de prórroga podrán fundamentarse:

a) Cuando así lo justifiquen estrictas e ineludibles razones de servicio que deberán fundamentarse en forma clara y concisa.

b) Cuando el personal demuestre fehacientemente que el retorno en la fecha de vencimiento del quinquenio perjudica en forma grave e irreparable la educación curricular de los hijos e hijas menores de 18 años que tenga a su cargo.

c) Cuando así se justifique por estrictas razones de salud que deberán fundamentarse en forma clara y concisa, del funcionario o funcionaria o de su núcleo familiar.

En estos casos se adicionará un tiempo idéntico al transcurrido en las prórrogas dispuestas en el período de adscripción mínima a los efectos establecidos en el artículo 27 de la presente ley. Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo evaluará la pertinencia de aplicar esta disposición en los casos comprendidos en el literal a) del presente artículo.

Artículo 34.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo sin atender al cumplimiento de los plazos de rotación y de la limitación de un solo traslado establecidos en el artículo 27 de la presente ley, podrá dar destino, trasladar o disponer por única vez la permanencia simultánea en el exterior de hasta un máximo de cinco Jefes o Jefas de Misión.

Por ningún motivo dicho personal podrá permanecer más de diez años consecutivos en funciones en el exterior.

Cuando la excepcionalidad se aplique a la observancia del bienio establecido en el artículo 27 de la presente ley, la posibilidad de utilizar la excepción conferida se recobrará para la Administración a partir de la fecha en que el personal exceptuado complete su período mínimo de adscripción en Cancillería.

Artículo 35.- No podrá prestar servicios simultáneamente en las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares de la República radicadas en un mismo Estado personal del Servicio Exterior con parentesco hasta tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad.

Sin perjuicio de ello, el personal del Servicio Exterior vinculado por matrimonio o por unión concubinaria podrá ejercer simultáneamente funciones en el exterior en un mismo Estado, siempre que el ejercicio de tales funciones no implique una relación jerárquica entre ambas partes.

Cuando una de las partes sea destinada a desempeñar funciones permanentes en el exterior, la otra podrá solicitar licencia especial para acompañar a la primera en el cumplimiento de su misión.

La licencia especial será concedida por el período en el cual quien tiene el destino en el exterior permanezca en tal situación.

Quien se encuentre usufructuando licencia especial, mientras se halle en tal situación, no percibirá ninguna remuneración, no podrá ser ascendido y no se le computará el tiempo a los efectos de la rotación.

Artículo 36.- El personal del Servicio Exterior casado o en unión concubinaria cuyos cónyuges o concubinos o concubinas fueran extranjeros, sean estos o no ciudadanos legales de la República, podrá tener destino en los países de nacimiento o de la nacionalidad de origen o adquirida de los mismos, con previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 37.- No podrán emplearse en las Misiones Diplomáticas, Delegaciones u Oficinas Consulares de la República radicadas en un Estado, los familiares del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores con destino en el mismo Estado, cuando existiera relación jerárquica entre ambos.

Cuando no existiese dicha relación jerárquica, deberá requerirse la autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 38.- El personal del Servicio Exterior que desempeña funciones en el exterior deberá solicitar y recibir autorización previa y expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay para que sus cónyuges o concubinos o concubinas puedan ejercer profesiones o desempeñar tareas remuneradas en el país de destino.

Artículo 39.- El Poder Ejecutivo, al disponer los destinos y traslados del personal del Servicio Exterior, tendrá en cuenta las aptitudes del personal en atención a las necesidades de la Administración, tendiendo a asegurar la mayor y mejor eficiencia del

servicio, tanto desempeñando funciones en el exterior como en la Cancillería y, en la medida de lo posible, considerando la situación de familia del funcionariado.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y RESIDUALES

Artículo 40.- El personal Clase AaA a que refiere el artículo 44 del Decreto Ley N° 14.206, de 6 de junio de 1974, continuará cumpliendo funciones asimilado al personal de carrera del Servicio Exterior, como en el régimen vigente hasta la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 41.- El personal presupuestado del Ministerio de Relaciones Exteriores, perteneciente a los escalafones Administrativo (C), Técnico (B) y Especializado (D), con un grado mínimo de 8 (ocho) y con una antigüedad igual o mayor a cinco años en el Inciso podrá ser destinado a prestar funciones administrativas y técnicas en las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o Delegaciones Permanentes de la República en el exterior. Este personal no tendrá carácter diplomático ni consular.

En esta situación podrán encontrarse como máximo veinte funcionarios o funcionarias en forma simultánea. El plazo de permanencia en el exterior no excederá de tres años pudiendo ser prorrogable por hasta un año más en los casos en que así lo requieran las necesidades del servicio. Este personal deberá realizar los cursos básicos de formación, aprobar los mismos y será seleccionado por concurso de méritos y antecedentes. No podrá ser destinado nuevamente al exterior hasta después de transcurridos cinco años de su regreso a la República.

El personal así destinado percibirá, por trimestre adelantado y como única remuneración, el importe equivalente al 90% (noventa por ciento) del sueldo correspondiente al cargo Tercer Secretario/Tercera Secretaria en el mismo destino, más los beneficios sociales que le correspondan, no percibiendo gastos de representación.

Tendrá derecho además de los pasajes correspondientes, a las compensaciones establecidas en el artículo 77 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, en la redacción dada por el artículo 269 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 y a la Ayuda de Vivienda establecida por el Decreto Nº 071/091, de 5 de febrero de 1991 y sus modificativos.

Artículo 42.- El personal presupuestado del escalafón "A" Técnico Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores con más de diez años de antigüedad en el Inciso, ingresado con posterioridad al 31 de diciembre de 1985, no amparado por el artículo 123 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 ni por el artículo 143 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, podrá, por razones de servicio, ser designado a desempeñar funciones propias de su escalafón en las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o Delegaciones Permanentes de la República en el exterior.

En esta situación podrán encontrarse como máximo seis funcionarios o funcionarias en forma simultánea. El plazo de permanencia en el exterior no excederá de dos años, pudiendo ser prorrogable por hasta un año más en los casos en que así lo requieran las necesidades del servicio. Su designación será atendiendo a criterios objetivos de selección, méritos y antecedentes y deberán realizar y aprobar los cursos básicos de formación.

En todos los casos la acreditación en el exterior será como Personal Técnico acorde al literal c) del artículo 1° de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Dicho personal acreditado en el exterior, a su regreso, no tendrá derecho a salir nuevamente a otro destino salvo que la Administración lo requiera y a esos efectos hará resolución fundada. En dicho caso, solo podrá ser efectiva la nueva acreditación por este régimen, si mediaron por lo menos cinco años de permanencia de dicho personal en la República desde la fecha de su regreso al país.

La retribución del personal designado bajo este régimen será la prevista para el personal administrativo destinado al exterior incrementada en un 20% (veinte por ciento), más los beneficios sociales que le correspondan, no percibiendo gastos de representación.

Tendrá derecho además de los pasajes correspondientes, a las compensaciones establecidas en el artículo 77 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960 en la redacción dada por el artículo 269 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015 y a la Ayuda de Vivienda establecida por el Decreto 071/091, de 5 de febrero de 1991 y sus modificativos.

Artículo 43.- Deróganse el Decreto Ley N° 14.206, de 6 de junio de 1974 y sus modificativas, el artículo 331 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, el artículo 256 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, el artículo 168 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, los artículos 141 y 145 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, los artículos 162 y 163 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, el artículo 27 de la Ley N° 15.767, de 13 de setiembre de 1985 y los artículos 70 y 72 de la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986 y todas aquellas disposiciones que se opongan al nuevo Estatuto.

Artículo 44.- A partir de la fecha, integran el Estatuto del Servicio Exterior, las normas contenidas en la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 14 de noviembre de 2018.

LUCÍA TOPOLANSKY
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

=

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

ANEXO I AL
REPARTIDO Nº 1068
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 3504 DE 2018

ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA

M o d i f i c a c i ó n

I n f o r m e

Í N D I C E

	Página
Informe	1
Proyecto de ley	4
Disposiciones referidas	15

COMISIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES

I N F O R M E

Señores Representantes:

La Comisión de Asuntos Internacionales tiene el agrado de informar el proyecto de ley “Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República. Modificación”, que el Senado de la República remitió a esta Cámara, presentado por Presidencia de la República realizando una serie de modificaciones a efectos de que la futura ley tenga un lenguaje inclusivo.

En aquellos casos en que se refiere a funcionarios o funcionarias del Servicio Exterior se utiliza la expresión Personal de Servicio Exterior, por entender que dicha palabra es adecuada a esos efectos.

Si bien se puede decir que la palabra “personal” puede cumplir con esta finalidad inclusiva, la misma tiene un contenido genérico que puede referirse no solo a los funcionarios o funcionarias públicas, sino que puede referirse a cualquier otro vínculo con el Estado, ya sea por arrendamiento de servicio, relación laboral y otros.

Para que no exista dicha confusión se sugiere se modifique el artículo primero agregando un inciso en donde se establezca que se entiende por “personal” en este Estatuto, en el entendido de que se trata de funcionarios públicos y no refiere a otro tipo de relacionamiento con el Estado.

Si bien podrá entenderse que en la redacción que se le da al artículo tercero existe una contradicción, pues en vez de referirse a personal se refiere a funcionario o funcionaria, y esto es debido a que el artículo 59 de la Constitución dice: “La ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario.”. Por lo que se entiende que al invocarse dicho artículo se considera jurídicamente más adecuado mantener dicha redacción.

Otra modificación genérica que se realiza es sustituir las referencias a “de la presente ley” que se modifica por “del presente Estatuto”, siendo esto un cambio no substancial sino que una adecuación de redacción.

En el artículo 6° del proyecto aprobado por el Senado se elimina el límite de edad que plantea de cuarenta años de edad para el ingreso al Servicio Exterior, por considerar que dicho limite implicaría una norma discriminatoria y si bien puede una ley establecer determinadas condiciones y estas en definitiva establecer determinados límites que implican discriminar en el entendido de discernir, como establecer determinado requerimiento como por ejemplo poseer un determinado titulo o escolaridad, dichas condiciones deben estar justificadas en el interés general, pero no se encuentra ninguna razón que pueda fundamentar el límite en la edad para el ingreso como personal del Servicio Exterior.

En el artículo 7º en lo que refiere a la publicación del llamado a concurso se agrega que los dos diarios deben ser de tiraje nacional, esto es a efectos de darle la mayor difusión posible al llamado de que se trate.

El artículo 9º que refiere a la realización de cursos en el Instituto Artigas del Servicio Exterior, en cuanto a requerir a personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otras dependencias, en este último caso se realiza la aclaración de que sean funcionarios o funcionarias de dichas dependencias del Estado de reconocida experiencia.

Al artículo 14 se le realizan dos modificaciones, por una parte en el literal a) de dicho artículo en su segundo inciso se elimina la expresión “o de la tesis de ascenso”, en tanto la realización de una tesis no puede ser considerada o asimilada a un concurso, siendo una forma de evaluación académica, en todo caso cuando se realice un concurso con oposición la tesis podrá formar parte de dicha oposición, pero no puede asimilarse una tesis a lo que es un concurso.

También se modifica el literal c) en lo que refiere a la provisión de las vacantes y el requisito de antigüedad mínima en los cargos de Tercer Secretario/Tercera Secretaria, Segundo Secretaria / Tercera Secretaria y Primer Secretario / Tercera Secretaria, que de acuerdo al proyecto tanto del Poder Ejecutivo como el proyecto aprobado en el Senado se requieren cuatro años de antigüedad , volviendo al texto original que se encuentra en el literal A) del artículo 39 del Decreto-Ley N° 14.206, esto es tres años de antigüedad.

Se entiende que elevar la antigüedad implica generar un cuello de botella y un techo para quienes quieran acceder a un ascenso en los primeros grados de la carrera en el Servicio Exterior y no existe razón para ello.

En correspondencia con esta modificación también se modifica el artículo 18 del proyecto aprobado por el Senado y que coincide con la redacción dada por el Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, en el entendido que no corresponde elevar la edad de retiro del Personal de Servicio Exterior de 70 a 72 años de edad.

Por una parte se genera una excepción a lo que es la edad de retiro de los demás funcionarios públicos, excepción cuyos fundamento no se entiende, pero además esto implicaría que al extender mas la edad de retiro se generarían menos vacantes y esto implicaría la imposibilidad de ascenso para otros funcionarios o funcionarias que pretendan proseguir la carrera en el Servicio Exterior, lo que implica perjudicar la movilidad en la carrera funcional.

En el artículo 31 se entiende más adecuada la redacción dada por el proyecto del Poder Ejecutivo, de tal manera que de las tres categorías que se definen en el artículo 30 el personal en su primera asignación en el exterior cumpla los dos trienios en dos de ellas y no tan solo en las A y B como lo establece el proyecto aprobado en el Senado.

Por último en el artículo 43 del proyecto que refiere a la derogación de diferentes normas, entre ellas el artículo 141 de la Ley N° 17.930 del 12 de diciembre del año 2005, este articulo refiere a que ningún personal del Servicio Exterior puede ser acreditado como Jefe de Misión diplomática permanente por más de un total de quince años a lo largo de su carrera funcional y establece a su vez una excepción a esta regla en tanto el Poder Ejecutivo puede, por resolución fundada, exceptuar por única vez el límite de quince años, un máximo de cinco funcionarios.

Se entiende que esta norma no debe ser derogada, ya que tiene por objeto que los funcionarios o funcionarias no se perpetúen en cargos de Jefe de Misión diplomática y así generar movilidad en dichos cargos.

Por lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 11 de setiembre de 2019

ROBERTO CHIAZZARO
MIEMBRO INFORMANTE
MARÍA DOLORES ÁLVAREZ
GABRIEL GIANOLI
JORGE MERONI
SILVIO RÍOS FERREIRA
RAÚL SANDER

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I
DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA

Artículo 1°.- Se entiende por Estatuto del Servicio Exterior el conjunto de normas jurídicas que establecen las obligaciones y los derechos del personal del Servicio Exterior.

A los efectos de la presente ley, el término “personal” se refiere a los cargos públicos que ingresen a la función pública como funcionarios o funcionarias del servicio exterior de acuerdo con las normas que surgen del presente Estatuto.

Integran el Servicio Exterior de la República el conjunto de cargos del escalafón diplomático ocupados por personal de carrera o por personal de particular confianza, en el marco de lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República.

Artículo 2°.- El personal del Servicio Exterior es designado para el cumplimiento de las funciones diplomáticas y consulares que se le encomiende desempeñar, tanto en la República como en el exterior. Está al servicio de la Nación con entera independencia de personas, grupos políticos o partidos. Su lealtad y obediencia se debe únicamente a la Nación y a su Gobierno, conforme a la Constitución y las leyes

Artículo 3°.- El personal del Servicio Exterior está para la función y no la función para el funcionario/funcionaria (artículo 59 de la Constitución de la República), debiendo servir con imparcialidad al interés general. Sin perjuicio de los deberes inherentes a todo el funcionariado público, son deberes especiales del personal del Servicio Exterior la probidad, la reserva, el decoro y la dignidad.

Además de las causales de destitución comunes a todos los funcionarios/funcionarias públicos, el personal de carrera del Servicio Exterior podrá ser también destituido, previa venia del Senado, por la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del país o de la representación que inviste, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 168 de la Constitución de la República.

Son derechos del personal de carrera del Servicio Exterior, además de los derivados del presente Estatuto, aquellos otros comunes a la función pública que no se opongan a las normas especiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores implementará el enfoque de género con el objetivo de prevenir e impedir cualquier trato discriminatorio por motivos de género y promover la igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera funcional de todo el personal del Servicio Exterior. A esos efectos se procurará la asignación equitativa de funciones de dirección y de jefaturas de misión entre funcionarios de ambos sexos del personal del Servicio Exterior.

Artículo 4°.- El personal del Servicio Exterior debe guardar absoluta reserva y discreción acerca de los temas vinculados a su tarea y especialmente de las cuestiones clasificadas como reservadas, confidenciales o secretas, que conozca o llegue a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de dicho ejercicio. Dicha obligación subsistirá aun cuando deje de pertenecer al Servicio Exterior.

CAPÍTULO II
INGRESO AL SERVICIO EXTERIOR

Artículo 5°.- El ingreso al Servicio Exterior, con excepción de lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, sólo podrá efectuarse por concurso de oposición y méritos en el cargo de Tercer Secretario / Tercera Secretaria.

En el ingreso al Servicio Exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores asegurará que no exista ningún tipo de discriminación basada en sexo, edad, discapacidad, origen étnico o de cualquier otro tipo.

Artículo 6°.- Las vacantes que se produzcan en los cargos del último grado del escalafón del Servicio Exterior, Tercer Secretario / Tercera Secretaria, serán provistas en la forma establecida en los artículos siguientes, por ciudadanas y ciudadanos que tengan título de educación universitaria, en carreras con un mínimo de cuatro años de duración, que hayan sido expedidos por universidades legalmente habilitadas en la República.

Igualmente podrán ser provistas por quienes acrediten títulos equivalentes expedidos por universidades notoriamente reconocidas del exterior.

Artículo 7°.- El concurso de oposición y méritos para el ingreso al Servicio Exterior será reglamentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y organizado por el Instituto Artigas del Servicio Exterior, debiendo publicarse su convocatoria en el Diario Oficial y en otros dos diarios de tiraje nacional, por lo menos sesenta días antes de la fecha de iniciación de las pruebas.

La convocatoria incluirá información sobre el número de vacantes a ser provistas y los requisitos mínimos exigidos en el artículo anterior.

Un tribunal designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores evaluará los méritos y pruebas de quienes concursen, estableciendo un orden de precedencia entre quienes hayan obtenido las mejores calificaciones, hasta completar el número de vacantes fijadas por el Ministerio en la convocatoria.

El Poder Ejecutivo proveerá las vacantes de Tercer Secretario / Tercera Secretaria existentes a la fecha de la correspondiente convocatoria, siguiendo el orden de precedencia establecido por el tribunal del concurso.

CAPÍTULO III
INSTITUTO ARTIGAS DEL SERVICIO EXTERIOR

Artículo 8°.- El Instituto Artigas del Servicio Exterior será el servicio dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores que actuará como academia diplomática, responsable de organizar cursos de formación obligatorios para el personal que ingresa al Servicio Exterior de la República y de especialización y perfeccionamiento, igualmente obligatorios para el resto del personal del Servicio Exterior, con la excepción prevista en el artículo 12 de la presente ley, para ser ascendidos en el escalafón o ser destinados al exterior.

Artículo 9°.- Para la realización de los cursos, el Instituto Artigas del Servicio Exterior podrá recurrir al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores o de funcionarios/funcionarias de otras dependencias del Estado, de reconocida experiencia y capacidad. Asimismo, y a dichos fines, el citado instituto podrá celebrar convenios con instituciones de enseñanza o con técnicos especializados.

Artículo 10.- Para el cumplimiento de sus cometidos, el Instituto Artigas del Servicio Exterior deberá consultar las necesidades del servicio y organizar los cursos, aplicando a tal efecto los métodos más modernos y eficaces de enseñanza, manteniéndolos actualizados en cuanto a su metodología y contenido, procurando niveles de excelencia.

Artículo 11.- Es deber del personal del Servicio Exterior cumplir con el régimen de capacitación y asistencia a los cursos que dicte el Instituto Artigas del Servicio Exterior, para ser promovido o destinado.

Artículo 12.- Lo dispuesto en los artículos 8° y 11 del presente Estatuto se aplica a todo el personal del Servicio Exterior que pueda ser destinado a prestar funciones en el exterior hasta la categoría o rango de Consejero / Consejera inclusive, exceptuándose a quienes cumplan funciones de Directores o Directoras Generales, o sean o hayan sido Jefe o Jefa de Misión con carácter permanente.

CAPÍTULO IV

ASCENSOS

Artículo 13.- Los cargos del Servicio Exterior tendrán, en orden jerárquico decreciente, las siguientes categorías y grados:

7 – Embajador / Embajadora

6 – Ministro / Ministra

5 – Ministro Consejero / Ministra Consejera

4 – Consejero / Consejera

3 – Primer Secretario / Primera Secretaria

2 – Segundo Secretario / Segunda Secretaria

1 – Tercer Secretario / Tercera Secretaria

Artículo 14.- Las vacantes que se produzcan en el Servicio Exterior, serán provistas dentro del primer trimestre del año siguiente al que se producen, por ascenso de la categoría inferior a la inmediata superior y de acuerdo con el siguiente régimen:

a) Las vacantes de Segundo Secretario / Segunda Secretaria, Primer Secretario / Primera Secretaria, Consejero / Consejera y Ministro Consejero / Ministra Consejera serán provistas de acuerdo con el resultado obtenido por las listas de antigüedad calificada para el ascenso.

   Las listas de antigüedad calificada para el ascenso serán la resultante de la antigüedad, de la calificación, de los méritos y del concurso de oposición según

la categoría funcional correspondiente, que a tales efectos se realice anualmente entre el personal de cada categoría que cuenten con la antigüedad mínima necesaria para aspirar al ascenso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, al constituir el tribunal del referido concurso, deberá dar participación a los efectos de su integración al Instituto Artigas del Servicio Exterior y a la Universidad de la República. Asimismo podrá invitar a integrar el tribunal a personas o entidades de reconocida idoneidad y prestigio

b) Las vacantes de Ministro / Ministra y Embajador / Embajadora serán provistas por selección, en aquellos casos en que el Poder Ejecutivo considera conveniente proveerlas con personal de carrera del Servicio Exterior, para lo cual deberán tomarse en consideración las evaluaciones de desempeño funcional que se realizarán en la forma que establezca la reglamentación.

Estas vacantes de Ministro / Ministra y Embajador / Embajadora podrán ser provistas inmediatamente a que se generen.

c) Para la provisión de las vacantes referidas en los literales precedentes, será requisito necesario poseer, en el grado inmediato inferior, la antigüedad mínima que a continuación se establece:

Tercer Secretario / Tercera Secretaria: 3 años

Segundo Secretario/ Segunda Secretaria: 3 años

Primer Secretario / Primera Secretaria: 3 años

Consejero / Consejera: 4 años

Ministro Consejero / Ministra Consejera: 4 años

Ministro / Ministra: 4 años

CAPÍTULO V

CATEGORÍAS Y SITUACIONES FUNCIONALES

Artículo 15.- Los cargos de Embajadores / Embajadoras y Ministros / Ministras del Servicio Exterior serán considerados de particular confianza del Poder Ejecutivo con la sola excepción de los actualmente provistos, o que se provean por ascenso, con personal de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los Embajadores / Embajadoras y Ministros / Ministras del Servicio Exterior designados en cargos de particular confianza cesarán de pleno derecho en sus funciones y cargo a los noventa días del término del mandato del gobierno que los haya designado, sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de cesarlos en cualquier momento. En estos casos, no serán de aplicación los límites de edad previstos para el personal del Servicio Exterior.

Artículo 16.- El personal de carrera del Servicio Exterior sólo podrá ser acreditado como Jefe o Jefa de Misión permanente, cuando posea cargo presupuestal de Embajador / Embajadora, Ministro / Ministra o Ministro Consejero / Ministra Consejera.

Los Ministros / Ministras y Ministros Consejeros / Ministras Consejeras que sean acreditados en calidad de Embajador / Embajadora, percibirán los haberes y demás compensaciones correspondientes a esta última categoría presupuestal, durante el término de su misión en el exterior.

Quienes siendo Consejeros / Consejeras a la fecha de vigencia de la presente ley se encontraren acreditados en calidad de Jefe o Jefa de Misión en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto Ley N° 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 331 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, habrán de finalizar su quinquenio en funciones en el exterior en los términos y condiciones en que fueron designados.

Artículo 17.- El Poder Ejecutivo podrá, con carácter transitorio y al solo efecto protocolar, cuando las necesidades del servicio lo requieran, asignar al personal del escalafón M - Personal del Servicio Exterior la categoría inmediata superior a la del cargo que posea, sin que implique variación en las remuneraciones.

Artículo 18.- Se establece en 70 años la edad máxima para el desempeño de tareas en el escalafón M - Servicio Exterior por parte del personal de carrera del Servicio Exterior.

Alcanzada la edad señalada, se producirá el cese de pleno derecho en el cargo.

Artículo 19.- El personal de carrera del Servicio Exterior tendrá las siguientes situaciones: actividad, disponibilidad y retiro.

Artículo 20.- La situación de actividad comprende al personal que preste servicios en el exterior o en la Cancillería.

Artículo 21.- La situación de disponibilidad comprende al personal que, en forma transitoria, deje de prestar funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 22.- El Poder Ejecutivo podrá disponer el pase a situación de disponibilidad de:

a) El personal que no asuma los destinos que se le asigne en el exterior o en la Cancillería.

b) El personal que por causa grave deba cumplir sanciones disciplinarias de suspensión, por el tiempo que duren éstas.

c) El personal amparado al régimen de licencia especial sin goce de sueldo.

Artículo 23.- En los supuestos referidos en los literales a) y b) del artículo 22 del presente Estatuto, el pase a situación de disponibilidad operará de forma independiente y sin perjuicio de las medidas disciplinarias que en cada caso se adopten.

Artículo 24.- El personal que sea pasado a situación de disponibilidad como consecuencia de lo dispuesto en el literal a) del artículo 22 de del presente Estatuto, cesará en la misma cuando se le asigne nuevo destino en el exterior o en la Cancillería. En estos casos la situación de disponibilidad no podrá exceder los seis meses.

Artículo 25.- El personal que se encuentre en situación de disponibilidad gozará, en virtud de lo dispuesto en el literal a) del artículo 22 del presente Estatuto, de la mitad del sueldo de su cargo presupuestal, sin compensaciones.

Quienes se encuentren en las situaciones enumeradas en los literales b) y c) del artículo 22 del presente Estatuto, no percibirán remuneración alguna.

Artículo 26.- El personal que se encuentre en situación de disponibilidad en virtud de lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 22 del presente Estatuto, no podrá ser ascendido. No se computará el tiempo transcurrido en la misma a efectos de la rotación ni de la antigüedad. No obstante, el período pasado en dicha situación será tenido en cuenta a efectos del retiro.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 27.- Todo el personal de carrera del Servicio Exterior deberá obligatoriamente rotar en el desempeño de funciones, alternando períodos máximos de cinco años en el exterior y mínimos de dos años en la Cancillería respectivamente, siendo facultad de la Administración determinar, dentro de los límites establecidos y de acuerdo con las necesidades del servicio, su extensión, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 31 y siguientes del presente Estatuto.

Durante el período de desempeño funcional en el exterior, el personal del Servicio Exterior solo podrá ser trasladado una vez.

No podrá ser destinado nuevamente a desempeñar funciones en el exterior en un mismo destino, hasta tanto haya cumplido un período de cinco años de servicio en el exterior, en otro diferente.

El Poder Ejecutivo por resolución fundada y atendiendo a las necesidades del servicio, podrá exceptuar de esta última prohibición hasta un máximo simultáneo de tres Jefes o Jefas de Misión y por un período máximo de dos quinquenios.

Artículo 28.- El personal del Servicio Exterior que sea sancionado por la comisión de faltas administrativas graves, quedará asimismo inhibido de cumplir funciones en el exterior o ser ascendido por el tiempo que se determine en cada caso.

El acto administrativo por el cual se establezcan las medidas disciplinarias correspondientes deberá establecer conjuntamente el plazo de inhibición a que refiere el presente artículo.

Artículo 29.- Los Terceros Secretarios / Terceras Secretarias del Servicio Exterior no podrán ser destinados a prestar funciones en el exterior, hasta tanto acrediten una antigüedad mínima de tres años en el Escalafón del Servicio Exterior.

Lo dispuesto en este artículo comenzará a regir para el personal que ingrese a partir del primer concurso de ingreso posterior a la entrada en vigor de la presente ley.

Artículo 30.- Existirán tres categorías de destinos en el exterior, graduadas de A) a C), según las condiciones especiales de vida que presenten, a saber:

Categoría A) destinos que no presentan circunstancias especiales de vida que dificulten la adaptación y el ejercicio de la función.

Categoría B) que presentan alguna circunstancia particular funcional o de adaptación.

Categoría C) destinos que presentan condiciones de vida particularmente difíciles.

Estas categorías se reglamentarán y actualizarán periódicamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores tomando en consideración las circunstancias objetivas de los destinos, como la situación política, social y económica, las condiciones de salubridad, el grado de seguridad interna o aspectos que por las circunstancias imperantes involucren un cierto riesgo para la integridad física o psíquica del personal del Servicio Exterior y su familia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores asignará las categorías previstas en este artículo a los destinos en el exterior, actualizando periódicamente dicha asignación.

Artículo 31.- En su primera asignación en el exterior, el personal cumplirá un período total en funciones de seis años, a computar en dos trienios consecutivos, en dos de las categorías establecidas en el artículo precedente.

Artículo 32.- El personal que sea destinado a cumplir funciones en destinos clasificados en la Categoría C), excepto los Jefes o Jefas de Misión, lo harán por un período de tres años, transcurrido el cual tendrán derecho a ser trasladados a otro destino, no comprendido en esa categoría, por igual período de tiempo.

En la resolución del Poder Ejecutivo por la que se efectúa la designación a un destino clasificado en la Categoría C), se dispondrá expresamente que el traslado es por el período de tres años.

Artículo 33.- El Poder Ejecutivo podrá, por resolución fundada y respecto a un máximo de quince funcionarios o funcionarias en forma simultánea, prorrogar los plazos de desempeño de funciones en el exterior, hasta por el término de seis meses renovables por una sola vez y hasta por igual período.

En el caso de Jefes o Jefas de Misión Diplomática, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar por un año adicional sucesivamente y hasta un máximo de siete años, su período en funciones en el exterior en un mismo destino.

Las solicitudes de prórroga podrán fundamentarse:

a) Cuando así lo justifiquen estrictas e ineludibles razones de servicio que deberán fundamentarse en forma clara y concisa.

b) Cuando el personal demuestre fehacientemente que el retorno en la fecha de vencimiento del quinquenio perjudica en forma grave e irreparable la educación curricular de los hijos e hijas menores de 18 años que tenga a su cargo.

c) Cuando así se justifique por estrictas razones de salud que deberán fundamentarse en forma clara y concisa, del funcionario o funcionaria o de su núcleo familiar.

En estos casos se adicionará un tiempo idéntico al transcurrido en las prórrogas dispuestas en el período de adscripción mínima a los efectos establecidos en el artículo 27 de la presente ley. Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo evaluará la pertinencia de aplicar esta disposición en los casos comprendidos en el literal a) del presente artículo.

Artículo 34.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo sin atender al cumplimiento de los plazos de rotación y de la limitación de un solo traslado establecidos en el artículo 27 del presente Estatuto, podrá dar destino, trasladar o disponer por única vez la permanencia simultánea en el exterior de hasta un máximo de cinco Jefes o Jefas de Misión.

Por ningún motivo dicho personal podrá permanecer más de diez años consecutivos en funciones en el exterior.

Cuando la excepcionalidad se aplique a la observancia del bienio establecido en el artículo 27 de la presente ley, la posibilidad de utilizar la excepción conferida se recobrará para la Administración a partir de la fecha en que el personal exceptuado complete su período mínimo de adscripción en Cancillería.

Artículo 35.- No podrá prestar servicios simultáneamente en las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares de la República radicadas en un mismo Estado personal del Servicio Exterior con parentesco hasta tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad.

Sin perjuicio de ello, el personal del Servicio Exterior vinculado por matrimonio o por unión concubinaria podrá ejercer simultáneamente funciones en el exterior en un mismo Estado, siempre que el ejercicio de tales funciones no implique una relación jerárquica entre ambas partes.

Cuando una de las partes sea destinada a desempeñar funciones permanentes en el exterior, la otra podrá solicitar licencia especial para acompañar a la primera en el cumplimiento de su misión.

La licencia especial será concedida por el período en el cual quien tiene el destino en el exterior permanezca en tal situación.

Quien se encuentre usufructuando licencia especial, mientras se halle en tal situación, no percibirá ninguna remuneración, no podrá ser ascendido y no se le computará el tiempo a los efectos de la rotación.

Artículo 36.- El personal del Servicio Exterior casado o en unión concubinaria cuyos cónyuges o concubinos o concubinas fueran extranjeros, sean estos o no ciudadanos legales de la República, podrá tener destino en los países de nacimiento o de la nacionalidad de origen o adquirida de los mismos, con previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores

Artículo 37.- No podrán emplearse en las Misiones Diplomáticas, Delegaciones u Oficinas Consulares de la República radicadas en un Estado, los familiares del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores con destino en el mismo Estado, cuando existiera relación jerárquica entre ambos.

Cuando no existiese dicha relación jerárquica, deberá requerirse la autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 38.- El personal del Servicio Exterior que desempeña funciones en el exterior deberá solicitar y recibir autorización previa y expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay para que sus cónyuges o concubinos o concubinas puedan ejercer profesiones o desempeñar tareas remuneradas en el país de destino.

Artículo 39.- El Poder Ejecutivo, al disponer los destinos y traslados del personal del Servicio Exterior, tendrá en cuenta las aptitudes del personal en atención a las necesidades de la Administración, tendiendo a asegurar la mayor y mejor eficiencia del servicio, tanto desempeñando funciones en el exterior como en la Cancillería y, en la medida de lo posible, considerando la situación de familia del funcionariado. También serán tenidas en cuenta su preparación funcional, aptitudes especiales, condiciones de adaptabilidad, conocimiento de idiomas y rendimiento demostrado en determinadas funciones y lugares.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y RESIDUALES

Artículo 40.- El personal Clase AaA a que refiere el artículo 44 del Decreto Ley N° 14.206, de 6 de junio de 1974, continuará cumpliendo funciones asimilado al personal de carrera del Servicio Exterior, como en el régimen vigente hasta la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 41.- El personal presupuestado del Ministerio de Relaciones Exteriores, perteneciente a los escalafones Administrativo (C), Técnico (B) y Especializado (D), con un grado mínimo de 8 (ocho) y con una antigüedad igual o mayor a cinco años en el Inciso podrá ser destinado a prestar funciones administrativas y técnicas en las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o Delegaciones Permanentes de la República en el exterior. Este personal no tendrá carácter diplomático ni consular.

En esta situación podrán encontrarse como máximo veinte funcionarios o funcionarias en forma simultánea. El plazo de permanencia en el exterior no excederá de tres años pudiendo ser prorrogable por hasta un año más en los casos en que así lo requieran las necesidades del servicio. Este personal deberá realizar los cursos básicos de formación, aprobar los mismos y será seleccionado por concurso de méritos y antecedentes. No podrá ser destinado nuevamente al exterior hasta después de transcurridos cinco años de su regreso a la República.

El personal así destinado percibirá, por trimestre adelantado y como única remuneración, el importe equivalente al 90% (noventa por ciento) del sueldo correspondiente al cargo Tercer Secretario / Tercera Secretaria en el mismo destino, más los beneficios sociales que le correspondan, no percibiendo gastos de representación.

Tendrá derecho además de los pasajes correspondientes, a las compensaciones establecidas en el artículo 77 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, en la redacción dada por el artículo 269 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 y a la Ayuda de Vivienda establecida por el Decreto Nº 071/091, de 5 de febrero de 1991 y sus modificativos.

Artículo 42.- El personal presupuestado del escalafón "A" Técnico Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores con más de diez años de antigüedad en el Inciso, ingresado con posterioridad al 31 de diciembre de 1985, no amparado por el artículo 123 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 ni por el artículo 143 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, podrá, por razones de servicio, ser designado a desempeñar funciones propias de su escalafón en las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o Delegaciones Permanentes de la República en el exterior.

En esta situación podrán encontrarse como máximo seis funcionarios o funcionarias en forma simultánea. El plazo de permanencia en el exterior no excederá de dos años, pudiendo ser prorrogable por hasta un año más en los casos en que así lo requieran las necesidades del servicio. Su designación será atendiendo a criterios objetivos de selección, méritos y antecedentes y deberán realizar y aprobar los cursos básicos de formación.

En todos los casos la acreditación en el exterior será como Personal Técnico acorde al literal c) del artículo 1° de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Dicho personal acreditado en el exterior, a su regreso, no tendrá derecho a salir nuevamente a otro destino salvo que la Administración lo requiera y a esos efectos hará

ANEXO
39ª SESIÓN

DOCUMENTOS

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

REPARTIDO Nº 1215
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 4141 DE 2019

EJERCICIO "TANQUE 2019"

Se autoriza el ingreso al territorio nacional de hasta tres Personal Superior y una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina

———

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 6 de setiembre de 2019

Señora Presidente de la Asamblea General
Lucía Topolansky:

El Poder Ejecutivo cumple en remitir a ese Cuerpo, conforme con lo preceptuado en el numeral 11) del articulo 85 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se autoriza el ingreso al territorio nacional de hasta tres (3) Personal Superior y una (1) aeronave KC-130 de la Fuerza Aérea de la República Argentina, a fin de realizar el Ejercicio "TANQUE 2019", por la Fuerza Aérea Uruguaya y la Fuerza Aérea Argentina, entre el 14 y el 18 de octubre de 2019 (fecha alterna entre el 3 y el 7 de noviembre de 2019), en el Área Terminal de Durazno.

El mencionado ejercicio consiste en calificar y rehabilitar tripulaciones en reabastecimiento de combustible en vuelo, con el empleo combinado de aeronaves y tripulaciones de la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Uruguaya. Dado que nuestra Fuerza no cuenta con una aeronave, que reúna las características específicas para este tipo de maniobras de recarga en vuelo, resulta indispensable la presencia de una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina que cumpla con los requisitos necesarios para efectuarlas.

El objetivo del Ejercicio "TANQUE 2019" es:

a. Calificar y entrenar tripulaciones uruguayas en Operaciones de Reabastecimiento de Combustible en Vuelo, a efectos de adquirir un adecuado nivel de interoperabilidad a través de procedimientos unificados, con el objeto de contribuir a la realización de Ejercicios Combinados de mayor complejidad.

b. Establecer los procedimientos operacionales, tácticas y técnicas comunes necesarias para la ejecución de este tipo de Operaciones Combinadas.

c. Adiestrar al personal que integra los medios operacionales y de apoyo de la Fuerza Aérea Uruguaya y de la Fuerza Aérea Argentina.

d. Adiestrar al Personal del Comando Aéreo de Operaciones de la Fuerza Aérea Uruguaya y del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina en actividades de planeamiento de Operaciones Aéreas Combinadas .

e. Incrementar la interoperabilidad entre las Fuerzas.

f. Estrechar relaciones, intercambiar experiencias y establecer procedimientos comunes en lo referido a reabastecimiento en vuelo.

Por los fundamentos expuestos, se solicita a ese Cuerpo la consideración del adjunto proyecto de ley, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda a la señora Presidente de la Asamblea General, atentamente.

TABARÉ VÁZQUEZ
JOSÉ BAYARDI
EDUARDO BONOMI
RODOLFO NIN NOVOA

_____

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Autorizar el ingreso al territorio nacional de hasta tres (3) Personal Superior y una (1) aeronave KC-130 de la Fuerza Aérea Argentina, con la finalidad de realizar el Ejercicio "TANQUE 2019", entre el 14 y el 18 de octubre de 2019 (fecha alterna entre el 3 y el 7 de noviembre de 2019) .

Montevideo, 6 de setiembre de 2019

JOSÉ BAYARDI
EDUARDO BONOMI
RODOLFO NIN NOVOA

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Autorizar el ingreso al territorio nacional de hasta tres (3) Personal Superior y una (1) aeronave KC-130 de la Fuerza Aérea Argentina, con la finalidad de realizar el Ejercicio “TANQUE 2019”, entre el 14 y el 18 de octubre de 2019 (fecha alterna entre el 3 y el 7 de noviembre de 2019).

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de setiembre de 2019.

PATRICIA AYALA
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

=

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

REPARTIDO Nº 702
JUNIO DE 2017

CARPETA Nº 2062 DE 2017

COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE LECHE MATERNA

Regulación

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- El objeto de la presente ley es proteger, promover y apoyar la lactancia materna y las mejores prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños, para proporcionarles una nutrición segura, adecuada y suficiente; así como regular la comercialización y distribución de todo alimento y o bebida que sea utilizado en lactantes y niños pequeños.

CAPÍTULO II

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2°.- La presente ley se aplica en todo el territorio nacional, a todos los fabricantes y distribuidores de los productos designados, nacionales e importados, así como a personas físicas y jurídicas y relacionados con la lactancia materna y la alimentación óptima de los lactantes y niños pequeños, y a su protección, promoción y apoyo.

Artículo 3°.- Designa como autoridad competente para la aplicación de la presente ley y su reglamento, al Ministerio de Salud Pública.

CAPÍTULO III

DEFINICIONES

Artículo 4°.- Para efectos de la aplicación de la presente ley se entenderá por:

A. Sucedáneos de la leche materna: Todo alimento comercializado o de otro modo presentado como sustituto, parcial o total, de la leche materna, sea apropiado o no para ese fin.

B. Alimento complementario: Es el que se inicia cuando la leche materna no es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales del lactante.

C. Autoridad competente: Instituciones designadas como responsables de la aplicación de la presente ley y del monitoreo y vigilancia del cumplimiento de la misma.

D. Donación: Ofrecimiento o suministro gratuito de un producto en cantidad superior a la caracterizada como muestra.

E. Envase: Cualquier forma de embalaje y presentación de un producto designado, destinado a su comercialización, incluidas cada una de las unidades que contenga los productos designados, los que pueden ser en polvo o líquido, empacada en tarros o latas, cajas o bolsas, sobres, botellas o cápsulas listas para el consumo, paks u otras.

F. Etiqueta: Todo sello, marca, rótulo u otra indicación descriptiva o gráfica, elaborada por cualquier medio, fijada en el envase o colocada dentro del mismo o dentro del producto designado.

G. Fabricante, distribuidor y promotor: Cualquier persona física o jurídica que directa o indirectamente se dedique a la producción o comercialización de un

producto designado, incluyendo toda persona que se dedique a proporcionar servicios de información o de relaciones públicas para un producto designado.

H. Preparado de Inicio: Producto en forma líquida o en polvo y en cualquier forma de envase destinado a la alimentación de lactantes hasta los seis meses de edad.

I. Preparado de seguimiento o de continuación: Todo producto lácteo o similar, indicado o de otro modo presentado como adecuado para la alimentación de lactantes mayores de seis meses y hasta 36 (treinta y seis) meses de edad.

J. Aditivo de leche materna: preparado de nutrientes, en presentación líquida o en polvo y en cualquier forma de envase, presentada o indicada para adicionar a la leche materna.

K. Lactancia materna exclusiva: Cuando el niño-niña recibe solamente leche materna, directamente del pecho u ordeñada, o leche humana de otra fuente sin ningún otro alimento o bebida, ni siquiera agua, con excepción de sales de rehidratación oral, gotas o jarabes conteniendo vitaminas, suplementos minerales o medicamentos.

L. Lactante y niño pequeño: Niño de 0 (cero) a 36 (treinta y seis) meses de edad cumplidos.

M. Leche denominada de seguimiento: Leche de origen animal, entera o modificada, o producto similar de origen vegetal, comercializada como apta para la alimentación hasta 36 meses.

N. Logotipo: Designa el emblema, el diseño o los caracteres por los que se identifica un producto, una marca o una empresa.

O. Material informativo o educativo: Todo material escrito, audiovisual o virtual relacionado con la lactancia materna y la alimentación de lactantes y niños pequeños, mujeres embarazadas y en período de lactancia, destinado al público en general.

P. Material técnico-científico: Todo material dirigido al personal de salud y otros profesionales afines, elaborado con información científicamente válida y relacionado con los productos designados. Explícitamente excluye toda forma de promoción y publicidad.

Q. Marca: Todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición que tales signos sean apropiados para distinguir y diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra.

R. Muestras: Una (1) unidad o pequeñas cantidades de un producto que se facilitan gratuitamente.

S. Patrocinar: Dar cualquier tipo de apoyo o incentivo, financiero, logístico o material a profesionales, servicios, entidades o establecimientos públicos o privados.

T. Personal de salud: Toda persona profesional, técnica o de apoyo, incluidos los agentes voluntarios no remunerados, relacionada con la salud en el área pública o privada.

U. Producto Designado:

1. Preparado infantil, incluida cualquier preparación que se use como única fuente de nutrición para alimentar lactantes desde el nacimiento.
2. Preparados infantiles especiales; libres de lactosa, preparados para niños con trastornos poco frecuentes y cualquier otra similar que se produzca en el futuro.
3. Otros productos lácteos, alimentos o bebidas cuando se comercializan o se indica que pueden emplearse, con o sin modificación, para sustituir parcial o totalmente a la leche materna.
4. Preparados de seguimiento, de continuación, o crecimiento, incluidos los preparados recomendados para menores de treinta y seis (36) meses.
5. Aditivos de la leche materna.
6. Cualquier alimento complementario u otro alimento o bebida comercializado, suministrado, presentado o comúnmente usado para alimentar a lactantes y niños pequeños, incluyendo los agregados nutricionales, alimentos terapéuticos listos para usarse.
7. Biberones, tetinas, chupetes, intermediarias, aireadores, y todo utensilio o material comercializado relacionado con la preparación, suministro de alimentos e higiene.
8. Alimentos y/o bebidas dirigidos especialmente para mujeres embarazadas o en período de lactancia.

V. Comercialización: Cualquier forma de preservar o vender un producto designado, incluyendo las actividades de promoción, importación, distribución, publicidad, mercadeo, patrocinio, servicios de información y relaciones públicas para un producto designado.

W. Promoción: Actividad que tiene como fin el dar a conocer o hacer sentir la necesidad de un producto designado, o de estimular, directa o indirectamente, a una persona a comprar o utilizar un producto designado.

X. Publicidad: Cualquier actividad de presentación o demostración, por cualquier medio, con el fin de promover o inducir, directa o indirectamente, la compra o el uso de un producto designado o un servicio.

Y. Punto de venta: Lugar, físico o virtual, de expendio al público de productos designados.

Z. Suministro subvencionado: Práctica por la que una cantidad de un producto designado se entrega a los prestadores de salud, a un precio unitario menor al precio de venta.

CAPÍTULO IV

COMERCIALIZACIÓN

Artículo 5°.- Todo producto designado podrá ser comercializado, sólo si:

A. Cuenta con registro sanitario y cumple con la normativa de etiquetado establecida en el artículo 9 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna aprobado por la OMS y UNICEF.

B. Está debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, de conformidad con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento.

C. Está vigente para el consumo, con fecha de vencimiento visible.

D. Cumple rigurosamente con las normas establecidas por la presente ley y su reglamento.

CAPÍTULO V

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Artículo 6°.- Queda prohibida a cualquier persona física o jurídica la promoción, publicidad y patrocinio de los productos designados por cualquier medio.

Artículo 7°.- Las prácticas promocionales y publicitarias prohibidas incluyen, pero no se limitan a las siguientes:

A. Tácticas de venta tales como presentaciones especiales, descuentos promocionales, bonificaciones, rebajas, ventas especiales, premios u obsequios, ventas vinculadas, asociaciones con otras marcas o con otros productos y logotipos similares, contacto directo o indirecto de representantes de fabricantes o distribuidores de productos designados con las madres, padres, familias y el público o cualquier otra práctica que establezca la autoridad competente.

B. Entrega de muestras a cualquier persona, entidad o institución.

C. Suministros gratuitos o de bajo costo de productos designados a cualquier persona, entidad o institución.

D. Donación o subvención de un producto designado a cualquier persona, entidad o institución, salvo los casos previstos que la Reglamentación a la presente ley establezca.

Artículo 8°.- Queda prohibido a toda persona física o jurídica que comercialice productos designados, directa o indirectamente:

A. Donar o distribuir a cualquier persona o entidad, cualquier material o equipo que contenga palabras, imágenes, marca, eslogan, logotipo que identifiquen a un producto designado, una línea de productos o un fabricante, o que pueda promover el uso de un producto designado;

B. Donar o distribuir a cualquier persona o institución, objetos tales como lapiceras, calendarios, afiches, calcomanías, folletos, libretas de notas, tarjetas de crecimiento, juguetes u otros que contengan palabras, imágenes, marca, logotipos o eslogan que identifiquen a un producto designado, una línea de productos o un fabricante, o que pueda promover el uso de un producto designado;

C. Donar suministros gratuitos de productos designados a cualquier persona o entidad o venderlos a los servicios de salud a menos del precio al por mayor publicado;

D. Ofrecer o donar cualquier servicio, obsequio, contribución o beneficio al personal de salud e instituciones, incluido becas, subvenciones a la

investigación, financiamiento de participación en reuniones, seminarios, conferencias o cursos de formación continuada y otros;

E. Patrocinar o desarrollar eventos, concursos o campañas destinados a mujeres gestantes y sus parejas o madres en lactancia, padres de lactantes y niños pequeños o miembros de sus familias, o patrocinar o desarrollar eventos, concursos o campañas relativas a la fecundidad, al embarazo, al parto y post-parto, o a la alimentación de lactantes y niños pequeños;

F. Incentivar con bonificaciones o comisiones o formas similares el volumen de ventas de productos designados;

G. Iniciar o establecer, directa o indirectamente, a título profesional o comercial, contacto con mujeres embarazadas, madres y padres de lactantes, niños pequeños y sus familias.

Artículo 9°.- No se permitirá en ningún medio de comunicación o red social ni en material impreso, visual o auditivo, incluyendo los sistemas virtuales, el uso de imágenes de biberones, chupetes, tetinas, intermediarias, aireadores o similares, a fin de evitar cualquier mensaje subliminal o implícito que pueda desestimular la lactancia materna.

Artículo 10.- Toda persona física o jurídica que comercialice productos designados no podrá patrocinar o financiar becas para estudios que tengan relación con temas de lactancia materna y/o alimentación de lactantes, formación continuada o la participación de personal de salud en conferencias, seminarios, cursos o congresos.

Artículo 11.- Se permitirá a los fabricantes y distribuidores donar productos designados, únicamente con la aprobación del Ministerio de Salud Pública. En estos casos, las donaciones, deben estar libres de marca y logotipo, y solamente incluir el valor nutricional, instrucciones de uso y fecha de vencimiento.

CAPÍTULO VI

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Artículo 12.- Los materiales informativos y educativos que tratan de alimentación de lactantes y niños pequeños, no podrán ser producidos, patrocinados o financiados por los fabricantes y los distribuidores de cualquier producto designado.

Artículo 13.- Los materiales informativos y educativos, sea cual fuera su presentación, relativos a la alimentación de lactantes y niños pequeños, deberán ser escritos en idioma español e incluir clara y visiblemente cada uno de los siguientes aspectos:

A. Los beneficios y superioridad de la lactancia materna para el niño, la madre, la sociedad y el ambiente.

B. Los riesgos de la alimentación artificial o con preparados infantiles, ya que estas no son inocuas.

C. Los riesgos del uso del biberón y chupete o de la introducción precoz de alimentos complementarios que afecta la lactancia materna.

D. El valor insustituible de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de edad y en forma continuada hasta los 2 años de edad o más.

E. Que la alimentación complementaria, adecuada, inocua y nutritiva puede fácilmente ser preparada en el hogar, con alimentos propios del país y la estación.

Artículo 14.- Cuando los materiales mencionados en el artículo 12, tratan el tema de alimentación de lactantes y niños pequeños con alguno de los productos designados, deberán incluir, además, los puntos siguientes:

A. Instrucciones para la preparación y el uso correcto del producto, incluida la limpieza y esterilización de los utensilios.

B. Instrucciones para alimentar a los lactantes y niños pequeños con utensilios como biberón adecuado, vaso, taza y cuchara.

C. Los riesgos que presenta para la salud la alimentación con biberón en relación a la manipulación, almacenamiento y preparación incorrecta del producto.

Artículo 15.- Los materiales informativos y educativos, sea cual fuera su presentación, relativos a la alimentación de lactantes y niños pequeños, no deberán:

A. Dar la impresión de suscitar la creencia de que un producto designado es equivalente, comparable o superior a la leche materna o a la lactancia materna.

B. Contener el nombre, marca o logotipo de cualquier producto designado o de un fabricante o distribuidor.

C. Contener imágenes o textos que fomenten o idealicen el uso del biberón, tetinas y chupetes o desestimulen la lactancia materna.

D. Contener ilustraciones, fotos o imágenes de lactantes o niños pequeños, juguetes o formas humanizadas de animales, vegetales u objetos.

E. Contener afirmaciones sobre propiedades nutricionales o beneficios para la salud del producto o que asemejan el producto a la leche materna.

Artículo 16.- Los materiales informativos y educativos que tratan de alimentación de lactantes y niños pequeños, no podrán ser producidos, patrocinados o financiados por los fabricantes y los distribuidores de cualquier producto designado.

CAPÍTULO VII

SISTEMAS DE ATENCIÓN DE SALUD Y PERSONAL DE SALUD

Artículo 17.- Los prestadores de salud y su personal, deberán adoptar las medidas necesarias para difundir y aplicar a cabalidad la presente ley, así como promover, proteger y apoyar la práctica de la alimentación óptima de los lactantes, incluyendo aspectos de nutrición y salud materna.

Artículo 18.- Los prestadores de salud y su personal, deberán promover e implementar estrategias de calidad y humanización para la atención de las mujeres gestantes y en período de lactancia; y que promuevan, protejan y apoyen la lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación del lactante.

Artículo 19.- Los prestadores de salud y su personal, deberán crear las condiciones adecuadas que permitan el involucramiento de los padres, parejas y familiares en el apoyo a la lactancia materna de las madres, y apoyar efectivamente las prácticas de lactancia materna óptima de su propio personal.

Artículo 20.- No se permitirá dentro de los prestadores de salud la presencia de representantes de servicios profesionales, técnicos o voluntarios facilitados o financiados por los fabricantes o distribuidores de los productos designados.

Artículo 21.- Los materiales informativos provenientes de los fabricantes o distribuidores o de otra fuente, sobre los productos designados, para los profesionales de salud, sólo podrán ser técnico-científicos y entregados previa solicitud y aprobación de la autoridad competente, de acuerdo a lo que se estipule en el reglamento.

Artículo 22.- El personal de salud no podrá recibir ningún tipo de incentivos, regalos, donaciones o patrocinios provenientes de cualquier persona física o jurídica que fabrique o comercialice productos designados, ni de los distribuidores y puntos de venta.

CAPÍTULO VIII

ETIQUETADO

Artículo 23. (Etiquetado de productos designados).- Todo envase de un producto designado deberá tener una etiqueta que no pueda despegarse del mismo sin destruirse. La etiqueta de cada producto designado deberá ser diseñada de tal manera que ni en imagen ni en texto desaliente la lactancia materna. Asimismo, deberá proporcionar la información necesaria para el uso correcto del producto y deberá cumplir con la norma reglamentaria de etiquetado vigente.

Dicha etiqueta:

A. Deberá estar escrita en idioma español;

B. Deberá contener el nombre y la dirección del fabricante o importador y, cuando proceda, el nombre del distribuidor.

Artículo 24.- Las etiquetas de productos designados no podrán:

A. Contener fotografía, diseño u otra presentación gráfica, salvo los gráficos para ilustrar el método de preparación del producto; contener ilustraciones, fotos, imágenes de lactantes o niños pequeños, juguetes o formas humanizadas de animales, vegetales u objetos; llevar logos o imágenes que representen a madres, padres, profesionales, niños o cualquier otra persona, utilizando o promoviendo el uso del producto o biberón; establecer de manera directa o indirecta semejanza del biberón o tetina, con el seno de la madre o con la fisiología de la producción de la leche materna.

B. Contener frases que puedan poner en duda la capacidad de la madre para amamantar.

C. Promover otro producto.

D. Promover el uso de biberón, chupetes, tetina y pezoneras.

E. Contener recomendación de profesionales o asociaciones de profesionales.

F. Contener declaraciones o afirmaciones sobre propiedades nutricionales o beneficios para la salud.

Artículo 25.- Las etiquetas de productos alimentarios comprendidos en el ámbito de la presente ley, deberán, además de los requisitos de los artículos 24 y 25 declarar lo siguiente:

A. Los ingredientes utilizados.

B. La composición y análisis del producto, incluyendo la fuente específica de origen de las proteínas, tipo de grasas y su procedencia, destacando las grasas saturadas, ácidos grasos tipo trans, azúcares totales, azúcares simples y sal, así como declarar si algún ingrediente es transgénico.

C. Las condiciones requeridas para su almacenamiento.

D. El número de serie y la fecha límite para el consumo del producto teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de almacenamiento.

Artículo 26. (Etiqueta de preparado infantil).- Toda etiqueta de preparado infantil deberá llevar:

A. Una inscripción al frente del producto, clara, legible, impresa en letras de altura no menor a la mitad de las de la marca del producto, de color negro sobre fondo claro, a 1 cm por debajo del mismo, que diga "Aviso importante: La leche materna es el mejor alimento para el lactante".

B. Incluir la expresión: "Advertencia: El consumo de este producto y el uso del biberón tienen riesgos para la salud".

C. La indicación de que el producto sólo debe utilizarse bajo prescripción de un profesional de salud autorizado por el Ministerio de Salud Pública.

D. Instrucciones para la preparación correcta del producto, en taza o vaso, en palabras e ilustraciones de fácil comprensión.

E. Una advertencia sobre los riesgos para la salud de una preparación incorrecta del producto.

F. Debe consignarse en los preparados en polvo que no son estériles. En dicha etiqueta no se podrá:

1. Utilizar términos como "maternizada", "humanizada" o análogos.

2. Hacer ninguna comparación del producto o de algún componente, tanto en el texto como en la marca del producto, con la leche materna, ni utilizar expresiones que puedan poner en duda la capacidad de la madre para amamantar.

3. Contener declaraciones o afirmaciones sobre propiedades nutricionales o beneficios para la salud del preparado.

Artículo 27.- Etiquetas de preparado infantil de seguimiento y leches denominadas de crecimiento.

Además de los requisitos establecidos para las etiquetas de preparado infantil, las etiquetas de preparado de seguimiento y de leches denominadas de crecimiento:

A. No podrán tener diseño o expresión que permita asociar el producto con un preparado infantil.

B. Deberán indicar la edad para la cual está prescripto el uso del producto.

Artículo 28.- Etiqueta de alimentos complementarios.

Las etiquetas de alimentos complementarios deberán explicar en forma clara los siguientes puntos:

A. La edad desde la que está recomendado el uso del producto, que en ningún caso podrá ser menor de seis meses cumplidos.

B. Los riesgos para la salud de introducir alimentos complementarios antes de la edad de seis meses cumplidos.

C. La indicación que la alimentación complementaria, adecuada, inocua y nutritiva puede fácilmente ser preparada en el hogar conforme a las buenas prácticas y con alimentos propios de la región, preferentemente, libres de transgénicos.

Las etiquetas de alimentos complementarios no deberán:

A. Utilizar la expresión "después de los seis meses". Debe quedar claro que es a partir del sexto mes cumplido.

B. Contener declaraciones o afirmaciones sobre propiedades nutricionales o beneficios del producto para la salud.

Artículo 29.- Etiquetas de otras leches, modificadas o no.

Las etiquetas de estos productos, que no reúnen todas las exigencias nutricionales de un preparado infantil, deberán llevar una advertencia de que el producto no debe ser utilizado para la alimentación de un lactante menor de doce meses de edad.

Las etiquetas de leches condensadas azucaradas deberán contener una advertencia clara y visible de que no se deben usar para alimentar a los lactantes.

Artículo 30.- Etiquetas de biberones, tetinas, chupetes, extractores de leche materna y pezoneras.

Las etiquetas de biberones, tetinas, chupetes, extractores de leche materna y pezoneras, y todo utensilio o material comercializado relacionado con la preparación, extracción, suministro de alimentos e higiene de biberones deberán incluir:

A. Una afirmación que la leche materna es superior e insustituible para la alimentación del lactante.

B. Una advertencia sobre los riesgos para la salud cuando se usa biberón, especialmente si este no está correctamente esterilizado.

C. Una advertencia sobre las consecuencias negativas del uso del biberón.

D. Los materiales utilizados en su fabricación.

E. Instrucciones para su limpieza y esterilización.

F. Una declaración de que está libre de Bisfenol A (BPA) y otros contaminantes.

CAPÍTULO IX

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY

Artículo 31.- Se establece que el Ministerio de Salud Pública, será la autoridad competente a nivel nacional, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Artículo 32.- Para la aplicación de la presente ley, la autoridad competente tendrá los siguientes poderes y funciones:

A. Agregar nuevos productos a la lista de productos designados, cuando surja la necesidad, a efectos de asegurar que la ley esté actualizada y acorde con las nuevas orientaciones de nutrición y con las estrategias y técnicas de comercialización.

B. Solicitar a otros organismos públicos y privados, cualquier tipo de información y realizar cualquier gestión de verificación para asegurar el cumplimiento de la presente ley y su respectivo reglamento.

C. Exigir el registro de todo producto designado de conformidad con la normativa interna vigente.

D. Garantizar el control de calidad de los productos designados, según los estándares de inocuidad.

E. Modificar las acciones que permitan la aplicación de la presente ley, de acuerdo a las nuevas tendencias de comercialización que surjan.

F. Asumir o delegar en otro la vigilancia continua a nivel nacional y el monitoreo periódico de la aplicación de la presente ley.

G. Asegurar que esta vigilancia y monitoreo se desarrollen sin vinculación directa o indirecta con fabricantes o distribuidores de algún producto designado ni en alguna condición que genere o pueda generar conflicto de interés.

H. Crear mecanismos que faciliten la denuncia ciudadana y dar seguimiento a denuncias presentadas y acción efectiva de Oficio, como ente regulador.

I. Dar seguimiento a las sanciones y acciones correspondientes de acuerdo a las infracciones tipificadas y establecidas en la ley.

J. Definir mecanismos claros y precisos para asegurar que el etiquetado de los productos designados cumpla con lo establecido en la presente ley y para que ningún material informativo o educativo, que contenga información para madres, embarazadas y lactantes, sus familias o público en general, desaliente a la lactancia materna.

K. Aprobar las donaciones de productos designados, en virtud del artículo 12 de la presente ley.

CAPÍTULO X
PROCEDIMIENTO Y SANCIONES

Artículo 33.- El Ministerio de Salud Pública recibirá e investigará cualquier denuncia de violación a la presente ley y su reglamento.

Artículo 34. (Violación a la ley).- Cualquier persona física o jurídica que en cualquier forma viole los preceptos contenidos en la presente ley, será susceptible de las sanciones siguientes:

A. Amonestación o advertencia escrita que realizará el funcionario debidamente autorizado por la autoridad competente, dejando constancia que deberá regularizar su situación en 10 (diez) días hábiles.

B. De no haber dado cumplimiento con la observación anterior, se establece una multa de 100 UR (cien unidades reajustables) a partir de la detección del incumplimiento; como la publicación de la Resolución respectiva, en dos diarios de mayor circulación durante una semana.

C. Comiso o decomiso de productos sin registro sanitario o que incumpla con las disposiciones de la presente ley.

D. Clausura temporal del establecimiento que podrá ser total o parcial, con la respectiva suspensión de la habilitación sanitaria.

E. Cancelación del registro para fines comerciales de productos objeto de control de esta ley.

F. Clausura definitiva del establecimiento.

Artículo 35. (Reincidencia).- En caso de reincidencia a cualquier infracción objeto de esta ley, será sancionado con un incremento del 100 % (cien por ciento) de la primera multa impuesta.

Artículo 36.- Además de las sanciones previstas en los artículos 35 y 36, cualquier violación de la presente ley y su reglamento, será sancionada de acuerdo con las disposiciones especiales previstas en otras leyes o reglamentos que existan.

Asimismo, el personal de salud que haya cometido una infracción a las disposiciones de la presente ley, será sancionado de conformidad con las disposiciones disciplinarias que por estatuto se encuentre alcanzado.

Artículo 37.- Además de las sanciones establecidas por los artículos 34 y 35, la autoridad competente puede inmovilizar en el mercado o retirar del mismo, según el caso, los productos que incumplan con la presente ley y su reglamento. Si los productos se consideran un peligro inminente para la salud, dichos productos serán retirados del mercado, para su inmediata destrucción e incineración, sin obligación de compensación y a costa del infractor.

Artículo 38.- Las autoridades administrativas, judiciales, políticas del país, prestarán el auxilio que requiera la autoridad competente y/o el Ministerio de Salud para exigir el cumplimiento de la presente ley, en función de las atribuciones y facultades que acuerden sus respectivas leyes.

CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 39.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la promulgación.

Artículo 40.- Quedan derogadas las disposiciones y toda ley que contravenga la aplicación de la presente ley.

Montevideo, 6 de junio de 2017

STELLA VIEL
REPRESENTANTE POR CANELONES

- 12 -

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo principal de la presente ley, es integrar en la legislación nacional, todos los elementos de protección a la práctica de lactancia materna, y de esta manera lograr una óptima y adecuada alimentación infantil.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la obesidad y el sobrepeso en niños, es uno de los principales problemas de este siglo. Y Uruguay no es ajeno. Mientras que el promedio de niños de entre 0 y 5 años obesos que están por encima de su peso en América Latina es 7,1%, en Uruguay es 10,5%, según la primera encuesta nacional sobre salud, nutrición y desarrollo infantil realizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a través del programa Uruguay Crece Contigo, la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Estadística. En Montevideo la prevalencia es mayor que en el interior. Mientras que en la capital llega a 11%, en el resto del país alcanza a 9%. Los niños que están por encima del peso recomendado, tienen más probabilidades de desarrollar patologías cuando son adultos como cardiopatías, ser resistentes a la insulina, que se puede traducir en diabetes, artrosis o tener más predisposición a padecer cáncer de colon, mama o endometrio.

El informe que surge de la encuesta destaca que el carné del niño del Ministerio de Salud Pública explica que no se debe agregar sal a las comidas de los menores de 2 años y que pasada esa edad el consumo "debe ser reducido". La realidad demuestra lo contrario: 49% de los menores de un año comen con sal agregada, 6 de cada 10 menores de 2 y casi 9 de cada 10 mayores de 2 años (87,7%).

La Convención sobre los Derechos del niño, pone de manifiesto la importancia de la alimentación saludable, segura, inocua y culturalmente aceptada, desde el inicio de la vida. Específicamente en el Art.24 de esta Convención expresa:"…El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento". "Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de la salud". En este marco se establece que:"se debe asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna….." "y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos".

En este marco, Uruguay ha realizado avances entre los que se puede citar la Acreditación de las maternidades y consultorios de los servicios de salud del país en Buenas Prácticas de Alimentación del Lactante y del Niño pequeño, iniciativa que en el mundo es reconocida como Hospitales Amigo del niño. Esta acreditación ha permitido mejorar las prácticas relacionadas con la protección de la lactancia y la alimentación saludable del niño pequeño desde el embarazo y durante los dos primeros años de vida. Uruguay ha mejorado las políticas relacionadas a las licencias por maternidad y paternidad y ha trabajado por mejorar las condiciones de protección de lactancia en los ámbitos de trabajo y estudio con el reciente proyecto de ley de salas de lactancia.

Por otra parte el "Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia", producto del 53º Consejo Directivo de la OPS y de la 66ª Sesión del Comité Regional de la OMS, lanzado en octubre de 2014, insta al desarrollo de políticas

fiscales, reglamentación de la publicidad y del etiquetamiento de alimentos, y también la promoción de la lactancia materna como práctica de alimentación saludable.

La protección y promoción de la lactancia materna es una de las líneas de acción estratégicas del plan de acción para la prevención del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia y para alcanzarla, este plan refiere que se le exija a los países que renueven su compromiso de aplicar plenamente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y todas las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud complementarias y ampliatorias referentes a dicho Código.

El presente proyecto de ley tiene, por lo antes dicho, el cometido de dar cumplimiento a las recomendaciones que la OMS y UNICEF hacen respecto a la puesta en práctica de los principios y objetivos de todos los artículos del Código Internacional De Comercialización De Sucedáneos De La Leche Materna, así como las subsiguientes resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, si bien hasta la fecha, varias disposiciones del Código se encuentran insertas en el Reglamento Bromatológico (315/94), así como en la Ordenanza N°62, dictada por el Ministerio de Salud Pública con fecha 19 de enero de 2017.

El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, fue aprobado por la OMS (Organización Mundial de la Salud), en 1981, como la norma "mínima" para ayudar a proteger y fomentar la lactancia materna a través de la reglamentación de la comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna.

La Red Internacional Baby Food Action Network (IBFAN), desde su fundación, coordina esfuerzos a nivel mundial, desde el punto de vista científico, para conocer el grado de cumplimiento del CISLM y de las resoluciones subsiguientes de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) de la OMS y realiza las denuncias de las violaciones encontradas a la AMS que se reúne en años pares. Desde julio de 1994, rigen en nuestro país el CISLM y las resoluciones subsiguientes de la AMS, por decreto del Poder Ejecutivo, integrando el Reglamento Bromatológico Nacional, vigente en todos sus aspectos. Uruguay ha participado en diversas oportunidades en el monitoreo del Código. A partir del año 2000, éste se ha realizado a través de la Red Uruguaya de Apoyo a la Nutrición y Desarrollo Infantil- RUANDI (IBFAN-Uruguay).

Entre el 31 de agosto y el 2 de setiembre de 2015, tuvo lugar en la ciudad de Panamá, el Curso Regional de Capacitación sobre Implementación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y Resoluciones Posteriores de la AMS, que fuera organizado por la Red de Grupos Pro Alimentación Infantil de Latinoamérica y Caribe -IBFAN LAC y el Centro de Documentación sobre Código Internacional -ICDC/IFBAN, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud-OPS y de la Oficina Regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF.

Dicho Curso contó con 40 participantes de 17 países de la región, entre ellos, profesionales en derecho, salud, nutrición, comunicación, economía y otros procedentes de gobiernos, parlamentarios, defensorías de los habitantes, organismos de Naciones Unidas, redes internacionales, organizaciones y movimientos ciudadanos. La interacción y preparación para el Curso y las discusiones durante el mismo, permitieron revisar los distintos marcos legales de protección de la Lactancia Materna vigentes en los países de la Región, así como cubrir el apoyo que necesitan los países para lograr la aplicación efectiva de las leyes, normas y reglamentos nacionales.

Es así que se determina la necesidad de evaluar y actualizar el Modelo de Ley de Protección de la Lactancia Materna para los países de América Latina y El Caribe, como instrumento clave para la implementación del Código en los países de la región.

El Modelo de Ley de Protección de la Lactancia Materna, es un aporte sustancial de IBFAN y ICDC a los gobiernos, parlamentos y ciudadanos en general, y a la labor que realiza la OMS/OPS y UNICEF en defensa de los principios del Código Internacional y Resoluciones posteriores de la AMS. La primera redacción del modelo de ley fue realizada por un equipo de profesionales en la implementación y monitoreo del Código, tanto a nivel nacional como internacional, en la ciudad de Tlaxcala, México, en febrero de 2002.

En noviembre de 2015, en San José de Costa Rica, se da por culminado el proceso de Actualización de la Ley Modelo de Protección de la Lactancia Materna para los países de América Latina y el Caribe, con el Modelo de Ley que reúne la experiencia, no solo gubernamental sino también de movimientos de derechos humanos, consumidores y de protección de la salud humana y del planeta.

En este Modelo de Ley, nos basamos para la redacción del proyecto de ley que estamos presentando, y que fuera elaborada con la participación de todos los actores involucrados en esta temática, a saber, representantes de: RUANDI, AUDYN, SUP (Comité de Lactancia), Liga de la Leche de Uruguay, IULAM, UNICEF y Ministerio de Salud Pública.

Dicho proyecto de ley se trabajó con todas y todos los actores involucrados en el tema, con el aporte de sus experiencias, resultados y estadísticas y con el convencimiento de brindar a las niñas y niños de nuestro país, las mejores oportunidades para alcanzar su máximo potencial, crecer y desarrollarse como jóvenes y adultos sanos, socialmente productivos. En este sentido la Lactancia Materna es una estrategia fundamental en el cumplimiento de dicho propósito.

El presente proyecto de ley Regulatoria de la Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, consta de 41 artículos divididos en XI Capítulos, a saber: CAPÍTULO I – Disposiciones Generales; CAPÍTULO II – Ámbito de aplicación; CAPÍTULO III- Definiciones; CAPÍTULO IV- Comercialización; CAPÍTULO V- Promoción y Publicidad; CAPÍTULO VI- Información y Educación; CAPÍTULO VII- Sistemas de Atención de Salud y Personal de Salud; CAPÍTULO VIII- Etiquetado; CAPÍTULO IX-Implementación de la ley; CAPÍTULO X- procedimientos y sanciones; y CAPÍTULO XI- Disposiciones Finales.

No está en discusión que el fomento y protección de la lactancia natural son elementos importantes de las medidas de salud y de nutrición, así como de las demás medidas de índole social necesarias para favorecer el sano crecimiento y desarrollo del lactante y el niño/niña pequeño/pequeña, y que la lactancia natural es un aspecto importante de la atención primaria de salud. Así como que las prácticas de alimentación inadecuadas son causa de malnutrición, morbilidad y mortalidad de lactantes.

En el mismo sentido, consideramos que cuando las madres no amamantan o sólo lo hacen parcialmente, exista un mercado legítimo de preparaciones para lactantes y de ingredientes adecuados que entran en su composición; que en consecuencia, todos estos productos deben ponerse al alcance de cuantos los necesiten mediante sistemas comerciales y no comerciales de distribución; y que no deben comercializarse ni distribuirse por métodos que puedan obstaculizar la protección y la promoción de la lactancia natural.

- 15 -

Una saludable alimentación a temprana edad, redunda en una mejor calidad de vida, desarrollo intelectual y motriz y, con el tiempo, menores costos en los servicios de salud.

Montevideo, 6 de junio de 2017

STELLA VIEL
REPRESENTANTE POR CANELONES

=

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ANEXO I AL
REPARTIDO Nº 702
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 2062 DE 2017

COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE LECHE MATERNA

Regulación

Informe

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL

I N F O R M E

Señores Representantes:

Por el presente la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social informa al Plenario acerca de la conveniencia de aprobar este proyecto de ley que tiene como objetivo principal integrar en la legislación nacional los elementos de protección a la práctica de lactancia materna, y de esta manera lograr una óptima y adecuada alimentación infantil.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la obesidad y el sobrepeso en niños, es uno de los principales problemas de este siglo. Y Uruguay no es ajeno. Mientras que el promedio de niños de entre 0 y 5 años obesos que están por encima de su peso en América Latina es 7,1%, en Uruguay es 10,5%, según la primera encuesta nacional sobre salud, nutrición y desarrollo infantil realizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a través del programa Uruguay Crece Contigo, la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Estadística. En Montevideo la prevalencia es mayor que en el interior. Mientras que en la capital llega a 11%, en el resto del país alcanza a 9%. Los niños que están por encima del peso recomendado, tienen más probabilidades de desarrollar patologías cuando son adultos como cardiopatías, resistencia a la insulina, diabetes, artrosis o tener más predisposición a padecer cáncer de colon, mama o endometrio.

Tomando en cuenta los datos resultantes de la citada encuesta, el carné del niño del Ministerio de Salud Pública, explica que no se debe agregar sal a las comidas de los menores de 2 años y que pasada esa edad el consumo “debe ser reducido”. La realidad demuestra lo contrario: 49% de los menores de un año comen con sal agregada, 6 de cada 10 menores de 2 y casi 9 de cada 10 mayores de 2 años (87,7%).

La Convención sobre los Derechos del niño, pone de manifiesto la importancia de la alimentación saludable, segura, inocua y culturalmente aceptada, desde el inicio de la vida. Específicamente en el artículo .24 de esta Convención expresa:”…El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de la salud”. En este marco se establece que: “se debe asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna…..” “y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos”.

En este marco, Uruguay ha realizado avances entre los que se puede citar la Acreditación de las maternidades y consultorios de los servicios de salud del país en Buenas Prácticas de Alimentación del Lactante y del Niño pequeño, iniciativa que en el mundo es reconocida como Hospitales Amigo del niño. Esta acreditación ha permitido mejorar las prácticas relacionadas con la protección de la lactancia y la

alimentación saludable del niño pequeño desde el embarazo y durante los dos primeros años de vida. Uruguay ha mejorado las políticas relacionadas a las licencias por maternidad y paternidad y ha trabajado por mejorar las condiciones de protección de lactancia en los ámbitos de trabajo y estudio con el reciente proyecto de ley de Salas de lactancia.

Por otra parte el “Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia”, producto del 53º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la 66ª Sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lanzado en octubre de 2014, insta al desarrollo de políticas fiscales, reglamentación de la publicidad y del etiquetamiento de alimentos, y también la promoción de la lactancia materna como práctica de alimentación saludable.

La protección y promoción de la lactancia materna es una de las líneas de acción estratégicas del Plan de acción para la prevención del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia y para alcanzarla, este plan refiere que se le exija a los países que renueven su compromiso de aplicar plenamente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y todas las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud complementarias y ampliatorias referentes a dicho Código.

El presente proyecto de ley tiene, por lo antes dicho, el cometido de dar cumplimiento a las recomendaciones que la OMS y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hacen respecto a la puesta en práctica de los principios y objetivos de todos los artículos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna así como las subsiguientes resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, si bien hasta la fecha, varias disposiciones del Código se encuentran insertas en el Reglamento Bromatológico (315/94), así como en la Ordenanza N°62, dictada por el Ministerio de Salud Pública con fecha 19 de enero de 2017.

El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (CISLM), fue aprobado por la OMS (Organización Mundial de la Salud), en 1981, como la norma ¨mínima¨ para ayudar a proteger y fomentar la lactancia materna a través de la reglamentación de la comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna.

La Red Internacional Baby Food Action Network (IBFAN), desde su fundación, coordina esfuerzos a nivel mundial, desde el punto de vista científico, para conocer el grado de cumplimiento del CISLM y de las resoluciones subsiguientes de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) de la OMS y realiza las denuncias de las violaciones encontradas a la AMS que se reúne en años pares. Desde julio de 1994, rigen en nuestro país el CISLM y las resoluciones subsiguientes de la AMS, por decreto del Poder Ejecutivo, integrando el Reglamento Bromatológico Nacional, vigente en todos sus aspectos. Uruguay ha participado en diversas oportunidades en el monitoreo del Código. A partir del año 2000, éste se ha realizado a través de la Red Uruguaya de Apoyo a la Nutrición y Desarrollo Infantil- RUANDI (IBFAN-Uruguay).

Entre el 31 de agosto y el 2 de setiembre de 2015, tuvo lugar en la ciudad de Panamá, el Curso Regional de Capacitación sobre Implementación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y Resoluciones Posteriores de la AMS, que fuera organizado por la Red de Grupos Pro Alimentación Infantil de Latinoamérica y Caribe -IBFAN LAC y el Centro de Documentación sobre Código Internacional -ICDC/IFBAN, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Oficina Regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Es así que se determina la necesidad de evaluar y actualizar el Modelo de Ley de Protección de la Lactancia Materna para los Países de América y el Caribe, como instrumento clave para la implementación del Código en los países de la región.

El Modelo de Ley de Protección de la Lactancia Materna, es un aporte sustancial de IBFAN y ICDC a los gobiernos, parlamentos y ciudadanos en general, y a la labor que realiza la OMS/OPS y UNICEF en defensa de los principios del Código Internacional y Resoluciones posteriores de la AMS. La primera redacción del Modelo de ley fue realizada por un equipo de profesionales en la implementación y monitoreo del Código, tanto a nivel nacional como internacional, en la ciudad de Tlaxcala, México, en febrero de 2002.

En Noviembre de 2015, en San José de Costa Rica, se da por culminado el proceso de Actualización de la Ley Modelo de Protección de la Lactancia Materna para los países de América Latina y el Caribe, con el Modelo de Ley que reúne la experiencia, no solo gubernamental sino también de movimientos de derechos humanos, consumidores y de protección de la salud humana y del planeta.

En este Modelo de ley, nos basamos para la redacción del proyecto de ley que estamos presentando, y que fuera elaborada con la participación de todos los actores involucrados en esta temática, a saber, representantes de: Red Uruguaya de Apoyo a la Nutrición y Desarrollo Infantil (RUANDI), Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas (AUDYN), Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP-Comité de Lactancia), Liga de la Leche del Uruguay, Instituto Uruguayo de Lactancia Materna (IULAM), UNICEF y Ministerio de Salud Pública.

Dicho proyecto de ley se trabajó con todas y todos los actores involucrados en el tema, con el aporte de sus experiencias, resultados y estadísticas y con el convencimiento de brindar a las niñas y niños de nuestro país, las mejores oportunidades para alcanzar su máximo potencial, crecer y desarrollarse como jóvenes y adultos sanos, socialmente productivos. En este sentido la Lactancia Materna es una estrategia fundamental en el cumplimiento de dicho propósito.

No está en discusión que el fomento y protección de la lactancia natural son elementos importantes de las medidas de salud y de nutrición, así como de las demás medidas de índole social necesarias para favorecer el sano crecimiento y desarrollo del lactante y el niño o niña, y que la lactancia natural es un aspecto importante de la atención primaria de salud. Así como que las prácticas de alimentación inadecuadas son causa de malnutrición, morbilidad y mortalidad de lactantes.

En el mismo sentido, consideramos que cuando las madres no amamantan o sólo lo hacen parcialmente, exista un mercado legítimo de preparaciones para lactantes y de ingredientes adecuados que entran en su composición; que en consecuencia, todos estos productos deben ponerse al alcance de cuantos los necesiten mediante sistemas comerciales y no comerciales de distribución; y que no deben comercializarse ni distribuirse por métodos que puedan obstaculizar la protección y la promoción de la lactancia natural.

Una saludable alimentación a temprana edad, redunda en una mejor calidad de vida, desarrollo intelectual y motriz y, con el tiempo, menores costos en los servicios de salud.

Por todo lo expresado, es que esta Comisión entiende oportuno y correcto el texto elevado a consideración del Plenario de esta Cámara de Representantes, aconsejando su votación afirmativa.

Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2019

LUIS GALLO CANTERA
MIEMBRO INFORMANTE
TABARÉ LACA
OSCAR VIERA

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- El objeto de la presente ley es proteger, promover y apoyar la lactancia materna y las mejores prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños, para proporcionarles una nutrición segura, adecuada y suficiente; así como regular la comercialización y distribución de todo alimento y o bebida que sea utilizado en lactantes y niños pequeños.

CAPÍTULO II

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2°.- La presente ley se aplica en todo el territorio nacional, a todos los fabricantes y distribuidores de los productos designados, nacionales e importados, así como a personas físicas y jurídicas y relacionados con la lactancia materna y la alimentación óptima de los lactantes y niños pequeños, y a su protección, promoción y apoyo.

Artículo 3°.- Designa como autoridad competente para la aplicación de la presente ley y su reglamento, al Ministerio de Salud Pública.

CAPÍTULO III

DEFINICIONES

Artículo 4°.- Para efectos de la aplicación de la presente ley se entenderá por:

A. Sucedáneos de la leche materna: Todo alimento comercializado o de otro modo presentado como sustituto, parcial o total, de la leche materna, sea apropiado o no para ese fin.

B. Alimento complementario: Es el que se inicia cuando la leche materna no es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales del lactante.

C. Autoridad competente: Instituciones designadas como responsables de la aplicación de la presente ley y del monitoreo y vigilancia del cumplimiento de la misma.

D. Donación: Ofrecimiento o suministro gratuito de un producto en cantidad superior a la caracterizada como muestra.

E. Envase: Cualquier forma de embalaje y presentación de un producto designado, destinado a su comercialización, incluidas cada una de las unidades que contenga los productos designados, los que pueden ser en polvo o líquido, empacada en tarros o latas, cajas o bolsas, sobres, botellas o cápsulas listas para el consumo, paks u otras.

F. Etiqueta: Todo sello, marca, rótulo u otra indicación descriptiva o gráfica, elaborada por cualquier medio, fijada en el envase o colocada dentro del mismo o dentro del producto designado.

G. Fabricante, distribuidor y promotor: Cualquier persona física o jurídica que directa o indirectamente se dedique a la producción o comercialización de un producto designado, incluyendo toda persona que se dedique a proporcionar servicios de información o de relaciones públicas para un producto designado.

H. Preparado de Inicio: Producto en forma líquida o en polvo y en cualquier forma de envase destinado a la alimentación de lactantes hasta los seis meses de edad.

I. Preparado de seguimiento o de continuación: Todo producto lácteo o similar, indicado o de otro modo presentado como adecuado para la alimentación de lactantes mayores de seis meses y hasta 36 (treinta y seis) meses de edad.

J. Aditivo de leche materna: preparado de nutrientes, en presentación líquida o en polvo y en cualquier forma de envase, presentada o indicada para adicionar a la leche materna.

K. Lactancia materna exclusiva: Cuando el niño-niña recibe solamente leche materna, directamente del pecho u ordeñada, o leche humana de otra fuente sin ningún otro alimento o bebida, ni siquiera agua, con excepción de sales de rehidratación oral, gotas o jarabes conteniendo vitaminas, suplementos minerales o medicamentos.

L. Lactante y niño pequeño: Niño de 0 (cero) a 36 (treinta y seis) meses de edad cumplidos.

M. Leche denominada de seguimiento: Leche de origen animal, entera o modificada, o producto similar de origen vegetal, comercializada como apta para la alimentación hasta 36 meses.

N. Logotipo: Designa el emblema, el diseño o los caracteres por los que se identifica un producto, una marca o una empresa.

O. Material informativo o educativo: Todo material escrito, audiovisual o virtual relacionado con la lactancia materna y la alimentación de lactantes y niños pequeños, mujeres embarazadas y en período de lactancia, destinado al público en general.

P. Material técnico-científico: Todo material dirigido al personal de salud y otros profesionales afines, elaborado con información científicamente válida y relacionado con los productos designados. Explícitamente excluye toda forma de promoción y publicidad.

Q. Marca: Todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición que tales signos sean apropiados para distinguir y diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra.

R. Muestras: Una (1) unidad o pequeñas cantidades de un producto que se facilitan gratuitamente.

S. Patrocinar: Dar cualquier tipo de apoyo o incentivo, financiero, logístico o material a profesionales, servicios, entidades o establecimientos públicos o privados.

T. Personal de salud: Toda persona profesional, técnica o de apoyo, incluidos los agentes voluntarios no remunerados, relacionada con la salud en el área pública o privada.

U. Producto Designado:

1. Preparado para lactantes estandar, incluida cualquier preparación que se use como única o parcial fuente de nutrición para alimentar lactantes desde el nacimiento.
2. Preparados para lactantes especiales; libres de lactosa, preparados para niños con trastornos poco frecuentes y cualquier otra similar que se produzca en el futuro.
3. Otros productos lácteos, alimentos o bebidas cuando se comercializan o se indica que pueden emplearse, con o sin modificación, para sustituir parcial o totalmente a la leche materna.
4. Preparados de seguimiento, de continuación, o crecimiento, incluidos los preparados recomendados para menores de treinta y seis (36) meses.
5. Aditivos de la leche materna.
6. Cualquier alimento complementario u otro alimento o bebida comercializado, suministrado, presentado o comúnmente usado para alimentar a lactantes y niños pequeños, incluyendo los agregados nutricionales, alimentos terapéuticos listos para usarse.
7. Biberones, tetinas, chupetes, intermediarias, aireadores, y todo utensilio o material comercializado relacionado con la preparación, suministro de alimentos e higiene.
8. Alimentos y bebidas dirigidos especialmente para mujeres embarazadas o en período de lactancia.

V. Comercialización: Cualquier forma de preservar o vender un producto designado, incluyendo las actividades de promoción, importación, distribución, publicidad, mercadeo, patrocinio, servicios de información y relaciones públicas para un producto designado.

W. Promoción: Actividad que tiene como fin el dar a conocer o hacer sentir la necesidad de un producto designado, o de estimular, directa o indirectamente, a una persona a comprar o utilizar un producto designado.

X. Publicidad: Cualquier actividad de presentación o demostración, por cualquier medio, con el fin de promover o inducir, directa o indirectamente, la compra o el uso de un producto designado o un servicio.

Y. Punto de venta: Lugar, físico o virtual, de expendio al público de productos designados.

Z. Suministro subvencionado: Práctica por la que una cantidad de un producto designado se entrega a los prestadores de salud, a un precio unitario menor al precio de venta.

CAPÍTULO IV

COMERCIALIZACIÓN

Artículo 5°.- Todo producto designado podrá ser comercializado, sólo si:

A. Cuenta con registro sanitario y cumple con la normativa de etiquetado establecida en el artículo 9 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna aprobado por la OMS y UNICEF.

B. Está debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, de conformidad con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento.

C. Está vigente para el consumo, con fecha de vencimiento visible.

D. Cumple rigurosamente con las normas establecidas por la presente ley y su reglamento.

CAPÍTULO V

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Artículo 6°.- Queda prohibida a cualquier persona física o jurídica la promoción, publicidad y patrocinio de los productos designados por cualquier medio.

Artículo 7°.- Las prácticas promocionales y publicitarias prohibidas incluyen, pero no se limitan a las siguientes:

A. Tácticas de venta tales como presentaciones especiales, descuentos promocionales, bonificaciones, rebajas, ventas especiales, premios u obsequios, ventas vinculadas, asociaciones con otras marcas o con otros productos y logotipos similares, contacto directo o indirecto de representantes de fabricantes o distribuidores de productos designados con las madres, padres, familias y el público o cualquier otra práctica que establezca la autoridad competente.

B. Entrega de muestras a cualquier persona, entidad o institución.

C. Suministros gratuitos o de bajo costo de productos designados a cualquier persona, entidad o institución.

D. Donación o subvención de un producto designado a cualquier persona, entidad o institución, salvo los casos previstos que la Reglamentación a la presente ley establezca.

Artículo 8°.- Queda prohibido a toda persona física o jurídica que comercialice productos designados, directa o indirectamente:

A. Donar o distribuir a cualquier persona o entidad, cualquier material o equipo que contenga palabras, imágenes, marca, eslogan, logotipo que identifiquen a un producto designado, una línea de productos o un fabricante, o que pueda promover el uso de un producto designado;

B. Donar o distribuir a cualquier persona o institución, objetos tales como lapiceras, calendarios, afiches, calcomanías, folletos, libretas de notas, tarjetas de crecimiento, juguetes u otros que contengan palabras, imágenes, marca, logotipos o eslogan que identifiquen a un producto designado, una línea de

productos o un fabricante, o que pueda promover el uso de un producto designado;

C. Donar suministros gratuitos de productos designados a cualquier persona o entidad o venderlos a los servicios de salud a menos del precio al por mayor publicado;

D. Ofrecer o donar cualquier servicio, obsequio, contribución o beneficio al personal de salud e instituciones, incluido becas, subvenciones a la investigación, financiamiento de participación en reuniones, seminarios, conferencias o cursos de formación continuada y otros;

E. Patrocinar o desarrollar eventos, concursos o campañas destinados a mujeres gestantes y sus parejas o madres en lactancia, padres de lactantes y niños pequeños o miembros de sus familias, o patrocinar o desarrollar eventos, concursos o campañas relativas a la fecundidad, al embarazo, al parto y postparto, o a la alimentación de lactantes y niños pequeños;

F. Incentivar con bonificaciones o comisiones o formas similares el volumen de ventas de productos designados;

G. Iniciar o establecer, directa o indirectamente, a título profesional o comercial, contacto con mujeres embarazadas, madres y padres de lactantes, niños pequeños y sus familias.

Artículo 9°.- No se permitirá en ningún medio de comunicación o red social ni en material impreso, visual o auditivo, incluyendo los sistemas virtuales, el uso de imágenes de biberones, chupetes, tetinas, intermediarias, aireadores o similares, a fin de evitar cualquier mensaje subliminal o implícito que pueda desestimular la lactancia materna.

Artículo 10.- Toda persona física o jurídica que comercialice productos designados no podrá patrocinar o financiar becas para estudios que tengan relación con temas de lactancia materna y/o alimentación de lactantes, formación continuada o la participación de personal de salud en conferencias, seminarios, cursos o congresos.

Artículo 11.- Se permitirá a los fabricantes y distribuidores donar productos designados, únicamente con la aprobación del Ministerio de Salud Pública. En estos casos, las donaciones, deben estar libres de marca y logotipo, y solamente incluir el valor nutricional, instrucciones de uso y fecha de vencimiento.

CAPÍTULO VI

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Artículo 12.- Los materiales informativos y educativos que tratan de alimentación de lactantes y niños pequeños, no podrán ser producidos, patrocinados o financiados por los fabricantes y los distribuidores de cualquier producto designado sin previa fiscalización del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 13.- Los materiales informativos y educativos, sea cual fuera su presentación, relativos a la alimentación de lactantes y niños pequeños, deberán ser escritos en idioma español e incluir clara y visiblemente cada uno de los siguientes aspectos:

A. Los beneficios y superioridad de la lactancia materna para el niño, la madre, la sociedad y el ambiente.

B. Los riesgos de la alimentación artificial o con preparados infantiles, ya que estas no son inocuas.

C. Los riesgos del uso del biberón y chupete o de la introducción precoz de alimentos complementarios que afecta la lactancia materna.

D. El valor insustituible de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de edad y en forma continuada hasta los 2 años de edad o más.

E. Que la alimentación complementaria, adecuada, inocua y nutritiva puede fácilmente ser preparada en el hogar, con alimentos propios del país y la estación.

Artículo 14.- Cuando los materiales mencionados en el artículo 12, tratan el tema de alimentación de lactantes y niños pequeños con alguno de los productos designados, deberán incluir, además, los puntos siguientes:

A. Instrucciones para la preparación y el uso correcto del producto, incluida la limpieza y esterilización de los utensilios.

B. Instrucciones para alimentar a los lactantes y niños pequeños con utensilios como biberón adecuado, vaso, taza y cuchara.

C. Los riesgos que presenta para la salud la alimentación con biberón en relación a la manipulación, almacenamiento y preparación incorrecta del producto.

Artículo 15.- Los materiales informativos y educativos, sea cual fuera su presentación, relativos a la alimentación de lactantes y niños pequeños, no deberán:

A. Dar la impresión de suscitar la creencia de que un producto designado es equivalente, comparable o superior a la leche materna o a la lactancia materna.

B. Contener el nombre, marca o logotipo de cualquier producto designado o de un fabricante o distribuidor.

C. Contener imágenes o textos que fomenten o idealicen el uso del biberón, tetinas y chupetes o desestimulen la lactancia materna.

D. Contener ilustraciones, fotos o imágenes de lactantes o niños pequeños, juguetes o formas humanizadas de animales, vegetales u objetos.

E. Contener afirmaciones sobre propiedades nutricionales o beneficios para la salud del producto o que asemejan el producto a la leche materna.

CAPÍTULO VII

SISTEMAS DE ATENCIÓN DE SALUD Y PERSONAL DE SALUD

Artículo 16.- Los prestadores de salud y su personal, deberán adoptar las medidas necesarias para difundir y aplicar a cabalidad la presente ley, así como promover, proteger y apoyar la práctica de la alimentación óptima de los lactantes, incluyendo aspectos de nutrición y salud materna.

Artículo 17.- Los prestadores de salud y su personal, deberán promover e implementar estrategias de calidad y humanización para la atención de las mujeres gestantes y en período de lactancia; y que promuevan, protejan y apoyen la lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación del lactante.

Artículo 18.- Los prestadores de salud y su personal, deberán crear las condiciones adecuadas que permitan el involucramiento de los padres, parejas y familiares en el apoyo a la lactancia materna de las madres, y apoyar efectivamente las prácticas de lactancia materna óptima de su propio personal.

Artículo 19.- No se permitirá dentro de los prestadores de salud la presencia de representantes de servicios profesionales, técnicos o voluntarios facilitados o financiados por los fabricantes o distribuidores de los productos designados.

Artículo 20.- Los materiales informativos provenientes de los fabricantes o distribuidores o de otra fuente, sobre los productos designados, para los profesionales de salud, sólo podrán ser técnico-científicos y entregados previa solicitud y aprobación de la autoridad competente, de acuerdo a lo que se estipule en el reglamento.

Artículo 21.- El personal de salud no podrá recibir ningún tipo de incentivos, regalos, donaciones o patrocinios provenientes de cualquier persona física o jurídica que fabrique o comercialice productos designados, ni de los distribuidores y puntos de venta.

CAPÍTULO VIII

ETIQUETADO

Artículo 22. (Etiquetado de productos designados).- Todo envase de un producto designado deberá tener una etiqueta que no pueda despegarse del mismo sin destruirse. La etiqueta de cada producto designado deberá ser diseñada de tal manera que ni en imagen ni en texto desaliente la lactancia materna. Asimismo, deberá proporcionar la información necesaria para el uso correcto del producto y deberá cumplir con la norma reglamentaria de etiquetado vigente.

Dicha etiqueta:

A. Deberá estar escrita en idioma español;

B. Deberá contener el nombre y la dirección del fabricante o importador y, cuando proceda, el nombre del distribuidor.

Artículo 23.- Las etiquetas de productos designados no podrán:

A. Contener fotografía, diseño u otra presentación gráfica, salvo los gráficos para ilustrar el método de preparación del producto; contener ilustraciones, fotos.

B. Imágenes de lactantes o niños pequeños, juguetes o formas humanizadas de animales, vegetales u objetos; llevar logos o imágenes que representen a madres, padres, profesionales, niños o cualquier otra persona, utilizando o promoviendo el uso del producto o biberón; establecer de manera directa o indirecta semejanza del biberón o tetina, con el seno de la madre o con la fisiología de la producción de la leche materna.

C. Contener frases que puedan poner en duda la capacidad de la madre para amamantar.

D. Promover otro producto.

E. Promover el uso de biberón, chupetes, tetina y pezoneras.

F. Contener recomendación de profesionales o asociaciones de profesionales.

G. Contener declaraciones o afirmaciones sobre propiedades nutricionales o beneficios para la salud.

Artículo 24.- Las etiquetas de productos alimentarios comprendidos en el ámbito de la presente ley, deberán, además de los requisitos de los artículos 24 y 25 declarar lo siguiente:

A. Los ingredientes utilizados.

B. La composición y análisis del producto, incluyendo la fuente específica de origen de las proteínas, tipo de grasas y su procedencia, destacando las grasas saturadas, ácidos grasos tipo trans, azúcares totales, azúcares simples y sal, así como declarar si algún ingrediente es transgénico.

C. Las condiciones requeridas para su almacenamiento.

D. El número de serie y la fecha límite para el consumo del producto teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de almacenamiento.

Artículo 25.- (Etiqueta de preparado infantil).- Toda etiqueta de preparado infantil deberá llevar:

A. Una inscripción al frente del producto, clara, legible, impresa en letras de altura no menor a la mitad de las de la marca del producto, de color negro sobre fondo claro, a 1 cm por debajo del mismo, que diga "Aviso importante: La leche materna es el mejor alimento para el lactante".

B. Incluir la expresión: "Advertencia: Producto que necesita prescripción médica. No exento de efectos adversos".

C. La indicación de que el producto sólo debe utilizarse bajo prescripción de un profesional de salud autorizado por el Ministerio de Salud Pública.

D. Instrucciones para la preparación correcta del producto, en taza o vaso, en palabras e ilustraciones de fácil comprensión.

E. Una advertencia sobre los riesgos para la salud de una preparación incorrecta del producto.

F. Debe consignarse en los preparados en polvo que no son estériles. En dicha etiqueta no se podrá:

1. Utilizar términos como "maternizada", "humanizada" o análogos.

2. Hacer ninguna comparación del producto o de algún componente, tanto en el texto como en la marca del producto, con la leche materna, ni utilizar expresiones que puedan poner en duda la capacidad de la madre para amamantar.

3. Contener declaraciones o afirmaciones sobre propiedades nutricionales o beneficios para la salud del preparado.

Artículo 26.- (Etiquetas de preparado infantil de seguimiento y leches denominadas de crecimiento).-

Además de los requisitos establecidos para las etiquetas de preparado infantil, las etiquetas de preparado de seguimiento y de leches denominadas de crecimiento:

A. No podrán tener diseño o expresión que permita asociar el producto con un preparado infantil.

B. Deberán indicar la edad para la cual está prescripto el uso del producto.

Artículo 27.- (Etiqueta de alimentos complementarios).-

Las etiquetas de alimentos complementarios deberán explicar en forma clara los siguientes puntos:

A. La edad desde la que está recomendado el uso del producto, que en ningún caso podrá ser menor de seis meses cumplidos.

B. Los riesgos para la salud de introducir alimentos complementarios antes de la edad de seis meses cumplidos.

C. La indicación que la alimentación complementaria, adecuada, inocua y nutritiva puede fácilmente ser preparada en el hogar conforme a las buenas prácticas y con alimentos propios de la región, preferentemente, libres de transgénicos.

Las etiquetas de alimentos complementarios no deberán:

A. Utilizar la expresión "después de los seis meses". Debe quedar claro que es a partir del sexto mes cumplido.

B. Contener declaraciones o afirmaciones sobre propiedades nutricionales o beneficios del producto para la salud.

Artículo 28.- (Etiquetas de otras leches, modificadas o no).-

Las etiquetas de estos productos, que no reúnen todas las exigencias nutricionales de un preparado infantil, deberán llevar una advertencia de que el producto no debe ser utilizado para la alimentación de un lactante menor de doce meses de edad.

Las etiquetas de leches condensadas azucaradas deberán contener una advertencia clara y visible de que no se deben usar para alimentar a los lactantes.

Artículo 29.- Etiquetas de biberones, tetinas, chupetes, extractores de leche materna y pezoneras.

Las etiquetas de biberones, tetinas, chupetes, extractores de leche materna y pezoneras, y todo utensilio o material comercializado relacionado con la preparación, extracción, suministro de alimentos e higiene de biberones deberán incluir:

A. Una afirmación que la leche materna es superior e insustituible para la alimentación del lactante.

B. Una advertencia sobre los riesgos para la salud cuando se usa biberón, especialmente si este no está correctamente esterilizado.

C. Una advertencia sobre las consecuencias negativas del uso del biberón.

D. Los materiales utilizados en su fabricación.

E. Instrucciones para su limpieza y esterilización.

F. Una declaración de que está libre de Bisfenol A (BPA) y otros contaminantes.

CAPÍTULO IX

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY

Artículo 30.- Se establece que el Ministerio de Salud Pública, será la autoridad competente a nivel nacional, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Artículo 31.- Para la aplicación de la presente ley, la autoridad competente tendrá los siguientes poderes y funciones:

A. Agregar nuevos productos a la lista de productos designados, cuando surja la necesidad, a efectos de asegurar que la ley esté actualizada y acorde con las nuevas orientaciones de nutrición y con las estrategias y técnicas de comercialización.

B. Solicitar a otros organismos públicos y privados, cualquier tipo de información y realizar cualquier gestión de verificación para asegurar el cumplimiento de la presente ley y su respectivo reglamento.

C. Exigir el registro de todo producto designado de conformidad con la normativa interna vigente.

D. Garantizar el control de calidad de los productos designados, según los estándares de inocuidad.

E. Modificar las acciones que permitan la aplicación de la presente ley, de acuerdo a las nuevas tendencias de comercialización que surjan.

F. Asumir o delegar en otro la vigilancia continua a nivel nacional y el monitoreo periódico de la aplicación de la presente ley.

G. Asegurar que esta vigilancia y monitoreo se desarrollen sin vinculación directa o indirecta con fabricantes o distribuidores de algún producto designado ni en alguna condición que genere o pueda generar conflicto de interés.

H. Crear mecanismos que faciliten la denuncia ciudadana y dar seguimiento a denuncias presentadas y acción efectiva de Oficio, como ente regulador.

I. Dar seguimiento a las sanciones y acciones correspondientes de acuerdo a las infracciones tipificadas y establecidas en la ley.

J. Definir mecanismos claros y precisos para asegurar que el etiquetado de los productos designados cumpla con lo establecido en la presente ley y para que ningún material informativo o educativo, que contenga información para madres, embarazadas y lactantes, sus familias o público en general, desaliente a la lactancia materna.

K. Aprobar las donaciones de productos designados, en virtud del artículo 12 de la presente ley.

CAPÍTULO X

PROCEDIMIENTO Y SANCIONES

Artículo 32.- El Ministerio de Salud Pública recibirá e investigará cualquier denuncia de violación a la presente ley y su reglamento.

Artículo 33.- (Violación a la ley).- Cualquier persona física o jurídica que en cualquier forma viole los preceptos contenidos en la presente ley, será susceptible de las sanciones siguientes:

A. Amonestación o advertencia escrita que realizará el funcionario debidamente autorizado por la autoridad competente, dejando constancia que deberá regularizar su situación en 10 (diez) días hábiles.

B. De no haber dado cumplimiento con la observación anterior, se establece una multa de 100 UR (cien unidades reajustables) a partir de la detección del incumplimiento; como la publicación de la Resolución respectiva, en dos diarios de mayor circulación durante una semana.

C. Comiso o decomiso de productos sin registro sanitario o que incumpla con las disposiciones de la presente ley.

D. Clausura temporal del establecimiento que podrá ser total o parcial, con la respectiva suspensión de la habilitación sanitaria.

E. Cancelación del registro para fines comerciales de productos objeto de control de esta ley.

F. Clausura definitiva del establecimiento.

Artículo 34. (Reincidencia).- En caso de reincidencia a cualquier infracción objeto de esta ley, será sancionado con un incremento del 100 % (cien por ciento) de la primera multa impuesta.

Artículo 35.- Además de las sanciones previstas en los artículos 35 y 36, cualquier violación de la presente ley y su reglamento, será sancionada de acuerdo con las disposiciones especiales previstas en otras leyes o reglamentos que existan.

Asimismo, el personal de salud que haya cometido una infracción a las disposiciones de la presente ley, será sancionado de conformidad con las disposiciones disciplinarias que por estatuto se encuentre alcanzado.

Artículo 36.- Además de las sanciones establecidas por los artículos 34 y 35, la autoridad competente puede inmovilizar en el mercado o retirar del mismo, según el caso, los productos que incumplan con la presente ley y su reglamento. Si los productos se consideran un peligro inminente para la salud, dichos productos serán retirados del mercado, para su inmediata destrucción e incineración, sin obligación de compensación y a costa del infractor.

Artículo 37.- Las autoridades administrativas, judiciales, políticas del país, prestarán el auxilio que requiera la autoridad competente y/o el Ministerio de Salud para exigir el cumplimiento de la presente ley, en función de las atribuciones y facultades que acuerden sus respectivas leyes.

CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 38.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la promulgación.

Artículo 39.- Quedan derogadas las disposiciones y toda ley que contravenga la aplicación de la presente ley.

Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2019

LUIS GALLO CANTERA
MIEMBRO INFORMANTE
TABARÉ LACA
OSCAR VIERA

=

COMISIÓN DE TURISMO

REPARTIDO Nº 1216
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 4142 DE 2019

CASINOS EN CRUCEROS ATRACADOS EN AGUAS TERRITORIALES URUGUAYAS

F u n c i o n a m i e n t o

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTE

Montevideo, 6 de marzo de 2017

Señor Presidente de la Asamblea General
Sr. Raúl Sendic:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese alto Cuerpo a fin de remitir, para su consideración, el adjunto proyecto de ley por el cual se extiende la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por la Ley N° 13.921 de fecha 30 de noviembre de 1970.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por iniciativa de la Administración Nacional de Puertos se procura que los casinos de a bordo de los cruceros fondeados, navegando por aguas nacionales o eventualmente atracados, puedan permanecer abiertos.

Se pretende lograr una estadía mayor, llegando en algún caso a las 24 horas, lo que permitiría a los turistas hacer otro tipo de paseos, ver diferentes espectáculos y en definitiva difundir mejor al Uruguay y a su vez permitir mejorar los ingresos indirectos de la actividad de cruceros.

Si se permitiera a los casinos de a bordo abrir con un horario preestablecido, a juicio de la Administración Nacional de Puertos se podrían mejorar los indicadores de ingresos del buque y también las empresas directas por la estadía y los indirectos de gastos en tierra.

Se destaca que en la República de Chile ante reclamos parecidos se adoptó una legislación que le permite a estos buques tener los casinos abiertos mientras se navega en aguas chilenas.

El Ministerio de Turismo es conteste con lo propuesto, considerando que dicha iniciativa mejoraría los ingresos turísticos de la actividad de los cruceros.

Asimismo el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Secretaria Técnica General de la Dirección General de Casinos, manifiesta su opinión favorable a que el barco mantenga ese servicio, que forma parte de la oferta a sus pasajeros que ofreció en el momento de contratar y que ha brindado durante su travesía.

La presente gestión tiene su sustento legal en lo establecido por el artículo 1° de la Ley N° 13.921 de fecha 30 de noviembre de 1970; en el artículo 4° del Decreto-Ley N° 14.178 de 28 de marzo de 1974; el artículo 327 del Decreto-Ley N° 14.189 de fecha 30 de abril de 1974 y en el artículo 4° del Decreto-Ley N°15.206 de 3 de noviembre de 1981.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
VÍCTOR ROSSI
DANILO ASTORI
LILIAM KECHICHIAN

_____

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Extiéndese la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por la Ley N° 13.921 de 30 de noviembre de 1970, modificativas y concordantes, a los casinos que funcionan a bordo de los cruceros oceánicos atracados en aguas territoriales uruguayas que lleguen a puertos nacionales.

El Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la facultad precedente, estableciendo un horario restringido para el funcionamiento de los casinos de a bordo exclusivamente destinados a sus pasajeros.

Montevideo, 6 de marzo de 2017

VÍCTOR ROSSI
DANILO ASTORI
LILIAM KECHICHIAN

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Extiéndese la facultad otorgada al Poder Ejecutivo por la Ley Nº 13.921 de 30 de noviembre de 1970, modificativas y concordantes, a los casinos que funcionan a bordo de los cruceros oceánicos atracados en aguas territoriales uruguayas que lleguen a puertos nacionales.

El Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la facultad precedente, estableciendo un horario restringido para el funcionamiento de los casinos de a bordo exclusivamente destinados a sus pasajeros.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de setiembre de 2019.

PATRICIA AYALA
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

REPARTIDO Nº 1100
DICIEMBRE DE 2018

CARPETA Nº 3577 DE 2018

CÓDIGO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Se declara de interés general

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

BUENAS PRÁCTICAS DE ACTUACIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 1º.- Declárase de interés general la adecuación de prácticas de actuación en la función pública, para el fortalecimiento de la transparencia en la Administración Pública.

La presente ley, sin perjuicio de todas las demás normas que surjan del ordenamiento jurídico, tiene por objeto regular las conductas de los funcionarios públicos definidos en los artículos 2º y 3º de la presente norma, en un marco de profesionalización, transparencia, eficacia y eficiencia, de prácticas honestas y responsables de actuación.

CAPÍTULO I

ALCANCE E INTERPRETACIÓN

Artículo 2º.- A los efectos de la presente ley se entiende por funcionario público, a toda persona que, cualquiera sea la forma jurídica de vinculación con la entidad respectiva, desempeñe función pública, a título oneroso o gratuito, permanente o temporaria, en cualquier persona de derecho público estatal y no estatal.

Artículo 3º. (Ámbito orgánico de aplicación).- La presente ley es aplicable a los funcionarios públicos que se desempeñen en:

A) Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

B) Tribunal de Cuentas.

C) Corte Electoral.

D) Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

E) Gobiernos Departamentales.

F) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

G) En general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así como las personas de derecho público no estatal.

Artículo 4º. (Relación con las normas especiales).- Estas normas se aplican a todos los funcionarios públicos alcanzados por los artículos 2º y 3º de esta ley sin perjuicio de aquellas normas dirigidas a determinado funcionario o grupo de funcionarios públicos que prescriban exigencias especiales o mayores que las estipuladas en esta ley.

Estas además constituirán criterios interpretativos del actuar debido de las entidades y sujetos comprendidos, en las materias de su competencia.

El dictado de Reglamentos, Instructivos u órdenes de servicio relativos a las normas de conducta en cada organismo, corresponde al órgano jerarca en el ámbito de su competencia.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 5º. (Principios y valores organizacionales).- El ejercicio de la función pública estará regido por un conjunto de principios fundamentales y valores organizacionales, partiendo de la base de que los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política, y que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario, debiendo servir con imparcialidad al interés general.

Artículo 6º. (Interés Público).- El funcionario público debe actuar en todo momento en consideración del interés público, conforme con las normas dictadas por los órganos competentes, de acuerdo con las reglas expresadas en la Constitución de la República (artículo 82).

El interés público se expresa, entre otras manifestaciones, en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos.

La satisfacción de necesidades colectivas debe ser compatible con la protección de los derechos individuales, los inherentes a la personalidad humana o los que se deriven de la forma republicana de gobierno.

Artículo 7º. (Principios rectores).- Los funcionarios públicos observarán los principios de respeto, imparcialidad, objetividad y buena fe, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos.

Artículo 8º. (Deberes y obligaciones de los funcionarios).- Los funcionarios públicos deben actuar con arreglo a los siguientes deberes y obligaciones:

A) Respetar y cumplir la Constitución de la República, las leyes y disposiciones reglamentarias.

B) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia y cortesía.

C) Dar cumplimiento a las determinaciones de sus superiores jerárquicos. Si el funcionario entendiere que lo que se le ordena es contrario al derecho o a las normas de ética, podrá pedir a su jerarca que se le reitere la orden por escrito.

D) Desarrollar las iniciativas que sean útiles para el mejoramiento del servicio.

E) Cumplir con la jornada laboral establecida, dedicando la totalidad del tiempo de la misma al desempeño de sus funciones, sin perjuicio del descanso intermedio establecido en el inciso primero del artículo 6º de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013.

F) Atender debidamente las actividades de formación, capacitación y efectuar las prácticas y las tareas que tales actividades conlleven, las que se procurará se realicen en el horario de trabajo.

G) Mantener reserva sobre asuntos e informaciones conocidos en razón de su función, aun después de haber cesado en la relación funcional, en todos aquellos casos que corresponda por ley.

H) Vigilar y salvaguardar los intereses, valores, bienes, equipos y materiales del Estado principalmente los que pertenezcan a su área de trabajo o estén bajo su responsabilidad.

I) Actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas dando trato y servicio por igual a quien la norma señale, sin discriminaciones político-partidarias, de género, religioso, étnico o de otro tipo, absteniéndose de intervenir en aquellos casos que puedan dar origen a interpretaciones de falta de imparcialidad.

J) Responder por el ejercicio de la autoridad que les haya sido otorgada y por la ejecución de las órdenes que imparta.

K) Declarar por escrito su domicilio real y comunicar en la misma forma todos los cambios posteriores del mismo, teniéndose al declarado como domicilio real a todos los efectos.

L) Denunciar ante el respectivo superior jerárquico y si la situación lo amerita ante cualquier superior, los hechos con apariencia ilícita y/o delictiva de los que tuvieren conocimiento en el ejercicio de su función.

Artículo 9º. (Prohibiciones e incompatibilidades).- Sin perjuicio de las prohibiciones e incompatibilidades específicas establecidas por otras leyes, los funcionarios públicos están sujetos a las siguientes prohibiciones e incompatibilidades:

A) Realizar en los lugares y horas de trabajo, toda actividad ajena a la función, salvo las correspondientes a la libertad sindical en las condiciones establecidas

en la normativa vigente, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo político partidario.

B) Constituir agrupaciones con fines proselitistas, utilizando el nombre de la repartición, o invocando el vínculo que la función determina. Esta disposición no será aplicable a las agrupaciones sindicales que invoquen para su organización la repartición pública a la que pertenecen los afiliados.

C) Tramitar asuntos como gestores, agentes o corredores, y, en general, tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente a los cometidos del cargo o función de la repartición en la que revista.

D) Intervenir en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en la atención, tramitación o resolución de asuntos que impliquen un conflicto de intereses.

E) Recomendar a los interesados, profesionales universitarios, corredores o gestores, para realizar servicios en la repartición pública a la que pertenecen.

F) Solicitar o recibir cualquier obsequio, gratificación, comisión, recompensa, honorario o ventaja de terceros, para sí o para otros, por los actos específicos de su función.

G) Disponer o utilizar información previamente establecida como confidencial y reservada con fines distintos a los de su función administrativa.

H) Utilizar, sin previa autorización, documentos, informes y otros datos, salvo que el ordenamiento jurídico permita su uso sin limitaciones.

I) Actuar bajo dependencia directa dentro de la misma repartición u oficina de aquellos funcionarios que se vinculen por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad, matrimonio o unión concubinaria.

Los traslados necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso anterior, no podrán causar lesión de derecho alguno, ni afectar su remuneración.

Artículo 10**.** (Responsabilidades en su aplicación).- Serán responsables de controlar la aplicación de estas normas, los jerarcas respectivos de cada unidad o dependencia de los organismos públicos.

Dichos jerarcas deberán responder en un plazo de treinta días siguientes a toda consulta formulada por un funcionario público de su dependencia relacionada con la aplicación de las presentes normas de conducta.

Artículo 11. (Exoneración de responsabilidad administrativa).- Quedará exento de responsabilidad administrativa, el funcionario que de buena fe ajuste su conducta a las instrucciones particulares que disponga su jerarca, de oficio o por consulta escrita formulada por el funcionario interesado, conforme con lo establecido en el artículo 10 de la presente ley, que contenga todas las circunstancias relevantes de la cuestión planteada.

No obstante, dicha exoneración de responsabilidad administrativa no será aplicable en los casos de configuración de un ilícito penal.

Artículo 12. (Concepto de corrupción).- Se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener directa o indirectamente un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal.

Se considera parte integrante del concepto de corrupción la oferta que realice una persona física o jurídica a un funcionario público, de un beneficio de cualquier especie, para sí o para un tercero, a los efectos de que cumpla con las tareas propias de su función u omita cumplirlas. Quien incurra en esta conducta quedará suspendido en la posibilidad de contratar con una persona pública estatal y no estatal y de actuar como representante, gestor o administrador de un proveedor de las mismas por un término de dos años, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que corresponda y lo que determine la reglamentación en materia de contratación con el Estado.

Artículo 13. (Probidad).- El funcionario público debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro.

También debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta en la función pública.

Artículo 14. (Conductas contrarias a la probidad).- Son conductas contrarias a la probidad en la función pública:

A) Negar información o documentación que haya sido solicitada de conformidad con la ley.

B) Valerse del cargo para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio de cualquier tipo, directo o indirecto para sí o para un tercero.

C) Apropiarse, tomar en préstamo o hacerse bajo cualquier otra forma, de dinero o bienes de la institución, salvo que la ley expresamente lo autorice.

D) Intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya participado privadamente como técnico. Los funcionarios deberán poner en conocimiento de su superior jerárquico su implicancia en dichos asuntos y los antecedentes correspondientes para que éste adopte la resolución que corresponda.

E) Usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de la función.

Artículo 15. (Buena fe y lealtad).- El funcionario público siempre debe actuar de buena fe y con lealtad en el desempeño de sus funciones.

Artículo 16. (Legalidad y obediencia).- El funcionario público debe conocer y cumplir la Constitución de la República, las leyes, los decretos y las resoluciones que regulan su actividad funcional así como cumplir las órdenes que le impartan sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia, dentro de los límites de la obediencia debida.

Su ignorancia no sirve de excusa.

Artículo 17. (Respeto).- El funcionario público debe respetar a los demás funcionarios y a las personas con quienes debe tratar en su desempeño funcional y evitar toda clase de desconsideración.

Artículo 18. (Imparcialidad).- El funcionario público debe ejercer sus atribuciones con imparcialidad, lo que significa conferir igualdad de tratamiento en igualdad de situaciones a los demás agentes de la Administración y a todas las personas a que refiera o se dirija su actividad pública.

Dicha imparcialidad comprende el deber de evitar cualquier tratamiento preferencial, discriminación o abuso del poder o de la autoridad hacia cualquier persona o grupo de personas con quienes su actividad pública se relacione.

Los funcionarios deberán excusarse de intervenir o podrán ser recusados cuando medie cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad, estando a lo que resuelva su jerarca.

Artículo 19. (Implicancias).- El funcionario público debe distinguir y separar radicalmente los intereses personales del interés público.

En tal virtud, debe adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir o evitar todo conflicto o conjunción de esos intereses en el desempeño de sus funciones.

Si considerare dudosa la existencia de conflicto entre el interés público y su interés personal, el funcionario deberá informar de ello al superior para que éste adopte la resolución que corresponda. Por razones de decoro o delicadeza el funcionario podrá solicitar a su superior que le excuse del caso, ateniéndose a lo que éste resuelva.

Los funcionarios que integren un órgano colegiado podrán plantear la excusación o deberán informar de la implicancia al Cuerpo del que forman parte, a cuya resolución se estará.

Artículo 20. (Transparencia y publicidad).- El funcionario público debe actuar con transparencia en el cumplimiento de su función.

Los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública pueden ser divulgados libremente, salvo que por su naturaleza deban permanecer reservados o secretos o hayan sido declarados tales por ley o resolución fundada, en todo caso bajo la responsabilidad a que hubiere lugar por derecho.

Queda comprendido en lo dispuesto precedentemente el deber de garantizar, a los particulares interesados que lo solicitaren, el acceso a la información que resulte del empleo y aplicación de medios informáticos y telemáticos para el desarrollo de las actividades de las administraciones públicas y el ejercicio de sus competencias.

Artículo 21. (Eficacia y eficiencia).- Los funcionarios públicos utilizarán medios idóneos para el logro del fin de interés público a su cargo, procurando alcanzar la máxima eficiencia en su actuación.

Artículo 22. (Eficiencia en la contratación).- Los funcionarios públicos tienen la obligación de respetar estrictamente los procedimientos de contratación aplicables en cada caso y de ajustar su actuación en la materia a los siguientes principios generales:

A) Flexibilidad.

B) Delegación.

C) Ausencia de ritualismo.

D) Materialidad frente al formalismo.

E) Veracidad salvo prueba en contrario.

F) Igualdad de los oferentes, concurrencia en todos los procedimientos competitivos para el llamado y la selección de ofertas y amplia publicidad de las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios.

Artículo 23. (Motivación de la decisión).- El funcionario debe motivar los actos administrativos que dicte, explicitando las razones de hecho y de derecho que lo fundamenten. No son admisibles fórmulas generales de fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y concreta de los hechos del caso específico en resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada.

Tratándose de actos discrecionales se requerirá la identificación clara de los motivos en que se funda la opción, en consideración al interés público.

Artículo 24. (Idoneidad y capacitación).- La observación de una conducta idónea exige que el funcionario mantenga aptitud para el adecuado desempeño de las tareas públicas a su cargo.

Será su obligación capacitarse para actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración y, en particular, deberán asistir a los cursos de actualización referentes a la moral administrativa, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de intereses en la función pública según lo determinan las normas que rigen el servicio o lo dispongan las autoridades competentes.

Artículo 25. (Buena administración financiera).- Todos los funcionarios públicos con funciones vinculadas a la gestión del patrimonio del Estado o de las personas públicas no estatales deberán ajustarse a las normas de administración financiera aplicables, a los objetivos y metas previstos, al principio de buena administración, en lo relativo al manejo de los dineros o valores públicos y a la custodia o administración de bienes de organismos públicos. Sus transgresiones constituyen faltas administrativas aun cuando no ocasionen perjuicios económicos.

Artículo 26. (Rotación de funcionarios en tareas financieras).- Los funcionarios públicos que cumplen funciones en las reparticiones encargadas de la adquisición de bienes y servicios deberán rotar periódicamente.

Dicha rotación deberá hacerse efectiva cada treinta meses continuos en el desempeño de esa función, pudiendo el jerarca prorrogar el cometido, en casos excepcionales fundados en la necesidad del servicio o en la falta de recursos humanos en el organismo, siempre que el resultado de la evaluación de desempeño en el período no arroje observaciones a la gestión.

CAPÍTULO III

PROHIBICIONES

Artículo 27. (Prohibición de contratar).- Queda prohibido a los funcionarios públicos contratar con el organismo a que pertenecen y mantener vínculos por razones de dirección o dependencia con firmas, empresas o entidades que presenten ofertas para contratar con dicho organismo.

No obstante, en este último caso, quedan exceptuados de la prohibición los funcionarios que no tengan intervención alguna en la dependencia pública en que actúan en el proceso de la contratación, siempre que informen por escrito y sin reticencias al respecto a su superior. Si al momento de ingresar a la función pública estuviere configurada o en condiciones de configurarse dicha situación, el funcionario deberá informar por escrito y sin reticencias al respecto.

Esta prohibición se extiende a las contrataciones realizadas a solicitud de la Administración a que el funcionario pertenece por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros.

Los funcionarios públicos y los organismos a los que pertenecen tienen prohibido celebrar o solicitar a terceros la celebración de contratos de servicios o de obra que tengan por objeto la realización por los mismos funcionarios de las tareas correspondientes a su relación funcional o tareas similares o a cumplirse dentro de su jornada de trabajo en el organismo respectivo.

Artículo 28. (Prohibición de intervenir por razones de parentesco).- Los funcionarios públicos con competencia para gastar, tienen prohibido intervenir cuando estén ligados por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad, por matrimonio o unión concubinaria, con la parte que contrata con el organismo a que pertenecen.

Artículo 29. (Prohibición de intervención por terceros).- Los funcionarios públicos no podrán intervenir directa o indirectamente como gestores, técnicos, profesionales o intermediarios de cualquier tipo en asuntos de terceros o de otros funcionarios ante los organismos públicos a los que pertenecen o desempeñen funciones, salvo autorización expresa otorgada por la jerarquía del organismo, según lo habilite la reglamentación respectiva. En el caso de la Administración Central, la pertenencia se entenderá dentro del Inciso correspondiente.

Artículo 30. (Prohibición de relaciones con actividad controlada).- Queda prohibido a los funcionarios públicos con cometidos de dirección superior, inspectivos o de asesoramiento ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren sujetas al control de las oficinas de que aquéllos dependan. Les está prohibido asimismo percibir de dichas personas retribuciones, comisiones u honorarios de clase alguna.

La prohibición establecida en el inciso anterior se extiende a todas las contrataciones de servicios o de obra, realizadas a solicitud de la Administración controlante, por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros.

Esta prohibición se mantendrá durante un año, luego de que el funcionario respectivo haya cesado en sus funciones.

Artículo 31. (Prohibición de relaciones con actividad vinculada).- Queda prohibido a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades

privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado.

La prohibición establecida en este artículo se extiende a todas las contrataciones de servicios o de obra realizadas a solicitud de una Administración comprendida en esta ley, por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros.

Esta prohibición se mantendrá durante un año, luego de que el funcionario respectivo haya cesado en sus funciones.

Artículo 32. (Declaración jurada de implicancias).- Todos los funcionarios que, a la fecha de vigencia de esta ley, se encuentren en las situaciones previstas por los artículos anteriores deberán presentar, en un plazo máximo de sesenta días siguientes a dicha vigencia, una declaración jurada donde establezcan que clase de vinculación o actividades de las previstas en dichos artículos mantienen, individualizando las personas o empresas y el tipo de relacionamiento o intereses con ellas, estándose a lo que resuelva el jerarca correspondiente.

Dicha declaración jurada deberá ser presentada, en forma abierta, ante el jerarca del servicio donde el funcionario se desempeña.

Toda nueva situación de las previstas por los artículos anteriores deberá ser declarada en la misma forma establecida en el inciso anterior dentro de los sesenta días de configurada y quedará sujeta a lo que resuelva el jerarca respectivo.

Artículo 33. (Implicancias dudosas o supervinientes).- Si al momento de ingresar a la función pública o durante su desempeño, resultare dudosa o estuviere cuestionada la configuración de alguna de las situaciones previstas en los artículos 27 a 32 de esta ley, el funcionario deberá informarlo de inmediato y en forma pormenorizada por escrito a su superior jerárquico, quien deberá resolver fundadamente al respecto y, en su caso, sobre la permanencia del funcionario en la oficina.

Artículo 34. (Prohibición de recibir regalos y otros beneficios).- Los funcionarios públicos tienen prohibido solicitar o aceptar dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas, directa o indirectamente, para sí o para terceros, a fin de ejecutar, acelerar, retardar u omitir un acto de su empleo o contrario a sus deberes o por un acto ya cumplido.

Artículo 35. (Prohibición de uso indebido de fondos).- Los funcionarios públicos tienen prohibido manejar los fondos públicos en forma distinta a la legalmente autorizada, siendo responsable de su pago cuando comprometa cualquier erogación sin estar autorizado para ello.

El funcionario está obligado a rendir cuenta documentada y comprobable de la versión, utilización o gestión de los fondos recibidos. Asimismo deberá rendir cuenta cuando utilice tarjetas de crédito corporativas de entidades públicas, en las condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 36. (Prohibición de revistar en la misma oficina por razones de parentesco).- Queda prohibida la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge o concubina.

Si ingresare a la oficina un funcionario que mantenga los vínculos mencionados en el inciso anterior, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de funcionario alguno.

Artículo 37. (Prohibición de uso indebido de bienes públicos).- Los funcionarios públicos deberán utilizar los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al organismo público en que revistan o asignados a su uso o consumo exclusivamente para el funcionamiento de los servicios a su cargo.

Está prohibido el uso de locomoción, combustible, repuestos y servicios de reparaciones de cargo de toda fuente de fondos públicos, por parte de cualquier funcionario público, fuera de lo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus tareas. En ningún caso el ejercicio de una función pública podrá implicar la libre disponibilidad de un vehículo perteneciente a cualquier organismo o afectado a su uso, fuera de los requerimientos del servicio en sentido estricto, salvo las excepciones legales y reglamentarias.

Los vehículos pertenecientes al organismo público o asignados a su uso deberán ser guiados por personal con licencia habilitante y no podrán ser aplicados para usos de índole particular, salvo los casos excepcionales debidamente justificados por la autoridad competente.

TÍTULO II

NORMAS DE APLICACIÓN

Artículo 38. (Faltas administrativas).- El incumplimiento de los deberes explicitados en esta ley y la violación de las prohibiciones contenidas en ella constituirán faltas administrativas.

Como tales, serán objeto de sanción proporcionada a su gravedad, previa sustanciación del procedimiento disciplinario respectivo, en el que se asegurará la garantía de defensa. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal prevista por la Constitución de la República y por las leyes.

Artículo 39. (Potestad disciplinaria y jurisdicción penal).- El sometimiento a la justicia penal de un funcionario público no obsta al necesario ejercicio de la competencia del organismo respectivo, independientemente de la judicial, para instruir los procedimientos internos y adoptar las decisiones que correspondan en virtud de las faltas disciplinarias que se comprobaren en la vía administrativa con arreglo a derecho.

Artículo 40. (Denuncia de irregularidades o de prácticas corruptas).- Todo funcionario público está obligado a denunciar irregularidades o prácticas corruptas de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, de las que se cometieren en su repartición o cuyos efectos ella experimentare particularmente.

Asimismo, deberá recibir y dar trámite a las denuncias que se le formularen al respecto. En uno y otro caso, las pondrá en conocimiento de sus superiores jerárquicos.

Si se tratare de irregularidades que pudieren causar perjuicios económicos, el funcionario público está obligado a comunicarlo por escrito a su superior jerárquico y al Tribunal de Cuentas de la República.

Artículo 41. (Denuncia de delitos).- El jerarca a quien competa resolver sobre las investigaciones internas de las que resultare la posible configuración de un delito tiene el deber de disponer la inmediata denuncia ante el Ministerio Público y Fiscal.

Artículo 42. (Régimen de protección de testigos y denunciantes).- Los funcionarios públicos que denunciaren delitos de Corrupción contra la Administración Pública, quedarán incluidos en el programa de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación.

Las personas públicas referidas en esta ley, deberán disponer la creación de ámbitos competentes para la recepción reservada de denuncias o noticias de actos de corrupción que ocurran en las respectivas dependencias, las que luego de ser diligenciadas y, de existir mérito suficiente, serán derivadas a las autoridades competentes.

En el curso del diligenciamiento de las actuaciones respectivas, se dará debida protección administrativa y laboral a los funcionarios denunciantes sin perjuicio de su responsabilidad en el caso de denuncias falsas o infundadas. Dicha protección implicará, entre otros aspectos, la reserva de su identificación si correspondiere y la preservación de su estabilidad laboral, no pudiéndose permitir que se le apliquen medidas administrativas que le causen perjuicio si no están debidamente fundadas.

Artículo 43. (Consultas).- En el ejercicio de la potestad disciplinaria, los organismos cuyos funcionarios se encuentran alcanzados por esta ley podrán recabar la opinión de la Junta de Transparencia y Ética Pública, en cuyo caso, para apartarse del dictamen que esta emita, deberá procederse en forma fundada.

Los jerarcas de dependencias públicas, previo al dictado de las pertinentes decisiones administrativas, podrán dirigir directamente a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) los pedidos de asesoramiento y aclaraciones relativos a la aplicación de la presente ley que estimen necesarios, adjuntando informe de la asesoría jurídica de su respectivo ámbito orgánico.

Dentro de los treinta días de recibido el asesoramiento o la opinión solicitada a la JUTEP, los jerarcas de las dependencias públicas deben informar a esta sobre la resolución adoptada en cada caso.

TÍTULO III

NORMAS DE CONDUCTA DE LOS REPRESENTANTES DEL ESTADO EN ENTIDADES Y EMPRENDIMIENTOS PRIVADOS

Artículo 44. (Alcance).- Los representantes de toda persona pública estatal y no estatal en la dirección de una sociedad, asociación, consorcio o entidad de cualquier naturaleza regulada por el derecho privado, que esté integrada total o parcialmente por éstas, así como las personas físicas y jurídicas designadas como fiduciarios, en un fideicomiso en el que una persona pública estatal o no estatal sea fideicomitente o beneficiario, tendrán las mismas obligaciones, deberes y responsabilidades civiles, administrativas y penales que los funcionarios públicos.

Artículo 45. (Monitoreo).- Los jerarcas de las personas públicas estatales y no estatales serán responsables de monitorear el cumplimiento de los deberes indicados en el artículo 44 de la presente ley por parte de las personas que hubiesen designado en

tales calidades, debiendo adoptar las medidas que estimen pertinentes ante conductas que se desvíen de dichas obligaciones.

Artículo 46. (Contralor de las Personas Públicas No Estatales).- El Poder Ejecutivo deberá incluir en cada instancia Presupuestal y de Rendición de Cuentas, en la información que eleva al Poder Legislativo, los estados patrimoniales de las personas públicas no estatales, independientemente del origen de la asignación o recurso, con dictamen de auditoría externa.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 12 de diciembre de 2018.

LUCÍA TOPOLANSKY
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

=

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

REPARTIDO Nº 1198
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 4088 DE 2019

LEY ORGÁNICA DE LA JUDICATURA Y DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES

Modificaciones a la Ley N° 15.750

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 78 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 78.- Las decisiones atinentes a la carrera judicial se adoptarán con criterios objetivos, atendiendo especialmente la integridad, capacidad y experiencia.

El proceso de selección será transparente, tenderá a garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.

El ingreso a la carrera judicial se hará siempre por los cargos de menor jerarquía, siempre con arreglo a los artículos 235, 242 y 245 de la Constitución de la República".

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 79 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 79.- Sin perjuicio de los requisitos especiales que se establecen respecto a cada Tribunal, para ingresar a la Judicatura se requiere:

1) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con dos años de ejercicio.

2) Ser abogado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 247 de la Constitución de la República.

3) No estar formalizado en proceso penal, o haber sido condenado criminalmente por delito alguno, o destituido de cualquier cargo público.

4) Tener un nivel de escolaridad en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales adecuado a las exigencias del servicio a juicio de la Suprema Corte de Justicia. En la solicitud de ingreso podrán señalarse otros méritos.

5) Haber aprobado los procesos de formación inicial que disponga la Suprema Corte de Justicia en consulta con el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay del Poder Judicial, designándose en primer lugar

a los egresados mejor evaluados, y a falta de estos, a los cursantes mejor calificados entre los más avanzados.

La admisión para realizar los procesos de formación inicial, se hará por concurso de oposición y méritos, que se habilitará mediante llamado público y abierto, al que podrán presentarse quienes reúnan los requisitos previstos en esta ley y su reglamentación en lo pertinente".

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 83 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 83.- Para ser Juez de Paz Departamental del Interior y Juez de Paz de las demás categorías, deben cumplirse todos los requisitos referidos en el artículo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 247 de la Constitución de la República".

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 86 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 86.- Los Jueces tendrán derecho a la licencia que gozarán en principio durante los períodos de receso de los Tribunales, que serán dos: uno del veinticinco de diciembre de cada año al treinta y uno de enero subsiguiente, y del primero al quince de julio, sin perjuicio de las licencias especiales dispuestas por otras normas o las que la Suprema Corte de Justicia, a su petición estimare oportuno concederles por motivos fundados, siempre que con ello no se afectare el funcionamiento del servicio.

La Suprema Corte de Justicia designará los magistrados y funcionarios que actuarán durante los períodos de receso".

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 94 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 94.- Los Jueces se abstendrán:

1º) De expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite.

2º) De dar oído a cualquier alegación que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles en forma distinta de la establecida en las leyes.

3º) De divulgar información sobre deliberaciones y actuaciones reservadas.

4º) De todo comportamiento, acción o expresión que afecte la confianza en su imparcialidad".

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 95 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 95.- Los miembros de la Judicatura con derecho a ascenso (artículo 98 de la presente ley) y que se postulen al efecto, serán calificados anual o bianualmente, atendiendo a su desempeño funcional y de acuerdo a lo previsto por la presente ley.

El período de calificación comprenderá doce meses de desempeño y se extenderá desde el 1º de octubre al 30 de setiembre del año siguiente.

El proceso calificatorio se iniciará el 1º de octubre y quedará terminado, a más tardar, el 31 de diciembre de cada año.

La lista para ascender no será alfabética sino conforme a la prelación resultante de dicho proceso".

Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 96 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 96.- La Suprema Corte de Justicia establecerá el orden de los ascensos, mediante la prelación del artículo anterior y el siguiente, más la reglamentación a su cargo".

Artículo 8º.- Sustitúyese el artículo 97 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 97.- Los ascensos se efectuarán, en principio, al grado inmediato superior, teniendo en cuenta la calificación de su desempeño, los antecedentes funcionales, la participación en al menos dos cursos por año de capacitación permanente brindados por el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, el resultado de la prueba del concurso de ascenso y la antigüedad en la categoría, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 de la presente ley.

La calificación será determinada por los órganos procesales superiores, de acuerdo al siguiente criterio:

a) Los Ministros de los Tribunales de Apelaciones, calificarán a los Jueces Letrados de primera instancia de igual especialización que la sala informante.

b) Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo respecto de los Jueces de Paz Departamentales de la Capital.

c) Los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior respecto de los Jueces de Paz Departamentales y Jueces de Paz de sus límites jurisdiccionales, cualquiera fuera su categoría.

Los antecedentes serán apreciados por la Suprema Corte de Justicia, examinando la actuación y el comportamiento del juez en el desempeño de sus funciones, teniendo en cuenta a esos efectos, especialmente, las anotaciones favorables o desfavorables (numerales 3º) a 6º) del artículo 114 de la presente ley) que surjan del respectivo legajo personal.

La capacitación deberá ser apreciada mediante los criterios generales que establecerá y reglamentará la Suprema Corte de Justicia. El acceso a los cursos de capacitación deberá ser ecuánime para todos los magistrados, estableciendo los mecanismos para que todos puedan postularse a los mismos.

La prueba del concurso de ascenso se realizará anualmente, preferentemente para cada materia, pudiendo participar todos los magistrados con derecho al ascenso (artículo 98 de la presente ley). Su contenido y evaluación quedarán a cargo de un tribunal que la Suprema Corte de Justicia integrará alternativamente con dos o más representantes que esta designe y dos o más representantes designados por la Asociación de Magistrados del Uruguay".

Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 98 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 98.- La carrera judicial comprende los siguientes grados correspondientes a cada una de las siguientes calidades:

1º) Juez de Paz.

2º) Miembro del Tribunal de Faltas.

3º) Juez de Paz Departamental del Interior.

4º) Juez de Paz Departamental de la Capital.

5º) Juez Letrado de Primera Instancia del Interior.

6º) Juez Letrado de la Capital, Juez Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo y Juez Letrado suplente.

7º) Ministro del Tribunal de Apelaciones.

Todos los integrantes de la carrera judicial realizarán cursos de capacitación continua según las modalidades y el número de horas que la Suprema Corte de Justicia reglamente".

Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 99 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 99.- Los Jueces Letrados con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones todo el tiempo de su buen comportamiento hasta el límite establecido en el artículo 250 de la Constitución de la República. No obstante, por razones de buen servicio, la Suprema Corte de Justicia podrá trasladarlos en cualquier tiempo de cargo o de lugar, o de ambas cosas, con tal que ese traslado se resuelva después de oído el Fiscal de Corte y con sujeción a los siguientes requisitos:

1) Al voto conforme de tres de los miembros de la Suprema Corte de Justicia en favor del traslado si el nuevo cargo no implica disminución de grado o de remuneración, con respecto al anterior.

2) Al voto conforme de cuatro de sus miembros en favor del traslado, si el nuevo cargo implica disminución de grado o de remuneración, con respecto al anterior.

En caso de traslado o ascenso el Estado sufragará los gastos que se ocasionaren.

En todos los casos, el traslado deberá estar fundado y antes de dictarse el acto administrativo que lo dispone, se le otorgará al magistrado una vista previa de 5 días hábiles, para que manifieste su consentimiento o exprese las razones de su negativa.

Salvo motivo fundado, ningún juez será trasladado de materia sin su consentimiento. No obstante, cuando ese o cualquier traslado sea previsible con antelación suficiente porque responde a un plan general del Poder Judicial, o a una reforma legislativa, ningún juez denegará injustificadamente su consentimiento".

Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 111 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTÍCULO 111.- Tratándose de responsabilidad civil de los jueces por actos propios de su función, se aplicará el régimen establecido por la Constitución de la República.

Conforme al numeral 20 del artículo 85 de la Constitución de la República, declárase, con carácter interpretativo de los artículos 23, 24 y 25 de la Constitución de la República, que la acción tendiente a la indemnización de los daños y perjuicios causados por dichos actos, solo podrá dirigirse directamente contra la Administración de Justicia. Si los daños y perjuicios provienen de dolo o culpa grave, el Estado podrá repetir contra los magistrados para el reembolso respectivo".

Artículo 12.- Agrégase a la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 113 BIS. (Pedido de informe y Derecho de defensa de los Jueces).- Siempre que no configure afectación de la independencia jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia podrá requerir a un juez, que informe con plazo no menor a tres días, en relación a una denuncia recibida en su contra, o a presunta inobservancia que pudiere llegar a justificar el inicio de un proceso disciplinario. Para hacer uso del Derecho de defensa, el juez podrá evacuar el informe con asistencia letrada.

Todo magistrado sometido a proceso disciplinario (investigación o sumario), tiene derecho a defensa técnica, a que se presuma su inocencia, a controlar toda actividad instructoria, y a la reserva de las actuaciones hasta que culmine el procedimiento, cesando la misma solo en caso de finalizar con sanción".

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 14 de agosto de 2019.

LUCÍA TOPOLANSKY
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

=

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

REPARTIDO Nº 1212
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 4123 DE 2019

PUEBLO CEBOLLATÍ, DEPARTAMENTO DE ROCHA

Se declara feriado no laborable el día 28 de octubre de 2019, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación

———

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase feriado para la el pueblo de Villa Cebollatí, departamento de Rocha, el día 28 de octubre de 2019, en oportunidad de celebrarse el 100° Aniversario de su fundación.

Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia sin goce de sueldo en la fecha indicada en el artículo 1°, a los trabajadores de las actividades públicas y privadas, nacidos o radicados en el pueblo Cebollatí.

Montevideo, 3 de setiembre de 2019

ALEJO UMPIÉRREZ
REPRESENTANTE POR ROCHA
HERMAN ALSINA
REPRESENTANTE POR ROCHA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cebollatí es una localidad fundada a principios del siglo XX, por don Lucas Techera y oficializada como pueblo el 28 de octubre de 1919. Según el último censo (2011), cuenta con 1.609 habitantes.

Se encuentra situada en la zona norte del departamento de Rocha, sobre las costas del río homónimo y sobre la ruta 15 en el kilómetro 187. Es un lugar privilegiado por la naturaleza, con más de 700 especies vegetales, entre ellas el ceibo de flores blancas, único en su género.

Posee hermosos paisajes, rodeado por un gran palmar, un inmenso monte indígena o ribereño y por uno de los ríos más largos del Uruguay; el río Cebollatí o "el río de las cebollas blancas", que desemboca en la Laguna Merín a 15 kilómetros del pueblo, pasando por "La Isla del Padre".

A orillas del río se encuentra la Barra del río Cebollatí, un mirador de monte ribereño que se erige como lugar ideal para el disfrute del sereno paisaje. Desde allí se puede llegar hasta la "Isla del Padre", con 800 has y 18 km de costa, en la que se alternan barrancas y planicies inundables. Posee una diversidad de hábitats valiosos para la conservación de fauna autóctona, como el cuervo de cabeza amarilla o el gavilán. Su gran abundancia de paisajes ha permitido el desarrollo del ecoturismo.

Desde fines del siglo XVIII el arroz forma parte de la historia productiva de la villa, como actividad económica central y un patrimonio histórico-cultural. Debido a su producción Cebollatí integra la conocida Ruta del Arroz, y el cultivo es el elemento definitorio de su identidad.

Su principal actividad económica es agrícola, con relevante importancia en el sector arrocero, provee de materia y servicios a la toda la zona, el 90% de su producción es destinada a la exportación. La producción ganadera también goza de un amplio reconocimiento.

En cuanto a los servicios e instituciones presentes en la zona se identifican la escuela N° 55 en Cebollatí y cuatro escuelas rurales, una Policlínica de MSP, así como instituciones de asistencia médica privadas. También se cuenta con Junta Local de Cebollatí, y existe el acceso a agua potable, telefonía y luz eléctrica

Alguna de las actividades tradicionales del lugar son los raids hípicos, jineteadas, festivales folklóricos y pesca, principalmente de carpa.

La población de Cebollatí se caracteriza por tener vínculos marcados por la calidez humana y la hospitalidad, y su vocación de trabajo y progreso siendo sus elementos más definitorios.

Montevideo, 3 de setiembre de 2019

ALEJO UMPIÉRREZ
REPRESENTANTE POR ROCHA
HERMAN ALSINA
REPRESENTANTE POR ROCHA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CARPETA Nº 4145 DE 2019

REPARTIDO Nº 1218
SETIEMBRE DE 2019

CONSTRUCCIÓN DENOMINADA "CASAPUEBLO"

Se solicita al Poder Ejecutivo la declaración de Monumento Histórico, Artístico y Cultural a través de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación

———

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes se dirige al Poder Ejecutivo para que exhorte a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación a realizar una propuesta de declaración de Monumento Histórico, Artístico y Cultural, de acuerdo a la Ley Nº 14.040, del 20 de octubre de 1971, en relación a la construcción denominada "Casapueblo", ubicada en el padrón Nº 3380 de Punta Ballena en el departamento de Maldonado. Dicha construcción es obra del célebre y prestigioso artista nacional Carlos Páez Vilaró. Se solicita que el bien quede afectado por las servidumbres enumeradas en el artículo 8º de la referida ley.

Montevideo, 10 de setiembre de 2019

ANDRÉS CARRASCO BRIOZZO
REPRESENTANTE POR MALDONADO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es aspiración de esta Cámara que se declare Monumento Histórico, Artístico y Cultural a la construcción denominada "Casapueblo", ubicada en el padrón Nº 3380 de Punta Ballena en el departamento de Maldonado, construida por el célebre y prestigioso artista nacional Carlos Páez Vilaró.

Motiva esta aspiración el hecho de ser un tipo de construcción única y especial, presente en la geografía y en el relato de un entorno singular. Se trata de la creación emblemática de un referente que dejó a través de diversas manifestaciones artísticas una huella imborrable en la cultura de nuestro país. El valor patrimonial contenido en "Casapueblo" hace que esta obra sea merecedora de un tratamiento particular que reconozca el lugar en la historia que le corresponde.

Esta construcción, levantada por Carlos Páez Vilaró con sus propias manos durante 36 años de esforzada labor sin jamás utilizar planos, cuenta con varias salas en dirección al mar sobre los acantilados de Punta Ballena. En ella se realizan permanentemente exposiciones de pinturas, esculturas y cerámicas del artista. "Casapueblo" se ha transformado en uno de los símbolos de la zona y es famosa por su ceremonia de la puesta de sol mirando a occidente. Enmarcada en un entorno único, es un destino obligado para miles de turistas y visitantes que año a año se hacen presentes para admirar su belleza, mística y singularidad. Con el tiempo, se constituyó en uno de los íconos no solo de Punta del Este sino de todo el Uruguay, con su estructura fotografiada incontables veces e impresa en postales.

Páez Vilaró solía hacer referencia a la habilidad del hornero para hablar del tipo de construcción. Esta no posee una sola línea recta en su interior y evoca las construcciones moriscas y mediterráneas por su color y por la geografía en la cual fue levantada. Además de su hogar, el lugar se convirtió con los años en su taller y posteriormente también en museo y hotel. Cada rincón de esta casa-museo-hotel-restaurante es el homenaje del artista a un ideal (el amor), a un pueblo (los negros), o a una persona (Jorge Luis Borges).

Montevideo, 10 de setiembre de 2019

ANDRÉS CARRASCO BRIOZZO
REPRESENTANTE POR MALDONADO

=

COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

REPARTIDO Nº 939
MAYO DE 2018

CARPETA Nº 3061 DE 2018

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Se establecen modificaciones a la Ley N° 19.307

- 1 -

PODER EJECUTIVO

Montevideo, 7 de mayo de 2018

Señora Presidente de la Asamblea General
Lucía Topolansky:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo la exposición de motivos y el proyecto de ley relativo a modificaciones a la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, con el fin de facilitar la implementación de varias soluciones que establece dicha ley, contemplando algunas de las declaraciones de inconstitucionalidad que a su respecto ha efectuado la Suprema Corte de Justicia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto procura mantener la directriz teleológica de la Ley Nº 19.307 consistente en el más irrestricto respeto a la libertad de expresión tanto en su faceta negativa como en la positiva, procurando garantizar el derecho al acceso a la información de fuente variada, protegiendo los derechos de consumidores de servicios de comunicación audiovisual y fomentando la industria audiovisual nacional.

En primer tugar, se propone una redacción alternativa al artículo 56 de la ley. Corresponde destacar que la exposición de motivos oportunamente remitida por el Poder Ejecutivo, acompañando a la que a la postre se transformó en la Ley N° 19.307 de 29 de diciembre de 2014, planteaba entre los objetivos centrales del proyecto establecer "(...) reglas claras que permitan generar un sistema de medios audiovisuales armónico, con una competencia equilibrada y justa entre los operadores". Asimismo, se señalaba que la nueva regulación "(...) tiene en cuenta la intensa y permanente transformación tecnológica del sector, particularmente en lo referente a los avances en materia de digitalización de las telecomunicaciones, superando el régimen jurídico vigente desactualizado, concretando su imprescindible modernización". En otras palabras, apuntaba a evitar el fenómeno que algunos denominan "convergencia" de los servicios de telecomunicaciones en sentido amplio.

Más adelante abundaba sobre el punto de partida y directriz teleológica del proyecto: el reconocimiento, protección y promoción de los derechos de las personas, audiencias y público en general intentando el equilibrio con los intereses comerciales de los operadores de servicios de comunicación audiovisual.

Por otro lado, también la exposición de motivos referida abundaba sobre el concepto de equilibrio o "relaciones equilibradas entre las empresas que conforman los diferentes eslabones de la cadena productiva del sector".

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, al analizar la constitucionalidad del artículo 56 inciso primero de la Ley Nº 19.307 señalada, ha considerado que "(...) no existen razones de interés general para limitar tales derechos, circunstancia que, por si sola, vulnera el principio de igualdad y libertad previsto en los artículos 7 y 8 de la Constitución. No resulta de la norma, ni ha sido explicitado por el Legislador, por qué

motivo correspondía establecer una limitación más estricta en este aspecto que las restantes del mismo Capítulo de la ley que tiene la finalidad expresa de evitar la concentración empresarial (los monopolios y oligopolios).

A juicio del redactor, la norma infringe además el artículo 36 de la Constitución, tal como ya tuve oportunidad de señalarlo en las discordias extendidas en Sentencias 79/2016 y 180/2016".

Sustancialmente, las exigencias que establecen los artículos 7 y 36 de la Constitución Nacional para limitar la libertad como género y la libertad de empresa como especie son las mismas. Mientras el artículo 7 establece que nadie puede ser privado de sus libertades... "sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general", el articulo 36 dispone que cualquiera puede dedicarse a las actividades económicas "(...) salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes".

Despejado el problema de que la limitación ha sido establecida por una ley en sentido formal y material (la citada Ley Nº 19.307), resta analizar si una limitación del tipo de la planteada encuentra "razones de interés general" o si se trata de "limitaciones de interés general".

El interés general ha sido caracterizado en el derecho uruguayo por el inciso segundo del artículo 20 de la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998. Dispone dicho precepto... "El interés público se expresa en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos".

Es indudable que en los últimos años ha avanzado una concepción que identifica el interés general con la plena efectividad de todos los derechos reconocidos por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, incluyendo los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por la República.

Desde esta perspectiva, una limitación al derecho de propiedad, a la libertad de empresa o a cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente, debe estar fundada en la protección o promoción de otro derecho o libertad, o en uno de los instrumentos básicos para garantizar su efectividad. A modo de ejemplo, es indudable la conexión causal que existe entre conceptos básicos como el desarrollo nacional o la soberanía con la efectividad de la diversidad de derechos, sobre todo de aquellos definidos como económicos, sociales y culturales.

En definitiva, todos los instrumentos regulatorios dispuestos en la ley se encaminan a la instrumentalidad de los principios identificados en los artículos 7 a 13 de la ley, así como a la plena vigencia de los derechos reconocidos en los artículos 14 a 42 de la misma.

Asimismo, parte de la garantía de la existencia de pluralidad de voces pasa por generar las condiciones de su existencia, especialmente en un contexto regional y mundial en el que respecto a la prestación de estos servicios, se observan los mismos operadores privados formando empresas de gran tamaño que trascienden fronteras, tanto en el mercado de los servicios de comunicación audiovisual como en el de telefonía y trasmisión de datos. La búsqueda del equilibrio entre las grandes empresas transnacionales de las telecomunicaciones y las empresas nacionales y, aun las locales,

es un elemento esencial de garantía de pluralidad de voces y de promoción del trabajo nacional, en línea con los imperativos constitucionales en la materia.

Del mismo modo, en el mercado de telefonía y trasmisión de datos sucede lo propio: el Estado, como expresión de su recto funcionar en aras del interés general, tiene como poder-deber la protección de sus empresas industriales y comerciales, estableciendo a través de la ley, restricciones a empresas privadas que limitan su actividad (dado que toda libertad irrestricta puede ser legalmente limitada por razones de interés general), en aras de mantener los equilibrios adecuados.

La aplicación de este modelo híbrido y regulado de coexistencia de empresas privadas en competencia con la empresa estatal ha dado resultados exitosos en materia de efectividad de los derechos vinculados a las telecomunicaciones en términos de acceso, de disponibilidad geográfica, disminución de las brechas, de servicios de calidad en términos de velocidad y a precios asequibles. En todos los indicadores internacionales, Uruguay lidera la región en esta materia por la implementación de una política nacional de telecomunicaciones seria, previsible, efectiva y soberana.

Para lograr el deseado equilibrio es necesario establecer restricciones en las autorizaciones o licencias otorgadas a empresas privadas a efectos de evitar la concentración de servicios en un solo prestador o grupo económico de prestadores de servicios. En concreto, a los efectos de evitar dicha concentración, es oportuno establecer la restricción de no permitir simultáneamente que un titular o grupo económico ostente licencias o autorizaciones para prestar servicios de telecomunicaciones y licencias o autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual, lo que resulta explícito del propio texto del artículo 56 reformado. Tal forma de concentración de los servicios podría implicar una alteración significativa del mercado afectando la cadena de valor al concentrar las diversas etapas de la misma en único sujeto, el cual estaría en ventaja respecto a los demás prestadores.

La relevancia de tal objetivo ha sido plasmada en diversas declaraciones de organismos internacionales, donde se establece la importancia de prevenir la concentración indebida de los medios "o la propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o vertical, se deben adoptar medidas especiales, incluyendo leyes antimonopólicas". (Estándares para una libertad de expresión... fs. 31).

Se agrega además que, en cuanto a la última restricción mencionada, esto es, lo que respecta a la incompatibilidad de los titulares de licencia de televisión para abonados satelital a prestar servicios de radiodifusión abierta o ser titulares de otras licencias de servicios de televisión para abonados, la misma es acorde con el artículo 54 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, el que establece un límite general a la titularidad de servicios de televisión para abonados disponiendo que los mismos no podrán contar con más de una licencia o autorización para un mismo o similar ámbito de cobertura local.

Por otro lado, la función social que hoy cumplen los medios de comunicación en general, entendida en cierta medida por la mayor influencia en la formación de opinión pública de parte de los operadores, hacen esencial la limitación en la concentración de servicios, ya que lo contrario, imposibilita a los particulares a contar con un pluralismo informativo en los contenidos que se trasmitan a través de esos medios.

Debe entenderse que las medidas que buscan limitar la concentración de los medios de comunicación por parte de algunos pocos operadores, tienen como contrapartida, la posibilidad de los ciudadanos o particulares, a contar con mayor información a su alcance.

Esto no es más ni menos que reconocer la función democrática que tiene la libertad de información.

En virtud de lo expuesto es que podemos afirmar que existen fuertes razones de interés general que avalan al Estado para promover la limitación en la concentración de medios. No es menor destacar, que con la Ley N° 19.307 se promueven políticas públicas activas dirigidas a efectivizar derechos, y brindar garantías de transparencia, imparcialidad e igualdad de oportunidades. Esto, no solo alcanza a la titularidad de los medios, sino que más importante es la consecuencia que se deriva de tos mismos, y es que la trasparencia, imparcialidad, igualdad y pluralismo se traspasa al acceso a la información; y con esto el mayor beneficiado es el ciudadano.

Con relación al artículo 117, y en lo que tiene que ver con el deber de transportar las señales de televisión abierta por parte del operador de televisión para abonados de la misma zona, la declaración de inconstitucionalidad alcanza a las empresas de televisión abierta que promovieron las acciones con relación a la gratuidad establecida en el inciso quinto del artículo ("must offer"), pero no a los operadores de televisión para abonados gravados por la obligación de transportar.

En consecuencia, ha resultado una situación en que el radiodifusor tiene deber de entregar su señal y el titular de un servicio de comunicación audiovisual tiene el deber y el derecho de portar en su grilla la totalidad de las señales abiertas, pero el radiodifusor tiene el derecho a cobrar por la entrega de su señal y el titular de un servicio de comunicación audiovisual tiene, al mismo tiempo, el derecho a que le sea suministrada gratuitamente.

En definitiva, para resolver esta incongruencia, se propone un sistema de pago racional y proporcional, susceptible de aceptación por ambas partes. Se establece un mecanismo de precios máximos regulados por mes, para cada señal abierta que se deba transportar, a fin de solucionar la contradicción que se ha traducido en profusa litigiosidad.

En el artículo 139, la modificación propuesta pretende resolver una situación de desigualdad entre Montevideo y el interior del país. La publicidad en los medios del interior tiene características distintas, por ejemplo: no hay prácticamente publicidad de marcas (bancos, refrescos, tarjetas de crédito, marcas globales, etc.) sino de comercios de la propia ciudad (almacenes, carnicerías, etc.) en general estas publicidades describen ofertas por lo que además suelen ser más largas. Si se limita la publicidad al igual que en Montevideo, muchos programas pasarán a ser inviables.

En el interior, la publicidad en algunos casos forma parte integral del programa o es considerada como información por el espectador (remates ganaderos, espacios con información fúnebre, etc.) por lo que no se pueden aplicar las mismas reglas publicitarias que en Montevideo.

Se propone modificar la ley aplicando un factor de corrección que tiene en cuenta la descentralización y el contenido local de la publicidad.

TABARÉ VÁZQUEZ
JORGE VÁZQUEZ
EDUARDO BONOMI
ARIEL BERGAMINO
DANILO ASTORI
JORGE MENÉNDEZ

MARÍA JULIA MUÑOZ
VÍCTOR ROSSI
CAROLINA COSSE
ERNESTO MURRO
JORGE QUIAN
ALBERTO CASTELAR
LILIAM KECHICHIAN
ENEIDA DE LEÓN
MARINA ARISMENDI

- 6 -

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 56 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, por el siguiente:

"ARTÍCULO 56. (Incompatibilidades para la prestación de servicios de comunicación audiovisual).- Es de interés general garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual, entendiendo por tal, aquél que se expresa, entre otras manifestaciones, en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio, en la idónea administración de los recursos públicos y en la efectividad de los demás derechos reconocidos explícita o implícitamente por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por la República.

En materia de servicios de comunicación audiovisual, dicho interés general es tutelado por el Estado mediante limitaciones a la titularidad de dichos servicios, que evitan la concentración excesiva de poder en manos privadas de los mismos, previniendo la formación de oligopolios y monopolios privados, así como también mediante la implementación de mecanismos efectivos que impidan la propiedad cruzada de los servicios de comunicación audiovisual, asegurando la pluralidad de ideas y fortaleciendo la libertad de expresión.

A efectos de lograr un sistema equilibrado entre las empresas que conforman los diferentes eslabones de la cadena productiva del sector y de forma de evitar la concentración del poder de dirigir y/o sesgar el acceso a la información, promover la formación ciudadana y garantizar la libre expresión de ideas, las personas físicas o jurídicas privadas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas físicas o jurídicas integrantes de las personas jurídicas involucradas.

Lo establecido en el inciso precedente es sin perjuicio de los acuerdos de comercialización que se puedan celebrar, ofrecidos en igualdad de condiciones a todos los interesados.

Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, total o parcial, simultáneamente, de una licencia para prestar servicios de televisión para abonados satelital de alcance nacional y de autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta, así como tampoco de otras licencias para prestar servicios de televisión para abonados".

Artículo 2º.- Modifíquese el inciso 5 del artículo 117 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"El precio máximo a pagar por todo concepto, por parte de los titulares de servicio de televisión para abonados, por cada señal que deban transportar será:

a) Titulares de servicios de televisión para abonados con cantidad de hogares en el área de servicio autorizada entre 0 y 3000: 1000 UI/mes.

b) Titulares de servicios de televisión para abonados con cantidad de hogares en el área de servicio autorizada mayor de 3000 y menor o igual a 6000: 2000 UI/mes.

c) Titulares de servicios de televisión para abonados con cantidad de hogares en el área de servicio autorizada mayor a 6000: 3000 UI/mes.

El titular de la señal de radiodifusión de televisión abierta deberá, a su cargo, entregar la misma en las instalaciones del proveedor de servicios de televisión para abonados correspondiente.

La cantidad de hogares se determinará conforme a los datos del último censo de población del Instituto Nacional de Estadística".

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 139 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, por el siguiente:

"ARTÍCULO 139.- Los servidos de comunicación audiovisual podrán emitir un máximo de 15 (quince) minutos de mensajes publicitarios por cada hora de transmisión, por cada señal, cuando se trate de servicios de radiodifusión de televisión y quince minutos cuando se trate de servicios de radiodifusión de radio.

En ningún caso los tiempos mencionados 'ut supra' serán acumulables.

En el cálculo del tiempo máximo previsto, se deberá incluir el tiempo de un mensaje publicitario emitido en la modalidad de publicidad no tradicional, cuando la duración del mensaje supere los quince segundos.

No se computarán dentro del tiempo publicitario expresado:

A) La autopromoción ni los comunicados oficiales o campañas de bien público.

B) La publicidad que se emita utilizando el sistema de sobreimpresión sin sonido sobre imagen emitida.

C) La publicidad estática en la transmisión de eventos públicos ni el emplazamiento de productos.

Los mensajes publicitarios sobreimpresos en la televisión (textos inscriptos sobre figuras) no deben ocupar más de un dieciseisavo de la pantalla ni exceder de las ocho menciones de diez segundos cada una, por hora, no acumulables. La medición de los quince minutos de espacio y tiempo destinado para publicidad de los servicios de comunicación audiovisual, referidos en el inciso 1, se realizará de acuerdo a los criterios expuestos a continuación, siguiendo el objetivo de promoción del desarrollo local de los medios de radiodifusión:

A) Para operadores de servicios de radiodifusión del departamento de Montevideo, los minutos de publicidad se computarán en el 100% (cien por ciento) de duración.

B) Para operadores de servicios de radiodifusión de las capitales del interior del país, los minutos totales de publicidad se computarán de la siguiente manera:

a) 90% (noventa por ciento) de los minutos dedicados a la publicidad no local;

b) 70% (setenta por ciento) de los minutos dedicados a publicidad local;

c) 50% (cincuenta por ciento) de los minutos dedicados a la publicidad de información ampliatoria.

C) Para operadores de radiodifusión del resto de las localidades del interior del país, los minutos de publicidad se computarán de la siguiente manera:

a) 80% (ochenta por ciento) de los minutos dedicados a la publicidad no local;

b) 60% (sesenta por ciento) de los minutos dedicados a publicidad local;

c) 50% (cincuenta por ciento) de los minutos dedicados a la publicidad de información ampliatoria.

A los efectos de este artículo se entiende por publicidad local toda publicidad que está referida a la promoción de productos, eventos o lugares con influencia en la localidad donde el medio de radiodifusión tenga autorización de emisión y por publicidad de información ampliatoria a toda publicidad que siendo local, transmite además información ampliatoria sobre el tema del programa en el que está inserto, por tener estrecha vinculación con la temática del mismo".

Montevideo, 7 de mayo de 2018

JORGE VÁZQUEZ
EDUARDO BONOMI
ARIEL BERGAMINO
DANILO ASTORI
JORGE MENÉNDEZ
MARÍA JULIA MUÑOZ
VÍCTOR ROSSI
CAROLINA COSSE
ERNESTO MURRO
JORGE QUIAN
ALBERTO CASTELAR
LILIAM KECHICHIAN
ENEIDA DE LEÓN
MARINA ARISMENDI

=

COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

ANEXO I AL
REPARTIDO Nº 939
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 3061 DE 2018

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Se establecen modificaciones a la Ley N° 19.307

I n f o r m e s

Í N D I C E

	Página
Informe en minoría Frente Amplio	1
Proyecto de ley	3
Informe en minoría Partido Colorado - Partido Nacional	7
Proyecto de resolución	14

COMISIÓN DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

El presente proyecto pretende corregir aspectos de la Ley Nº 19.307, de 29 de diciembre de 2014, con el fin de contemplar algunas de las declaraciones de inconstitucionalidad que a su respecto ha efectuado la Suprema Corte de Justicia.

Es nuestra intención mantener los fundamentos de la ley que estamos considerando, consistentes en el más irrestricto respeto a la libertad de expresión, garantizando el derecho al acceso a la información de diversas fuentes y a la vez proteger los derechos de los consumidores de servicios de comunicación audiovisual, fomentando la industria nacional audiovisual.

Para ello en primer lugar se propone una redacción alternativa al artículo 56 de dicha ley.

El referido artículo señala que es de interés general garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual.

Dicho interés general es tutelado por el Estado mediante limitaciones a la titularidad de dichos servicios para evitar la concentración excesiva de poder en manos privados de los mismos, previniendo la formación de oligopolios y monopolios privados e impedir la propiedad cruzada de dichos servicios, asegurando la pluralidad de ideas y fortaleciendo la libertad de expresión.

Las personas físicas o jurídicas privadas que presten servicios de comunicación audiovisual reguladas por la Ley N° 19.307 no podrán a su vez prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos.

El artículo 2º refiere al artículo 117 del proyecto original y, en lo que tiene que ver con el deber de transportar las señales de televisión abierta por parte del operador de televisión para abonados de la misma zona, la declaración de inconstitucionalidad alcanza a las empresas de televisión abierta que promovieron las acciones con relación a la gratuidad establecida en el inciso quinto del artículo referido.

Sin embargo no comprendió dicha resolución a los operadores de televisión para abonados gravados por la obligación de transportar.

Esta situación ha llevado a que el radiodifusor tiene el deber de entregar su señal y el titular de un servicio de comunicación audiovisual tiene el deber y el derecho de portar en su grilla la totalidad de las señales abiertas, pero el primero tiene el derecho de cobrar por la entrega de su señal y el segundo tiene, al mismo tiempo, el derecho a que le sea suministrado gratuitamente.

En definitiva, para resolver esta incongruencia, se propone un sistema de pago racional y proporcional, susceptible de aceptación por ambas partes. Se establece un mecanismo de precios máximos regulados por mes, para cada señal abierta que se deba transportar, a fin de solucionar la contradicción que se ha producido por la decisión de la Suprema Corte.

En el artículo 139, la modificación propuesta pretende resolver una situación de desigualdad entre Montevideo y el interior del país. La publicidad en los medios del interior tiene características distintas, por ejemplo: no hay prácticamente publicidad de marcas (bancos, refrescos, tarjetas de crédito, marcas globales, etcétera) sino de comercios de la propia ciudad (almacenes, carnicerías, etcétera) en general estas publicidades describen ofertas por lo que además suelen ser más largas. Si se limita la publicidad al igual que en Montevideo, muchos programas pasarán a ser inviables.

En el interior, la publicidad en algunos casos forma parte integral del programa o es considerada como información por el espectador (remates ganaderos, espacios con información fúnebre, etcétera) por lo que no se pueden aplicar las mismas reglas publicitarias que en Montevideo.

Se propone modificar la ley aplicando un factor de corrección que tiene en cuenta la descentralización y el contenido local de la publicidad.

Por lo expuesto aconsejamos al Plenario la aprobación del proyecto que se informa.

Sala de la Comisión, 4 de setiembre de 2019

CARLOS VARELA NESTIER
MIEMBRO INFORMANTE
JULIO BATTISTONI
WASHINGTON UMPIERRE

_____

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 56 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, por el siguiente:

"ARTÍCULO 56. (Incompatibilidades para la prestación de servicios de comunicación audiovisual).- Es de interés general garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual, entendiendo por tal, aquel que se expresa, entre otras manifestaciones, en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio, en la idónea administración de los recursos públicos y en la efectividad de los demás derechos reconocidos explícita o implícitamente por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por la República.

En materia de servicios de comunicación audiovisual, dicho interés general es tutelado por el Estado mediante limitaciones a la titularidad de dichos servicios, que evitan la concentración excesiva de poder en manos privadas de los mismos, previniendo la formación de oligopolios y monopolios privados, así como también mediante la implementación de mecanismos efectivos que impidan la propiedad cruzada de los servicios de comunicación audiovisual, asegurando la pluralidad de ideas y fortaleciendo la libertad de expresión.

A efectos de lograr un sistema equilibrado entre las empresas que conforman los diferentes eslabones de la cadena productiva del sector y de forma de evitar la concentración del poder de dirigir y/o sesgar el acceso a la información, promover la formación ciudadana y garantizar la libre expresión de ideas, las personas físicas o jurídicas privadas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas físicas o jurídicas integrantes de las personas jurídicas involucradas.

Lo establecido en el inciso precedente es sin perjuicio de los acuerdos de comercialización que se puedan celebrar, ofrecidos en igualdad de condiciones a todos los interesados.

Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, total o parcial, simultáneamente, de una licencia para prestar servicios de televisión para abonados satelital de alcance nacional y de autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta, así como tampoco de otras licencias para prestar servicios de televisión para abonados".

Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 117 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, por el siguiente:

"ARTÍCULO 117. (Deber de transportar).- Los servicios de televisión para abonados deberán incluir, dentro de su paquete básico, las señales de Televisión Nacional Uruguay (TNU).

Todos los servicios de televisión para abonados, con excepción de los satelitales de cobertura nacional, también deberán incluir dentro de su paquete básico, las señales de los servicios de radiodifusión de televisión abierta, comerciales, públicas o comunitarias, cuya área de cobertura sea similar a su área de prestación de servicio, en los formatos que su tecnología lo permita, de acuerdo con la Reglamentación correspondiente.

Todos los servicios de televisión para abonados también deberán incluir, dentro de su paquete básico, hasta tres señales nacionales de televisión. Estas señales se seleccionarán cada cinco años mediante concurso público y transparente, que incluirá una audiencia pública de presentación de las propuestas, del que podrán participar señales nacionales, que no tengan vinculación con otros servicios de televisión abierta y que tengan al menos un 80% (ochenta por ciento) de contenidos de producción nacional.

El concurso para seleccionar las señales comerciales valorará las propuestas en base a los siguientes criterios:

A) Que contribuyan al desarrollo de la producción uruguaya de contenidos audiovisuales, su difusión y promoción a nivel nacional e internacional.

B) Que tiendan al fortalecimiento de la producción cultural local a través de espacios destinados a estimular y difundir programas producidos en distintos puntos del país, ya sea de producción propia o independiente.

C) Que incluyan la participación de productores independientes y empresas nacionales de la industria audiovisual en la cadena de producción y difusión.

D) Que ofrezcan la mayor cantidad de empleos directos y de calidad.

E) Que aporten una mayor diversidad a la oferta de señales de televisión.

F) Los antecedentes en materia audiovisual de los responsables del proyecto.

El precio máximo a pagar por todo concepto, por parte de los titulares de servicio de televisión para abonados, por cada señal que deban transportar será:

A) Titulares de servicios de televisión para abonados con cantidad de hogares en el área de servicio autorizada entre 0 y 3000: 1000 UI/mes.

B) Titulares de servicios de televisión para abonados con cantidad de hogares en el área de servicio autorizada mayor de 3000 y menor o igual a 6000: 2000 UI/mes.

C) Titulares de servicios de televisión para abonados con cantidad de hogares en el área de servicio autorizada mayor a 6000: 3000 UI/mes.

El titular de la señal de radiodifusión de televisión abierta deberá, a su cargo, entregar la misma en las instalaciones del proveedor de servicios de televisión para abonados correspondiente.

La cantidad de hogares se determinará conforme a los datos del último censo de población del Instituto Nacional de Estadística.

Todas las señales que se transporten en aplicación del presente artículo deberán ser presentadas en lugares adecuados de la grilla, de acuerdo a la reglamentación correspondiente".

Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 139 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, por el siguiente:

"ARTÍCULO 139. (Tiempo y espacio destinado a publicidad).- Los servicios de comunicación audiovisual podrán emitir un máximo de quince minutos de mensajes publicitarios por cada hora de transmisión, por cada señal, cuando se trate de servicios de radiodifusión de televisión y quince minutos cuando se trate de servicios de radiodifusión de radio.

En ningún caso los tiempos mencionados 'ut supra' serán acumulables.

En el cálculo del tiempo máximo previsto, se deberá incluir el tiempo de un mensaje publicitario emitido en la modalidad de publicidad no tradicional, cuando la duración del mensaje supere los quince segundos.

No se computarán dentro del tiempo publicitario expresado:

A) La autopromoción ni los comunicados oficiales o campañas de bien público.

B) La publicidad que se emita utilizando el sistema de sobreimpresión sin sonido sobre imagen emitida.

C) La publicidad estática en la transmisión de eventos públicos ni el emplazamiento de productos.

Los mensajes publicitarios sobreimpresos en la televisión (textos inscriptos sobre figuras) no deben ocupar más de un dieciseisavo de la pantalla ni exceder de las ocho menciones de diez segundos cada una, por hora, no acumulables. La medición de los quince minutos de espacio y tiempo destinado para publicidad de los servicios de comunicación audiovisual, referidos en el inciso primero se realizará de acuerdo a los criterios expuestos a continuación, siguiendo el objetivo de promoción del desarrollo local de los medios de radiodifusión:

A) Para operadores de servicios de radiodifusión del departamento de Montevideo, los minutos de publicidad se computarán en el 100% (cien por ciento) de duración.

B) Para operadores de servicios de radiodifusión de las capitales del interior del país, los minutos totales de publicidad se computarán de la siguiente manera:

1) 90% (noventa por ciento) de los minutos dedicados a la publicidad no local;

2) 70% (setenta por ciento) de los minutos dedicados a publicidad local;

3) 50% (cincuenta por ciento) de los minutos dedicados a la publicidad de información ampliatoria.

C) Para operadores de radiodifusión del resto de las localidades del interior del país, los minutos de publicidad se computarán de la siguiente manera:

1) 80% (ochenta por ciento) de los minutos dedicados a la publicidad no local;
2) 60% (sesenta por ciento) de los minutos dedicados a publicidad local;
3) 50% (cincuenta por ciento) de los minutos dedicados a la publicidad de información ampliatoria.

A los efectos de este artículo se entiende por publicidad local toda publicidad que esté referida a la promoción de productos, eventos o lugares con influencia en la localidad donde el medio de radiodifusión tenga autorización de emisión y por publicidad de información ampliatoria a toda publicidad que siendo local, transmite además información ampliatoria sobre el tema del programa en el que está inserto, por tener estrecha vinculación con la temática del mismo".

Artículo 4°.- Sustitúyese el artículo 187 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, por el siguiente:

"ARTÍCULO 187. (Costo de licencia).- Todos los titulares de servicios de comunicación audiovisual para abonados satelitales o que utilicen medios físicos para su distribución, deberán abonar anualmente el costo de renovación de su licencia. Este se calculará en base a 2,10 UI (dos con diez unidades indexadas) por abonado por mes.

Cuando se trate de abonados prepago, para los meses incompletos, el cálculo del costo de licencia podrá realizarse por día, teniendo en cuenta los días del mes en que el servicio haya estado activo (contratados), en base a 0.10 UI (diez centésimos de unidad indexada) por abonado por día.

Lo recaudado por este concepto se destinará al "Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual" establecido por el artículo 62 de la presente ley".

Sala de la Comisión, 4 de setiembre de 2019

CARLOS VARELA NESTIER
MIEMBRO INFORMANTE
JULIO BATTISTONI
WASHINGTON UMPIERRE

COMISIÓN DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA

———

INFORME EN MINORÍA

———

Señores Representantes:

Con fecha 7 de mayo del 2018 el Poder Ejecutivo envió a este Legislativo un proyecto de ley modificativo de la Ley Nº 19.307 sobre servicios de comunicación audiovisual. Específicamente el proyecto propone modificaciones a los artículos 56, inciso quinto del artículo 117 y artículo 139 de la norma vigente.

La Ley Nº 19.307 y este proyecto modificativo son textos restrictivos de libertades, entendiendo la libertad en el sentido más puro de la palabra y basándonos en el concepto que cada vez que hay regulación, existe de una u otra manera limitación de libertad; es inoportuna, desbalanceada, antigua e inconstitucional.

En su oportunidad advertimos acerca de groseras inconstitucionalidades que padecía la ley, muchas de las cuales han sido declaradas por la Suprema Corte de Justicia.

El proyecto en cuestión, precisamente, encuentra su antecedente en las sentencias de inconstitucionalidad dictadas contras varias de las normas contenidas en la Ley Nº 19.307. En efecto varias empresas de televisión abierta y televisión para abonados obtuvieron la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia.

El Poder Ejecutivo, pretende enmendar o acomodar la norma ya dictada y que hace pocos días fue reglamentada.

El artículo 56 de la Ley Nº 19.307 establece: *"Incompatibilidades para la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas, físicas o jurídicas, integrantes de las personas jurídicas involucradas. Lo establecido en el inciso precedente es sin perjuicio de los acuerdos de comercialización que se puedan celebrar, ofrecidos en igualdad de condiciones a todos los interesados. Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, total o parcial, simultáneamente, de una licencia para prestar servicios de televisión para abonados satelital de alcance nacional y de autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta, así como tampoco de otras licencias para prestar servicios de televisión para abonados".*

La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional de este artículo en base a tres razones:

a) Porque lesiona los principios de igualdad y de libertad de los artículos 7º y 8º de la Constitución.

b) Porque no se evidencia cual habría sido la justificación para darle a esta materia un tratamiento más riguroso, apartándose de las reglas generales consagradas en el mismo Capítulo de la ley con miras a evitar la concentración empresarial.

c) Porque también infringe el artículo 36 de la Constitución.

La nueva redacción que se le da en el proyecto remitido es el siguiente: *"Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 56 de la Ley Nro. 19.307 del 29 de diciembre del 2014 por el siguiente: artículo 56 (incompatibilidades para la prestación de servicios de comunicación audiovisual). Es de interés general garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual, entendiendo por tal, aquel que se expresa, entre otras manifestaciones, en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio, en la idónea administración de los recursos públicos y en la efectividad de los demás derechos reconocidos explícita o implícitamente por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. En materia de servicios de comunicación audiovisual dicho interés general es tutelado por el Estado mediante limitaciones a la titularidad de dichos servicios, que evitan la concentración excesiva de poder en manos privadas de los mismos, previniendo la formación de oligopolios y monopolios privados, así como también mediante la implementación de mecanismos efectivos que impidan la propiedad cruzada de los servicios de comunicación audiovisual, asegurando la pluralidad de ideas y fortaleciendo la libertad de expresión. A efectos de lograr un sistema equilibrado entre las empresas que conforman los diferentes eslabones de la cadena productiva del sector y de forma de evitar la concentración del poder de dirigir/sesgar el acceso a la información, promover la formación ciudadana y garantizar la libre expresión de ideas, las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por esta ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas físicas o jurídicas integrantes de las personas jurídicas involucradas. Lo establecido en el inciso precedente es sin perjuicio de los acuerdos de comerciales que se puedan celebrar, ofrecidos en igualdad de condiciones a todos los interesados. Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, total o parcial simultáneamente de una licencia para presentar servicios de televisión para abonados satelital de alcance nacional y de autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta, así como tampoco de otras licencias para prestar servicios para abonados".*

Es decir que a pesar de la contundencia de las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia: la nueva propuesta de redacción al artículo 56, no cambia para nada el precepto, sino que reitera la misma fórmula, mantiene la "incompatibilidad" consagrada por la norma. Pero lo que sí agrega en esta oportunidad es una suerte de fundamentación, es decir incorpora a los efectos de "sanear" la norma la mención al "interés general". En suma se pretende sortear la inconstitucionalidad ya declarada y dispuesta por la Corte haciendo una mención genérica al "interés general" que se propone resguardar la norma.

Como lo han señalado juristas especialistas en técnica legislativa, el redactor del proyecto enviado parece creer que basta con señalar que se "… funda en razones de interés general…" para que ello suceda, lo que supone desconocer que el concepto de "interés general" tiene un sentido propio y sustantivo, que está más allá del nivel meramente declarativo.

Por consiguiente, continuará siendo potestad de la Suprema Corte de Justicia analizar si las razones que ahora se le quieren adosar al precepto a modo de fundamentación ex post, constituyen o no verdaderos fundamentos de interés general que justifiquen la restricción de derechos fundamentales.

La Corte consideró que la disposición vulnera la Constitución porque en el caso no existen razones de interés general para limitar los derechos comprometidos, circunstancia que por sí sola vulnera los principios de igualdad y libertad consagrados en los artículos 7º y 8º de la Constitución.

En definitiva y tal y como ya hemos manifestado en diversas oportunidades lo que corresponde al Poder Legislativo, es atender a los criterios expuestos por los Ministros que establecieron que la prohibición dispuesta en dicho artículo vulneraba derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, y disponer la derogación del mismo, en lugar de insistir con dicha prohibición a través de una nueva ley.

Para comprender, además, que en materia de banda ancha fija el operador estatal (ANTEL) tiene el 99% del mercado (datos emitidos por URSEC, Informe de Mercado de Telecomunicaciones Diciembre 2017). La Administración no ha permitido que otros actores puedan ofrecer dicho servicio a la ciudadanía, a pesar de las múltiples solicitudes presentadas por diversas empresas de televisión para abonados desde el año 2008. Y para subrayar este criterio que venía esgrimiendo el Gobierno, en el año 2013 el Poder Ejecutivo envió y fue aprobada con los votos del oficialismo la Ley Nº 19.307 (a la que ahora se le quieren realizar modificaciones) que estableció la prohibición para los servicios de comunicación audiovisual, de prestar servicios de telefonía y transmisión de datos.

Entonces, el resultado de esa política en la que ahora se insiste y pretende plasmarse en este nuevo proyecto –invocando para ello un supuesto interés general- ha sido un mercado altísimamente concentrado, en el cual el ciudadano no tiene otra alternativa que aceptar el precio y la calidad del servicio ofrecido por ANTEL.

También hay que tener presente que la prestación del servicio de transmisión de datos fijos demanda altísimas inversiones en redes de transmisión, por lo que es muy improbable que un sujeto ajeno al sector realice tales inversiones en un mercado que ya está prácticamente monopolizado por la empresa estatal. En ese marco, las únicas empresas que razonablemente están en condiciones de ofrecer también dichos servicios al ciudadano son las empresas de televisión para abonados, que ya cuentan con la infraestructura necesaria. Y es por ello que se consagró la incompatibilidad o lo que es lo mismo la prohibición de hacerlo.

Entonces, consideramos que el único argumento que podría invocarse para justificación a la limitación de derechos fundamentales previsto en la Carta, es aquel que demostrase que el sistema actual de prestación de servicio de transmisión de datos, con un altísimo grado de concentración en la empresa estatal (99% del mercado), de alguna forma estuviera favoreciendo el interés general, pero ello ni siquiera está mencionado en el proyecto. Se afirma también en el proyecto enviado que se busca lograr "un sistema equilibrado", lo cual no es cierto ya que se mantienen lo que tenemos actualmente es decir, un sistema de servicios de transmisión de datos fijos altísimamente concentrado en una sola empresa, la estatal.

Se afirma que se está impidiendo la formación de monopolios u oligopolios, cuando el único monopolio en el mercado de la transmisión de datos es aquel que ejerce ANTEL. Se afirma que se busca evitar la concentración de poder de dirigir y o sesgar el acceso a la información, promover la formación ciudadana y garantizar la libertad de expresión y se hace lo contrario con la proyectada disposición. En efecto, el servicio de transmisión de datos ofrece al usuario la posibilidad de acceder a la red de internet y recurrir a los contenidos de su preferencia, pero no debiera tener ninguna incidencia sobre las

decisiones que el usuario toma y sobre los contenidos a los que accede, por lo que los argumentos sobre la posibilidad de "dirigir o sesgar información" o sobre aquellos relacionados con la libertad de expresión no son de recibo. De lo contrario, deberíamos asumir que ANTEL tiene la facultad, mediante su servicio de transmisión de datos, de dirigir y sesgar la información, afectando la libertad de expresión.

El segundo artículo del proyecto del Poder Ejecutivo, modifica el inciso quinto del artículo 117 de la Ley Nº 19.307.

En lo que refiere al artículo 117, la SCJ por sentencia Nº 427, declaró inconstitucional el inciso quinto, que establecía lo siguiente: *"… Esta obligación (de incluir la señal de televisión abierta en las operadoras de cable no satelitales) no generará derechos de compensación de ningún tipo para los titulares de los servicios de radiodifusión de televisión abierta ni para los titulares de las señales nacionales de televisión. El costo de poner a disposición la señal para ser incluida en el servicio para abonados será de cargo del titular de la señal..."*

La Corte sostuvo que establecer el deber de los servicios de televisión para abonados no satelitales de incluir en su paquete básico las señales de los servicios de radiodifusión de televisión abierta, cuya área de cobertura sea similar al área de prestación del servicio, en forma gratuita, es inconstitucional. Concretamente, afirmó que se vulneran los derechos constitucionales de propiedad y de explotación en exclusiva de obras protegidas por la legislación sobre derechos de autor (artículos 7º, 32 y 33 de la Constitución).

Es decir que el inciso quinto del artículo 117 que hoy se propone modificar fue declarado inconstitucional por disponer la no existencia de un derecho a compensación para los titulares de los servicios de radiodifusión de televisión abierta por la modalidad "licencia no voluntaria", concretamente se sostuvo que violenta el "…el derecho de propiedad de que la actora goza respecto del conjunto de su programación…", y continuo textual lo que escribió la Corte "…Le asiste razón a la impugnante. . . De conformidad con lo dispuesto por el literal D) del artículo 7º de la Ley Nº 9.739 en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 17.616, la actora, en tanto "organismo de radiodifusión" es titular de derechos de autor sobre "sus emisiones". Estos derechos son los propios del dominio de las obras de su inteligencia (propiedad intelectual). A efectos de una correcta interpretación de su alcance, es menester recurrir a la normativa infra constitucional dictada en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 33 de la Carta. El derecho de propiedad, en el caso, según lo dispone el literal C) del artículo 39 de la Ley Nº 9.739, en la redacción dada por el artículo 12 de la Ley Nº 17.616, comprende: "… el derecho exclusivo de autorizar: la retransmisión de sus emisiones, directa o en diferido, por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse; la puesta a disposición del público de sus emisiones, ya sea por hilo o medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. La fijación en cualquier soporte, sonoro o audiovisual, de sus emisiones, incluso la de alguna imagen aislada difundida en la emisión o transmisión; la reproducción de sus emisiones. Asimismo los organismos de radiodifusión tendrán derecho a obtener una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando se efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada…". "… A soluciones de contenido similar conducen las regulaciones contenidas en normas de fuente internacional (artículo 14.3 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio incorporado a nuestro sistema

normativo por Ley Nº 16.671). Estas normas resultan ser las manifestaciones propias del derecho de propiedad mismo y, en tanto tales, servirán como pauta para interpretar el alcance del artículo 32 de la Constitución en referencia a las manifestaciones del derecho de propiedad sobre este tipo de bienes. La norma impugnada vulnera el derecho de propiedad, al no prever una justa y previa compensación por la privación del derecho exclusivo por parte de la actora respecto de sus emisiones. La norma impone la transferencia (transporte) de la totalidad de señal de la actora a favor de otros sujetos, sin prever compensación alguna para la promotora. Tal imposición resulta contraria al artículo 32 de la Constitución en cuanto dispone que la justa y previa compensación por la privación que impone a la actora de su derecho de propiedad…".

El artículo 32 de la Constitución, establece: "La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación".

El nuevo proyecto modifica en parte lo expresado en el artículo 117 de la Ley Nº 19.307. *"Artículo 2º.- Modifíquese el inciso 5 del artículo 117 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, el que quedará redactado de la siguiente manera: "…El precio máximo a pagar por todo concepto, por parte de los titulares de servicio de televisión para abonados, por cada señal que deban transportar será: a) Titulares de servicios de televisión para abonados con cantidad de hogares en el área de servicio autorizada entre 0 y 3000: 1000 UI/mes. b) Titulares de servicios de televisión para abonados con cantidad de hogares en el área de servicio autorizada mayor de 3000 y menor o igual a 6000: 2000 UI/mes. c) Titulares de servicios de televisión para abonados con cantidad de hogares en el área de servicio autorizada mayor a 6000: 3000 UI/mes. El titular de la señal de radiodifusión de televisión abierta deberá, a su cargo, entregar la misma en las instalaciones del proveedor de servicios de televisión para abonados correspondiente. La cantidad de hogares se determinará conforme a los datos del último censo de población del Instituto Nacional de Estadística…".*

Como se ve, el nuevo proyecto propone establecer precios que se debería abonar, por la inclusión de las señales de televisión abierta en las grillas de programación de los operadores de televisión por abonados que se encuentran en su área de cobertura, según los parámetros fijados en la Ley Nº 19.307. Consideramos que la nueva propuesta de redacción enviada por el Poder Ejecutivo no supera los vicios de inconstitucionalidad relevados por la Corte, de acuerdo con los presupuestos establecidos en el artículo 32 de la Constitución.

Al mismo tiempo, podría ser generadora de responsabilidad por acto legislativo, en virtud de los perjuicios económicos que causa a determinados sujetos.

Por último, el artículo 3º del proyecto en cuestión sustituye al artículo 139 de la Ley Nº 19.307.

Dicho artículo consagra: *"PUBLICIDAD Artículo 139 (Tiempo y espacio destinado a publicidad).- Los servicios de comunicación audiovisual podrán emitir un máximo de quince minutos de mensajes publicitarios por cada hora de transmisión, por cada señal, cuando se trate de servicios de radiodifusión de televisión y quince minutos cuando se trate de servicios de radiodifusión de radio. En ningún caso estos tiempos serán acumulables. Se deberá incluir en el cálculo del tiempo máximo previsto el tiempo de un mensaje publicitario emitido en la modalidad de publicidad no tradicional, cuando la*

duración del mensaje supere los quince segundos. No se computarán dentro del tiempo publicitario expresado: A) La autopromoción ni los comunicados oficiales o campañas de bien público. B) La publicidad que se emita utilizando el sistema de sobreimpresión sin sonido sobre imagen emitida. C) La publicidad estática en la transmisión de eventos públicos ni el emplazamiento de productos. Los mensajes publicitarios sobreimpresos en la televisión (textos inscriptos sobre figuras) no deben ocupar más de un dieciseisavo de la pantalla ni exceder de las ocho menciones de diez segundos cada una, por hora, no acumulables…".

El nuevo proyecto que se propone es el siguiente: *Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 139 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, por el siguiente: "ARTÍCULO 139.- Los servidos de comunicación audiovisual podrán emitir un máximo de 15 (quince) minutos de mensajes publicitarios por cada hora de transmisión, por cada señal, cuando se trate de servicios de radiodifusión de televisión y quince minutos cuando se trate de servicios de radiodifusión de radio. En ningún caso los tiempos mencionados 'ut supra' serán acumulables. En el cálculo del tiempo máximo previsto, se deberá incluir el tiempo de un mensaje publicitario emitido en la modalidad de publicidad no tradicional, cuando la duración del mensaje supere los quince segundos…".*

El nuevo proyecto busca flexibilizar la restricción a los tiempos de publicidad, con una previsión dirigida específicamente a los servicios de comunicación audiovisual del interior del país, distinguiendo dos categorías: operadores de servicios de radiodifusión de las capitales del Interior del país y operadores de radiodifusión del resto de las localidades del interior del país, mediante un cómputo diferencial, más beneficioso, de la publicidad emitida en dichos medios. La restricción a los tiempos de publicidad es injustificada y discriminatoria respecto de otros servicios de contenidos que compiten directamente con los servicios de televisión y radio comprendidos en la regulación.

Injustificada, porque hoy la población tiene acceso a múltiples ofertas de contenidos audiovisuales y sonoros, producto del avance de las nuevas tecnologías, por lo que tienen una enorme diversidad de medios para elegir los contenidos de su preferencia. Los servicios de televisión abierta y de radio deben competir con las señales internacionales, que se ofrecen a través de los sistemas por suscripción (más de 100 señales) y con una oferta infinita de contenidos que los usuarios pueden acceder a través de internet.

Discriminatoria, porque los únicos servicios que deben cumplir con la referida restricción son la televisión abierta y la radio, que se emite por "aire", no así la que se emite por internet u otras plataformas, lo que termina perjudicando a las empresas nacionales en favor de las internacionales.

Además, la restricción es altamente perjudicial para los servicios de radio y televisión en la medida que su único ingreso proviene justamente de la venta de servicios publicitarios. Con ese ingreso deben afrontar la producción de los contenidos que les exige la ley, abonar los Derechos de Propiedad Intelectual de los programas que integran a su programación, las retribuciones salariales de todos sus empleados y los servicios de todas las empresas tercerizadas que les prestan los servicios, por supuesto que todos los impuestos y cánones generales y sectoriales.

Por las razones expuestas es que proponemos al Cuerpo la aprobación del proyecto de resolución que se adjunta.

Sala de la Comisión, 4 de setiembre de 2019

LUIS A. ZIMINOV
MIEMBRO INFORMANTE
BETIANA BRITOS
CLAUDIO LAMÓNACA

- 14 -

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo único.- Recházase el proyecto de ley por el que se modifica la Ley Nº 19.307, de 29 de diciembre de 2014.

Sala de la Comisión, 4 de setiembre de 2019

LUIS A. ZIMINOV
MIEMBRO INFORMANTE
BETIANA BRITOS
CLAUDIO LAMÓNACA

A P É N D I C E

Disposiciones referidas

LEY Nº 19.307, DE 29 DE DICIEMBRE DE 2014.	Artículo referente
TÍTULO V DIVERSIDAD Y PLURALISMO CAPÍTULO I GARANTÍAS Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD Y EL PLURALISMO Artículo 56. (Incompatibilidades para la prestación de servicios de comunicación audiovisual). Las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas, físicas o jurídicas, integrantes de las personas jurídicas involucradas. Lo establecido en el inciso precedente es sin perjuicio de los acuerdos de comercialización que se puedan celebrar, ofrecidos en igualdad de condiciones a todos los interesados. Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, total o parcial, simultáneamente, de una licencia para prestar servicios de televisión para abonados satelital de alcance nacional y de autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta, así como tampoco de otras licencias para prestar servicios de televisión para abonados.	1º
TÍTULO VII DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMERCIAL CAPÍTULO II REGULACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Artículo 117.- (Deber de transportar).- Los servicios de televisión para abonados deberán incluir, dentro de su paquete básico, las señales de Televisión Nacional Uruguay (TNU). Los servicios de televisión para abonados no satelitales también deberán incluir, dentro de su paquete básico, las señales de los servicios de radiodifusión de televisión abierta, comerciales, públicas o comunitarias, cuya área de cobertura sea similar a su área de prestación de servicio, en los formatos que su tecnología lo permita, de acuerdo con la Reglamentación correspondiente.	2º

Todos los servicios de televisión para abonados también deberán incluir, dentro de su paquete básico, hasta tres señales nacionales de televisión. Estas señales se seleccionarán cada cinco años mediante concurso público y transparente, que incluirá una audiencia pública de presentación de las propuestas, del que podrán participar señales nacionales, que no tengan vinculación con otros servicios de televisión abierta y que tengan al menos un 80% (ochenta por ciento) de contenidos de producción nacional. El concurso para seleccionar las señales comerciales valorará las propuestas en base a los siguientes criterios: A) Que contribuyan al desarrollo de la producción uruguaya de contenidos audiovisuales, su difusión y promoción a nivel nacional e internacional. B) Que tiendan al fortalecimiento de la producción cultural local a través de espacios destinados a estimular y difundir programas producidos en distintos puntos del país, ya sea de producción propia o independiente. C) Que incluyan la participación de productores independientes y empresas nacionales de la industria audiovisual en la cadena de producción y difusión. D) Que ofrezcan la mayor cantidad de empleos directos y de calidad. E) Que aporte una mayor diversidad a la oferta de señales de televisión. F) Los antecedentes en materia audiovisual de los responsables del proyecto. **Esta obligación no generará derechos de compensación de ningún tipo para los titulares de los servicios de radiodifusión de televisión abierta ni para los titulares de las señales nacionales de televisión. El costo de poner a disposición la señal para ser incluida en el servicio para abonados será de cargo del titular de la señal.** Todas las señales que se transporten en aplicación del presente artículo deberán ser presentadas en lugares adecuados de la grilla, de acuerdo a la Reglamentación correspondiente.	

TÍTULO VII DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMERCIAL CAPÍTULO VI PUBLICIDAD Artículo 139.- (Tiempo y espacio destinado a publicidad).- Los servicios de comunicación audiovisual podrán emitir un máximo de quince minutos de mensajes publicitarios por cada hora de transmisión, por cada señal, cuando se trate de servicios de radiodifusión de televisión y quince minutos cuando se trate de servicios de radiodifusión de radio. En ningún caso estos tiempos serán acumulables. Se deberá incluir en el cálculo del tiempo máximo previsto el tiempo de un mensaje publicitario emitido en la modalidad de publicidad no tradicional, cuando la duración del mensaje supere los quince segundos. No se computarán dentro del tiempo publicitario expresado: A) La autopromoción ni los comunicados oficiales o campañas de bien público. B) La publicidad que se emita utilizando el sistema de sobreimpresión sin sonido sobre imagen emitida. C) La publicidad estática en la transmisión de eventos públicos ni el emplazamiento de productos. Los mensajes publicitarios sobreimpresos en la televisión (textos inscriptos sobre figuras) no deben ocupar más de un dieciseisavo de la pantalla ni exceder de las ocho menciones de diez segundos cada una, por hora, no acumulables.	3º

=

COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

REPARTIDO Nº 1223
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 4156 DE 2019

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Modificación de la Ley N° 19.307

- 1 -

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Sustitúyese el artículo 198 de la Ley Nº 19.307, de 29 de diciembre de 2014, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 198. (Régimen Transitorio del Consejo de Comunicación Audiovisual).- A partir de la vigencia de la presente ley, y hasta tanto se constituya el Consejo de Comunicación Audiovisual, las competencias del órgano desconcentrado estarán a cargo de los órganos que actualmente las ostentan, con excepción de las que se crean por la presente ley, las que serán ejercidas por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones".

Este artículo entrará en vigencia a partir del 1º de diciembre de 2019.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 11 de setiembre de 2019.

PATRICIA AYALA
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

COMISIÓN DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

REPARTIDO Nº 1221
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 4157 DE 2019

EMPRESAS LÁCTEAS

Extensión del período de gracia previsto en el inciso primero del artículo 1° de la Ley N° 19.397

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 2 de setiembre de 2019

Señora Presidente de la Asamblea General
Lucía Topolansky:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a consideración parlamentaria el siguiente proyecto de ley mediante el cual procura continuar facilitando el acceso al financiamiento otorgado por instituciones de intermediación financiera locales dada las dificultades que continua enfrentando el sector lácteo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el marco de la Ley Nº 19.397 de fecha 27 de mayo de 2016, que contempla mecanismos para facilitar el acceso al financiamiento, se autorizó a Rentas Generales a hacerse cargo de los intereses generados de los créditos otorgados por instituciones de intermediación financiera locales, a empresas del sector lácteo durante la vigencia de un período de gracia no mayor a tres años.

Dada la difícil situación que enfrenta el sector lácteo y la relevancia que tiene la cadena láctea en su conjunto -desde el punto de vista social y económico- productivo-, se eleva este proyecto de ley que extiende a un máximo de cuatro años el período de gracia previsto en el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 19.397 de fecha 27 de mayo de 2016.

Saludo a la señora Presidente con la mayor consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
DANILO ASTORI
ENZO BENECH

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Extiéndase el período de gracia previsto en el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 19.397 de fecha 27 de mayo de 2016, hasta un máximo de cuatro años a contar de la fecha de otorgamiento del crédito o préstamo original.

Montevideo, 2 de setiembre de 2019

DANILO ASTORI
ENZO BENECH

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Extiéndese el período de gracia previsto en el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 19.397, de fecha 27 de mayo de 2016 hasta un máximo de cuatro años a contar de la fecha de otorgamiento del crédito o préstamo original.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 11 de setiembre de 2019.

PATRICIA AYALA
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

=

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

REPARTIDO Nº 1220
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 4151 DE 2019

TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS BASINEY Y ANIKTO S.A

Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, por un plazo de 180 días, el subsidio por desempleo

---

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 9 de setiembre de 2019

Señora Presidente de la Asamblea General
Lucía Topolansky:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese alto Cuerpo a fin de remitir, para su consideración, un proyecto de ley referente a una extensión del subsidio por desempleo para los trabajadores de las empresas Besiney S.A. y Anikto S.A., que giran en el ramo de la industria automotriz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La empresa Lifan Motors Uruguay, cuya planta industrial se encuentra emplazada en el departamento de San José, ha venido desarrollando su actividad con dos razones sociales: Anikto S.A., que constituye la fábrica de motores, y Besiney S.A., a la que corresponde el área de ensamblado de vehículos.

La empresa ha puesto de manifiesto, en distintas oportunidades, las dificultades que ha experimentado en sus posibilidades de exportar vehículos a Brasil -negocio al que ha estado orientada su producción-, a raíz de la compleja situación que atraviesa dicho mercado.

No obstante, también expresó ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes -donde compareciera conjuntamente con la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA)- la voluntad de permanecer en el país, aguardando la evolución de los mercados de Brasil y Argentina y explorando la posibilidad de exportar vehículos a este último destino. En tal sentido, manifestó que, en materia de ventas de autos cero kilómetro, Brasil ha mostrado un leve repunte de entre un 10 % y un 15 % en los primeros meses de 2019, si bien ello todavía no sería suficiente como para crear una corriente que justifique la puesta en marcha de la planta emplazada en nuestro país.

Entretanto Lifan Motors Uruguay, según manifestó en dicha oportunidad, se encuentra en procura de celebrar algún contrato con armadores de otras marcas a los que pueda interesar armar motores o vehículos en la planta, de modo de poder llegar a 2020 con todos los trabajadores y reiniciar la operativa. A tales efectos, ha planteado que se sancione un proyecto de ley que extienda el amparo al seguro de paro del personal que haya agotado su período de cobertura o esté próximo a hacerlo.

Por su parte, la UNTMRA, en dicha comparecencia conjunta, resaltó la calificación de la mano de obra con que cuenta Lifan Motors Uruguay y destacó la importancia de que

se generen las condiciones adecuadas para que la empresa siga operando, haciendo constar, a tales efectos, su interés en que se acceda a una extensión del seguro de paro.

A fin de propiciar el mantenimiento de las fuentes de trabajo generadas por la empresa referida, y teniendo en cuenta las perspectivas señaladas precedentemente, es que se entiende pertinente tramitar el presente proyecto de ley. Sobre el particular, ha de tenerse en cuenta que el Poder Ejecutivo ha venido concediendo las prórrogas de seguro de desempleo que puede otorgar en uso de las facultades previstas por el artículo 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley N° 18.399, de 24 de octubre de 2008, habiéndose terminado o estando próximo a agotarse el plazo máximo de cobertura que puede brindar al amparo de dicha normativa.

Saludan a la señora Presidente con la mayor consideración.

Montevideo, 9 de setiembre de 2019

TABARÉ VÁZQUEZ
ERNESTO MURRO
OLGA OTEGUI
DANILO ASTORI

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, por un plazo de hasta 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de las empresas Besiney S.A. y Anikto S.A., en los términos y condiciones que establezcan la o las consiguientes resoluciones de extensión.

Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorgue en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 6º y 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley N° 18.399 de 24 de octubre de 2008).

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio, en todos los casos.

Montevideo, 9 de setiembre de 2019

ERNESTO MURRO
OLGA OTEGUI
DANILO ASTORI

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, por un plazo de hasta 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de las empresas Besiney S.A. y Anikto S.A., en los términos y condiciones que establezcan la o las consiguientes resoluciones de extensión.

Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorgue en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 6º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180 de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley Nº 18.399 de 24 de octubre de 2008).

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio, en todos los casos.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 11 de setiembre de 2019.

PATRICIA AYALA
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

=

COMISIÓN DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

REPARTIDO Nº 1222
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 4155 DE 2019

CONVENIOS DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON EL PLAN NACIONAL DE SILOS

Se autoriza al Poder Ejecutivo a modificar sus condiciones

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 21 de agosto de 2019

Presidente de la Asamblea General
Señora Lucía Topolansky:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, el adjunto proyecto de ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la década de 1970, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decide llevar adelante la política de modificar el sistema de almacenaje en bolsas por granel. Para tal fin, se crea una comisión integrada por dicha Cartera y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a fin de proyectar la construcción de silos.

Se resolvió construir los mismos en lugares donde estaban establecidos productores organizados, como Cooperativas, Sociedades de Fomento Rural, etc.; a fin de entregar a ellos su administración.

Luego de transcurridas casi tres décadas desde el comienzo de la actuación del Plan Nacional de Silos (PNS), los objetivos esenciales estaban alcanzados, habiéndose generalizado la transformación de los procesos logísticos de la poscosecha y el comercio de granos, con una importante inversión privada en instalaciones de acondicionamiento y acopio.

Hasta el año 2002, el MGAP mantenía y reparaba los silos con el pago de un Canon por tonelada almacenada; es en ese escenario que surge la decisión política de transferir las plantas de silos del PNS-MGAP a las organizaciones que las gestionaban, con la condición de que éstos ingresaran en un proceso de integración de capital, con el destino prioritario de saldar deudas con el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). De ese modo se apuntaba simultáneamente a varios objetivos: i.- la mejora de la situación patrimonial de las organizaciones de productores (por el capital integrado y por la propia transferencia de los activos), y ii.- contribuir a la recuperación de activos del BROU, tanto por las deudas que mantenían las organizaciones de productores como la que mantenía el MGAP, originada en los préstamos concedidos para la construcción de las plantas.

El artículo 119 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, autoriza al MGAP a transferir directamente la titularidad de los silos, plantas de almacenaje, elevadores zonales, depósitos y equipos administrados por la Comisión Técnica Ejecutora del Plan Nacional de Silos a sus actuales tenedores legítimos con título habilitante. Para lo cual,

los tenedores se comprometían a realizar una capitalización en función de la capacidad nominal de los depósitos, en un plazo de hasta 10 años.

En su reglamentación (Decreto N° 29/003, de 23 de enero de 2003) establece que el monto de capitalización es U$S 50 por tonelada de capacidad de las plantas, con opción por el MGAP de reducir el monto hasta U$S 40.

La integración del capital se distribuirá en: hasta un 20% para atender la deuda del MGAP con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien abonó la deuda que mantenía el MGAP con el BROU por la construcción de los silos, al amparo del artículo 120 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006 y el 80% restante para abonar deudas de los tenedores con el BROU, el Estado y otros Bancos. De existir remanente sería de libre disposición.

Agregar solamente a lo mencionado ut-supra, que el artículo votado en la Ley de Presupuesto (artículo 119 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002) obtuvo un gran consenso y apoyo de los partidos políticos, sobre todo, porque se trataba de dejar en manos de las cooperativas el patrimonio construido con el aporte de la producción nacional de granos y también que, para el MGAP significaba dejar de tutelar todas las acciones sobre los acopios de las cooperativas, que lo obligaban a mantener un equipo de funcionarios especializados en mantenimiento de plantas de silos, ya que, como se dijo, los objetivos del PNS-MGAP estaban alcanzados y se daba por culminada esa etapa.

Al amparo de la normativa referida, el MGAP gravó con hipoteca a favor del BROU, las plantas de su propiedad como respaldo de créditos de los tenedores que ingresaban en la operativa referida.

A la fecha son pocas las plantas que no se transfirieron a sus tenedores legítimos, aunque han capitalizado un porcentaje importante del total. Existen cooperativas con endeudamiento que no pueden obtener una mejor calificación al momento de solicitar un préstamo en virtud de no ser propietarias, un escenario de comercio de granos con precios muy deprimidos, un fuerte aumento de la competencia en la captación de granos y aun así, un esfuerzo de las cooperativas por cancelar el convenio sin un resultado favorable en virtud del porcentaje de intereses a que están sujetas (tasa anual de 9,25% calculada sobre los saldos).

Corresponde destacar que desde la creación de este procedimiento, la intención era la transferencia de todas las plantas de silos del MGAP a las Cooperativas que las estaban explotando, con el único objetivo económico de parte del MGAP de que en el proceso de capitalización se pagara la deuda que mantenía con el BROU.

Para el MGAP, de no cancelar la totalidad de los convenios (los cuales vencieron -más de 10 años- y fueron prorrogados algunos en más de dos oportunidades) la devolución de las plantas que no se transfieran, acarrearía una serie de complicaciones: i.- renovar los contratos de explotación de las mismas y el Plan Nacional de Silos debería retomar funciones para los que ya no cuenta con la estructura administrativa necesaria y mucho menos el personal idóneo para llevar correctamente la administración y los correctos controles de la explotación, lo que resultaría por demás oneroso y muy complicado de estructurar, ii.- desarticular cooperativas de gran trascendencia en el medio rural que funcionan como una red logística de captación de mercaderías, afectando miles de productores, plantas que hoy se encuentran hipotecadas a favor del BROU y son propiedad del PNS, al no transferirse a sus tenedores quedarían en una situación de irregularidad no prevista al crearse este proceso de capitalización; entre otras.

Asimismo es de relevo destacar, que con la aprobación del presente proyecto se lograrán los siguientes fines:

1º.- Cumplir con el espíritu del PNS transfiriendo la titularidad a sus tenedores legítimos y novando las hipotecas actuales a nombre de las cooperativas, asociaciones de productores, Sociedades de Fomento Rural, etc.

2º.- Fortalecimiento del sector productor de referencia, asegurando su permanencia.

3º.- Al transformarse de tenedores a propietarios mejoran su calificación bancaria, obteniendo mejores créditos.

Al amparo del artículo 133 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay proponemos la siguiente iniciativa.

TABARÉ VÁZQUEZ
ENZO BENECH
DANILO ASTORI

_____

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a adecuar las condiciones del endeudamiento en la medida que se vayan efectivizando los pagos correspondientes, modificar los convenios de capitalización suscritos y ampliar los plazos estipulados, a los efectos de regularizar el adeudo que mantienen las organizaciones de productores con el Plan Nacional de Silos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 277 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y sus modificativas.

Esta autorización comprende a los tenedores legítimos con título habilitante, o a las personas jurídicas integradas por los mismos tenedores que continúen con la explotación de silos, plantas de almacenaje, graneros y ex graneros oficiales, elevadores zonales, depósitos y equipos, así como los inmuebles en que se asientan los mismos de propiedad del Estado.

Montevideo, 21 de agosto de 2019

ENZO BENECH
DANILO ASTORI

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a modificar las condiciones del endeudamiento en la medida que se vayan efectivizando los pagos correspondientes, modificar los convenios de capitalización suscritos y ampliar los plazos estipulados, a los efectos de regularizar el adeudo que mantienen las organizaciones de productores con el Plan Nacional de Silos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 277 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y sus modificativas.

Esta autorización comprende a los tenedores legítimos con título habilitante, o a las personas jurídicas integradas por los mismos tenedores que continúen con la explotación de silos, plantas de almacenaje, graneros y ex graneros oficiales, elevadores zonales, depósitos y equipos, así como los inmuebles en que se asientan los mismos de propiedad del Estado.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 11 de setiembre de 2019.

PATRICIA AYALA
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

=

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

REPARTIDO Nº 1211
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 4121 DE 2019

AHOGAMIENTO

Se declara como problema de salud pública

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Declárase el ahogamiento un problema de salud pública.

Artículo 2°.- Entiéndese por ahogamiento, cualquiera sea su grado, el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión y/o inmersión en un líquido, con resultados que se clasifican en: muerte, morbilidad (ahogamiento, cualquiera sea su grado) y no morbilidad (rescate).

Artículo 3°.- Entiéndese, a los efectos de esta ley, la seguridad acuática como el conjunto de todas aquellas acciones destinadas a prevenir el ahogamiento cualquiera sea el escenario, las condiciones, la época, el grado o la edad de la persona, en el que el riesgo se produzca

Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Salud Pública (MSP) la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Acuática adecuado a la realidad nacional. El mismo tiene por fin procurar el abordaje integral del grave problema de salud que representan los ahogamientos en nuestro país

Artículo 5°.- Para la elaboración del Plan al que refiere el artículo anterior el Ministerio de Salud Pública (MSP) convocará a la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática (MISA), y a las demás organizaciones especializadas en la materia.

El Plan Nacional de Seguridad Acuática deberá considerar el ahogamiento como un problema de salud pública, asegurando el uso de metodologías apropiadas a cada etapa de desarrollo y maduración individual y contemplar todos los escenarios posibles.

El Plan promoverá programas de educación y capacitación en acciones de seguridad acuática, con énfasis en los centros de enseñanza y en el personal de rescate y de salud.

El Plan contendrá las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria basadas en la mejor evidencia científica disponible, contemplando siempre la realidad nacional.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 120 (ciento veinte) días, contados desde su promulgación.

Montevideo, 3 de setiembre de 2019

WALTER DE LEÓN
REPRESENTANTE POR SAN JOSÉ
NIBIA REISCH
REPRESENTANTE POR COLONIA
LUIS GALLO CANTERA
REPRESENTANTE POR CANELONES
OSCAR VIERA
REPRESENTANTE POR TREINTA Y TRES
MARTÍN LEMA PERRETA
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los ahogamientos ocurren en una variedad de escenarios y condiciones que hacen que la casuística sea de difícil reducción. Es así que podemos mencionar canteras, construcciones, playas, mar, océanos, ríos, lagos, arroyos e incluso en clubes, piscinas y el propio hogar. No se reduce tampoco su ocurrencia a condiciones climáticas ya que puede darse durante todo el año incluso en condiciones normales y no sólo ante fenómenos meteorológicos adversos, como el caso de tormentas e inundaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera los ahogamientos como un problema de salud grave y desatendido por la mayoría de los países. Según datos de la OMS casi cuatrocientas mil personas fallecen por año por esta causa, siendo la mayoría de las muertes en personas menores de 25 años, por lo que las edades más comprometidas son la infancia, la adolescencia y los adultos jóvenes.

El Uruguay no se ve ajeno a esta problemática ya que el ahogamiento, según informa el Ministerio de Salud Pública, es la primera causa de muerte por lesiones no intencionales en edades de 1 a 4 años y de 10 a 14 años, siendo la segunda causa entre los niños de 5 y 9 años. La tasa de ahogamientos es, a su vez, la mayor de la región (3,9/100.000 habitantes).

Según datos proporcionados por el MSP entre los años 2012 y 2017 fallecieron 396 personas por ahogamiento. La distribución por edades presenta los picos de mayor frecuencia entre los 15 y 19 años y entre los 35 y 64 años, constituyendo el ahogamiento el 21% de todas las causas de muerte por lesiones externas en todas las edades.

La Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática (MISA), que funciona en la órbita del MSP y que ha trabajado desde su creación en enero de 2018 bajo las directrices formuladas por la OMS en medidas de prevención, educación, comunitarias, entre otras informa que en el año 2018 ocurrieron 178 eventos adversos (rescates, ahogamientos, fallecidos) de los cuales el 62% ocurrió en playas, ríos y arroyos y 4,5% en piscinas (8 eventos), siendo los principales departamentos Montevideo, Canelones, Colonia y Maldonado. Cabe destacar que el 45% de los eventos fatales ocurrieron en ausencia de supervisión, ya sea por parte de un adulto en el caso de niños y adolescentes o de personal calificado (lugares sin guardavidas o fuera del horario de éstos).

Es evidente que las leyes por sí solas no son la solución a los problemas, más cuando éstos obedecen a cuestiones culturales que hacen que la modificación de conductas no sea una tarea fácil de lograr. Sin embargo el contar con un Plan Nacional de Seguridad Acuática permitirá elaborar medidas concretas en aras de la educación, capacitación, información, prevención, seguridad y respuesta frente a una eventual emergencia.

Surge del derecho comparado que países como Chile, Colombia y varios estados de los Estados Unidos, entre otros ya han dispuesto soluciones legales similares al presente.

En el entendido qué el ahogamiento es un problema de salud, el presente proyecto dispone que, desde el organismo rector de las políticas de salud se elabore un Plan Nacional de Seguridad Acuática que aborde de modo integral la problemática del ahogamiento.

El Plan deberá adoptar un enfoque integral que abarque la gran variedad de escenarios posibles, cualquiera sea la época del año o condiciones climáticas, así como la edad o condición de las personas, con especial énfasis en la educación, capacitación y

prevención para asegurar la mayor seguridad acuática y prevención del ahogamiento.

Montevideo, 3 de setiembre de 2019

WALTER DE LEÓN
REPRESENTANTE POR SAN JOSÉ
NIBIA REISCH
REPRESENTANTE POR COLONIA
LUIS GALLO CANTERA
REPRESENTANTE POR CANELONES
OSCAR VIERA
REPRESENTANTE POR TREINTA Y TRES
MARTÍN LEMA PERRETA
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO

=

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ANEXO I AL
REPARTIDO Nº 1211
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 4121 DE 2019

AHOGAMIENTO

Se declara como problema de salud pública

I n f o r m e

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL

I N F O R M E

Señores Representantes:

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social ha aprobado por unanimidad el presente proyecto de ley entendiendo que los ahogamientos, cualquiera sea el ámbito y circunstancias de ocurrencia, constituyen un problema de salud grave, que los Estados deben atender, a fin de procurar su prevención.

Los datos oficiales arrojan que los mismos constituyen la primera causa de muerte por lesiones no intencionales en edades de uno a cuatro años y de diez a catorce años, siendo la segunda causa entre niños de cinco a nueve años.

La gravedad de la situación ha quedado acreditada por el trabajo realizado por la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática (M.I.S.A), que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública, a través de la formulación de diversas medidas de prevención y educación relacionadas con los eventos adversos ocurridos en la materia. Los datos arrojan que la mayoría de los ahogamientos se presentan en playas, ríos y arroyos y en menor medida en piscinas, siendo los principales departamentos de ocurrencia Montevideo, Canelones, Colonia y Maldonado.

En tal sentido el proyecto ubica el problema en su magnitud y dispone en su artículo primero que el ahogamiento es declarado como un problema de salud pública, definiendo aquél, cualquiera sea su grado, como el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión o inmersión en un líquido, con resultados que se clasifican en: muerte, morbilidad (ahogamiento, cualquiera sea su grado) y no morbilidad (rescate) (artículo 2º).

A su vez, el proyecto define la seguridad acuática como “el conjunto de todas aquellas acciones destinadas a prevenir el ahogamiento cualquiera sea el escenario, las condiciones, la época, el grado o la edad de la persona, en el que el riesgo se produzca” , encomendando al organismo rector de la salud la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Acuática que resulte adecuado a la realidad nacional y que aborde de modo integral el grave problema de salud que representan los ahogamientos en nuestro país (artículo 4º).

Para la elaboración del referido Plan, el Ministerio de Salud Pública procurará asegurar el uso de metodologías adecuadas a cada etapa de desarrollo y maduración individual, contemplará todos los escenarios factibles y para su formulación deberá convocar a la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, y a las demás organizaciones especializadas en la materia. El Plan promoverá programas de educación y capacitación en acciones de seguridad acuática poniendo énfasis en los centros de enseñanza y en el personal de rescate y salud, contemplando medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria basadas en la mejor evidencia científica disponible, en relación a la realidad nacional (artículo 5º).

Finalmente, considerando el grave problema de salud que los ahogamientos representan y que la temática ya ha sido trabajada por la autoridad sanitaria y la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, el artículo 6º dispone de un plazo que se estima por demás razonable para que la ley sea reglamentada por el Poder Ejecutivo, estableciendo el mismo en ciento veinte días a partir de su vigencia.

Por todo lo expuesto, se aconseja al plenario la aprobación del texto presentado.

Sala de la Comisión, 11 de setiembre de 2019

NIBIA REISCH
MIEMBRO INFORMANTE
LUIS GALLO CANTERA
MARTÍN LEMA PERRETA
OSCAR VIERA

=

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

REPARTIDO Nº 1225
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 4153 DE 2019

ACUERDO SOBRE LA ORDEN MERCOSUR DE DETENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS

Aprobación

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

___

Montevideo, 12 de noviembre de 2018

Señora Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo sobre la Orden MERCOSUR de Detención y Procedimientos de Entrega entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de Foz de Iguazú, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2010.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

___

Estamos frente a un Instrumento de cooperación internacional en la región en materia penal, que agilizará la concreción de mandatos u órdenes de captura dentro del ámbito del MERCOSUR.

En este sentido, se destaca la conveniencia de la aprobación de este Acuerdo, en virtud que se activarían los procedimientos de detención y entrega de personas reclamadas para ser juzgadas por las autoridades competentes.

El presente Acuerdo contribuye a fortalecer el entramado jurídico existente así como la provisión de soluciones jurídicas comunes entre los Estados Partes del MERCOSUR y entre el MERCOSUR y Asociados, teniendo en cuenta sus respectivos Acuerdos de Extradición.

A través del presente instrumento internacional se propende a garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de la persona requerida, en los términos de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (Pacto de San José de Costa Rica).

El instrumento jurídico generado se integra con 22 artículos y 3 anexos relativos a: I) Ámbito de Aplicación, II) Orden MERCOSUR de Detención y III) Campos a completar para la utilización del SISME.

El Acuerdo define la Orden MERCOSUR de Detención, en su Artículo 1, como una resolución judicial dictada por un Estado Parte de este Acuerdo, con vistas a la detención y entrega por otro Estado Parte, de una persona buscada o requerida para ser procesada por la presunta comisión de algún delito, para que responda a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad.

El Artículo 3 refiere al Ámbito de Aplicación. En éste se da por cumplido el requisito de la doble incriminación al establecer que darán lugar a la entrega, en razón de una Orden MERCOSUR de Detención, aquellas conductas delictivas que la Parte emisora y la Parte ejecutora tengan tipificado en virtud de 19 instrumentos internacionales ratificados por las mismas, mencionados en el Anexo I del presente Acuerdo.

Para los delitos referidos en el párrafo anterior, procederá la entrega de la persona requerida, cuando los delitos sean castigados con pena privativa de libertad cuya duración máxima sea igual o superior a 2 años. Se exigirá además que parte de la pena que aún queda por cumplir sea de al menos 6 meses.

Finaliza el referido artículo estableciendo que para todos aquellos delitos no abarcados en el presente Acuerdo, serán de aplicación los acuerdos de extradición vigentes entre ambas Partes.

En el Artículo 4 se establece la posibilidad de los Estados de denegar la entrega cuando la persona buscada o requerida sea nacional de la parte ejecutora. En este caso no se limita la no entrega a razones constitucionales sino que puede ser alegada también por los Estados que entregan nacionales, quedando a la apreciación de la autoridad judicial ejecutora. En el caso mencionado, la Parte que deniegue la entrega deberá, a pedido de la Parte emisora, juzgar a la persona reclamada y mantener informada a la otra Parte sobre el juicio, remitiendo copia de la sentencia, en fiel reflejo del Principio de Derecho Internacional Penal de "Juzgar o Extraditar".

También se prevé en este artículo, que pueda denegarse la entrega si se tratare de delitos cometidos total o parcialmente en el territorio de la Parte ejecutora o que la persona esté sometida a un procedimiento penal en la Parte ejecutora por el mismo delito punible que motiva la Orden de Detención.

La Denegación preceptiva está prevista en el Artículo 5 y determina los casos en que procede, entre otros: inexistencia de doble incriminación, cuando haya prescripto el delito o la pena conforme a la legislación de las Partes emisora y ejecutora de la Orden de Detención, cuando exista cosa juzgada en el territorio de la Parte ejecutora sobre los mismos hechos delictivos que dieron lugar a la Orden de Detención. A continuación se detallan los delitos que no serán considerados delitos políticos bajo ninguna circunstancia.

El Artículo 6 prevé la Autoridad Central como vía para la trasmisión y recepción de las órdenes MERCOSUR de Detención.

Se prevén por el Artículo 7, los requisitos documentales y procesales clásicos como información sobre el paradero de la persona buscada, sobre la Autoridad Judicial emisora, indicación de la existencia de sentencia firme o de una orden de detención, copia de los textos legales que tipifiquen y sancionen el delito, identificando la pena aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción de la Parte emisora para conocer de ellos, que la declaración de que la acción y la pena no se encuentren prescriptas conforme a la legislación, la descripción de los hechos, incluidas las circunstancias de tiempo y lugar sobre el grado de participación de la persona buscada, etc.

De conformidad al Artículo 8, la Orden será trasmitida directamente entre las Autoridades Centrales previamente designadas por las Partes. Se prevé que la Orden de Detención pueda ser trasmitida por medios electrónicos. Cuando el Estado ejecutor requiera recibir la Orden en soporte papel, el envió por medios electrónicos sólo será considerado un adelanto de la misma.

Se establece además que a fin de posibilitar el almacenamiento y la consulta de las órdenes MERCOSUR de Detención, la autoridad judicial competente de la Parte emisora podrá decidir el ingreso de éstas en las bases de datos a las que accede el Sistema de Intercambio de Informaciones de Seguridad del MERCOSUR (SISME) y de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), conforme lo previsto en el Anexo III del presente Acuerdo.

En este Acuerdo, en su Artículo 10, se reconoce claramente el derecho de la persona buscada que sea detenida como consecuencia de una Orden, a tener de manera inmediata la asistencia de un abogado y de un intérprete en su caso, a efectos de asegurar su defensa. Si el detenido, ante el Juez competente y en presencia de un abogado diere su consentimiento para ser entregado, la decisión será tomada a la brevedad posible y procederá a la entrega.

Se establece a continuación, que la autoridad judicial, al ejecutar la Orden, observará que la Parte emisora no aplique en ningún caso, las penas de muerte, de pena perpetua y trabajo forzado.

La decisión de la entrega está prevista en el Artículo 11, en el que establece: la entrega deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días a contar de la decisión definitiva de la Parte ejecutora; la posibilidad de prórroga por hasta 10 días; la suspensión del plazo en caso de enfermedad comprobada.

El Artículo 12 establece diferentes situaciones en que se plantea la concurrencia de solicitudes. La gravedad relativa de los delitos y las fechas de las Órdenes, son algunos de los criterios para determinar la preeminencia de éstos.

El Artículo 13 prevé la celeridad del procedimiento, Juez o tribunal competente y que la denegación será comunicada sin demora a la Parte emisora.

Se establece en el Artículo 14 que la autoridad judicial competente podrá suspender la entrega de la persona buscada por parte del Estado ejecutor si estuviese ya condenada en el mismo y en donde deberá cumplir la pena que se le hubiere impuesto por otros hechos distintos del que motivare la Orden MERCOSUR de Detención.

Con relación al cómputo de la pena, el Artículo 15 establece que el período entre la detención y la entrega de la persona buscada o requerida, con arreglo a la Orden MERCOSUR de Detención, será computado como parte del total de su condena.

En el Artículo 16, se preceptúa el libre tránsito por el territorio de los Estados, salvo el caso de nacionales del Estado en tránsito, si lo dispone su legislación interna. Se regula el contenido de la solicitud de tránsito, debiendo figurar en la misma, la identidad y la nacionalidad de la persona requerida, así como la existencia de una Orden MERCOSUR de Detención. Esto no regirá para los casos de tránsito por vía aérea sin escala prevista.

En el caso de extradición para un tercer Estado (Artículo 17), se establece que el Estado emisor de la Orden que obtiene la entrega no puede a su vez, extraditar a un tercer Estado a la misma persona sin consentimiento del Estado ejecutor, o sea, de quien hizo lugar a la entrega al Estado emisor.

En cuanto a los objetos que pudieren servir como prueba del delito, el Artículo 18 prevé que sin perjuicio de los derechos de terceros, estos objetos serán entregados por parte del Estado ejecutor al Estado emisor. Si los bienes estuvieran embargados o sujetos a proceso en el Estado ejecutor, éste podrá demorar la entrega de los mismos o entregarlos sujetos a devolución.

El Artículo 21 distingue dos regímenes de Solución de Controversias: a) el relativo a las controversias que surjan entre los Estados Partes del MERCOSUR, se resolverán por el sistema de Solución de Controversias vigente del propio Organismo y b) el relacionado a las que surjan entre uno o más Estados Partes del MERCOSUR y uno o más Estados Asociados, así como entre uno o más Estados Asociados, se resolverán de acuerdo al mecanismo vigente entre las Partes involucradas en el conflicto.

La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo así como de los respectivos instrumentos de ratificación.

En atención a lo expuesto, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera a la señora Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
RODOLFO NIN NOVOA
EDUARDO BONOMI
MARÍA JULIA MUÑOZ

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Acuerdo sobre la Orden MERCOSUR de Detención y Procedimientos de Entrega entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de Foz de Iguazú, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2010.

Montevideo, 12 de noviembre de 2018

RODOLFO NIN NOVOA
EDUARDO BONOMI
MARÍA JULIA MUÑOZ

TEXTO DEL ACUERDO

MERCOSUR MERCOSUL

ACUERDO SOBRE LA ORDEN MERCOSUR DE DETENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, y el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú, en adelante denominados "las Partes",

CONSIDERANDO los acuerdos sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR y entre el MERCOSUR y Asociados;

ATENDIENDO a la necesidad de garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de la persona requerida, en los términos de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos – OEA (Pacto de San José de Costa Rica);

REAFIRMANDO la voluntad de acordar soluciones jurídicas comunes con el objeto de fortalecer el proceso de integración y la seguridad regional;

CONVENCIDOS de que la intensificación de la cooperación jurídica en materia penal contribuirá a profundizar los intereses comunes de las Partes en el proceso de integración y en la lucha contra el delito organizado; y

ENTENDIENDO que la globalización se encuentra acompañada de un crecimiento proporcional de actividades delictivas, que representan una creciente amenaza nacional y transnacional, en distintas modalidades de actos delictivos cuyos efectos han logrado transcender fronteras afectando así a las distintas Partes,

ACUERDAN:

ARTÍCULO 1
OBLIGACIÓN DE EJECUTAR

1. La Orden MERCOSUR de Detención es una resolución judicial dictada en una Parte (Parte emisora) de este Acuerdo con vistas a la detención y la entrega por otra Parte (Parte ejecutora) de una persona requerida para ser procesada por la presunta comisión de algún delito, para que responda a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad.

2. Las Partes ejecutarán la Orden MERCOSUR de Detención de acuerdo con las disposiciones del presente Acuerdo y el Derecho interno de las Partes.

MERCOSUR MERCOSUL

ARTÍCULO 2
DEFINICIONES

1. Parte Emisora: la autoridad judicial competente de la Parte que dicta la Orden MERCOSUR de Detención.

2. Parte Ejecutora: la autoridad judicial competente de la Parte que deberá decidir la entrega de la persona requerida en virtud de una Orden MERCOSUR de Detención.

3. Autoridad Judicial Competente: es la autoridad judicial habilitada en el ordenamiento jurídico de cada Parte para emitir o ejecutar una Orden MERCOSUR de Detención.

4. Autoridad Central: es la designada por cada Parte, de acuerdo con su legislación interna, para tramitar la Orden MERCOSUR de Detención.

5. Sistema Integrado de Informaciones de Seguridad del MERCOSUR – SISME: es el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR, creado por Decisión CMC Nº 36/04, concebido como herramienta de cooperación técnica por el Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional.

El SISME facilita a los funcionarios habilitados al efecto el acceso eficiente y oportuno a informaciones policiales y de seguridad pública de interés en el ámbito de la seguridad regional.

Se trata de un conjunto de recursos tecnológicos, Hardware, Software de Base y de Aplicación, que se utilizan para consulta de información estructurada alojada en las Bases de Datos de cada uno de los Nodos Usuarios de cada uno de los Estados Partes o Estados Asociados, la consulta entre los Nodos se realiza sobre Redes Seguras.

ARTÍCULO 3
ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Darán lugar a la entrega, en razón de una Orden MERCOSUR de Detención, aquellas conductas delictivas que la Parte emisora y la Parte ejecutora tengan tipificado en virtud de instrumentos internacionales ratificados por las mismas, mencionados en el Anexo I del presente Acuerdo, dándose de este modo por cumplido el requisito de la doble incriminación.

2. Para los delitos referidos en el párrafo 1, procederá la entrega de la persona requerida, en virtud de una Orden MERCOSUR de Detención, cuando los delitos, cualquiera sea su denominación, sean castigados por la legislación de las Partes emisora y ejecutora, con pena privativa de libertad cuya duración máxima sea igual o superior a 2 (dos) años.

3. Para los delitos referidos en el párrafo 1, procederá la entrega si la Orden MERCOSUR de Detención fuera emitida para la ejecución de una sentencia o parte de ella. Se exigirá que la parte de la pena que aún queda por cumplir sea de al menos 6 (seis) meses.

4. Para todos aquellos delitos no abarcados en el presente Acuerdo, serán de aplicación los Acuerdos de Extradición vigentes entre las Partes.

MERCOSUR MERCOSUL

4. Para todos aquellos delitos no abarcados en el presente Acuerdo, serán de aplicación los Acuerdos de Extradición vigentes entre las Partes.

ARTÍCULO 4
DENEGACIÓN FACULTATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN MERCOSUR DE DETENCIÓN

1. La Autoridad Judicial de la Parte ejecutora podrá denegar la ejecución de la Orden MERCOSUR de Detención, conforme lo siguiente:

a) la nacionalidad de la persona requerida no podrá ser invocada para denegar la entrega, salvo que una disposición constitucional establezca lo contrario. Las Partes que no contemplen una disposición de igual naturaleza podrán denegar la entrega de sus nacionales, en el caso en que la otra Parte invoque la excepción de la nacionalidad.

La Parte que deniegue la entrega deberá, a pedido de la Parte emisora, juzgar a la persona reclamada y mantener informada a la otra Parte acerca del juicio y remitir copia de la sentencia, si fuera el caso. A estos efectos la condición de nacional se determinará por la legislación de la Parte ejecutora vigente al momento en que se emita la Orden MERCOSUR de Detención, siempre que la nacionalidad no hubiere sido adquirida con el propósito fraudulento de impedir la entrega;

b) se trate de delitos cometidos, total o parcialmente, dentro del territorio de la Parte ejecutora;

c) la persona requerida esté sometida a un procedimiento o proceso penal en la Parte ejecutora por el mismo hecho o hechos punibles que fundan la Orden MERCOSUR de Detención; o

2. Sin perjuicio de la decisión de la autoridad judicial, de conformidad con su legislación interna el Estado Parte de ejecución, podrá denegar el cumplimiento de la Orden cuando existan razones especiales de soberanía nacional, seguridad u orden público u otros intereses esenciales que impidan la ejecución de la Orden MERCOSUR de Detención.

ARTÍCULO 5
DENEGACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN MERCOSUR DE DETENCIÓN.

La Autoridad Judicial de la Parte ejecutora denegará la ejecución de la Orden MERCOSUR de Detención cuando:

a) no exista doble incriminación con respeto a los hechos que dan lugar a la Orden MERCOSUR de Detención;

b) la acción o la pena estuvieren prescriptas conforme a la legislación de la Parte emisora o de la Parte ejecutora;

MERCOSUR MERCOSUL

c) la persona requerida haya sido juzgada, indultada, beneficiada por la amnistía o que haya obtenido una gracia en la Parte ejecutora o en un tercer Estado en función de los mismos hechos punibles que fundamentan la Orden MERCOSUR de Detención;

d) la Parte ejecutora considere que los delitos sean políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La mera invocación de un fin o motivo político no implicará que el delito deba necesariamente calificarse como tal;

A los fines del presente Acuerdo, no serán considerados delitos políticos bajo ninguna circunstancia:

I. el atentado contra la vida o la acción de dar muerte a un Jefe de Estado o de Gobierno o a otras autoridades nacionales o locales o a sus familiares;

II. el genocidio, los crímenes de guerra o los delitos contra la humanidad en violación de las normas del Derecho Internacional;

III. los actos de naturaleza terrorista que, a título ilustrativo, impliquen alguna de las siguientes conductas:

i. el atentado contra la vida, la integridad física o la libertad de personas que tengan derecho a protección internacional, incluidos los agentes diplomáticos;

ii. la toma de rehenes o el secuestro de personas;

iii. el atentado contra personas o bienes mediante el uso de bombas, granadas, proyectiles, minas, armas de fuego, cartas o paquetes que contengan explosivos u otros dispositivos capaces de causar peligro común o conmoción pública;

iv. los actos de captura ilícita de embarcaciones o aeronaves;

v. en general, cualquier acto no comprendido en los supuestos anteriores cometido con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores de la misma, atentar contra la economía de un país, su patrimonio cultural o ecológico, o cometer represalias de carácter político, racial o religioso; y

vi. la tentativa de cualquiera de los delitos previstos en este artículo.

e) los delitos fueren de naturaleza exclusivamente militar;

f) la persona requerida hubiere sido condenada o deba ser juzgada en el territorio de la Parte emisora por un tribunal de excepción o "ad hoc";

g) la persona requerida fuere menor de 18 (dieciocho) años o inimputable al tiempo de la comisión del hecho o los hechos que fundan la Orden MERCOSUR de Detención.

h) se tengan razones fundadas para considerar que la Orden MERCOSUR de Detención ha sido presentada con el propósito de perseguir o castigar a la persona requerida por razones de género, religión, raza, nacionalidad, convicciones políticas u otras convicciones, o la situación de esa persona pudiera ser agravada por cualquiera de esas razones; y

MERCOSUR MERCOSUL

i) la persona requerida tenga la condición de refugiada. Cuando se trate de un peticionante de refugio, su entrega será suspendida hasta tanto se resuelva tal petición.

ARTÍCULO 6
AUTORIDAD CENTRAL

1. Cada Parte designará una Autoridad Central para tramitar la Orden MERCOSUR de Detención.

2. Las Partes, al depositar el instrumento de ratificación del presente Acuerdo, comunicarán la designación de la Autoridad Central para tramitar la Orden MERCOSUR de Detención al Estado depositario, el cual lo pondrá en conocimiento a las demás Partes.

3. La Autoridad Central podrá ser cambiada en cualquier momento, debiendo la Parte comunicarlo, en el menor tiempo posible, al Estado depositario del presente Acuerdo, a fin de que ponga en conocimiento de las demás Partes.

ARTÍCULO 7
CONTENIDO Y FORMA DE LA ORDEN MERCOSUR DE DETENCIÓN

1. La Orden MERCOSUR de Detención contendrá la información que se detalla a continuación, la cual deberá ser presentada de conformidad con el Formulario del Anexo II del presente Acuerdo:

a) datos de la persona requerida;

b) información sobre su paradero;

c) información relativa a la Autoridad Judicial emisora;

d) descripción de los hechos, incluidas las circunstancias de tiempo y lugar, con información sobre el grado de participación de la persona requerida;

e) indicación de la existencia de una sentencia firme o de una orden de detención incluidas las informaciones sobre la autoridad que la dictó y fecha de emisión;

f) copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la orden de captura y de los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción de la Parte emisora para conocer de ellos, así como una declaración de que la acción y la pena no se encuentran prescriptas conforme a su legislación; y

g) cualquier otra información que se considere necesaria.

2. Todos los documentos e informaciones contenidos en la Orden MERCOSUR de Detención deben estar traducidos al idioma de la Parte ejecutora.

MERCOSUR MERCOSUL

ARTÍCULO 8

TRAMITACIÓN DE LA ORDEN MERCOSUR DE DETENCIÓN

1. La Orden MERCOSUR de Detención se transmitirá directamente entre las Autoridades Centrales previamente designadas por las Partes; cuando fuere posible, la Autoridad Central de la Parte emisora transmitirá la Orden MERCOSUR de Detención a su par de la Parte ejecutora por cualquier medio electrónico que permita dejar constancia escrita de la transmisión, en condiciones que posibiliten a la Parte ejecutora establecer su autenticidad. Cuando esto no sea posible, se podrá adelantar la solicitud por dichos medios, sin perjuicio de su posterior confirmación por escrito, dentro del plazo de 10 (diez) días.

2. A fin de posibilitar el almacenamiento y la consulta de las Ordenes MERCOSUR de Detención, la autoridad judicial competente de la Parte emisora podrá decidir la inserción de estas en las bases de datos a las que accede el Sistema de Intercambio de Informaciones de Seguridad del MERCOSUR (SISME) y de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), conforme previsto en el Anexo III del presente Acuerdo.

3. Los datos de la Orden MERCOSUR de Detención y demás informaciones que aseguren su eficaz cumplimiento deberán salvaguardar los derechos de terceros.

ARTÍCULO 9

ENTREGA VOLUNTARIA

Si la persona requerida diere su consentimiento, con la debida asistencia jurídica, ante la autoridad judicial competente de la Parte ejecutora, esta decidirá sobre la entrega, sin más trámite, en conformidad con su legislación interna.

ARTÍCULO 10

DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA PERSONA REQUERIDA

1. Cuando una persona requerida sea detenida, la autoridad judicial de ejecución competente informará a dicha persona, de conformidad con su legislación interna, la existencia de la Orden MERCOSUR de Detención y de su contenido.

2. La persona requerida que sea detenida a efectos de la ejecución de una Orden MERCOSUR de Detención tendrá derecho, de manera inmediata, a contar con la asistencia de un abogado y, en caso necesario, de un intérprete, de conformidad con la legislación de la Parte ejecutora.

3. La autoridad judicial, al ejecutar la Orden MERCOSUR de Detención, observará las siguientes condiciones:

a. la Parte emisora no aplicará a la persona requerida, en ningún caso, las penas de muerte, de pena privativa de libertad a perpetuidad y de trabajo forzado; y

b. cuando el delito en que se basa la Orden MERCOSUR de Detención estuviese sancionado en la Parte emisora con la pena de muerte o con una pena privativa de libertad a perpetuidad, la ejecución de la Orden MERCOSUR de Detención solo será admitida si la Parte emisora aplicare la pena máxima admitida en la legislación de la Parte ejecutora.

MERCOSUR MERCOSUL

ARTÍCULO 11
DECISIÓN SOBRE LA ENTREGA

1. La autoridad judicial de ejecución decidirá la entrega de la persona requerida, en los plazos y condiciones establecidos en el presente Acuerdo.

2. La autoridad judicial competente de la Parte ejecutora podrá solicitar informaciones complementarias antes de la decisión sobre la entrega.

3. La entrega deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 (quince) días a contar de la notificación a la Autoridad Central de la Parte emisora de la decisión definitiva emitida por la autoridad judicial competente sobre la entrega de la persona requerida.

4. Por razón de fuerza mayor, debidamente fundamentada, la entrega de la persona requerida podrá ser prorrogada, por única vez, por hasta 10 (diez) días. En caso de enfermedad comprobada que imposibilite el traslado, la entrega quedará suspendida hasta tanto se supere el impedimento.

ARTÍCULO 12
CONCURRENCIA DE SOLICITUDES

1. En el caso de recibirse dos o más Ordenes MERCOSUR de Detención referentes a una misma persona, la Parte ejecutora determinará a cual de las Partes se concederá la entrega, y notificará su decisión a las Partes emisoras.

2. Cuando las solicitudes se refieran a un mismo delito, la Parte ejecutora deberá dar preferencia en el siguiente orden:

a. al Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito;

b. al Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual la persona requerida; y

c. al Estado que primero haya presentado la solicitud.

3. Cuando las Ordenes MERCOSUR de Detención se refieran a delitos diferentes, la Parte ejecutora, según su legislación, dará preferencia a la Parte que tenga jurisdicción respecto al delito más grave. A igual gravedad, se dará preferencia a la Parte que haya presentado la solicitud en primer lugar.

4. En el caso de existencia de Orden MERCOSUR de Detención y de pedido de extradición presentados contra una misma persona, la consideración, por la autoridad judicial competente, sobre las medidas requeridas tendrá como base los mismos criterios del párrafo anterior.

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

MERCOSUR MERCOSUL

ARTÍCULO 13
PROCEDIMIENTOS

1. La Orden MERCOSUR de Detención se tramitará con la mayor celeridad.

2. El cumplimiento de la Orden MERCOSUR de Detención y la decisión sobre la entrega de la persona requerida se tramitará ante la autoridad judicial competente, con arreglo a la legislación interna de la Parte ejecutora.

3. Toda denegación de la ejecución de la Orden MERCOSUR de Detención se comunicará sin demora a la Parte emisora, con indicación de los motivos de esta.

ARTÍCULO 14
ENTREGA SUSPENDIDA O CONDICIONAL

La autoridad judicial competente podrá suspender la entrega de la persona requerida para que pueda ser enjuiciada en la Parte de ejecución o, si estuviese ya condenada, para que pueda cumplir en su territorio la pena que se le hubiere impuesto por otros hechos distintos del que motivan la Orden MERCOSUR de Detención.

ARTÍCULO 15
CÓMPUTO DE LA PENA

1. El período entre la detención y la entrega de la persona requerida, con arreglo a la Orden MERCOSUR de Detención, deberá ser computado como parte del total de su condena que deba cumplir en la Parte emisora.

2. La autoridad judicial competente de la Parte ejecutora deberá proporcionar a la Parte emisora, por medio de su Autoridad Central, la información relacionada con el período en que la persona requerida quedó detenida bajo la Orden MERCOSUR de Detención.

ARTÍCULO 16
TRÁNSITO

1. En el proceso de entrega, las Partes deberán permitir el tránsito por su territorio de la persona requerida por una Orden MERCOSUR de Detención, salvo en el caso de nacionales del Estado de tránsito, si lo dispone su legislación interna. El pedido de tránsito debe contener las siguientes informaciones:

a) identidad y nacionalidad de la persona requerida que es objeto de la Orden MERCOSUR de Detención;

b) la existencia de una Orden MERCOSUR de Detención;

2. El pedido de tránsito se tramitará a través de las Autoridades Centrales designadas por las Partes.

MERCOSUR MERCOSUL

3. El presente artículo no se aplicará en caso de utilizarse la vía aérea sin escala prevista. No obstante, si se produjera un aterrizaje fortuito, la Parte emisora facilitará la información a la autoridad designada, de conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del presente artículo.

ARTÍCULO 17
EXTRADICIÓN O ENTREGA A UN TERCER ESTADO

1. Una persona requerida a quien se haya entregado en razón de una Orden MERCOSUR de Detención no podrá ser entregada por otra solicitud de Orden MERCOSUR de Detención o de pedido de extradición, a un tercer Estado, sin el consentimiento de la autoridad competente de la Parte ejecutora.

2. Lo establecido en el párrafo anterior no se aplicará cuando la persona entregada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte emisora, haya permanecido voluntariamente en él por más de 45 (cuarenta y cinco) días corridos a partir de su liberación definitiva o regresare a él después de haberlo abandonado.

ARTÍCULO 18
ENTREGA DE OBJETOS

1. A petición de la autoridad judicial emisora o por propia iniciativa, la autoridad judicial de ejecución podrá entregar, de conformidad con su legislación interna, los objetos que pudieren servir como prueba del delito.

2. Los objetos a que se hace mención en el apartado 1 podrán entregarse aún cuando la Orden MERCOSUR de Detención no pueda ejecutarse debido al fallecimiento o la evasión de la persona requerida, en conformidad con la legislación interna de la Parte ejecutora.

3. Si los objetos a que se hace mención en el apartado 1 fueren susceptibles de embargo o decomiso en el territorio de la Parte ejecutora, esta podrá, si dichos objetos son necesarios para un proceso penal en curso, retenerlos temporalmente o entregarlos al Estado Parte emisor, a condición de que sean devueltos. Todo de conformidad con la legislación interna de la Parte ejecutora.

4. Deberán ser salvaguardados todos los derechos de terceros. Cuando dichos derechos existan, el Estado Parte emisor deberá devolver los objetos sin cargo alguno al Estado Parte de ejecución, lo antes posible.

ARTÍCULO 19
GASTOS

1. La Parte ejecutora se hará cargo de los gastos ocasionados en su territorio como consecuencia de la detención de la persona requerida. Los gastos ocasionados por el

MERCOSUR MERCOSUL

traslado y el tránsito de la persona requerida desde el territorio de la Parte ejecutora serán de cargo de la Parte emisora.

2. La Parte emisora se hará cargo de los gastos de traslado a la Parte ejecutora de la persona requerida que hubiere sido sobreseída, si fuere el caso, en conformidad con su legislación interna.

ARTÍCULO 20
CONCURRENCIA DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES

El presente Acuerdo no afectará los derechos y obligaciones de las Partes establecidos en otros instrumentos internacionales de los cuales sean Parte.

ARTÍCULO 21
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo entre los Estados Partes del MERCOSUR se resolverán por el sistema de solución de controversias vigente en el MERCOSUR.

2. Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo entre uno o más Estados Partes del MERCOSUR y uno o más Estados Asociados, así como entre uno o más Estados Asociados se resolverán de acuerdo al mecanismo de Solución de Controversias vigente entre las Partes involucradas en el conflicto.

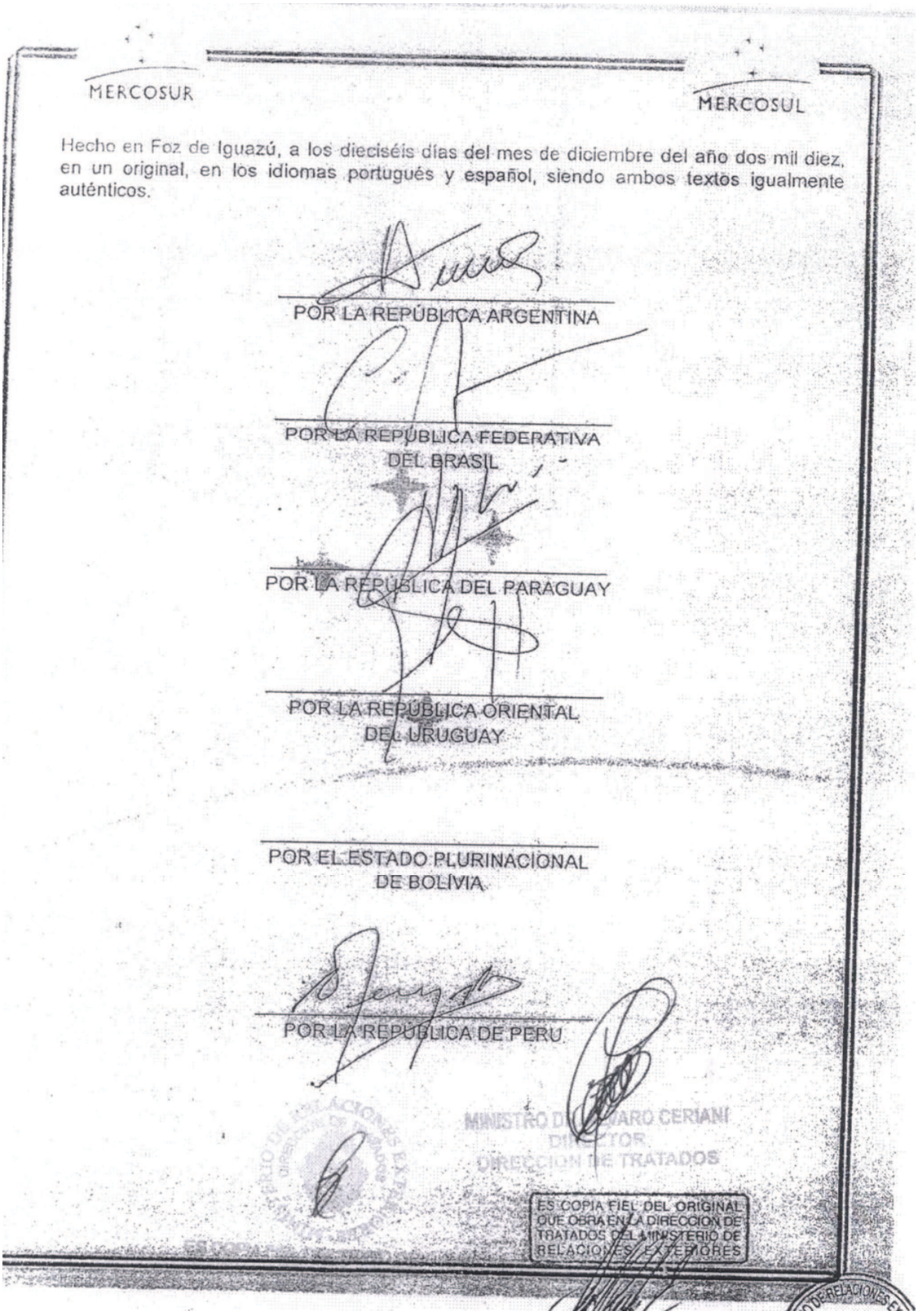
ARTÍCULO 22
VIGENCIA

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del MERCOSUR. En la misma fecha entrará en vigor para los Estados Asociados que lo hubieren ratificado anteriormente.

2. Para los Estados Asociados que no lo hubieren ratificado con anterioridad a esa fecha, el Acuerdo entrará en vigor el mismo día en que se deposite el respectivo instrumento de ratificación.

3. Los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo, solamente se aplican a los Estados que lo hayan ratificado.

4. La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de los respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a las demás Partes las fechas de los depósitos de esos instrumentos y de la entrada en vigor del Acuerdo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.



MERCOSUR MERCOSUL

Hecho en Foz de Iguazú, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil diez, en un original, en los idiomas portugués y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

POR LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

POR LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

POR EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

POR LA REPÚBLICA DE PERU

MINISTRO DIEGO ALVARO CERIANI
DIRECTOR
DIRECCION DE TRATADOS

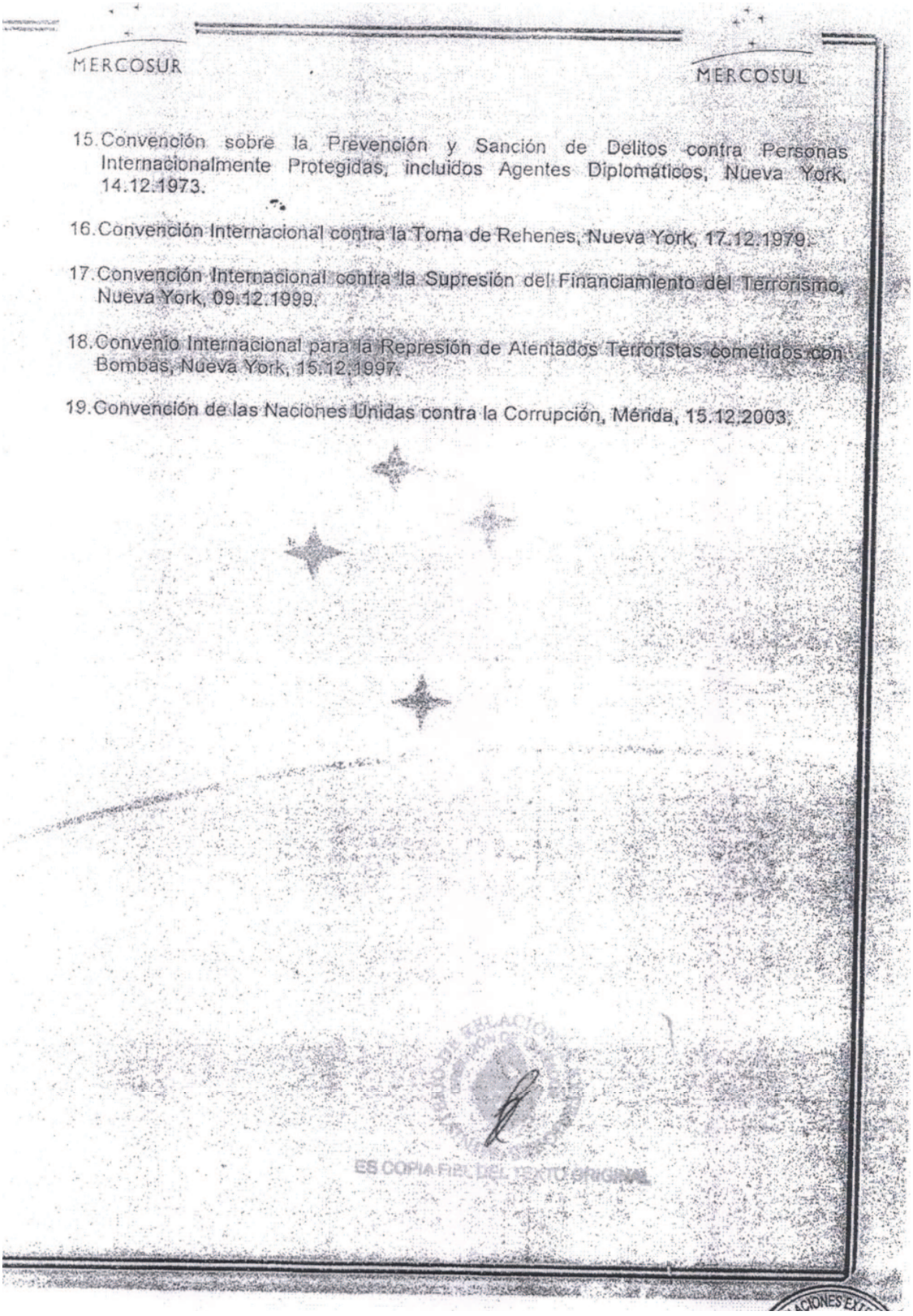
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN LA DIRECCION DE TRATADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MERCOSUR MERCOSUL

ANEXO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), Nueva York, 15.11.2000.
2. Protocolo Adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional relativo a Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, Nueva York, 15.11.2000.
3. Protocolo Adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, Nueva York, 15.11.2000.
4. Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, Roma, 17.07.1998.
5. Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, París, 11.12.1948.
6. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, Viena, 20.12.1988.
7. Convención relativa a Infracciones y otros Actos cometidos a Bordo de Aeronaves, Tokio, 14.09.1963.
8. Convención para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, La Haya, 16.12.1970.
9. Convención para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, Montreal, 23.09.1971.
10. Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en Aeropuertos Civiles Internacionales, complementario a la Convención para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, Montreal, 24.02.1988.
11. Convención sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para Fines de Detección, Montreal, 01.03.1991.
12. Convención para la Supresión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, Roma, 10.03.1988.
13. Protocolo para la Supresión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas localizadas en la Plataforma Continental, complementario a la Convención para la Supresión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima Roma, 10.03.1988.
14. Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares, Viena, 03.03.1980.



MERCOSUR MERCOSUL

15. Convención sobre la Prevención y Sanción de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, incluidos Agentes Diplomáticos, Nueva York, 14.12.1973.

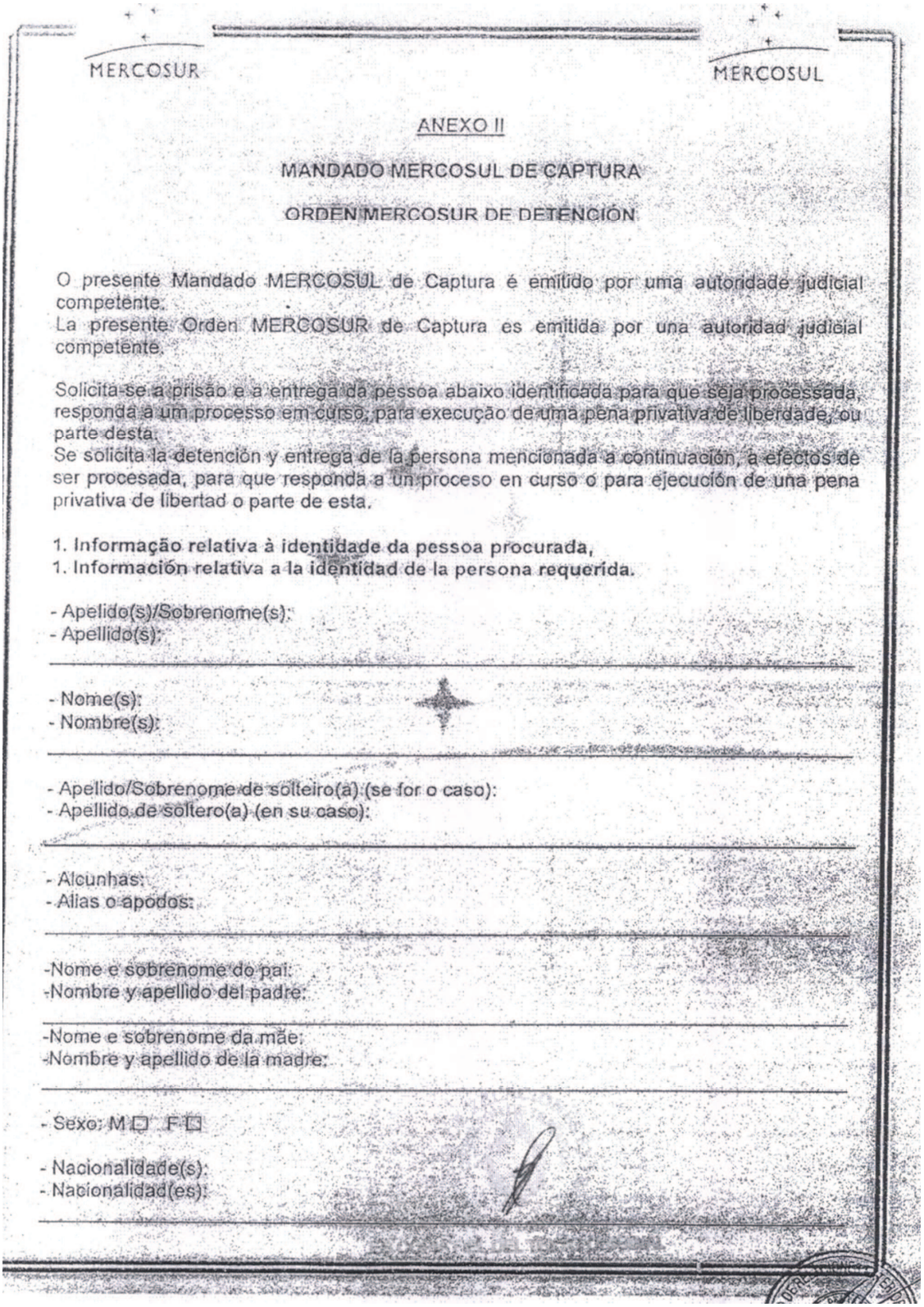
16. Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, Nueva York, 17.12.1979.

17. Convención Internacional contra la Supresión del Financiamiento del Terrorismo, Nueva York, 09.12.1999.

18. Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas cometidos con Bombas, Nueva York, 15.12.1997.

19. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Mérida, 15.12.2003.

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL



MERCOSUR MERCOSUL

ANEXO II

MANDADO MERCOSUL DE CAPTURA

ORDEN MERCOSUR DE DETENCIÓN

O presente Mandado MERCOSUL de Captura é emitido por uma autoridade judicial competente.
La presente Orden MERCOSUR de Captura es emitida por una autoridad judicial competente.

Solicita-se a prisão e a entrega da pessoa abaixo identificada para que seja processada, responda a um processo em curso, para execução de uma pena privativa de liberdade, ou parte desta.
Se solicita la detención y entrega de la persona mencionada a continuación, a efectos de ser procesada, para que responda a un proceso en curso o para ejecución de una pena privativa de libertad o parte de esta.

1. Informação relativa à identidade da pessoa procurada,
1. Información relativa a la identidad de la persona requerida.

- Apelido(s)/Sobrenome(s):
- Apellido(s):

- Nome(s):
- Nombre(s):

- Apelido/Sobrenome de solteiro(a) (se for o caso):
- Apellido de soltero(a) (en su caso):

- Alcunhas:
- Alias o apodos:

-Nome e sobrenome do pai:
-Nombre y apellido del padre:

-Nome e sobrenome da mãe:
-Nombre y apellido de la madre:

- Sexo: M ☐ F ☐

- Nacionalidade(s):
- Nacionalidad(es):

MERCOSUR MERCOSUL

- Data de nascimento:
- Fecha de nacimiento: ____/_____/_____
DD MM AAAA

- Local de nascimento:
- Lugar de nacimiento:

- Documento de identificação:
- Documento de identificación:
Tipo/Tipo:
Número/Número:
Data de Expedição/Fecha de Expedición:
País de Expedição/País de Expedición:

- Domicílio(s) conhecido(s):
- Domicilio(s) conocido(s):

- Descrição física e aspectos particulares da pessoa procurada:
- Descripción física, rasgos particulares de la persona requerida:

(Caso esteja disponível, incluir fotografia e impressões digitais, ou quaisquer outras informações julgadas úteis para a identificação da pessoa procurada.)
(Si se dispone de ello, incluir fotografía e impresiones dactilares, o cualquier otra información que pueda resultar útil para la identificación de la persona requerida.)

2. Decisão sobre a qual se baseia o Mandado MERCOSUL de Captura.
2. Decisión sobre la que se basa la Orden MERCOSUR de Detención.

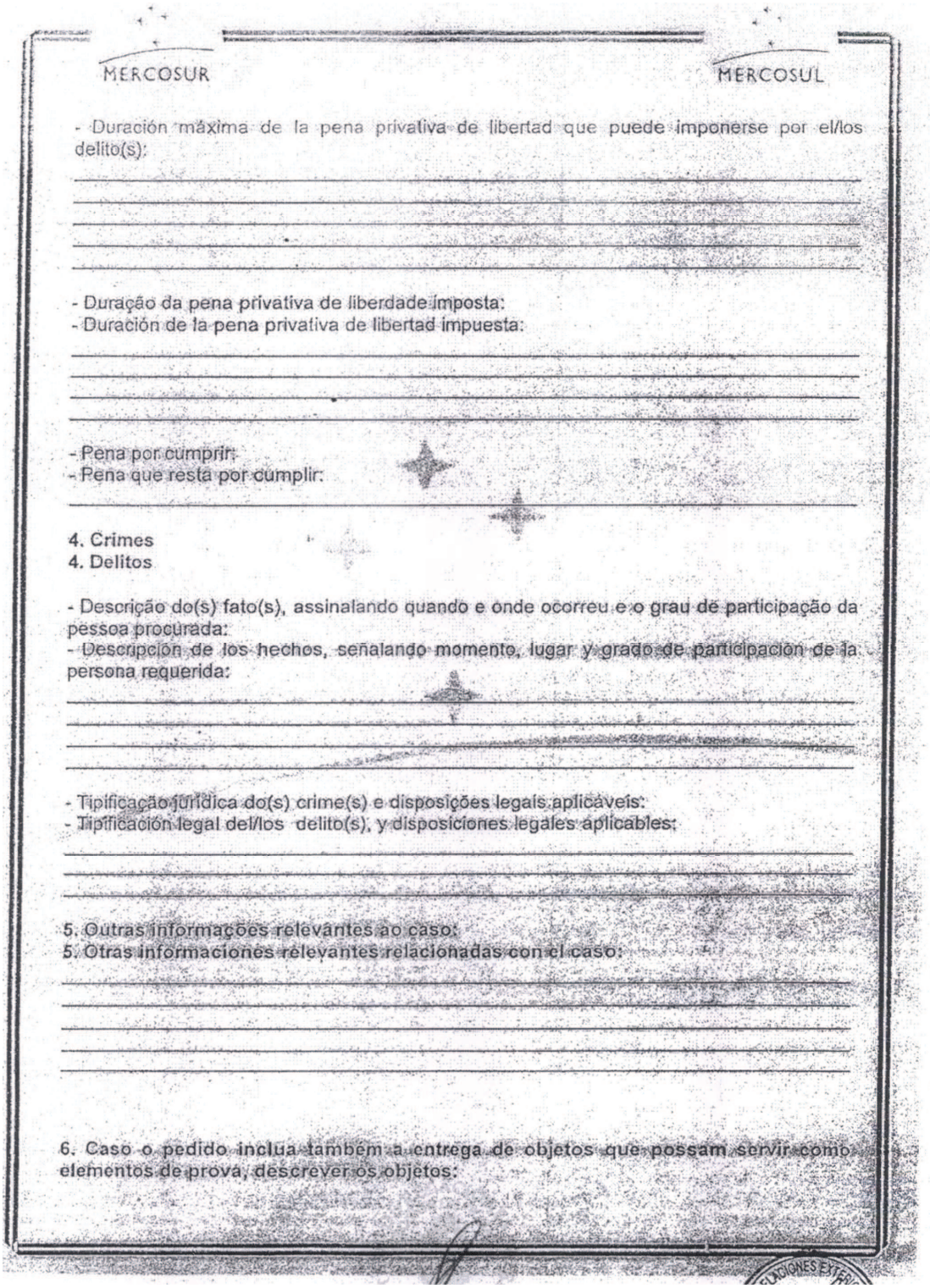
- Mandado de Prisão ou outra decisão judicial análoga:
- Orden de detención o resolución judicial de igual fuerza:

- Sentença executória:
- Sentencia ejecutoria:

3. Indicações sobre a duração da pena:
3. Indicaciones sobre la duración de la pena

- Duração máxima da pena privativa de liberdade que pode ser aplicada ao(s) crime(s):

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL



MERCOSUR MERCOSUL

- Duración máxima de la pena privativa de libertad que puede imponerse por el/los delito(s):

- Duração da pena privativa de liberdade imposta:
- Duración de la pena privativa de libertad impuesta:

- Pena por cumprir:
- Pena que resta por cumplir:

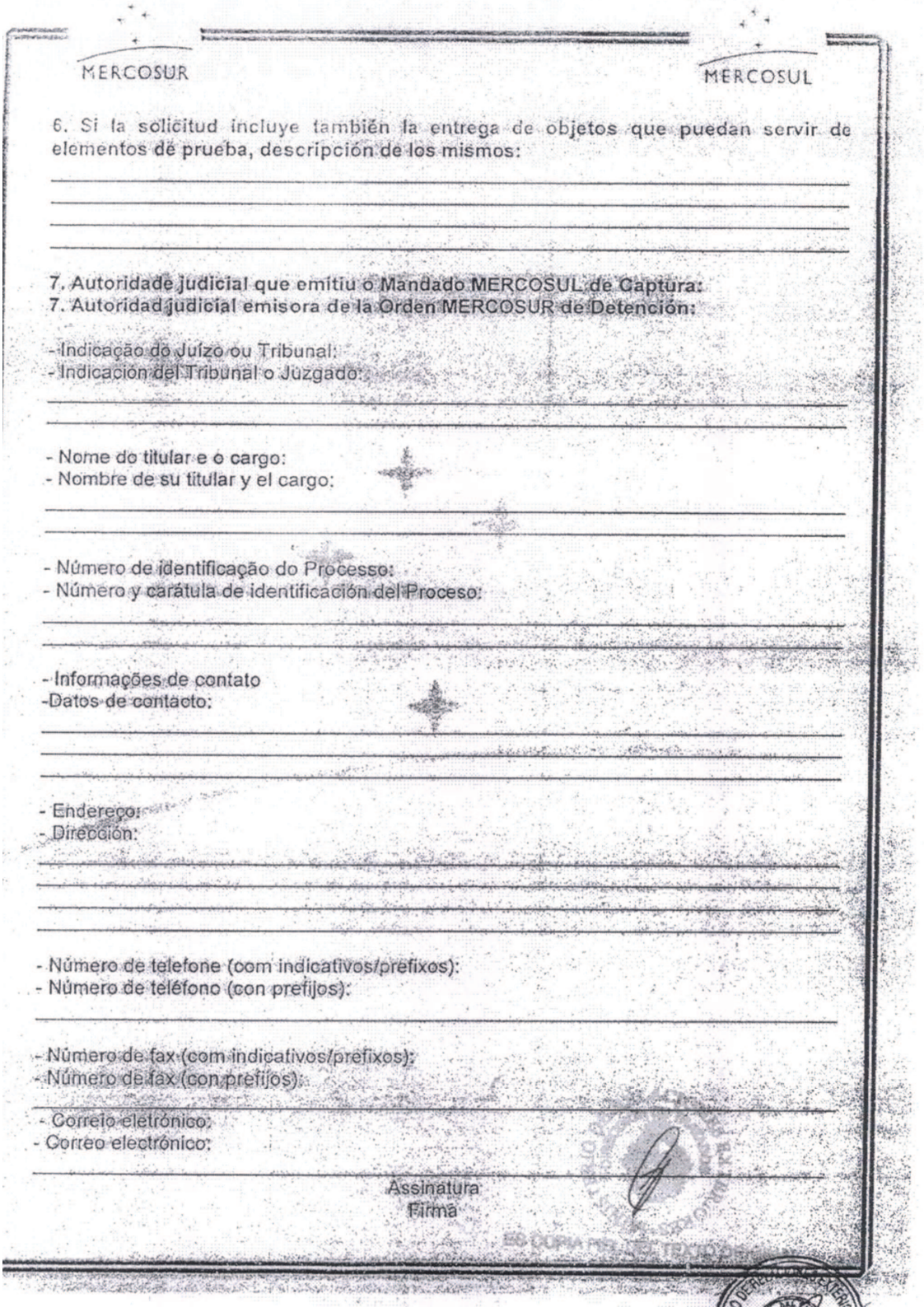
4. Crimes
4. Delitos

- Descrição do(s) fato(s), assinalando quando e onde ocorreu e o grau de participação da pessoa procurada:
- Descripción de los hechos, señalando momento, lugar y grado de participación de la persona requerida:

- Tipificação jurídica do(s) crime(s) e disposições legais aplicáveis:
- Tipificación legal del/los delito(s), y disposiciones legales aplicables:

5. Outras informações relevantes ao caso:
5. Otras informaciones relevantes relacionadas con el caso:

6. Caso o pedido inclua também a entrega de objetos que possam servir como elementos de prova, descrever os objetos:



MERCOSUR MERCOSUL

6. Si la solicitud incluye también la entrega de objetos que puedan servir de elementos de prueba, descripción de los mismos:

7. Autoridade judicial que emitiu o Mandado MERCOSUL de Captura:
7. Autoridad judicial emisora de la Orden MERCOSUR de Detención:

- Indicação do Juízo ou Tribunal:
- Indicación del Tribunal o Juzgado:

- Nome do titular e o cargo:
- Nombre de su titular y el cargo:

- Número de identificação do Processo:
- Número y carátula de identificación del Proceso:

- Informações de contato
-Datos de contacto:

- Endereço:
- Dirección:

- Número de telefone (com indicativos/prefixos):
- Número de teléfono (con prefijos):

- Número de fax (com indicativos/prefixos):
- Número de fax (con prefijos):

- Correio eletrónico:
- Correo electrónico:

Assinatura
Firma

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MERCOSUR MERCOSUL

ANEXO III

CAMPOS A COMPLETAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISME

Los campos disponibles en la actualidad son los que se adjuntan al presente documento bajo el título "Campos disponibles previstos para el formulario de almacenamiento y consulta de la información referida a la ORDEN MERCOSUR DE DETENCIÓN".

Directrices:

1. Cada Parte será responsable de las informaciones que podrán ser objeto de consulta a través del SISME.

2. Para el caso que la autoridad judicial utilice la opción prevista en el artículo 8, numeral 2, del "Acuerdo sobre la Orden MERCOSUR de Detención y Procedimientos de Entrega entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados", con relación al SISME, se deberán completar los campos indicados en el cuadro detallado en este Anexo.

3. De acuerdo a la estructura SISME vigente, la información referida a la Orden MERCOSUR de Detención que se haya registrado, solo podrá ser consultada a través del SISME por los Estados Partes y Estados Asociados del MERCOSUR.

Campos previstos para el formulario de almacenamiento y consulta de información referida a la Orden MERCOSUR de Detención

Campo	Descripción
País que solicita la Orden MERCOSUR de Detención	Sigla del país de donde se origina la Orden de Detención MERCOSUR
Organismo que solicita la Detención MERCOSUR	Nombre de organismo donde se cargara la Orden de Detención MERCOSUR
Motivo del Requerimiento	Descripción libre del tipo de requerimiento emanada por autoridad competente
Fecha de emisión de la Orden	Fecha en que la Autoridad decreta la Orden de Detención
Autoridad que solicita	Nombre del organismo/entidad judicial que ordeno la medida (Juzgado)
Nombre	Nombres de la persona buscada
Apellido paterno	Apellido paterno de la persona buscada
Apellido materno	Apellido materno de la persona buscada
Nombre del padre	Nombre del padre de la persona buscada
Nombre del madre	Nombre del madre de la persona buscada
Numero de documento de Identificación	Numero de documento de persona buscada

MERCOSUR MERCOSUL

Sexo	Sexo de persona buscada
Nacionalidad	Nacionalidad de persona buscada
Domicilio	Ultimo domicilio conocido de la Persona buscada
Causa	Identificacion de causa o expediente del caso
Tipo de delito	Descripción del tipo de delito (anexo I)
Observaciones	Texto libre para informaciones adicionales

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

- 25 -

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Acuerdo sobre la Orden MERCOSUR de Detención y Procedimientos de Entrega entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de Foz de Iguazú, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2010.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 11 de setiembre de 2019.

PATRICIA AYALA
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

=

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

REPARTIDO Nº 1217
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 4146 DE 2019

CONVENIO CON LA REPÚBLICA ITALIANA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO

A p r o b a c i ó n

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 17 de junio de 2019

Señora Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana para Eliminar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 1° de marzo de 2019.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La tendencia mundial en materia tributaria, particularmente en lo que se refiere a los impuestos sobre la renta, está orientada a facilitar y favorecer la inversión y el comercio internacionales.

Las administraciones tributarias de los diferentes países son conscientes que el comercio internacional puede ser fuente de evasión y fraude fiscal toda vez que resulte difícil, acceder a los libros y documentos que respaldan determinado negocio cuando éstos se encuentran más allá de las fronteras del domicilio del contribuyente.

Por ello, los países han optado por suscribir Tratados que aspiran por una parte a tutelar que las administraciones tributarias de los Estados intervinientes, tengan acceso a la información requerida para detectar la evasión y los fraudes fiscales que eventualmente se produzcan en virtud de negocios o inversiones realizados fuera del domicilio fiscal del contribuyente.

Por otra parte, estos Tratados tutelan a los contribuyentes para que al realizar negocios o efectuar inversiones en otros países, no resulten castigados a través de la doble tributación, esto es, a tributar en el país donde se realiza la inversión, además de aquellos tributos que el contribuyente ha de pagar en el país donde se encuentra su domicilio fiscal.

En particular, este Instrumento tiene el objetivo de promover la cooperación internacional en materia tributaria a través del intercambio de información y a su vez elimina los efectos provenientes de la doble imposición, con la finalidad de promover y proteger las relaciones económicas y comerciales.

La República Oriental del Uruguay ha adoptado estándares internacionales en la materia en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

(OCDE) e integra el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal en Materia Tributaria de dicha Organización, desde su fundación en setiembre de 2000

Al respecto, este Convenio forma parte del compromiso asumido por la República en materia de cooperación fiscal internacional el que se alinea con los modelos de Tratados vigentes en la materia.

Este Convenio contempla el intercambio de información fiscal entre los Estados Parte, siendo la información proporcionada estrictamente confidencial (Artículo 25).

A su vez, el Instrumento prevé un conjunto de cláusulas que incorporan mecanismos necesarios para eliminar los efectos indeseados de la doble imposición.

Por su parte, para hacer viable la aplicación de los referidos mecanismos, se efectúan definiciones en materia de residencia fiscal y sobre los impuestos que serán objeto de eliminación de la doble imposición internacional.

TEXTO

El ámbito de aplicación del Convenio, de conformidad con lo estipulado en su Artículo 1 son las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

En cuanto a los impuestos que son objeto del Convenio, para el caso de Uruguay, se encuentran detallados en el Artículo 2, inciso 3 literal b), estos son: el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR) y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

Asimismo, se definen los términos que se utilizan en el Instrumento, a fin de darles un sentido único y conocer su alcance.

También, se establecen los métodos para evitar la doble tributación, el método de solución de controversias y los mecanismos de intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados Contratantes.

El Acuerdo consta de un preámbulo, 6 capítulos comprendiendo 30 artículos y un Protocolo.

Capítulo I - ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 1 - PERSONAS COMPRENDIDAS

Artículo 2 - IMPUESTOS COMPRENDIDOS

Capítulo II - DEFINICIONES

Artículo 3 - DEFINICIONES GENERALES

Artículo 4 - RESIDENTE

Artículo 5 - ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

Capítulo III - IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS

Artículo 6 - RENTAS INMOBILIARIAS

Artículo 7 - UTILIDADES EMPRESARIALES

Artículo 8 - NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA INTERNACIONAL

Artículo 9 - EMPRESAS ASOCIADAS

Artículo 10 - DIVIDENDOS

Artículo 11 - INTERESES

Artículo 12 - REGALÍAS

Artículo 13 - GANANCIAS DE CAPITAL

Artículo 14 - SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

Artículo 15 - RENTA DEL TRABAJO DEPENDIENTE

Artículo 16 - HONORARIOS DE DIRECTORES

Artículo 17 - ARTISTAS DEL ESPECTÁCULO Y DEPORTISTAS

Artículo 18 - PENSIONES

Artículo 19 - FUNCIONES PÚBLICAS

Artículo 20 - ESTUDIANTES

Artículo 21 - OTRAS RENTAS

Capítulo IV - MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

Artículo 22 - ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

Capítulo V - DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 23 - NO DISCRIMINACIÓN

Artículo 24 - PROCEDIMIENTO AMISTOSO

Artículo 25 - INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Artículo 26 - MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y DE OFICINAS CONSULARES

Artículo 27 - REEMBOLSOS

Artículo 28 - DERECHO A LOS BENEFICIOS

Capítulo VI - DISPOSICIONES FINALES

Artículo 29 - ENTRADA EN VIGOR

Artículo 30 - TERMINACIÓN

En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de este tipo de Acuerdos, el Poder Ejecutivo solícita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera a la señora Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
RODOLFO NIN NOVOA
DANILO ASTORI

———————

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana para Eliminar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 1° de marzo de 2019.

Montevideo, 17 de junio de 2019

RODOLFO NIN NOVOA
DANILO ASTORI

CONVENIO

ENTRE

LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Y

LA REPÚBLICA ITALIANA

PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL

La República Oriental del Uruguay y
La República Italiana

Con el deseo de seguir desarrollando sus relaciones económicas y de reforzar su cooperación en materia tributaria,

Con la intención de concluir un convenio para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta sin generar oportunidades para la no imposición o para una imposición reducida mediante evasión o elusión fiscal (incluida la práctica de la búsqueda del convenio más favorable – *treaty shopping* - que persigue la obtención de los beneficios previstos en este Convenio para el beneficio indirecto de residentes de terceros Estados)

Han acordado lo siguiente:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE TRATADOS
ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

5

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 1

PERSONAS COMPRENDIDAS

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

Artículo 2

IMPUESTOS COMPRENDIDOS

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, sus subdivisiones políticas o sus autoridades locales, cualquiera que sea el sistema de exacción.

2. Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de la propiedad mobiliaria o inmobiliaria, los impuestos sobre los importes totales de os sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías latentes.

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son en particular:

a) en Italia:

(i) el impuesto a la renta personal (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

(ii) el impuesto a la renta corporativo (l'imposta sul reddito delle società) y

(iii) el impuesto regional sobre actividades productivas (l'imposta regionale sulle attività produttive),

sean o no recaudados por retención en la fuente

(en adelante denominados como "impuesto italiano")

b) en Uruguay:

(i) el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)

(ii) el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF),

(iii) el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR), y

(iv) el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS)

(en adelante denominados como "impuesto uruguayo")

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

Articulo 3

DEFINICIONES GENERALES

1. A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:

a) el término "Italia" significa la República Italiana e incluye cualquier área más allá de las aguas territoriales que sea designada como un área dentro de la cual Italia, de acuerdo con su legislación y de conformidad con el derecho internacional, pueda ejercer derechos de soberanía con respecto a la exploración y explotación de los recursos naturales del lecho marino, el subsuelo y las aguas superyacentes.

b) el término "Uruguay" significa la República Oriental del Uruguay y cuando se utilice en sentido geográfico significa el territorio en el que se aplican las leyes impositivas, incluyendo el espacio aéreo, las áreas marítimas, bajo jurisdicción uruguaya o en las que se ejerzan derechos de soberanía, de acuerdo con el derecho internacional y la legislación nacional;

c) las expresiones "un Estado Contratante" y "el otro Estado Contratante" significan Uruguay o Italia, según el contexto.

d) el término "persona" comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas.

e) el término "sociedad" significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

f) las expresiones "empresa de un Estado Contratante" y "empresa del otro Estado Contratante" significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado Contratante.

g) la expresión "tráfico internacional" significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave, salvo cuando el buque o aeronave sea explotado únicamente entre puntos situados en un Estado Contratante y la empresa que explote el buque o aeronave no sea una empresa de ese Estado;

h) la expresión "autoridad competente" significa

(i) en el caso de Italia, el Ministerio de Economía y Finanzas o sus representantes autorizados

(ii) en el caso de Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas o su representante autorizado.

i) el término "nacional", en relación con un Estado Contratante, significa

(i) toda persona física que posea la nacionalidad o ciudadanía de este Estado Contratante, y

(ii) toda persona jurídica sociedad de personas - partnership- o asociación, que tenga la calidad de tal conforme a la legislación vigente en este Estado Contratante.

j) la expresión "fondo de pensión reconocido" de un Estado significa una entidad o acuerdo establecido en ese Estado, que es tratado como una persona separada conforme a la legislación fiscal de ese Estado y

(i) que es establecido y opera exclusiva, o casi exclusivamente, para administrar o proveer beneficios de retiro y beneficios auxiliares o accesorios a personas físicas, y que es

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION DE TRATADOS
ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

regulado como tal por ese Estado o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales; o

(ii) que es establecido y opera exclusiva, o casi exclusivamente, para invertir fondos en beneficios de entidades o acuerdos referidos en la subdivisión (i)

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante en un momento determinado, cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por esa legislación fiscal sobre el que resultaría de otras leyes de ese Estado.

Artículo 4

RESIDENTE

1. A los efectos de este Convenio, la expresión "residente de un Estado Contratante" significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, lugar de constitución, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o autoridades locales, así como también a un fondo de pensión reconocido de ese Estado. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado

2. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

a) dicha persona será considerada residente solamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS
ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

residente solamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales).

b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solamente del Estado donde viva habitualmente.

c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente solamente del Estado del que sea nacional;

d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos las autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona distinta de una persona física, sea residente de ambos Estados Contratantes las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por determinar, mediante acuerdo amistoso, el Estado del cual dicha persona sera considerada residente a los efectos del Convenio, teniendo en cuenta su sede de dirección efectiva, el lugar de su constitución o de creación, y cualquier otro factor relevante. En ausencia de ese acuerdo, dicha persona no tendrá derecho a las desgravaciones o exenciones previstas en el presente Convenio, salvo en la medida y en la forma que puedan acordar las autoridades competentes de los Estados Contratantes.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES • DIRECCION DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

Artículo 5

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

1. A efectos del presente Convenio, la expresión "establecimiento permanente" significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

2. La expresión "establecimiento permanente" comprende, en especial

a) las sedes de dirección,
b) las sucursales;
c) las oficinas;
d) las fábricas,
e) los talleres; y
f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales

3. La expresión "establecimiento permanente" comprende asimismo

a) una obra, o un proyecto de construcción o instalación o montaje o las actividades de supervisión relacionadas con ellos, pero solo si la duración de dicha obra, proyecto o actividad excede de seis meses,

b) la prestación de servicios por parte de una empresa por intermedio de sus empleados u otro personal contratado por la empresa para dicho propósito, pero sólo en el caso de que las actividades de esa naturaleza prosigan (en relación con el mismo proyecto o con un proyecto conexo) en un Estado Contratante, durante un periodo o periodos que en total excedan de 183 días, dentro de un periodo cualquiera de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado

4. No obstante las disposiciones anteriores de este Artículo, se considera que la expresión "establecimiento permanente" no incluye

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES • DIRECCION DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa.

b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;

c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;

d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías o de recoger información para la empresa;

e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad,

f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados (a) a (e),

a condición de que dicha actividad o, en el caso del subapartado f), el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios, tenga un carácter auxiliar o preparatorio.

4.1. El apartado 4 no será aplicable a un lugar fijo de negocios que sea usado o mantenido por una empresa, si la misma empresa o una empresa estrechamente vinculada realiza actividades empresariales en el mismo lugar o en otro lugar situado en el mismo Estado Contratante, y

a) ese lugar u otro lugar constituye una establecimiento permanente para la empresa o para la empresa estrechamente vinculada, en virtud de lo dispuesto en el presente Artículo, o

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS
ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

12

b) el conjunto de la actividad que resulta de la combinación de las actividades realizadas por las dos empresas en el mismo lugar, o por la misma empresa o empresas estrechamente vinculadas en los dos lugares, no sea de carácter auxiliar o preparatorio.

siempre que las actividades empresariales realizadas por las dos empresas en el mismo lugar, o por la misma empresa o empresas estrechamente vinculadas en los dos lugares, constituyan funciones complementarias que sean parte de una operación empresarial cohesionada

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, pero sujeto a lo dispuesto en el apartado 6, cuando una persona actúe en un Estado Contratante por cuenta de una empresa y, en el marco de tales actividades, habitualmente concluya contratos, o habitualmente juegue el rol principal tendiente a la conclusión de contratos que son concluidos rutinariamente sin modificaciones materiales por parte de la empresa, y tales contratos se realizan

a) en nombre de la empresa, o

b) para la transferencia de la propiedad, o para otorgar el derecho al uso de bienes cuya propietaria sea la empresa o que la empresa tenga el derecho a su uso, o

c) para la prestación de servicios por parte de esa empresa,

se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a no ser que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCION DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

6. El apartado 5 no será aplicable cuando la persona que actúe en un Estado Contratante en nombre de una empresa del otro Estado Contratante realice actividades en el Estado mencionado en primer lugar como un agente independiente y actúe para la empresa dentro del marco ordinario de tales actividades. No obstante, cuando una persona actúe exclusiva o casi exclusivamente en nombre de una o más empresas a las que está estrechamente vinculada, esa persona no será considerada un agente independiente en el sentido del presente apartado con respecto a cualquiera de dichas empresas.

7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado Contratante o que realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.

8. A los efectos del presente Artículo, una persona o empresa esta estrechamente vinculada a una empresa si, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes, una tiene el control de la otra o ambas están bajo el control de las mismas personas o empresas. En todo caso se considerará que una persona o empresa está estrechamente vinculada a una empresa si una posee, directa o indirectamente, más del 50 por ciento de las participaciones en los beneficios de la otra (o, en el caso de una sociedad, más del 50 por ciento de la totalidad de los votos y del valor de sus acciones, o de las participaciones en los beneficios patrimoniales de la sociedad), o si otra persona o empresa posee, directa o indirectamente, más del 50 por ciento de las participaciones en los beneficios (o, en el caso de una sociedad, más del 50 por ciento de la totalidad de los votos y del valor de sus acciones, o de las participaciones en los beneficios patrimoniales de la sociedad) de la persona y de la empresa o de las dos empresas

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

CAPÍTULO III

IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS

Artículo 6

RENTAS INMOBILIARIAS

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de la propiedad inmobiliaria (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situada en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. La expresión "propiedad inmobiliaria" tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado Contratante en que la propiedad en cuestión esté situada. Dicha expresión comprende en todo caso la propiedad accesoria a la propiedad inmobiliaria, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de la propiedad inmobiliaria y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques y aeronaves no tendrán la consideración de propiedad inmobiliaria.

3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas derivadas de la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de la propiedad inmobiliaria.

4. Cuando la propiedad de acciones u otras participaciones en una sociedad o fideicomiso le permitan al propietario de tales acciones o participaciones el disfrute de propiedad inmobiliaria detentada por la sociedad o fideicomiso, la renta por la utilización directa, el arrendamiento o el uso, así como de cualquier otra forma de explotación de tales derechos de disfrute, puede someterse a imposición en el Estado Contratante en que la propiedad en cuestión esté situada.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES • DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

17

5. Las disposiciones de los apartados 1, 3 y 4 se aplican igualmente a las rentas derivadas de la propiedad inmobiliaria de una empresa y a las rentas derivadas de la propiedad inmobiliaria utilizada para el ejercicio de servicios personales independientes.

Artículo 7

UTILIDADES EMPRESARIALES

1. Las utilidades de una empresa de un Estado Contratante solamente podrán someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. En tal caso, dichas utilidades podrán ser gravadas en el otro Estado, pero solamente en la parte atribuible a ese establecimiento permanente de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

2. A los efectos de lo dispuesto por este Artículo y por el Artículo 22 las utilidades que sean atribuibles en cada Estado Contratante al establecimiento permanente referido en el apartado 1 son las utilidades que pudiera esperarse que obtuviera, en particular en sus acuerdos con otras partes de la empresa, si fuera una empresa separada e independiente actuando en las mismas o similares actividades bajo las mismas o similares condiciones, teniendo en cuenta las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por la empresa a través del establecimiento permanente y a través de otras partes de la empresa.

3. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2, un Estado Contratante ajuste las utilidades que sean atribuibles a un establecimiento de una empresa de uno de los Estado Contratante, y en consecuencia grave las utilidades que ya han sido gravadas en el otro Estado, el otro Estado practicara el ajuste correspondiente de la cuantia del impuesto que ha percibido sobre esas utilidades, en la medida que sea necesario para eliminar la doble imposición sobre las mismas. Para determinar dicho ajuste, las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán en caso necesario

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

4. Cuando las utilidades comprendan elementos de renta regulados separadamente en otros Artículos de este Convenio, las disposiciones de dichos artículos no quedarán afectadas por las del presente Articulo

Artículo 8

NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA INTERNACIONAL

1. Las utilidades de una empresa de un Estado Contratante procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional podrán someterse a imposición solamente en ese Estado.

2. Las disposiciones del apartado 1 son también aplicables a las utilidades procedentes de la participación en un consorcio -pool-, en una empresa mixta o en una agencia de explotación internacional.

Artículo 9

EMPRESAS ASOCIADAS

1. Cuando

a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de otro Estado Contratante, o

b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante,

y, en uno y otro caso, las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, las

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

utilidades que habrían sido obtenidas por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en las utilidades de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.

2. Cuando un Estado Contratante incluya en las utilidades de una empresa de ese Estado –y, en consecuencia, grave– las de una empresa de otro Estado que ya han sido gravadas por este segundo Estado, y estas utilidades así incluidas son las que habrían sido realizadas por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las acordadas entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esas utilidades. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán en caso necesario

Artículo 10

DIVIDENDOS

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante pueden someterse también a imposición en ese Estado según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:

a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (excluidas las sociedades de personas –partnerships–) que posea directamente al menos el 10 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos;

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION DE TRATADOS
ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos en los demás casos.

Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de las utilidades con cargo a las cuales se pagan los dividendos.

3. El término "dividendos", en el sentido de este Artículo, significa las rentas de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las participaciones mineras, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en las utilidades, así como las rentas de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones por la legislación del Estado de residencia de la sociedad que hace la distribución.

Artículo 11

INTERESES

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, los intereses procedentes de un Estado Contratante pueden someterse también a imposición en ese Estado según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los intereses.

3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante, podrán someterse a imposición solamente en ese otro Estado si el perceptor es el beneficiario efectivo de los intereses y

(a) es el Estado, una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o el Banco Central;

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

(b) es una institución financiera pública establecida de conformidad con la legislación del Estado Contratante;

(c) es pagado a una institución financiera por un préstamo de al menos tres años para la financiación de proyectos de inversión;

(d) es pagado por el Estado del cual proceden los intereses, o por una de sus subdivisiones políticas, autoridades locales u organismos de derecho público; o

(e) es pagado con respecto de un préstamo, una deuda o un crédito, que se deba o haya sido concedido, garantizado o asegurado, por ese Estado o una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o por una agencia de financiación de exportaciones del mismo

4. El término "intereses", en el sentido de este Artículo, significa las rentas de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en las utilidades del deudor, y en particular las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos del presente Artículo.

5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante realiza en el otro Estado Contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí o ejerce en ese otro Estado servicios personales independientes desde una base fija situada allí, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda

6. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o base fija, en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y estos últimos son soportados por el citado establecimiento permanente o base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado en que esté situado el susodicho establecimiento permanente o base fija.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION DE TRATADOS
ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

7. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento permanente situado allí, o ejerce en ese otro Estado servicios personales independientes desde una base fija situada allí, y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda.

5. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga utilidades o rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir impuesto alguno sobre los dividendos pagados por la sociedad salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o una base fija, situada en ese otro Estado, ni tampoco someter las utilidades no distribuidas de la sociedad a un impuesto sobre las mismas, aunque los dividendos pagados o las utilidades no distribuidas consistan, total o parcialmente, en utilidades o rentas procedentes de ese otro Estado.

Artículo 12

REGALÍAS

1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y cuyo beneficiario efectivo es un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES • DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

2. Sin embargo, las regalías procedentes de un Estado Contratante tambien pueden someterse a imposición en ese Estado según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalias es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de las regalías.

3. El término "regalías", en el sentido de este Artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, o las películas o cintas para su difusión radial o televisiva, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso o el derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante del que proceden las regalias, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado alli o ejerce en ese otro Estado servicios personales independientes desde una base fija situada allí, y el bien o el derecho por el que se pagan las regalias está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija En tal caso son aplicables las disposiciones del Articulo 7 o del Articulo 14 según corresponda.

5. Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de las regalías, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o base fija en relación con el cual se haya contraído la obligación del pago de las regalias, y tales regalias son soportadas por el citado establecimiento permanente o base fija, dichas regalias se considerarán procedentes del Estado en que esté situado el susodicho establecimiento permanente o base fija.

6. Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo o por las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por las que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

se aplicarán más que a este último importe. En tal caso la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

Artículo 13

GANANCIAS DE CAPITAL

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de propiedad inmobiliaria tal como se define en el Artículo 6 situada en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de propiedad mobiliaria que forme parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, o de propiedad mobiliaria relacionada a una base fija disponible para un residente de un Estado Contratante en el otro Estado Contratante a fin de ejercer servicios personales independientes, incluyendo las ganancias derivadas de la enajenación de dicho establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la empresa) o de dicha base fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

3. Las ganancias de una empresa de un Estado Contratante que explote buques o aeronaves en tráfico internacional, derivadas de la enajenación de dichos buques o aeronaves, o de propiedad mobiliaria afecta a la explotación de dichos buques o aeronaves, podrán someterse a imposición solamente en ese Estado.

4. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante en la enajenación de acciones o de otros derechos comparables, tales como participaciones en una sociedad o un fideicomiso, pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si, en cualquier momento durante los 365 días anteriores a la enajenación, más del 50 por ciento del valor de tales acciones o derechos comparables procede, de forma directa o indirecta, de propiedad inmobiliaria en el sentido del Artículo 6, situada en ese otro Estado

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS
ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

25

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o de otras participaciones en una sociedad o fideicomiso, que otorguen al propietario de dichas acciones o participaciones el derecho al disfrute de bienes inmuebles situados en un Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado.

6. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante en a enajenación de acciones o de otras participaciones en una sociedad o fideicomiso distintas de las mencionadas en los apartados 4 y 5. podrán someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida la sociedad o fideicomiso solamente si el enajenante, en cualquier momento durante los 365 días anteriores a la enajenación, tuvo una participación de al menos el 50 por ciento en el capital de la sociedad o fideicomiso. Sin embargo, el impuesto así exigido no podrá exceder del 12 por ciento del monto de las ganancias Este apartado no se aplica a las ganancias derivadas de la enajenación o intercambio de acciones en el marco de una reorganización de una sociedad. una fusión, escisión u operación similar.

7. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los apartados anteriores pueden someterse a imposición sólo en el Estado Contratante en que resida el enajenante

Artículo 14

SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

1. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante por la prestación de servicios profesionales o el ejercicio de otras actividades de carácter independiente solamente podrán someterse a imposición en ese Estado, excepto en las siguientes circunstancias, en que esas rentas también podrán someterse a imposición en el otro Estado Contratante:

a) si tiene una base fija disponible regularmente en el otro Estado Contratante con el propósito de realizar sus actividades; en tal caso.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

únicamente la parte de las rentas que sea atribuible a dicha base fija puede someterse a imposición en ese otro Estado; o

b) si su permanencia en el otro Estado Contratante es por un período o períodos que en conjunto sumen o excedan 183 días dentro de cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado; en tal caso, únicamente la parte de la renta que provenga de sus actividades realizadas en ese otro Estado puede someterse a imposición en ese otro Estado.

2. La expresión "servicios profesionales" incluye especialmente las actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o docente, así como las actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, dentistas y contadores.

Artículo 15

RENTA DEL TRABAJO DEPENDIENTE

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19 los sueldos salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un Estado Contratante en razón de un trabajo dependiente sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente se desarrolle en el otro Estado Contratante. Si el trabajo dependiente se desarrolla en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado Contratante.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante en razón de un trabajo dependiente realizado en el otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar si:

a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración no exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado, y

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS
ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

b) las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador que no sea residente del otro Estado Contratante, y

c) las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento permanente o base fija que el empleador tenga en el otro Estado Contratante.

3. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante por un trabajo dependiente como miembro de la dotación regular de un buque o aeronave, que es realizado a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional, que no sea a bordo de un buque o aeronave explotado únicamente dentro del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición solamente en el Estado mencionado en primer lugar.

4. Los pagos que procedan de un Estado Contratante en razón de un trabajo dependiente como indemnización por despido relacionada con ese trabajo dependiente, pueden someterse a imposición solamente en ese Estado Contratante.

Artículo 16

HONORARIOS DE DIRECTORES

Los honorarios de directores y otras retribuciones similares que un residente de un Estado Contratante obtenga como miembro del directorio o del consejo de administración o de vigilancia, de una sociedad residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

Artículo 17

ARTISTAS DEL ESPECTÁCULO Y DEPORTISTAS

1. No obstante lo dispuesto en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el otro Estado Contratante en calidad de artista del espectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio o televisión o músico o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. No obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, actuando en esa calidad, se atribuyan no ya al propio artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde se realicen las actividades del artista del espectáculo o del deportista.

Artículo 18

PENSIONES

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del Artículo 19, las pensiones y demás remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado

Artículo 19

FUNCIONES PÚBLICAS

1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, pagadas por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales a una persona física por los servicios prestados a

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES • DIRECCION DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona física es un residente de ese Estado que:

(i) es nacional de ese Estado, o

(ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estaco solamente para prestar los servicios.

2. a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales, bien directamente o con cargo a fondos constituidos por ellos, a una persona física por los servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

b) Sin embargo, dichas pensiones y otras remuneraciones similares sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si la persona física es residente y nacional de ese Estado.

Artículo 20

ESTUDIANTES

1. Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o capacitación un estudiante o una persona en prácticas que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un Estado Contratante, residente del otro Estado Contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios o capacitación, no

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS
ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

pueden someterse a imposición en ese Estado Contratante siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado Contratante.

2. Los beneficios del presente Artículo se extenderán solamente por un período que no exceda de seis años consecutivos desde la fecha de su arribo al Estado mencionado en primer lugar.

3. Lo dispuesto en los Artículos 15, 16, 17 y 18 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones, y otras remuneraciones similares, pagados por los servicios prestados en el marco de una actividad o un negocio realizado por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales.

Artículo 21

OTRAS RENTAS

1. Las rentas de un residente de un Estado Contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los anteriores Artículos del presente Convenio podrán someterse a imposición solamente en ese Estado.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de la propiedad inmobiliaria en el sentido del apartado 2 del Artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado Contratante, realice en el otro Estado Contratante una actividad o un negocio por medio de un establecimiento permanente situado en el mismo, o ejerce en dicho otro Estado servicios personales independientes desde una base fija allí situada, y el derecho o bien por el que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las rentas de un residente de un Estado Contratante no mencionadas en los anteriores Artículos de este Convenio que procedan del otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado si dichas rentas no están sujetas a impuestos en el Estado mencionado en primer lugar.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

3C

CAPÍTULO IV

MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

Artículo 22

ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

1. En el caso de Italia, la doble imposición se eliminará de la manera siguiente:

los residentes de Italia que obtengan rentas que, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en Uruguay, pueden incluir dichas rentas en la base imponible sobre la cual los impuestos son aplicables en Italia, sujeto a las disposiciones aplicables de la legislación italiana.

Sujeto a las disposiciones aplicables de la legislación italiana, Italia permitirá deducir del impuesto así calculado, los impuestos a las rentas pagados en Uruguay, pero tal deducción no podrá exceder la proporción del impuesto italiano atribuible a dichas rentas, que tales rentas tengan sobre la totalidad de la renta.

Cuando de conformidad con cualquiera de las disposiciones de este Convenio, la renta obtenida por un residente de Italia esté exenta de impuestos en Italia, Italia podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas exentas para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas de ese residente.

2. En el caso de Uruguay, la doble imposición se eliminará de la manera siguiente:

a) los residentes de Uruguay que obtengan rentas que, conforme a la legislación italiana y a las disposiciones del presente Convenio, hayan

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS
ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

sido sometidas a imposición en Italia, podrán acreditar el impuesto abonado en tal concepto contra cualquier impuesto uruguayo a ser abonado con relación a la misma renta, sujeto a las disposiciones aplicables de la legislación uruguaya. Sin embargo, tal deducción no podrá exceder la parte del impuesto uruguayo sobre la renta, calculado previo al otorgamiento de la misma.

b) Cuando de conformidad con cualquiera de las disposiciones de este Convenio, la renta obtenida por un residente de Uruguay esté exenta de impuestos en Uruguay, Uruguay podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas exentas para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas de ese residente.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES • DIRECCION DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

3

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 23

NO DISCRIMINACIÓN

1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. No obstante las disposiciones del Artículo 1, la presente disposición es también aplicable a las personas que no sean residentes de uno o de ninguno de los Estados Contratantes.

2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante no serán sometidos a imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades. Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.

3. A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del Artículo 9, del apartado 7 del Artículo 11 o del apartado 6 del Artículo 12, los intereses, regalías y demás gastos pagados por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante serán deducibles para determinar las utilidades sujetas a imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si se hubieran pagado a un residente del Estado mencionado en primer lugar.

4. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado Contratante, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún impuesto u obligación relativa al mismo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

3

que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del Estado Contratante mencionado en primer lugar.

5. No obstante las disposiciones del Artículo 2, las disposiciones del presente Artículo son aplicables a todos los impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación.

Artículo 24

PROCEDIMIENTO AMISTOSO

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposicicnes del presente Convenio podrá, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, someter su caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del Artículo 23, a la del Estado Contratante del que sea nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.

2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión por medio de un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado Contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo será aplicable independientemente de los plazos previstos por el derecho interno de los Estados Contratantes

3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio por medio de un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para tratar de eliminar la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCION DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

4. A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores, las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán comunicarse directamente.

5. Cuando

a) en virtud del apartado 1, una persona ha presentado un caso a la autoridad competente de un Estado Contratante alegando que las acciones de uno o ambos Estrados Contratantes le han ocasionado una imposición no conforme con las disposiciones del presente Convenio, y

b) las autoridades competentes no logran alcanzar un acuerdo para resolver ese caso conforme a lo dispuesto en el apartado 2, en un plazo de dos años desde la presentación del caso a la autoridad competente del otro Estado Contratante,

todos los temas no resueltos que surjan del caso podrán ser sometidos a arbitraje si la persona así lo solicita y las autoridades competentes de los Estados Contratantes así lo acuerdan. Sin embargo, estos temas no resueltos no serán sometidos a arbitraje si ya existiera un fallo expedido por una corte o tribunal administrativo de cualquiera de los Estados. A menos que una persona directamente afectada por el caso no acepte el acuerdo amistoso que implementa el fallo arbitral, dicho fallo será vinculante para ambos Estados Contratantes y se implementará independientemente de los plazos previstos por el derecho interno de estos Estados. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo acuerdo el modo de aplicación de este apartado.

Artículo 25

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán la información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en el

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS
COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

presente Convenio o para administrar y exigir lo dispuesto en la legislación nacional de los Estados Contratantes relativa a los impuestos de toda clase y naturaleza percibidos por los Estados Contratantes, sus subdivisiones o autoridades locales en la medida en que la imposición prevista en el mismo no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no vendrá limitado por los Artículos 1 y 2.

2. La información recibida por un Estado Contratante en virtud del apartado 1 será mantenida secreta de la misma forma que la información obtenida en virtud del derecho interno de ese Estado y sólo se desvelará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la liquidación o recaudación de los impuestos a los que hace referencia el apartado 1, de su aplicación efectiva o de la persecución del incumplimiento relativo a los mismos, de la resolución de los recursos en relación con los mismos o de la supervisión de las funciones anteriores. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para estos fines. Podrán desvelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales. No obstante lo anterior, la información recibida por un Estado Contratante puede ser usada para otros propósitos cuando dicha información pueda ser usada para esos otros propósitos conforme la legislación vigente de ambos Estados, y la autoridad competente del Estado que suministre la información autorice dicho uso.

3. En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 podran interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:

a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o practica administrativa, o a las del otro Estado Contratante;

b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado Contratante;

c) suministrar información que revele secretos comerciales, gerenciales, industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

4. Si un Estado Contratante solicita información conforme al presente Artículo, el otro Estado Contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con el fin de obtener la información solicitaca, aun cuando ese otro Estado pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está limitada por lo dispuesto en el apartado 3 siempre y cuando este apartado no sea interpretado para impedir a un Estado Contratante proporcionar información exclusivamente por la ausencia de interés doméstico en la misma.

5. En ningún caso las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de permitir a un Estado Contratante negarse a proporcionar información únicamente porque ésta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras, o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esa información haga referencia a la participación en la titularidad de una persona.

Artículo 26

MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y DE OFICINAS CONSULARES

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

Artículo 27

REEMBOLSOS

Salvo cuando los beneficios del presente Convenio apliquen directamente, los impuestos retenidos en la fuente en un Estado Contratante serán reembolsados de conformidad con la legislación y procedimientos domésticos, a solicitud del contribuyente que sea residente del otro Estado Contratante y que tenga derecho a dichos beneficios, siempre y cuando el

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE TRATADOS
ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

derecho a recaudar los impuestos esté limitado por las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 28

DERECHO A LOS BENEFICIOS

1. No obstante las demás disposiciones de este Convenio, los beneficios concedidos en virtud del mismo no se otorgarán respecto de un elemento de renta cuando sea razonable concluir, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes, que el acuerdo u operación que directa o indirectamente genera el derecho a percibir ese beneficio tiene entre sus objetivos principales la obtención del mismo, excepto cuando se determine que la concesión del beneficio en esas circunstancias es conforme con el objeto y propósito de las disposiciones pertinentes de este Convenio.

2. (a) Cuando

i) una empresa de un Estado Contratante obtenga rentas procedentes del otro Estado Contratante y el Estado mencionado en primer lugar considere dichas rentas como atribuibles a un establecimiento permanente de la empresa situada en una tercera jurisdicción, y

ii) los beneficios atribuibles a dicho establecimiento permanente estén exentos de imposición en el Estado Contratante mencionado en primer lugar,

los beneficios del Convenio no se aplicarán a ningún elemento de renta sobre el que el impuesto en la tercera jurisdicción sea inferior al 60 por ciento del impuesto que se hubiera aplicado en el Estado Contratante mencionado en primer lugar sobre dicho elemento de renta en caso de que el establecimiento permanente estuviera situado en él. En tal caso, toda renta a la que sean aplicables las disposiciones de este apartado seguirá siendo gravable conforme a la normativa interna del otro Estado Contratante, con independencia de cualquier otra disposición del Convenio

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

(b) El subapartado (a) no se aplicará si la renta procedente del otro Estado Contratante descrito en el subapartado (a) es incidental al ejercicio efectivo de una actividad económica a través de un establecimiento permanente, o está relacionada con ella (que no sea la inversión, gestión o simple tenencia de inversiones por cuenta de la empresa, a menos que se trate de una actividad de banca, seguros o valores efectuada por un banco, una compañía de seguros o un agente de valores registrado, respectivamente)

(c) En caso de que en virtud del subapartado (a) se denieguen los beneficios previstos en el Convenio respecto de un elemento de renta obtenido por un residente de un Estado Contratante, la autoridad competente del otro Estado Contratante podrá, no obstante, conceder dichos beneficios en relación con ese elemento de renta si, en respuesta a una solicitud planteada por dicho residente, dicha autoridad competente determina que la concesión de los beneficios está justificada a la vista de las razones por las que dicho residente no satisfizo los requisitos de los subapartados (a) y (b). La autoridad competente del Estado Contratante al que se presenta la solicitud a la que se refiere la frase anterior por un residente del otro Estado Contratante, consultará con la autoridad competente de ese otro Estado Contratante antes de aceptar o denegar la petición.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE TRATADOS
ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 29

ENTRADA EN VIGOR

1. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro, por vía diplomática, que se han completado los procedimientos domésticos requeridos por la legislación, para la entrada en vigor del presente Convenio. El Convenio entrará en vigor en la fecha de recepción de la última de estas notificaciones

2. Las disposiciones del presente Convenio surtirán efecto:

a) respecto de los impuestos retenidos en la fuente, a las cantidades pagadas o acreditadas a partir del primer día de enero, inclusive, del año calendario siguiente a aquél en que entre en vigor el presente Convenio.

b) respecto de los restantes impuestos, a los períodos impositivos que se inicien a partir del primer día de enero, inclusive, del año calendario siguiente a aquél en que entre en vigor el presente Convenio.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

Artículo 30

TERMINACIÓN

1. El presente Convenio permanecerá en vigor mientras no se termine por uno de los Estados Contratantes. Cualquiera de los Estados Contratantes puede terminar el Convenio por vía diplomática, comunicándolo con al menos seis meses de antelación al final de cualquier año calendario luego de un período de cinco años desde la fecha en la cual el Convenio entre en vigor

2. En tal caso, el Convenio dejará de surtir efecto:

a) respecto de los impuestos retenidos en la fuente, a las cantidades pagadas o acreditadas a partir del primer día de enero, inclusive, del año calendario siguiente a aquél en que se comunique la terminación; y

b) respecto de los restantes impuestos, a los períodos impositivos que se inicien a partir del primer día de enero, inclusive, del año calendario siguiente a aquél en que se comunique la terminación.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIVISIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

EN FE DE LO CUAL los signatarios, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Montevideo el 1° de marzo de 2019 en dos originales, cada uno en idioma español, italiano e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En el caso de divergencias de interpretación o aplicación, prevalecerá la versión en inglés.

Por la República Oriental del Uruguay

Por la República Italiana

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

PROTOCOLO AL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ITALIANA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL

Al momento de la firma del Convenio entre la República Italiana y la República Oriental del Uruguay para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal, los Estados Contratantes han acordado que las siguientes disposiciones formarán parte integral del Convenio.

1. En relación al Artículo 3, apartado 1 j):

A los efectos del Convenio, la expresión "fondo de pensión reconocido" significa:

a) en el caso de Italia, un fondo de pensión supervisado por el Consejo de supervisión de los fondos de pensión (*Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP*);

b) en el caso de Uruguay, el Banco de Previsión Social, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y las entidades aseguradoras, reguladas por la Ley 16.713 y otras entidades de seguridad social reguladas por la legislación uruguaya.

2. En relación al Artículo 8:

A los efectos de este Artículo, las utilidades de una empresa de un Estado Contratante procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional incluyen:

a) utilidades provenientes del arrendamiento de buques o aeronaves a casco desnudo; y

b) utilidades procedentes del uso, mantenimiento o arrendamiento de contenedores (incluyendo trailers y equipamiento relacionado con el transporte de contenedores) utilizados para el transporte de bienes o mercancías;

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

cuando dicho arrendamiento o dicho uso, mantenimiento o arrendamiento, según corresponda, sea accesorio a la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional.

3. En relación al Artículo 11, apartado 3:

Las expresiones "institución financiera pública", "organismo de derecho público" y "agencia de financiación de exportaciones" incluyen:

a) en Italia, Cassa Depositi e Prestiti - CDP, Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE y Società italiana per le imprese all estero - Simest;

b) en Uruguay, Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco Hipotecario del Uruguay y Corporación Nacional para el Desarrollo.

4. En relación al Artículo 13, apartado 6:

Cuando la ganancia se defina como un porcentaje del precio de venta de las acciones o de otras participaciones en una sociedad o fideicomiso, dicho porcentaje no podrá exceder del 20 por ciento del precio de venta.

5. En relación al Artículo 16:

Las expresiones "consejo de administración o de vigilancia" significan:

a) en el caso de Italia, los órganos de control colegiados regulados por el Código Civil, Título V, Capítulo V;

b) en el caso de Uruguay, los órganos regulados por la Ley 16.060, artículo 397.

6. En relación al Artículo 18:

a) La expresión "pensiones y demás remuneraciones similares" significa pensiones derivadas de pagos por un trabajo dependiente anterior y remuneraciones que son pagadas con respecto a servicios personales independientes previos, así como también pagos con cargo a un fondo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCION DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

44

de pensión o a un esquema de pensión en el cual pueden participar las personas físicas para asegurar beneficios de retiro, donde dichos fondos o esquemas sean regulados de conformidad con la legislación de ese Estado Contratante y reconocidos como tales a efectos impositivos.

b) Cuando las pensiones y demás remuneraciones similares estén exentas de impuestos en un Estado Contratante, y de conformidad con la legislación vigente en el otro Estado Contratante esas pensiones no estén sometidas a imposición en ese otro Estado Contratante, el Estado mencionado en primer lugar puede someter a imposición dichas pensiones de acuerdo con la alícuota vigente en su legislación doméstica.

7. En relación al Artículo 21, apartado 3:
Se entiende que las rentas no están sometidas a impuestos en un Estado Contratante cuando allí se beneficien de una exoneración tributaria.

8. En relación al Artículo 24, apartado 1, primera frase:

La autoridad competente del Estado Contratante ante el cual se haya presentado el caso, implementará rápidamente un proceso de notificación con la autoridad competente del otro Estado Contratante, en los casos en que la autoridad competente ante la cual se haya presentado el procedimiento amistoso no considere justificada la objeción del contribuyente.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · DIRECCIÓN DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

45

EN FE DE LO CUAL los signatarios, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Protocolo

Hecho en MONTEVIDEO el 1° DE MARZO DE 2019 en dos originales, cada uno en idioma español, italiano e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En el caso de divergencias de interpretación o aplicación, prevalecerá la versión en inglés.

Por la República Oriental del Uruguay

Por la República Italiana

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION DE TRATADOS

ES COPIA FIEL DEL TEXTO ORIGINAL

Esc. Silvia Denis
Sub-Directora
de la Dirección de Tratados

- 47 -

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébanse el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana para Eliminar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscritos en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1° de marzo de 2019.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de setiembre de 2019.

PATRICIA AYALA
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

REPARTIDO Nº 1135
MAYO DE 2019

CARPETA Nº 3849 DE 2019

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

A p r o b a c i ó n

- 1 -

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 15 de octubre de 2018

Señora Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC, -Fundación Internacional Unión Europea - América Latina y el Caribe, suscrito en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE celebrada entre los días 25 y 26 de octubre de 2016 en República Dominicana.

ANTEDECENTES

La Fundación Unión Europea -América Latina y el Caribe (Fundación UE-LAC, por sus siglas en inglés) fue creada en mayo de 2010 por la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno iniciando sus actividades en noviembre de 2011. La misma es una herramienta de la asociación UE y CELAC, -Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-.

Su sede se establece en la ciudad de Hamburgo, Alemania, y cuenta con 60 miembros: los 33 Estados de América Latina y el Caribe, los 28 miembros de la Unión Europea, así como Instituciones de la Unión Europea.

La Fundación tiene la Misión de fortalecer y promover la asociación estratégica birregional, mejorando su visibilidad y fomentando la participación activa de las sociedades civiles respectivas. Sus actividades nutren el diálogo intergubernamental en línea con el plan de acción birregional.

El objetivo de la Fundación es transformar la asociación estratégica entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe que fue emprendida en 1999, en una realidad visible que cuente con la participación activa de las respectivas sociedades.

Como meta principal, la Fundación busca contribuir al proceso de fortalecimiento de la relación birregional CELAC - UE involucrando la participación y aportes de la sociedad civil así como otros actores sociales, e incentivar el conocimiento y entendimiento mutuo entre ambas regiones.

FIRMA DEL ACUERDO

Durante la Reunión de Ministros mencionada celebrada en Santo Domingo, República Dominicana se firmó el Acuerdo por el que se crea la Fundación como Organismo Internacional, Artículo 2. La República lo suscribió debidamente representada por el entonces señor Embajador de Uruguay en la República Dominicana, doctor Raúl Pollak.

El depositario del Acuerdo por el que se establece la Fundación Internacional EU-LAC es el Consejo Europeo y se ha abierto a ratificación el 25 de octubre de 2016. La relevancia de la ratificación resulta entre otras del hecho de que obtener la personería jurídica internacional facilitará las contribuciones de los países, siendo que los directivos de la Fundación han insistido fuertemente en los problemas financieros de la misma con los aportes voluntarios.

En el Artículo 3, se indica quienes son los Miembros de la Fundación. A saber, los Estados Miembros de la ALC y UE que hayan manifestado su consentimiento en quedar vinculados por este Acuerdo, de conformidad a sus procedimientos jurídicos internos.

La Fundación pasará a gozar de personalidad jurídica internacional por su artículo 4, lo que la convierte en un sujeto pleno de Derecho Internacional con capacidad entre otras de obligarse por Tratados Internacionales.

Los objetivos se encuentran detallados en el artículo 5, donde en líneas generales dice que deberá contribuir al fortalecimiento del proceso de integración birregional UE - CELAC con la participación de la sociedad civil, seguir fomentando el conocimiento y entendimiento mutuo entre ambas regiones y mejorar la visibilidad mutua entre ambas regiones y la de la propia asociación. En particular la Fundación deberá entre otras, fomentar los intercambios fructíferos, nuevas oportunidades de entablar contactos entre la sociedad civil y otros agentes sociales.

Para alcanzar los objetivos en el artículo 7, se señalan las actividades que desarrollará la Fundación las que se describen en los literales a) a f) tales como: fomentar el debate mediante la organización de seminarios con los temas que se abordan en las Cumbres UE - CELAC, fomentar estudios sobre cuestiones planteadas por ambas regiones, crear una plataforma en internet o elaborar una publicación electrónica.

Asimismo, podrá emprender iniciativas en estrecha colaboración con entidades públicas y privadas, instituciones de la UE, instituciones internacionales y regionales, Estados latinoamericanos y los Estados Miembros de la UE.

Los órganos de la Organización, -estructura organizativa- se encuentran individualizados en el artículo 8. Los mismos son: -Consejo Directivo, Presidente y Director Ejecutivo; ampliamente desarrollados en los Artículos 9 a 15.

Según el artículo 16, referente a la financiación de la Fundación, "las contribuciones se realizarán de manera voluntaria sin perjuicio de la participación del Consejo Directivo. Cabe resaltar, que Uruguay realizó contribuciones voluntarias el año pasado, las que habrían contribuido a dar empoderamiento a los países de la CELAC. Sin embargo, al no ser aún un Organismo Internacional, muchos países enfrentan dificultades para poder contribuir al presupuesto. De aquí otro de los fundamentos que hacen necesario la entrada en vigor del Estatuto de la Fundación, los aspectos financieros.

Hasta la fecha la Fundación ha estado funcionando con un Estatuto transitorio en el marco del Derecho Civil, razón por la cual al poder funcionar como Organismo Internacional hará viable que funcione con todos los derechos y obligaciones que surgen del Acuerdo de conformidad al Derecho Internacional, como se ha indicado anteriormente.

Por su parte, la Fundación tendrá cuatro socios estratégicos iniciales, Artículo 19. A estos efectos contará por parte de la UE con "L' Institut des Amériques" en Francia y "Regione Lombardía" en Italia; y por parte de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, contará con la Fundación Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), en la República

Dominicana y la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. (CEPAL).

Con el fin de lograr sus objetivos, la Fundación podrá establecer futuras asociaciones estratégicas con Organizaciones Internacionales, Estados y entidades públicas y privadas de ambas regiones, respetando siempre el principio de equilibrio birregional.

El Acuerdo de sede entre Alemania y la Fundación será independiente del presente Acuerdo.

Las actividades oficiales, la Fundación, activos, ingresos y otros bienes estarán exentos de cualquier tipo de impuestos directos. La fundación no estará exenta del pago de servicios obtenidos.

ENTRADA EN VIGOR

Este Acuerdo está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante el depositario. La Secretaría General del Consejo de la Unión Europea será el depositario del Acuerdo. El presente Acuerdo permite que se realicen reservas en el momento de la firma o de la ratificación, siempre y cuando no resulten incompatibles con su objeto y finalidad.

Las reservas y declaraciones que se puedan realizar se remitirán al depositario, quién las notificará a las otras Partes del presente Instrumento.

Hasta el momento la República no ha manifestado su voluntad de proponer reserva alguna. Si tal extremo se hubiera considerado, se debería instrumentar antes de depositar el Instrumento de Ratificación.

En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de ratificar un Acuerdo de esta naturaleza, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera a la señora Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
RODOLFO NIN NOVOA
DANILO ASTORI

_____

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Acuerdo por el que se crea !a Fundación Internacional Unión Europea - América Latina y el Caribe, aprobado en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores UE - CELAC celebrada entre los días 25 y 26 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana.

Montevideo, 15 de octubre de 2018

RODOLFO NIN NOVOA
DANILO ASTORI

TEXTO DEL ACUERDO

Las Partes en el presente Acuerdo,

RECORDANDO la asociación estratégica establecida entre América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea (UE) en junio de 1999 en el marco de la primera Cumbre UE-ALC celebrada en Río de Janeiro;

TENIENDO EN CUENTA la iniciativa adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y ALC, durante la quinta Cumbre UE-ALC, celebrada en Lima, República del Perú, el 16 de mayo de 2008;

RECORDANDO la Decisión sobre la creación de la Fundación UE-ALC adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y ALC, el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión, en la sexta Cumbre UE-ALC, celebrada en Madrid, España, el 18 de mayo de 2010;

RECORDANDO la creación en 2011 de una fundación de transición en la República Federal de Alemania, que concluirá sus actividades y será disuelta cuando entre en vigor el Acuerdo Internacional Constitutivo de la Fundación UE-ALC;

REITERANDO la necesidad de crear una organización internacional de carácter intergubernamental sujeta al Derecho internacional público, mediante un «Acuerdo Internacional Constitutivo de la Fundación UE-ALC» sobre la base del mandato adoptado en una reunión ministerial en paralelo a la VI Cumbre UE-ALC de Madrid, que contribuye al fortalecimiento de las obligaciones existentes entre los Estados Latinoamericanos y Caribeños, la UE y los Estados Miembros de la UE;

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1

Objeto

1. La Fundación internacional UE-ALC («la Fundación» o «la Fundación UE-ALC»), queda establecida en virtud del presente Acuerdo.

2. Este Acuerdo establece los objetivos de la Fundación y define las normas y directrices generales que rigen sus actividades, su estructura y su funcionamiento.

ARTÍCULO 2

Naturaleza y sede

1. La Fundación UE-ALC es una organización internacional de carácter intergubernamental establecida al amparo del Derecho internacional público. Se centra en el fortalecimiento de la asociación birregional entre la UE y los Estados Miembros de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

2. La Fundación UE-ALC tendrá su sede en la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, República Federal de Alemania.

ARTÍCULO 3

Miembros de la Fundación

1. Los Estados Latinoamericanos y Caribeños, los Estados Miembros de la UE y la UE que hayan manifestado su consentimiento en quedar vinculados por el presente Acuerdo, con arreglo a sus procedimientos jurídicos internos, pasarán a ser los únicos Miembros de la Fundación UE-ALC.

2. La Fundación UE-ALC también estará abierta a la participación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

ARTÍCULO 4

Personalidad jurídica

1. La Fundación UE-ALC gozará de personalidad jurídica internacional y de la capacidad jurídica necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y actividades, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de conformidad con sus legislaciones nacionales.

2. La Fundación también estará facultada para contratar, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y para incoar procedimientos judiciales.

ARTÍCULO 5

Objetivos de la Fundación

1. La Fundación UE-ALC deberá:

a) contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación birregional UE-CELAC con la participación y las aportaciones de la sociedad civil y otros agentes sociales;

b) seguir fomentando el conocimiento y el entendimiento mutuos entre ambas regiones;

c) mejorar la visibilidad mutua entre las dos regiones, y también la de la propia asociación birregional.

2. La Fundación UE-ALC deberá, en particular:

a) fomentar y coordinar actividades orientadas a los resultados en apoyo de las relaciones birregionales y centradas en la aplicación de las prioridades estipuladas en las Cumbres UE-CELAC;

b) fomentar el debate sobre estrategias comunes destinadas a la ejecución de las mencionadas prioridades, mediante la promoción de la investigación y los estudios;

c) fomentar los intercambios fructíferos y las nuevas oportunidades de entablar contactos entre la sociedad civil y otros agentes sociales.

ARTÍCULO 6

Criterios para las actividades

1. Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 5 del presente Acuerdo, las actividades de la Fundación UE-ALC deberán:

a) estar basadas en las prioridades y los temas tratados entre los Jefes de Estado y de Gobierno en las Cumbres, centrándose en las necesidades detectadas en apoyo de la relación birregional;

b) implicar, en la medida de lo posible y en el marco de las actividades de la Fundación, a la sociedad civil y a otros actores sociales, como las instituciones académicas, y tener en cuenta sus contribuciones de forma no vinculante. Para ello, cada Miembro podrá identificar a las instituciones y organizaciones pertinentes que trabajan para reforzar el diálogo birregional a nivel nacional;

c) añadir valor a las iniciativas existentes;

d) dar visibilidad a la asociación, en particular centrándose en acciones con efecto multiplicador.

2. Cuando proponga o participe en actividades, la Fundación UE-ALC estará enfocada a las acciones, tendrá carácter dinámico y estará orientada a los resultados.

ARTÍCULO 7

Actividades de la Fundación

1. Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 5, la Fundación UE-ALC desempeñará, entre otras, las siguientes actividades:

a) fomentar el debate, mediante la organización de seminarios, conferencias, talleres, grupos de reflexión, cursos, exposiciones, publicaciones, presentaciones, formación profesional, intercambio de buenas prácticas y conocimientos especiales;

b) fomentar y apoyar eventos relacionados con los temas que se abordan en las Cumbres UE-CELAC y también con las prioridades en las reuniones de Altos Funcionarios;

c) poner en marcha tanto programas de sensibilización como iniciativas a nivel birregional, incluyendo intercambios en los ámbitos prioritarios identificados;

d) fomentar estudios sobre cuestiones planteadas por ambas regiones;

e) lograr y ofrecer nuevas oportunidades de contacto teniendo en cuenta, en particular, a las personas o entidades que no estén familiarizadas con la asociación birregional UE-CELAC;

f) crear una plataforma en internet o elaborar una publicación electrónica.

2. La Fundación UE-ALC podrá emprender iniciativas en estrecha colaboración con entidades públicas y privadas, las instituciones de la UE, instituciones internacionales y regionales, los Estados Latinoamericanos y Caribeños y los Estados Miembros de la UE.

ARTÍCULO 8

Estructura de la Fundación

La Fundación UE-ALC tendrá la siguiente estructura organizativa:

a) el Consejo Directivo;

b) el Presidente; y

c) el Director Ejecutivo.

ARTÍCULO 9

Consejo Directivo

1. El Consejo Directivo estará formado por representantes de los Miembros de la Fundación UE-ALC. Se reunirá a nivel de Altos Funcionarios y, en su caso, a nivel de Ministros de Asuntos Exteriores con motivo de las Cumbres UE-CELAC.

2. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) estará representada en el Consejo Directivo por la Presidencia pro tempore, sin perjuicio de la participación del país en cuestión en su capacidad nacional.

3. Se invitará a la Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) a designar a un representante de cada región como observadores en el Consejo Directivo.

4. Se invitará a la Asamblea Parlamentaria Paritaria de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico y de la Unión Europea (ACP-UE) a nombrar a un representante de la Unión Europea y otro del Caribe como observadores en el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 10

Presidencia del Consejo Directivo

El Consejo Directivo contará con dos presidentes: un representante de la UE y otro de los Estados Latinoamericanos y Caribeños.

ARTÍCULO 11

Facultades del Consejo Directivo

El Consejo Directivo de la Fundación UE-ALC ejercerá los siguientes poderes:

a) nombrar al Presidente y al Director Ejecutivo de la Fundación;

b) adoptar las directrices generales para el trabajo de la Fundación y establecer sus prioridades operativas y su reglamento interno, así como las medidas apropiadas para velar por la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en lo que respecta a la financiación externa;

c) aprobar la celebración del Acuerdo sobre la Sede, así como cualquier otro acuerdo o arreglo que la Fundación pueda celebrar con los Estados Latinoamericanos y Caribeños y los Estados Miembros de la UE sobre la cuestión de los privilegios e inmunidades;

d) aprobar el presupuesto y el reglamento de personal, partiendo de una propuesta del Director Ejecutivo;

e) aprobar las modificaciones de la estructura organizacional de la Fundación, partiendo de una propuesta del Director Ejecutivo;

f) adoptar un programa de trabajo plurianual, que incluya un presupuesto estimativo plurianual, en principio con una perspectiva cuatrienal, fundamentado en un proyecto presentado por el Director Ejecutivo;

g) adoptar el programa de trabajo anual, con las actividades y los proyectos para el año siguiente en función de un proyecto presentado por el Director Ejecutivo y en el marco del programa plurianual;

h) aprobar el presupuesto anual para el año siguiente;

i) aprobar los criterios de seguimiento y de auditoría, además de los previstos para la notificación de los proyectos de la Fundación;

j) adoptar el informe anual y los estados financieros de la Fundación durante el año precedente;

k) proporcionar orientación y asesoría al Presidente y al Director Ejecutivo;

l) proponer modificaciones de este Acuerdo a las Partes;

m) evaluar el desarrollo de las actividades de la Fundación y actuar con base en los informes presentados por el Director Ejecutivo;

n) resolver las controversias que puedan eventualmente surgir entre las Partes sobre la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo y de sus modificaciones;

o) revocar el nombramiento del Presidente o del Director Ejecutivo;

p) aprobar el establecimiento de asociaciones estratégicas;

q) aprobar la celebración de cualquier acuerdo o instrumento jurídico negociado de conformidad con el párrafo 4, letra i), del artículo 15.

ARTÍCULO 12

Reuniones del Consejo Directivo

1. El Consejo Directivo se reunirá dos veces al año en sesión ordinaria. Estas reuniones deberán coincidir con las reuniones de Altos Funcionarios (SOM) de los Estados de la CELAC y de la UE.

2. El Consejo Directivo celebrará reuniones extraordinarias a instancia de un Presidente, del Director Ejecutivo o a petición de al menos un tercio de sus Miembros.

3. Las funciones de secretaría del Consejo Directivo se llevarán a cabo bajo la autoridad del Director Ejecutivo de la Fundación.

ARTÍCULO 13

Toma de decisiones del Consejo Directivo

El Consejo Directivo actuará en presencia de más de la mitad de sus Miembros de cada región. Las decisiones se adoptarán por consenso de los Miembros presentes.

ARTÍCULO 14

Presidente de la Fundación

1. El Consejo Directivo elegirá a un presidente entre los candidatos propuestos por los Miembros de la Fundación UE-ALC. El Presidente ocupará el cargo durante un mandato de cuatro años, renovable una vez.

2. El Presidente será una personalidad conocida y muy respetada tanto en América Latina y el Caribe como en la UE. El Presidente ejercerá sus funciones de forma voluntaria, pero tendrá derecho al reembolso de los gastos necesarios y debidamente justificados.

3. La Presidencia se alternará entre un nacional de un Estado Miembro de la UE y un nacional de un Estado de América Latina o el Caribe. En caso de que el Presidente proceda de un Estado Miembro de la UE, el Director Ejecutivo nombrado procederá de un Estado de América Latina o el Caribe, y viceversa.

4. El Presidente deberá:

a) representar a la Fundación en sus relaciones exteriores, garantizando una representación visible a través de contactos de alto nivel entablados con las autoridades de los Estados de América Latina y el Caribe, de la UE y de los Estados Miembros de la UE, así como con otros socios;

b) rendir informes en las reuniones de los Ministros de Asuntos Exteriores, otras reuniones ministeriales, el Consejo Directivo y otras reuniones importantes, según proceda.

c) proporcionar asesoría al Director Ejecutivo en la elaboración del proyecto de programa de trabajo anual y plurianual y el proyecto de presupuesto para su aprobación por el Consejo Directivo;

d) llevar a cabo otras tareas que determine el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 15

Director Ejecutivo de la Fundación

1. La Fundación estará dirigida por un Director Ejecutivo que será nombrado por el Consejo Directivo por un período de cuatro años, renovables una sola vez, y será seleccionado previa presentación de candidaturas de los Miembros de la Fundación UE-ALC.

2. Sin perjuicio de las competencias del Consejo Directivo, el Director Ejecutivo no pedirá ni recibirá instrucciones de ningún Gobierno o de cualquier otro organismo.

3. La Dirección Ejecutiva recibirá una remuneración y se alternará entre un nacional de un Estado Miembro de la UE y un nacional de un Estado de América Latina o el Caribe. En caso de que el Director Ejecutivo nombrado proceda de un Estado Miembro de la UE, el Presidente nombrado procederá de un Estado de América Latina o el Caribe, y viceversa.

4. El Director Ejecutivo será el representante legal de la Fundación y ejercerá las siguientes funciones:

a) elaborar el programa de trabajo anual y plurianual de la Fundación y su presupuesto, en consulta con el Presidente;

b) designar y dirigir al personal de la Fundación, velando por que cumpla los objetivos de la Fundación;

c) ejecutar el presupuesto;

d) presentar informes de actividad de forma periódica y anual, además de las cuentas financieras al Consejo Directivo para su aprobación, velando por mantener unos procedimientos transparentes y una buena circulación de la información sobre todas las actividades realizadas o financiadas por la Fundación, incluida una lista actualizada de las instituciones y organizaciones identificadas a escala nacional, así como de las que participan en las actividades de la Fundación;

e) presentar el informe a que se refiere el artículo 18;

f) preparar las reuniones y asistir al Consejo Directivo;

g) consultar, cuando sea necesario, a los representantes de la sociedad civil pertinentes y a otros agentes sociales, particularmente a las instituciones que puedan determinar los Miembros de la Fundación UE-ALC, dependiendo de las cuestiones planteadas y de las necesidades concretas, y manteniendo al Consejo Directivo informado sobre los resultados de estos contactos para su análisis;

h) entablar consultas y negociaciones con el país anfitrión de la Fundación y las demás Partes de presente Acuerdo en lo que respecta a los detalles de las ventajas a las que puede acogerse la Fundación en estos Estados;

i) llevar a cabo negociaciones de cualquier acuerdo o instrumento jurídico con repercusión internacional con organizaciones internacionales, Estados y entidades públicas o privadas sobre asuntos que pueden ir más allá del ámbito administrativo o el funcionamiento cotidiano de la Fundación, previa y debida consulta y notificación al Consejo Directivo sobre las conclusiones iniciales y previstas de dichas negociaciones, así como consultas periódicas acerca de su contenido, alcance y posibles resultados;

j) comunicar al Consejo Directivo cualquier procedimiento judicial que ataña a la Fundación.

ARTÍCULO 16

Financiación de la Fundación

1. Las contribuciones se realizarán de manera voluntaria, sin perjuicio de la participación en el Consejo Directivo.

2. La Fundación estará financiada principalmente por sus Miembros. El Consejo Directivo, respetando el equilibrio birregional, podrá considerar otras modalidades de financiación de las actividades de la Fundación.

3. En casos concretos, previa notificación y consulta al Consejo Directivo para su aprobación, la Fundación está autorizada a generar recursos adicionales a través de la financiación externa de entidades públicas y privadas, en particular mediante la elaboración de informes y análisis que se soliciten. Dichos recursos se utilizarán exclusivamente para las actividades de la Fundación.

4. La República Federal de Alemania proporcionará, a sus expensas y en el marco de su contribución financiera a la Fundación, instalaciones adecuadas y amuebladas para su uso por parte de la Fundación, sin olvidar el mantenimiento, los servicios generales y la seguridad de las instalaciones.

ARTÍCULO 17

Auditoria y publicación de cuentas

1. El Consejo Directivo nombrará a auditores independientes para que comprueben las cuentas de la Fundación.

2. Los estados financieros de los activos, pasivos, ingresos y gastos de la Fundación, comprobados por auditores independientes, serán puestos a disposición de los Miembros lo antes posible tras el cierre de cada ejercicio, pero antes de haber transcurrido seis meses después de esa fecha, y serán examinados para su aprobación por el Consejo Directivo en su primera reunión inmediatamente posterior.

3. Se publicará un resumen de las cuentas y del balance financiero auditados.

ARTÍCULO 18

Evaluación de la Fundación

A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el Director Ejecutivo presentará cada cuatro años un informe sobre las actividades de la Fundación al Consejo Directivo. Este deberá evaluar de manera global dichas actividades y será responsable de decidir acerca de las futuras actividades de la Fundación.

ARTÍCULO 19

Asociaciones estratégicas

1. La Fundación tendrá cuatro socios estratégicos iniciales: por parte de la UE, contará con «l'Institut des Amériques» en Francia y «Regione Lombardia» en Italia; y, por parte de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, contará con la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), en la República Dominicana, y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL).

2. Con el fin de lograr sus objetivos, la fundación UE-ALC podrá establecer futuras asociaciones estratégicas con organizaciones intergubernamentales, Estados y entidades públicas o privadas de ambas regiones, respetando siempre el principio de equilibrio birregional.

ARTÍCULO 20

Privilegios e inmunidades

1. En los artículos 2 y 4 se definen la naturaleza y la personalidad jurídica de la Fundación.

2. El estatuto, los privilegios y las inmunidades de la Fundación, el Consejo Directivo, el Presidente, el Director Ejecutivo y los Miembros del personal, así como de los representantes de los Miembros en el territorio de la República Federal de Alemania para el desempeño de sus funciones, se regirán por el Acuerdo de Sede celebrado entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y la Fundación.

3. El Acuerdo de Sede mencionado en el párrafo 2 del presente artículo será independiente del presente Acuerdo.

4. La Fundación podrá celebrar con uno o más Estados Latinoamericanos y Caribeños, así como con Estados Miembros de la UE, otros acuerdos que habrán de ser aprobados por el Consejo Directivo, en cuanto a los privilegios e inmunidades que puedan ser necesarios para el adecuado funcionamiento de la Fundación en sus respectivos territorios.

5. En el marco de sus actividades oficiales, la Fundación, sus activos, sus ingresos y otros bienes estarán exentos de cualquier tipo de impuestos directos. La Fundación no estará exenta del pago de servicios obtenidos.

6. El Director Ejecutivo y el personal de la Fundación estarán exentos de impuestos nacionales sobre los salarios y emolumentos pagados por la Fundación.

7. Los Miembros del personal de la Fundación comprenden todos los Miembros del personal nombrados por el Director Ejecutivo, con excepción de aquellos contratados localmente y sujetos a las tarifas horarias.

ARTÍCULO 21

Idiomas de la Fundación

Los idiomas de trabajo de la Fundación serán los mismos que los utilizados por la asociación estratégica entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, desde su creación en junio de 1999.

ARTÍCULO 22

Solución de controversias

Cualquier controversia que pudiera surgir entre las Partes relativa a la aplicación o la interpretación del presente Acuerdo y de sus modificaciones se someterá a negociación directa, con el fin de lograr una resolución puntual. En caso de que la controversia no quede resuelta a través de estos medios, deberá someterse a la decisión del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 23

Modificaciones

1. El presente Acuerdo podrá ser modificado a iniciativa del Consejo Directivo de la Fundación UE-ALC, o a petición de cualquiera de las Partes. Las propuestas de modificación se remitirán al depositario, que las notificará a todas las Partes para su consideración y negociación.

2. Las modificaciones se aprobarán por consenso y entrarán en vigor treinta días tras la fecha de recepción por el depositario de la última notificación, indicando que se han completado todas las formalidades necesarias a tal fin.

3. El depositario notificará a todas las Partes la entrada en vigor de las modificaciones.

ARTÍCULO 24

Ratificación y adhesión

1. El presente Acuerdo estará abierto a la firma de todos los Estados de América Latina y el Caribe, de los Estados Miembros de la UE y de la UE, desde el 25 de octubre de 2016 hasta la fecha de su entrada en vigor, y estará sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante el depositario.

2. El presente Acuerdo quedará abierto a la adhesión de la UE y de los Estados de América Latina y el Caribe, así como de los Estados Miembros de la UE que no lo hayan firmado. Los instrumentos de adhesión correspondientes se depositarán ante el depositario.

ARTÍCULO 25

Entrada en vigor

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de que ocho de las Partes de cada región, incluida la República Federal de Alemania y la UE, hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o adhesión ante el depositario. Para el resto de Estados Latinoamericanos y Caribeños y Estados Miembros de la UE que depositen sus instrumentos de ratificación o adhesión tras la fecha de entrada en vigor, el presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de que dichos Estados Latinoamericanos y Caribeños y Estados Miembros de la UE hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión.

2. El depositario notificará a todas las Partes la recepción de los instrumentos de ratificación o de adhesión, además de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo.

ARTÍCULO 26

Duración y denuncia

1. El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida.

2. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita dirigida al depositario por vía diplomática. La denuncia será efectiva doce meses tras la recepción de la notificación.

ARTÍCULO 27

Disolución y liquidación

1. La Fundación se disolverá:

a) si todos los Miembros de la Fundación, o si todos los Miembros de la Fundación, salvo uno, han denunciado el acuerdo; o bien

b) si los Miembros de la Fundación deciden su terminación.

2. En caso de terminación, la Fundación solo existirá a efectos de su liquidación. Deberán liquidarse sus actividades, mediante liquidadores que serán responsables de la cesión de los activos de la Fundación y la extinción de las deudas. El saldo se repartirá entre los Miembros, proporcionalmente a sus respectivas contribuciones.

ARTÍCULO 28

Depositario

La Secretaría General del Consejo de la Unión Europea será el depositario del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 29

Reservas

1. En el momento de la firma o de la ratificación del presente Acuerdo, o de adhesión al mismo, las Partes podrán formular reservas o declaraciones con respecto a su texto, siempre y cuando no resulten incompatibles con su objeto y finalidad.

2. Las reservas y declaraciones formuladas se remitirán al depositario, quien las notificará a las otras Partes del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 30

Disposiciones transitorias

A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Fundación transitoria establecida en 2011, de conformidad con la legislación de la República Federal de Alemania, deberá concluir sus actividades y será disuelta. Los activos y pasivos, los recursos, los fondos y el resto de obligaciones contractuales de la Fundación transitoria se transferirán a la Fundación UE-ALC instaurada en virtud del presente Acuerdo. Con este fin, la Fundación UE-ALC y la Fundación transitoria deberán adaptar los instrumentos jurídicos necesarios de concierto con la República Federal de Alemania y cumplir los requisitos legales correspondientes.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados a este fin, han firmado el presente Acuerdo, redactado en un solo original en los idiomas alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, que quedará depositado en los archivos del Consejo de la Unión Europea, debiendo remitir este último una copia certificada a todas las Partes.

- 28 -

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea – América Latina y el Caribe, aprobado en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores UE – CELAC celebrada entre los días 25 y 26 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 7 de mayo de 2019.

LUCÍA TOPOLANSKY
PRESIDENTE

JOSÉ PEDRO MONTERO
SECRETARIO

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

ANEXO I AL
REPARTIDO Nº 1135
SETIEMBRE DE 2019

CARPETA Nº 3849 DE 2019

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Aprobación

Informe

COMISIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES

I N F O R M E

Señores Representantes:

La Comisión de Asuntos Internacionales tiene el agrado de informar y someter a consideración el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el "Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea – América Latina y el Caribe", suscrito en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE celebrada entre los días 25 y 26 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana.

La Fundación Unión Europea – América Latina y el Caribe (Fundación UE-LAC) fue creada en mayo de 2010 como resultado de la VI Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno, dando comienzo a sus actividades en noviembre del año 2011.

La Fundación UE-LAC es una herramienta de asociación que tiene por objetivos el fomento y fortalecimiento de la relación birregional entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), impulsar la participación activa de organizaciones de la sociedad civil y de actores sociales, así como incentivar el conocimiento y entendimiento mutuo entre ambas regiones.

El depositario del Acuerdo por el que se establece la Fundación UE-LAC es el Consejo Europeo y se encuentra abierto a ratificación desde el 25 de octubre de 2016. La relevancia de la ratificación resulta de la necesidad de obtener la personería jurídica internacional para facilitar las contribuciones de los países.

En relación a la estructura del documento, el Acuerdo está compuesto de un Preámbulo y treinta artículos.

El Preámbulo recuerda la asociación estratégica establecida en junio de 1999 entre América Latina y el Caribe (LAC) y la Unión Europea (UE), en el marco de la cumbre UE-LAC celebrada en Río de Janeiro. Asimismo, establece la necesidad de crear una organización internacional de carácter intergubernamental sujeta al Derecho Internacional Público que contribuya al fortalecimiento de las obligaciones entre los Estados Latinoamericanos y Caribeños y Estados Miembros de la UE.

El Artículo 1º define que el Acuerdo establece los objetivos de la Fundación y especifica las normas y directrices generales que rigen sus actividades, estructura y funcionamiento.

El Artículo 2º establece la naturaleza de la Fundación, como una organización internacional con carácter intergubernamental establecida en el marco del Derecho Internacional Público y con sede en la ciudad de Hamburgo, República Federal de Alemania.

El Artículo 3º refiere a los miembros de la Fundación UE-LAC que hayan manifestado su consentimiento en quedar vinculados por el presente Acuerdo y estará abierto a la participación de los países de la CELAC.

El Artículo 4º establece que la Fundación UE-LAC gozará de personalidad jurídica internacional y de la capacidad jurídica necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y actividades.

El Artículo 5º define los objetivos de la Fundación, deberá contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación birregional UE-CELAC; fomentar el conocimiento y entendimiento entre ambas regiones; mejorar la visibilidad mutua entre las dos regiones y de la propia asociación birregional.

Los Artículos 6º y 7º hacen referencia a los criterios y actividades de la Fundación con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Artículo 5º. Las actividades se relacionan con la organización de seminarios, conferencias, talleres, formación profesional; eventos relacionados con los temas que se abordan en las Cumbres UE-CELAC; programas de sensibilización; la realización de estudios sobre cuestiones planteadas por ambas regiones; entre otras actividades.

El Artículo 8º establece la estructura organizativa de la Fundación conformada por el Consejo Directivo; el Presidente; y el Director Ejecutivo. Los Artículos 9º, 10º y 11º refieren a las competencias y facultades del Consejo Directivo, así como la Presidencia del Consejo que será ejercida por un representante de la UE y otro de los Estados Latinoamericanos y Caribeños.

El Artículo 12 fija el régimen de reuniones del Consejo Directivo, las funciones de secretaría del Consejo Directivo se llevarán a cabo bajo la autoridad del Director Ejecutivo de la Fundación.

El Artículo 13 establece el mecanismo de toma de decisiones mediante consenso de los miembros presentes.

El Artículo 14 determina que el Consejo Directivo elegirá a un Presidente entre los candidatos propuestos por los miembros de la Fundación UE-LAC. Los requisitos para desempeñar la Presidencia aluden a una personalidad conocida y respetada tanto en América Latina y el Caribe como en la Unión Europea.

El Artículo 15 establece que la Fundación estará dirigida por un Director Ejecutivo designado por el Consejo Directivo para despeñarse por un período de cuatro años, será seleccionado previa presentación de candidaturas de los miembros de la Fundación UE-LAC. Asimismo, este artículo establece las competencias y funciones que ejercerá el Director Ejecutivo.

Los Artículos 16 y 17 están relacionados a la financiación de la Fundación mediante contribuciones voluntarias; la realización de auditorías independientes y la publicación de sus cuentas y balances financieros auditados.

El Artículo 18 dispone la presentación de informes de las actividades de la Fundación y su evaluación.

El Artículo 19 refiere a las asociaciones estratégicas con organizaciones intergubernamentales, Estados y entidades públicas o privadas de ambas regiones, respetando el equilibrio birregional.

El Artículo 20 determina los privilegios e inmunidades de la Fundación, como organización internacional amparada al Derecho Internacional Público.

Asimismo determina que los privilegios e inmunidades de la Fundación, Consejo Directivo, Presidente, Director Ejecutivo y demás miembros en el territorio de Alemania se

regirán por el Acuerdo Sede entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y la Fundación.

Entre los Artículos 21 y 29 del Acuerdo se establecen las formalidades habituales en este tipo de Acuerdos como el idioma a utilizar; el mecanismo de solución de controversias y la presentación de propuestas de modificaciones; la ratificación y adhesión; la entrada en vigor, duración del Acuerdo y posibilidad de denuncia mediante notificación escrita; el depositario del Acuerdo y la formulación de reservas.

El Artículo 30 establece que a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Fundación transitoria establecida en 2011, deberá concluir sus actividades y ser disuelta. Los activos y pasivos, los recursos, los fondos y el resto de obligaciones contractuales de la Fundación transitoria se transferirán a la Fundación que surge del presente Acuerdo.

En virtud de lo expuesto y reiterando la conveniencia de la suscripción de este Acuerdo, se recomienda al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 4 de setiembre de 2019

SILVIO RÍOS FERREIRA
MIEMBRO INFORMANTE
GABRIEL GIANOLI
NICOLÁS OLIVERA
DIEGO REYES
RAÚL SANDER

=